

CLAUDIO URIARTE

# ALMIRANTE CERO

EDICIÓN  
DEFINITIVA

Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera



El regreso de un libro central  
en la historia argentina reciente

Espejo de la Argentina  Planeta

# Prólogo

«Aunque hemos intentado evitar el impresionismo periodístico, la visión que se tenga de Massera en el año 2001 no es necesariamente la misma que nos es posible tener en 1991. Y aún es posible preguntarse si valdrá la pena preocuparse por Massera en el año 2001 y si alguien se tomara el trabajo de tener una visión sobre él», escribió Claudio Uriarte en las últimas páginas de *Almirante Cero*. Parte de la respuesta al «valdrá la pena» es la reedición del texto, tal cual fuera pergeñado entonces, sin más corrección que dos erratas de fecha, pero esa no es toda la respuesta; esta casi ineludible introducción se propone —desde la perspectiva del editor— dar cuenta de alguno de los múltiples significados que arrastra el sintagma «Emilio Eduardo Massera (1925-2010) veinte años después».

Una aproximación lateral, presuntamente oportunista, nos recuerda que Graciela Alfano, en un reciente programa de televisión, tuvo que responder por su relación privada y pública con Massera. Mentar el vínculo tenía por objeto ponerla en un desagradable aprieto. La lógica del *reality show* que gobierna ese tipo de programas gira en torno al escándalo personal; entonces, la pregunta puede reformularse así: ¿Por qué sigue siendo urticante que una mujer cuya elección de compañeros de cama nunca fue exactamente un secreto, haya integrado la vasta *troupe* femenina de Massera durante la dictadura? ¿Y por qué el tema todavía contiene, sin ser una novedad, elevado voltaje político?

Avancemos con orden, pues la respuesta no es simple. En 1983, cuando el doctor Raúl Alfonsín asumió la presidencia, la democracia equivalió —para la inmensa mayoría de la sociedad argentina— a impedir que el cuerpo de oficiales de la dictadura burguesa terrorista volviera a dar un golpe de Estado. Todos los que no portaban chaquetilla con galones y entorchados eran indiscutidamente democráticos.

Escribe Uriarte:

El triunfo electoral constituyó una sorpresa para el propio Alfonsín. El candidato radical había basado su campaña en la denuncia de un «pacto militar-sindical» para que el peronismo, de ser elegido, convalidara la amnistía por violaciones de los derechos humanos que se habían otorgado a sí mismos los militares, y a cambio de lo cual los militares se comprometían a abstenerse de toda agresión contra el gobierno constitucional. El pacto, en realidad, resultaba de un curioso espejismo colectivo: los militares todavía se creían suficientemente fuertes para alterar un futuro constitucional, cuando en realidad se estaban retirando de escena apresuradamente y en pánico; los peronistas creían que los militares eran todavía el corazón del poder, y se juzgaban a sí mismos como imbatibles triunfadores electorales, y los radicales se creyeron tanto su propia retórica que imaginaban que

militares y peronistas finalmente tendrían razón y el corporativismo autoritario volvería a imponerse en el país (^)

La Argentina, sin embargo, había cambiado profundamente, y sólo la mediocridad institucional de sus principales actores políticos impedía advertirlo. (^) La verdad era que los años del Proceso habían suprimido de cuajo toda expectativa revolucionaria en la sociedad argentina, y habían instaurado un dispositivo por el cual la lucha se identificaba con la derrota, y la derrota con la tortura y con la muerte.

No se trataba de democratizar realmente la sociedad argentina, de someter a impiadosa crítica los años de plomo; todos querían vivir en paz, por tanto, el discurso de los derechos humanos —su puesta en acto— sonó a tromba ultraizquierdista, y punir delitos aberrantes —*mutatis mutandis*— a ataque contra la democracia. Las Madres de Plaza de Mayo no podían no ser portadoras de un discurso casi insoportable, los militares escuchaban por su boca las proclamas recicladas de los desaparecidos en las mazmorras del régimen, y Massera explicaba en el juicio a las Juntas que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) habían ganado la batalla militar, pero^ perdido la política.

Estaba equivocado, el juicio a las Juntas era el precio de la desobediencia tras la exitosa cacería de militantes: el costo personal e institucional de esa victoria. El juicio a los procesistas militares sustituyó, en esas condiciones históricas, el entonces inviable juicio al Proceso. Con las clases dominantes no se juega. En todo caso, no se juega sin cargo.

En 1980 la tarea represiva estaba finiquitada. Y al quedarse sin «para qué» los militares tuvieron que lanzarse, para intentar conservar el control de la situación política, a la Guerra de Malvinas. Habían ido demasiado lejos: una cosa es el independentismo militar con el oído puesto en el murmullo de las clases dominantes, y otra creer que la seguridad personal de los oficiales procesistas equivale a la seguridad del Estado.

Pese a la rotunda victoria de los objetivos del Proceso, las FE AA. estaban destruidas —moral y políticamente— en 1980. La ruptura de la cadena de mandos, que el general Alejandro Agustín Lanusse (1918-1996) denunciara en *Confesiones de un general* -, y que supuso la conformación de los Grupos de Tareas (GT), al igual que la flamígera noción de «botín de guerra», descompusieron definitivamente las instituciones militares. Massera, en la conciencia colectiva, era la marca de la Escuela de Mecánica de la Armada, el tristemente célebre GT 3.3.2, y resultaba, en el flamante discurso político alfonsinista, la punta más afilada de la amenaza militar; Massera lo sabía, y en la medida que le resultaba posible —nos explica Uriarte—, se ocupaba en foguear esa idea impracticable.

Sucesivas crisis militares dieron espacio público a los «carapintadas» y una demarcación sanguinolenta contuvo los levantamientos. Tras diversas idas y vueltas recién fueron reprimidos por el entonces presidente Carlos Saúl Menem. La amenaza pareció quedar atrás. Una explosiva mezcla pospuso el problema: los indultos presidenciales, la represión al levantamiento y el fin del servicio militar obligatorio. Mientras estos descompuestos oficiales buscaban amparo en el mismo parapeto que garantizaba la impunidad de sus superiores, solían escuchar las contemporizadoras explicaciones que Massera, según Uriarte, prodigaba. No porque se hubiera vuelto súbitamente democrático, sino porque entendía las nuevas relaciones de fuerza, y por tanto, la imposibilidad carapintada de dar un golpe de Estado exitoso.

En medio de ese revoltijo político, Massera recuperó su libertad. En público nadie aceptaba tener trato con él, pero en privado era otra cosa. Era la época en que el Almirante Cero amenazaba con sacar su biografía autorizada, para corregir los «errores» del trabajo de Uriarte. Por cierto, no lo hizo.

En esos días nadie hubiera acusado —y de hecho, nadie acusó— a Graciela Alfano por sus públicos *affaires* militares. El subsuelo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) conectaba con el subsuelo de la política nacional, y Massera disfrutaba de una cierta influencia en la Marina y en la interna de las FF. AA. Para un hombre cuyo futuro era una celda, no era precisamente poco.

En ese punto culmina el brillante análisis de Uriarte, pero la peripecia histórica siguió su curso. El gobierno de Fernando de la Rúa no sólo no resolvió la sempiterna crisis militar sino que confundió un instrumento circunstancial —la «convertibilidad»— con una ley de la naturaleza que permitió que el sistema bancario saqueara las reservas del Banco Central, al tiempo que dejaba a la sociedad sin moneda. La crisis había alcanzado un punto sin retorno, donde 20 millones de personas vivían en condiciones indescriptibles. Era el paroxismo de un largo ciclo iniciado tras el Operativo Independencia, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que concluyó con los estallidos del 19 y 20 de diciembre de 2001. La sociedad construida por la dictadura burguesa terrorista, por los beneficiarios sociales y políticos de Videla, Massera y Agosti, había estallado.

«Que se vayan todos» pidieron los sobrevivientes de la terrible experiencia, conscientes de que, votara lo que se votara, los mismos funcionarios seguirían haciendo casi exactamente lo mismo. Sin embargo, la crítica colectiva era mínima, ya que sólo señalaba el gangsterismo personal, la corrupción. El resultado terminó humeando ante los ojos de todos. Con un añadido: la sociedad intentaba trabajosamente recuperar valores perdidos. La sociedad fundada por la dictadura burguesa estaba en crisis terminal. De la voluntad política de los militantes del '73, donde se discutía el qué hacer, se había pasado a la de los ciudadanos que peticionaban en 1983, para terminar transformados en consumidores de la mano de

Menem y Domingo Felipe Cavallo. La convertibilidad nos había instalado a 660 dólares o pesos de Miami, y Buenos Aires era —a su curiosa manera— un arrabal del Primer Mundo. La «alianza» (sólo es un modo de llamarla) entre los muy pobres y los muy ricos estaba mostrando ahora sus dramáticas limitaciones, y el precio de la pizza con champán todavía se sigue pagando.

Eduardo Duhalde facilitó la recomposición del orden político, al permitir tres candidatos justicialistas y al mismo tiempo impedir la interna partidaria. Aun así Menem ganó la primera vuelta: a la segunda no se presentó y un oscuro gobernador sureño arribó por esa rajadura sistémica a la presidencia con apenas el 22 por ciento de los votos emitidos.

Lo andado comenzó a desandarse. El 21 de agosto de 2003 el Senado ratificó la votación de diputados. Esto es, propuso la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No es atribución del Congreso anular leyes, y así lo hizo saber la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el dictamen del máximo tribunal, rehecho en las nuevas condiciones políticas, puso fin a la impunidad: restableció la relación entre los delitos y las penas, entre las palabras y las cosas, entre la política y la sociedad. El camino del '76 aparecía cerrado. La política recuperó su aptitud para modificar y el debate comenzó a destrabarse.

Es tiempo de retomar la pregunta inicial de Uriarte: « ¿Valdrá la pena preocuparse por Massera en el año 2001?» El caso Alfano facilita la respuesta: no sólo no era molestada por su relación con Massera, sino que en el fondo se la admiraba secretamente. En la admiración subyacía la ambigua valoración de la dictadura burguesa terrorista, y del destituido almirante. El tardío rechazo de los amoríos de Graciela Alfano denota un cambio valorativo, una modulación horrorizada, un resultado del novedoso debate democrático. La lógica del debate instala una nueva agenda, y en ella Almirante Cero tiene reservado un papel mayor.

Una nueva generación ingresa al ruedo y necesita entender qué paso. *Almirante Cero* no es sólo la peripecia personal de un marino amoral, sino que al sesgo de su biografía Uriarte narra la historia del Proceso. Y precisamente por eso, por narrarla con extremo rigor, veinte años después sigue siendo un libro imprescindible.

ALEJANDRO HOROWICZ, Buenos Aires, 8 de octubre de 2011.

*para Alejandro Horowicz*

# Reconocimientos

La mayoría de quienes colaboraron en el suministro de información para este libro preferirían que yo evitara la mención de sus nombres en esta lista de reconocimiento, y hablar de algunos sin mencionar a los otros resultaría una injusticia flagrante. A todos, por lo tanto, les extiendo mi reconocimiento, sabiendo que ellos saben quiénes son, y deplorando mi imposibilidad actual de agradecerles en público.

Los periodistas Horacio Verbitsky, Jorge Lanata e Isidoro Gilbert me entregaron consejos valiosos, que en muchos puntos ayudaron a destrabar una investigación complicada, y me indicaron caminos alternativos de pesquisa. Su generosidad con su información, con sus contactos y su tiempo ha sido extraordinaria.

El periodista Néstor Restivo realizó para mí una excelente investigación de archivo. También debo extender mi reconocimiento a mi editor Juan Forn, que supo ser paciente e impaciente en los momentos en que cada cosa correspondía.

Jorge Dorio, Federico Monjeau, María Moreno, C. E. Feiling, Elsa Drucaroff, Gustavo Costantini y Carlos Cullari estuvieron entre los amigos cuyo apoyo moral fue decisivo para la culminación del proyecto.

María Laura Iglesias me sostuvo emocionalmente durante el período de investigación y redacción del libro hasta un punto en que yo mismo no habría sabido hacerlo. Mi hijo Gabriel Alejandro aportó toda su paciencia y su inteligencia.

He dedicado este libro a Alejandro Horowicz, con quien mi deuda intelectual y humana es mayor de lo que jamás pueda aspirar a retribuir.

Naturalmente, las opiniones y las fallas de este libro me corresponden por completo.

# ARGENTINA

## PRERREVOLUCIONARIA

### (1972-1975)

La Argentina todavía vivía las vísperas de la revolución. El imaginario revolucionario estaba agotado o en vías de agotarse en el mundo, después de las fulguraciones finales de la revuelta estudiantil de mayo de 1968 en París; la agonía del ejército norteamericano en Vietnam, que a la izquierda le gustaba retratar como el fin del imperialismo estadounidense, constituía en realidad el desenlace largamente demorado de un capítulo postrero en la lucha por la descolonización, y en América Latina coexistía un mosaico de diversos regímenes que comprendían la extrema izquierda ideológica de Fidel Castro en Cuba, el populismo autoritario izquierdizante del Partido Revolucionario Institucional en México, el antiimperialismo nacionalista ambiguo del general Omar Torrijos en Panamá, las dictaduras unipersonales y semif feudales como la de Anastasio Somoza en Nicaragua y países vecinos, la vía pacífica y democrática hacia el socialismo de Salvador Allende en Chile y la dictadura militar tecnocrático-desarrollista de Brasil. Solamente una fantasmagoría ideológica de la época permitía que esta crisis de representación múltiple se viviera como prolegómeno de una revolución continental; constituía, en realidad, la trabajosa adaptación y transición a un nuevo orden latinoamericano y mundial, los terremotos políticos originados por unas placas subterráneas sociales y políticas insuficientemente fijadas.

La democracia parlamentaria no se consideraba una manera viable ni deseable de actividad histórica y política. Los países latinoamericanos estaban en un proceso de aserción de sus individualidades nacionales frente al gran gigante del Norte, y quienes preconizaban la democracia aparecían como portavoces de una máscara de dominación imperial. La Argentina, en este contexto, vivía ideológicamente tanto en las vísperas de la presumible Revolución que prácticamente no existía proyecto político que no legitimara su derecho a la existencia mediante la apelación ritualística y ligeramente fetichista a la palabra «Revolución<sup>^</sup>): la dictadura militar en retroceso que gobernaba Argentina en 1972 era el tercer y último capítulo de un golpe militar permanente iniciado en 1966 bajo el rótulo de «Revolución Argentina»; el grupo guerrillero izquierdista en ascenso se llamaba «Ejército Revolucionario del Pueblo»; el populismo nacionalista del Partido Justicialista (peronista), y su derivación de izquierda armada, los Montoneros, prometían al unísono la «Revolución Nacional», y una proclama de la escasamente radical Unión Cívica Radical, un partido de clase media que había vivido sus últimos cuarenta años del temor de su clientela política a



la clase obrera, había dicho hacía poco que «la Revolución tendrá lugar en la Argentina con las Fuerzas Armadas, sin las Fuerzas Armadas o contra las Fuerzas Armadas». Semejante coincidencia declarativa denotaba dos cosas: 1) que, por lo menos en las palabras, se sintomatizaba la definición de Lenin de una situación prerrevolucionaria, en el sentido de una situación donde la preservación del estado de cosas se vuelve insoportable para todos los sectores, y 2) que el término «Revolución») constituía una definición algebraica, vagamente fundado en referentes históricos internacionales tales como las revoluciones de Rusia, China y Cuba y la descolonización de Asia y África; no obstante, en la práctica implicaba descomposiciones distintas. La diferencia no consistía en el tipo de Revolución que se prometía impulsar (la mayoría de los portavoces se refería al «socialismo) o a la «justicia social)), sino en la actividad política concreta de cada sector y en la dinámica y naturaleza de las fuerzas sociales que se movilizaban bajo su bandera.

## Uno

La Argentina vivía una crisis de representación y de erosión de la legitimidad de su poder político. Históricamente, esta situación era escasamente nueva: la ley Sáenz Peña de sufragio universal de 1912 había excluido de los beneficios del voto a los extranjeros, por ese entonces el grueso de la clase obrera de las ciudades, y a partir del golpe militar de 1930 las clases dominantes se acostumbraron a resolver sus problemas internos mediante la intervención intermitente del Ejército. La victoria del coronel Juan Domingo Perón en las elecciones de 1946 representó la primera muestra de sufragio auténticamente universal y democrático, pero la instauración de la democracia parlamentaria en la Argentina vino acompañada de tres componentes fuertemente desestabilizantes: la movilización de masas que fue necesaria para sacar al coronel de su arresto y permitir su candidatura electoral, el encuadramiento de la mayoría de los trabajadores en sindicatos fuertemente asociados al Estado y al proyecto peronista, y el hecho de que la estabilidad y popularidad del modelo se basaban en generosas redistribuciones de ingresos bajo la forma de subsidios estatales, industrialismo keynesiano y aumentos constantes de salarios. Alcanzó con que se agotaran las extraordinarias reservas de posguerra, resultantes de la exportación sin precedentes de productos agrarios, para que ese modelo políticamente cerrado de alianza política y sindical, que sus enemigos describían como corporativismo fascista, hiciera crisis: el peronismo era la suma de una democracia parlamentaria y un desmesurado poder sindical. Un golpe militar desalojó al general Perón del poder en 1955; irónicamente, la operación se autodenominó «Revolución Libertadora»: la oposición a Perón en 1946 —una alianza de conservadores, radicales, socialistas y comunistas espoleada por el extravagante embajador norteamericano Spruille Braden— se había denominado «Unión Democrática). La libertad y la democracia en la Argentina siempre fueron tales o no según cuáles fueran los sectores sociales que abarcaran.

La necesidad histórica del golpe de 1955 es retrospectivamente dudosa: la aproximación al capital extranjero, determinada por el colapso del modelo de sustitución de importaciones, sin duda requería un aumento de la coerción y la violencia social, pero no está probado que el apoyo electoral a Perón hubiera seguido siendo el mismo en las elecciones que estaban programadas para 1956, ni que el deterioro relativo de las condiciones de vida colocara a la Argentina en las vísperas de un movimiento revolucionario que pusiera en juego la totalidad del sistema. En lugar de ese recambio electoral, las Fuerzas Armadas, con respaldo político de los partidos de clase media, impusieron un modelo de estabilidad que era el reverso exacto del establecido por Perón: si éste fundaba la quietud en integrar a la clase obrera en forma orgánica e institucional dentro de su modelo de sociedad, partido y Estado, el golpe de 1955 lo hizo sobre la base de excluir sistemáticamente al peronismo de todo

horizonte político. Tal situación, que comenzó con la inhabilitación y desarticulación de las instituciones y frentes fundados por los diez años de Perón, terminó en extremos casi graciosos, como la prohibición de nombrar a Perón (burlada por una revista opositora que se llamó a sí misma *Pero*<sup>^</sup>) y la alusión al presidente depuesto por parte del diario conservador *La Prensa* bajo el pintoresco eufemismo de «tirano prófugo». Los procedimientos represivos de la Revolución Libertadora, que reprodujeron —aumentada— la tortura policial vigente en las décadas del 30 al 40 y atenuada bajo el peronismo, y que instituyeron el fusilamiento ilegal de civiles y militares en junio de 1956, se volverían relativamente inocuos en relación con lo que ocurriría décadas más tarde. Sin embargo, y en materia de censura informativa y cultural, esos métodos eran a la libertad y la democracia como los diarios alemanes y soviéticos en tiempos de Hitler y Stalin. Consideraban posible que la prohibición borrara el recuerdo si era administrada con dosis homeopáticas de violencia social. Apuntaban, en realidad, contra las expectativas obreras de movilidad social, y creían que para eso era suficiente que los obreros se olvidaran de Perón. Su provincianismo ideológico solamente era comparable con la estrechez de perspectivas de la burguesía argentina, una clase fundada en el aprovechamiento de la extraordinaria renta agraria y en su orbitación comercial del Imperio Británico. Si hablaban de democracia y de libertad no era con la mira fija en los grandes experimentos británico y norteamericano. Se referían a la utopía democrática de clase media anterior a la llegada del peronismo al poder, cuando las grandes masas del interior del país todavía no se habían incorporado a la política y recién empezaban a incorporarse a las nuevas industrias urbanas. Los jefes de 1955 confundían su programa con la ideología de la base social que los apoyaba, y sólo prometían elecciones para cuando el pueblo estuviera maduro para votar lo que ellos quisieran. La Argentina se convirtió en un país racista sin negros, con un «apartheid» político permanente fundado en la exclusión de los «cabecitas negras» de provincia.

El '55 constituyó un imperativo más ideológico que social para la clase dominante argentina. La incapacidad del Estado peronista para administrar la austeridad fue rápidamente homologada con una simbología cultural negativa, que contrastaba la supuesta «civilización<sup>^</sup>) del experimento golpista con la supuesta «barbarie» de la década peronista; los valores «europeos» del utopismo «libertador» con el resentimiento cultural de la «Argentina profunda»; la ética del trabajo con las dádivas de la Argentina de Jauja. El peronismo fue culturalmente confinado al imaginario de la pereza, el desorden y la promiscuidad de las clases bajas, y a lo que ensayistas como H. A. Murena y Ezequiel Martínez Estrada describían como «el pecado original de América»: el apareamiento del conquistador con la india y el nacimiento de una generación de mestizaje condenada por la violencia y el odio. Se generalizaron las denuncias sobre lujo, corrupción y decadencia de Perón y su *entourage*; se exhibieron los vestidos y las joyas de la difunta ex jefa populista Eva Perón, en la esperanza de que el pueblo reaccionara indignado como el vulgo frente a los palacios de la realeza de Francia, y se aceptó un estricto autoritarismo militar como

forma de disciplinar y civilizar al pueblo. Terminaron construyendo una dicotomía que luego se describiría como «el país oficial y el país real», porque la clase obrera, lejos de abandonar a Perón y olvidarse del peronismo, idealizó a Perón aún más que cuando se encontraba en el poder. El movimiento peronista en su conjunto, lejos de refinarse y civilizarse, terminó adoptando rasgos de la misma ideología que los militares iluministas del '55 denunciaban, esa mixtura de nacionalismo inconsecuente, populismo cultural y apelación general al instinto de masas. Significativamente, los peronistas denominaron a sus antagonistas como «gorilas», mientras éstos denominaban a la masa de seguidores del tirano prólogo como «cabecitas negras». Animales en el poder y una muchedumbre de seres inferiores en el llano: no existía un imaginario común de ciudadano argentino.

De alquimia fallida y barroco inútil podría definirse el intento perpetuo de la clase político- militar dirigente de construir un sistema a partir de estos datos, o por lo menos de sostener el orden.

Desde 1955, se practicó cada variante posible e imposible de gobierno sin Perón: dictadura militar directa (1955-1958), gobierno civil votado y elegido con respaldo de Perón (1958-1962), gobierno civil no electo y basado en fracciones militares (1962), nuevamente gobierno civil votado y elegido, pero sin respaldo peronista y con completa exclusión del peronismo (1963-1966) y nuevamente dictadura militar directa (desde 1966). Cada uno de estos ensayos parece el entreacto de una ópera sobre la que nunca se levanta el telón, una nueva forma del error, y también una tácita farsa a dos puntas: los generales y almirantes y sus políticos adeptos fallaban en el intento de desalojar al peronismo del espectro de preferencias políticas de los votantes. Al mismo tiempo, el peronismo se fraccionaba en distintos intentos de acomodación, y su líder exiliado en España rechazaba cualquier estrategia de poder que implicara la confrontación abierta con las Fuerzas Armadas a las que había pertenecido en el pasado. El intento de preservar el orden sin el peronismo, y el intento peronista de volver al poder sin perturbar el orden burgués terminaban constituyendo, de este modo, la paradójica fórmula del desorden, la inestabilidad y la crisis política permanente: no había gobierno que pudiera sostenerse sin el apoyo de Perón, pero el golpe de 1955 inauguraba un ilevantable veto militar sobre cualquier experimento que recreara la participación de Perón en el escenario político. La extrema rigidez y el conservadurismo de las Fuerzas Armadas, junto con la extrema cautela y prudencia del jefe del movimiento peronista, terminaban, de este modo, forzando un desenlace paradójico para un drama político donde todos eran tan conservadores: la Revolución. Las clases dominantes y las clases dirigentes argentinas terminaron aproximando el fantasma revolucionario de tan conservadoras que eran; el inicial tratamiento de un vulgar jefe populista exiliado en Madrid como si hubiera sido Lenin en la estación de Finlandia terminó provocando que la revolución acabara recreándose insidiosamente en la ideología social como único método para que Perón volviera al poder.

Una comparación interesante puede hacerse entre los doce años que mediaron entre las revoluciones rusas de 1905 y 1917 y los diecisiete años entre el golpe argentino de 1955 y el regreso de Perón al país. Los paralelos resultan evidentes: la incapacidad de las clases dirigentes para prefigurar un desenlace democrático, la incapacidad de las clases dominadas para subvertir el poder de las clases dominantes, las modificaciones moleculares de la sociedad y de la conciencia social. Sin embargo, debajo de la analogía superficial, se destacan las diferencias: el zarismo y el complejo entramado de relaciones feudales, semif feudales y burguesas de la sociedad rusa volvían efectivamente imposible cualquier avance; el caso argentino, en cambio, constituía una sociedad burguesa relativamente moderna cuya democratización no hubiera implicado la muerte de ninguna clase social. La república burguesa en Rusia implicaba destruir la monarquía y la clase de los grandes terratenientes; autorizar la vigencia de la Constitución Nacional en la Argentina representaba una operación que no tenía otro límite que la ideología y los prejuicios de sus clases dominantes. El peronismo en el poder no representaba otra cosa que la redistribución de los ingresos, y eso hubiera significado la crisis del peronismo, pero no la crisis del sistema. La izquierda fue minoritaria en la Argentina desde la década del 30, y si el peronismo en el gobierno tuvo algún rol al respecto fue el de hacerla todavía más enclenque. Adquirió envergadura en la década del 60, con la continuada proscripción de Perón, con la represión oficial y con un acontecimiento que va a constituirse en espejo y curiosa reedición argentina del levantamiento de mayo de 1968 en París: la insurrección de la ciudad de Córdoba en mayo de 1969, popularmente conocida como «Cordobazo». «Córdoba estaba enferma de ordené), diría el general Alejandro Agustín Lanusse, último gobernante militar del período, en sus *Memorias*. Es posible concluir que todo el país estaba enfermo de un orden que no había elegido; solamente hallaba equilibrio en las fórmulas abstractas que se invocaban para justificarlo, pero tenía crecientes dificultades para sobrevivir como tal.

El Estado, por más armazón autoritaria que presentara en determinados períodos, era una organización extremadamente débil. El orden político desde 1955 era el puro resultado de un golpe de mano, y la estructuración de las Fuerzas Armadas bajo el modo de veto militar y último garante del orden despojaba todo experimento político de cualquier pretensión de legitimidad. La posibilidad de un gobierno civil se decidía en la disputa interna de las Fuerzas Armadas, y la falta de legitimidad de esos gobiernos convertía su derrocamiento en una pura operación de suma y resta de cuadros castrenses. Sin embargo, y como contraparte de esta militarización de la vida política, las Fuerzas Armadas padecían la politización de su vida institucional: las contradicciones de la sociedad y de sus clases dominantes tendían a reproducirse y estallar dentro de la estructura militar en la forma de fracciones antagónicas, llegando al punto de provocar enfrentamientos armados. El golpe de mano, figura fundacional del golpe de 1955, se convirtió en el último recurso de cada operación. Tomar el poder en la Argentina era extremadamente fácil, generalmente bastaba con el convencimiento de suficientes uniformados. «Golpear la

puerta de los cuarteles» se volvió la expresión de moda para políticos civiles incapaces de consumir desde el llano la pretensión de imponer sus programas. Hasta un sector del sindicalismo peronista pactó con el teniente general Juan Carlos Onganía para imponer su propia marca de «peronismo sin Perón<sup>^</sup>». Cada figura política debía buscar referentes en el cielo militar.

El Estado, en realidad, era el estado de proscripción, y cualquier ataque contra ella se volvía un ataque contra el Estado. Había, precisamente por eso, cierta superfluidad de los cambios (golpe militar permanente), contrastada con una rigidez mortal: atravesar cierta barrera implicaba la muerte de todo.

La inercia y la agitación frenética y vacía suelen ser los sucedáneos para la propia falta de roles simétricamente complementarios de que disponen los Estados carentes de toda misión histórica. La Argentina sobre la que estalló el Cordobazo tenía un «país oficial» ocupado en planificar tecnocráticamente su propia prolongación estatal por décadas y un «país real» donde habían ocurrido modificaciones profundas desde el golpe de 1955: una nueva oleada de industrialización con capitales extranjeros había originado una nueva generación de clase obrera sin vivencia directa del peronismo, una nueva clase media excepcionalmente ilustrada y crítica que descubría el marxismo y el psicoanálisis y admiraba los films de Ingmar Bergman y las experimentaciones de vanguardia del Instituto Di Tella. Asimismo, la Argentina era recorrida por nuevos vientos ideológicos que resignificaban el pasado: la Revolución Cubana, el proceso de descolonización mundial y la guerra de Vietnam implicaban una revalorización del nacionalismo, y la antipatía tradicional argentina hacia Estados Unidos hacía sistema con las corrientes de la época bajo la forma de oposición hacia el «imperialismo norteamericano». Tampoco era idéntica la correlación de fuerzas sociales de 1955: la clase media ya no ocupaba el lugar de privilegio que había tenido antes de los gobiernos peronistas, y era menos proclive a sumar apoyo a la coalición militar-burguesa contra el peronismo. Un sector de clase media baja merodearía entonces el fascismo y el fundamentalismo católico, menos en función de sus valores intrínsecos que como rechazo a los valores de la generación anterior.

El Cordobazo duró doce días, careció de prolongación nacional, obtuvo sólo ecos aislados en algunas provincias, y no se cristalizó en ninguna organización de masas. Su consecuencia principal fue una suerte de efecto ideológico a dos bandas: corporizó abruptamente en la Argentina el fantasma revolucionario que recorría el mundo, instaló la figura de la insurrección como objetivo y método en los activistas más comprometidos de la clase obrera y del estudiantado; además, instaló el espectro del derrocamiento total en la estructura militar, acostumbrada a devanear entre sus principios, sus vagas aspiraciones y las combinatorias diversas que podían hacer con y contra el «tirano prófugo», y la figura de Perón retrocedió como principal enemigo militar; ambas razones forzaron un replanteo. Una sociedad civil y unas Fuerzas

Armadas acostumbradas a imaginar las alternativas como peronismo y antiperonismo, como proscripción y voto libre, súbitamente descubrieron una tercera vía, la palanca insurreccional que podía servir para quebrar con un hecho militar de masas el veto militar de elites que se había impuesto en 1955, y que también podía arrastrar al peronismo. Podía convertirse, de instrumento, en objetivo. Las consecuencias de este tercer programa no explícito llegaron rápido: las fuerzas armadas iniciaron sucesivos reacomodamientos y purgas internas con vistas a la autorización del peronismo dentro del espectro político, y los grupos de la izquierda más radical se plantearon el lanzamiento de organizaciones político-militares que disputarían el poder armado con las armas. El planteo de democratización realizado desde las Fuerzas Armadas coincidía con el momento de mayor militarización civil conocida hasta entonces.

La totalidad social estaba impregnada de una ideología militarista. Años de protagonismo político de las Fuerzas Armadas habían determinado que tanto civiles como militares terminaran creyendo en el reduccionismo militar fetichista de sostener que «el poder nace de la boca del fusil», como si el fusil fuera independiente de la mano de quien lo sostiene y como si la mano no fuera a su vez atravesada por complejas relaciones de fuerzas sociales, políticas e ideológicas. Los militares no habían descubierto la democracia, sino que veían en el peronismo una póliza de seguros para poder seguir detentando las armas que, según creían ellos, constituían el último depositario del poder. Los más lúcidos entre ellos creían que sería bueno un tiempo de prescindencia y profesionalismo donde se cerraran las heridas resultantes de la participación directa en la escena política: la politización nacionalista y hasta izquierdista de escalones inferiores del cuerpo de oficiales no constituía una preocupación menor. Los grupos más radicalizados de la izquierda, a su vez, veían en las elecciones una farsa, un autoenmascaramiento del régimen militar, una postergación de la lucha definitiva y una operación del régimen para descomprimir tensiones sociales. La primera acción significativa de la organización Montoneros fue el asesinato en 1970 del general Pedro Eugenio Aramburu, el segundo presidente de la Revolución Libertadora, a quien se atribuía un intento de conciliación con Perón. Cada polo del antagonismo ideológico se veía a sí mismo como metáfora militar de un enfrentamiento social, y cada uno de ellos creía sólo en las armas como medio para dirimir ese enfrentamiento.

Los militares se habían autoidentificado con el Estado y con la clase dominante. Los izquierdistas se veían a sí mismos como «vanguardia» de unas masas movilizadas pero sin dirección. La guerrilla ganó simpatías como respuesta popular contra el poder militar, aunque sólo conquistó adhesiones decididas en la clase media urbana y en los estudiantes, intelectuales y profesionales. La paradoja mayor de la época es que el Cordobazo no había sido el inicio de la convergencia entre los trabajadores manuales y la clase media urbana en el rechazo contra el régimen, sino que había agotado en su despliegue toda posibilidad de una dinámica común. Aunque había

inaugurado la hegemonía ideológica de la Revolución, la clase obrera manifestaría la mayor parte de sus reclamos desde ese momento en la forma tradicional de huelgas y manifestaciones sindicales; mientras, la clase media politizada lo hacía en diversas gradaciones, desde el partido de izquierda hasta el terrorismo urbano. El Ejército Revolucionario del Pueblo hizo una práctica usual del robo de camiones de leche y su reparto entre los pobladores de las villas miseria. El procedimiento aproximaba simpatías pero distanciaba en la práctica. Los trabajadores estaban de un lado y los guerrilleros del otro.

Sin embargo, la ideología militarista impregnó con tanta fuerza el tejido social y político que hasta el propio Perón tiñó todas sus declaraciones desde el exilio de un fuerte tono insurreccional, y autorizó la constitución de «formaciones especiales» militares dentro del justicialismo para librar la lucha a muerte contra el régimen. Seguramente, el apoyo de Perón a la derivación revolucionaria de la lucha por la democracia política estaba motivado por su intención de chantajear al Ejército con la figura de la Revolución, pero no debe descartarse su necesidad de implicarse y controlar acontecimientos políticos que él no había previsto. Tenía que vérselas con un fenómeno revolucionario en ciernes, y tenía que ponerse a su cabeza si no quería quedar desbordado por él.

Una síntesis del sistema de creencias de la época puede representarse en la dicotomía entre guerrilla y pueblo por un lado con Ejército de ocupación por otro. El fusilamiento ilegal y sin juicio previo de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros en la base aeronaval Almirante Zar en Trelew, en 1972, despertó la indignación y el reclamo de la sociedad civil y de los partidos políticos, y la mayoría de la opinión común del país estaba mucho más pronta a simpatizar emocionalmente con los guerrilleros que a hacerlo con los militares gobernantes. Para colmo la guerrilla se financiaba con secuestros de los empresarios multinacionales, en ese momento la encarnación del mal en la creencia popular.

\* \* \*

El '72 termina de formalizar el reflujó de la Revolución Libertadora, cuando las Fuerzas Armadas deciden replegarse del escenario político y permitir la vuelta del peronismo al poder. La Argentina no era prerrevolucionaria porque estuvieran constituyéndose nuevos órganos de poder político popular alternativos a los del Estado, ni porque sus trabajadores estuvieran marchando en una dinámica homogénea de ascenso de sus luchas sociales, ni siquiera porque estuviera formándose un gran partido izquierdista de masas. El clima prerrevolucionario era una mezcla de hegemonía ideológica, efecto de lectura política y decorado escénico. La hegemonía ideológica era un producto de época, el efecto de lectura política se desprendía de la extrema tensión entre el aparato militar dominante, y el decorado escénico era el resultado cotidiano visible de estos dos elementos: marchas y



manifestaciones a diario, copamientos guerrilleros de radios y canales de televisión, incesantes planes de lucha sindicales, extrema difusión de la literatura de izquierda y creciente florecer de las banderas rojas.

Con este panorama en ciernes, el general Lanusse había puesto en marcha en 1971 el proceso de «institucionalización<sup>^</sup>), y había ordenado la constitución de una comisión interarmas para elaborar el plan político de la transición. En 1971 el delegado de la Marina a esta comisión fue el vicealmirante Luis Pereyra Murray. En 1972, el contralmirante Emilio Eduardo Massera.

## Dos

Sostener que la Argentina dispone de una Marina de Guerra puede resultar una afirmación exagerada: las referencias más inmediatas que por muchos años tuvieron los argentinos sobre su Marina fueron el bombardeo aéreo de civiles desarmados en Plaza de Mayo en junio de 1955 y la Guerra de las Malvinas, única gesta naval contemporánea, que dejó al cuerpo naval entre la inactividad de un alto mando totalmente improvisado y la descomposición de la «guerra sucia». Que la Marina es ideológicamente el arma más atada al imaginario de orbitación del Imperio Británico se refleja en dos datos vistosos: los marinos llevaron por mucho tiempo una señal de luto por la muerte del almirante Nelson, y en sus uniformes actuales —contrariamente a lo que ocurre con los del Ejército y la Fuerza Aérea— no existen colores ni señales de ninguna clase que permitan identificar al portador como argentino. Que entre sus avatares haya estado el de impulsar y librar una guerra con Gran Bretaña no constituye solamente una ironía de la historia, sino una especie de confirmación indirecta del destino de quien no reconoce el propio: la conciencia de los oficiales puede operar en una dirección aberrante, pero esa dirección es resignificada de modo violento por las verdaderas fuerzas históricas, y los oficiales y sus armas terminan expresando dinámicas diferentes de las que se proponían impulsar.

El imaginario naval argentino ha sido tradicionalmente elitista, conservador, aristocratizante y cerrado; los apellidos que pueden leerse en las sucesivas promociones navales son característicamente menos patricios que los de las ternas militares y tienden a poblarse más frecuentemente de apellidos extranjeros provenientes de inmigrantes de segunda o tercera generación: es la evidencia de una aristocracia que quiere constituirse en sí misma de la nada y necesita patrones de comportamiento y pensamiento más estrictos que aquellos que son propios y espontáneos en una clase alta natural. La operación se completa con una fuerte identificación con Gran Bretaña y el antiguo estilo británico de *fairplay*, caballerosidad, discreción y buenas maneras, y con un estilo de «defensa de la Patria» donde se destacan una vocación de absoluta integridad programática y el deseo de poner distancia con generaciones de inmigrantes más recientes. Ya en 1919, durante los disturbios obreros de la Semana Trágica en Buenos Aires, los contralmirantes Domecq García y O'Connor renunciaron la vocación política del arma convocando a mil voluntarios de las clases altas al Centro Naval de la Capital, arengándolos con advertencias de que «la Buenos Aires de 1919 es como el San Petersburgo de 1917» y brindándoles instrucción militar para que organizaran una suerte de pogrom. Anarquistas, comunistas, socialistas, rusos, judíos e inmigrantes de Europa central fueron vistos en la ideología de la época como una continuidad indisoluble, ya que en efecto se trataba de los últimos inmigrantes y, por lo tanto, aquellos que constituían las filas de la nueva y rebelde clase obrera urbana.

Con esto se ha complementado una suerte de despectiva competencia con el Ejército. Los marinos argentinos siempre contemplaron al Ejército de tierra con desdén, y en parte como responsable de lo que entienden como la raíz populista de la problemática argentina: «No por nada muchos de los períodos más nefastos de la Argentina tienen delante el grado de teniente general», bravuconeaba un editorial de *Convicción*, diario oficioso del arma, en 1982. Históricamente, la Marina había estado en la avanzada de las fuerzas que buscaron obstruir la llegada del coronel Perón al poder. El almirante Vernengo Lima, portavoz de una consigna cívico-militar que propugnaba el traspaso del poder a la Suprema Corte de Justicia en 1945 como forma de evitar elecciones que condujeran al coronel a la presidencia, fue la primera de sus grandes figuras públicas. Él y sus aliados civiles se desvanecieron del escenario político cuando la movilización de masas alteró decisivamente el equilibrio de fuerzas dentro del Ejército, lo que implicaba dar vuelta por completo la operación Vernengo Lima: tradicionalmente, la Marina, un arma de la mitad del tamaño de la de sus colegas de tierra, buscó imponerse mediante divisiones en la estructura del Ejército; con ese fin, en un país donde el recurso a las armas era un modo inmediato de resolución de disputas, sirvieron de aliados políticos de distintos sectores de la clase dominante.

El experimento de 1945 dejó a la Marina desprestigiada y maltrecha, pero sentó un nuevo precedente político-ideológico para la que se convertiría en el arma más adversa a la movilización de masas: creían en la democracia como en un modelo abstracto y juzgaban a sus colegas militares como «fascistas»; la democracia sería aquella donde el Ejército no tuviera un papel tan importante, y esto no sólo implicaba combatir a jefes castrenses carismáticos sino también oponerse a todo esbozo de complejo militar-industrial que imbricara al Ejército decisivamente en la economía del país. Vale decir, defender el viejo modelo argentino como exportador puro de materias primas y aliarse con los sectores dominantes más próximos a esa perspectiva. Y si en 1919 lucharon contra los inmigrantes obreros maximalistas de Europa —primera clase obrera argentina—, en 1945 lo harían contra la segunda: los inmigrantes del interior del país.

La Revolución Libertadora encontró en la Marina y en su jefe, el almirante Isaac Francisco Rojas, a su portavoz programático más perfecto y consecuente. Inicialmente, el golpe había estado comandado por el general Eduardo Lonardi, quien luego de un forcejeo interno cedió la presidencia al general Pedro Aramburu y la vicepresidencia a Rojas. Que un marino ocupara la vicepresidencia no era inédito: ya lo había hecho brevemente, aunque en circunstancias harto disímiles, el almirante Sabá Sueyro durante los primeros tramos de la Revolución de 1943. La novedad consistía en la personalidad de Rojas, que se convirtió rápidamente en el líder carismático de la base de clase media del golpe. A pesar de que Rojas había integrado la cohorte de adulones más desembozados del gobierno peronista, la variación de la relación de fuerzas sociales en 1954 y 1955 lo había orientado en la oportunidad de un

cambio de bando; el país había consumido prácticamente todo su capital de posguerra, y los sectores dominantes empezaban a ver en el poder sindical peronista un obstáculo decisivo para la reforma del modelo. La Marina bajo el mando de Rojas conquistó su lugar de liderazgo en el golpe de septiembre de 1955 con un antecedente que la situó como avanzada ideológica y máxima depositaria de la unidad de principios y propósitos: la sublevación en junio de ese mismo año y el bombardeo de Plaza de Mayo. Característicamente, Perón respondió con dos bravatas vacías: sostuvo que «a la Marina yo la corro con los bomberos» y ordenó el retiro de las espoletas y el racionamiento del combustible de explosivos y buques. La represalia se probó ineficaz: la flota de Gran Bretaña, que como la mayoría de los países de Occidente veía en Perón a un dictador fascista, abasteció a su hermana argentina de los elementos faltantes, y nadie corrió a nadie.

Tres meses después Lonardi, un general retirado, juntaba apoyos dentro del Ejército para un golpe de Estado, que parecía una posibilidad extremadamente frágil en un principio, y Rojas volvía a apuntalar la posición de su arma dentro del golpe en ciernes con dos hechos decisivos: el bombardeo de Mar del Plata por la flota de mar y un ultimátum para que Perón dejara el poder o sufriera la destrucción de la gigantesca refinería de petróleo de La Plata. Asimismo, rodeó de buques el puerto de Buenos Aires y amenazó con bombardear la Capital. El almirante Rojas sustituyó con dureza programática y consistencia de acción política la falta de peso específico de la Marina: convirtió a su arma en referente del antiperonismo más puro y más duro, y usó este pivote para manipular un Ejército donde la relación de fuerzas se mantenía cambiante, y donde coexistían sectores relativamente democráticos como el del general Lonardi, un ala nacionalista y sectores antiperonistas duros. El reemplazo de Lonardi por Aramburu significa un triunfo y un avance de la tesis de la Marina, unívoca con la posición de las clases dominantes argentinas de que la estabilización y el saneamiento del país requerían la completa expurgación del peronismo del escenario político. Rojas dará otra vuelta de tuerca a esta misma posición en junio de 1956 con el fusilamiento ilegal de grupos de civiles y militares peronistas. La sangre siempre compromete.

La base de la estrategia política tradicional de la Marina fue siempre el intento de dividir al Ejército y convertirse en actor decisivo de la puja interna militar. Quienes así lo hacían no estaban guiados por propósitos políticos —nobles o no—, sino por el puro deseo del acrecentamiento del poder y la influencia, por la ambición de equiparar las dimensiones del arma con el Ejército y, en un país donde los militares siempre habían intervenido en la política, por adquirir un papel cada vez mayor en el usufructo del poder político del Estado; los propósitos políticos venían después, y eran *adhoc* el programa básico. Las vocaciones del Ejército no eran demasiado diferentes, salvo la crucial diferencia de que se trataba del arma hegemónica, y que el control directo del Estado lo obligaba a una relación más próxima y comprometida con la sociedad que buscaba gobernar y a un grado de compromiso y negociación

mayor que el que era necesario para el tacticismo oportunista de la Marina. Los marinos argentinos quedaron significados como el sector antiperonista duro de las Fuerzas Armadas, lo que podía convertirlos alternativamente en un auxiliar político importante en una disputa o en un mero anacronismo histórico. La tercera intervención destacada de la Marina en una disputa del Ejército (las primeras dos habían sido las de Vernengo Lima en 1945 y Rojas diez años después) se produjo en septiembre de 1962 y abril de 1963, y muestra a los marinos en este desdichado último rol. El Ejército estaba dividido en una fracción «azul» (proclive a un compromiso con el peronismo pero sin Perón y a un gobierno de pacto corporativista con tutelaje militar) y otra «colorada», de antiperonismo intransigente, que combinaba el rechazo a Perón con los intensos residuos de liberalismo político de la Marina y reclamaba gobernar con una coalición antiperonista de partidos civiles. La Marina bombardeó columnas de tanques del sector azul, encabezado en esa época por el general Juan Carlos Onganía, y fue reprimida por quien luego sería el general Lanusse (entonces coronel). Antes, durante la Revolución Libertadora, los marinos habían apostado bien y habían ganado poder, influencia y asignación presupuestaria; ahora había apostado al bando perdedor, y debían retroceder en consecuencia.

Comenzó, desde entonces, un retroceso relativo del poder naval. El Ejército y sus aliados civiles en el Estado castigaron a la Marina con severas reducciones de presupuesto y con la limitación de sus fuerzas en dos renglones clave: la aviación naval y sus fuerzas de desembarco (Infantería de Marina) que eran las que más peso podían adquirir en una nueva confrontación militar interna. La Infantería de Marina, de hecho, fue dejada virtualmente sin conscriptos. Al mismo tiempo, la vigencia de la Guerra Fría y la prioridad ideológica de la lucha contra el comunismo entre los ejércitos del continente reducían objetivamente el papel de las fuerzas navales, limitándolo de hecho al de una custodia costera. La situación hizo crisis en 1966, año del golpe militar del general Onganía. Los almirantes protestaron por la situación, y su comandante, el almirante Benigno Varela, pronunció un discurso que vaciló entre el nacionalismo y el patetismo: sostuvo que la soberanía argentina estaba desprotegida, porque la Marina contaba sólo con buques ruinosos prestados por Estados Unidos sobre cuyo uso Estados Unidos guardaba poder de veto. Onganía, un militar pronorteamericano en política exterior pero nacionalista en cuestiones de equilibrio geopolítico regional, accedió, en parte para cerrar las heridas del Ejército con la Marina —que lo había respaldado confusamente en el golpe—, y en parte por temor al creciente poderío de la Marina de Brasil, que además estaba en vías de conquistar una cierta autosuficiencia tecnológica. El reequipamiento naval, iniciado en 1966 con compras en Washington, Londres y Bonn, se aceleró en 1970 tras la caída del general Onganía: el arsenal naval en 1972 incluía ocho destructores Fletcher, submarinos tipo 205, tres cruceros Brooklin, un portaaviones, dos fragatas misilísticas (*Hércules* y *Santísima Trinidad*) compradas a Gran Bretaña por 1000 millones de dólares, dos submarinos Balao, ocho patrulleros y lanchas rápidas, treinta dragaminas y armas y misiles guiados. Esta etapa corresponde al mando de uno de los grandes

reconstructores de la Armada: el almirante Pedro Gnavi.

El reequipamiento naval constituye el punto de cruce de varios problemas simultáneos. Antes que nada, se reequipaba por una necesidad política: la Armada defendía su cuota de poder institucional a partir del tamaño de sus fuerzas y de la cantidad de presupuesto militar que se le asignara. Sin embargo, y en un segundo plano, se puede decir que las razones de Onganía para reequipar traducían una paradoja sin solución dentro de la elite militar gobernante: si se practicaba el rearme en función de la carrera armamentista naval de Brasil, y Brasil era una hipótesis militar de conflicto, comprar en Washington, Londres y Bonn constituía un despropósito, ya que eran los mismos abastecedores de la Marina brasileña y, en todo caso, los gobiernos de esas capitales no estarían dispuestos a continuar el abastecimiento en caso de una guerra, ya que habrían priorizado la extinción de la zona de conflicto antes de que pudiera ser objeto de cualquier interferencia soviética. El dato significa lo mismo respecto de las otras dos hipótesis clásicas de conflicto del pensamiento naval argentino: Chile, con el que se mantenía el diferendo territorial por las islas del Canal de Beagle, y las Islas Malvinas, ocupadas por Inglaterra. Se podría decir que la estructura militar del momento discutía y regateaba poder bajo la forma de hipótesis de conflicto, pero una vez que la mente militar procesaba ese juego de necesidad y reclamo lo hacía confiando la solución del problema a un virtual asegurador político: comprar armas en los países capitalistas avanzados implicaba que solamente se podrían librar las guerras que los países capitalistas avanzados quisieran; cuando un país vende armas, vende también las guerras que el país comprador estará en condiciones de librar, y puede corregir cualquier desviación en ese sentido mediante la simple interrupción del suministro de repuestos y partes. La ideología anticomunista de los militares argentinos era fuertemente funcional: tendrían las armas convencionales que quisieran, pero sólo aquellas que sirvieran al propósito de alineación occidental del país. Vistas las imposibilidades bélicas que implicaba el monopolio occidental del suministro, el poder naval argentino sólo podría significarse en tres direcciones posibles de empleo: la intercepción de buques soviéticos y europeos orientales que emprendieran operaciones de espionaje y pesca ilegal en las costas argentinas; la especulación de una Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS) que hiciera causa común con los regímenes racistas blancos de Sudáfrica y Rhodesia, y cumpliera en el Sur propósitos similares a los de la OTAN en el Norte, y las operaciones de represión interna. El primero y el tercero de estos propósitos se cumplieron; el segundo, en cambio, se frustró, pero no por indecisión de los marinos argentinos, sino por la negativa de Brasil (sin deseos de entrar en conflicto entre su política exterior y la importante proporción de negros en su población) y el aparente desinterés del Pentágono.

El '72, sin embargo, no era el año para pensar en hipótesis de guerra exterior. «El país está en guerra», había afirmado Lanusse siendo sólo comandante en jefe en 1970. La guerra a la que se refería era una guerra revolucionaria interna. El imaginario

de guerra revolucionaria era, de hecho, difícil de evitar, no solamente por el crecimiento geométrico de las organizaciones de izquierda sino por un clima intelectual cuya connotación insurreccional era fuertemente puesta en evidencia por el éxito de películas tales como *Z* y *Estado de sitio* (ambas sobre dictaduras militares, la segunda con una explícita apología de la guerrilla urbana uruguaya) y *La batalla de Argelia*, sobre la lucha de descolonización. La crisis de representatividad del país y la experiencia contemporánea de los últimos ramalazos violentos de la descolonización mundial se fundían en un solo síntoma ideológico, que era la representación de las fuerzas armadas argentinas como un ejército de ocupación. La irrupción masiva de capitales extranjeros en la década del 60, las compras igualmente masivas de empresas nacionales por compañías multinacionales y la espectacular aparición en todas las rutas y avenidas argentinas de enormes carteles publicitarios con marcas como Coca-Cola y Marlboro, junto a la aparición de revistas modeladas sobre la base de *Time*, la proliferación de series norteamericanas en la TV y de una música popular fuertemente influida por el pop y el rock anglosajones, se combinaron en la imaginación popular con el dato de la dictadura militar, con las denuncias de autores tercermundistas como Franz Fanon y Albert Memmi contra el «neocolonialismo», y con el hecho de que el peronismo, el gran proscrito por más de quince años, siempre había defendido la «Tercera posición^), una confusa ideología nacionalista que decía equidistar del capitalismo y del comunismo, y que en cierto modo podía aparecer como precursora de la ideología del Tercer Mundo. La cristalización cinematográfica de todo esto puede verse en la película *La hora de los hornos*, de Octavio Getino y Fernando Solanas, un film que se divulga a sí mismo como «concientizador del pueblo» y que difunde, por ejemplo, imágenes de un adolescente siendo «desconcientizado» en una disquería por el ritmo hipnótico de una música rock.

El imperio de esta alucinación colectiva produjo efectos a dos bandas en la relación entre civiles y Fuerzas Armadas. La dictadura militar y las Fuerzas Armadas, por una parte, aparecieron como agentes del imperialismo norteamericano a los ojos de grandes sectores de la población. Al mismo tiempo, en su defensa del modo de vida «occidental y cristiano», las propias Fuerzas Armadas no pararon mientes en ninguna diferencia de naciones, fronteras y matices, y adoptaron, para los propósitos de la represión interna, los métodos y manuales de contrainsurgencia de los ejércitos de ocupación de Indochina y Argelia. Sin embargo, y por debajo de este doble síntoma, ocurría otro fenómeno: el creciente efecto corrosivo y disolvente que la cerrada enemistad social producía en los escalones inferiores del cuadro de oficiales, especialmente dentro del Ejército, que en cierto modo era el arma más «expuesta». Los tenientes empezaron a formar grupos de estudio donde se leían obras de nacionalistas de izquierda tales como Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui y Jorge Abelardo Ramos, todos los cuales conferían al Ejército un papel importante en su futuro modelo de país y lo instaban a convertirse en el pivote de articulación estatal de un complejo militar- industrial que librara al país de su dependencia neocolonial del exterior. El discurso constante del peronismo y del nacionalismo de izquierda se

constituía en una permanente exhortación a la oficialidad a desobedecer a sus mandos comprometidos con el extranjero, al nacimiento de una generación de «coroneles nasseristas» o «peruanistas». Carecían, en esta conducta, de toda originalidad: la preformación antidemocrática de la sociedad argentina determinó que desde 1930 liberales y antiliberales, nacionalistas y antinacionalistas, derechistas y hasta izquierdistas movieran la brújula de su estrategia política en función de conmover el espíritu de algún general deseoso de entrar brillantemente en la historia. Muchos lo conseguían, y quienes no lo conseguían debían conformarse con generales retirados, arrepentidos y convencidos pero sin mando de tropa.

El '72 resultará en este sentido un año paradigmático para la Marina porque ejemplificará las dos tendencias con una claridad y una continuidad narrativa que no pueden menos que haber impactado profundamente en la sensibilidad del cuadro de oficiales. A mediados de agosto de ese año un grupo de veinticinco jefes guerrilleros del ERP y de los Montoneros (entre ellos dirigentes de primer nivel como Roberto Mario Santucho, Roberto Quieto y Ricardo Vaca Narvaja) se legaron de una prisión en Rawson. Seis de ellos lograron tomar en Trelew un avión que los llevó a Chile, gobernado en ese momento por el socialista Salvador Allende, desde donde pudieron emprender viaje a Cuba; los diecinueve restantes llegaron tarde a la ciudad y se rindieron a la Marina tras pactar que jueces, médicos y periodistas verificaran su estado físico, para minimizar la posibilidad de torturas. El 22 de agosto, en la base aeronaval Vicealmirante Marcos Zar, un grupo de oficiales fusiló a quemarropa a los diecinueve, pretextando un intento de fuga. Sin embargo, tres de los fusilados (Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Heidar) sólo habían sido heridos, escaparon y revelaron los hechos. El caso desató una enorme crisis política para un gobierno militar en descomposición, que preparaba su propia retirada de la escena política y que claramente no se hallaba en condiciones de lanzar una escalada represiva. La simpatía popular se volcó hacia los «mártires de Trelew»; el odio, hacia una Marina de Guerra que repetía los errores de los fusilamientos ilegales de 1956. Se hicieron manifestaciones, se publicaron libros y solicitadas y se emitieron condenas de todo tipo.

Las protestas impedían distinguir un dato central: los hechos habían ocurrido bajo jurisdicción de la Marina de Guerra, en un perímetro de acción y de tiempo donde el gobierno de Lanusse difícilmente habría tenido posibilidad de operar. Si Lanusse hubiera querido lanzar una advertencia social en la forma de ejecuciones sumarias, nada habría sido más sencillo que hacerlo por cuenta, y en escenarios del Ejército. Que los fusilamientos se hubieran consumado en dependencias navales significaba, ante todo, una advertencia de la Marina a la apertura política dirigida por el Ejército en momentos en que Perón flirteaba con el castrismo y llamaba a la constitución de «formaciones especiales» guerrilleras para combatir al régimen. Los marinos volvían a constituirse en el ala dura militar frente a los cambios, en la reserva última de las clases dominantes y en el arma a la que no le temblaría la mano en el



momento de disparar contra el enemigo marxista, como lo había hecho contra el peronismo y contra los azules del Ejército, en 1955, 1956, 1962 y 1963. Jugaban su papel como *última ratio*, y esto lo hacían no sólo en el horizonte social sino dentro de la propia ecuación militar. Por estas razones, constituían la encarnación de una doble dicotomía entre legalidad e ilegalidad: eran ilegales para la sociedad y también para el régimen, y la única razón de que pudieran salvarse era que su ilegalidad era además la forma en que se daba, en esos tiempos de ilegitimidad, la dura ley de la república dominante. Trelew dejó constituida a la Marina como la ultraderecha del *establishment*.

La sociedad no respondió del mismo modo, y virtualmente asumió al ERP y a los Montoneros como sus destacamentos armados: los cuerpos de tres de los fusilados fueron velados en la sede del Partido Justicialista, y cuando el ERP se cobró su primera venganza en la muerte del contralmirante E. Berisso, en diciembre, el propio Perón, que en ese momento decía que «la violencia de arriba genera la violencia de abajo», justificó el asesinato. Al mismo tiempo se desarrollaba una ola sin precedentes de atentados contra marinos, que culminarían en marzo de 1973 con el asesinato del contralmirante Hermes Quijada, «explicador» oficial de los hechos de Trelew. La sociedad, de alguna oscura manera, intuía que la Marina se había puesto en pie de guerra contra ella, que la perversidad de su lógica excedía la del propio régimen militar, y los marinos, sintiéndose considerados por todos como los enemigos del pueblo, reaccionaron en pánico. El alto mando naval reaccionó a su vez constituyendo una compañía especial basada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), destinada a proteger los domicilios de los principales jefes navales, que rotaba grupos de cinco o seis hombres acompañados por un oficial en tareas de patrullaje y vigilancia.

A fines de 1972 el gobierno de Lanusse permitió una suerte de retaceado retorno de Perón: se prohibió toda movilización para recibir al jefe popular y se rodeó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 4000 hombres del Ejército fuertemente armados. Inesperadamente, la compañía de la ESMA se sublevó bajo las órdenes del teniente de navío Carlos Federico Lebrón y del guardiamarina Julio César Urien. La rebelión no fue, como habría sido en otras épocas, contra el regreso del «tirano prófugo», sino para garantizar —contra el Ejército— la seguridad personal de Perón y permitirle el acceso al pueblo. La rebelión fue suprimida por el Ejército, que de este modo se cobraba el *fait accompli* de los hechos de Trelew y permitía que se viera el espectáculo de una Marina gorila descompuesta en sus escalones inferiores por simpatías con el «tirano prófugo». Los dos jefes rebeldes fueron arrestados y luego liberados en 1973 por el gobierno peronista; incorporados con posterioridad a Montoneros, Lebrón fue muerto por el Ejército en Tucumán en 1975, donde comandaba una sección de combate, y Urien fue recapturado por la Marina el mismo año.

La compañía, tras el alzamiento, fue reincorporada a la infantería de Marina, y a la Escuela de Mecánica de la Armada le fue luego asignada en 1974 una compañía permanente compuesta por dos oficiales, tres suboficiales, diez cabos de Infantería de Marina y 117 conscriptos. La ESMA tendrá un papel relevante en la historia que sigue.

Cualquiera sea el balance que se haga del año 1972 en las Fuerzas Armadas, y particularmente del curioso y elíptico recorrido naval entre Trelew y la rebelión de la ESMA, queda claro que el alto mando naval se consideraba ya en ese momento como destacamento último de la lucha contra la insurrección, aunque las poderosas corrientes sociales que impulsaban el imaginario de la época hicieran metástasis incluso dentro del incorruptible cuerpo de oficiales de Marina. Ambos datos tendrán significación formativa de la historia que siguió.

## Tres

La relación de conflicto con la autoridad, y el simétrico, paradójico y equivalente despliegue de una suerte de desenfrenada voluntad de poder parecen haberse instalado desde el comienzo como matrices constitutivas de la personalidad y el carácter de Emilio Eduardo Massera. Un potente residuo de anarquismo existe incluso detrás del conformismo y la desidia; un «dejar hacer» que se subleva contra las líneas del poder, ignorándolas, no intersectándolas. Es posible preguntarse qué habría ocurrido si Massera no hubiera sido confrontado desde temprano con un orden familiar fuertemente disciplinario, que lo obligaría a intersectar las líneas del poder a su modo conformista y negligente (intentando conquistarlas, no quebrarlas), y también qué habría ocurrido con su anarquismo residual si hubiera desarrollado sus años formativos en tiempos y lugares menos conservadores que los que le tocó vivir. Las preguntas carecen de respuesta, y generalizarlas implica entrar en el incierto terreno de la psicología social, pero, y como se verá, la condena del anarquista conformista convertido en conquistador del poder será la de actuar siempre al filo de la navaja. Siempre se quiere más, porque se es un anarquista de fondo: una vez conquistada la totalidad del poder (por lo menos sus atributos formales), existe la tentación irreprimible de subvertirlo.

Los Massera eran una familia próspera de la provincia de Entre Ríos, en una época en que la Argentina en general era próspera, y ser un profesional de clase media y ahorrar e invertir juiciosamente podían llevar a tener una pequeña fortuna. El padre, Emilio Faustino Massera, era ingeniero, hijo de un inmigrante suizo; la madre, Emilia Padula, era ama de casa. La familia se completaba con un hermano que desarrolló una corta carrera naval, llegó al grado de capitán de fragata y terminó como marino mercante en la Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, y una hermana mayor profesora de álgebra y piano. Emilio Eduardo, el menor de todos, nació en Entre Ríos el 19 de octubre de 1925. El padre, poco antes, había intentado establecerse por su cuenta montando una fábrica de cocinas, pero había fracasado, y a los dos años, la familia se trasladó a vivir a la ciudad de La Plata. Al padre le había sido ofrecido allí un puesto estatal bien remunerado. La capital de la provincia de Buenos Aires era en esa época un lugar formal y a la vez moderno, una ciudad con la irrealidad planificada de la mayor parte de las ciudades del poder consumidas después de la Comuna de París, con anchas diagonales que la cruzan en todas direcciones e impiden hipotéticas barricadas. La ciudad no sería escenario de ninguna lucha social importante ni de ninguna barricada, y tampoco se convertiría en ningún polo de poder. Su fisonomía presenta el escenario irreal de un decorado para un destino que nunca se concreta; del mismo modo en que Buenos Aires, saturada de arquitectura de fines del siglo XIX y comienzos del XX, le recordaba a André Malraux una irrealizada capital de imperio. Años después, el sesgo represivo de la arquitectura

de La Plata se reforzaría todavía más: un edificio universitario de varios pisos, por ejemplo, puede ser accedido solamente desde dos escaleras, que las fuerzas de seguridad pueden bloquear fácilmente en caso de convulsión interna. La Plata, como ciudad universitaria, padecería una parte importante de la represión política de los años 70.

La infancia de Emilio Eduardo Massera transcurrió plácidamente. La estructura familiar era convencional y sólida; no había en ella nada de las turbulencias que pudieran predisponer a una personalidad violenta. Constituyó una familia de orden y progreso, los dos fuertemente administrados por el padre. Era una familia de muy alto nivel cultural considerando que nadie desarrollara una actividad específicamente intelectual: los libros ocupaban una parte importante del tiempo y las conversaciones, y la inteligencia era considerada un valor en sí. Massera mostró desde temprano una fuerte inclinación hacia la matemática, posiblemente incentivada por el hecho de que el padre obligaba a cada hermano a recitar la tabla de logaritmos antes de cada comida si no quería quedarse sin comer; mucho tiempo después, Massera sorprendería a la gente resolviendo complejas ecuaciones sin ayuda de lápiz ni papel, y haciéndolo por puro entretenimiento. El joven, sin embargo, carecía de disciplina interna y sistematicidad: la matemática dejó de interesarle en un momento dado, y se volcó con intensidad hacia la filología, donde contó con maestros como Pedro Henríquez Ureña. El tráfico con las palabras lo seducía, como se manifestaría mucho más tarde con la originalidad buscada para sus frases y con la selección cuidada de sus escritores de discursos; no es imposible que en él hubiera algo de escritor frustrado. Como lector se inclinó desde temprano por la poesía, especialmente la lírica simple de autores como José Pedroni, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, de quien se jactaría luego de ser una de las pocas personas que había leído algo más que ese clásico libro de lectura de todas las escuelas primarias, la prosa poética de *Platero y yo*. La afición lo acompañaría durante toda la vida, junto con el desinterés por la ficción y cierta negligencia intelectual. Su ensayista preferido era Ezequiel Martínez Estrada.

A los 17 años hubo que definir una carrera, y se produjo un conflicto con el padre. Massera quería ser ingeniero como su progenitor, pero éste quiso que fuera marino como su otro hijo. Oponerse a ello era una operación impensable en esa familia, y se produjo su ingreso en la Escuela Naval. Ese mismo año, sin embargo, publicó con su dinero un opúsculo de poesías tempranas fuertemente inspiradas en Jiménez, y volvería a publicar poesías en los boletines internos de la Escuela. La escritura, la ingeniería y la matemática aparecían como vocaciones simultáneas, no necesariamente contradictorias pero sí indecisas, que de pronto se veían frustradas por la carrera naval. Massera terminaría produciendo una síntesis con ellas en la forma de una gigantesca operación militar de ingeniería social. Esas vocaciones también permiten inferir los esbozos de una personalidad contradictoria e inconstante, que luego se instrumentaría en pos de algo que terminó convirtiéndose

en una de sus pasiones más fuertes: la intriga barroca y múltiple.

Massera ingresó a la Armada el 19 de enero de 1942, un año de ilegitimidad profunda en el poder político argentino, que se sostenía en base a componendas cívico-militares, en las que campeaba el fraude electoral, y donde la democracia era una pura invocación de rutina. Esa ilegitimidad fue sucedida por otra nueva: la revolución militar de 1943, un golpe de Estado que suscitaría en su tiempo las expectativas de todo quiebre del orden, que reincidía en la obsesión argentina por la palabra «revolución») aplicada a una operación que, en el fondo, constituía la abstinencia de cualquier revolución. La Argentina, en esa época, vivía los coletazos ideológicos de la Segunda Guerra Mundial. No era raro que en un país que se había formado con la inmigración masiva de italianos, españoles, polacos y judíos de toda Europa, los ciudadanos tomaran partido por uno u otro bando en la contienda. Incluso se planteaban terribles escisiones familiares según se perteneciera a un bando o a otro, a la democracia y la libertad o a las potencias del Eje.

La divisoria, en realidad, se transparentaba sobre el armazón de un sistema de creencias radicalmente diferente al de Europa: buena parte de los argentinos identificaba a los aliados con el declinante Imperio Británico, y la mayor parte del nacionalismo de las décadas del 30 y el 40 simpatizaba con el ascenso de Hitler. El golpe militar de 1930, que había desalojado del poder al populismo de clientela restringida de Hipólito Yrigoyen, había estado encabezado por el general José Evaristo Uriburu, un militar «nacionalista» de inclinaciones autoritarias. Una fuerte corriente de opinión dentro del Ejército llevaba hacia esa línea dura, que insistía en los vínculos con la «Madre Patria», la atrasada España, contra el liberalismo de la avanzada Inglaterra, y en la afirmación del catolicismo más reaccionario contra el protestantismo de Inglaterra y Estados Unidos. Hay, sobre esto, dos cuestiones importantes que tener en cuenta: 1) que el nuevo nacionalismo militar y civil, por más independiente y autónomo que se supusiera a sí mismo respecto de los poderes establecidos, de algún modo reflejaba la crisis del modelo de orbitación comercial con el decadente Imperio Británico, y 2) que, imposibilitados de orientarse hacia Estados Unidos por el carácter competitivo de las dos economías, el «fascismo» de los militares argentinos era inofensivo y servía a propósitos altamente funcionales de las clases dominantes, ya que dejaba a los generales contentos con sus ilusiones, y oponía a la falta de participación militar en la guerra como única cristalización de ese fascismo, las extraordinarias ventas agrarias a las potencias en combate como resultado neto de la operación. Se cuenta que, cuando el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, pidió al premier británico Winston Churchill el cese de las compras de carnes argentinas, a modo de penalización por la abstención militar de Argentina en la guerra, y su reemplazo por cerdo norteamericano, la réplica de Churchill fue irreproducible, y Roosevelt archivó rápidamente la cuestión. Así se resumía el nacionalismo militar argentino. Argentina podrá ser una metáfora ideológica de Europa, pero solamente ideológica.

La Revolución de 1943 no tuvo ningún impacto sobre la Marina de Guerra, totalmente identificada con el *ancien régime* de orbitación de Inglaterra. La Marina, donde incluso hubo un conato de resistencia simbólica contra el golpe, no fue escenario de ninguna erupción nacionalista, y sólo después, en 1945 y 1946, con la derrota de la posición política del almirante Vernengo Lima y el triunfo electoral de Juan Domingo Perón, se registraría algún impacto con una tímida reforma de los planes de estudio. La participación del almirante Storni como canciller de la Revolución del 43 tampoco significó un vuelco nacionalista de la Marina y, si lo hubo, fue extremadamente minoritario y prácticamente reducido a la esfera de personalidades individuales sin seguidores de ninguna clase.

Con este panorama es que Massera ingresa a la Marina. El joven cadete carecía de la más mínima vocación militar o naval, y tampoco tenía vocación política manifiesta. Muchos años después, cuando le preguntaron por sus deportes favoritos, hablaría del tenis y de la pelota a pared, y confesaría con cierto dejo de embarazo: «La verdad es que no soy muy marino».

Al desinterés por las cuestiones navales se unía una notable falta de disciplina, que terminaría motivándole una carrera llena de arrestos. Odiaba la disciplina más que nada, y la Marina, para él, había representado cambiar la disciplina rígida e iluminista del padre por una disciplina mucho más rígida y mucho menos iluminista. Hombre naturalmente proclive al lado intelectual de las cuestiones, Massera no podía sino despreciar y odiar profundamente el inteligente rigor arbitrario que constituye la herramienta básica formativa de la personalidad militar, y los pavorosos ritos de iniciación que eran necesarios para poder llegar a la decantada elite naval. Incapaz de realizar un corte con el principio de autoridad, cuyo imaginario le había sido impuesto desde la infancia, Massera dirigiría sus movimientos en el sentido de buscar la autoridad para él solo. Su propósito no era subvertir el orden, sino apoderarse de él. Anarquista, poético y romántico en su personalidad más interior, era incapaz de imaginar un lugar donde el orden y la disciplina no existieran, o un momento donde el orden pudiera ser severamente trastocado. A él podría atribuírsele el razonamiento de aquel personaje de Chesterton que decía oponerse a la Revolución, pero no porque fuera mala sino porque era imposible. Semejante mixtura de conservadurismo y anarquismo impregnaría la etapa formativa de Massera con resultados que en ese momento nadie habría podido sospechar.

Algo que sí se podía sospechar, sin embargo, era su vocación de mando, su capacidad de organizar voluntades en pos de un objetivo, su naturaleza de líder nato, que ya en los años de la Escuela Naval lo colocarían entre los más respetados, admirados, confiables y seguidos de su generación. Cuando todavía no había egresado como guardiamarina, Massera participó de un conciliábulo secreto con cadetes de su promoción. El objetivo era «elegir» autoridades, imaginar una Marina ideal para cuando todos ellos hubieran alcanzado el almirantazgo. Allí fue elegido

unánimemente como comandante en jefe.

La costumbre dicta que los cadetes navales de primer año son tratados salvajemente por los de segundo (los «padres») y protegidos a distancia por los de tercero (los «abuelos»). La situación es propicia para la organización de equipos, lealtades y bandas bajo la forma de logias y sectas. La costumbre tiene su razón de ser, ya que enseña a los cadetes a pensar en términos de aliados, enemigos, defensores y defendidos, instila un pensamiento espontáneamente militar en las acciones, y programa la mirada en los términos de un problema, un campo de batalla y una relación de fuerzas. La logia a la que se incorporó Massera se autodenominaba «Los luteranos». Cada logia debía tener motivos, consignas, propósitos y divisas propias. Cuando Massera se incorporó a la Escuela Naval, el énfasis de la educación estaba puesto en un extremo rigor físico. El propósito de los luteranos era cambiar esto por un aumento de los castigos, que debían prodigarse en mayor número, con mayor facilidad y con mayor intensidad; su divisa era el grito de guerra «¡Escalí!» Un cínico puede desmerecer esto como una simple treta de los cadetes para evitar la extenuación y el rigor físico, pero el hecho es que cuando Massera llegó a la jefatura del arma hizo aplicar rigurosamente ese principio. El líder natural de los luteranos de esa promoción era el cadete Fitte, quien luego tendría una brillante carrera naval y un papel importante en el ascenso de Massera, el décimo de aquella promoción, a la notoriedad.

El propósito de largo plazo de los luteranos era tomar el poder dentro del arma. Carecían de cualquier diferenciación política con los altos mandos del momento, y en cierto modo también carecían de cualquier imaginación política. Se delimitaban del resto por el simple trámite de una divisoria entre «ellos y nosotros»; como eran minoritarios en la estructura de la Marina, y las únicas banderas que tenían para agitar eran las de una reforma de los planes de estudio y del arma, se llamaron a sí mismos «luteranos» para diferenciarse de los otros, los mayoritarios y «católicos» (para hacer una analogía con un país que lo era mayoritariamente). La logia era «luterana» porque proponía una reforma y nada más. Que el «protestantismo» plagado de autoironía del nombre tocara indirectamente el afecto de la Marina por la Inglaterra protestante puede atribuirse a un desliz del inconsciente, pero no existe el menor indicio de prueba que confirme que los luteranos representaran una ideología explícitamente distinta de las anteriores dentro del arma, ni que, como Massera y sus allegados intentarían sugerir después, en sus flirteos con el peronismo, constituyeran una irrupción nacionalista que de algún modo reflejara los vientos políticos de la Revolución de 1943.

La logia luterana quería el poder y en gran parte lo logró, imponiendo no sólo a Massera sino a cuadros como Armando Lambruschini y José Antonio Vañek. A los pocos años la logia se fundió con otra; el resultado sería una logia denominada «Omnia», cuyo grito de guerra en el primer año de la Escuela Naval era «¡Ulugalí!» y

que proponía un camino educativo intermedio entre la severidad de las penas y la del rigor. A esta logia ingresaron algunas de las personalidades más destacadas y brillantes que luego conformarían el alto mando naval en la época de Massera, como Carlos Alfredo Vahinger y Guillermo Argüedas. Los integrantes de todas estas logias tenderían a desmerecerlas después como meros juegos de niños, pero lo cierto es que su actividad conspirativa constituyó la matriz de un poderoso sistema de relaciones, lealtades y enemistades que después adquirió importancia política.

Massera egresó de la Escuela Naval como guardiamarina en 1946, el mismo año de la llegada del peronismo al poder. La sensación predominante en la Armada era de fuerte rencor y amargura por el fracaso del experimento político de Vernengo Lima y el deslucido papel en que el triunfo peronista dejaba a la institución. Una parte importante del odio de clase de la Armada contra el peronismo se concentraba en la figura de Eva Perón, a quien los envarados marinos consideraban poco menos que una prostituta aventurera colada por la ventana de la oportunidad a la prominencia política. Por ese entonces, durante una proyección cinematográfica en el cine de la Escuela Naval, los cadetes silbaron al unísono ante una aparición de Eva Perón en el noticiero de actualidad. El incidente desencadenó una gran purga y la expulsión de todos los involucrados.

Un almirante de la época de Massera sostiene que a la Armada no le molestaba esencialmente el *qué* del peronismo —industrialización, keynesianismo, grandes servicios públicos— sino su *cómo*: la movilización de masas, las apelaciones de Perón al sentimiento popular, sus airadas denuncias de la oligarquía terrateniente, sus amagues constantes de que su populismo podía escalar y desestabilizar revolucionariamente el sistema. A los ojos de los marinos Perón era un aventurero, un demagogo y un oportunista que jugaba con fuego. El general llegado al poder con el voto popular consumaba algo quizá peor que el cuestionamiento al sistema: procedía a la destrucción entusiasta de su aparato de símbolos, y tomaba venganza contra todos aquellos —marinos y militares especialmente— que habían buscado obstruir su proyecto. No era tanto que los eliminara, sino que se complacía en molestarlos. Semejante dualidad terminaría probándose suicida.

El *qué* del peronismo era probablemente insignificante, y quizá no difiriera esencialmente de lo que hubiera hecho cualquiera en esas condiciones económicas sobresalientes de la Argentina. El *cómo*, en cambio, era profundamente perturbador, porque constituía la legalización del movimiento de masas en el universo político, la entrada de los trabajadores en la ciudadela política que antes había estado celosamente restringida a la oligarquía y a la clase media. Justamente, cuando los marinos cuestionaban el *cómo*, el estilo, ponían el dedo en la llaga quizá sin advertirlo del todo ya que esa democratización aluvional, ese mamarracho neocorporativista y esa cursilería cultural en que se resumió el primer peronismo, con sus constantes apelaciones a la sabiduría y la bondad del pueblo, constituían la forma imperfecta, el



lenguaje a medias, para unas masas que recién comenzaban a expresarse. El *cómo* era el único elemento genuinamente progresivo del peronismo.

Massera, durante estos años, no se diferenció en absoluto de la corriente de opinión dominante en la Marina; miraba con simpatía y comprensión a los cadetes de la Escuela Naval que insistían en dar la espalda a Eva Perón en los desfiles y que contaban chistes procaces sobre la inverosímil nueva Primera Dama, cuyo mismo pasado como una oscura actriz de provincia era una afrenta al imaginario simbólico de la República tradicional y cuyos modales autoritarios dentro de la elite del poder constituían una ícente de irritación permanente. La megalomanía de Perón, su obsesiva insistencia en «peronizarlo» todo, su estética neototalitaria de grandes carteles con su retrato, su costumbre de hablar al pueblo desde el balcón de la Casa Rosada en mangas de camisa, su compulsión de eternizarse en estatuas, retratos y hasta en el nombre de una provincia sumaban el insulto a la injuria para aquellos marinos acostumbrados a pensarse en los términos del liberalismo democrático inglés.

La figura de la Primera Dama, con su combinación explosiva de orígenes bajos, gran belleza, sensibilidad por el lujo, resentimiento social y activismo populista militante configuraba para ellos lo peor del fenómeno: Evita era el *cómo* del peronismo, su posibilidad desestabilizadora, su variable «loca». La alucinación ideológica de la época hacía que Perón se representara a sí mismo como una suerte de Mussolini sudamericano combatiendo exitosamente a un perimido liberalismo político, y que los marinos se vieran a sí mismos como irreprochables liberales ingleses. Ambos, en realidad, hacían exactamente lo contrario de lo que pensaban ser: con Perón, que admiraba el modelo fascista y diera refugio político a numerosos nazis alemanes fugados durante la posguerra, los trabajadores votaron en elecciones democráticas por primera vez; en tanto, la liberal y británica Marina fue responsable de casi todos los intentos conocidos de obstruir esa vía.

Sin embargo, algo más profundo empezaba a registrarse en la sensibilidad del joven *mishi* — cachorro de gato, como la jerga naval denominaba en esa época a los guardiamarinas, grado inferior de la oficialidad— egresado en 1946. Ese algo era el imponente espectáculo del poder de Perón. Ni Massera ni nadie había visto antes nada igual. El general lo tenía todo: dominio de las Fuerzas Armadas, adoración del pueblo y el halagador temor que le dispensaban los poderosos. La imaginaria neototalitaria de que se nutría el primer peronismo no era tanto una importación alemana o italiana como una representación simbólica acabada y perfecta del poder que Perón había logrado acumular. Como muchos militares después, Massera empezó a admirar resentidamente a su enemigo, a imaginarse en su lugar. Aquí aparece el primer punto de transgresión serio respecto de la cultura naval: ninguno de los marinos de esa época, ni de las posteriores, soñaría con estar en el lugar de Perón.

Sucede que Massera no era un marino clásico, y los años de Escuela Naval sólo le habían dado la pátina y el estilo más exterior del oficial naval. Tampoco era clásico su color de piel, profundamente cetrino sin llegar a degenerar en el color de «morocho de provincia» o cabecita negra. El progreso y la movilidad social bajo la época del peronismo llegarían a posibilitar más tarde esa presencia en los grados más elevados del Ejército, aunque no en los de la Marina. El apodo de «El Negro» viene de esa época, y Massera tendría una relación notoriamente ambigua con esa «negritud». Por un lado pensaba que lo volvería más «popular», «carismático», «seductor», «macho» y «*latín lover*», pero por otra parte intentaría disimularla —o diferenciarla socialmente— mediante el ingenioso procedimiento de darse fuertes baños de sol. Se puede decir que se tostaba mucho para que no se dieran cuenta del todo de que era «negro», y permitía que lo llamaran así precisamente para dar a entender que él sabía que no lo era.

La diferenciación con la Marina no era solamente una cuestión de color de piel, sino también de profunda ruptura con su imaginario simbólico. Massera, por ejemplo, no era un liberal siquiera en el lugar falso en que los marinos se imaginaban que eran liberales, y no quería en absoluto a los ingleses. El chiste latinoamericano que dice que «el argentino es un italiano que se cree un francés, se viste como un inglés y habla en castellano» podría encontrar en Massera a su más acabado ejemplo, ya que él también haría su costumbre la de vestirse con sobrios trajes ingleses de color azul. La anglofilia, sin embargo, no era cosa que compartiera con la familia naval, así como tampoco los complicados rituales de modales y gestos que forman parte constitutiva de la vida militar, y especialmente la vida de la envarada Marina de Guerra. Los desfiles y las ceremonias lo aburrían soberanamente, e incluso en la época en que fue comandante en jefe hacía constantemente la venia con desgano, y se distraía pensando en cualquier cosa en los momentos en que supuestamente debería estar concentrado en el respeto al protocolo. La transgresión constante de Massera podría resumirse en una operación de fuga permanente: como marino se parecía más a un militar de Ejército, y como militar era, en general, un intelectual con fuerte interés por las cuestiones políticas, y más bien parecía civil. Como civil, sin embargo, nunca lograría llegar ni un punto más arriba de lo que se lo permitió su carrera militar.

Todavía, sin embargo, era demasiado temprano para pensar en eso en 1946. Y en los años que siguieron, Massera compartiría con sus pares navales el cerrado rechazo al peronismo pero se vería crecientemente impresionado por el poder y la personalidad de Perón. Como todos los marinos rechazaba profundamente el *cómo* del peronismo, pero comenzó a interesarse no menos profundamente en ese *cómo*, aunque desde el lugar del «cómo hacerlo», no desde la exterioridad del rechazo a un estilo sino desde el intento de interioridad de quien busca un manual de instrucciones para llegar a ser aquello que otro hace. Hubo dos cosas que registró con precisión, y que le quedarían grabadas para siempre. Una fue el *cómo* práctico de Perón, su utilización de la Secretaría de Trabajo y Previsión en el período 1943-1945 para dirigir

una política social asistencialista que lo convertiría en «el coronel de los trabajadores» y posteriormente en Perón. La siguiente fue el *cómo* encarnado del peronismo: Evita como jefa política, Evita como movilizadora, Evita y su relación con los militares y Evita en su relación con Perón. El poder de esas primeras impresiones se probaría de modo notable, exactamente treinta años después.

La vida privada del joven oficial Massera no se diferenció del común de su época. La Argentina de las décadas del 30 y el 40 era una sociedad extremadamente represiva en su moral. Las mujeres recién ingresaban al mercado de trabajo en ocupaciones que no fueran las de talleristas u obreras y, en general, pasaban su juventud a la espera del novio que las llevara al altar y a la seguridad de una existencia burguesa; el anillo de bodas era la prenda simbólica de redención de la condena femenina en un medio espontáneamente machista. Los hombres dividían a las mujeres en dos categorías: aquellas con quienes se casaban, y aquellas con las que tenían relaciones sexuales. La virginidad era la prenda más cotizada y el signo de valor más esencial de la mujer en el mercado del amor, aunque paradójicamente, y toda vez que los jóvenes quisieran acostarse con sus novias previamente al matrimonio, adujeran para pedirlo que querían «una prueba de amor».

La vida para un joven militar era todavía más rígida, porque pasaban largos años formativos en la grisura de la institución y su único contacto fácil era con prostitutas. Las niñas de buena familia se ponían en la mira de los jóvenes oficiales en la esperanza de ser requeridas, y algunas hasta paseaban por los andenes de las estaciones de tren donde llegaban los jóvenes cadetes, frescos del Liceo y ansiosos de mujeres. Los jóvenes oficiales carecían de toda experiencia significativa de vida cuando se casaban, y no era infrecuente que lo hicieran con la primera mujer que les interesara románticamente. El uso y costumbre tenía también una í^cionalidad: tanto el Ejército como la Marina preferían que sus oficiales se casaran temprano, en la creencia de que ello contribuiría a su estabilidad emocional. Un divorcio era raro: determinaba que el oficial del caso llevara en su legajo la inscripción desprestigiante de «situación irregular de familia», que ponía obstáculos para desarrollar su carrera. Asimismo, un oficial soltero podía despertar sospechas de inestabilidad o de homosexualidad. La casta militar tendía fuertemente a reproducirse sobre la base de la «célula básica de la sociedad», la familia, que los manuales de estudio le enseñaban a defender junto con el orden, el cristianismo y la Patria. El adulterio posterior al matrimonio era cosa corriente y aceptada de modo tácito tanto entre los militares como entre sus esposas, aunque esto también tuviera límites y debiera moverse dentro de determinados y complicados códigos. Cierta dosis de clandestinidad — por ejemplo, en el uso de ropas civiles — era tolerada pero no explícitamente permitida, y podía ser penada en caso de que el oficial fuera descubierto in fraganti.

La elección de Massera recayó sobre Delia Esther Vieyra, hija de un escribano que era miembro del Jockey Club de La Plata. Se conocieron y relacionaron en fiestas,

ocasiones sociales que estaban más o menos programadas para que muchachas de buena familia conocieran a jóvenes oficiales. A Delia Vieyra le gustaría definirse en años posteriores como parte de la «aristocracia de La Plata», una declaración de snobismo conmovedoramente ingenua: llevaba consigo la suposición de que una ciudad de menos de cien años de existencia disponía de una aristocracia. La afirmación era falsa incluso en los términos propios de La Plata, donde pertenecer a la elite (para llamarla de alguna manera) dependía de la descendencia directa o indirecta del fundador, Dardo Rocha, o de alguno de sus allegados. La Vieyra no era ni una cosa ni la otra; simplemente era la hija de un escribano próspero, una muchacha pretenciosa que hacía grandes aspavientos con el Jockey Club de su localidad, del cual se ha dicho que «si el Jockey Club de Buenos Aires tiene en la pared un Gainsborough, en el de La Plata tienen un Quinquela Martín<sup>^</sup>). Los medios económicos de la familia no eran superiores a los de los Massera, con lo cual queda descartada cualquier motivación interesada, pero al mismo tiempo se subraya el principio de que cada cual debe casarse con alguien del medio al que pertenece: una diferencia social siempre equivale, en ese tipo de matrimonios, al déficit del otro.

Algo, sin embargo, emparentaba a Massera con Delia Vieyra aún más que la homogeneidad social y la necesidad, por conveniencia carrerista o por amor desinteresado, de casarse pronto. Él quería poder, más poder del que tenía, y el equivalente femenino de la época al deseo de poder era el snobismo, porque representaba el deseo de pertenecer a una clase a la que no se pertenecía, a la clase que tenía el poder. El deseo desmesurado de figuración de la esposa de Massera terminaría convirtiéndose en una broma de la generación de marinos del momento, y uno de los entretenimientos favoritos del gineceo navale de la época consistía en adivinar «con qué vestido se aparecería Lily» determinada noche, y qué clase de cosas diría. Delia Vieyra era detestada por las esposas de los otros marinos, a las que ofendería con su pretenciosidad y sus vestidos, y nunca podría desarrollar ninguna amistad con ellas.

Las esposas cumplen un papel paradójico en la vida de un militar. Se dice que «la esposa de un oficial siempre tiene un grado más que su marido». Al mismo tiempo se acepta que, mientras los maridos crecen, ellas siguen como antes. Se supone que las esposas tienen el poder en la casa y constituyen, por así decirlo, el «frente interno» del marido. Una rígida separación de roles impide que las mujeres estén cerca de las ocupaciones de los esposos, y en las reuniones sociales, es la norma que los esposos estén en un lado y las esposas en otro. Cuando Massera conoció a Delia Vieyra, la naturaleza cerrada del ambiente militar, la marcada inexperiencia de los jóvenes oficiales y el extremo puritanismo y pacatería de las jóvenes «deseables» reforzaban el marco fuertemente codificado y regulado del modo en que los jóvenes oficiales conocían a sus futuras esposas. Un oficial, por ejemplo, conocería a una joven deseable, y al poco tiempo de salir juntos le preguntaría si no tenía una o dos amigas como ella para presentarlas a otros oficiales. Así, era frecuente que las esposas de los

oficiales hubieran sido amigas desde antes de casarse, y también se daban casos en que tres o cuatro hermanas se casaran con oficiales. Todo esto «cerraba» todavía más el microclima de la familia militar, reforzado además por el hecho de que los oficiales tendían a casarse con hijas de empleados nacionales de buena posición, completando así la requerida homogeneidad social. La infantilización de las mujeres predisponía a los maridos al adulterio, y confinaba gradualmente a las mujeres al lugar de una curiosa servidumbre, donde el marido lo era todo pero ellas tenían los resortes de la tranquilidad y la estabilidad doméstica. La identidad de una mujer como esposa de un militar puede adivinarse todavía hoy en ciertos tics de lenguaje, como el uso de la palabra «señor» para referirse a un oficial. Una burguesa del Barrio Norte podrá decir «El otro día estuvimos con el capitán Fulano» o «con Fulano» a secas, mientras la esposa militar dirá, por ejemplo, «Estuvimos con el señor capitán Fulano» o «Estuvimos con el señor interventor de YPF». La amputación y reconstitución del lenguaje es una marca de la amputación y reconstitución de estas mujeres, que viven a la sombra de sus esposos militares y terminan convirtiéndose en sus auxiliares, sirviéndoles café, atendiéndoles el teléfono, programándoles sus vidas, sirviéndoles de emisarias para determinadas misiones sociales, averiguándoles chismes y difundiendo los rumores que ellos quieren hacer circular.

El caso de Delia Vieyra de Massera fue algo atípico ya que Lily se ganaría la antipatía de todas las esposas navales de la época y no aceptaría nada bien el adulterio. Constituía un personaje básicamente celoso y persecutorio, que aceptaba la existencia del adulterio como «algo que les pasa a las otras», pero reaccionaba extraordinariamente mal ante las notorias escapadas de su marido, un personaje muy proclive a la identificación entre el sexo y el poder. Desde ese ángulo, Delia Vieyra representó una especie de lastre para su marido; sin embargo, éste sabría utilizarla en el futuro en por lo menos una importante misión. Massera, por lo demás, contrarrestaría las tendencias persecutorias de su esposa con un fuerte autoritarismo familiar, reminiscente del que le hiciera sufrir su propio padre. Se cuenta, por ejemplo, que los dos hijos que tuvo Massera jamás se atrevieron a enfrentarlo en nada, ni siquiera cuando estuvieron en edad de hacerlo. En una actitud característica, Massera combinaría este rígido autoritarismo familiar interno con la mayor de las caballerosidades y dulzura durante las reuniones sociales. No se trataba de hipocresía, sino del lugar correcto que creía que debía asignarse a cada cosa: la familia como un cuerpo unido y sólido detrás de su jefe, y lo social como el ámbito de seducción, acumulación y conquista. Sinceramente se veía a sí mismo como un jefe de familia ejemplar y, en sus términos, lo era.

Sin embargo, todo esto ni se sospechaba inicialmente, porque el snobismo de Delia Vieyra y el deseo de poder de Massera se aliaron fuertemente en pos de la reproducción de una riqueza fácil. Ninguno de los dos necesitaba nada de eso, pero ambos estaban encandilados por sus brillos simbólicos, ya fueran un vestido de Dior o las jinetas del almirantazgo. Constituían, pura y simplemente, una pareja de

arribistas.

## Cuatro

Juan Perón dijo una vez que «para llegar a general sólo necesité levantarme temprano y saludar a todo el mundo, pero llegar a ser Perón me costó toda la vida»; Massera parece haber seguido un curso de comprensión de los fenómenos políticos exactamente inverso. Ambicioso, seductor y negligente, dueño de un entendimiento político que solamente operaba en la corteza anecdótica de la historia, Massera era en el fondo el tipo de militar protopolítico que cree que las grandes decisiones se toman en componendas cerradas entre personas influyentes en salones llenos de humo. Tenía razones para pensar así, no solamente porque era un marino, sino porque la mayoría de las decisiones políticas desde 1955 había sido tomada de ese modo. Como muchos hombres de su generación, creía firmemente en la teoría conspirativa de la historia, y aspiraba a situarse en el centro de la conspiración correcta para llegar a asumir el poder en el momento oportuno. Quienes piensan así son paranoicos al revés: saben que existe algo más allá de la apariencia de las cosas, pero tergiversan su contenido al imaginarlo como resultado de una dirección semiclandestina de los acontecimientos y buscan convertirse en esa dirección clandestina en la ignorancia ingenua del papel de los grandes movimientos políticos. Se deslumbran con la fachada y persiguen, en lugar del poder, sus fetiches.

La influencia, como intangible de valor, era el bien en pos del cual pasó Massera la mayor parte de su carrera naval. Significativamente, no será en particular recordado por sus compañeros de armas por los destinos y misiones específicamente militares que cumplió, sino por las funciones que más tuvieron que ver con lo político y con lo intelectual: los largos años que pasó en la primera mitad de la década del 60 en el Servicio de Informaciones Navales (SIN), y su desempeño como profesor y autor de textos sobre temas del arma. Durante 1955 había sido uno de los ayudantes del entonces ministro de Marina Aníbal Olivieri, y con posterioridad a la época de Rojas sería el ayudante principal de otro ministro de Marina, el almirante Clement. La relación con este último sería fundamental, constituyendo la base formativa de su entendimiento político. Con Clement lo uniría además una suerte de paridad de clase social, ya que los dos pertenecían a un nivel más alto que el promedio del universo naval. Su jefe de entonces sería especialmente mal recordado en la Marina por una anécdota estrictamente apolítica: cuando asumió su cargo decidió que la residencia oficial que le correspondía como ministro constituía un despilfarro, y que más valía venderla a fin de poner los fondos a disposición de las necesidades más urgentes de la Marina. El detalle es que esto privó a los ministros de Marina y comandantes posteriores de una residencia de lujo que él no necesitaba y que, por su condición social, no le impresionaba, aunque fuera uno de los privilegios que los demás aspiraban a disfrutar. Massera, que sin ser exactamente rico era propietario de un número bastante importante de casas y departamentos chicos en La Plata y Buenos

Aires como resultado de las juiciosas inversiones de su familia, desarrollaría después un parecido egoísmo y un similar desentendimiento de los deseos de los otros. Jamás dio dinero a nadie salvo cuando fue estrictamente necesario y en retribución de un servicio concreto prestado, y se jactaba de sus nuevas adquisiciones con un entusiasmo intermedio entre la felicidad de un chico con un juguete nuevo y la insolencia de un insoportable nuevo rico. El egoísmo de Massera llegaría a límites presociales: solía servir whisky en las reuniones con sus amigos, pero sólo si él mismo bebía; en cambio, si estaba en un período de abstinencia alcohólica por prescripción médica, la botella permanecería intacta a la vista de todos sin que él se dignara ofrecerla a la ronda de invitados.

Con Clement, Massera aprendió a hacer política y a relacionarse con políticos, y también aprendió un estilo de trabajo particularmente agotador e intenso, que requería la máxima obediencia por parte de sus subordinados. Y descubrió el papel de la influencia. Comprendió con exactitud que no era un bien inmóvil y tangible, sino una relación y una permanente actitud de negociación y trueque, más aún en un país como la Argentina, donde las alianzas y las configuraciones políticas estaban modificándose constantemente, y donde el predominio político de una casta oligárquica había impedido que la transparencia de la democracia parlamentaria adjudicara su real valor a cada cosa. La Argentina, en el fondo, era un país conspirativo, pero esto no era así por una predisposición metafísica sino porque gran parte de la política se manejaba a través de conspiraciones.

Massera entendía la influencia como una precisa manipulación del tabú de la autoridad sobre sus subordinados y el intento de acceder al mercado de la política como forma de dirimir su puja por el ascenso hacia los grados superiores del arma. El valor que puede llegar a acumular un influyente se basa en su papel como agente del intercambio de mercancías escasas, y en todo caso de la manipulación y del juego con valores asimétricos distintos de los que existen. Massera encaró estas maniobras como intersección entre tres mercados fundamentales: el ámbito naval y militar en general, el político y el de la información representado por la prensa. A partir de su ingreso al SIN, Massera cultivó con asiduidad la prensa y hasta es posible que se haya sentido legítimamente atraído por el periodismo, que no solamente constituye la ilusión fugaz de la influencia sino también una fabricación de la realidad por medios que pueden seducir a quienes son proclives al pensamiento conspirativo. Cultivaba las relaciones con los periodistas casi como quien de pronto descubre una vocación alternativa que hubiera podido desarrollar si las cosas se hubieran dado de otro modo, y mantuvo siempre un vínculo estrecho con hombres de prensa afines a su personalidad que lo ayudaban a definir su estilo y a mantener una cuidadosa diferenciación sutilmente transgresora de las normas solemnes y rígidas del lenguaje militar. Massera mismo no redactaba mal, y su voracidad como lector —que a su retiro le hizo pensar por un momento en cumplir el curioso programa de leer uno o dos libros por día—, lo había habilitado para opinar con cierta solvencia sobre escritores socialistas del pasado

como Juan B. Justo y José Ingenieros, una capacidad totalmente anómala en un oficial de Marina y mucho más entre los militares en general.

El periodismo era un escalón en la relación con los políticos. Civilizado «hombre de mundo» del aparato naval, Massera descubrió desde temprano que una parte importante del juego y del intercambio de influencia y de poder consistía en mantener una relación amistosa con el «Otro» impensable de la Marina: el peronismo. No tenía la menor inclinación hacia el peronismo, salvo quizá la remota admiración y envidia hacia un hombre de armas que había logrado convertirse en un líder político, y en cierto modo se dibujaba a sí mismo como «el gorila que habla con peronistas» y «el gorila que tiene amigos peronistas», lo que luego le resultaría extremadamente útil. Jugaba al filo de la traición como manera de atraer hacia sí el bien escaso. Su actitud puede describirse como la de un equilibrista que sostuviera su marcha compensando cada dificultad de un lado con valores de otro lado, y que se moviera sobre la superficie de las cosas siempre consciente de que el mundo constituye un equilibrio, inestable, y que desequilibrarlo de manera dinámica era la forma en que él podría avanzar para convertirse, en el momento preciso, en el factor que lo equilibrara de nuevo. Era, para decirlo brutalmente, un oportunista, pero un oportunista refinado y sutil, consciente del valor de mercado de las cosas, renuente a entregarse al otro y resuelto a mantener la frontera precisa entre traición y arreglo: no era hombre de «soluciones finales» como el alto mando naval de la época de Rojas, sino un hombre de negociación y diálogo. Como todo conservador, creía en la dureza pétrea, sustancialmente inmodificable de la naturaleza humana, y estaba convencido de que su camino hacia la gloria pasaba por la manipulación diestra de los egoísmos, mezquindades y avaricias de esa naturaleza humana. Se puede decir, en este sentido, que carecía de toda heroicidad y grandeza: que la heroicidad y la grandeza que luego barnizaron su figura fueron meros decorados de mampostería iconográfica para exaltarla, y que si alguna vez alcanzó algo parecido a la heroicidad y la grandeza fue sobre la base de llevar hasta el fin su carencia de toda necesidad y de toda grandeza, su no creer en nada, su papel como recipiente vacío del poder, su disposición a ser llenado por los contenidos que fuera con tal de lograr la posición que ambicionaba. Seducía desde el preciso borde de la mimesis, y luego desde la retracción hacia su posición original.

Juan Perón, el Otro absoluto de los militares y sobre todo de los marinos argentinos, era también, paradójicamente, un modelo objeto de admiración y de envidia: que hubiera logrado pasar de general (en realidad de coronel) a líder carismático de masas, constituía aparentemente una tarea sencilla, ya que habría logrado manipular demagógicamente en su favor los resortes de poder que tuvo a su alcance apenas conquistó las posiciones necesarias; sin embargo, cuando algún militar más o menos ambicioso llegaba a la cúspide del momento político argentino, la tarea le resultaba considerablemente más difícil, ya que descubría que el poder del que disponía era un poder vicario, que le había sido cedido por la institución y que ésta



podía arrebatarle en cualquier momento, ni bien él se desviara del código implícito de instrucciones con el que había sido puesto en posición de mando. La independencia era, pues, el bien a conquistar, aunque no se supiera si el primer paso era el contacto con el mundo político o el ascenso dentro del arma, ya que era la tragedia de los militares argentinos ambiciosos que, una vez que salían a respirar el aire exterior a la institución, enseguida se encontraban con el propio Perón como referente superior, mientras las instituciones militares mantenían su cohesión política en la forma de negación de Perón.

Como síntesis provisoria, diremos que Massera, en la década del 60, había comprendido que para ascender dentro de la Marina era necesario ser gorila, pero para ascender en el poder político había que aproximarse a Perón. Semejante dualidad y tensión contradictorias en el camino hacia el poder militar y político conformarían a Massera como militar, como político y como hombre, y determinarían los logros y los fracasos de su estrategia.

## Cinco

Massera aprendió desde temprano a manejarse primariamente a través de emisarios o (como se los denominó después) «operadores políticos». El uso de estos hombres obedecía a un doble imperativo: quedar despegado de las implicaciones de cada posible movida, y ser capaz de dirigir jugadas múltiples en múltiples tableros sin involucrarse personalmente y sin hacerse pasible de reproches por traición. Cualquier culpa podía ser cargada sobre las espaldas de los emisarios, a quienes Massera podría usar como fusibles.

Quien introdujo a Massera en los ambientes periodísticos fue Buby Stalshmit, un viejo corresponsal naval del diario *Crítica*. Los corresponsales militares en Argentina configuraban una especie muy particular, el tipo de persona de la que no se sabe si es corresponsal de un diario en las Fuerzas Armadas o corresponsal de las Fuerzas Armadas en un diario. La ambigüedad no era necesariamente producto de un bajo nivel moral por parte de los corresponsales, sino del hecho de que pasaban más tiempo en la institución militar que en sus diarios y revistas, y necesitaban establecer un «toma y daca» con los militares para poder conseguir información y «filtraciones». El «toma y daca» generalmente consistía en que, a cambio de la información requerida, el militar que la suministraba o el sector al que éste pertenecía quedaba retratado bajo la mejor de las luces, y sus adversarios bajo la peor. La manipulación militar de la prensa era muy marcada y casi inevitable: cada rumor y cada pieza de verdad transmitida contenía su propia contraverdad, la razón de fondo por la cual se revelaba esa verdad. Los corresponsales, que pasaban la mayor parte del tiempo con los militares, cenaban y bebían con ellos, los visitaban de mañana en sus domicilios y luego los veían en las salas de prensa de los distintos comandos, tendían a identificarse fuertemente con la institución militar a la que habían sido destinados. Muchos de ellos llegaban incluso a exhibir y usar con orgullo el uniforme especial que la institución les confería para determinadas ocasiones operacionales y protocolares, lo que no dejaba de causar mucha gracia entre los uniformados de verdad.

Sin parecerse a los casos más extremos, Stalshmit no escapaba a la regla general. Massera, por su parte, mostraba una gran capacidad para dialogar y escuchar a los periodistas, con quienes pasaba gran parte del tiempo en su calidad de oficial de informaciones. Stalshmit presentó a Massera en *Crítica*, donde luego se haría una costumbre que éste fuera a tomar unas copas y jugar a las cartas por la noche, después del cierre de la edición. Le encantaba el ambiente periodístico, con su combinación de bohemia, chismorreo y gran fábrica de procesamiento de la información, y le gustaban los periodistas, quienes no sólo eran capaces de promocionarlo en público y relacionarlo en privado, sino también de hacer cosas que él no podía hacer directamente, como construir la realidad y la lectura que se hará de ella al día

siguiente, a partir de unas hojas mecanografiadas en un galpón repleto de máquinas de escribir. Un diario —pensó Massera— es como un gran servicio de informaciones civil. Se tomaba al pie de la letra la idea del periodismo como el «cuarto poder».

Uno de sus principales emisarios y operadores políticos en esa época era el oficial odontólogo De la Serna, quien se manejaba con un alto grado de autonomía y le organizaba los contactos que consideraba convenientes. A fines de 1961, en la última etapa del gobierno civil con leerte condicionamiento militar del desarrollista Arturo Frondizi, De la Serna contactó a un amigo suyo, el periodista, poeta y escritor Hugo Ezequiel Lezama, que tenía en ese momento altas responsabilidades en el emporio de revistas de la Editorial Atlántida, una de las más poderosas del país. Un día lo visitó y le dijo:

—Hugo, hay un joven capitán de corbeta, segundo jefe del Servicio de Informaciones Navales, que te lee, está muy interesado en lo que escribís y tiene muchas ganas de conocerte.

Quedaron en encontrarse para almorzar. Massera desplegó su característico encanto durante el almuerzo, y allí comenzó una relación muy profunda, donde Lezama, quizá sin saberlo, empezó a convertirse gradualmente en el principal ideólogo, propagandista y publicista de que dispondría Massera en el futuro.

El pasado, en cierto modo, los ayudaba. Durante la Revolución Libertadora, Lezama había participado con entusiasmo de los comandos civiles, organizaciones paramilitares de terrorismo urbano que operaron desde el primer golpe de junio de 1955 hasta pocos meses después del golpe definitivo de septiembre. Los comandos civiles, que se reclutaban entre radicales, socialistas y liberales, colocaban bombas, organizaban «aprietes» y tuvieron un papel importante en la reorganización de la Policía Federal bajo hegemonía de la Marina de Rojas tras el triunfo del golpe. Se los podría considerar una versión modernizada de la Liga Patriótica de los almirantes Domecq García y O'Connor en 1919. Constituyeron, asimismo, la primera fuerza armada importante de que dispuso el intento de golpe del general Lonardi, que al principio era extraordinariamente minoritario entre los cuadros del Ejército.

Massera y Lezama eran, además, casi coetáneos: el militar era sólo siete años mayor que el periodista. Y estaba en verdad cautivado por la prosa de éste, por su capacidad para expresar ideas y describir situaciones en frases concisas y fortísimas, por su extendida cultura. Lezama era una especie de «hombre del renacimiento» de los intereses culturales: le apasionaban por igual la política, la música clásica, la literatura, el periodismo, la gastronomía y la obra de pensadores católicos como Pierre Teilhard de Chardin. Antimarxista y antinacionalista visceral, era un liberal argentino en todo el sentido del doble término. Anglófilo y admirador incondicional de Winston Churchill, es muy posible que éste fuera su único punto de diferenciación cultural con

Massera. Jamás fue un hombre vulgar, nunca condescendió al tuteo con el «Negro», un tratamiento que en una época muchos empezaron a prodigarle y que Massera favoreció demagógicamente. Se diría que intentaba persuadirlo de que estaban juntos para una tarea y no para los honores fáciles de la confianza o el dinero. Además de ser autor de las novelas *La tierra está sola*, *La secta final* y *La guerra secreta de Buenos Aires* —esta última sobre el caso de Alfredo Astiz— y los ensayos *Balcarce 50* y *Teoría de la persuasión*, Lezama también trabajó como *ghost writer* para diversos políticos y diplomáticos y terminó convirtiéndose en uno de los principales escritores de los discursos de Massera. Sobre las ideas políticas de Lezama podrá pensarse lo que se quiera, pero, al igual que la mayoría de los gorilas civiles convencidos de la Revolución Libertadora, era a su manera un hombre de principios y una persona honesta.

Otros periodistas con los que Massera estableció ya desde esa época una relación significativa fueron Jorge Lozano, un liberal extremadamente inteligente y elegante que se desempeñaría luego como director de varias revistas y también escribiría discursos para aquél, y Burnet Merlin, corresponsal militar del diario *Clarín*. Massera frecuentó con asiduidad las redacciones de los diarios *La Razón*, *La Prensa* y *La Nación*, y fue construyendo allí parte del aparato de relaciones civiles que luego pondría a trabajar en pos de su proyecto de poder.

Se trataba de una época de fuerte agitación y convulsión en los servicios de inteligencia militar, que perseguían las actividades del presidente Frondizi como si éste fuera su enemigo, obsesionados por la entrevista que había mantenido con el presidente cubano Fidel Castro. Los jefes castrenses solían presentarse de a tres en el despacho del Presidente, para asediarlo y presionarlo con los datos, verídicos o fantasiosos, que habían compilado contra él los servicios de la inteligencia militar. Frondizi, muy condicionado, daba vueltas por la habitación y trataba de escabullírseles con cualquier excusa, en un minué repetido y ridículo. Era el período de los «planteos» militares, que terminarían con su derrocamiento.

Las actividades de los servicios de informaciones eran febriles, continuas, intensas y del todo insignificantes. Se hallaban poseídos por una galopante paranoia anticomunista, llevando la teoría conspirativa de la realidad hasta límites paroxísticos que les impedían recabar informaciones serias sobre los temas que realmente importaban y los convertían en un auditorio fácil y sumiso para cualquier mitómano ansioso de recibir dinero y favores a cambio de sus fabulaciones. La similitud que Massera descubrió entre los servicios de informaciones y los diarios era que unos y otros eran mentideros de primer orden y usinas de rumores, y que podían ser usados, en la frágil atmósfera semiconstitucional de la época, para derrocar gobiernos.

Un ejemplo dará testimonio de la temperatura intelectual dominante en los servicios de inteligencia de aquel entonces. Los militares estaban fuertemente

preocupados por la actividad de empresarios judíos de ideas progresistas como Madanes y Sivak, que participaban del aparato financiero del acartonado Partido Comunista Argentino al tiempo que se embarcaban en ambiciosos proyectos como el de Minera Lumine, un antecesor de lo que luego se convertiría en una *cause célèbre* y un *casus belli* de la actividad militar contra determinados sectores de las clases dominantes argentinas: la empresa Aluminio Argentino (ALUAR). Los servicios de inteligencia militar habían «descubierto» las raíces de la conspiración, que habría sido más o menos como sigue. La Unión Soviética y el bloque del Este, cansados de sus intentos permanentes de provocar revoluciones por abajo, habrían pasado ahora a una segunda fase, de conquista de los países «por arriba». A tal fin habrían montado en Praga (Checoslovaquia) una «escuela de millonarios». Hombres y mujeres perfectamente seleccionados en distintos países de Occidente serían llevados a esa escuela, que les enseñaría cómo enriquecerse y adquirir empresas. Una vez terminado el curso, se les entregarían 100 millones de dólares a cada uno de los participantes y se los enviaría a sus respectivos países para que comenzaran su período de acumulación monopólica. Sivak y Madanes habrían sido algunos de los empresarios comunistas que realizaron el curso, con el objetivo de apoderarse de la economía argentina. El caso ALUAR mostró más tarde algunas irregularidades en la financiación de la empresa y sólo eso, pero ya no hubo forma de convencer a los militares argentinos de que sus fundadores no habían hecho el curso, sobre todo cuando después la firma apareció vinculada a empresarios judíos de pasado izquierdista que desempeñarían un papel importante en el tercer gobierno peronista, como José Ber Gelbard y Julio Broner.

El caso no sólo es paradigmático del clima reinante en los servicios de informaciones de la época, sino del modo en que los militares se representaban la realidad. Antes que nada, se trataba de un modo fuertemente ideológico: no se detenían a pensar que, incluso si la escuela de millonarios de Praga en realidad existía, los millonarios en cuestión habrían empezado a trabajar de inmediato en las mecánicas del capitalismo, con sus prioridades y con sus propias reglas de juego. En segundo término, sobrevaloraban inmensamente el poder y el éxito de la economía comunista, a punto tal de suponer que no solamente era capaz de hacer progresar la economía de comando (y la gestión checoslovaca en este sentido fue un particular desastre) sino también de desarrollar la gestión capitalista privada, quizá mejor que los verdaderos capitalistas (¿acaso Marx no había escrito *El capital*?). Tercero, y lo más importante, creían en la superioridad del modelo comunista tanto o más fervientemente que los militantes de izquierda, e imaginaban su propio lugar de un modo crepuscular y agónico, como último reducto de una ciudadela que caería inevitablemente. Se tomaban muy al pie de la letra eso de que ellos eran la reacción armada.

## Seis

El SIN y los diarios constituían solamente peldaños de la aproximación de Massera hacia sus objetivos de poder. El escalón decisivo era el universo político, para acceder al cual estaba eminentemente capacitado a partir de sus responsabilidades de inteligencia y de sus relaciones con los periodistas. Los periodistas, los servicios de inteligencia y los políticos constituían una tautología perfecta.

Uno de los políticos con quien Massera tenía buenas relaciones era Arturo Mor Roig, un radical que ocupaba en esos tiempos la presidencia de la escasamente democrática Cámara de Diputados. Mor Roig se ubicaba en el *mainstream* centrista del radicalismo cuyo referente fundamental era el doctor Ricardo Balbín, y se distinguió en tiempos de la Revolución Argentina como el ministro del Interior —el ministro político en términos argentinos, y en cierto modo el primer ministro— de la transición hacia la democracia. A lo largo de esta historia, Massera desarrollará posiciones extremadamente adversas a las sustentadas por Mor Roig, y en el apogeo de su poder, aparecerá directamente enfrentado con los herederos políticos del viejo dirigente radical. Sin embargo, en la época de que nos ocupamos el gorilismo naval y el gorilismo radical eran prácticamente una sola cosa, ya que la tesis de la Marina implicaba construir un modelo de democracia parlamentaria cuya «polis» estuviera circunscripta a todos aquellos que no estaban comprometidos con el peronismo, y Mor Roig cumplía perfectamente ese papel. Mor Roig también le serviría de ayuda después, y muchos políticos radicales conocieron a Massera mientras éste salía o entraba de su despacho parlamentario.

Sin embargo, para ascender en la Argentina se necesitaba algo más que el contacto con políticos de la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador, el Partido Socialista o incluso el mismo Partido Comunista, que después de todo habían sido los integrantes de la Unión Democrática, los soportes civiles, políticos e ideológicos de la Revolución Libertadora y también, más previa y filialmente, quienes habían respaldado la consigna del almirante Vernengo Lima de «Todo el gobierno a la Corte». Massera necesitaba desarrollar contactos con los peronistas. La parte buena de todo esto para él era que los peronistas también necesitaban establecer contactos con la Marina de Guerra, en parte porque constituía el arma más fóbicamente enfrentada con ellos y en parte porque les hacía falta revalidar sus credenciales «nacionales» —ya no necesariamente «nacionalistas»— frente a lo que podía constituir un potencial adversario comunista. Los peronistas en el fondo no entendían por qué la Marina se les oponía tan tenazmente, ya que los más sagaces entre ellos habían empezado a olvidar las viejas consignas contra el «imperialismo inglés» —que en la década del 40 incluso habían sido asumidas por un importante sector del radicalismo, como el que representaban el entonces radical Arturo Jauretche y su organización, FORJA— y

habían comenzado a darse cuenta, más allá de las supercherías ideológicas de su movimiento, de que vivían en un mundo bipolar, y que la bipolaridad que constituía la obsesión de los poderes del orden no era Alemania versus Inglaterra sino Estados Unidos versus la Unión Soviética. A partir de que asumieron esta realidad internacional, los peronistas del aparato político comenzaron a querer «venderse» como alternativas potables y deseables a los representantes del poder político-militar. No se sentían solidarios con la izquierda sino que, en función de su propia historia como repudiados por la izquierda y como beneficiados por un militar —Perón—, se sentían más inclinados a pactar con el poder. Un elemento importante que actuó sobre el fermento revolucionario entre 1955 y 1972 fue el papel neutralizante, conservador y amortiguador del aparato político peronista en las relaciones sociales entre Fuerzas Armadas y clase obrera. Además, como en el fondo los peronistas temían las derivaciones izquierdistas de la clase obrera, se convertían frecuentemente en informantes y delatores ante el poder de cualquier desarrollo radicalizado que pudieran tener sus bases obreras, como forma de mantener su liderazgo en medio de una situación política donde todos, desde los militares iluministas hasta los militantes peronistas, eran tan conservadores. El recurso habitual de la época era que un peronista conseguía «acceso» a un militar, un marino o un policía y trataba de convencerlos de su propia bondad, al tiempo que se mostraba sumamente dispuesto a informarlo acerca de «infiltraciones» izquierdistas en su gremio u organización política. Si bien era cierto que el aparato político del peronismo no representaba una estructura de decisión en las mecánicas de ese movimiento político, también lo es que, con un líder en el exilio del cual ellos eran los principales canales de comunicación, constituían los deformes oídos y ojos del remoto general Perón. Y como la mayoría era gente mediocre, obnubilada por la admiración a Perón y por el deseo de un lugar en un movimiento cuyo destino consideraban trascendente, las visiones y los mensajes que transmitían no podían ser sino los mensajes de un idiota, y Perón escuchaba, desde su exilio en Madrid, la historia argentina contada por un idiota.

Los principales contactos peronistas de Massera durante esa época fueron Luis Sobrino Aranda, un peronista provinciano que se aproximaba más a un *apparatchick* que a un político de carne y hueso, y Raúl Matera, un médico del cual nunca se supo claramente si era famoso como neurocirujano por ser peronista o si era famoso como peronista por ser neurocirujano (la ironía política lo bautizaría más tarde como «neuroperonista»). No interesaba; eran los únicos contactos importantes con el peronismo que Massera tenía, casi más de los que la realidad le permitía tener.

Massera despreciaba profundamente a toda esa gente, a la que veía como irremediabilmente provinciana y limitada. Sin embargo, ellos eran escalones en su aproximación hacia el poder, y ya había comenzado a sospechar que el poder era Perón. Pese a esas sospechas, cuando miraba la manga del saco de su uniforme, las barras que le faltaban para llegar al almirantazgo lo convencían de que todavía tenía un trabajo por hacer. En cierto modo, no terminaba de darse cuenta de que tenía un

papel trascendente por desarrollar, aunque lo ambicionaba. La idiotez de sus interlocutores y el dorado creciente de las barras que formaban la base del círculo en el símbolo de su grado naval eran una dialéctica de la que no podría escapar y que determinaría en forma creciente su destino. No es imposible que esta impresión de juventud —que, por lo demás, era ampliamente compartida por el resto de los actores políticos de la época— haya terminado aproximándolo hacia su ruina.

Sin embargo, todavía era demasiado temprano para eso. Massera leía los diarios, miraba el símbolo de su grado en la manga de la chaqueta naval, conversaba con políticos y con periodistas, y se iba a su casa. Todavía dormía el sueño de los inocentes, y todavía no sabía quién era.



## Siete

Uno de los acontecimientos que más contribuyeron a marcar la personalidad y la percepción política de Massera fue la derrota de los colorados por los azules en 1963. Él, que era colorado — como todo el espectro naval—, notó por primera vez de modo convincente que no bastaba con ser antiperonista y duro para recoger lautos políticos en la era post Libertadora, y que el Ejército constituía un factor de poder cuyos ritmos internos no necesariamente estarían determinados para siempre por la ideología. Sin embargo, en un segundo plano los acontecimientos específicamente militares lo condujeron a hacerse una idea errónea de los hechos políticos, que después lo llevaría a identificar de manera creciente el poder real con sus atributos y lugares físicos. Massera, comentando los hechos con un grupo de amigos, observó: «¡Qué manga de boludos que fuimos! ¡Si podíamos haber tomado la Casa de Gobierno con la Infantería de Marina! Total, adentro había sólo treinta granaderos». El razonamiento del golpe de mano, de características un tanto gangsteriles, se unía a una conceptualización fetichista, que atribuía al objeto las propiedades de su contenido.

Sin embargo, para Massera —como para muchos marinos de su generación— la derrota colorada representó psicológicamente la posibilidad de salir de la tutela asfixiante y el continuo rol de referencia del almirante Rojas, quien, aunque retirado y básicamente silencioso, presidía el espíritu de la institución naval. Massera respetaba a Rojas y compartía totalmente sus posiciones políticas, pero ya le fastidiaba e irritaba profundamente su protagonismo y envidiaba su carisma, así como en años posteriores le disgustarían las intermitentes y a veces inoportunas apariciones en escena del almirante «libertador» para hablar del peronismo o de su tema académico favorito: la geopolítica argentina y las relaciones con Brasil y Chile. A Massera le molestaba que la Marina tuviera un líder histórico que no fuera él, a pesar de que Rojas respetó escrupulosamente su propio código de honor y jamás intervino en cuestiones internas del arma. Además, en años posteriores Rojas se volvió una especie de figura embarazosa, ya que recordaba permanentemente al auditorio electoral del peronismo el gorilismo tradicional de la Marina, algo que también hacían una cantidad de almirantes retirados que integraban círculos de reivindicación de la Revolución Libertadora, que cantaban año tras año en septiembre la «Marcha de la Libertad» y que en 1972 decían por televisión cosas tan exóticas como que «traer a Perón al país es como tener una víbora en el living».

Con respecto al almirante Varela, que tomó en sus manos la maltrecha Marina posterior al enfrentamiento azules-colorados, la opinión de Massera era del más absoluto desprecio, ya que lo consideraba un oportunista sin principios que había llegado al comando del arma en circunstancias poco claras. Aún más le horrorizó la

decisión de Varela de integrar a la Marina en la Revolución Argentina del general Onganía en 1966, un punto de vista compartido por la mayoría de los cuadros del arma, que consideraban que la Revolución Argentina era «la revolución de los azules». Además, el discurso de Onganía estaba teñido de un fuerte tono corporativista, que repugnaba al liberalismo imaginario de la oficialidad naval. Como contrapartida, la entrada de la Marina en la Revolución de Onganía le representó la posibilidad de reequiparse y sanar las heridas abiertas en los enfrentamientos de 1962 y 1963. Imperceptiblemente, la fuerza naval iba modificando aspectos de su extrema ortodoxia programática, adaptándose a los tiempos.

Los años que van entre 1963 y 1972 no tienen mayor interés para la historia de Massera, reduciéndose básicamente a una acumulación de ascensos y destinos militares y académicos engarzados todos ellos en el sistema de relaciones montado a varias puntas entre la logia luterana, el universo político y el mundo del periodismo y los servicios de informaciones. Sin embargo, en 1971 aparece un incidente curioso y algo embarazoso, que sus enemigos se encargarán de recordarle tiempo después, y que es útil para dar una idea de su personalidad. Massera, ya capitán de navío, comandó ese año el octavo viaje de instrucción de la ígata-escuela *Libertad*. El viaje no tuvo nada de especial, salvo por el hecho de que la nave debió sortear los ciclones «Katia» y «Luisa» poniendo a prueba la pericia del comandante, los cadetes y la tripulación. Sin embargo, al anclar en Mombasa, un puerto de Kenia sobre el Océano Índico, Massera mostró un vivo interés por conocer las costumbres de los nativos, en particular los ritos de brujería, haciéndose organizar una suerte de visita guiada.

El incidente sería una mera curiosidad si no estuviera asociado a una personalidad fuertemente supersticiosa, psicológicamente dependiente de los amuletos, de un régimen de costumbres inalterable y ligada a objetos. Siendo un personaje básicamente arreligioso, Massera consideraba en el fondo que una buena superstición era mejor que cualquier religión, y a pesar de que en sus discursos de comandante hablaba incesantemente de Dios, su único nexo con la religión aparecía en la forma de una frase-amuleto que repetía en cada ocasión de dificultad o de prueba: «Jesusito me va a ayudar, Jesusito está conmigo». Se aferraba a esta frase como quien se aferra a una pata de conejo, aunque el interlocutor no pudiera distinguir qué entendía él exactamente por «Jesusito». Jamás iba a misa por iniciativa propia, lo que en cierto modo era lógico y clásico en un oficial de la laica y anglófila Marina de Guerra. Sin embargo, lo que no era lógico, clásico ni natural era que se la pasara consultando videntes y haciéndose leer la mano, y que fuera capaz de desplazarse kilómetros, incluso en momentos de intensa actividad, si alguien le informaba sobre la aparición de una extraordinaria nueva vidente. Y es que el oficial que en 1963 identificaba la Casa de Gobierno con el poder identificaría luego los amuletos con la suerte y los objetos con el destino.

Massera desarrolló desde temprano una intensa relación con las cosas, y se fue

volviendo un personaje fuertemente posesivo y acaparador que identificaba la posesión física con el poder, y el poder con la posesión física. Como observaría uno de sus allegados de esa época: «El poder es en él un instinto sexual». La asociación entre sexo y poder quedará subrayada más tarde hasta el absurdo.

## Ocho

Una organización que constituía el exacto reverso realmente existente de la inexistente «escuela para millonarios» de Praga era la logia masónica Propaganda 2 (P-2), a la que aparecerían vinculados no sólo Massera sino también Perón y una buena cantidad de generales del ejército, políticos y diplomáticos argentinos. Veamos cómo ocurrió.

A partir de 1960, los industriales italianos comenzaron a alarmarse por el crecimiento electoral del Partido Comunista. La democracia cristiana constituía el dique de contención que impedía el arribo del PCI al gobierno, pero se encontraba dividida entre partidarios y opositores de la nacionalización de industrias, y dependía para gobernar del acuerdo tácito o la coalición explícita con una cantidad de partidos más pequeños que le imponían concesiones programáticas. Gianni Agnelli, el poderoso dueño de la FIAT —que había sido personalmente «desfascistizado» por John

Connally, jefe de uno de los servicios secretos norteamericanos en la inmediata posguerra y luego secretario del Tesoro de la administración Nixon—, era uno de esos industriales preocupados. Pero el más obsesionado de todos era Licio Gelli, un francmasón fabricante de muebles cuyo pasado también era fascista y que había estado exiliado en la Argentina en la época posterior a la caída de la dictadura de Mussolini. Gelli, un delirante, tenía en su residencia retratos de Franco, Hitler y Perón, y organizaba elaborados ritos de iniciación para la logia P-2, de la que se convertiría en Gran Maestro.

La P-2 (el enigmático nombre significa sólo «Propaganda Política») existía desde mucho antes, y tiene ciertos vínculos de origen con las sociedades carbonarias del siglo XIX. Aun así fue Gelli quien la organizó con el sentido específicamente anticomunista que se le conocería más tarde, subvirtiendo en cierto modo los principios iluministas y libertarios en que se había fundado la masonería. La primera estrategia de Gelli ante el avance del PCI —que en ese momento se suponía podía llegar a ser respaldado por un avance sobre Italia de las tropas del Pacto de Varsovia— consistía en promover el derrocamiento del gobierno constitucional italiano y la instauración de una dictadura. La segunda era una estrategia de escape, que podía usarse si la primera fallaba y que serviría de refuerzo internacional si tenía éxito. La primera estrategia incluía el reclutamiento de políticos, militares, banqueros y hombres de empresa en Italia, y la segunda requería lo mismo, pero en el exterior.

Gelli se detuvo a pensar qué países podían ser ideales para consolidar una influencia externa y al mismo tiempo aptos para radicar capitales y empresarios si

pasaba lo peor y el comunismo llegaba al poder. Tenían que ser naciones básicamente blancas, con una cultura y políticas occidentalistas y cuyas economías pudieran ser desarrolladas conforme a los modelos italianos. Sudáfrica y Rhodesia, dos «parias» de la comunidad internacional, debían ser descartadas por sus mayorías negras, por la convicción reinante en la época de que el *apartheid* iba a caer irremediabilmente y porque tampoco tenían demasiada afinidad cultural con Italia. Australia y Nueva Zelanda eran países anglosajones, y la P-2 tenía una fuerte vocación cultural de reivindicación del «latinismo» contra el protestantismo de Inglaterra y Estados Unidos. Además, todas las opciones mencionadas ya tenían economías desarrolladas según parámetros propios, y no iban a recibir fácil ni cómodamente una súbita inyección de capital italiano.

El jefe de la P-2 se decidió finalmente por la Argentina y Uruguay. Ambos eran países básicamente blancos, básicamente occidentalistas, latinos, proeuropeos por tradición, y los dos habían sido beneficiados con Inertes corrientes inmigratorias italianas a comienzos del siglo. Al mismo tiempo, se trataba de naciones que Gelli conocía personalmente y con cuya clase política tenía trato directo. El líder masónico comisionó como emisario personal a Gianí^anco Elía Valori para que iniciara las actividades de reclutamiento y las radicaciones en Uruguay; luego se extenderían a la Argentina.

La Marina de Guerra argentina estaba totalmente hegemonizada en esa época por la influencia francmasona, con masones en los principales puestos de mando; sólo mucho después, a mediados de la década del 80, aparecería la influencia competidora de los marinos pertenecientes al Opus Dei. La francmasonería entroncaba con los principios liberales y laicistas de la Marina de Guerra. Además, ser masón era cosa que no implicaba daño ni peligro alguno, al tiempo que creaba una red de protección y de contactos personales cuyos beneficios no se podían menospreciar. Massera se había hecho masón de un modo casi distraído, como quien cumple un requisito secundario para ingresar a un club. Incluso tiempo después, cuando nombrado comandante de la Marina, ante la visita de un grupo de conmovidos francmasones que le proponían ser el presidente honorario de la sociedad por ser el miembro que más alto había llegado en la política argentina de la época, se les rió en la cara y les contestó: «Déjense de joder».

La P-2 era, sin embargo, una cosa bien distinta, no sólo por el anticomunismo que profesaba sino porque venía con capitales, influencia seria y relaciones internacionales. La combinación no podía haber sido más irresistible para militares, políticos y empresarios argentinos, ya que traía consigo la posibilidad de un lanzamiento económico relativamente independiente que marginara la detestada influencia yanqui. La P-2 era la respuesta católica europea a la ética protestante y al espíritu del capitalismo, y Gelli era una especie de Adolf Hitler tercerista de la economía mundial, que se proponía entrar violentamente en escena y pesar como un

fuerte centro de poder en momentos en que las porciones mayores de esa economía ya estaban repartidas. Característicamente, el reclutamiento de la P-2 dentro del católico Ejército Argentino iba a ser proporcionalmente mayor al logrado en las filas de la anglófila Marina, aunque Massera, transgrediendo una vez más la tradición naval, aceptó incorporarse a la logia. Algunos de los miembros del ejército que se integraron a la P-2 fueron los luego generales Roberto Viola y Guillermo Suárez Mason.

La entrada de la P-2 a la Argentina coincidió con la entrada masiva de la FIAT y otros importantes capitales italianos, y con una etapa de nueva industrialización que reflejaba los excedentes de posguerra de las principales democracias industrializadas. Sin embargo, los planes de la P-2 iban mucho más allá de la mera apertura de filiales de empresas italianas; aspiraban, nada menos, a la creación de una burguesía propia y fiel. Se hicieron fortunas de la nada; se inflaron financieramente empresas por las que nadie hubiera dado un centavo, y apellidos escasamente patricios como Bulgheroni y Macri empezaron a poblar los almanaques de Gotha de las clases dominantes argentinas. Los Bulgheroni, de hecho, construyeron Bidas, su empresa petrolera, exclusivamente a partir de fabricar las bridas necesarias para el paso del ferrocarril en el pueblo de la provincia de Santa Fe, donde tenían un almacén de ramos generales. «Viene guita, y guita de derecha, ¿vamos a decir que no?», era un latiguillo frecuente en el *establishment* de la época. Los norteamericanos, satisfechos con la filiación ideológica de la logia, dieron luz verde a la operación. El juego también involucraba a Perón, reclutado personalmente en 1970 por Gelli, quien lo acompañaría en el avión cuando hizo su histórico regreso a la Argentina en 1973. Ciertamente, la participación de Gelli, de los capitales italianos y de la P-2 fue una de las razones más importantes para que los Estados Unidos de la era de Vietnam dieran también luz verde y hasta vieran con buenos ojos el retorno a la Argentina del hombre a quien habían estigmatizado como «dictador fascista» en las décadas del 40 y el 50 y que había fundado la «Tercera posición^»), en abierto aunque hueco desafío ideológico a las políticas que en ese momento impulsaba el Departamento de Estado.

Massera, distraído masón, vio en la P-2 un modo de enriquecer todavía más su aparato de relaciones, y no lo desaprovechó. Cuando llegó a comandante de la Marina, hacía tiempo que ya era algo más importante que un simple miembro de la francmasonería argentina.

## Nueve

A mediados de 1971, el almirante Pedro Gnavi, comandante general de la Armada, descubrió que a nivel de capitanes de navío estaban desarrollándose reuniones que cuestionaban fuertemente su liderazgo, en las cuales se criticaban ciertas decisiones en cuanto al reequipamiento del arma y los contratos para la financiación y la constitución de ALUAR. El inspirador y principal gestor de estas reuniones era el ya mencionado capitán Fitte, un oficial de trayectoria impecable que se perfilaba como el líder natural de la logia de los luteranos, y que también tenía y seguiría teniendo un gran predicamento en la logia de los Omnia. Separarlo del arma era una necesidad para mantener el liderazgo y un imperativo impostergable del principio de autoridad, pero Gnavi quería hacerlo sin enfrentarse con los luteranos y los Omnia, que eran las promociones inminentes, y que de todos modos tendrían algo que decir en el examen de los contratos de ALUAR. El problema era cómo hacerlo.

Gnavi era un líder carismático dentro de la Marina. Su carisma no tenía que ver con una vocación política o con posiciones políticas fuertes, aunque dentro de la junta de comandantes era quien expresaba con mayor énfasis la posición antiperonista, y encarnaba la retaguardia del proceso de normalización institucional. Gnavi, sin embargo, era popular dentro del arma por otras dos razones más importantes en ese momento: era el almirante del reequipamiento, aquel bajo cuyo mando se habían realizado los contratos y las compras de armas que habían sacado a la Marina de su limbo técnico y operativo, y era al mismo tiempo un hombre sencillo, simpático y afable. Viejo tanguero y amigo personal del cantante Edmundo Rivero, no era nada inusual que, concluida su jornada de trabajo, el almirante partiera desde el Edificio Libertad hacia «El Viejo Almacén» en el barrio de San Telmo a escucharlo cantar y tomar con él unas copas. Tampoco era inusual que el mismo Rivero pasara a buscarlo al Edificio Libertad y se fueran juntos a cenar.

Al examinar el cuadro de opciones, la mirada de Gnavi se detuvo en Massera por dos razones. La primera, que Massera mismo era un miembro y un líder natural de la logia de los luteranos, y si Massera avanzaba, la logia no tomaría como un ataque el descabezamiento de Fitte. La segunda razón era quizá más importante. El delegado de la Marina en la Comisión Asesora del Plan Político era en ese momento el contralmirante Luis Pereyra Murray, un hombre próximo al radicalismo y a los partidos que tradicionalmente la Armada había cortejado, que al año siguiente sería promovido a vicealmirante y asignado a otro destino. Pereyra Murray no tenía contactos que valieran la pena dentro del peronismo, y la Armada había empezado tardíamente a darse cuenta de que los necesitaba, al descubrir que el peronismo como gobierno inevitable no era en sí mismo una unidad; que la operación de permitir la elevación del peronismo para bloquearle el camino a la izquierda no sería suficiente,

ya que el izquierdismo mismo estaba dentro del peronismo, y que la posición de Perón sobre el tema era, cuanto menos, equívoca.

Al mismo tiempo, Massera había extendido considerablemente su cartera de relaciones políticas. Astuto, amable y diplomático como siempre, su rostro ya había adquirido la eterna sonrisa entre afable, cómplice e irónica que lo acompañaría por el resto de su vida y que le permitiría decir las cosas más terribles como si estuviera ofreciendo un chocolate. Oficial í<sup>^</sup>damentalmente político, había anudado contactos con hombres tan influyentes y disímiles como Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organizaciones y uno de los sindicalistas más poderosos del país (el otro era José Ignacio Rucci); el abogado Ángel Federico Robledo, un miembro del *establishment* peronista con irreprochables credenciales, y Raúl Lastiri, yerno de José López Rega, el nombre del que todo el mundo hablaba, el secretario personal y manipulador principal de Perón, una suerte de rasputinesco mayordomo político que controlaba cada cosa que se hacía o dejaba de hacer en la residencia madrileña de Puerta de Hierro. Con estos contactos, Massera era el hombre más adecuado para desarrollar las inexistentes relaciones entre la Armada y su viejo enemigo mientras caía el telón final sobre la era de la Revolución Libertadora. Huérfano del apoyo de Massera y sin que los luteranos reaccionaran en su defensa, Fitte se vio obligado a hacer mutis por el foro y Gnavi pudo finalizar pacíficamente su mando. Su sucesor Carlos Coda, un comandante de transición.

A Massera el retiro de Fitte le vino como anillo al dedo. Sintió que, a partir de allí, se le abrían todas las puertas. Además, el cambio le parecía más que razonable. Nunca había querido realmente a Fitte, que era la estrella que opacaba la suya dentro de su promoción y dentro de la logia de los luteranos. Como contrapartida, sentía genuinamente por Gnavi el mismo respeto que el resto de la Marina, y estaba dispuesto a ayudarlo y ayudarse. Todavía capitán de navío, Massera ocupó funciones en el Estado Mayor General Naval, donde su posición sobre los contratos de ALUAR fue ciertamente diferente de la sostenida por Fitte. La logia no se inmutó, porque si uno de sus hombres se iba, otro aún más carismático ascendía. Y, de hecho, muchos en la logia de los luteranos habían empezado a ver ya en Massera a su líder más original e innovador y al hombre que podría realmente re proyectar a la Armada.

Como delegado en la Comisión del Plan Político, la influencia de Massera se extendió geoméricamente, porque todos los campos en los que él había cultivado influencias empezaron a actuar juntos de manera dinámica. Como la mayoría de los oficiales de la época, Massera estaba absolutamente persuadido de la inevitabilidad del regreso de Perón al poder, lo que no implicaba que sintiera afecto hacia el jefe popular ni tuviera la seguridad de que podría sostenerse. Al mismo tiempo, como las Fuerzas Armadas eran escenario de los últimos y agónicos brotes ideológicos de la Revolución Libertadora, a Massera casi le bastaba, en principio, con mostrarse mesurado y moderado para conquistar las simpatías del peronismo. Sus emisarios



personales en esa época eran los oficiales médicos De la Serna y Tallarico (este último era quien había identificado el cadáver del general Pedro E. Aramburu, asesinado por los Montoneros en 1969). A través de ellos y en sus contactos directos, Massera no perdió ocasión de mostrarse a sí mismo como el justo punto de equilibrio entre un país peronista y una Armada antiperonista, y como el almirante del diálogo, e hizo lo posible y lo imposible para que esa imagen llegara hasta el propio Perón.

A los ojos de los peronistas, la actitud de Massera era tranquilizadora porque auguraba una situación relativamente plácida en el arma más tradicionalmente antiperonista. A los ojos de la oficialidad naval, las relaciones y conductas de Massera eran algo más alarmantes, pero por otro lado constituían la actitud necesaria para reacomodarse a los tiempos. Se diría que Massera actuó en aquella época como una suerte de ministro de Relaciones Exteriores de la Marina contrarrevolucionaria ante la Argentina prerrevolucionaria.

## Diez

El ascenso de Massera a la jefatura de la Marina representa, en la microfísica del poder naval, el equivalente a un golpe de Estado. A fin de comprenderlo hay que remontarse al contexto social y político de la época.

El 11 de marzo de 1973 se había impuesto abrumadoramente en el país la fórmula electoral favorecida por Perón, integrada por Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima. Que el propio Perón no hubiera podido presentarse como candidato constituía un efecto residual de la Revolución Libertadora: el régimen de Lanusse, en parte como una frívola pulseada de voluntades y en parte como concesión a los cuadros más antiperonistas de las Fuerzas Armadas, había articulado un dispositivo por el cual Perón no podía presentarse como candidato si no estaba en el país antes de determinada fecha. El jefe popular ya había estado en la Argentina en 1972, momento en el cual había anudado contactos con el resto de las principales fuerzas políticas y había dejado al país político preparado para su regreso; sin embargo, como enfatización simbólica de su propio poder, desoyó el ultimátum para que regresase de Lanusse, quien irónicamente ahora le ordenaba que hiciera lo contrario de aquello que la Revolución Libertadora le había impuesto. Sin duda, Perón disfrutaba enormemente del espectáculo de un régimen que estaba ansioso por entregarle el poder y que cuando deseaba retirarse lo hacía produciendo una confusión, entrechocándose consigo mismo con característica torpeza militar.

El 25 de mayo de 1973 fue una fecha de máxima importancia para la formación de la conciencia militar posterior. La dictadura militar entregaba el poder al nuevo presidente, y había un clima de júbilo y movilización en las calles. El retorno de lo reprimido aparecía con una virulencia extraordinaria: la movilización portaba carteles del ERP, los Montoneros y las más diversas organizaciones izquierdistas. La consigna de la hora, que mixturaba el nacionalismo populista con la influencia del castrismo, era «La Patria Socialista». Al acto de traspaso del mando, al discurso de Cámpora en el Parlamento y luego a su mensaje líente a los enfervorizados manifestantes en Plaza de Mayo fueron invitados y colocados en un sitial de honor el presidente cubano Osvaldo Dorticós y el presidente socialdemócrata chileno Salvador Allende. La manifestación coreaba ante los militares la consigna «Se van, se van, y nunca volverán^»). Los militares, que trataban de hacer una salida ordenada de la Casa de Gobierno fueron corridos varias cuadras por la manifestación, que estuvo a punto de tomar la propia Casa Rosada. Sólo por medio de advertencias y disparos al aire evitaron que los manifestantes los sometieran a un virtual linchamiento. Veamos cómo cuenta los acontecimientos un testigo calificado desde el punto de vista de los militares participantes:

El desfile no pudo realizarse por los gravísimos desórdenes que desbordaron los cordones de prevención de la Policía Federal, los que fueron replegados a partir del mediodía, quedando los manifestantes del FREJULI dueños de la Plaza de Mayo y sus alrededores.

Las tropas que estaban formadas fueron particular blanco de ataques con insultos, proyectiles y pintadas sobre los uniformes y vehículos, con toda clase de improperios. Los conscriptos del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo recibieron órdenes de desenvainar sus sables ante el cariz de los acontecimientos; los conscriptos del Regimiento de Patricios, con sus uniformes históricos, tuvieron que blandir sus antiguas bayonetas del fusil en desuso, mientras los uniformes eran escupidos por manifestantes; los aspirantes de la Escuela de Mecánica de la Armada, que estaban formados en la Diagonal Sur, tuvieron que desplegar una formación de combate con la bayoneta calada alrededor del monumento al general Roca y volvieron en los ómnibus cantando la Marcha de la Libertad; los conscriptos de la Policía Aeronáutica, que habían recibido proyectiles de distinto tipo, durmieron esa noche con sus uniformes manchados puestos, esperando de sus oficiales una orden que nunca llegó para lavar el honor manchado ese día. En los vehículos blindados M-113 del comandante y el segundo comandante del desfile fueron pintadas leyendas ofensivas con aerosol por los manifestantes de la JP, y la formación de la mañana con que el Ejército conmemoraba el aniversario patrio en la plaza de armas del Edificio Libertador fue escenario de escaramuzas entre los suboficiales formados y los manifestantes que los agredieron de palabra y de hecho. Más de un oficial que integraba la formación sollozó en una mezcla de rabia e impotencia y uno de ellos presentó su solicitud de retiro al regresar al cuartel. —

El régimen de Lanusse, en uno de sus actos póstumos, había comprometido a los generales del Ejército en un «acta de cinco puntos» que constituían las condiciones bajo las cuales el Ejército se abstendría de intervenir en el panorama político. Los puntos más importantes eran: negativa a conceder amnistías indiscriminadas de guerrilleros; independencia garantizada del Poder Judicial; inviolabilidad de la Constitución Nacional, y rechazo a un descabezamiento total de la cúpula de las Fuerzas Armadas por medio de la designación de oficiales superiores modernos o de oficiales retirados como comandantes en jefe.

La manifestación arrasó de un plumazo con la mayoría de los «cinco puntos». Los militares recién expulsados del poder, desde sus casas o desde sedes castrenses ensombrecidas por esa pérdida, contemplaron por televisión lo que seguramente debe haberseles aparecido como una pesadilla vuelta realidad: los manifestantes reclamaban y obtenían casi de inmediato la libertad de todos los presos políticos detenidos en la cárcel de Villa Devoto, entre ellos notorios líderes guerrilleros. La liberación de los presos políticos había sido una consigna electoral de Cámpora, pero la forma en que se concretó resultó menos un acto de gobierno que un dictado de la

movilización. Integrantes de organizaciones guerrilleras se hicieron presentes en el Congreso y presionaron a los legisladores a aprobar de inmediato la amnistía total. Un legislador conservador se comunicó telefónicamente con el todavía jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Alcides López Aulicino, para preguntarle si era posible que el Ejército brindara algún tipo de seguridad o custodia a los legisladores, a lo que recibió una respuesta negativa.

La mayoría de los cuadros militares y navales que actuaron como espectadores de estos sucesos pensaron con tristeza que el «se van, se van, y nunca volverán») constituía una representación acabada de los hechos, y que la era de los gobiernos militares en Argentina había terminado para siempre. Massera no pensaba lo mismo en absoluto: creía que el gobierno peronista sería un caótico interregno civil que daría paso con el tiempo a un nuevo gobierno militar, en el cual él quería estar y desempeñar un importante papel. Al principio, pensaba eso por pura rutina y por conservadurismo, por el saber convencional sobre los ciclos civiles y militares en Argentina. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el año 1973, su impresión se iría profundizando sobre bases más reales y argumentos más sólidos.

Antes que nada, Massera vio venir la lucha entre la izquierda y la derecha del peronismo, que en los primeros meses del gobierno electo tomaría la forma de una ola de ocupaciones de edificios por parte de la primera y el creciente respaldo de Perón a la segunda. Massera también imaginó que Perón, con sus 78 años a cuestas, no duraría mucho y que, muerto el líder, no habría quién equilibrara la lucha entre tendencias. Sus premoniciones se reforzaron el 20 de junio, con la masacre desatada por la derecha peronista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sobre los miles de argentinos embanderados con la JP y los Montoneros que habían ido a recibir a Perón. Su certeza sobre la inminencia del descontrol se profundizó cuando se enteró de que Ángel F. Robledo había preguntado el 20 de junio a los comandantes generales si existía alguna posibilidad de intervención militar para contener los desórdenes, a lo que recibió una respuesta negativa. Massera vio acercarse el fantasma de una guerra civil, y al mismo tiempo pensó que las condiciones estaban maduras para que él pudiera convertirse en el gran interlocutor naval del peronismo.

El nuevo gobierno peronista había designado comandante general del Ejército al general de división Jorge Raúl Carcagno, con lo cual los «cinco puntos» de Lanusse se cumplían a medias: se evitaba el total descabezamiento de la cúpula militar, al tiempo que el oficial designado era el oficial más moderno del grado inmediatamente anterior al de teniente general. Carcagno había participado de la represión al Cordobazo, pero en años posteriores había evolucionado hacia posiciones nacionalistas y populistas afines con el peronismo del momento. También pensaba que la era de los gobiernos militares había terminado para siempre, pero iba todavía un paso más allá: suponía que el nuevo gobierno peronista constituía el portal de entrada a una era signada por la liberación nacional y el antiimperialismo

socializante. A esos fines, se abocaría a gestar lo que luego llamaría «el reencuentro del Ejército con su pueblo».

A Carcagno puede atribuírsele una forma de pensar muy rígida y una falta total de percepción de los tiempos políticos. El peronismo giraba a la derecha día a día, mientras el comandante del Ejército persistía en una postura izquierdista que quedaba crecientemente fuera de escuadra con la relación de fuerzas en el ámbito político y militar. A lo largo de su breve gestión, Carcagno produjo los siguientes hechos políticos:

- \* Al asumir el comando del Ejército, dispuso el retiro de las misiones militares de Estados Unidos y Francia del Edificio Libertador, donde habían estado emplazadas durante décadas.

- \* El 29 de mayo de 1973, en el Día del Ejército (y también aniversario del Cordobazo), pronunció un discurso en el que habló del «reencuentro del Ejército con su propio pueblo».

- \* En agosto de 1973, durante una conferencia sobre las hipótesis de conflicto que debían enfrentarse, desplegó ante quinientos oficiales de los grados más altos del Ejército un mapa de América donde los únicos países aliados de Argentina eran Chile y Perú —que en ese momento atravesaban períodos políticos nacionalistas e izquierdistas— y sostuvo que la agresión al país debía esperarse de los grandes centros del poder mundial, y sería de naturaleza económica.

- \* En septiembre encarnó junto a Perú la minoría izquierdista de la Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Caracas, y desarrolló tesis según las cuales los ejércitos no debían convertirse en sostenes de «órdenes sociales injustos». También rechazó que las «pautas de consumo» respondieran a las «pautas de producción». Al volver a la Argentina, recomendó no participar en futuras conferencias.

- \* En octubre desarrolló un operativo de obras públicas conjuntas con la Juventud Peronista y los Montoneros en sectores pobres de la provincia de Buenos Aires, popularmente conocido como «Operativo Dorrego».

A lo largo del mismo período, se registraba una escalada de violencia izquierdista, en la cual el ERP desarrolló las siguientes acciones:

- \* Junio: reclama el desmantelamiento del Ejército y la formación de milicias al estilo cubano.

- \* Agosto: mata a Hugo Tomagnini, oficial de la policía de Tucumán, y al sindicalista Marcelino Mansilla, de la Regional Mar del Plata de la Confederación

General del Trabajo.

\* Septiembre: intenta copar el Comando de Sanidad del Ejército, con la colaboración de un conscripto, y mata al teniente coronel Raúl Duarte Ardoy. Los militares, durante el velorio, retiran la corona enviada por Perón. Algunos días después, el Poder Ejecutivo Nacional ilegaliza al ERP.

\* Noviembre: secuestra y mantiene en cautiverio por largo tiempo al coronel Florencio Crespo, un oficial anodino sin ningún perfil político ni represivo.

Massera vio que Carcagno se estaba quedando sin apoyos dentro del Ejército y que el peronismo en el poder contemplaba su gestión con creciente desconfianza. El giro a la derecha del peronismo se manifestó categóricamente en julio con un virtual golpe de Estado parlamentario contra Cámpora y la convocatoria a elecciones, en las cuales se impulsó la fórmula compuesta por Perón y su mujer, que asumieron la presidencia en octubre.

Simultáneamente con la designación de Carcagno en el Ejército, el Poder Ejecutivo de la época de Cámpora había nombrado comandante general de la Armada al almirante Carlos Álvarez. La decisión carecía de todo dramatismo y sorpresa, y cumplía escrupulosamente los «cinco puntos» puesto que se trataba de un oficial antiguo que tenía la virtud adicional de ser políticamente neutro: no era más ni menos antiperonista que el promedio de la Armada, y en general era un profesionalista que sólo quería ocuparse de las cuestiones específicamente navales. Massera ironizaría después que Álvarez era una «nada», y que lo más naval que tenía era su similitud con el agua: «insípido, inodoro e incoloro».

Sin embargo, en esa época Álvarez se perfilaba como un verdadero peligro para él. El almirante había notado las ambiciones políticas y el fuerte carrerismo del joven contralmirante, y sabía que no cesaría de intrigar contra él para llegar a la jefatura del arma. Como consecuencia de esto, Álvarez planeó sacarse de encima a Massera dándole un destino en el exterior, posiblemente en la Junta Interamericana de Defensa, donde Massera ya había cumplido algunas misiones. La versión llegó a oídos de Massera, que entonces decidió que era el momento de acelerar los tiempos políticos y pasar a la ofensiva. Los planos de su ofensiva fueron el sindicalismo, el poder político y el Ejército.

El 13 de julio había caído Cámpora y había asumido interinamente la presidencia Raúl Lastiri. Antiguo contacto político de Massera, Lastiri era una de las muchas insignificancias políticas que orbitaban alrededor de Perón, en su caso por haberse casado con la hija del ascendente secretario privado del líder. El «yerno de su suegro» había demostrado inconscientemente su ilegitimidad como presidente en la ceremonia de traspaso del mando, donde fracasó varias veces en el intento de

colocarse la banda presidencial de manera correcta. Quizá su rasgo más destacado era el fervor con el que coleccionaba corbatas y el orgullo que ponía en ese hobby, a punto tal de abrir un día su guardarropa para las cámaras fotográficas de la frívola revista *Gente* y exhibirlas con deleite: «Tengo trescientas», se jactó. Entre la gente común circuló en esa época el apodo «Lastiri 300 corbatas».

Massera se dirigió en primer lugar a Lastiri, argumentando que Álvarez quería desplazarlo con el objeto de iniciar una gran purga naval antiperonista. Sostuvo que su posición dentro del arma era frágil, por las conspiraciones que Álvarez y el alto mando naval tramaban contra él. La única alternativa que quedaba era que lo ascendieran, ya que el alto mando estaba constituido por oficiales de espíritu anticuado que no comprendían la época.

Otro contacto que movilizó Massera fue el líder metalúrgico Lorenzo Miguel, pensando que éste podía acceder directamente a Perón para pedirle el ascenso. El contralmirante garantizó una fidelidad absoluta del arma al proceso constitucional y el total acatamiento de las decisiones civiles, y criticó ácidamente el izquierdismo de Carcagno, por quien además sentía una fuerte antipatía personal.

Con el Ejército, la operación sería oblicua. Massera redobló sus críticas al izquierdismo de Carcagno ante cualquiera que quisiera oírlo, y planteó ante diversas instancias del poder político que era impensable que un hombre de inclinaciones antiimperialistas estuviera al mando del Ejército en momentos en que la guerrilla del ERP estaba escalando su ofensiva militar. Sostuvo que grandes mayorías dentro del cuadro de oficiales de la Marina veían con gran antipatía esa inclinación de Carcagno —lo cual era rigurosamente cierto— y que, de acceder él a la jefatura, desarrollaría una actitud de fuerte compromiso en defensa del gobierno constitucional, que no estaba en absoluto garantizada por la aséptica prescindencia de Álvarez. Citó, como ejemplo de lo que decía, su desempeño en la Comisión del Plan Político.

La posición de Massera alcanzó estado público, con un *briefing off the record* que hizo circular en los medios periodísticos, atribuido a un «alto oficial naval» que todos en el poder político sabían quién era:

Es probable que la Marina de Guerra jamás envíe sus concriptos a limpiar las calles y paredes de ciudad alguna, pero la República puede tener la ciega seguridad de que sus hombres lucharán hasta el fin si alguien intentara burlar la voluntad popular o debilitar al poder legítimamente constituido (^) Para la Marina lo que pasó hace dieciocho años es historia, sus hombres coinciden con Perón en el sentido de que si éste es nuevamente presidente, al margen de sus aciertos o sus errores, es porque en ese tan prolongado curso del tiempo no se le dieron a la ciudadanía las satisfacciones que había conseguido durante su gestión (□) Los gobiernos militares no son una solución en ninguna parte. Quienes no conocen a la Marina no se cansan de repetir y

afirmar que somos gorilas. Nos gustaría que estén junto a nosotros el espacio de tiempo indispensable para que tomen conciencia de nuestra profunda vocación democrática y de nuestro decidido apoyo y respaldo a los gobiernos populares. Pero para la Marina no es en estos momentos lo más indispensable borrar o no su imagen de fuerza gorila, ni tampoco tratar de ganar a la población llevando a cabo acciones cívicas (^) Difícilmente haya en este lugar algún oficial que en las últimas elecciones votó a Juan Domingo Perón. Pero Perón es el presidente de la República y ninguno de ellos titubeará en el momento de dar la voz de mando para defender la voluntad popular.

Todas las características del estilo posterior de Massera aparecen planteadas en esta suerte de «clásico temprano». La alusión indirecta al enemigo: «No iremos a limpiar las calles» —en momentos en que se desplegaba el Operativo Dorrego—. La demagogia tranquilizadora: «Los gobiernos militares no son una solución^), «lo que pasó hace dieciocho años es historia». El reclamo de inocencia: «Dicen que somos gorilas». El peligroso coqueteo con la verdad: «Aquí nadie votó a Perón^). La inflexión militar: «Ciega seguridad», «luchar hasta el fin^>. El neohabla seudointelectual de un oficial que ha leído más libros que los otros: «El espacio de tiempo»; junto con un característico estilo redundante y torpe: «Repetir y afirmar», «decidido apoyo y respaldo».

Sin embargo, lo mejor de esta línea discursiva era su verosimilitud, su actitud equidistante del gorilismo y el peronismo, el hecho de que nadie podía acusar a Massera de oportunismo vulgar. Si Massera hubiera dicho que era peronista, nadie en el peronismo le habría creído, y habría perdido todo apoyo en la institución naval. Al dejar puntualizado el «no-peronismo» —ya que se descartaba totalmente el antiperonismo— Massera reafirmaba la doble posición que consideraba ventajoso mantener: para los marinos, sería quien mejor defendería su postura ante el nuevo universo político; para los peronistas, sería el garante del orden naval. Con los únicos que quedaba en posición ambigua era con los militares del Ejército: la mayoría compartía el discurso anti-Carcagno de Massera, pero se sentía resentida por el hecho de que quien lo enarbolara fuera un oficial naval.

Massera, por último, movilizó a su favor al ministro de Defensa Ángel F. Robledo, quien era menos un verdadero ministro de Defensa que un mediador entre las Fuerzas Armadas y el poder político. El contralmirante obtuvo el apoyo de Robledo, que en ese momento lo consideraba un caudillo naval y un nacionalista pragmático.

El único obstáculo que quedaba por remover era un posible reemplazo normal y puramente profesional del almirante Álvarez, que implicaría el ascenso a la comandancia general del vicealmirante Luis Pereyra Murray, a quien Massera ya había desplazado en la Comisión del Plan Político. Sin embargo, los antecedentes



políticos de Pereyra Murray sirvieron a Massera para despejar esa hipótesis, junto a cierta reputación de impredecibilidad y de irritabilidad de carácter que en esa época rodeaba a Pereyra Murray.

—General, ¿en la Armada va a nombrar a ese antiperonista? —le preguntó en ese momento a Perón uno de sus asesores.

—Vamos, en la Armada son todos antiperonistas; Masserita es el más inteligente, y no es un loco —contestó Perón.

## Once

El golpe de Estado de Massera en la Marina se consumó en diciembre de 1973 con el pase a retiro de Álvarez y siete vicealmirantes que debieron caer para que Massera pudiera subir. El discurso de despedida de Álvarez fue profesional y parco, aunque contuvo una exhortación a custodiar «el espíritu y la tradición de la Armada». El discurso de asunción de Massera aludió al «despegue hacia la Argentina que todos los hombres de bien de esta generosa Patria ambicionamos». Como nuevo jefe de Operaciones Navales fue designado el entonces contralmirante Armando Lambruschini, mientras que el nuevo jefe del Estado Mayor fue el contralmirante David De la Riva. La irregularidad del traspaso del mando quedó subrayada por el hecho de que Massera asumió la comandancia general con el grado de contralmirante, quebrando un principio natural según el cual hubiera debido tratarse de un vicealmirante promovido a almirante. Irónicamente, sería en la Marina antiperonista donde se quebraría de modo más flagrante uno de los principios establecidos en los célebres y ya olvidados «cinco puntos» de Lanusse, que establecían que el comandante de cualquiera de las Fuerzas Armadas no debería ser elegido entre oficiales modernos para evitar un descabezamiento de la cúpula militar. Cuando asumió, Massera tenía 49 años y había pasado 31 de ellos en la Marina. Su ascenso fue casi simultáneo con el descabezamiento de Carcagno en el Ejército y la designación del general Leandro E. Anaya como comandante general, y en ese momento se comentó en el Ejército que Massera había estado personalmente involucrado en la remoción de Carcagno.

Las características del mando de Massera pueden esquematizarse como una suma de combinatorias: duro hacia adentro pero blando hacia afuera; severamente disciplinado y seco con los oficiales de más jerarquía pero comprensivo y hasta cortés con los cuadros inferiores; inusualmente preocupado por lo «terrestre» para ser un marino pero con un discurso fuertemente «navalista» de cara al país. Inmediatamente después de asumir el mando, Massera produjo una hecatombe en la estructura de la fuerza: solicitó el retiro de decenas de oficiales y puso en los puestos clave sólo a hombres de su más extrema confianza, y si no liquidó durante los primeros meses a todos los que no eran de los suyos, fue por pura imposibilidad técnica. Almirantes y capitanes hacían cola en las antecámaras del despacho del nuevo comandante en el piso 14 del Edificio Libertad para ver repetirse con ellos la escena que ya conocían: Massera los recibiría, les ofrecería asiento y les diría a uno tras otro: «Lamentablemente, debo pedirle su vacante». Los marinos, que gustaban pensarse a sí mismos como caballeros, jamás se negaban al relevo. Además, sabían que si lo hacían y lograban evitarlo mediante una inverosímil apelación a la Junta de Comunicaciones, se convertirían en virtuales muertos políticos dentro de la fuerza, en cuyas sedes no les convendría mostrarse demasiado. Massera resolvió que tenía que

producir los cortes más violentos en los primeros meses, de modo de no llegar al inevitable desgaste con enemigos notorios ubicados en posiciones clave.

Los primeros tiempos de Massera al frente de la Marina se caracterizaron, pues, por las heladas brisas de terror que circulaban entre despachos, pasillos y puestos de mando; por el miedo ante el timbrar de un teléfono interno, y por un ritmo de novedades que iban produciéndose día a día, respondiendo evidentemente a planes largamente meditados, que no eran el producto de ninguna improvisación y que se remontaban por lo menos a la época del almirante Gnani. La logia de los luteranos fue ampliamente beneficiada por el ascenso de Massera, aunque éste cuidó de no rodearse por la endeble fortaleza de una secta plenipotenciaria y asimiló muchos marinos de gran capacidad sin perfiles políticos definidos. Asimismo, algunos luteranos debieron abandonar el arma, ya que la pertenencia a la logia e incluso la proximidad al comandante general no constituía un salvoconducto de indemnidad cuando estuvieran planteados cuestionamientos previos. Hubo gente en situaciones delicadas que, cuando se produjo el ascenso de Massera, exclamó con alivio: «¡Subió el Negro!», pero a quienes el Negro, en su siguiente paso, les pidió «su vacante».

El disciplinamiento feroz y obsesivo fue una de las características más pronunciadas de la comandancia de Massera. El nuevo comandante arremetió de inmediato contra cierta laxitud que había ido a instalarse en los altos mandos, y puso cabeza abajo ciertos supuestos que regían en ese momento en todas las instituciones militares del país. Uno de ellos concernía a los castigos, sobre cuya importancia la logia de los luteranos había insistido tanto en los años 40. Se suponía, por ejemplo, que a partir de cierto grado, los oficiales sólo serían penados con órdenes de arresto por causas gravísimas, y que ello prácticamente constituía un retiro por anticipado. Massera cambió profundamente esta regla no escrita, con un sistema donde la severidad se incrementaba hacia arriba, según el grado. Un contralmirante o un capitán de navío que concurrían al despacho del comandante general por motivos relativamente livianos, que en otra comandancia se habrían considerado una desprolijidad o una negligencia menor, escuchaban el reproche breve de Massera y la breve orden, emitida como si fuera un latigazo: «Tres días de arresto», «cinco días de arresto». Sin entender, el oficial balbuceaba: «Pero, señor...» Ante lo cual, Massera interrumpía, cortante: «Tres días de arresto», «cinco días de arresto». Y al oficial no le quedaba más que cuadrarse, hacer la venia y abandonar el despacho. A partir de la época de Massera, no era inusual ver a contralmirantes y capitanes de navío munidos de una valijita con los enseres más necesarios yendo a cumplir su arresto a buques de la Armada, en camarotes carcelarios donde podían o no tener televisión, y donde podían o no estar autorizados a recibir visitas de familiares. Inversamente, la compasión y comprensión de Massera crecía hacia abajo, según el grado, y no era raro que, ante meros suboficiales deslumbrados y aterrorizados por la figura de su comandante, Massera dijera cosas como «discúlpeme» o «permiso».

Sin embargo, la comandancia de Massera no sólo se distinguió en lo práctico por un aumento del disciplinarismo en relación con la importancia del castigo, sino también en relación con la magnitud del rigor. Massera subrayó violentamente la importancia del trabajo, y desempolvó rápidamente todo aquello que en épocas anteriores había quedado sumergido por la rutina de labores entendidas como burocracia. Carecía de fluidez en el trato con sus hombres, y en general prefería que existiera la mínima cantidad posible de sobreentendidos y complicidades. Veía el sobreentendido como un malentendido, ya que uno de los rasgos de su liderazgo consistía en constantes movimientos a uno y otro lado, vuelcos, cambios de lugar y descolocamientos tácticos subordinados a una estrategia general que solamente él conocía. El resultado era que bajo sumando se trabajaba frenéticamente, y quien terminaba de cumplir determinada misión nunca sabía si lo había hecho como el comandante esperaba, ni si el comandante no le encargaría acto seguido realizar exactamente lo opuesto de aquello que acababa de hacer. Antipático, frío, arbitrario y cuidadosamente calculador, Massera era el tipo de líder que no gana la adhesión fanática de sus seguidores mediante la apelación demagógica, el amiguismo o el compañerismo, sino mediante la violencia aplicada a sus hombres y el deseo de éstos de poder estar a la altura de sus exigencias. Se diría que siempre que sus subordinados pensaban que habían cumplido, él les haría sentir que había aún un escalón más alto de cumplimiento que ellos todavía no habían alcanzado. Así consolidaba su autoridad, desalentaba conspiraciones y mantenía entretenido y en constante movimiento a todo el mundo, ya que sabía que una de las claves de la disciplina era que el movimiento disciplinario no cesara nunca.

A partir de esta Armada fuertemente construida en lo interior, Massera se lanzó a proyectar la fuerza en lo exterior con movimientos decididamente heterodoxos. La desfavorable relación de fuerzas con el Ejército, sumada al habitual protagonismo político de éste, habían determinado tradicionalmente que el vínculo de la Marina con la política y con la Nación en general siguiera los ritmos de un comportamiento ciclotímico: momentos de máxima intervención e involucramiento (1945, 1955-58, 1962-63) seguidos por largos períodos de autorreclusión, introversión e introspección. Un lugar común entre los marinos de la época era decir que el arma siempre había estado «de cara al mar y de espaldas al país». Sin duda, esta expresión tenía mucho de autojustificadorio y olvidaba demasiado de lo que la Marina había hecho en la política argentina; sin embargo, también se pueden reconocer la arrogancia y las pretensiones de casta de la Armada en este estar «de espaldas al país» en una especie de torre de marfil militar cuya referencia pasaba por mirar al mar con un aristocrático desdén hacia la tierra.

Massera subvirtió completamente todo esto, en una actitud con la que no todos estuvieron de acuerdo. Una de las características técnicamente más revolucionarias de su mando fúe la decidida iniciativa de «territorializar» la fuerza, con audaces emprendimientos como la apertura de un Liceo Naval en la ultramediterránea

provincia de Salta, la organización de desfiles en la no menos mediterránea provincia de Mendoza (límitrofe con Chile) y la apertura de oficinas de reclutamiento en Córdoba, provincia que se encuentra en el exacto centro del país y carece de cualquier connotación naval. A la organización de nuevas regiones navales y la integración de provincias antes desdeñadas como terreno de reclutamiento de oficiales y suboficiales (lo que tendía a modificar las características sociológicas del marino promedio, permitiendo un número más alto de personas provenientes del interior y de las clases bajas, «negrificando» un poco la Marina, por así decirlo), Massera sumó la incorporación de la mujer a funciones específicamente militares, una actitud en la que luego sería imitado por sus colegas del Ejército y de la Fuerza Aérea. El nuevo jefe, en lo estrictamente técnico y organizativo, se comportaba dentro del arma como una suerte de nacionalista *sui generis*.

Sin embargo, esto no implicó que descuidara el mar. Junto con Gnavi, Massera fue uno de los grandes reconstructores y reequipadores de la Marina de Guerra, y la fluidez de sus relaciones con el poder político en 1973-1976 le dio la oportunidad de empezar este proceso tempranamente. Otra llave de acceso al reequipamiento fue su pertenencia a la logia P-2, que después adquiriría una importancia todavía mayor. La doctrina de equipamiento de Massera acentuaba fundamentalmente dos criterios: abandonar la vieja costumbre de identificar poderío naval con grandes buques pesados, y poner un nuevo énfasis en la adquisición de armamentos sofisticados de alta tecnología. Massera favoreció desde el comienzo la adquisición de buques rápidos, misilísticos, de manejo simple y tripulación poco numerosa, preferentemente por debajo del centenar de hombres. Al mismo tiempo, promovió la informatización y computarización acelerada de la Armada a la que se preocupó de dotar con los instrumentos tecnológicos más modernos. Mucho tiempo después, en ocasión del censo de población realizado en 1991, el Instituto Nacional de Estadística y Censos desdeñaría su propia, anticuada maquinaria de procesamiento de datos para usar los equipos de computación de la Armada que eran considerados los más modernos, rápidos y sofisticados del país.

Los cambios de filosofía naval impulsados por Massera merecen algunas reflexiones. La territorialización de la Marina, por más que constituyera una audaz movida para desestructurar su posición «de cara al mar y de espaldas al país», también resultaba en cierto modo una confesión de impotencia y mostraba el margen de error del destino trágico de Massera. Inconscientemente, en su deseo de convertirse en un gran jefe de Estado, desarrollaba conductas imitativas respecto del Ejército. Territorializar la Marina, una suerte de acto contra natura, era el intento de homologarla con aquél, de darle peso donde el peso contaba y de otorgarle una innatural presencia territorial. Sin embargo, en un plano simultáneo, la doctrina naval-territorial del almirante Massera constituía una respuesta realista, una adaptación lógica a las necesidades del Estado argentino. Massera era consciente de que los grandes conflictos se producirían en tierra y de que para las necesidades

estrictamente navales del país era torpe y contraproducente tratar de imitar el porte de las grandes armadas soviética o norteamericana. Más aún, cinco años después de la asunción de Massera como comandante general de la Armada Argentina empezaría a hablarse en el Primer Mundo de la importancia de las fuerzas de desplazamiento rápido, unidades pequeñas de cuerpos de elite, alta movilidad y extremo poder de intervención y destrucción.

## Doce

Ninguna de estas características de la gestión de Massera resulta comprensible si no se la ubica en el marco de las aspiraciones políticas a cuyo servicio estaban.

A fines de 1973 Massera había empezado a pensar en un modo de aproximación oblicuo al corazón del poder político peronista: la esposa de Perón. El «viejo gran hombre» de la política argentina había vivido muchos años enclaustrado en Madrid en el ambiente de una descompuesta corte en el exilio integrada por su esposa María Estela Martínez («Isabel») y su secretario privado, el esotérico José Eópez Rega. Cada audiencia y cada decisión se filtraba por estos tamices, sin que nunca llegara a saberse exactamente qué partía de Perón y qué partía del tamiz, lo que sin duda también era usado por el propio Perón. Incluso, en la atmósfera de encierro de Madrid, era difícil distinguir quién encerraba a quién, quién era el encerrador y quién era el encerrado. El máximo mérito de Eópez Rega había consistido en pasar de simple jardinero y sirviente privado a constructor de una fortaleza bastante hermética para proteger y dominar a Perón, sin ninguna objeción de la esposa de éste, una mujer sin luces políticas de ninguna clase. Sin embargo, había indicios de que Isabel, que había accedido a la condición de «reposeo del guerrero» desde las tablas de un varieté centroamericano de mala muerte y era constante e irreverentemente comparada con la mítica Eva Perón, estaba empezando a cansarse de permanecer en las sombras y ambicionaba tener su propio lugar. Creer que Eópez Rega dominaba Madrid es, sin duda, sobreestimar al ex cabo de policía que distribuía su tiempo entre el tráfico de influencias, la servidumbre y las operaciones de espiritismo. Con todo se las arregló para construir entorno del viejo líder una asfixiante atmósfera de maliciosa obsecuencia y traicionera fidelidad.

Massera había ascendido a la comandancia de la Marina gracias a su acceso a sectores clave del peronismo, a su relación con personajes tan disímiles y enfrentados como Eastiri, Miguel y Robledo. Ea trama del golpe contra el almirante Álvarez durante el interinato presidencial de «Eastiri 300 corbatas» había hecho necesario que «el yerno del suegro» apelara en cierto modo al suegro para favorecer a Massera, y que existiera cierto grado de empatía entre éste y Eópez Rega, al menos en apariencia. Sin embargo, la situación no podía prolongarse indefinidamente. Como la mayoría de la gente en esa época, Massera se la pasaba mirando a Perón y luego al reloj. El viejo líder no podía vivir mucho más, y quienes habían esperado escuchar de sus propios labios alguna definición sobre el futuro término de estabilidad se habían visto totalmente defraudados. Cuando le preguntaron quién sería su heredero político, el general contestó con una fórmula abstracta y vaga: «Mi único heredero es el pueblo». Y cuando se esperó la definición a partir de la identidad de su candidato a vicepresidente. Perón había designado a Isabel. El heredero político de Perón era el

pueblo, es decir nada; el heredero de la presidencia era Isabel, es decir Eópez Rega, es decir la nada vestida de policía. Massera vio aproximarse la anarquía a través del lento trabajo de la agonía en el cuerpo del formidable general Perón, una anarquía con las formas de una guerrilla creciente, un movimiento sindical descontento y la guerra civil entre las fracciones enfrentadas del peronismo.

Al mismo tiempo, el panorama político giraba aceleradamente a la derecha. Ya en septiembre de 1973, simultáneamente con la elección de Perón, los militares chilenos habían derrocado al gobierno socialista de Allende inaugurando una represión sangrienta. El intento de copamiento por el ERP del Comando de Sanidad y el inconfeso asesinato montonero de José Ignacio Rucci marcaron el punto de partida de la militarización total de la guerrilla y el comienzo de su completa ruptura con Perón. La multiplicación de las huelgas en 1973 había significado un fuerte contraste para el programa de «Pacto Social» que Perón buscaba impulsar con el apoyo de las grandes corporaciones sindicales y empresarias. A fines del mismo año hizo su primera aparición una «Alianza Anticomunista Argentina» especializada en el ataque terrorista a políticos, legisladores y sindicalistas disidentes. A comienzos de 1974 la guerrilla del ERP escaló su actividad militar con el intento de copamiento de la guarnición militar de Azul, la más importante del país, matando a un conscripto, al jefe de la unidad, coronel Camilo Gay, y a su esposa, y secuestrando a un teniente coronel. Eos militares se sorprendieron ante el alto grado de preparación de los guerrilleros.

El 1° de Mayo, Massera presenció desde las puertas del balcón de la Casa Rosada cómo los Montoneros coreaban consignas contra Isabel, Eópez Rega y el propio Perón, y éste rompía con ellos en un discurso donde los calificó de «estúpidos» e «ímberbes» y los echó de la Plaza de Mayo. A lo largo de los meses anteriores, la violencia izquierdista había comenzado a ser contestada por la violencia de las Tres A, y pocos dudaban de que esta organización era una banda parapolicial organizada por Eópez Rega, con más razón desde que éste había bloqueado en abril la designación de un general en actividad como jefe de la Policía Federal y había impuesto en su lugar a un antiguo amigo suyo, el comisario Alberto Villar. Irónicamente, Villar había comandado el grupo policial que derribó las puertas de la sede justicialista en la que estaban siendo velados los cadáveres de tres de los fusilados en Trelew. Un círculo se cerraba sobre el imposible experimento político de Perón de mantener unidos los fragmentos de su propuesta de 1973.

Massera había necesitado de la aquiescencia o por lo menos de la neutralidad de Eópez Rega para su designación como comandante general. Sin embargo, ésta era sólo una primera jugada: sabía que, en el movimiento que seguiría tras la muerte de Perón, debería desembarazarse de él. El objetivo era Isabel, a quien ya había seducido tratándola con la proverbial caballerosidad naval y dando a entender que la consideraba una gran dama.



Otro movimiento de Massera apuntaba al Ejército. Eos cuadros militares aún no habían comenzado a reponerse de las heridas sufridas en 1973, y a comienzos de 1974 su abrumadora mayoría todavía no consideraba que el Ejército debiera intervenir directamente en la lucha contra la guerrilla. A Massera le convenía sobremanera que el Ejército quisiera mantener un perfil político bajo, ya que de ese modo la Armada tenía el campo libre para ensayar su propio protagonismo. Ea Marina no tenía las dudas del Ejército sobre la participación militar en la lucha antiguerrillera, y

Massera en particular consideraba esta intervención como absolutamente inevitable y deseable, porque estaba seguro de que relanzaría a las Fuerzas Armadas como alternativa de poder.

Durante los últimos meses de vida de Perón, Massera acompañó amablemente el proceso y formuló algunas puntualizaciones tácticas. Un ejemplo: visto el deterioro de la gestión de José B. Gelbard al frente del Ministerio de Economía y el hecho de que ella dependía en gran parte de que el Pacto Social que se estaba hundiendo pudiera sostenerse, Massera decidió acompañar el giro anti- Gelbard de López Rega y del ala derecha del peronismo, y lo puso de manifiesto en una reunión del gabinete con los comandantes militares protestando contra una decisión del ministro de Economía que permitía que la ñota soviética recalara en puertos argentinos de la Patagonia. Gelbard reaccionó incómodo, mientras López Rega asentía complacido.

Al mismo tiempo, Massera se preocupaba por mostrar a los marinos el tipo de relación privilegiada que había logrado para su fuerza dentro de la estructura del poder político y cómo la estaba reinsertando en el país. Hizo, por ejemplo, distribuir gratuitamente entre los integrantes de la institución fotocopias de un artículo publicado en diciembre de 1973 por su periodista amigo Jorge Lozano, cuyo título era «La reivindicación de la Armada», y el 17 de mayo de 1974 montó una coreografía que destacara la presencia del general Perón en los actos del día de la Armada. Massera pronunció en esa ocasión un aburrido discurso de tono profesionalista donde habló de cuestiones navales, cuestiones navales y cuestiones navales. Su propia visión política se expresó a través de grajeas marginales generalmente adheridas a los finales de párrafo: «Algunos piensan que los marinos estamos ausentes de la realidad nacional [pero] nuestro país es aire, mar y tierra»; «una política de real autodeterminación nacional». Terminó con saluciones diversas, pero en un momento asoció en sus saludos «a nuestros camaradas del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina, con quienes tenemos la honrosa y enorme responsabilidad de dar seguridad y bienestar a la Nación» y a «las fuerzas de seguridad de la Gendarmería Nacional y las fuerzas de la Policía Federal y Policías Provinciales que colaboran en el resguardo de la tranquilidad y la seguridad pública». Sobre la subversión ni habló, pero sí lo hizo con respecto a las fuerzas de represión. En todo el resto mantuvo una excelente caligrafía naval: de escuchar desprevenidamente ese

discurso, uno pensaría que Massera era un oficial más obsesionado por los recursos de la Antártida o el aprovechamiento industrial del aceite de ballena que por la situación política, y ésta era precisamente la impresión que él quería dar. Asistieron Perón, Isabel, López Rega, la mayoría de los ministros y el comandante del Ejército, en un clima que trasuntaba armonía.

El único que recelaba de Massera en esa época era el general Anaya, pero esto simplemente por pura cuestión de vedettismo militar: pensaba que aquél le usurpaba el espacio. La dulzura era la tónica de las relaciones entre Massera y las principales figuras del poder, y en definitiva Massera y Anaya tendían a coincidir en cada cuestión crítica. Anaya, por ejemplo, también cuestionó a Gelbard en mayo y junio, por un problema con los salarios militares, y las esposas de los tres comandantes generales (el tercero era el de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Héctor L. Fautario) acompañaron a Isabel Perón en un viaje al exterior que se realizó este último mes.

## Trece

El 1° de julio de 1974 murió Perón. El país amaneció nublado y apesadumbrado, con un uniforme ánimo elegíaco entre los miles de argentinos que convergían hacia el centro de Buenos Aires en los ómnibus y subtes, que ese día no cobraron el pasaje, o simplemente caminando. Anaya, Massera y

Fautario se pusieron rápidamente de acuerdo en apoyar la sucesión institucional de Isabel Perón. Massera aprovechó el sepelio de Perón para recomponer relaciones y recuperar la confianza de Anaya, quien en ese momento empezaba a enfrentar cuestionamientos a su comandancia desde distintos ángulos de la vida militar y civil.

Isabel estaba aterrada, y Massera dio lo mejor de su don de gentes para hacerle saber su pena por el fallecimiento de su esposo y su compromiso personal de apoyarla en todo cuanto pudiera serle útil. La viuda de Perón era una mujer insegura y frágil, que trataba de sustituir su falta de consistencia personal y política con un creciente recurso a la asertividad y con la delegación de confianza en personalidades fuertes, como la del virtual primer ministro López Rega. Con el paso de los meses, las tensiones personales y políticas irían imprimiendo una creciente rispidez a su inestable personalidad, y sus discursos ante las cámaras o ante el pueblo sonarían con la estridencia de una tradicional maestra de escuela tratando de controlar una clase demasiado grande, con una mezcla de autoritarismo, rigidez y cursilería. Como la perseguía el fantasma de Eva Perón, intentaba parecerse a Evita pero solamente lograba imitar lo único que ella retenía de las viejas filmaciones y grabaciones de Evita: gritaba. Esa estridencia de su estilo público y la exagerada pretenciosidad de sus maneras privadas eran la marca de la violencia que le hacía la necesidad de ocupar ese lugar. Constituía, en síntesis, un personaje débil, lo cual tentó a muchos a pensar que ocupar políticamente el gobierno pasaba por ocupar espiritualmente a Isabel.

Esa estrategia de Massera consistió en una aproximación a Isabel que terminara —por así decirlo— asfixiándola. Para lograrlo, debía conservar la simpatía o por lo menos la neutralidad de José Eópez Rega, quien iniciaba un movimiento parecido pero desde el ángulo opuesto. Como éstos eran momentos de consolidación de la nueva presidenta, los gestos del comandante naval podían ser vistos como movimientos de colaboración y ayuda, sobre todo cuando la relación de fuerzas políticas dentro del Ejército se mantenía en finjo y cuando éste era objeto de una constante provocación de los guerrilleros en su intento de desestabilizar el sistema. Por todas estas razones, Massera iría desarrollando su estrategia como un juego en dos direcciones: Isabel y el Ejército. Intentaría conquistar a Isabel porque ella era el lugar vacío del poder, el poder sin política, y al Ejército porque se lo veía venir como

posible factor de poder y como eventual carta de desempate en la lenta puja con Eópez Rega por dominar a Isabel. Ea relación Massera-Isabel-Eópez Rega en el segundo semestre de 1974 puede describirse como el equivalente político de un triángulo amoroso, situación de la que sólo uno de sus miembros era plenamente consciente.

A esto se agregaron movimientos importantes de las organizaciones guerrilleras. Uno fue el paso a la clandestinidad de la organización Montoneros, anunciado el 6 de septiembre en una conferencia de prensa algo ridícula a cargo del dirigente Mario Firmenich. Una primera movida, ajena, los había expulsado de la Plaza de Mayo y del peronismo; ahora ellos completaban sus consecuencias lógicas con una movida propia que los militarizaba, los desinsertaba de sus frentes de actividad social y tendía a aislarlos en la abstracción militarista de la guerrilla urbana. Antes aun de eso, el ERP había lanzado, el 11 de agosto, dos operaciones ambiciosas: el ataque contra la Fábrica Militar de Villa María y el intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Eos militares de este último respondieron con una persecución y una batalla campal en la que fueron aislados y muertos dieciséis de los atacantes, sin que hubiera mediado una orden formal del Poder Ejecutivo Nacional. El ERP se negó a reconocer a esos dieciséis como caídos en combate y decidió iniciar una serie unilateral de represalias contra oficiales, sin que importara su rango, destino o actuación. Simultáneamente, la Alianza Anticomunista Argentina dirigida por José Eópez Rega escaló decisivamente sus acciones.

Un repaso somero de los hechos armados del período permitirá advertir rápidamente la creciente escalada militar y el modo en que ésta comienza a actuar como una especie de curiosa metáfora disociada del enfrentamiento social:

*Montoneros'*. Asesinato del dirigente radical Arturo Mor Roig y de David Kraiselburd, director del diario *El Día de La Plata*, a pocos días de la muerte de Perón Autoilegalización en septiembre, precedida por la publicación de un pormenorizado relato del asesinato del general Pedro E. Aramburu en la revista *La Causa Peronista*, lo que sería seguido en octubre por la profanación de su tumba y el secuestro de su cadáver. Asesinato en noviembre del jefe de policía Alberto Villar y su esposa, así como de numerosos activistas políticos de derecha.

*ERP'*. Acciones militares en Villa María y Catamarca, seguidas por las ejecuciones de represalia de los coroneles Jorge Grassi y Jorge Ibarzábal, el teniente coronel médico José Gardón, el teniente coronel farmacéutico Jaime Gimeno, el mayor Horacio López, los capitanes Miguel Paiva y Humberto Viola (junto al cual murió también su hija de tres años), y los tenientes Luis Brzic, Eduardo Carbajo y Juan Gambande. A esto deberá agregarse la formación en mayo de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que intentaría secesionar una parte del territorio de la provincia

de Tucumán y pedir reconocimiento internacional.

*Tres A.* Asesinato en julio del diputado Rodolfo Ortega Peña, seguido de un comunicado con «sentencias de muerte por traición a la Patria» contra los senadores radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Eduardo Angeloz, y los diputados nacionales Héctor Sandler (centroizquierda), Miguel Zabala Rodríguez y Leonardo Bettanín (JP), y Raúl Bajezman, Juan Carlos Comínguez, Jesús Mira, Juana Romero, Mariano Lorences y Héctor Portero (APR). Matanzas colectivas de cuatro militantes peronistas de La Plata y tres integrantes de la JP Quilmes, en agosto. A lo largo de septiembre, asesinatos del abogado izquierdista Alfredo Curuchet, del dirigente sindical Atibo López, de Julio Troxler (quien había sobrevivido a los fusilamientos de 1956), del profesor universitario Silvio Lrondizi y del general Carlos Prats, ex comandante de las fuerzas armadas chilenas bajo Salvador Allende, junto a su esposa.

Era como si la muerte de Perón hubiera liberado la violencia contenida bajo su liderazgo, y como si el resultado fuera una sangrienta mímica de guerra civil donde ni el Ejército ni la inmensa masa de la población tuvieran nada que hacer ni que decir. Con este marco se desarrolla la sinuosa aproximación de Massera al «entorno» de Isabel.

## Catorce

El 30 de julio, Lastiri y los titulares de los principales bloques parlamentarios propusieron ascender a Massera al grado de almirante. El procedimiento era necesario por el carácter excepcional de la situación: el marino había pasado directamente de contralmirante a comandante, lo que planteaba una disparidad con los grados de los comandantes de las otras armas (teniente general y brigadier general, respectivamente). Al mismo tiempo, el ascenso a almirante sólo podía producirse por decreto del Poder Ejecutivo si Massera friera vicealmirante, cosa que todavía no era. El ascenso fue decidido sin discusión, lo que prueba la fluidez de las relaciones de Massera con el poder político de la época. Una decisión de ese tipo no podría haberse tomado sin el asentimiento explícito de Isabel y López Rega, que lo consideraban en ese entonces un hombre de su absoluta confianza.

La situación no era la misma en relación con el Ejército. Anaya, quien en tiempos de Perón había subrayado la subordinación de su fuerza al presidente constitucional, había comenzado después a expresar posiciones diferenciadas que mostraban el creciente rol de árbitro que el Ejército estaba destinado a jugar en la nueva etapa. Además, a lo largo del segundo semestre de 1974, Anaya se convirtió en el depositario de las críticas crecientes en el Ejército a la pasividad del arma frente a la ofensiva de la guerrilla. Anaya ejercía su comando sobre un delicado equilibrio de fuerzas integrado por una masa de oficiales antiperonistas, un sector peronista vinculado a López Rega y un sector peronista cuyas relaciones con «el Brujo» irían empeorando durante la segunda mitad de 1974. Sus principales asesores eran los ascendentes generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, quienes en todo momento subrayarían la necesidad de mantener posiciones profesionalistas y moderadas.

Massera desarrolló frente al Ejército una doble actitud: solidaridad activa en el tema de la lucha antiguerrillera, acompañada por un socavamiento cauteloso de las posiciones de esa fuerza dentro de la estructura del poder. El Ejército de 1974 era un mosaico de posiciones diferentes, que irían consolidando un nuevo consenso a partir de la ofensiva de la guerrilla. Massera advirtió que esta ofensiva tenía un efecto doble: a largo plazo tendía a consolidar a los cuadros militares en una postura de participación activa en la lucha antsubversiva, pero en lo inmediato subrayaba a fuego las diferencias existentes. El nuevo almirante comenzó desde temprano a apostar todas sus cartas a la solidaridad con el Ejército en momentos en que era blanco de la ofensiva del ERP, mientras la Fuerza Aérea mantenía una posición tímida y casi prescindente que hizo pensar a muchos en algún tipo de acuerdo tácito de no agresión entre la cúpula aeronáutica y las organizaciones guerrilleras. Una carta de Massera al Ejército con motivo del asesinato del teniente coronel Gardón causó buena impresión en los cuadros militares, así como también el envío de un contralmirante en

actividad al sepelio del capitán Viola y de otro a la asunción del general Horacio Rivera como director de Fabricaciones Militares. Massera convirtió en una regla la presencia de altos oficiales navales en los actos del Ejército, y sembró de ese modo las bases para una colaboración competitiva que sería importante exactamente un año después, ya que la relación interfuerzas desde la llegada del peronismo al poder había sido prácticamente nula y estos movimientos resultaron ser los primeros intentos por restaurarla.

Al mismo tiempo, Massera no dejó de formular ninguna crítica que le permitiera opacar o deslucir el papel del Ejército en la situación. Un ejemplo fue su actitud frente a la reunión que Anaya mantuvo en agosto con Raúl Castro, vicepresidente y comandante de las fuerzas armadas de Cuba, en un encuentro que tuvo lugar en Eima para conmemorar el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. Nadie podía sospechar que Anaya simpatizara con el castrismo, pero Massera hizo saber su disidencia militar e ideológica con esa entrevista en momentos en que los cuadros del Ejército eran blanco indiscriminado de una ofensiva militar realizada por simpatizantes de la Revolución Cubana.

Sin embargo, los movimientos más importantes se produjeron respecto del entorno de Isabel. Las relaciones entre Massera, Isabel y Eópez Rega eran tan frías que en noviembre de 1974, cuando se analizó la posibilidad de ejecutar el viejo proyecto de establecer una Secretaría de Seguridad, se consideró la hipótesis de darles su titularidad a un alto oficial de la Armada en actividad y se mencionaron los nombres de los contralmirantes Eduardo Franke y Aldo Peyronel, ambos de inteligencia, quienes seguían en antigüedad a Massera. Anaya, Videla y Viola veían esta designación como la posibilidad del Ejército de compartir el desgaste de la lucha antisubversiva y aunar a las

Fuerzas Armadas en ese combate, mientras otros sectores militares planteaban que el nombramiento sobredimensionaría el papel de la Marina. El proyecto quedó en la nada porque se desechó la posibilidad de activar la Secretaría de Seguridad.

Massera había advertido el disfavor en que habían caído frente a López Rega algunos militares peronistas enquistados en la estructura del gobierno, como el general (R) Augusto Morello, secretario de Inteligencia del Estado, y el coronel Juan Carlos Corral, jefe de la Casa Militar. Las razones parecían ser la adscripción de estos oficiales a sectores del peronismo distintos del que encarnaba López Rega y el deseo de este último de hacerse cargo de todo el poder en el país, para lo cual debía captar o neutralizar al Ejército, que veía cada vez con peores ojos la campaña de terror librada por las Tres A. Así, mientras López Rega consideraba las posibilidades, el Servicio de Inteligencia Naval lanzó una campaña encubierta de desprestigio contra Morello, Corral y otros militares peronistas dentro del Ejército. Las gestiones de Massera ante el gobierno lograron en diciembre el avance de dos importantes alfiles: el

contralmirante Peyronel fue designado en la SIDE en reemplazo de Morello, y el capitán de navio Ramírez lo fue en la Casa Militar en reemplazo de Corral. El nombramiento de Peyronel tenía mucha relevancia, ya que en el proyecto de ley de seguridad que se examinaba en esa época, la SIDE presidiría todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.



## Quince

Ninguna de estas fintas tentativas tiene la espectacularidad de un hecho que se produjo a mediados de noviembre de 1974, y que sirve para graficar con precisión el tipo de maniobra a varias puntas que Massera empezaría a desarrollar a partir de allí. Al cabo de cada año naval, era práctica usual en la Marina el desarrollo de un ejercicio de Estado Mayor que consistía en la confección de un plan para recuperar las Islas Malvinas. Uno de los marinos más fervorosamente embanderado en la propuesta de recuperar las islas era el entonces capitán de navio Jorge Isaac Anaya, quien luego participaría como comandante en jefe de la Armada en la guerra de 1982. Anaya, cuyos ancestros eran bolivianos, parecía haber recibido con la sangre toda la desesperación de éstos por la falta de una salida al mar. Al mismo tiempo, poseía una personalidad obsesiva e insistente, capaz de machacar con un tema mucho tiempo después de que su interlocutor perdiera interés. Las Malvinas habían sido la obsesión de Anaya durante todo su paso por la Marina, y seguirían siéndolo.

Anaya, durante el ejercicio de fin de año, preparó un plan. Massera lo examinó, lo juzgó interesante y resolvió someterlo a consideración de la Presidenta. Varias razones convergían en esta decisión. Una era la evidente falta de rol histórico en que se debatía el gobierno peronista, que solamente parecía capaz de producir violencia indiscriminada en su intento de mantener el orden. Otro motivo era el fuerte protagonismo que la Armada Argentina tendría en la operación: se trataba de un plan de desembarco con una limitada cantidad de efectivos, correspondiente al carácter igualmente limitado de la dotación británica en las islas. (Conviene recordar que este plan se planteaba como previo a una negociación desde posiciones de fuerza.) El Ejército, bajo este esquema, no tendría papel alguno, y la Fuerza Aérea solamente una participación secundaria. Un tercer motivo era subrayar la vocación nacionalista de la Armada bajo la conducción de Massera, su alejamiento del gorilismo anglófilo de sus predecesores y su vocación de ayudar y aportar ideas al encarrilamiento del gobierno constitucional. Massera, por supuesto, no creía seriamente que el plan fuera a ser ejecutado, pero el gobierno llegó a tomarlo con la suficiente seriedad como para que el canciller Alberto Vignes lo mencionara como algo posible en una entrevista periodística. Massera se ocupó también de que su amigo Lorenzo Miguel diera al plan un espacio importante en el semanario *Primicia Argentina*, vocero de las 62 Organizaciones Peronistas. Todos estos procedimientos eran algo discutibles en su forma legal, ya que la operación teóricamente iba a tener que estar a cargo del Estado Mayor Conjunto, y éste ignoraba todo lo referido al plan. Con todo, el incidente ganó simpatías para el almirante dentro del gobierno y dentro del peronismo, pero produjo desconfianza dentro del Ejército por el ansia de protagonismo de la Armada y por el hecho de que esto se produjera de manera unilateral, sin una previa consulta interfuerzas y en momentos en que el Ejército trataba de equilibrar su propio rol en

relación con la guerrilla y con el caótico gobierno constitucional.

Al cerrar oficialmente el año naval, Massera pronunció un discurso en la base de Puerto Belgrano donde volvió a dar muestras de su doble actitud de aproximación ambivalente hacia el Ejército y hacia el gobierno. Al Ejército le dijo:

Muchos hombres del Ejército argentino, nuestro querido Ejército, y de las fuerzas de seguridad y policiales están cayendo en esta guerra, como ayer cayeron algunos de los nuestros. Podrán caer muchos más. Pero lo que nunca caerá es el espíritu que vive en todos ellos y en todos nosotros, y que ha guiado nuestro camino consagrado al servicio del país y sus instituciones.

Y hacia el gobierno dirigió el siguiente párrafo:

Imbuidos de la misión que deben cumplir nuestras Fuerzas Armadas, la Armada Argentina rechaza de plano pensamientos exóticos y pretéritos; sostiene lealmente que el gobierno de la Nación le compete a las instituciones representativas del pueblo, y es consciente de que toda alteración de este principio traería consecuencias imprevisibles, razón por la cual opondrá toda su fuerza a cualquier solución ilegítima de cambio.

Al finalizar 1974, las relaciones de Massera con Isabel y Eópez Rega rozaban una respetuosa amistad. Aquél intentó llevarlas un paso más allá con una invitación a compartir juntos la Navidad, que fue aceptada y que, en las condiciones de reciente viudez de la Presidenta, era, si no inevitable, por lo menos caballeresca. Ea Armada antiperonista terminaba así 1974 como el arma más próxima al gobierno de Isabel Perón, mientras producía hechos y gestos concretos que daban pruebas de su solidaridad con el atribulado Ejército. Era el momento del cénit de la influencia de Massera en el gobierno de Isabel, así como de la influencia en Argentina de la logia P-2.

Sucedía que Eicio Gelli también había tenido un papel importante en la definición de la sucesión constitucional, colocándose como garante e importarte contacto financiero internacional del peronismo. A lo largo del período se sucederían los viajes, misiones y gestiones de intercambio con países como Italia, Rumania y Eibia, en todos los cuales Gelli tenía intereses. Sobre Isabel Perón y su entorno no podía dejar de pesar la opinión que tenía un personaje como Gelli acerca del más importante miembro argentino de la P-2.

## Dieciséis

A partir de 1975, las relaciones de Massera con el gobierno comenzaron a deteriorarse. El motivo fue López Rega, con cuyas ambiciones de poder tropezaron las del propio Massera: López Rega había empezado a hacer sentir su presencia de modo dominante en todas las decisiones del gobierno y en prácticamente cada plano de la vida del país. Tras el asesinato del comisario general Alberto Villar, obstruyó una nueva gestión del Ejército para designar a un general como jefe de la Policía Federal, e impuso en lugar de eso a un amigo suyo, el comisario Luis Margaride. A partir de marzo de 1971 logró cerrar aún más el entorno de la Presidenta: restringió la presencia de los edecanes militares e impidió su ingreso a la residencia presidencial de Olivos. Las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades aparecieron súbitamente convertidas en autopistas sin límite de velocidad para unos sospechosos automóviles Lord Lalcon sin chapas identificatorias cuyos ocupantes viajaban con ametralladoras asomadas por las ventanillas apuntando al aire. Los Lord Lalcon se convirtieron en símbolos del terror parapolicial (luego serían adoptados por la represión en la posterior dictadura militar). Al mismo tiempo, López Rega profundizó una campaña de «peronización» —en realidad, de «lopezreguización»— del gabinete nacional, cuyo primer hito fue el reemplazo de Gelbard por el economista Alfredo Gómez Morales y que tendría un punto importante de inflexión en el reemplazo de Ángel L. Robledo por Adolfo M. Savino en el Ministerio de Defensa. El 28 de marzo de 1975 se produjo el extraño asesinato del coronel Mario Rico, destinado en la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ejército. El hecho fue ampliamente atribuido a López Rega, y el discurso del militar que despidió sus restos se abstuvo de hacer cualquier referencia a la subversión y condenó en cambio a «la violencia, del signo que sea».

Al mismo tiempo, la importancia y el peso específico del Ejército tendieron a aumentar. Los operativos policiales contra la guerrilla en Tucumán habían fracasado durante 1974, y ya para fines de ese año había coincidencias entre los cuadros militares y los funcionarios del gobierno peronista para lanzar una operación profunda del Ejército en esa provincia en el verano de 1975. El «Operativo Independencia» se inició en los primeros días de febrero de 1975 con un decreto de Isabel Perón que establecía que «el comando general del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán». El hecho ponía las relaciones entre el Ejército y el gobierno en un nuevo plano paradójico, ya que el momento de mayor acumulación de poder personal de López Rega coincidía con su necesidad de que el Ejército entrara en operaciones para cumplir la misión que «su» policía había sido incapaz de consumir con éxito. Y esto se producía en momentos en que el Ejército tenía una conducción profesionalista que

dictaba la prescindencia respecto de cualquier compromiso de tipo político con las figuras del gobierno. Consecuentemente, López Rega intentaría de allí en adelante un curioso tipo de equilibrismo: cuanto más se dependía del Ejército para garantizar la marcha de la lucha contra la subversión, más el ministro se inclinaba a tratar de imponer «su» propia visión del Ejército, que pasaba por oficiales próximos al gobierno como los generales Alberto Numa Laplane y Alberto Cáceres. El intento sería letal, ya que este tipo de oficiales constituía una minoría en el conjunto del arma, y la conducción profesionalista de Anaya, Videla y Viola configuraba un punto de equilibrio intermedio del abanico de tendencias, que operaba como un indicador general de la relación de fuerzas.

El ataque de Massera contra López Rega comenzó de modo cauteloso, porque estaba seguro de que éste caería pero ignoraba cuándo y a manos de quién. La prioridad, por lo tanto, consistía en atacarlo sin atacar a Isabel. Se trataba de una operación políticamente difícil, pero que tendía a definir los perfiles de dos planes que serían discutidos poco después en los más altos mandos navales y dentro del sector profesionalista del Ejército: un golpe legalista, de carácter parlamentario, que alejara del gobierno a la dupla terrorista Isabel-López Rega y convocara a elecciones anticipadas, y una «bordaberrización» de la Presidenta, que la dejara con los atributos del poder formal pero sin López Rega y con los comandantes de las Fuerzas Armadas como depositarios del poder real.

El rostro oval, ligeramente anodino y vulgar de López Rega se proyectaba sobre todos los ángulos de la vida argentina mientras Massera y otros factores de poder comenzaban a conspirar en pos de su desplazamiento. Con posterioridad al asesinato del coronel Rico atribuido a las Tres A, Massera impartió instrucciones precisas y secretas para que dos grupos de tareas organizados ad hoc en la estructura de la Marina rodearan el mismo día y prácticamente a la misma hora dos Falcon de la fuerza parapolicial, obligaran a sus ocupantes a bajarse, los desarmaran, dieran vuelta los Falcon y les prendieran fuego. Era una clara advertencia al superministro y un acto de solidaridad y de ejemplificación de integridad doctrinaria ante los cuadros del Ejército. A partir de ese momento, López Rega empezaría a temer cada vez más a Massera y a evitar supersticiosamente su contacto: no entendía cómo alguien podía animarse a atacar a quien hacía estremecer de terror a todo el país. El acto galvanizó las simpatías por Massera en sectores del Ejército. Y, para mantener la relación diplomática con Isabel, Massera recurrió a su propia esposa, con quien aquélla ya había compartido una Navidad y al menos un viaje al exterior junto a las esposas de los otros dos comandantes generales, todo eso organizado por el almirante.

A partir de entonces, Massera intensificó sus contactos con el Ejército. Sabía que muchos oficiales seguían con interés sus discursos y actividades, y mantenía entrevistas con algunos de ellos al margen de la conducción representada por Anaya. Algunos de los oficiales con quienes tenía buena relación eran el general Guillermo

Suárez Masón (quien además de ser masón había sido afiliado al radicalismo durante el frustrado golpe militar contra Perón en 1951), que se desempeñaba como segundo comandante de Institutos Militares, y el general Santiago Ornar Riveros, un gorila que era director de producciones de Fabricaciones Militares. Con Anaya mantenía la urdimbre de una difícil y cohibida relación interfuerzas, mientras tenía la peor de las relaciones posibles con el general Carlos Dalla Tea, que entonces era considerado el vocero de los sectores «progresistas» y proclives a un entendimiento con los Montoneros en el Ejército.

El 21 de abril de 1975, por iniciativa de Massera, el comandante de la Armada y su equivalente del Ejército mantuvieron un largo almuerzo de trabajo. Massera planteó allí su preocupación por López Rega, sosteniendo que el superministro estaba acaparando áreas de poder y de legalidad que constituían una usurpación del monopolio del poder por el Estado orgánicamente constituido. Anaya coincidió con Massera y planteó el riesgo de que una escalada de violencia como la que se estaba viviendo entre la izquierda y la derecha del peronismo constituyera el prolegómeno de una guerra civil. Massera planteó entonces que el proceso político se estaba descarrilando por la metodología caótica de la represión a la subversión, y acompañó el estado de ánimo de su colega militar al sostener que los términos de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antsubversiva se planteaban de manera ambigua, y que el gobierno no estaba dando suficiente ayuda ni sustento material para que el Ejército cumpliera la orden de «neutralizar y/o aniquilar» a la guerrilla. Sostuvo, además, que el compromiso de la Armada en este sentido era tan fuerte que él podía salir garante del envío de la Infantería de Marina a Tucumán. Muchos generales vieron después esta oferta con malos ojos porque pensaron que tendía a usurpar al Ejército el centro del escenario militar, pero Anaya la acogió favorablemente porque implicaba la generalización de las responsabilidades por unas violaciones a los derechos humanos que comenzaban a tomar estado público y que convertían al general peronista Acdel Vilas, a la sazón comandante del Operativo Independencia, en el «carnicero de Tucumán». Los dos jefes militares coincidieron entonces en la necesidad de que las Fuerzas Armadas transmitieran al gobierno en forma orgánica sus preocupaciones por determinados temas, entre los cuales adquirirían una prioridad natural la necesidad de un organismo coordinador antsubversivo que estuviera en manos de un oficial en actividad y la urgencia de que se autorizara el acceso del personal militar en su conjunto a los archivos de inteligencia de la Policía Federal, algo que no estaba permitido en ese momento.

Los contenidos del almuerzo entre Massera y Anaya pueden descomponerse analíticamente en varios estratos. Uno, el más evidente, tiene que ver con la necesidad de limitar a López Rega, ante lo cual había diferencias de profundidad en la lectura que hacían los dos comandantes: Anaya pensaba que eso significaba la extirpación de un cáncer en el aparato de gobierno y nada más; Massera, en cambio, ya había empezado a sospechar que López Rega, Isabel y el gobierno peronista componían una

asociación tautológica, y que para dentar a López Rega no habría más remedio que derrocar a Isabel, aunque no se lo dijo en estos términos a su interlocutor. El segundo punto de su propuesta podía verse nuevamente en dos profundidades de análisis distintas: la superficial y legalista, que encarnaban en ese momento Anaya, Videla y Viola, se reducía solamente a aceitar los resortes técnicos necesarios para la represión a la guerrilla, pero esos resortes también implicaban el comienzo de la articulación del aparato de inteligencia de un eventual golpe militar. Massera conocía los servicios de inteligencia desde adentro, y no pensaba en absoluto que el del Ejército fuera superior al SIN. Ocupados en especulaciones y contactos políticos, los servicios militares carecían del estricto control perimetral que solamente la policía, con su constante presencia en las calles, podía mantener. Aquí, la preocupación por Eópez Rega no pasaba tanto por las Tres A, lo cual sería una preocupación política apuntada a la ilegitimidad de la represión y a la invitación abierta a la multiplicación de la violencia que las Tres A significaban; pasaba por el hecho de que el superministro y aprendiz de brujo fundaba la mayor parte de su poder en mantener a la policía como su coto de caza privado. El Operativo Independencia había sido una importante derrota táctica de Eópez Rega, ya que fue un reconocimiento implícito de la insuficiencia de las fuerzas policiales y la necesidad de elevar al Ejército a un importante papel militar. Lo que se definió en este almuerzo fue, en síntesis, que la policía era imprescindible para la inteligencia de la represión a la subversión, pero las Fuerzas Armadas eran imprescindibles para la consumación práctica, efectiva, de esa represión. El corolario no explícito que hacía avanzar Massera a través de estos diálogos con Anaya y otros altos oficiales del Ejército era que la represión solamente podía operar bajo la jefatura autónoma de las Fuerzas Armadas, lo que constituía un recorte implícito de los poderes constitucionales del presidente civil que estuviera en funciones e implicaba recorrer los primeros tramos del camino hacia el inevitable golpe militar.

Massera también puso cuidado en retratar su creciente enemistad con Eópez Rega bajo la forma de las opiniones de un almirante democrático y profesionalista en las reuniones que mantuvo en esa época con dirigentes civiles. Algunos de los políticos con que mantuvo contacto fueron los jefes radicales Ricardo Balbín y Enrique Vanoli, con quienes se planteó la eventualidad del «golpe legalista» y se avanzó en la idea de que un líder del radicalismo podría tener un importante papel en el gobierno de transición. El razonamiento sonaba a música de sirenas para los dirigentes de la UCR, que habían aportado a Mor Roig al elenco de Eanusse para que preparara un desenlace electoral acorde con las expectativas de su partido, y cuyos únicos momentos de poder durante las dos últimas décadas se habían logrado a la sombra de la proscripción electoral y política del peronismo. Además, bajo el impacto de la ofensiva terrorista lanzada por Eópez Rega, amplios sectores civiles, incluyendo a la izquierda, comenzaron a ver en las Fuerzas Armadas un punto de legalidad y equilibrio, lo que fue decisivo para rodear de consenso el golpe que se consumaría meses después.

## Diecisiete

El 12 de mayo de 1975, Anaya fue relevado como comandante del Ejército. Un motivo determinante fue la creciente oposición a Eópez Rega dentro de la fuerza, la cual había tomado estado público con la elevación al Ministerio de Defensa de una «carpeta» informativa sobre las actividades de las Tres A que había sido preparada por Videla en su calidad de jefe del Estado Mayor. Otro motivo fueron las actividades políticas desarrolladas por generales como Videla, Viola y Suárez Masón Y otro fue el notorio desaire de Anaya al ministro de Defensa Adolfo Savino en una reunión del gabinete nacional con los tres comandantes generales, cuando el comandante del Ejército se negó a responder a una pregunta de la Presidenta sobre la marcha del Ministerio de Defensa. Cuando, encima de todo esto, empezó a circular la versión de que Anaya reemplazaría a Savino en el Ministerio de Defensa, éste se sintió herido en su honor y pidió a Isabel y Eópez Rega que relevaran al comandante del Ejército. Sin embargo, todo esto no era más que la trama anecdótica de la remoción de Anaya, ya que la razón de fondo que subyacía en todos estos incidentes era que Eópez Rega había fracasado en sus reiterados intentos de cooptar al Ejército a su proyecto, y que incluso la Armada, que meses atrás era el arma más próxima al gobierno isabelino-lopezreguista, se le estaba escapando aceleradamente de las manos.

Massera recibió la defenestración de Anaya con alborozo, no tanto porque envidiara su lugar sino porque profundizaba una crisis larvada dentro del Ejército y al mismo tiempo ponía al gobierno en una situación de virtual confrontación con las Fuerzas Armadas. Con el Ejército en ebullición y la Fuerza Aérea en una virtual abstención respecto de todo lo que tuviera que ver con lo político, la Armada quedaba como la única fuerza sólida e integral, con un proyecto propio y con una estructura de mandos cuyas fisuras tenían más que ver con cuestiones de personalidad y filosofías de largo plazo que con el calidoscopio permanentemente cambiante de la realidad nacional. La destitución de Anaya también cerraba el arco de la confrontación de los sectores civiles con Eópez Rega, ya que Anaya, Videla (y su famosa carpeta) y Viola se habían convertido en referentes militares de todos los sectores civiles no armados que se oponían a Eópez Rega. El cambio, en realidad, resultaba tácitamente tan importante para Massera que sectores del Ejército empezaron a sospechar que el almirante había tenido algo que ver en el incidente, ante lo cual Massera decidió realizar el 3 de junio una despedida formal al comandante saliente a la que fueron invitados los generales en actividad destinados en Buenos Aires. Además, si bien a Massera le convenía el estado de convulsión dentro del Ejército, sabía que esto solamente subía las apuestas: si el gobierno peronista lograba estabilizarse de algún modo, recomponiendo de esa forma la disciplina del Ejército, el próximo candidato al descabezamiento sería él.

El nombramiento de Alberto Numa Eaplane como sucesor de Anaya le gustó a Massera todavía más que la destitución de aquél. Un general mediocre, retacón y

carente de todo carisma, subía por elección directa de Eópez Rega, cuestionado por la mayoría de los cuadros del Ejército. El nuevo comandante se distinguió como portavoz de la tesis del «profesionalismo integrado», consustanciado con las decisiones del gobierno, en discrepancia con el «profesionalismo prescindente» que alentaban Videla y Viola.

Para Massera, lo bello de la situación era que Eópez Rega consumaba la división del Ejército por él, ya que Eaplane defendería de modo extremadamente pusilánime la promoción de los generales que más prestigio tenían dentro del Ejército, creando dudas sobre su liderazgo en la estructura de mandos. El resultado más negativo de las trabajosas gestiones de Eaplane ante el poder político fue que Videla quedó sin destino y en situación de disponibilidad, cuando era el general con más consenso del arma.

Muy poco después de la asunción de Eaplane, el comandante del Ejército y el de la Marina mantuvieron una conversación durante los actos del día de la Armada. Una semana después volvieron a reunirse y coincidieron en la necesidad de limitar a Eópez Rega y mejorar los salarios militares. El hecho de que Eaplane mismo no fuera un lopezreguista, sino sólo el general más próximo al gobierno dentro de un Ejército que había pasado virtualmente a la oposición, alentó todavía más a Massera. Sin embargo, aún faltaba un acto de desempate, una circunstancia que terminara de desestabilizar al gobierno aún más que la guerrilla y el fermento militar: Eópez Rega lo produciría, quince días más tarde, con la designación de Celestino Rodrigo como ministro de Economía.



## Dieciocho

El nombramiento de Rodrigo constituyó el punto de ruptura del gobierno con el poder sindical, y se lo puede ver en retrospectiva como el acto que abrió el curso del futuro golpe militar. El nuevo ministro desechó todo gradualismo en el reacomodamiento económico tras el fallido pacto social e introdujo una política de shock que devaluó la moneda en un 100 por ciento, elevó el precio de los combustibles en un 175 por ciento y subió violentamente las tarifas públicas. Al mismo tiempo intentó poner un techo del 45 por ciento a los aumentos de salarios, lo que fue rechazado por los sindicalistas. Las negociaciones entre cámaras patronales y sindicatos condujeron a porcentajes de aumento mucho más altos (entre el 90 por ciento y el 130 por ciento para los principales gremios) y desataron una fenomenal movilización a Plaza de Mayo para que Isabel homologara los convenios y se desprendiera de Rodrigo y Eópez Rega. Se trataba del primer enfrentamiento masivo de los trabajadores con el peronismo, del principio del fin del peronismo y de la disolución en lucha de clases de la vieja alianza de clases.

El 28 de junio, Isabel, rodeada por su gabinete, Eastiri y los comandantes de las tres armas vestidos de civil, rechazó en un mensaje televisivo la homologación de los convenios y avanzó un aumento de salarios de sólo el 50 por ciento. Esa posición de Massera en ese cuadro era algo equívoca, ya que horas antes había hablado con Eorenzo Miguel sobre el derrocamiento de Eópez Rega, algo que aquél deseaba pero no sabía cómo lograr. El problema residía en que derrocar a Eópez Rega implicaba movilizar a la población contra el gobierno, y la cúpula sindical de entonces temía que la movilización se le escapara de las manos y cayera bajo la dirección de los sectores más izquierdistas. Massera, por su parte, no tenía ese dilema, ya que estaba seguro de que la cúpula sindical no lograría constituir un factor de estabilización y de que el derrocamiento de Eópez Rega abriría el camino para un avance decisivo de la corporación militar sobre el poder, aunque aún no se supiera claramente si la opción elegida sería golpe legalista, bordaberrización o dictadura militar desembozada. Todavía, sin embargo, hacía buena letra.

Esa noche de ese mismo sábado, Massera compartió una comida social con Eópez Rega, dos generales, un brigadier y unas pocas personas más. El superministro comía nerviosamente después de los tumultuosos acontecimientos de la semana. Casi se diría que veía una conspiración al acecho en cualquier rincón, y hacía lo posible por serenarse. Massera lo contemplaba furtivamente a través de la mesa: consideraba que Eópez Rega era un muerto político, y estaba ansioso por ser él quien le disparara el tiro de gracia, porque de ese modo podría aparecer frente a la opinión pública como el marino que lo había derrocado. Aunque la ocasión se mostraba remisa, Massera confiaba en sus poderes de improvisación teatral y en su talento para la apuesta

riesgosa.

A los postres, los comensales se trasladaron a otra sala, donde fueron servidos licores, café y cigarros. Massera, que no fumaba desde sus años de cadete, apenas podía soportar el humo, pero resistió la situación con estoicismo y con la ayuda de un vaso de whisky. A su vez, López Rega trasegaba nerviosamente sucesivas copas de Carlos I, su coñac predilecto. A la quinta o sexta copa, los ojos del ministro se nublaron y su conversación empezó a deslizarse hacia la torpeza oral y el balbuceo. Massera simulaba prestar una atención distraída mientras calculaba rápidamente los próximos pasos. El ministro seguía hablando, y los militares, escuchando. Al llegar a cierto punto, López Rega estaba considerablemente más distendido y comenzó a referirse a las Fuerzas Armadas. Sus comentarios no excedían los de una disertación cualquiera, pero en un momento citó frases de Perón sobre la subordinación militar que podían interpretarse como ofensivas. Massera no perdió la oportunidad y superimprimió al balbuceo monótono de López Rega un insulto que hizo temblar los cristales de la sala. Todos lo miraron con sorpresa. Massera se incorporó y amenazó a gritos al ministro, que parecía encogerse temerosamente en su sillón. El almirante dio entonces media vuelta y salió del lugar dando un portazo.

El arrebato de Massera no había sido tal: había estado buscando una oportunidad y la había encontrado. Hacía tiempo que se había acostumbrado a graduar sus emociones, y a mantenerse interiormente frío en los momentos en que su conducta exterior evidenciaba el mayor dramatismo. Serenamente, hizo entonces lo que tenía calculado: convocó para el día siguiente al Consejo de Almirantes de la Armada para comunicarles la gravedad de lo sucedido y pedirles su respaldo, e hizo que un día después sus emisarios contactaran al periodista de *La Opinión* Heriberto Kahn para que diera su versión de los hechos en el matutino dirigido por Jacobo Timerman. El Consejo de Almirantes le dio su apoyo, ya que consideraban a López Rega un enemigo común más allá de las diferencias internas, y el artículo de Kahn se publicó el 1° de julio, lo cual disgustó al general Laplane por el plano subalterno en que lo dejaba la pelea de Massera con López Rega.

A partir de ese momento, Massera empezó a actuar como gestor activo del desplazamiento de López Rega, como coordinador de la opinión militar y como vehículo de las exigencias de que éste renunciara ante Isabel. Los días 2 y 8 de julio, gestó dos reuniones de cuatro almirantes con cuatro generales para recomponer la relación con Numa Laplane, a quien también consideraba un muerto político. La exactitud de los diagnósticos de Massera no excluía margen de error personal, que todavía permitiera a López Rega desplazarlo. Pero la crisis se desarrollaba con furor, y cada día el ministro quedaba en una posición más débil. Durante quince días Massera gestó la participación de los comandantes en tres reuniones de gabinete —que aprovechó en su totalidad para demandar él mismo la renuncia de López Rega— y la realización de diez reuniones de los comandantes generales solos (en el

primer semestre del año se habían reunido únicamente dos veces y en todo 1974 ninguna). Massera aparecía allí como el líder natural y el más dinámico de los tres, en contraste con el comando condicionado de Laplane y una actitud ambigua y vacilante por parte de la Fuerza Aérea. Al mismo tiempo, organizó el rechazo a todas las ofertas que hacía el poder civil para dividirlos, planteando que la prioridad era conservar la cohesión interfuerzas. Cuando el gobierno cedió ante los sindicatos y López Rega debió abandonar el país el 15 de julio, Massera consideró que los objetivos de la escena en la comida del 28 de junio estaban cumplidos, y hasta hizo llegar a Lorenzo Miguel su felicitación por el triunfo conseguido a dos bandas. Todo esto era acompañado por la multiplicación de las atenciones hacia Isabel Perón, que seguía recibiendo los ramos de flores y las cajas de bombones del comandante general de la Armada, acompañadas por respetuosos y reiterados ofrecimientos de asesoría y apoyo.

## Diecinueve

El acto siguiente de Massera fue su participación en la crisis militar que se desencadenó en agosto. Isabel, aislada y crecientemente aterrorizada ante la ola de conflictos sindicales y la pérdida de autoridad de su gobierno, aceptó la sugerencia de algunos de sus asesores de designar como ministro del Interior al coronel en actividad Vicente Damasco. Teóricamente, la designación de Damasco debía profundizar la «integración» y el compromiso del Ejército con los destinos del gobierno peronista; en realidad ocurrió exactamente lo opuesto, primero porque el Ejército no estaba dispuesto a integrarse ni a comprometerse con un gobierno en descomposición, y segundo porque la designación de un oficial en actividad implicaba un compromiso político y una situación reglamentaria confusa. Esa situación no se desarrolló en términos de un rechazo cerrado, sino de una pulseada entre la minoría «integrada» favorecida por el poder político y la mayoría «prescindente» representada por Videla y Viola.

Massera, coherente con el estilo de confrontación directa que había desarrollado en la crisis de Eópez Rega, hizo saber de inmediato que la posición de la Marina era de rechazo a la designación de Damasco, sobre la base de que su desempeño dentro del gobierno comprometía a todas las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, intensificó sus contactos con el Ejército y particularmente con Videla y Viola, a quienes veía como los jefes naturales de la institución rival y caracterizaba como personajes relativamente débiles, sumisos y profesionalistas, que él podría dominar. Videla, en particular, le parecía un general extremadamente conveniente para sus planes: militante católico sin ninguna inclinación política, hombre de familia y casi completamente carente de amistades civiles, era el tipo de profesional neutral que más le convenía tener como par. Y en una reunión que mantuvo con Isabel Perón en los días de tensión y negociaciones de la crisis militar, Massera se adelantó a los hechos y le dijo que Videla era el único general que los militares del Ejército aceptarían como comandante, y que cualquier otra movida sería extremadamente irritativa para un cuerpo de oficiales ya tensionados por la falta de efectividad de Eaplana, por el episodio de Damasco y por la constante presión de la lucha antisubversiva. También sostuvo que era el único oficial en quien se podía confiar desde el punto de vista de la estabilidad del gobierno, ya que carecía de ambiciones políticas. Acto seguido, hizo conocer esta recomendación a Videla y a todos los oficiales del Ejército con los que mantenía contacto.

Esa crisis militar culminó con el relevo de Eaplana y la designación de Videla, un personaje introvertido y silencioso que sólo meses atrás había estado en disponibilidad, y a quien la mayoría de los invitados a la celebración del día del Ejército en mayo de 1975 había dejado solo en un rincón del salón, sin que nadie fuera

a saludarlo ni le prestara atención.

Ea situación se estabilizaba en el Ejército mientras se desestabilizaba en el país. Ea unidad de las Fuerzas Armadas crecía día tras día mientras los partidos civiles, los sindicatos y las confederaciones empresarias eran incapaces de llegar a ningún punto de acuerdo que permitiera recuperar la estabilidad. Al mismo tiempo, la marea revolucionaria de las movilizaciones de junio y julio contra Eópez Rega y Rodrigo refluía, y la sustitución guerrillera de la movilización de masas empezaba a recuperar espacio.

También tendía a crecer la conciencia de la importancia de otra sustitución: la del poder político por las Fuerzas Armadas. La impresión se iría profundizando durante los meses siguientes, corriendo progresivamente el telón sobre el escenario de la Argentina prerrevolucionaria.

# ÁREA RESTRINGIDA

Al promediar octubre de 1975, discretos carteles de apariencia inofensiva con la inscripción «ÁREA RESTRINGIDAS») empezaron a aparecer en sectores del Edificio Libertad. El detalle apenas llamó la atención de quienes frecuentaban la sede del Comando de la Armada Argentina, una mole arquitectónica enclavada en los accesos al puerto de Buenos Aires que parece querer avanzar sobre su propio frente y asfixiar al visitante aprisionándolo entre las proyecciones hacia afuera de las alas izquierda y derecha del edificio, la alta y profusa escalinata y los abundantes accesos para automóviles que convergen pródigamente hacia las puertas centrales. 1975 era un año de ofensiva guerrillera, y las disposiciones especiales de seguridad comenzaban a aplicarse en todos lados. Además, ¿qué podía haber de raro en un área restringida, en un país y en un momento donde todas las áreas eran restringidas, según de qué áreas se tratara y a qué lugar perteneciese cada uno?

Simultáneamente con este cambio de señalización, otra dependencia de la Marina, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), situada a unos cinco kilómetros del Edificio Libertad, comenzaba a ser objeto de modificaciones operativas, arquitectónicas y hasta anímicas. El ruido de los serruchos, los martillazos, el movimiento de cemento, ladrillos y otros materiales de construcción empezaron a ser una realidad crecientemente ostensible, mientras el lugar se iba impregnando de una atmósfera plagada de actitudes conspirativas, donde una conversación podía ser rápidamente silenciada o visiblemente cambiada de rumbo ante la aparición de un extraño. Los subordinados comenzaban a sentirse bajo una especial mirada de escrutinio de sus jefes, y el aire se enrarecía incluso entre aquellos que compartían el mismo grado y nivel de autoridad, al ignorar cada uno qué sabía el otro del cambio que se estaba gestando, que podía tratarse tanto del derrocamiento de la Presidenta de la Nación como de la destitución del comandante general de la Armada. El lugar vivía la atmósfera conspirativa de las grandes sedes militares en momentos de cambios, decisiones y transiciones trascendentes. También empezaba a dibujarse una línea difícil de decodificar entre un «ellos» y un «nosotros», entre quienes estaban iniciados en el secreto y quienes no lo estaban. Oficiales extraños al lugar empezaban a aparecer de visita y a hacer de su presencia una realidad cada vez más frecuente, entre guiños sobreentendidos y susurros. Cualquier interrogación inocente sobre el tema sería recibida con la más ingenua, desconcertada y encantadora de las sonrisas, pero al que había formulado la pregunta le quedaría la sospecha de que había caído en desfavor con los patrocinantes del cambio por el mero hecho de haber preguntado. Mejor era no hacerlo.

Los dos cambios eran partes del mismo movimiento, que se originaba en la profunda convicción de Massera de que la caída del gobierno de Isabel Perón constituía una necesidad absoluta para derrotar a la guerrilla y estabilizar al país, y en

su deseo de que la Marina de Guerra estuviera proyectada desde el comienzo en los primeros planos de la operación. Ya durante la gestión de Anaya, Massera había empezado a enviar al teatro de operaciones antiguerrilleras en Tucumán pequeñas y casi secretas dotaciones de Infantería de Marina, primero en calidad de observadores y auxiliares logísticos y de inteligencia y luego en el papel de combatientes plenos. Y si había logrado representar con verosimilitud ante Isabel y López Rega el papel de aliado armado más próximo al gobierno peronista, había sido en función del propio historial derechista y antiperonista de la Marina de Guerra. La gracia del movimiento que Massera ejecutaba es que todo era verdad: no era tanto que él y la Marina se estuvieran aproximando al peronismo como que Isabel y López Rega se estaban aproximando a él y a la Marina y que el papel naval de *ultima ratio* militar de derecha ante los cambios empezaba a encontrar en el gobierno peronista el lugar de una fuerza de defensa inconvencible y pura. Al querer abrazar la normalidad, Isabel y López Rega se encontraban con una Marina esquiva y espuria, que en el fondo seguía siendo tan derechista como antes pero ahora con un definido proyecto de poder. Y Massera, en sus reuniones privadas con Isabel y los miembros más caracterizados de su entorno, no vacilaría en hablar de la falta de confiabilidad política del Ejército, citando como demostración la existencia en su seno de sectores proclives a un entendimiento con la izquierda peronista y la realización del Operativo Dorrego.

Ahora, sin embargo, la historia se reorganizaba con un nuevo sentido, que no consistía tanto en un reencuentro con la filiación del pasado como en el entronque con movimientos futuros. A partir de septiembre de 1975, Massera se había convertido en uno de los defensores más insistentes de la necesidad de que Isabel Perón, en compañía de Delia Esther Vieyra y las esposas de los otros dos comandantes, se tomara unas largas vacaciones en Córdoba. La idea consistía en elevar entonces a Ítalo Luder, el acartonado peronista que se desempeñaba como presidente provisional del Senado, a la presidencia de la Nación, y determinar a partir de allí el agotamiento de la última alternativa civil al desencadenamiento del golpe militar. Las perspectivas desde las que se llegaba a este punto eran naturalmente divergentes. Los partidos civiles no peronistas y el sector del peronismo que en ese momento se denominó «antiverticalismo» (en el cual revistaba, entre otros, el diputado Sobrino Aranda, viejo amigo de Massera) veían en las largas vacaciones de Isabel el modo de eludir elegantemente el golpe de Estado. El Ejército, indeciso sobre la toma del poder, lo veía como un camino de resolución de conflicto que debía explorarse. Los Montoneros buscaban el colapso del gobierno y el golpe militar suponiendo que ello empujaría a las masas a sumarse a la «guerra revolucionaria». Y Massera lo veía del mismo modo que los Montoneros, sólo que al revés: como la forma de que todas las alternativas civiles terminaran de agotarse para que él pudiera llegar al primer plano. Massera era consciente de que un golpe de Estado parlamentario como el encabezado por Ítalo Luder implicaba una decisiva marginación del poder sindical dentro del aparato del Estado, y también sabía que el poder sindical no había sido suficientemente cercenado como para que su marginación pudiera completarse con éxito, con lo que el golpe

parlamentario iba a tener que retroceder muy poco después de haberse iniciado, planteando la necesidad irrevocable de la toma del poder por las Fuerzas Armadas.

La opción entre Isabel y Luder, así como la divisoria planteada en ese momento entre verticalistas y antiverticalistas, constituía enmascaramientos de operaciones cuyos referentes eran otros, y más poderosos. Los sindicalistas «verticalistas» como Lorenzo Miguel hacían profesión de fidelidad y «acatamiento» a Isabel, pero se trataba de «acatamiento» a una presidenta vaciada, impopular y sin poder tras el alejamiento de López Rega: la apoyaban porque era débil y porque ellos podrían dominar «su» gobierno, con lo cual el verticalismo sólo se acataba a sí mismo. Simultáneamente, los antiverticalistas sabían que la elevación de Luder constituía un mero dispositivo parlamentario que se podía revertir en cualquier momento si Isabel decidía terminar sus vacaciones y reasumir el mando. Y como Luder carecía de otra base de poder que no fuera el generalizado rechazo nacional al desgobierno de Isabel, todo movimiento en su favor necesariamente debía tener su referencia en las Fuerzas Armadas, la corporación político-militar que se había convertido en depositaria de aquel descontento. Detrás del verticalismo estaba la corporación sindical; detrás del antiverticalismo, la corporación militar. Luder advertía esto a la perfección durante los primeros días de su presidencia interina, cuando se abocó de inmediato a tratar de lograr un acuerdo con las Fuerzas Armadas.

Videla, Massera y Fautario, en sucesivas reuniones con Luder, plantearon una oferta que éste no podía rechazar: total prescindencia militar respecto de los actos del poder político y absoluta autonomía, en todo el país y en todos los ámbitos, en el terreno de la lucha contra la subversión. El acuerdo fue inmediato, derivando en la redacción del decreto 2.772, que constituía la extensión a escala nacional de las órdenes de Isabel para iniciar el Operativo Independencia. Este decreto, que diez años después sería objeto de una crucial controversia sobre responsabilidades militares y civiles, establecía que «las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país». También determinaba que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia, la Secretaría de Informaciones del Estado, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedaban «funcionalmente afectados al Consejo de Defensa a los fines de la lucha contra la subversión» y que los gobiernos provinciales debían proveer «los medios policiales y penitenciarios que le sean requeridos por el citado Consejo». Solamente faltaba la oportunidad de divulgar a la opinión pública estas disposiciones. Los Montoneros dieron el pretexto con el intento de copamiento del Regimiento 29 de Infantería de Monte de la provincia de Formosa, que causó al Ejército trece muertos, diez de ellos simples conscriptos. A los pocos días, murieron otros cinco conscriptos en un enfrentamiento a campo abierto con el ERP en Tucumán.



La aproximación entre militares y sociedad civil se dinamizaba cada vez más, convergiendo no sólo en que la lucha de las Fuerzas Armadas era necesaria sino también en la necesidad de «aniquilar» a la subversión. El decreto de Luder así como la posterior decisión de noviembre del Poder Ejecutivo Nacional de declarar que todo el territorio nacional era escenario de la confrontación pueden ser vistos como los últimos actos posibles de un gobierno: son los protocolos de la transferencia del poder. Ya que el poder que se disputaba en ese momento en la Argentina era físico, objetivo y territorial, y el grado de poder que cada protagonista pudiera ejercer estaba en directa proporción con la cantidad y calidad de territorio bajo su control.

## Uno

Los enigmáticos cartelitos de «ÁREA RESTRINGIDA<sup>^</sup>) designaban las oficinas del Edificio Libertad donde estaba preparándose el golpe militar, particularmente las del crítico «Gabinete de Asuntos Especiales» del almirante Massera, un organismo político *ad hoc* que había sido creado en vísperas del enfrentamiento de éste con López Rega y que quedaría consolidado como institución regular después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Solamente se podía acceder al «área restringida» por pertenencia o por determinadas contraseñas y tarjetas con determinados códigos. Se anticipaba así una modalidad que alcanzaría extraordinaria difusión en los años posteriores, cuando la totalidad del país sería dividida en parcelas similarmente restringidas y una codificación rigurosa empezaría a dominar las entradas y salidas de los edificios públicos.

La planificación del golpe y del gobierno militar posterior en la Armada estuvo a cargo del contralmirante Eduardo Fracassi, a la sazón secretario general y principal operador político de Massera, y de los capitanes de navío que formaban parte del Gabinete de Asuntos Especiales: José L. Segade (otro importante operador político del comandante), Guillermo Arguedas (infante, experto en inteligencia y operador de la relación de Massera con el sindicalismo), Joaquín Gómez y Carlos Bonino, entre otros. La planificación del golpe contemplaba dos momentos: la organización de derrocamiento de Isabel propiamente dicho, y los movimientos militares que era necesario ejecutar directamente después, que incluían el secuestro, tortura y asesinato de opositores. La planificación del gobierno militar implicaba determinar su estructura operativa. Massera tenía ideas bien definidas sobre todos estos puntos, lo que lo convirtió en el principal protagonista de esta planificación ante un Ejército que en octubre de 1975 todavía dudaba acerca de la necesidad de tomar el poder y una Fuerza Aérea que recién se había incorporado a la lucha antisubversiva.

Massera sostenía que el futuro gobierno militar debía evitar una repetición de la experiencia vivida con Onganía: la usurpación masiva del poder por un autócrata mientras las Fuerzas Armadas permanecían al margen de las decisiones de gobierno. Su propuesta implicaba, por el contrario, que el gobierno estuviera directamente en manos de las Fuerzas Armadas, con un presidente que fuera solamente el ejecutor de las decisiones de los tres comandantes en jefe, constituidos en Junta Militar. Vista desde esta óptica, la jefatura del Estado correspondería en realidad a la Junta Militar, mientras el presidente sería su mera representación protocolar. Según este enfoque, éste debería ser elegido por la Junta Militar, y podía ser un civil o un militar en retiro. Varias razones confluían en esta perspectiva. Una era que la subordinación del presidente no podía garantizarse si se trataba de un oficial en actividad, y menos si se trataba de uno que dirigiera una de las fuerzas y fuera integrante de la Junta Militar,

lo que lo convertiría naturalmente en un *primus inter pares*. Otro motivo era el deseo de Massera de aumentar el poder de la Marina de Guerra en el futuro gobierno más allá de lo que la verdadera relación de fuerzas expresaba: en 1976 el Ejército tenía 80.000 hombres, la Armada 30.000 y la Fuerza Aérea 18.000, pero en este esquema cada fuerza detentaba un pulcro y abstracto 33 por ciento del poder de decisión del gobierno. Una tercera razón consistía en que este diseño evitaba el desgaste directo de la Junta como órgano de gobierno, trasladando ese desgaste al presidente.

La posición de Massera puede resumirse así: si existía un «cuarto hombre» en el papel de presidente que ejecutara las decisiones de la Junta, la Marina tendría para sí un 33 por ciento de la jefatura del Estado, pero si el presidente era miembro de la Junta Militar (y, previsiblemente, comandante en jefe del Ejército) toda pretensión de que el poder se distribuyera equitativamente entre las tres fuerzas se volvía un chiste. Vista críticamente, la propuesta tenía el defecto de politizar hasta la médula de los huesos el cuerpo militar y de destruir la unidad y unicidad del Estado fragmentándolo en tres pedazos abstractos: leyendo las propuestas de la Marina no se sabe si la Junta Militar es un Parlamento, un triunvirato monárquico o un consejo de notables. Al mismo tiempo, y por una especie de involuntaria ley de compensaciones, la privación de la democracia para el país aparecía acompañada por la vigencia de una cuasi democracia de «un arma-un voto» y «un voto- equis oficiales» para las Fuerzas Armadas, lo que sólo podía tener efectos disolventes en la disciplina y la cadena de mandos, que de este modo tendía a invertirse y a convertirse en una polea de transmisión de demandas y opiniones hacia arriba. Pero todavía era demasiado temprano para pensar en esto.

Massera también tenía ideas claramente definidas sobre la represión militar a implementar después del golpe. Los extraños movimientos, cambios y secretos que empezaban a ocurrir en octubre de 1975 en la ESMA tenían que ver con la constitución del primer «Grupo de Tareas» (GT) para la lucha antisubversiva de la Marina de Guerra. Massera reprodujo la estructura celular de las organizaciones guerrilleras: el Grupo de Tareas estaría dividido en tres áreas —Operaciones, Logística e Inteligencia— que no tendrían relación entre sí, y cuyos planteles no comerían juntos ni compartirían el casino de oficiales. El GT actuaría como un organismo de tres compartimientos estancos, que solamente se vincularían a través de la común subordinación a un jefe, quien a su vez estaría en línea de mando directa con el comandante en jefe de la Armada.

El tipo de organización elegido respondía a lo que Massera consideraba las necesidades y los límites de la actividad represiva. Al igual que Videla, el almirante estaba convencido de la necesidad de exterminar físicamente y no meramente desarmar a los integrantes de las organizaciones guerrilleras. Había llegado a esta convicción tras observar lo ocurrido con los presos políticos de la época de Lanusse, que una vez puestos en libertad por el gobierno de Cámpora habían vuelto a tomar las

armas y a participar en acciones ofensivas. El mejor guerrillero era el guerrillero muerto. Sin embargo, esto planteaba serios problemas de naturaleza diplomática, ya que los servicios de inteligencia militar estimaban que los combatientes guerrilleros en actividad eran entre 5.000 y 10.000, y existía el antecedente del aislamiento internacional en que había quedado Chile después de la represión abierta comandada por la dictadura del general Augusto Pinochet. Se podía fusilar a 100 o 200 guerrilleros, no a 5.000. Massera sumaba a esta preocupación su sensibilidad respecto de la diplomacia política del Vaticano: «Con el Papa, no se puede fusilar», fue uno de sus latiguillos durante la organización del golpe. La frase no tenía que ver con la imperceptible fe religiosa de Massera, sino con el cuadro de situación que preveía: la Argentina era un país fuertemente católico; el Papa seguramente habría reclamado amnistías y el cese de los fusilamientos masivos, y poner al Papa en esa situación implicaba convertir a la poderosa Iglesia argentina, que en ese momento revistaba abrumadoramente a favor del golpe, en el partido de oposición. Las Fuerzas Armadas no debían cometer la torpeza de sacarse de encima el gobierno ineficaz de Isabel y la tutela módica de los partidos políticos sólo para enfrentarse a un enemigo mayor, que las aventajaba infinitamente en legitimidad. La represión, por todas estas razones, debía tener una naturaleza fundamentalmente clandestina, una decisión que se tomó entre septiembre y octubre.

Al mismo tiempo, Massera intentaba ampliar tramo a tramo su participación en el golpe por medio de una escalada en la participación de la Marina en la lucha antiguerrillera y de una constante acentuación de la postura naval a favor de un endurecimiento de la represión. El mayor salto en la participación en la guerra se produjo en Tucumán, con el incremento del número de infantes de Marina que iban a participar del Operativo Independencia, que en ese momento estaba a cargo del general peronista de derecha Acdel Vilas, con quien Massera trazaría un productivo contacto. La decisión no sólo respondía a la necesidad de ensanchar y desplegar el potencial operativo de la Armada, sino también al deseo de los marinos más jóvenes, en particular los cadetes, de estar en la escena de los hechos. El fino oído de Massera detectó rápidamente esa inquietud y su don de liderazgo se abocó de inmediato a satisfacerla, como forma de ampliar su propio prestigio. A partir de mediados de año el almirante había establecido el principio de que los oficiales de la Marina destinados a Tucumán rotaran cada cuatro meses, lo que aportaba varias ventajas: 1) se ampliaba al máximo el número de oficiales que participaban en la guerra antisubversiva, comprometiéndolos a todos en la lucha; 2) se reducía al mínimo la posibilidad de que posteriormente surgieran grietas personales y profesionales entre ellos por causa de reproches y jactancias del tipo de «Yo estuve, vos no»; 3) se intentaba evitar las lesiones psicológicas derivadas de los brutales procedimientos de arresto, tortura y exterminio con los que se procedía a combatir a la guerrilla. El compromiso de Massera con el Operativo Independencia llegó a su pico en noviembre de 1975. Ese mismo mes la

Armada también realizó en Bahía Blanca un operativo conjunto con el V Cuerpo de Ejército, la Policía Provincial y la Prefectura Naval.

La participación concreta en la lucha antisubversiva era subrayada permanentemente por Massera en discursos, apariciones públicas y entrevistas periodísticas, junto con sus expresiones de respeto y solidaridad con el Ejército. Vaya como ejemplo lo que declaró a un periodista el 20 de noviembre, en el día de la Infantería de Marina:

Ya hace tiempo que la Armada está tomando medidas y actuando directamente contra la subversión, como lo seguirá haciendo permanentemente. Quizá de una manera no tan elocuente ni brillante como lo está haciendo el Ejército en Tucumán, sino de una forma más silenciosa. Con esto no quiero poner en duda la acción del Ejército, que pondero y felicito, porque realmente en Tucumán está haciendo una cosa muy positiva (^) Cuando se inició la operación ofrecí al comandante general del Ejército toda la colaboración de cualquier tipo que necesitara de la Armada. Lógicamente es su jurisdicción y yo cumpla los requerimientos que el comandante del Ejército me formula (^) Nuestra idea es complementar de alguna manera los cuadros del Ejército en lo que nos soliciten, sin pretender avasallar la jurisdicción, que es de ellos.

Hay dos cosas que saltan a la vista en este mensaje: el constante intento de tranquilizar y agradar al Ejército sobre la participación naval en el Operativo (que se había vuelto una cuestión de vedetismo militar) y el uso recurrente de la palabra «jurisdicción^), que de algún modo prenunciaba las parcelaciones del país en zonas de poder que aparecerían después.

A lo largo de noviembre, Massera no desperdició ocasión de señalar el entusiasmo antisubversivo de la Armada; el 26, al clausurar el Congreso Odontológico de la fuerza; el 27, al conmemorar el aniversario de la Aviación Naval en Punta Indio; el 28, al presidir la formación de finalización del Año Naval, donde además sostuvo que «la cohesión de las Fuerzas Armadas en su conjunto es una garantía para la Nación^) y advirtió que «a pesar del período de receso, la Armada toda continuará la tarea de adoctrinamiento de su personal y de su capacitación antisubversiva». Las expresiones de Massera eran repetidas simultáneamente por todos los oficiales de la plana mayor naval: el vicealmirante Armando Lambruschini, en el aniversario de la creación del Estado Mayor General de la Armada; el contralmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, también en ocasión del día de la Armada, y los capitanes de navío James Whammond, jefe de la Fuerza Aeronaval N° 2, al entregar los sables a los suboficiales, y Humberto Barbuzzi, comandante del portaaviones *25 de Mayo*.

El doble esfuerzo, militar y retórico, por subrayar la lucha antisubversiva, el

papel de la Armada y la solidaridad con el Ejército constituía el intento de Massera de ganarse por anticipado el 33 por ciento de poder que le correspondía en su proyecto, y más aún. Sin embargo, tenía también otra motivación, aunque secundaria: la necesidad de mantener el arma en movimiento hacia adelante tras la aparición de las primeras fisuras en su liderazgo, después de dos años tumultuosos como comandante general.

## Dos

La designación de Massera, la hecatombe que produjo cuando llegó al mando naval, su subversión de la ideología aislacionista y navalista de la Marina, su acercamiento a Isabel y López Rega y el papel protagónico que había asumido en el derrocamiento de este último fueron actitudes heterodoxas que no habían dejado de operar incisiones profundas en la conciencia de sí del aparato naval. Cuando convocó al Consejo de Almirantes tras la ruptura con López Rega, la actitud de muchos de sus integrantes expresó que consideraban que Massera era el mal menor, López Rega el enemigo principal, y la ruptura una prueba de que aquél se encaminaba por fin por la buena senda. El estilo autocrático del almirante y los momentos de inseguridad y confrontación respecto de la sociedad civil que la Marina había vivido en esos meses fueron motivos suficientes de unificación y emblocamiento, pero una vez superada esa confrontación, había muchos sectores que querían evolucionar hacia una perspectiva más ortodoxa y normal del modo en que la Marina se imaginaba a sí misma. Massera llegaba así al mejor momento de su influencia sobre el Ejército y lo que restaba de poder civil enfrentando cuestionamientos y desgastes en la estructura de su propia fuerza, y sin otra alternativa que volver a movilizar al cuerpo en una actitud de guerra para que los miembros disidentes no pudieran escapar a su control. En realidad, sentía un despectivo y condescendiente aprecio por los sectores que se le oponían, considerándolos versiones legítimas pero anticuadas del imaginario naval, pero al mismo tiempo temía que esos sectores pudieran llegar a tener la ventaja del opositor en una eventual crisis política, y concluía que debía desplazarlos antes de emprender su movimiento político más importante.

Las principales figuras de oposición a Massera dentro de la Marina eran los contralmirantes Mendía y Gómez Beret. Contrariamente a lo que ocurría, había ocurrido y seguiría ocurriendo en el Ejército, las diferencias tomaban como referencia más las inclinaciones culturales, psicológicas y hasta personales que la dialéctica de la lucha dentro de la sociedad civil. Mendía era un gorila clásico de la Revolución Libertadora, casi un posgorila de extrema dureza, a tal punto que su discurso del día de la Armada de 1975 superó en intransigencia programática al del propio Massera. No le gustaban nada los compromisos del comandante general con el poder político peronista, y sobre todo abominaba del protagonismo político que Massera había conferido a la Armada. Constituía el arquetipo de oficial naval que veía en Rojas la cristalización del ideal programático de la Marina, la síntesis de su pureza ideológica y de su trágica carencia de poder. Acusaba a Massera de personalismo, y tenía cierta corriente de seguidores entre los oficiales superiores que no habían formado parte de la logia de los luteranos, los prescindentes y los que demandaban un estilo más clásico de mando. Gómez Beret era el exacto opuesto de Mendía. Teñido de cierto nacionalismo de derecha, este oficial contaba entre sus principales seguidores al

capitán de navío Enrique Montemayor, hermano del periodista Mariano Montemayor (que había sido uno de los redactores, junto con el profesor y también periodista Mariano Grondona, del Comunicado 150 de Campo de Mayo, donde el bando azul, en lucha contra los colorados, daba a conocer su posición ante la sociedad civil). Gómez Beret era también un gorila pero su gorilismo, a diferencia del de Mendía, no abrevaba en el liberalismo utópico; sus fuentes estaban en ese nacionalismo oligárquico restringido del que habían surgido tan tempranas expresiones de la posición política naval frente al país como los almirantes Domecq García y O'Connor, fundadores de la Liga Patriótica durante la Semana Trágica. Coherentemente, al tiempo que capitalizaba gran parte del deseo de la oficialidad subalterna y la suboficialidad de participar en la lucha contra la subversión, mantenía una actitud de orgullosa prescindencia y arrogante purismo en sus relaciones de cara al poder civil. Gómez Beret también rechazaba profundamente el personalismo y, como se llegó a decir en alusión indirecta al régimen de Stalin, el «culto a la personalidad» de Massera. Sin duda en esto confluían restos de la vieja educación liberal de la Marina y el rechazo hacia la promiscuidad con el peronismo. Pero también contaba el hecho de que tanto Mendía como Gómez Beret estaban entre los «expulsados del Paraíso» por obra de quienes constituían el poder emergente dentro del arma. Aunque los damnificados podían detentar posiciones clave de poder, éstas carecían de referencia en los altos mandos del arma y en el firmamento político argentino, aunque sí la tenían en la masa de oficiales subalternos y oficiales. Sin embargo, el disgusto con el personalismo de Massera constituiría un fuerte fermento del ambiguo rechazo que le profesarían los miembros de promociones posteriores, muy mezclado, por supuesto, con una envidia que habría derivado en sentido contrario, hacia una posición admirativa, si Massera hubiera triunfado.

El modo en que Massera se desembarazó de Mendía y de Gómez Beret constituye probablemente un epifenómeno menor de la historia de la época, pero ayuda a determinar características importantes del personaje. Él había ascendido a posiciones prominentes dentro del arma gracias a que el almirante Gnavi había forzado el retiro del capitán Fitte, que era el líder natural de la logia de los luteranos. El almirante Carlos Álvarez había tratado, a su vez, de desplazar a Massera buscándole un lugar como uno de los delegados a la Junta Interamericana de Defensa. Inconscientemente, éste repetiría ese mecanismo. A fines de 1975, cuando su propia posición estaba garantizada por su liderazgo en la planificación del golpe, la simpatía del Ejército y la postura movilizadora en pose de combate y subordinación de la propia Marina de Guerra, destinó a Mendía a la grisura académica de la Junta Interamericana de Defensa, y lo pasó a retiro poco después. También a fines de 1975, cuando el destino de Massera estaba asegurado en la inminente e inevitable Junta Militar, pasó a retiro al contralmirante Gómez Beret, el único que podía disputarle el mando y la solidaridad de los cuadros inferiores de la Armada.

Afrontaba, como Gnavi con Fitte hacía cuatro años, un problema difícil: ¿cómo



retirar a Gómez Beret sin quedar enfrentado con quienes lo seguían? Se acordó de su propia elevación a la Comisión del Plan Político y actuó en consecuencia: inmediatamente cooptó al capitán de navío Montemayor dentro del Gabinete de Asuntos Especiales, planteándole implícitamente una suerte de imposible elección entre su vocación naval y su rechazo por Massera. El dilema era efectivamente imposible de resolver y en el fondo inexistente, porque un oficial de la época se preparaba pura y exclusivamente para ser oficial y estaba imbuido de un profundo desprecio hacia el civil que había sido y que había sido destruido (porque a un cadáver sólo es posible despreciarlo, tanto más si es el propio); puesto ante esa opción, el oficial naval elegiría seguir siendo oficial naval.

Montemayor eligió seguir siendo el oficial naval Montemayor, incorporarse al Gabinete de Asuntos Especiales y hasta atraer desde allí a su hermano, ese nacionalista de derecha de múltiples lecturas. Aún más, con el tiempo Montemayor pasaría a ser un masserista converso y llegaría a ser designado jefe del Gabinete de Asuntos Especiales. Massera aprendió con este experimento una regla que siempre respetaría: vencer al enemigo dividiéndolo, produciendo su defenestración en un punto para luego, en otro punto, cooptarlo desde su derrota. La máxima expresión de esa regla se daría pocos años después, con los montoneros prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada.

## Tres

A mediados de diciembre se produjo la insurrección del brigadier Jesús Orlando Capellini, quien se había propuesto movilizar el golpe de Estado desde la Fuerza Aérea. Los verdaderos fines del *putsch* habían sido lograr la destitución de la ineficaz y vacilante cúpula aeronáutica de la época y ganar participación de la Fuerza Aérea en la inminente dictadura militar. Ambos objetivos se cumplieron con creces: Fautario cayó de la jefatura del arma, y en su lugar fue designado el brigadier Orlando Ramón Agosti, un gorila claramente identificado contra el gobierno peronista, y la Fuerza Aérea obtendría ese 33 por ciento teórico del poder por el que tan duramente estaba forcejeando Massera. Además, en una demostración de la extrema debilidad del poder civil, Capellini no fue pasado a retiro después de su intento de golpe. El gobierno constitucional vivía sus últimos plazos, y así lo hizo saber Videla en una arenga pronunciada en Tucumán en la Navidad de 1975, que la mayoría del país interpretó como un ultimátum de 90 días al descompuesto gobierno peronista. Claramente, la corporación militar dirigía desde hacía tiempo sus propios destinos, y la historia de este período sólo adquiriría significado en la forma de los sucesivos hitos de su avance: defenestración de Numa Laplane, ascenso de Videla, orden de «aniquilamiento» de la subversión, extensión de la lucha antissubversiva a todo el territorio nacional y, finalmente, completa autonomía operativa de las fuerzas armadas respecto del poder político en la lucha contra la subversión, estadio al que se llegó entre enero y marzo de 1976.

A partir de 1976 los carteles de «ÁREA RESTRINGIDA») desaparecieron de los lugares más visibles del Edificio Libertad, pero sólo para instalarse en un amplio sector del piso 14, donde tenía su despacho el comandante general y su Gabinete de Asuntos Especiales. El edificio, que por dentro era sólo una vasta y laberíntica pajarrera de pasillos y oficinas, en el estilo de un edificio público de cualquier parte del mundo, comenzó a poblarse de señales indicativas y prohibitivas, de tarjetas identificatorias para pasar a cada sector y de guardias armados con libros de entradas y salidas frente a cada acceso. La compartimentación del poder se reproduciría a sí misma hasta el infinito años más tarde, y el Proceso de Reorganización Nacional (como se autodesignó la dictadura que sobrevino) multiplicaría las señales autoritarias y discriminativas en todas partes, llegando incluso a plantar en las calles carteles indicativos de las paradas de ómnibus con la expresión «Zona de detención»), que bien podía asociarse a la «detención») policial y militar e interpretarse como un fallido del inconsciente del poder. Similares expresiones del contenido latente de la época aparecerían en la publicidad, donde la propaganda de un insecticida podía llegar a decir que el producto publicitado «los mata, bien muertos».

«Área restringida», sin embargo, significaba en esa época algo distinto de lo

que había significado en el pasado inmediato, de lo que significarían los divertidos fallidos al estilo de «Zona de detención») y de lo que representaría la inminente compartimentación general del poder. «Área restringida» eran los lugares del Edificio Libertad donde los delegados de las tres armas llevaban a cabo la planificación del golpe. La decisión de realizar estas sesiones en la sede naval surgió de un cálculo sencillo: si alguien quería averiguar las intenciones golpistas de las Fuerzas Armadas, lo más obvio era monitorear las sedes de los Comandos en Jefe del Ejército, principal fuerza militar, o de la Fuerza Aérea, escenario del único arrebato golpista destacado de los últimos meses. La Armada era el lugar más inocente, y por eso Massera logró convencer a los comandantes de las otras dos fuerzas de que, por razones de practicidad, el golpe debería ser planificado dentro de «su territorio». El Ejército y la Fuerza Aérea encontraron en el Edificio Libertad las coartadas y el subterfugio convenientes. Los delegados del Ejército a las sesiones de planificación fueron los coroneles Llamil Reston, Miguel Mallea Gil, Antonio Llamas, el teniente coronel auditor Carlos Cerdá y Raúl Ortiz, todos integrantes de la Secretaría General del Ejército bajo el mando del general Carlos Dalla Tea, cuyas relaciones con Massera seguían siendo virtualmente inexistentes. El equipo de la Fuerza Aérea estaba dirigido por el brigadier Basilio Lami Dozo. Los jefes de cada delegación formaron a su vez lo que se dio en llamar Equipos de Compatibilización Interfuerzas, que actuarían como correa de transmisión con los jefes de Estado Mayor y los comandantes que, a medida que expiraban los plazos del golpe, comenzarían a reunirse varias veces por día.

Los equipos de las tres armas coincidieron rápidamente en los principios generales: el movimiento militar debía abocarse a resolver de una vez y para siempre los problemas argentinos — incluyendo en una primera etapa el exterminio físico de la subversión—, y «no iba a ser un golpe más» sino «el golpe que acabara con todos los golpes» y permitiera pasar a sucesivas etapas de democracia restringida, en el estilo de la exitosa dictadura tecnocrático-desarrollista de Brasil. La fecha y el contenido de dichas etapas serían vistos más adelante, ya que no habría «plazos sino objetivos». La tarea, por su magnitud, requería que se involucraran directamente las Fuerzas Armadas en su totalidad e instaurar una suerte de centralismo democrático militar *sui generis* al autorizar la libertad de discusión entre las armas pero al mismo tiempo imponer una absoluta unidad de acción.

La mayoría de los planteos de Massera en estas reuniones fueron escuchados, atendidos y aprobados, por lo menos en el papel de las que se llamaron «Actas del Proceso de Reorganización Nacional». La propuesta de elevar a la Junta Militar al rango de órgano supremo del Estado fue defendida sobre la base de garantizar el involucramiento pleno de las Fuerzas Armadas en el Proceso, de lo cual se desprendía un presidente subordinado y la suspensión del artículo de la Constitución Nacional que establecía que el presidente de la República era automáticamente el comandante en jefe de las tres Fuerzas Armadas. A partir del esquema masseriano, cada

comandante retendría el mando de su propia fuerza, que solamente acataría decisiones externas si venían aprobadas por la Junta Militar.

Otro principio defendido por Massera, que se desprendía del primer principio general, implicaba la adjudicación más estricta posible del 33 por ciento del poder para cada una de las tres armas. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrían el status de pares no solamente en la Junta Militar, sino también en la Comisión de Asesoramiento Legislativo (un seudoparlamento militar para estudiar la creación de nuevas leyes), se repartirían los cargos en el gabinete, los medios de difusión estatizados y las intervenciones a sindicatos. Conduciendo este principio al barroquismo, cada ministerio a cargo de un arma tendría delegados militares observadores de las otras dos, y en caso de que el ministro fuera un civil, habría observadores militares de las tres. La medida constituía la receta para un seguro caos administrativo, pero en esa época se la defendió como vía para garantizar la incorruptibilidad del sistema. Todo el mundo debería vigilar a todo el mundo, y todos encerrar a todos.

Massera regateó y obtuvo los ministerios de Relaciones Exteriores y de Bienestar Social. Veía esos lugares como plazas clave para desarrollar su política: la política exterior sería feudo del arma más naturalmente orientada hacia el exterior, y Massera esperaba que el dominio de Bienestar Social pudiera darle con el tiempo un equivalente del ascendiente popular que había llegado a tener Perón en 1945 desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El reparto de las gobernaciones de provincia fue un reflejo más fiel de la verdadera relación de fuerzas: un 50 por ciento fue al Ejército, un 23 por ciento a la Marina y un 17 por ciento a la Fuerza Aérea. Como conjunto, las Fuerzas Armadas tomaron para sí un 58 por ciento de los cargos públicos.

El status de paridad entre las tres fuerzas valdría también para la lucha antisubversiva, con áreas meticulosamente repartidas. A lo largo de esas negociaciones, el Ejército tendió a privilegiar como zonas de lucha antisubversiva la provincia de Tucumán, el cinturón industrial del Gran Buenos Aires y los grandes centros industriales de las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde habían emergido líderes obreros marxistas. Massera, por el contrario, subrayó la importancia de la Capital Federal como escenario de guerrilla urbana, y obtuvo gran parte de los derechos operativos en ella para el

Grupo de Tareas 3.3.2 (GT 3.3.2), que en ese momento realizaba su entrenamiento y sus primeras compilaciones de inteligencia militar en la ESMA. Las razones para que Massera privilegiara la Capital eran dos: 1) constituía el lugar donde más «vacantes» en la lucha antisubversiva había para la Marina, que de otra manera habría debido confinarse en sus bases de Mar del Plata, Punta Indio y Puerto Belgrano (lugar este último donde, además, habría sufrido la competencia del V Cuerpo de

Ejército), y 2) Massera era consciente de que, en el esquema de gobierno que se avecinaba, las cuotas de poder de cada uno tenderían a homologarse con la proporción de represión que ejecutara: la estructura del Estado iba a aparecer fracturada en tres, y el poder se identificaría crecientemente con el porcentaje de territorio y de terror bajo control de cada tercio. Atentados posteriores en la Capital vindicarían luego esta posición, que en su momento fue vista como puro deseo de Massera de aumentar su poder.

Un movimiento, la restricción de áreas y la división de las funciones, consagraba una visión del poder fragmentado en compartimientos estancos. Otro movimiento, la construcción secreta y clandestina de los grupos de tareas, completaba la operatividad práctica de aquella decisión. Solamente quedaba por resolver la designación del presidente y la integración de la Junta, un tema donde la facilidad del acuerdo abstracto chocaba con crecientes dificultades de concreción.

Massera había logrado el apoyo de la Fuerza Aérea para sus postulados de un triunvirato con igualdad de derechos, la proporción del 33 por ciento del poder para cada fuerza y la propuesta de que el presidente fuera un oficial retirado subordinado a la Junta. También había logrado el apoyo de sectores importantes del Ejército, que explicaban la conveniencia de adherir a ese esquema en función de dos razones fundamentales: 1) garantizar la cohesión y el involucramiento pleno de las tres fuerzas en el proceso que estaba por abrirse, y 2) situar en un plano difuminado el protagonismo político de hecho del Ejército, convirtiendo al presidente en un testaferrero de las decisiones que teóricamente serían tomadas dentro de una Junta donde todos eran iguales, pero algunos eran más iguales que otros.

A lo largo de enero de 1976, fueron analizadas en el Ejército varias opciones, pero sin llegar a una conclusión. Algunas consideraban el pase a retiro de Videla y su designación como presidente, lo que tenía la desventaja de dejar a la fuerza sin su caudillo militar más obvio. Otras señalaron la posibilidad de retirar y designar como presidente a Viola, pero eso tendía a despojar a Videla de su mejor asesor político y a colocar a Viola en una incómoda posición de subordinación respecto de decisiones adoptadas sin su consentimiento. Una tercera línea de especulación pasaba por designar como presidente al general retirado Ibérico Manuel Saint Jean, quien tenía un creciente ascendiente sobre la oficialidad militar de línea dura. (Saint Jean, al solicitar su pase a retiro en 1972 sobre la base de su disconformidad con los «cinco puntos» de Lanusse, había provocado uno de los equívocos retrospectivamente más grotescos de la historia reciente. El general pidió el retiro porque le parecía que los «cinco puntos» eran demasiado laxos y alentaban excesivamente el retorno del «tirano prófugo» al poder, pero los montoneros, que carecían de información suficiente, tomaron su actitud como la de un general progresista que rechazaba el condicionamiento al pueblo, y destacaron elogiosamente su figura en un número de la revista *El Descamisado*, su órgano periodístico de entonces.)

La discusión no avanzaba, el tiempo apremiaba y Massera estaba ansioso por concretar en los hechos lo que había logrado en los papeles. Su propia opción para la presidencia era Videla, precisamente porque dejaba al Ejército sin su jefe natural, porque lo consideraba una personalidad dócil, fácil de manejar, y también porque pensaba que en su ausencia el Ejército tendería a dividirse entre los sectores moderados y los sectores duros, sin encontrar un punto de equilibrio interno.

Massera apostaba a que la Marina fuera ese punto de equilibrio, constituyéndose de hecho en un partido-bisagra dentro del arco de tendencias de un virtual parlamento en armas.

Naturalmente, no esperaba que los militares del Ejército aceptaran esta pérdida de poder de una manera tan simple, pero apostaba al enorme aura y prestigio que la palabra «presidente» tenía en un país de presidencias tradicionalmente fuertes. Con un movimiento —los documentos adicionales del Proceso— Massera restaba importancia a la presidencia; con otro —su apelación al instinto político de los generales— la restauraba mágicamente, la pulía, le daba brillo y la ponía en exhibición para el consumo de su auditorio en el Ejército, fuera éste simpatizante suyo o no, y estuviera o no en actividad. La verdad es que sus propias ideas tendían a ser ambiguas sobre el tema, porque pensaba que una presidencia desarrollada con talento, con carisma, con audacia y con éxito podría eventualmente superar los condicionamientos de la Junta Militar, independizarse de los comandantes en jefe y plantear sus propias reglas de juego, del mismo modo en que Perón, un oscuro coronel de segunda línea política, había logrado convertirse en el emergente más espectacular de la Revolución de 1943.

Justamente porque pensaba que Videla carecía de talento, carisma, audacia, capacidad de éxito y liderazgo civil, el jefe del Ejército era la opción que había elegido para que desempeñara el cargo de presidente, en un esquema donde la Junta Militar formalmente reinaba pero no gobernaba, pero donde la autoridad de cada cargo iba a estar menos determinada por las reglas que por el uso que se hiciera de ellas. Massera decidió entonces halagar a quien él consideraba una nulidad vestida de teniente general, y el 16 de febrero de 1976 se lo planteó sin rodeos:

—Vos tenés que ser el presidente —le dijo.

Videla produjo una respuesta inesperada pero predecible, y también desoladora en su falta de toda vocación personal de poder:

—El Ejército no acepta que el presidente pueda ser otro que su comandante en jefe.

Aquí se juntaban varias cosas. Videla carecía por completo de ambiciones políticas personales, pero era el líder militar que había conducido el avance de su

corporación sobre el poder civil y la persona en quien la mayoría de los cuadros militares del momento veía un referente prudente y sabio. Al mismo tiempo, el Ejército era la fuerza que más decisivamente había tomado sobre sus espaldas la lucha contra la subversión, y quien más había reprimido más poder tenía. Massera esperaba dividir al Ejército a través del desdoblamiento de las funciones de comandante en jefe y presidente, pero no había un líder militar natural que pudiera reemplazar a Videla. Al mismo tiempo, el pase a retiro de un oficial superior para ocupar la presidencia habría originado una situación ambigua, porque Videla seguiría siendo claramente el jefe de ese oficial superior, cuya presidencia sería puramente decorativa. El Ejército y su comandante, de este modo, seguirían teniendo el poder real.

Al cabo de una serie de reuniones con Agosti, y con éste y Videla, Massera pactó la aceptación de la doble función de aquél en carácter de «situación excepcional» que sería resuelta en el futuro. Videla entraba a la Junta como *primus inter pares*, y en cierto modo no habría podido ser de otra manera.

## Cuatro

El 24 de marzo de 1976 el gobierno de Isabel Perón terminó de caer, la Junta Militar se hizo cargo del poder, y la sensación en el país fue de generalizado alivio. La ex Presidenta fue arrestada y recluida en El Messidor, una dependencia del Ejército en el sur del país. El golpe militar era inevitable, porque el gobierno no lograba estabilizarse y el descontento obrero amenazaba con hacer volar por los aires a la dirigencia sindical peronista y reemplazarla con una conducción de izquierda. Si se esperaba hasta las elecciones, o incluso si se las adelantaba —como hizo a fines de 1975 el gobierno de Isabel, en una maniobra para desalentar el golpe— quedaban pocas dudas de que el peronismo volvería a ganar, el líder radical moderado Ricardo Balbín quedaría nuevamente en un segundo puesto y había posibilidades de que la izquierda avanzara.

El golpe contó con el generalizado apoyo de la sociedad civil. La Unión Cívica Radical había declarado poco antes que «no tenía soluciones» para la crisis institucional. El Partido Comunista había propuesto un «gabinete cívico-militar». La derecha había reclamado el golpe en forma consistente, y hasta el diario de izquierda moderada *La Opinión* se había convertido en un vehículo del golpismo en su vertiente más esclarecida. Incluso los montoneros habían apostado a que el golpe «profundizara las contradicciones» en la Argentina, y el último acto miliar importante del ERP había sido un violento, masivo, frustrado y provocativo ataque en diciembre contra el Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, producido exactamente un día después del intento de insurrección de Capellini. El ataque del ERP cohesionó todavía más la unidad del frente militar, al perfilar con nitidez nuevamente la figura del enemigo. Los únicos disconformes por el golpe de marzo de 1976 fueron los peronistas, pero incluso en este sector se registraron alivios: el diputado Sobrino Aranda había renunciado poco antes a su banca por entender que el proceso institucional estaba «agotado», una impresión coincidente con la que dominaba en ese momento en el sector «antiverticalista» del movimiento. Hasta los peronistas «ortodoxos» y «verticalistas» no pudieron dejar de sentir cierto alivio ante la pesadilla de ingobernabilidad que los militares les quitaban de encima.

Los primeros movimientos del golpe pusieron todo el énfasis en suprimir los brotes izquierdistas que habían aparecido en el movimiento obrero. El más preocupante se había producido meses atrás en Villa Constitución, con el ascenso de una conducción clasista encabezada por el delegado gremial Alberto Piccinini en la planta de la empresa siderúrgica Acindar. El movimiento había sido calificado como «guerrilla fabril» por Ricardo Balbín y había sido objeto de una intervención militar-policial ordenada por Isabel Perón. También se registraban movimientos parecidos en Córdoba, que era una tradicional «plaza fuerte» de la izquierda sindical,



y en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires, donde el Rodrigazo había producido la emergencia de unas Coordinadoras Interfabriles de Base que enfrentaban a Isabel Perón y simultáneamente desafiaban a la conducción sindical tradicional. El movimiento era básicamente espontáneo, pero contaba con activistas del ERP, Montoneros y los partidos de la izquierda legal. Coherentemente con todo esto, la represión apuntó primero contra los dirigentes gremiales de izquierda. El mismo día del golpe se efectuaron gran cantidad de detenciones y ejecuciones. Un 30 por ciento de las víctimas de los siete años de dictadura militar fueron obreros, constituyendo el subtotal más alto, seguido por los estudiantes (21 por ciento) y los empleados (18 por ciento).

A pocos días de consumado el golpe, Licio Gelli llegó a Buenos Aires con un regalo de 100.000 dólares en efectivo para Massera. Se trataba de una donación del empresario anticomunista para el equipamiento militar del Grupo de Tareas 3.3.2, ya que la mayoría de las armas a disposición de éste eran equipos pesados de guerra clásica que resultaban inadecuados para la guerra clandestina contra el terrorismo urbano. También en esos días, Massera se dirigió a la ESMA para «inaugurar» el grupo y exhortar a sus integrantes, dirigidos en ese momento por el capitán Salvio A. Menéndez, subdirector de la ESMA, a «responder al enemigo con la máxima violencia, sin trepidar en los medios». Sin embargo, él no era hombre de dar órdenes sin también intentar imbuir una mística de subordinación, de liderazgo y de coraje entre sus subordinados. A los pocos días del inicio de las operaciones del GT, Massera pidió a Menéndez salir en uno de los Ford Falcon del grupo, sin chapa identificatoria, a «marcar» gente. El «marcaje» consistía en llevar a detenidos de recorrida por las calles de la ciudad para que señalaran y reconocieran a eventuales subversivos. Algo después, pidió participar de las operaciones, que generalmente consistían en la irrupción de los marinos en viviendas y bases enemigas clandestinas y el arresto o ejecución de quienes estuvieran adentro. En esas operaciones insistía en estar a la vanguardia del grupo y en ser el primero que entrara ametralladora en mano en el lugar después de tirar la puerta abajo. También insistió en aplicar personalmente la picana eléctrica a los primeros detenidos, en actitud de dar el ejemplo a los integrantes del GT. «El arma aquí se juega entera —solía decir— y yo no les voy a pedir a ustedes nada que yo mismo no esté dispuesto a hacer». Como consecuencia, secuestraba con la ametralladora y torturaba con la picana eléctrica, dispositivo éste que había sido inventado a principios de siglo para arrear el ganado y que la imaginación policial de la Argentina agraria convirtió en la década del 30 en el instrumento de tortura por excelencia en comisarías y dependencias militares.

Como nombres de guerra, Massera eligió dos que usaba indistintamente: «Negro» y «Cero». «Negro» era su propio sobrenombre, aunque en el nuevo contexto adquiriría un nuevo significado: la oscuridad, la noche y la niebla, la clandestinidad, lo tapado, la ausencia de color, la negación, lo siniestro. «Cero» tenía varios significados: lo que estaba antes que el número uno (de la represión, de la ESMA, del GT 3.3.2),

pero también la nulidad, el vacío, la supresión y, asociativamente con «Negro», la clandestinidad, la negación. «Negro», la ausencia de un color, dejaba traslucir una identidad que «Cero», la ausencia de un número, volvía a encubrir. «Cero» era aquello que se encontraba a la izquierda y al margen de los ordenados números de la sucesión de poder naval, y en aquella época se había generalizado la expresión «por izquierda» para definir operaciones consumadas ilegalmente o de legalidad dudosa. «Cero», de este modo, era la ilegalidad total, la esencia de la ESMA y del GT 3.3.2, el personaje que se modificaba cuando salía de allí y volvía a ser «el Negro», el almirante, el «señor» de la tradicional cortesía naval. La dicotomía entre legalidad e ilegalidad era llevada hasta la cúspide, porque Massera en el exterior tendría la dignidad, el poder y la ley del rango de jefe de Estado que había adquirido al lograr que el órgano supremo del poder fuera la Junta Militar, pero en la oscuridad de la ESMA y en los actos de violencia nocturna del GT tendría todo el anonimato, la clandestinidad y la ilegalidad de un secuestrador y torturador. «Cero» constituía un personaje que daba un nuevo y radicalmente diferente significado al almirante, una luz negra que se le echaba desde atrás, que ayudaba a cambiar su figura y a apreciarlo de otro modo. El almirante, en cierto modo, tendía con «Cero» a despegarse del Almirantazgo, la Marina y el *establishment*, esas maquinarias de fabricación de personajes que podían ser oficiales y poderosos pero cuya oficialidad y poder dependían de las instituciones, siendo atributos que éstas les podían arrancar en cualquier momento. Con «Cero», Massera se aproximaba al cumplimiento del sueño del independentismo militar respecto de las clases dominantes, las clases dirigentes y las propias Fuerzas Armadas, ya que el hecho de que «Cero» fuera también un almirante implicaba recorrer en sentido inverso la trayectoria de un oficial de la Armada y construir una nueva Armada, que ya no era la pública y notoria Armada Argentina, sino otra Armada secreta, la Armada del GT, la Armada que armaba «Cero» en su recorrido de regreso desde los iluminados salones del Almirantazgo hacia las mazmorras que servían de subsuelo y trastienda de los fundamentos de su mando, y que dejaba imaginaria y simbólicamente constituida como la sede del verdadero poder con cada puerta que tiraba abajo, cada prisionero al que encapuchaba y engrillaba y cada detenido al que le aplicaba la picana eléctrica. El número cero, de esta manera, representaba en cierto modo la imposibilidad de ser Perón, porque Perón había podido independizarse bonapartista de las clases dominantes, las clases dirigentes y las Fuerzas Armadas, pero a través del movimiento de masas, mientras que el único punto de independización que tenía Massera era la picana eléctrica. Torturaba, saqueaba y destruía, y no se le ocurría pensar que en la fingida furia atronadora de sus operativos estuviera la marca de la queja por el mandato de un imposible destino manifiesto.

La dicotomía entre legalidad e ilegalidad representaría el punto crucial de su trayectoria, su personalidad y su historia, ya que el primer día que salió a «marcar» gente, a derribar puertas y a torturar prisioneros, el verdadero Massera, el Massera definitivo, por así decirlo, nació.

## Cinco

Quien más reprime, más poder tiene, y el *quantum* de la represión se mide por número de muertos y detenidos y por los espacios territoriales bajo control. Con esta regla de oro comenzó Massera la planificación de las operaciones del GT 3.3.2, que en perspectiva resultaría una de las movidas iniciales en su apuesta al poder.

Inicialmente, el grupo de tareas dependía del Servicio de Inteligencia Naval. Con el paso de los meses, creció y se desprendió del SIN, de cuyo jefe, el capitán de navío Lorenzo de Montmollin, Massera desconfiaba. Menéndez, por su parte, había quedado incapacitado para la acción en junio de 1976, en un operativo donde el teniente de fragata Jorge Omar Mayol salvó la vida del resto del GT arrojándose sobre una granada que lo destrozó por completo. Incidentalmente, tanto Menéndez como Mayol habían participado de operativos junto a Massera, razón por la cual éste tuvo un especial cuidado en hacerse presente en el velatorio del teniente y consolar a su viuda.

La configuración definitiva del GT 3.3.2 se produjo en el segundo semestre de 1976, quedando constituido por tres grupos autónomos dependientes del director de la ESMA, capitán de navío (luego contralmirante) Rubén Jacinto Chamorro (alias «Delfín» o «Máximo»), y a través suyo directamente de Massera. Se ejecutaba así una primera distorsión notable de la cadena de mandos, ya que contralmirantes y vicealmirantes no tendrían ninguna autoridad sobre los oficiales inferiores que revistaran en la ESMA, mantenida en esa época como coto de caza privado de Chamorro y Massera. Los tres grupos del GT 3.3.2 pueden esquematizarse así:

*Inteligencia.* Se hallaba bajo la dirección del teniente de fragata Jorge Acosta (alias «el Tigre»). Estaba integrado por oficiales y suboficiales de Marina y personal de la Prefectura y del Servicio Penitenciario. Los oficiales resolvían los secuestros, participaban de las decisiones sobre el destino de sus víctimas y se encargaban de los interrogatorios. Los ayudantes, denominados «los Gustavos», manejaban la información arrancada bajo tortura y descifraban y archivaban los papeles que llevaban encima los prisioneros en el momento del secuestro.

*Operaciones.* Su jefe era el capitán de navío Jorge Vildoza. Estaba integrado por oficiales y suboficiales de Marina, personal de Prefectura y del Servicio Penitenciario, miembros de la Policía Federal y oficiales y suboficiales retirados de la Marina y del Ejército. Ejecutaban los secuestros y saqueaban las casas en las que irrumpían, llevando lo robado a una sección de la ESMA denominada «Pañol» donde se juntaba el «botín de guerra». Operaciones se subdividía en dos grupos:

1) Las patrullas uniformadas. Usaban camionetas verdes sin inscripciones exteriores, precedidas por patrulleros de la Policía Federal. Diariamente se realizaban

dos o tres operaciones de patrullaje, cada una de las cuales tenía una duración media de tres horas. Al mando iba un oficial con pistola y ametralladora, secundado por un suboficial con el mismo armamento. Había dos cabos marineros con fusiles FAL y ocho conscriptos, siete de ellos con FAL y el octavo con pistolas lanzagases. A través de un walkie-talkie de un solo canal comunicaban las novedades a la ESMA.

2) Las patrullas de civil. Operaban de manera irregular, de acuerdo con los datos de que dispusieran. No había conscriptos y estaban integradas por un oficial, un suboficial y cabos segundos de la ESMA, armados con revólveres, granadas de mano, fusiles 30-30 con mira telescópica, fusiles FAL con mira infrarroja, escopetas Ithaca y pistolas ametralladoras. Viajaban equipados con un walkie-talkie de dos canales para hablar con la ESMA y usaban autos Ford Falcon, Torino, Opel K 180, Falcon Rural y Chevrolet.

*Logística.* Oficiales y suboficiales de Marina a cargo de tareas de mantenimiento y refacción de las instalaciones y de administración de las finanzas. Con el tiempo irían cobrando importancia, por el enriquecimiento del GT a raíz de los saqueos y las transferencias bajo presión de títulos de propiedad hechas por activistas secuestrados.

La base del GT en la ESMA se denominaba «Selenio», y su área de operaciones era la Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires. La información de inteligencia teóricamente se compartiría con los otros servicios armados a través de un organismo llamado «la Comunidad Informativa», pero en la práctica Massera y los demás comandantes sólo volcarían al registro común lo que quisieran revelar; el resto lo mantenían en secreto, aunque podían hacerse excepciones con algunos aliados, como la que hizo Massera con su amigo el general Guillermo Suárez Mason, comandante del I Cuerpo de Ejército.

Las dependencias del GT 3.3.2 se completaban con «Dorado» —sede de Inteligencia—, «Capucha» —el lugar donde estaban las celdas de los detenidos—, el citado «Pañol», la «Pecera» —oficinas— y «Capuchita» —salas de tortura y más celdas, que a veces eran prestadas a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN. Las torturas se consumaban en la «Avenida de la Felicidad», ubicada en el sistema de sótanos.

La Armada que armaba «Cero» era un lugar donde la estructura militar tradicional tendía a desaparecer. La estructuración de la fuerza en la época del Proceso tendía a subrayar una comandancia fuerte, pero al mismo tiempo la cadena de mandos aparecía distorsionada: como el poder territorial determinaba el poder real, los oficiales destinados al mando y a la ejecución de las tareas represivas tendrían más importancia, cualquiera fuera su grado, que el resto del cuerpo de oficiales. Un teniente de navío que actuaba en un GT podía tener más importancia que un capitán de navío confinado a tareas burocráticas, por la simple razón de que su perímetro era el lugar donde se contabilizaba aquel poder. La selección del personal militar afectado

a los GT era errática en términos de grado y posición, porque no todo el cuerpo de oficiales podía ni aceptaba ser destinado al tipo especial de guerra que el Proceso se proponía librar. Véase, al respecto, el testimonio del capitán de fragata (RE) Jorge Félix Básico sobre un hecho temprano del GT:

Al regresar a la ESMA tuve la oportunidad de protagonizar la detención del Dr. Pedro Eladio Vázquez, a la que procedí en horas del día y dándome a conocer francamente ante su esposa. Este hecho me fue severamente recriminado por el entonces subdirector capitán Menéndez, quien me advirtió que esas operaciones se debían hacer sin dar a conocer los nombres reales del personal interviniente. A raíz de esto conversé con el capitán Chamorro, manifestándole la conveniencia de hacer juicios sumarios e inclusive ejecuciones —si fuera necesario— pero dándole conocimiento público al procedimiento.

A consecuencia de esto fui marginado de todas las operaciones antisubversivas de la ESMA.

Los GT incluían caóticamente oficiales, suboficiales, oficiales externos al arma en actividad y retirados, policías en actividad o retirados y civiles, y al mismo tiempo construían dentro de ese perímetro el área de verdadero y efectivo poder. El hecho generó las simientes, que con el tiempo germinarían, de la descomposición de la estructura verticalista y disciplinaria de las Fuerzas Armadas.

## Seis

Los primeros días del golpe militar fueron tumultuosos y caóticos. El aniquilamiento de la subversión tenía lugar de un modo a la vez masivo y clandestino, en operaciones nocturnas donde decenas de sospechosos eran detenidos o abatidos, que tendían a cesar con la luz del día, dando lugar a una serenidad falsa, vigilante y tensa. Al mismo tiempo, la Junta Militar procedía a la designación de su gabinete y su equipo político, bajo la consigna y con la salvedad de que nadie sería excluido «salvo los subversivos y los corruptos». El golpe, por primera vez en la historia política argentina, no se denominó «Revolución<sup>^</sup>), prefiriéndose el aséptico nombre de «Proceso de Reorganización Nacional».

Las designaciones eran esperadas con ansiedad, porque se pensaba que definirían el contenido programático del gobierno militar y porque esclarecerían la relación de fuerzas dentro del Ejército y la distribución de competencias entre las tres armas. Numerosos sectores civiles habían apostado al golpe, muchos de ellos con la seguridad de que se limitaría a aniquilar la subversión, restringir el poder sindical y dirigir una transición de autoritarismo benévolo hacia una democracia más razonable que la del último período constitucional. Otros sectores, cuyo auditorio se concentraba en las filas militares, esperaban del Proceso una suerte de radical jacobinismo de derecha que suprimiera la subversión y el poder sindical, liquidara los partidos políticos y organizara una Argentina tecnocrática y desarrollista rigurosamente vigilada. Se podría decir que la fórmula contra «los subversivos y los corruptos» era una definición algebraica, donde cada uno podía incluir lo que quisiera, y mientras los moderados se referirían con ella a las organizaciones armadas, al poder sindical y a la corrupción propiamente dicha, los duros metían también en la bolsa a la totalidad de los partidos políticos y órganos de la sociedad civil, a los que juzgaban responsables por la decadencia argentina y por los años de zozobra en que el país había vivido al borde de la revolución.

La designación más importante era la del ministro de Economía, después del breve período de hiperinflación vivido bajo Isabel Perón en 1975. Se pensaba que la identidad y el programa del ministro de Economía permitirían deducir una operatoria política y un sentido de dirección, lo que resulta fácilmente explicable si se considera que el fracaso del último experimento peronista se había derivado de la crisis de su modelo económico y de la resistencia que los ultrapoderosos sindicatos empezaron a desarrollar hacia los sucesivos intentos de aplicar programas de ajuste. Nadie esperaba que los militares eligieran un modelo nekeynesiano ni distribucionista, pero al margen de esa definición por la negativa existía una gradación de políticas y de hombres públicos, cuya inclusión o exclusión nadie podía asegurar ni descartar de antemano y que determinaría el desarrollo del Proceso. Se podría decir que en la

Argentina las funciones de un hipotético primer ministro estaban entonces virtualmente desdobladas —y seguirían estándolo por un buen tiempo, por lo menos hasta 1983— en los cargos de ministro de Economía y ministro del Interior. El primero diseñaba y ejecutaba las políticas para las cuales el segundo tenía la responsabilidad de mantener el orden, y si alguna de las dos cosas fallaba estrepitosamente serían los ministros pertinentes, y no el presidente, quienes pagarían el costo. Los ministros diseñaban y ejecutaban políticas, pero caerían si la plaza fuerte de la presidencia aparecía amenazada.

Videla carecía de convicciones económicas fuertes, como también ocurría con Massera y con la mayoría de los cuadros militares que llegaron al primer plano del poder en 1976. Suavemente neoliberal en lo político —en una época en que el neoliberalismo no tenía adhesiones políticas significativas en la sociedad civil—, Videla se había destacado más por su retracción respecto del populismo y del personalismo que por alguna clase de definición positiva en favor de cualquier corriente. Había militado en el Movimiento Familiar Cristiano y los únicos diálogos políticos que se le conocían para 1975 eran los que mantenía con el dirigente conservador Juan Espil, pero no tanto porque fuera dirigente conservador sino porque era su cuñado. Además, hasta 1975 carecía completamente de amigos y relaciones civiles, lo que limitaba considerablemente sus posibilidades de vincularse con políticos y economistas que pudieran influir sobre sus ideas. Ni Videla ni Massera tenían la menor noción sobre economía: el primero por falta de relaciones, el segundo porque la economía le aburría, no la entendía y tendía a verla como una función accesoria de la actividad política.

Sin embargo, a partir de las crisis políticas de 1975, los sectores empresarios más tradicionales, organizados en el Consejo Empresario Argentino, habían empezado a desarrollar contactos con militares para conocer sus posiciones sobre la situación política y conseguir información sobre sus futuros pasos. Uno de quienes desarrollaban esos contactos era José Alfredo Martínez de Hoz, un estanciero que presidía el directorio de Acindar (tan conmocionada hacía poco por la emergencia de líderes sindicales marxistas en Villa Constitución) y era miembro de los directorios de compañías como Pan American Airways e ITT. Los principales contactos de que disponía eran los generales retirados Alcides López Aufranc, integrante del directorio de Acindar, y Hugo Miatello, quien había sido titular de la SIDE bajo la presidencia del general Lanusse. A su vez, estos generales, a través de reuniones sociales, le abrieron las puertas de la institución militar, donde Martínez de Hoz —como la mayoría de los empresarios de la época— se orientó hacia la búsqueda de contactos con los militares que en ese momento estaban más próximos al poder político, como Laplane.

Videla no conocía personalmente a Martínez de Hoz y Martínez de Hoz nunca había prestado atención a Videla, pero se daba la coincidencia de que este último

había sido compañero de promoción de Miatello, quien ejercía un fuerte ascendiente personal sobre él. Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón, Martínez de Hoz pidió a Miatello que le presentara a Videla, ante quien bosquejó un plan económico neoliberal. Videla, un hombre ingenuo, era también una suerte de tímido snob, a quien el apellido Martínez de Hoz, ligado a los sectores más antiguos de la oligarquía argentina, impresionó vivamente. Se hubiera dicho que el *establishment* le sonreía, cuando hasta hacía sólo pocos meses él era una figura desdeñada y opaca. Sin embargo, el interés de Martínez de Hoz no lo impresionó fundamentalmente por el halago personal que significaba, sino porque confirmaba que el camino que él había elegido era el correcto. Todo, en cierto modo, encajaba y encontraba referencia en el módico almanaque de Gotha argentino, que Videla se había acostumbrado a considerar el directorio de los valores y poderes universales establecidos. El general propuso entusiasmado el nombre en la Junta Militar, y Massera y Agosti asintieron sin mayor interés ni comprensión porque ya sabían que debían desarrollar una política de ajuste.

Sorprendentemente, el único que tuvo reticencias con el nombramiento de Martínez de Hoz fue Viola, que temía que aquél aplicara políticas fuertemente impopulares y prefería para el cargo al economista Lorenzo Sigaut.

Como ministro del Interior, Videla designó al general Albano Harguindeguy, cuyo último destino había sido la jefatura de la Policía Federal que ejercía desde diciembre de 1975, y que había tenido participación en el Operativo Dorrego. Martínez de Hoz, consciente de que Harguindeguy constituía su *alter ego* no explícito, intentó ganarlo para su causa desde el primer momento, lo que logró con creces, a punto tal que en ese período sería común oír decir que Harguindeguy era «manejado» por Martínez de Hoz.

Videla aprobó el nombramiento de Martínez de Hoz sin conocer de economía, por consejos de Miatello, por sugerencias de influyentes del *establishment* y porque era un snob. Massera lo secundó porque también era un snob y la economía no le interesaba en ese momento. No se trataba de una conspiración, sino de que un golpe espontáneamente reaccionario encontraba con naturalidad su inevitable programa económico.



## Siete

A partir del 24 de marzo de 1976, una ola de terror silencioso comenzó a esparcirse rápidamente por las principales ciudades argentinas. El secuestro, la tortura y la ejecución de grandes cantidades de guerrilleros, militantes izquierdistas, sindicalistas y simpatizantes se volvería la norma durante los primeros meses. Con posterioridad, políticos tradicionales, empresarios, diplomáticos y hasta militares aumentarían la secreta nómina de caídos. El terror era paradójico, porque no se mostraba abiertamente, lo cual constituía también el fermento de su efectividad. El carácter nocturno y altamente direccional de las operaciones, la organización de campos de concentración en la forma de centros clandestinos de detención y la decisión de los secuestros en base a confesiones arrancadas bajo tortura y a los archivos de inteligencia de la policía convertían a la represión en una presencia largamente invisible, cuya contemplación era posible evitar si no se salía de noche. Con todo, no dejaba por ello de ser una presencia, por las historias que empezaban a circular, por la prevención a salir de noche, por la necesidad de portar siempre un documento identificador y por los extraños desplazamientos masivos de vehículos que los habitantes de las ciudades podían escuchar desde sus departamentos cerrados cuando estaba por consumarse un operativo.

Los centros clandestinos de detención constituían los puntos de irradiación de un terror indiscriminado, que se esparcía rápidamente en grandes olas concéntricas e inculcaba en cada miembro de la sociedad la seguridad de saber que sería exterminado ante cualquier tentativa de rebeldía. Como contrapartida, los militares se esforzarían durante 1976 en presentar un «país diurno» ordenado y pulcro (aunque ligeramente autoritario), donde se autorizaba cierto disenso periodístico siempre que no denunciara al régimen y donde se hacía lo posible por conservar las formas y sugerir que nada fundamental había cambiado, todo lo cual reforzaba la eficacia del sistema. La Junta Militar era de día el Dr. Jekyll de las formas moderadas y profesionalistas del general Videla, para convertirse en la tempestad multiforme y siniestra de los grupos de tareas durante la noche. El país oficial había pasado a ser el país diurno y el país real era el país nocturno, aunque estos dos elementos en el fondo se complementaran y cada uno se nutriera del otro. Así eran posibles simultáneamente los campos de concentración y una prensa que protestaba ácida y violentamente, por ejemplo, contra la censura cinematográfica. Las críticas contra la censura cumplían su papel de tranquilizar a la clase media y persuadirla de que vivía en su Argentina de siempre, de modo análogo a la forma en que los nazis preservaron los títulos, la tipografía y el estilo de los grandes diarios para convencer al burgués medio alemán de que todavía vivía en el pacífico y plácido mundo del sentido común. La Argentina se había vuelto un país irreal, dividido en compartimientos estancos, lleno de microclimas y de conspiraciones parciales, donde las mismas calles que de

día eran escenario de las febriles especulaciones financieras y las compras de artículos importados que alentaba el nuevo régimen, se transformaban de noche en el terreno de la actividad de los grupos de tareas.

El GT 3.3.2 era uno de los más importantes, porque su campo de acción era Capital Federal y Zona Norte —dos áreas de fuerte población de clase media intelectualizada, proclive a simpatizar con el marxismo—, y porque el centro de detención que tenía como punto de referencia, la Escuela de Mecánica de la Armada, era en sí uno de los más grandes del país, solamente comparable con el que existía en la guarnición militar de Campo de Mayo. Los prisioneros llegaban a la ESMA de a decenas todos los días, engrillados, encapuchados, violentamente golpeados mientras se los transportaba desde el lugar de detención, habiendo escuchado las enigmáticas contraseñas ajedrecísticas que se transmitían desde el automóvil a los puestos de guardia: «Cerrar la partida con tres de alfil», «El caballo toma a la reina». Una vez adentro, eran llevados hacia los sótanos, donde les sacaban todo lo que tenían, les tomaban los datos y debían esperar «su turno» encapuchados en una incómoda antesala desde donde se escuchaban los alaridos de quienes estaban siendo torturados, mal tapados por una estridente música de baile. Las pasadas por la «máquina» —como se llamaba a la picana eléctrica en la jerga represiva— eran de rigor, aplicándose con preferencia en genitales, senos y encías. A partir de allí seguía una variada gama de tormentos, que incluían la sujeción a una «parrilla» compuesta por un elástico metálico de cama conectado a electrodos, la violación de una persona frente a su pareja o a sus hijos, el arrancamiento de uñas de manos y pies, la mutilación de genitales con hojas de afeitar y el desangramiento de los prisioneros. Algunas unidades del Ejército y las fuerzas policiales desarrollarían las torturas todavía más, con procedimientos novedosos como la introducción de lauchas vivas y hambrientas en el útero de las mujeres, la introducción de polos eléctricos en la vagina de mujeres embarazadas con el objeto de torturar a los fetos, el despellejamiento de los prisioneros, la vivisección sin anestesia, la amputación de miembros y hasta el arrancamiento de ojos. Se diría que se habían tomado muy en serio la metáfora de que la sociedad estaba enferma, ellos eran los anticuerpos y los detenidos el virus.

El primer objetivo de estas torturas era conseguir información fresca, que permitiera nuevas capturas rápidas basadas en la agenda mental del detenido antes de que el ejército enemigo, por incumplimiento de una cita o de una llamada de seguridad, dedujera que un militante había sido apresado. Con ese motivo, la consigna de los secuestrados consistía en resistir por determinado período, ya que la información que pudieran suministrar iba a ser inútil 48 o 72 horas después de su detención. También por eso los militantes montoneros llevaban consigo una pastilla de cianuro que debían ingerir en el momento de ser apresados.

El segundo objetivo de la tortura era destruir moralmente al detenido. Massera mismo no se cansaba de repetir la frase de Karl Von Clausewitz de que «el objetivo de

la guerra no es destruir al enemigo, sino desarmarlo y quitarle su voluntad de luchar», y los operativos del GT 3.3.2 tomaban esta instrucción al pie de la letra. Un «quebrado» podía servir para salir a «marcar» subversivos; si se prestaba a desarrollar interrogatorios, el triunfo era casi completo, y si además de eso estaba dispuesto a torturar a detenidos de su misma organización, la victoria sería total. La traición era un camino sin retorno, primero porque el detenido no podría salir de la ESMA sin temor a ser ejecutado por sus antiguos compañeros —muchos de los «quebrados», cuando se les alteró el régimen y se les permitió salir, prefirieron quedarse adentro—; segundo, y quizá más importante, por el compromiso sellado por la sangre y por la traición total a los antiguos ideales que, en el clima predominante, el prisionero sólo podía elaborar mediante el procedimiento de seguir traicionando. La traición, de esta manera, construía una nueva forma de fidelidad: la fidelidad a la derrota. Con el tiempo, la ESMA iría formando un «staff» de prisioneros que calificaba «en vías de recuperación<sup>^</sup>), que desempeñaban tareas auxiliares, y un «ministaff» que intervenía directamente en las operaciones antisubversivas. Un ejemplo distinguido de este «ministaff» fue Marta Bazán, militante de las Fuerzas Armadas de Liberación que fue detenida junto con su marido, supo que su marido había muerto bajo la tortura, comenzó a colaborar y participar en operativos y terminó enredada en un romance con el propio contralmirante Chamorro, director de la ESMA, con quien se casó posteriormente. Se la llamaba «la Sargento Coca» y, como al resto de los miembros del «ministaff», el GT la tenía en un rango de alta confiabilidad y estima.

Un tercer objetivo de las torturas consistía en lograr la completa reforma de los detenidos en base a un principio bastante parecido a la «selección natural», y la «supervivencia de los más fuertes» de Darwin. El procedimiento consistía en una reproducción amplificada de la educación militar, con todos los ritos, castigos, disciplinas, sufrimientos y privaciones que pasaba un cadete de la Marina o del Ejército antes de graduarse como oficial. Massera había experimentado todo esto como un adolescente negligente y romántico en la Escuela Naval, y en principio no podía entender por qué lo que había sido válido para él no habría de serlo también para los subversivos detenidos. Un militar es el cadáver de un civil vestido de oficial, y un colaboracionista podía ser el cadáver de un subversivo vestido de asesor. Ya que nunca se sabía qué dirección tomaría la política argentina en los años venideros, y la colaboración de ex subversivos podía ser importante para que Massera comprendiera cómo pensaban ellos, y supiera qué cosas ofrecerles a sus potenciales adherentes.

Una idea perversa se empezaba a insinuar en la cabeza política del almirante, una idea que constituía una ruptura con todo lo que había hecho hasta ese entonces y con la totalidad del imaginario naval. Massera había deducido, de la experiencia política que le había tocado vivir, que la Argentina era irremisiblemente peronista, y que para llegar a la cima de un poder político legítimo, que no se viera interrumpido por el descontento interno o las rotaciones periódicas de cada arma, era preciso aproximarse al peronismo. Con esa realidad en mente, dedujo dos reglas prácticas

para los operativos militares de la ESMA: 1) habría un lote de sobrevivientes, pequeño pero mayor que el de los campos de concentración del Ejército y la Fuerza Aérea, y 2) ese lote sería reclutado entre los detenidos de la organización Montoneros, que eran vistos como más «nacionales» que los militantes del ERP, con respecto a quienes las instrucciones eran exterminarlos inmediatamente después de que se les extrajera el último gramo de información posible. Ambas instrucciones eran difíciles de sostener argumentalmente para un hombre que, con impávido cinismo, había sugerido que la reluctancia del Ejército a entregarle Capital Federal tenía que ver con las soterradas simpatías de dicha fuerza hacia los Montoneros —de gran despliegue en la Capital— desde la época del Operativo Dorrego. Sin embargo, Massera justificó en ese entonces ante sus hombres esta actitud por razones de «inteligencia» —para conseguir información y colaboración— y subrayó el carácter humanitarista y liberal de los oficiales navales frente a sus bárbaros colegas de tierra. (Incidentalmente, esta última declaración no era descabellada, ya que la instrucción en el Ejército era más salvaje que la naval, y esa diferencia tendería a reflejarse inconscientemente en las diferencias entre los respectivos procedimientos de represión.)

Se podría sintetizar el rol de la tortura diciendo que la Marina se representaba a sí misma en una guerra. Era, sin embargo, una guerra muy particular, porque contenía una operación dentro de otra: se trataba de derrotar primero al enemigo subversivo, sólo para después derrotar la posición de preeminencia del Ejército. No obstante, como ésta era una guerra por el espíritu de los hombres — como diría el propio Massera tiempo después: «El alma de los hombres se ha convertido en campo de batalla» —, los hombres y sus cuerpos físicos tendían a convertirse en los escenarios concretos de esa lucha. La tortura constituía la reducción a la mínima unidad de los conceptos militares de violencia, armamento y relaciones de fuerza, y la única diferencia que tenía con la guerra clásica es que su espacio de despliegue territorial era un cuerpo desnudo sobre una mesa y no un espacio abierto con determinados lugares para conquistar.

La ESMA, consistentemente con todo esto, adquiriría en cierto modo las mecánicas de una fábrica, la lógica de una línea de producción y de montaje, cuya materia prima eran los hombres que ingresaban encapuchados y engrillados al lugar para convertirse, tiempo después, en desperdicio o en material utilizable para los proyectos políticos del almirante. El primer procedimiento consistía en los pasajes de «máquina» y el desciframiento de secretos y códigos; el segundo, en una prolongada exposición a la tortura con el objeto de descubrir si el prisionero podía colaborar; el tercero, en la colaboración de inteligencia; el cuarto, en la ejecución por el prisionero de los mismos movimientos de su antiguo carcelero y su transformación en represor. Se trataba, por sobre todas las cosas, de hacer que un movimiento de represión —la aplicación de la picana eléctrica, digamos, que en cierto modo ya estaba contenida en el «marcaje»— se repitiera a perpetuidad, ya que la repetición a perpetuidad es la base de la existencia y el funcionamiento de las instituciones militares.

Quienes resistieran, no supieran adaptarse o pertenecieran a una organización definitivamente «antinacional» como el ERP —que imaginaba a Tucumán como Vietnam, y que lograba extraer una dosis de nacionalismo incluso de los anglófilos marinos argentinos— eran «trasladados». «Traslado», como los prisioneros no tardaron en descubrir, significaba la muerte. Quienes estaban a punto de ser trasladados eran inyectados con un poderoso narcótico y luego arrojados desde aviones de la Aviación Naval en el Cabo San Antonio, mar adentro. (Massera, posteriormente, se burlaría de la torpeza y la incompetencia del Ejército, que arrojaba los cadáveres en el Río de la Plata e incluso en los ríos del Tigre, donde era seguro que aparecerían poco después, y mostraría un orgullo ofendido cuando alguien lo acusara de esa desprolijidad.) «Al que moleste le doy un Pento-naval y se va para arriba», solía decir el Tigre Acosta en la ESMA en esos días. Otra práctica era la quema de cadáveres, y algunos detenidos recordarían la expresión alusiva de un grupo de suboficiales: «Venimos de hacer un asadito».

## Ocho

El procedimiento represivo elegido implicaba una rígida compartimentación de funciones. La Policía Federal y la policía provincial estaban a cargo de la seguridad general de la Capital Federal y de la Zona Norte del Gran Buenos Aires en ese momento, por lo cual era necesario avisarles telefónicamente con anticipación las horas y el perímetro donde iba a realizarse un operativo. El uso y costumbre represivo de la época consistía en pedir «zona libre» para determinada área y período, durante el cual las fuerzas policiales se abstendrían de intervenir en cualquier incidente que tuviera lugar allí. La expresión «zona libre» es traicioneramente reminiscente de la terminología utilizada por el ERP para denominar «zonas liberadas» a determinadas áreas del territorio de Tucumán, lo que muestra la existencia de un sustrato de imaginaria guerrillera en esos comandos que se ponían a sí mismos por encima de la ley y tenían una conformación celular que interrumpía la cadena de mando de la organización militar tradicional. Al mismo tiempo, la expresión «zona libre» constituía la imagen espejular de la expresión «área restringida»: las dos denotaban una extrema compartimentación de funciones, una prolija distribución de las fuerzas de represión y el principio de que en el lugar donde está uno no puede estar otro. Separaban, dividían, aislaban y armaban de ese modo el modelo de un rompecabezas: las armas no son una porque son tres; su unidad en la desintegración anticipa los problemas futuros. Las llamadas pidiendo zona libre se realizaban en ese momento regularmente desde la Escuela de Mecánica de la Armada y otros centros clandestinos de detención.

La compartimentación era la versión militar del «tabicamiento», la forma en que la guerrilla y las organizaciones de izquierda impedían hasta el máximo posible que los militantes se conocieran mucho entre sí, supieran sus verdaderos nombres, tuvieran sus direcciones y sus números de teléfono. El uso obligatorio de nombres de guerra por parte de los militares de la ESMA y otros centros clandestinos de detención respondía a una similar necesidad de anonimato, reflejada también en el hecho de que los oficiales de las distintas ramas del GT no pudieran comer ni dormir juntos y debieran residir en distintos lugares de la Escuela. Sobre el plano de la ciudad y sobre el de la ESMA se construían pasadizos invisibles, fronteras intangibles cuya transgresión podía acarrear la muerte. La necesidad de nombres de guerra para los militares de la ESMA se complementaba con la necesidad de anonimato para los detenidos internados. Como toda esa gente simplemente había «desaparecido» y oficialmente su paradero constituía una incógnita, se trataba de reducir al mínimo el peligro de que alguna de las cientos de personas que cumplían tareas de distinto orden en la ESMA dejara trascender que determinada persona estaba «adentro». Con ese motivo los prisioneros recibían, apenas llegados a la ESMA, un número y la precisa instrucción de recordarlo siempre, ya que su nombre real, civil, «aparecido»,

no volvería a pronunciarse nunca más. Los prisioneros estaban numerados del 001 al 999, lo que permite deducir que la capacidad instalada de la ESMA permitía una población máxima de mil detenidos. El sector de Inteligencia tenía unas carpetas denominadas «Caso 1.000», donde se archivaban informaciones y datos importantes sobre personalidades políticas, religiosas o sindicales consideradas «enemigas» o «peligrosas», para cuyo secuestro se esperaba que se dieran las circunstancias adecuadas.

Simultáneamente con la clandestinización de la represión, se desarrollaba un proceso paralelo de militarización y verticalización de las organizaciones subversivas. El Código de Justicia Penal Revolucionario de la organización Montoneros establecía que «las penas que se podrán aplicar a juicio del Tribunal Revolucionario son: confinamiento, destierro, degradación, prisión, expulsión y fusilamiento». Los delitos que merecían fusilamiento eran: traición, desertión, delación, insubordinación, conspiración, defraudación, abuso de autoridad, evasión, encubrimiento, instigamiento y complicidad. Cometían el delito de conspiración «quienes al margen de las estructuras organizativas o dentro de las mismas realicen una actividad concreta orientada a lograr una división o fraccionamiento de la organización<sup>^</sup>). Un disidente podía, pues, ser condenado a muerte. La desertión incluía a quienes dejaran Montoneros «sin previa comunicación a su ámbito superior, y los integrantes de la organización que tuvieran más de un año de antigüedad como tales, cuando hayan efectuado el pedido de retiro y no obstante el rechazo del mismo por la organización, hagan abandono de ella». Así, las Fuerzas Armadas resultaban internamente mucho más democráticas, tolerantes y comprensivas que los Montoneros, que se reivindicaban a sí mismos como portadores de la «liberación». Además, éstos instituyeron dentro de su organización un rígido código de conducta, una precisa estratificación militar, señales, birretes, uniformes, saludos, posiciones, una gradación exacta de funciones y una precisa diagramación de movimientos. Se diría que, en el intento de verse a sí mismos como un polo de poder político-militar, los Montoneros asumían exageradamente los códigos de comportamiento interno de las Fuerzas Armadas (sólo les faltó practicar la tortura), mientras que las Fuerzas Armadas, en su empeño por consumir la derrota del enemigo subversivo, hacían una mímica distorsionada y siniestra de los dispositivos clandestinos que éste construía en la forma de vehículos de acción. Las dos fuerzas se combatían a muerte, pero en el fondo tendían a identificarse mutuamente: Montoneros aspiraba a la estratificación reglamentaria del Ejército; el Ejército y la Marina gozaban del momento de clandestinidad y de ilegalidad que les permitían el tabicamiento, los nombres falsos, las compartimentaciones, las «zonas libres», las «áreas restringidas», y del poder omnímodo, disfrutado por breves períodos de la historia, sobre residencias y personas civiles, dentro de un contexto general de clandestinidad represiva. La Argentina contrarrevolucionaria estaba enferma de sustitución, del espectro de una revolución abortada y de la vuelta de lo reprimido: los tabiques, los asaltos, los asesinatos, la omnipotencia, el terror. El año 1976 no representó el fin de la era

terrorista en la Argentina sino su consumación máxima, porque el terror se veía como la única forma de saldar la crisis de representación.



## Nueve

Los primeros movimientos políticos de Massera en el gobierno militar consistieron en aprovechar la segmentación horizontal que tendía a darse en el Ejército por una natural diferenciación de funciones. El almirante advirtió rápidamente que los oficiales más cercanos al ejercicio del poder político tendían a diferenciarse adoptando un enfoque de las cosas distinto del de aquellos que estaban más involucrados en las cuestiones específicamente militares, concretamente en la guerra contra la subversión. A grandes trazos, las diferencias tenderían a establecerse entre Videla, Viola y su equipo político por un lado, y los comandantes de Cuerpo, notoriamente los generales Guillermo Suárez Mason (I Cuerpo, Buenos Aires) y Luciano Benjamín Menéndez (III Cuerpo, Córdoba), por otro.

Al promediar 1976 se advertía que la dupla Videla-Viola presidía sobre el país y sobre el Ejército con cuatro usinas ideológicas principales compitiendo por su atención y luchando por la hegemonía. Una estaba representada por el general José Rogelio Villarreal, secretario general de la Presidencia, y su segundo, el abogado y dirigente radical Ricardo Yofre: los dos defendían la incorporación de civiles en funciones de gobierno, la negociación política con distintos sectores, la moderación del gobierno militar y el tendido gradual de puentes de transición hacia la democracia, y tenían buena relación con Viola y particularmente con el ministro de Trabajo, general Horacio Tomás Liendo. Una segunda usina estaba representada por Martínez de Hoz y su equipo, que ponían el énfasis en la marcha del plan económico y el logro de una estabilidad política total hasta que el programa empezara a dar frutos; tenían una buena recepción en Videla, y su principal aliado militar era el general Harguindeguy, ministro del Interior. Una tercera estaba representada por el general (RE) Ibérico Manuel Saint Jean, gobernador de línea dura de la provincia de Buenos Aires, que interpretaba la proscripción de los subversivos y los corruptos como una prohibición absoluta de toda actividad política y sindical, defendía la supresión violenta de todo disenso y proponía un esquema gubernamental hiperdictatorial de fuertes connotaciones antisemitas; su principal aliado era el entonces coronel Ramón J. Camps, jefe de la policía provincial, y tenía buen nivel de recepción en los comandantes de Cuerpo, incluyendo los ya citados Suárez Mason y Menéndez y el comandante del V Cuerpo (Bahía Blanca), general René O. Azpitarte. La cuarta usina era la única que se reconocía a sí misma como tal pero la que menor influencia tenía: estaba representada por el general Ramón Genaro Díaz Bessone, ministro de Planeamiento, y los hombres de su Fundación Año 2000, y su propuesta consistía en utilizar la dictadura militar como herramienta para diseñar un modelo fuerte de país y de Estado, dentro de esquemas matizadamente desarrollistas y dirigistas que motivaban la crítica del equipo de Martínez de Hoz.

La divisoria horizontal constituía una función directa de las responsabilidades específicas de los involucrados. Videla y Viola (este último jefe del Estado Mayor General del Ejército), por su elevada posición, eran la cabeza política y el modo de interlocución del régimen militar con la sociedad civil y con el extranjero, del mismo modo que Liendo tenía la responsabilidad del diálogo con los sindicalistas. Todos estos estaban obligados a ser más moderados, conciliadores, diplomáticos y civilistas que sus subordinados, que tendían a moverse en una atmósfera exclusivamente militar. Al mismo tiempo, los comandantes de Cuerpo eran los altos oficiales más directamente comprometidos en la lucha contra la subversión, una lucha que había adquirido maneras tan espantosas que, precisamente por eso, había requerido de sus protagonistas la adopción de una suerte de mística ultramilitarista, una visión apocalíptica y paranoica de la realidad y una ideología corporativista de extrema derecha. Saint Jean, un general extravertido y voluble capaz de afirmar públicamente que «primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, más tarde a quienes son indiferentes y finalmente a los tímidos», tenía su auditorio natural en los comandantes de Cuerpo. Viola, que siempre había funcionado como la cabeza política de Videla y privilegiaba sobre todo los aspectos políticos de las cuestiones, tendía a girar hacia las posiciones de Villarreal-Yofre. Videla, por su parte, oscilaba entre el civilismo restringido y gradual de Villarreal-Yofre y el neoliberalismo económico con autoritarismo militar de Martínez de Hoz y su equipo, definiéndose frecuentemente a favor de este último.

Massera notó rápidamente que para lograr la atención de los sectores civiles debía destacarse como un militar inteligente, audaz, abierto, negociador y flexible, pero para hacer valer su 33 por ciento de poder y sus posturas en favor del «cuarto hombre», solamente podía apoyarse en la línea dura de los comandantes de Cuerpo, lo que constituía un curioso y paradójico camino de retorno hacia el rol tradicional de la Marina de Guerra como la línea dura intransigente que actuaba como el fiel de la balanza de los enfrentamientos internos del Ejército. Al mismo tiempo, debía mostrar de algún modo de cara a la sociedad civil que la Marina y la Fuerza Aérea eran las únicas palancas que podían evitar una total hegemonía del Ejército, para lo cual necesitaba que la Fuerza Aérea lo apoyara más allá del reclamo por el «cuarto hombre» y el teórico 33 por ciento del poder. La operación era compleja y múltiple, porque la posición en que se encontraba Massera era desfavorable: la relación de fuerzas con el Ejército hacía que siempre debiera pelear sus posiciones, por así decirlo, desde un plano inclinado, y debiera ser extremadamente duro hacia adentro —las Fuerzas Armadas— y sugerir moderación hacia afuera.

Las primeras peleas dentro de la Junta Militar se libraron en torno del tema de la designación de embajadores. Villarreal y Yofre habían tenido la idea, tiempo atrás, de confirmar en sus cargos a los intendentes civiles que habían quedado de la época de Isabel en pueblos y ciudades pequeñas, comenzando por la provincia de Buenos Aires. La propuesta, que era un primer puente de entendimiento entre civiles y

militares, había sido aprobada, pero pasaron semanas sin que se la llevara a la práctica, y cuando Villarreal fue a presionar a Harguindeguy en mayo para lograr una definición, se encontró con que el general Saint Jean se le había anticipado, había dado un golpe de mano, había destituido a todos los intendentes de la provincia y los había reemplazado por comisarios policiales retirados y en actividad, ideólogos de extrema derecha y políticos afines.

Villarreal y Yofre decidieron entonces abordar el problema desde otro ángulo, que era la designación de políticos civiles tradicionales de distintas tendencias como embajadores del Proceso. Videla compró la idea, sobre la base de dos argumentos: 1) ayudaría a mejorar la imagen del gobierno argentino en el exterior, donde empezaban a circular denuncias de violaciones masivas a los derechos humanos, y 2) permitiría confirmar su imagen interna de militar equilibrado, democrático y prudente, que era la imagen «diurna» que la Junta Militar se preocupaba por difundir. El presidente llevó entonces la propuesta a la Junta Militar, con una salvedad que era un entendimiento tácito desde los primeros días del gobierno: las designaciones de embajadores para países del Primer Mundo constituían en gran parte un coto privado del Ministerio de Economía. El dato refleja la alta prioridad que el régimen asignaba a la renegociación de la deuda externa argentina y a la afluencia de créditos, y muestra la estatura de «superministro» que Martínez de Hoz conquistó desde los primeros días.

Las relaciones entre los miembros de la Junta Militar todavía no habían tenido tiempo de deteriorarse, aunque Massera había tomado el hábito de recordar en casi todas las reuniones que la situación era irregular y que en algún momento debería procederse a la designación del «cuarto hombre». La costumbre irritaba crecientemente a Videla porque lo veía como un cuestionamiento a su autoridad y a su cargo y como una falta de respeto, por más que Massera se esmerara en esa época por tener el tacto de recordar el tema en forma breve y a veces sólo en el medio de un comentario jocosos. Cuando Videla llevó la propuesta de los embajadores civiles a la Junta, el almirante, con estudiada distracción, votó a favor porque intuía que podía convertirse en un importante punto de fricción entre los comandantes de línea dura y la cúpula «negociadora», «moderada» y «civilista» del Ejército. ¿Acaso los políticos civiles de los que hablaba Videla no eran «subversivos» y «corruptos» a los ojos de Saint Jean, Suárez Mason, Menéndez y los otros? Massera no perdería oportunidad de subrayarlo a fuego.

Las primeras reuniones para designar embajadores fueron largas, tormentosas, febriles y extenuantes. Villarreal y Yofre habían entregado a Videla listas de nombres y destinos que incluían a políticos como Héctor Hidalgo Solá, Rubén Blanco, Miguel Ángel Zavala Ortiz, Hipólito Jesús Paz, Luis María de Pablo Pardo, Arnaldo Musich y Carlos Florit. El radicalismo predominaba en esta lista, de acuerdo con la filiación de Yofre. A su vez, el general Liendo, ministro de Trabajo, había propuesto al

desarrollista Oscar Camilión como embajador en Brasil. Cada una de estas propuestas era recibida por Massera con rostro pétreo, objeciones firmes y una negativa dura. Argumentaba que el Proceso se había iniciado para abrir una nueva etapa en el país, y que no se podía dar el rango de embajadores en el exterior a quienes precisamente representaban el pasado de corrupción, mediocridad y decadencia que había puesto a la República al borde del abismo. Videla, cauto y tímido, interpolaba objeciones al discurso del almirante. Massera entonces subía la voz, haciendo gala de una profunda indignación ante los intentos de persuasión de Videla. «¿Sabés quién es este señor?», exclamaba cualquiera fuere el nombre que se estaba considerando. Calculadamente nervioso, agitado, violento, Massera sacaba entonces de una carpeta una foja de antecedentes diseñada para pintar al personaje de marras bajo las peores luces, que alternativamente leía en voz alta o arrojaba al centro de la mesa en torno de la cual estaban reunidos. Trataba a Videla como a un perfecto idiota. Además, el almirante, pretendiéndose ofendido, no dejaba de subrayar reticentemente, como si hacer el señalamiento le molestara caballerescamente un poco, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había sido asignado a la Marina, y que ya era bastante con que la Marina y la Fuerza Aérea estuvieran soportando una «situación excepcional» con respecto al «cuarto hombre» como para que encima se pretendiera avasallar una jurisdicción que ya había sido pactada. Videla, bajo el imperativo de conservar la unidad, intentaba conciliar, mientras empezaba a acumular resentimiento por el desenfado y la insolencia crecientes de su extravertido interlocutor naval.

Las resoluciones de la Junta se decidían por votación, lo que implicaba que Videla y Massera tenían que recurrir frecuentemente a Agosti para que desempatará. El hecho explica que algunas de las designaciones propuestas por Videla, como las de Camilión e Hidalgo Solá, iteran aprobadas pese a la oposición de Massera, mientras otras, como la de Hipólito Jesús Paz, resultaran vetadas. Sin embargo, apenas terminaba la reunión, Massera se apresuraba a juntarse con el contralmirante Fracassi, que lo esperaba afuera y que era su principal operador político, y lo instruía para que llamara a Camilión y le dijera que la Marina lo había propuesto en la Junta Militar para embajador en Brasil y que su nombre había sido aceptado, o que llamara a Paz para comunicarle que, pese a que su nombre había sido propuesto por la Marina para una importante embajada, el Ejército y la Fuerza Aérea habían impedido su designación. Con los militares duros del Ejército la versión se modificaría, adaptándose más a la realidad: Massera habría vetado todas las designaciones aprobadas, que se habrían impuesto por la creciente y traicionera influencia de Viola, Villarreal y Yofre. Viola, Villarreal, Liendo y Yofre empezaron pues, a perfilarse desde temprano como los principales antagonistas políticos de Massera dentro del gobierno.

## Diez

Massera, un lector de Clausewitz, tendía a tomarse al pie de la letra la fórmula de que «la guerra es la continuación de la política por otros medios», como también lo hacían los aliados a los que empezaba a cortejar dentro del Ejército. Las actitudes duras dentro de la Junta debían ser subrayadas con sangre mediante actitudes duras en las calles. El principio implicaba que los procedimientos «por izquierda» desbordaran el escenario de la lucha contra la subversión y empezaran a operar dentro de las disputas políticas del gobierno.

A mediados de 1976, los sectores de la línea dura del Ejército empezaron a dirigir una creciente campaña de particular revisión histórica contra la figura de Lanusse, que se mantenía en un silencio extraño y a quien advertían como un potencial antagonista. Lo acusaban de haber entregado el país a la subversión, en una prédica insistente y machacona que terminó por hacerse un lugar común dentro del régimen militar. El general Lanusse se convirtió en una figura tabú y en una mala palabra, e incluso quienes lo miraban con simpatía dentro del gobierno tenían que cumplir la consigna y pretender que lo despreciaban tanto como los comandantes de Cuerpo. Ésta sería la simiente de importantes casos que estallaron en 1977.

La acción de Massera para subrayar en el terreno militar su identificación como «duro» comenzó, pues, con ataques laterales al antiguo entorno de Lanusse. Al mismo tiempo, las condiciones de clandestinidad, compartimentación y autonomía de los grupos de tareas le permitían mantener su propia relación con Lanusse en buenos términos, porque éste no podía saber exactamente quién decía la verdad y quién mentía cuando se trataba de distribuir responsabilidades entre las distintas armas sobre la ejecución de cada operativo. Massera empezó incluso a desarrollar una política personal de gentileza y amabilidad particulares hacia Lanusse, siendo el único miembro de la Junta Militar con quien el ex Presidente se entrevistaba a menudo. Massera recibía y escuchaba a Lanusse y departía con él en momentos en que a éste se le cerraban las puertas de su propio Ejército, pero al mismo tiempo se iría convirtiendo internamente en uno de los promotores más agresivos de la erradicación de Lanusse del escenario político.

El 14 de mayo de 1976, un grupo del GT 3.3.2 secuestró en su domicilio a Mónica Mignone, hija de Emilio Fermín Mignone, quien había sido ministro de Educación durante el gobierno de Lanusse. El mismo día otro grupo del GT 3.3.2 secuestraba a María Marta Vázquez Ocampo, hija del diplomático José María Vázquez (a la sazón ministro consejero en la embajada argentina en México) y a su esposo, César Amadeo Lugones. El 23 de mayo, unos cien hombres de la Infantería de Marina desplegaron un gigantesco operativo en una villa de emergencia del Bajo

Flores, donde Mónica Mignone y sus amigos desarrollaban una tarea de evangelización y prédica. Algunos de los detenidos en este operativo í^eron los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, y la joven catequista Mónica Quinteiro, hija del capitán de navío (RE) Oscar Quinteiro. Las averiguaciones de Vázquez, Mignone y Quinteiro sobre el paradero de sus respectivas hijas serían frustrantes y no llegarían a ninguna conclusión: los militares del Ejército decían que estaban en poder de la Armada; los de la Armada, que estaban en dependencias del Ejército. Cualquiera de las dos cosas podía ser verdad, porque la zona estaba bajo la jurisdicción compartida del I Cuerpo de Ejército y de la Escuela de Mecánica de la Armada, que además tenían un nivel de cooperación especial. Las negativas más furiosas se escuchaban en el nivel de los propios represores: así actuaron el capitán de navío Salvio Menéndez ante Quinteiro y el desequilibrado coronel Roberto Rualdés, segundo de Suárez Mason en la comandancia del I Cuerpo de Ejército, ante Mignone y Vázquez.

Irónicamente, Rualdés pareció haber querido confirmar las peores sospechas de estos últimos cuando los recibió en días separados con una pistola calibre 45 sobre su escritorio y les advirtió: «Yo puedo hacer de usted lo que yo quiera porque yo soy el señor de la vida y de la muerte. Acá abajo, en esta mazmorra, tengo treinta y tres hijos de militares presos y se van a pudrir aquí». Al margen del estilo extravagante de Rualdés, resultaba claro que el I Cuerpo empezaba a manifestar crecientemente su independencia y autonomía respecto del gobierno, los círculos influyentes de la sociedad y las propias Fuerzas Armadas. La Marina lo acompañaría en este punto, pero desde una posición más hipócrita: Massera negó personalmente a Quinteiro y Mignone, en distintas oportunidades, que sus hijas hubieran estado en la ESMA y hubieran sido asesinadas, lo que finalmente sólo pudo llegar a saberse a través de las indiscreciones de Harguindeguy —que detestaba a Massera— y de los testimonios coincidentes de Yorio, Jalics y otros prisioneros sobrevivientes.

Al ataque oblicuo contra amigos y miembros del entorno de Lanusse, Massera sumaba sus propios ataques de línea dura, subrayando cada vez más el principio de que nadie estaría a salvo de su política intransigente, fuera quien fuere y ocupara el lugar que ocupare. El 7 de junio, poco después de la desaparición de la hija del capitán de navío Quinteiro, secuestrada Adriana Landaburu, hija única del brigadier mayor (RE) Jorge Landaburu, que había sido ministro de Aeronáutica de un gobierno militar anterior. El secuestro se produjo en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, entre las localidades de Vicente López y San Isidro, un área que ya caía más directamente en el coto de caza privado de Massera, lo que hizo que el padre creyera en las versiones que le aseguraban que su hija, que era militante de la Juventud Universitaria Peronista, estaba en la ESMA. Con estos datos, Landaburu fue a ver personalmente a Videla, quien delante suyo se comunicó telefónicamente con Massera y con Agosti, instruyéndolos para que averiguaran si Adriana Landaburu estaba detenida en dependencias de alguna de las dos armas. Al día siguiente Massera llamó por teléfono

a la casa de Landaburu y le dijo que la Marina no había intervenido en el episodio. Interrogado por Landaburu sobre si Adriana no estaría en esos momentos detenida en la ESMA, Massera contestó: «En la ESMA no hubo ni hay detenidos». Algunos meses después, Landaburu recibiría información extraoficial de que su hija había estado detenida en la ESMA y había sido arrojada al mar.

Massera también atacó a figuras de la Unión Cívica Radical, como respuesta a la preeminencia que hombres de esa tendencia habían logrado conquistar en el entorno presidencial y en la estructura de representación diplomática, donde al menos diez embajadores radicales habían sido impuestos por Villarreal y Yofre gracias a la relación de fuerzas en la Junta Militar, pasando por encima de la Marina y de la opinión del ministro de Relaciones Exteriores, contralmirante César Alfredo Guzzetti. El 17 de agosto los líderes políticos radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya fueron secuestrados por un GT del Ejército en el sur del país y alojados en la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew. Solari Yrigoyen era conocido como un centroizquierdista defensor de presos políticos, y los marinos disfrutaron enormemente de la llegada a la base de uno de los hombres que más duramente había hablado contra ellos a partir de los hechos ocurridos en esa misma base hacía casi exactamente cuatro años. El aniversario de la masacre de Trelew se celebraba con una venganza particular.

Massera, en su alianza con el I Cuerpo, comenzó a sabotear deliberadamente toda insinuación de aperturismo político proveniente del entorno presidencial. Una ocasión para ello se le presentó cuando el inocuo Partido Comunista argentino solicitó del general Villarreal la autorización para festejar el cumpleaños de su histórico líder Rodolfo Ghioldi con una comida en el Hotel Español, en el centro de Buenos Aires. Villarreal concedió la autorización a cambio de que la difusión del hecho fuera posterior al festejo del cumpleaños. Sin embargo, el Partido Comunista debió cancelar sus planes celebratorios aceleradamente, ya que desde el Edificio Libertad se le hizo llegar la advertencia más inequívoca de que comandos de la Infantería de Marina atacarían el hotel en caso de que se desarrollara cualquier festejo. Massera se encargó personalmente de que el episodio fuera conocido por sus amigos de línea dura dentro del Ejército.

Jamás fue un hombre de opciones políticas unívocas, como sí lo eran Suárez Mason y su cinematográfico segundo. Massera instruía al mismo tiempo a sus operadores políticos, particularmente al capitán de navío Guillermo Arguedas, para que desarrollaran contactos con los sectores atacados, porque pensaba que formaban parte de lo que él creía era la ecuación argentina. Arguedas, por ejemplo, se reunía con frecuencia con dirigentes radicales como Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín, consultaba a jefes comunistas como Jesús Mira y se entrevistaba con jefes sindicales peronistas mientras Lorenzo Miguel estaba preso en un barco de la Armada. El país diurno y el país nocturno eran una dicotomía que seguía operando.

## Once

La forma en que Massera subrayaba sus posiciones duras a través de la represión encajó a la perfección con ciertos hechos que ocurrieron en 1976. El almirante insistía, por ejemplo, en la importancia operativa de la Capital Federal en la lucha contra la subversión, lo que era desdeñado por el Ejército en función de privilegiar los centros neurálgicos de la actividad industrial y la provincia de Tucumán. Massera, durante todo 1976, enfatizó que el Proceso estaba recién en sus comienzos, lo que era crecientemente rechazado por algunos altos jefes militares como Viola, que eran cada vez más sensibles a la generalizada opinión civil de que el fin de la guerra contra la subversión estaba a la vista y había que idear modelos de transición hacia lo que en esa época se definía como «una democracia responsable». Se juzgaba, por ejemplo, que la guerrilla estaba básicamente derrotada a fines de 1975, y que lo único que debía hacer el gobierno era extirpar sus últimos focos e imponer disciplina al díscolo poder sindical.

Sin embargo, esto no era exactamente así. A mediados de junio de 1976, el general Cesáreo Cardozo, jefe de la Policía Federal, fue asesinado mediante la explosión de una poderosa bomba puesta bajo su propia cama por Ana María González, una estudiante montonera amiga de su hija. El 2 de julio estalló una bomba aún más poderosa en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (antiguamente Coordinación Federal), que tradicionalmente había funcionado como policía política en la Argentina; el resultado fue 21 muertos y 63 heridos. El próximo atentado ocurriría en diciembre de 1976, con la explosión de una bomba en el microcine de la Subsecretaría de Planeamiento, con un resultado de 15 muertos y 19 heridos. Más tarde se produjo un atentado donde el contralmirante Guzzetti fue herido de bala en la cabeza en una clínica donde estaba internado; se salvó casi milagrosamente pero quedó impedido para seguir desempeñando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. A la luz de estos datos, era difícil pensar que la subversión estaba totalmente desarticulada en vísperas de la llegada de las Fuerzas Armadas al poder, y los mismos oficiales del Ejército que habían acordado con esa posición comenzaron a tener dudas. ¿Acaso los atentados no requerían de una extrema coordinación de inteligencia y operativa? La guerrilla podía estar derrotada en lo político, pero se mantenía como un adversario competente en la escena militar. Como los mismos militares no se cansaban de repetir, la guerra de las guerrillas no era una guerra tradicional sino una guerra sucia, y lo importante no era tanto el control de territorio en general que cada uno de los bandos pudiera detentar, sino la masa de terror que fuera capaz de producir.

Gradualmente, los militares empezaron a temer menos la ocupación de una provincia, una ciudad o un pueblo, y más los actos de microterror representados en el secuestro, el juicio o el asesinato de un alto exponente de sus fuerzas o de sus familiares. Cuando hablaban de una guerra no convencional, hablaban de una



microguerra, de una guerra que tendía a evitar las grandes batallas y a especializarse, de uno y otro lado, en el terror individual y concreto. La respuesta a esta microguerra fue la copia mimética y la distorsión: contra unidades celulares había grupos de tareas; contra asesinatos individuales había secuestros y masacres individuales, siendo las normas la indefensión de las víctimas y la calidad de la inteligencia previa al asalto. A la luz de todos estos datos y teniendo en cuenta que el lugar donde se habían desarrollado los últimos atentados terroristas era la Capital Federal, resultaba todavía más difícil negar a Massera el lugar de preeminencia que deseaba conquistar a través de la desproporcionada cantidad de represión que aspiraba a ejecutar. Massera había dicho que la Capital Federal era estratégica, y había asociado la falta de respuesta militar a simpatías de sectores del Ejército con los Montoneros, que habrían datado del Operativo Dorrego. El general Dalla Tea lo miraba nerviosamente cuando formulaba estos planteos. Saint Jean, en última instancia, tenía razón, y esto ayudó decisivamente a subrayar la importancia de Massera en el esquema político-represivo.

Las estructuras de que el Almirante Cero disponía para consumir su proyecto de máxima ilegalidad y de máxima legalidad eran el Gabinete de Asuntos Especiales y el Grupo de Tareas 3.3.2. Constituían su Armada imaginaria, la Armada que él armaba. En ambos se habían producido modificaciones importantes, ilustrativas de la posición de Massera y la Marina durante esa etapa temprana del Proceso. Ya que, en cierto modo, el Gabinete de Asuntos Especiales era el GT 3.3.2 en su fase diurna, mientras el GT 3.3.2 era el Gabinete de Asuntos Especiales en su fase nocturna. Las dos eran instituciones creadas *ad hoc*, ligeramente transgresoras, interruptoras del orden naval y politizadamente corrosivas de la cadena de mandos. Eran los lugares preferidos de Massera, cuya misma integración daba idea del proyecto político que él se proponía desarrollar, y cuyo rol privilegiado suspendía la vigencia del riguroso orden naval e instalaba otro orden. El GT era el brazo armado del Gabinete, y los dos operaban como expresión directa de la voluntad de Massera. Constituían el partido político-militar naval de la época, el equipo doble de que Massera disponía para que sus órdenes e intenciones se cumplieran inmediatamente. La estructuración de estos dos grupos sólo quedó definida en el segundo semestre de 1976.

El Gabinete de Asuntos Especiales quedó bajo la dirección del capitán de navío y luego contralmirante Enrique Montemayor, quien representaba lo más próximo a un nacionalista que hubiera integrado el arma y transformó su anterior oposición a Massera en una actitud de respaldo incondicional. Sin embargo, la relación entre ellos era puramente institucional: Montemayor nunca volvió a ver a Massera después de que este último pasó a retiro. Un miembro importante y sintomático del Gabinete era el capitán de navío José L. Segade, que organizaba múltiples contactos políticos para su jefe y no pudo acceder al grado de contralmirante por la oposición de los almirantes en actividad, que lo consideraban un personaje turbio. Massera, líder carismático de la Marina, fracasó en el intento de ascenderlo, y en una etapa del Proceso fracasó incluso en el intento de determinar en qué oficina debía trabajar: él le

había adjudicado un escritorio cercano a su propio despacho, en el piso 14 del Edificio Libertad, pero tuvo que cambiarlo de piso por la oposición de la totalidad del cuerpo de altos oficiales navales. Arguedas, por su parte, organizó principalmente los contactos sindicales de Massera; en una época se llegó a decir que durante el Proceso había dos CGT: la que organizaba el general Liendo y la que organizaba el almirante Arguedas. El capitán de navío y luego contralmirante Carlos Alfredo Vahinger era la cabeza política más destacada y brillante del equipo; anteriormente había sido un oficial básicamente neutral y profesionalista y sólo después se convirtió en masserista. El capitán de navío y más tarde contralmirante Ramón Arosa, que con el tiempo llegaría al grado de almirante y comandante de la Armada, también revistaba dentro del Gabinete. Otro de sus integrantes era el capitán de navío Joaquín Gómez, que en la etapa agónica del Proceso se peleó con todos los anteriores y lanzó una apuesta frustrada a convertirse en ministro de Defensa del gobierno constitucional emergente. El elenco estable se completaba con el capitán de navío Aldo Fernández, quien había reemplazado a finales de 1975 al capitán de navío Pedro Ventureira como jefe de la Casa Militar y tendría un importante papel en el anudamiento de los contactos eclesiásticos de Massera.

Vista retrospectivamente, la estructuración del gabinete y del alto mando naval podría dividirse en grados de fidelidad a Massera. Había incondicionales: el capitán Segade, para quien Massera representaba su única carta de acceso al almirantazgo; el capitán de navío (luego contralmirante) Horacio Zaratiegui, a quien la mayoría del cuerpo de oficiales de la época consideraba un imbécil y un delirante y que se destacaba por su perruna fidelidad hacia el almirante; Montemayor, quien haría un tránsito relativamente indoloro desde el nacionalismo de derecha de su familia y de Gómez Beret al nacionalismo *sui generis* de Massera; el capitán y luego contralmirante Humberto Barbuzzi, secretario general de la Marina, y el capitán de navío Aldo Fernández, un ingeniero maquinista que debía a Massera su instalación en un significativo puesto político como era el Gabinete de Asuntos Especiales. También estaban aquellos que podríamos definir simplemente como leales: los ya citados capitanes (luego almirantes) Arguedas y Vahinger, y Emilio Ossés, que mucho tiempo después se desempeñaría como jefe del arma.

El organigrama del brazo armado de este Gabinete quedó constituido por Chamorro, Vildoza y Acosta en los principales puestos de mando, a los que se subordinaban los tenientes de navío Antonio Pernía, Jorge Perrén y Juan Rolón, los tenientes de fragata Schelling, Alfredo Astiz, Eugenio Dunda y Jorge Radice, el mayor de Ejército Juan Carlos Coronel, suboficiales navales e integrantes de la Prefectura y de la Policía Federal. Un principio de las actividades del GT consistía en adelantarse al Ejército y las otras fuerzas de represión y tratar de obtener la mayor cantidad y la mejor calidad de detenidos, y el número de muertes más alto. Un logro importante del GT 3.3.2 fue la captura de la jefa montonera Norma Arrostito, a quien se mantuvo viva por tres años y que constituía una suerte de «atracción especial» que se mostraba

a jefes militares y eclesiásticos que visitaban la ESMA y que tenían interés en conocer a una de las personas que habían participado en el asesinato de Aramburu. La ESMA también realizaba «canjes» y «préstamos» de prisioneros con las otras dos armas.

El GT 3.3.2 se distinguió también por consumir la desaparición de los dos escritores y periodistas más identificados con el movimiento guerrillero: Haroldo Conti, simpatizante del ERP, secuestrado y asesinado en abril de 1976, y Rodolfo J. Walsh, de Montoneros, en 1977. Conti había tenido buena relación con oficiales navales en el pasado, y fue advertido dos veces por marinos amigos de que le convenía abandonar el país, pero hizo caso omiso de los dos avisos e incluso respondió agresivamente al segundo de ellos. El secuestro se produjo en su domicilio, donde Conti comenzó por sentar de una trompada a uno de los oficiales que lo esperaban para llevarlo. Horas después, moría en la ESMA. Con Walsh, el creador en 1976 de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), el intento de secuestro se realizó en los alrededores de la Plaza Constitución. Cuando el escritor vio que un grupo de hombres se le aproximaba, hizo el ademán de sacar un arma de un bolsillo interior de su saco. Los «operativos» entonces abrieron fuego, para comprobar después que Walsh estaba desarmado, y que el gesto de sacar un revólver había sido una mera estratagema para evitar entregarse vivo. Walsh murió en la ESMA horas después.

El caso de Rodolfo Walsh merece una atención particular. La agencia ANCLA comenzó a funcionar en 1976 como un medio alternativo de distribución de noticias. Los «cables» de la agencia, que eran distribuidos por correo, divulgaban los pormenores de la «guerra sucia», particularmente en el ámbito de la ESMA, y las desintelencias entre sectores del gobierno. Generalmente bien informada, ANCLA crearía confusión y desconcierto entre los militares gobernantes: el Ejército en un momento pensó que se trataba de una maniobra de la Marina, mientras la Marina recelaba del Ejército, y dentro de la Marina hubo sospechas recíprocas entre el grupo de tareas de la ESMA y el Servicio de Informaciones Navales. La sigla ANCLA contribuía a la confusión.

Walsh, primer investigador de los fusilamientos de 1956, era objeto de una especial enemistad por parte de los oficiales navales. Semanas antes de su muerte, había enviado y divulgado una «Carta abierta» a la Junta Militar en cuyos párrafos finales se manifestaba «sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles». Su hija Victoria, una periodista montonera, había muerto en diciembre de 1976 en un operativo del I Cuerpo dirigido por el coronel Rualdés. Meses después, testigos del operativo en que fue asesinado Walsh hablaron de un particular ensañamiento con el escritor, cuyo cuerpo fue virtualmente convertido en un colador.

Norma Arrostito, Haroldo Conti y Rodolfo Walsh constituían motivos de orgullo particular para el GT 3.3.2, porque se trataba de celebridades. Al mismo tiempo, desde la perspectiva del Gabinete de Asuntos Especiales, estos casos, así como la gran participación de la Marina en la lucha antisubversiva (más de 1.000 muertes durante 1976), daban verosimilitud al rol de la Armada como la línea dura del golpe, en alianza con los sectores duros del I Cuerpo.

Sin embargo, ya para mediados de 1976 se iban acumulando evidencias de que el GT 3.3.2 estaba desbordando las atribuciones que se le habían conferido en un primer momento y estaba siendo usado por Massera como medio para dirimir disputas políticas y para hacer avanzar intereses personales. Un indicio de esto fue el asesinato del capitán de la Marina Mercante Horacio Gándara, quien había denunciado la corrupción reinante en el entorno del almirante Gnani y se aprestaba a hacer lo mismo respecto de las gigantescas transacciones que se estaban empezando a realizar para el reequipamiento naval. Otro caso fue el asesinato del general Omar Actis, designado por Videla como presidente del Ente Autárquico Mundial '78 encargado de organizar el Campeonato Mundial de Fútbol, quien fue muerto con disparos de ametralladoras pesadas mientras conducía su auto en el Gran Buenos Aires. El caso Actis fue particularmente sugestivo porque el general pretendía restringir las tendencias al gasto faraónico de su segundo, el contralmirante Carlos Alberto Lacoste, y porque su asesinato se consumó a poca distancia de una dependencia policial, cuya inactividad en el momento de los disparos sugirió que alguien había llamado pidiendo «zona libre». Los ejecutores de Actis abandonaron el lugar arrojando volantes apócrifos de un inexistente «Ejército Revolucionario Montonero». Aún más sugestivo fue que el contralmirante Lacoste estuviera ausente en el velatorio de Actis, al cual sólo concurren Videla y unos pocos oficiales más, y que la noticia fuera relegada a las páginas interiores por la prensa censurada de la época.

Los casos de Gándara y de Actis no pudieron ser concluyentemente probados: el primero es una denuncia de Rodolfo Walsh y el segundo una masa de evidencia circunstancial que apunta hacia Lacoste y la Marina. Sin embargo, la nube de sospecha que se proyectó en ambos casos sobre la Armada se puede ver como un anticipo de hechos que ocurrirían más tarde y que modificarían la naturaleza del GT 3.3.2.

## Doce

La represión, la tortura y el asesinato eran en la ESMA constantes, ininterrumpidos, alternativamente exasperantes y monótonos. Cada tortura insensibilizaba una porción mayor de la personalidad de los torturadores y abría el espacio de legalidad para la comisión de nuevos y más atroces tormentos. Además, como la tortura tendía a separar a quien la aplicaba del resto de sus semejantes, aquél tendía a identificarse cada vez más con el endogrupo de torturadores y represores. Los torturadores eran la fuente de legitimidad que él necesitaba para poder enfrentar el mundo exterior. La tortura, de esta manera, instalaba un mecanismo de repetición, un dispositivo autoperpetuante, donde las propias dudas y vacilaciones del hombre que la había consumado solamente se ahogaban y sofocarían en la descarga de rabia ciega e impotente que se consumaba en nuevos actos de tortura. La ESMA se construía en la forma de una fábrica de torturas, y la producción de torturas tendía a reproducirse a sí misma, del mismo modo que la delación por parte de los prisioneros «quebrados» tendía solamente a producir más delación.

La monotonía del horror no dejaría de tener efectos sobre los torturadores. Ya a finales de 1976 se empezaban a detectar cuadros prepsicóticos. Los torturadores comenzaron a desarrollar alucinaciones, visiones de cadáveres semidescompuestos que se levantaban de las mazmorras de «Capucha» y se les abalanzaban, mostrándoles las heridas sufridas en las repetidas sesiones de tormento. Otro síndrome común era la generalización de la violencia: los torturadores, a quienes sus superiores habían indicado que debían reproducir sobre los cuerpos de sus víctimas el principio del máximo de violencia sobre el territorio enemigo, empezaron a castigar violentamente a sus esposas e hijos. Ocurría como si la violencia, una vez autorizada, no pudiera ser desactivada en ninguna parte, e invadiera cada ámbito de la vida del torturador. Su verdadera familia se encontraba en el GT 3.3.2 y en los prisioneros a quienes creían que recuperaban para su causa. Sin embargo, cuando se preguntaban cuál era su causa, no podían ver más que las torturas y los asesinatos, y que su causa se reducía, en cierto modo, a la legitimidad que la existencia del enemigo tendía a dar a los actos que realizaban. A partir de esto se desarrollaba una tendencia a la identificación con los enemigos concretos, representados en los cuerpos vivos semiputrefactos de violencia que sobrevivían en la ESMA. Los torturadores tenían una relación ambigua con los torturados, con quienes ejercían la violencia y trataban de relacionarse alternativamente. Una sesión de tortura podía ser seguida poco después por un intento de conversación, donde el torturador intentaría convencer al torturado de la falta de razón de sus consideraciones políticas. Impotente, sin embargo, para persuadir de verdad a su aterrorizado esclavo, y vagamente consciente de que sólo estaba dialogando consigo mismo, el torturador, en el próximo acto, convertía esa impotencia en nueva furia, y volvía a torturar con saña renovada. O, por

el contrario, caía víctima de su propio embrujo, y creía que el subversivo había sido vencido dentro del cuerpo del otro, y el «quebrado» podía ser cooptado.

Los arranques de misticismo y delirio eran frecuentes entre los torturadores. Acosta fue uno de los ejemplos más salientes en ambas categorías. Solía recorrer los hediondos tabiques de aglomerado que constituían las celdas de los prisioneros repitiendo que lo que se hacía en la ESMA era un «acto de amor», y era capaz de irrumpir en los calabozos de prisioneros ya presuntamente «recuperados» para contarles que se le había ocurrido un plan absolutamente genial para derrumbar la economía de Chile imprimiendo moneda chilena falsa. Con el misticismo tendía a influir en alto grado la sostenida prédica de la mayor parte de la Iglesia Católica argentina, que equiparaba la tortura en el Proceso a la tortura bajo la Inquisición, y absolvía y autorizaba a los torturadores a través de visitas, confesiones y hasta ceremonias públicas. El delirio y una actividad mental febril e ininterrumpida, combinada con frecuentes casos de insomnio y tendencia a la hiperactividad, nacían de una combinación de omnipotencia con miedo, que llevaba a imaginar continuamente nuevas cosas para ocupar la mente y a intentar encontrar en los prisioneros alguna señal de reconocimiento que simbólicamente los absolviera. Sin embargo, solamente encontraban más miedo.

A fines de 1976, Massera percibió los riesgos inherentes a construir un grupo delimitado de personajes como únicos ejecutores y torturadores, y diseñó un ingenioso dispositivo de implicación, complicidad y distribución de culpas. Inventó una rotación de oficiales similar a la que había establecido para el Operativo Independencia en Tucumán, por la cual marinos con otros destinos pasarían unos 45 días en la ESMA como integrantes del grupo de tareas; negarse era posible pero no aconsejable, ya que quien lo hiciera perdería toda expectativa de ascender y debería languidecer en un escritorio hasta su retiro. Massera tendería incluso a convertir en norma el hecho de que quienes más cerca suyo se encontraban hubieran presenciado al menos una sesión de torturas. Ninguno de quienes lo rodeaban debía poder sentirse inocente; él quería tener la seguridad de que todos los que se sentaran a su mesa en calidad de íntimos tuvieran las manos manchadas de sangre y no pudieran lavárselas al estilo de Poncio Pilato. El crimen debía ser de todos.

A su experimento de crimen compartido, Massera sumaba la dosis de legitimidad que involucraba la frecuente visita a la ESMA de oficiales del Ejército. Nadie debía imaginar que operaba solamente por orden de Massera, ni que era víctima sólo de la Marina y del microuniverso de la Escuela de Mecánica de la Armada. Los vicealmirantes Armando Lambruschini y José Antonio Vañek y los capitanes de navío Gualter Allara y Pérez Froio (Cancillería) eran frecuentes visitantes de la ESMA, pero también lo eran oficiales del Ejército como los generales Guillermo Suárez Mason y Leopoldo Fortunato Galtieri y el coronel Ricardo Rualdés. Este último, cuya hija había sido exterminada por la subversión, un día entró extraviado

en la celda de una prisionera de la ESMA y le preguntó, cerrando los ojos y tocándole la frente:

—¿Cuántos años tenés?

—Veintitrés.

—Los mismos que tendría mi hija.

El mismo Massera no pudo evitar verse contaminado por una parte del misticismo de los torturadores, por la misma ciega conciencia de destino, y por una involuntaria religiosidad. A fines de 1976, acompañado por Acosta y otros oficiales del GT, gritó un «¡Feliz Navidad!» a unos treinta prisioneros encapuchados, engrillados y sanguinolentos, y en la Navidad de 1977 dio instrucciones para que se celebrara una ceremonia formal para los «recuperados» y «en proceso de recuperación<sup>^</sup>), con una misa y las posteriores confesiones, mientras los participantes podían escuchar los gritos desgarradores de los prisioneros que estaban siendo torturados en ese mismo momento.

## Trece

Massera, durante esta época, comenzó a realizar declaraciones públicas que parecían oscilar entre un extremo cinismo y un doble o un triple sentido. Mientras sacerdotes como Yorio y Jalics permanecían en las mazmorras de la ESMA, y poco después de que el padre Pablo María Gazarri fuera asesinado por el GT 3.3.2 a pesar de la intervención del cardenal Eduardo Pironio, el almirante contestaba en marzo de 1977 a una pregunta de la revista *Familia Cristiana* sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado de este modo:

El general Videla, el brigadier Agosti y yo, integrantes de la Junta Militar, órgano supremo de poder en la Argentina, somos católicos y católicos practicantes. Como católicos que somos conocemos muy bien los límites del Poder Temporal y el área de responsabilidad de una institución que tiene como Maestro al Dios hecho hombre que dijo: «Mi Reino no es de este mundo»^ Nosotros, cuando actuamos como Poder Político, seguimos siendo católicos. Los sacerdotes católicos, cuando actúan como Poder Espiritual, siguen siendo ciudadanos. Sería pecado de soberbia pretender que unos y otros son infalibles en sus juicios y decisiones. Sin embargo, como todos obramos a partir del Amor que es el sustento de nuestra religión, no tenemos problemas y puedo asegurarle que las relaciones son óptimas, como corresponde a cristianos.

El 14 de agosto de 1977, año en que el antisemitismo comenzó a propagarse rápidamente en las Fuerzas Armadas, incluyendo principalmente a los aliados de Massera en la línea dura de Buenos Aires, el almirante emitió un mensaje referido al Año Nuevo judío donde decía cosas como éstas:

A ustedes, que llevan sobre sí el peso de un dolor que viene de muy lejos.

A ustedes, en quienes la historia repite la resurrección tenaz de la tragedia, casi como un perverso milagro de crueldad.

A ustedes, en este día religioso y trascendente, los hombres de la Armada les decimos paz, y les pedimos que, implorando juntos al Dios compartido que tenemos, contribuyamos para que esa paz alcance a todos los hombres de corazón limpio, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su fe.

Los ojos de los periodistas de *La Opinión* registraban cada día cómo quedaban desocupados los escritorios de sus colegas que habían sido secuestrados por los grupos de tareas durante la noche anterior, pero en el cocktail de homenaje a la prensa llevado a cabo a fines de 1976 el almirante decía: «Necesitamos un Poder Informativo capaz de jugarse por sus ideas». Y en septiembre de 1977, ante la Cámara Argentina



de Anunciantes, afirmaba: «La revolución que sufren los medios de difusión es naturalmente subversiva, pero esto no es necesariamente malo, siempre que no se le sume la otra subversión, la destructiva^ »

Al mismo tiempo, Massera parecía desarrollar de a ratos un esquivo y peligroso coqueteo con la verdad. Un tímido periodista extranjero le preguntó, por ejemplo, en 1977:

—En el exterior llegan informaciones, no pocas veces intencionadas, según las cuales en la Argentina, presumiblemente, no se respetarían suficientemente los derechos humanos, llegando a decirse, inclusive, que hay personas a quienes injustamente se habría privado de libertad o se les habría quitado la vida. ¿A qué atribuiría el Señor Almirante tales versiones? ¿Cuál es su opinión al respecto?

A lo que Massera contestó a boca de jarro:

—¿Qué duda le cabe de que en la Argentina no se respetan los derechos humanos, se priva injustamente de la libertad y se cometen asesinatos? —Pero acto seguido aclaró:

—¿Qué significa, si no, la larga, la inmensa lista de miembros de las Fuerzas Armadas, del empresariado, de los dirigentes de la comunidad y de personas ajenas a la política, mujeres y niños, asesinados sin misericordia o mantenidos durante meses en las llamadas «cárceles del pueblo» en condiciones de vida que resultarían agraviantes para el más despreciable de los animales?

Otro juego de doble sentido vino referido a los grupos de tareas que a fines de 1976 ya habían dividido la Argentina en feudos. El almirante dijo: «No vamos a tolerar que la muerte pueda andar suelta en la Argentina».

Una consigna de los Montoneros era «Venceremos / Patria o Muerte»; Massera retrucaba: «No vamos a luchar hasta la muerte, vamos a luchar hasta la victoria, esté más allá o esté más acá de la muerte».

La frase cínica y el doble y triple sentido se convertían en constantes del estilo de Massera, pero eran tan constantes que dejaban de ser meras frases descaradas y ensayos con los sentidos de las palabras. A través del discurso cínico, burlón y peligroso puede detectarse la esencia informe de una confesión, una suerte de inconsciente deseo irreprimible de decir la verdad. Se diría que la historia de la ESMA hablaba a través de Massera, interrumpiendo su discurso oficial, y que incluso la exageración extrema de la mentira constituía una forma de desafiar al otro, de decirle la verdad a través de una mentira increíble. También se manifestaba en esto el rasgo de jugador de poker del almirante, su naturaleza de apostador y su deseo vicioso de disfrutar la situación de quien se encuentra en una zona de peligro y de un momento

a otro puede ganarlo o perderlo todo. Sucedió como si el aburrimiento de las ceremonias militares, el deseo de violentar la escena y la intención de dirigir un mensaje soterrado confluyeran subterráneamente en un solo discurso.

Había también, sin embargo, un fuerte regusto a transgresión, una voluntad de jugar el papel del niño travieso en medio de las ceremonias estratificadas del poder militar y la respetabilidad civil. Massera, en el fondo, se representaba a sí mismo como un marginal que hacía burla a los cánones establecidos y reivindicaba la subversión en algún sentido.

## Catorce

El 2 de noviembre de 1976 Massera pronunció un discurso titulado «Los muertos por la Patria» que vale la pena citar extensamente:

No vamos a tolerar que la muerte pueda andar suelta en la Argentina.

Lentamente, casi para que nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su impunidad sobre los desprevenidos y los inocentes, en medio de la incredulidad de algunos, de la complicidad de otros y el estupor de muchos.

Había comenzado la guerra, una guerra oblicua y diferente, una guerra primitiva en sus procedimientos pero sofisticada en su crueldad, una guerra a la que tuvimos que acostumbrarnos de a poco, porque no era fácil admitir que el país entero se veía forzado a una monstruosa intimidad con la sangre.

Entonces empezó la lucha.

Todos tuvimos bajas. Hombres públicos y hombres anónimos, mujeres y niños, civiles y militares, de las Fuerzas de Seguridad y de las policías, fueron alcanzando, hora tras hora, dolorosa notoriedad en las páginas de los diarios, y casi no hubo noche en la Argentina que no se cerrara sobre un nuevo llanto (^)

En un primer análisis, parecería que sólo están en pugna ideologías de signo opuesto, pero si se penetra su esencia se advierte que las concepciones filosóficas y políticas enfrentadas son casi excusas intelectuales de un mal mucho más desgarrador.

Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida.

Y esto es anterior a una política o a una ideología. Esto es una actitud metafísica.

Estamos combatiendo contra nihilistas, contra delirantes de la destrucción, cuyo objetivo es la destrucción en sí, aunque se enmascaren de redentores sociales; por eso vemos sus inexplicables alianzas; por eso vemos sus inexplicables víctimas, muchísimas de ellas sin valor estratégico ni táctico; por eso los vemos escribir en las paredes: ¡Viva la muerte! Y ésta es la única vez que dicen la verdad (^)

Por eso los que estamos a favor de la vida vamos a ganar, porque mientras nosotros luchamos para ganar la paz, ellos luchan para mantener la guerra; por eso los que estamos a favor de la vida no vamos a tolerar ningún pacto, ninguna conversación, y aquellos ambiciosos melancólicos —si los hay— que sueñan con persuaciones imposibles, no sólo serán considerados reos de alta traición a la Patria, sino reos de alta traición a la vida.

No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria, esté más allá o más acá de la muerte.

El discurso citado tiene todas las características de un clásico del almirante, realizado por los recursos literarios de Hugo Ezequiel Lezama: el inicial coqueteo ambiguo con significados que resultan ser los opuestos de los que finalmente se manifiestan (la «muerte anda suelta», la «monstruosa intimidad con la sangre», la «noche» y el «llanto», que en esa época de alta represión sólo podían asociarse a los grupos de tareas); las ambiciones trascendentales y filosóficas («una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista», «esto es una actitud metafísica»); la exhortación heroica («vamos a combatir hasta la victoria, esté más allá o más acá de la muerte»), y la pieza clave de significado político, que es el rechazo al «pacto», a la «conversación» y a los «ambiciosos melancólicos que sueñan con persuaciones imposibles». El discurso, que parecía ser sobre la lucha antisubversiva, terminó resultando una pieza oratoria contra la apertura política y el diálogo con los civiles.

Los militares del Ejército, particularmente los cuadros medios identificados con la dureza programática de los comandantes de Cuerpo, empezaron a escuchar con atención, interés y simpatía los discursos del comandante en jefe de la Armada. Massera daba articulación, lenguaje, heroicidad, dignidad metafísica y belleza literaria a lo que dentro del Ejército era solamente el discurso brutal, balbuceante y semianalfabeto de la maquinaria de represión, expresado en la oratoria rígida y desprolija de generales como Menéndez y Suárez Mason y el estilo reaccionario o anticuado de Saint Jean. El almirante parecía cortar camino a través de las rígidas estratificaciones del lenguaje militar y dirigirse directamente al cuerpo de oficiales, a sus corazones y a sus aspiraciones de grandeza, con un lenguaje al que sus propios comandantes eran incapaces de acceder. Massera llegaba así al final del año 1976 con una buena masa de admiradores entre los oficiales del Ejército y generales y funcionarios «duros» como Suárez Mason, Saint Jean, Rualdés, Azpitarte y Santiago Omar Riveros, este último comandante de Institutos Militares y de la guarnición Campo de Mayo. El único que escapaba a esta ecuación era el general Luciano Benjamín Menéndez, comandante de línea dura del III Cuerpo de Ejército (Córdoba), cuya relación con Massera se distinguía por una fuerte y recíproca antipatía personal.

Al mismo tiempo, en sus contactos personales con la sociedad civil, con la prensa extranjera y con los familiares de víctimas encumbradas de la represión,

Massera empezó a desarrollar el papel del hombre con quien se podía hablar, el intelectual sofisticado del régimen militar a quien se podía acceder para conseguir determinada información. «¿Quieren saber dónde está X? —diría, por ejemplo, en reuniones con corresponsales de la prensa extranjera—. Muy bien, se los voy a decir, pero no me pueden citar: está vivo y está en Campo de Mayo». O bien: «Murió en enfrentamientos con el grupo de tareas de la Fuerza Aérea», o «Murió, pero no puedo decirles cómo ni dónde». La exactitud de estas informaciones era una cuestión diferente; lo que contaba era su disposición a hablar, que lo ubicaba en una posición distinta de la de sus pares de la Junta Militar, de los que solía burlarse en público, particularmente de Videla. Una constante de las informaciones que daba era que generalmente tendían a evitar que la culpa recayese en la Marina, dirigiéndola al Ejército, así como la advertencia reiterada de que se trataba de información confidencial que él se vería obligado a negar en público.

El coqueteo con la línea dura del Ejército trascendía la retórica y se expresaba en manifestaciones de solidaridad efectiva. A mediados de noviembre de 1976, esta línea manifestaba un creciente enfrentamiento con Viola y su proclividad hacia el diálogo político, y seguía expresando en parte esta posición elípticamente a través de los ataques contra Lanusse, quien ya había pasado a la ofensiva contra la represión clandestina. Uno de los ataques más significativos fue la denuncia formulada por el general Acdel Vilas sobre un supuesto plan de infiltración marxista en la Universidad del Sur, que estaría apañado por el embajador en la UNESCO y ex ministro de Educación del gobierno de Lanusse, doctor Gustavo Malek. Alertado de la denuncia, Malek regresó del exterior y exigió hacer una aclaración ante Viola, que coincidió con él, y ante el comandante del V Cuerpo, general Azpitarte, quien mantuvo una posición ambigua. El ataque de Vilas era motorizado desde la usina de poder de Saint Jean y Camps, y resistirlo implicaba disponer del apoyo de una fuente de poder todavía más alta. Además, la denuncia contra Malek había motivado la publicación en los diarios, en forma de solicitada, de una carta abierta de Lanusse defendiendo a su ex ministro, lo que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires equivalía en aquella época poco menos que al beso de la muerte.

El 30 de noviembre, Viola se decidió a tomar el toro por las astas y a comunicar a los generales Acdel Vilas, Juan Antonio Buasso y Rodolfo Mujica que pasaban a situación de disponibilidad, lo que implicaba la antesala del retiro. Vilas, identificado por los argentinos como el primer gran represor de Tucumán, se declaró en rebeldía, y Massera le dio asilo temporario en la Base Naval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. La dupla Videla-Viola disponía de suficiente poder para cortar las ramificaciones inferiores del sustento político de la dureza de los comandantes de Cuerpo, pero no del necesario para desplazarlos, y Massera aprovechó esta contradicción para sugerir a los sectores duros del Ejército que la Marina podía ser el factor que desequilibrara la balanza.

## Quince

A todo lo largo de 1976, Massera defendió su lugar en la Junta Militar y en las relaciones exteriores con tenacidad, energía, insistencia y una obsesividad entre fastidiosa y absurda. Insistía en que, constituyendo la Junta Militar el órgano supremo del Estado, él mismo tenía el rango de jefe de Estado, junto con Videla y Agosti, y que era incorrecto confinar los honores de jefe de Estado al primero. Su obsesión con el tema desató una interminable serie de malentendidos y dificultades diplomáticas, hasta que los representantes de los pocos países con los que la Argentina tenía una relación aceptable terminaron hartándose de la situación y preguntando burlescamente, por ejemplo, a sus colegas argentinos si los honores de jefe de Estado no deberían prodigarse sólo a la Junta en pleno y considerar en cambio que la visita individual de uno de sus integrantes era «solamente la visita de un pedazo de Junta», y a Videla como «sólo un tercio de jefe de Estado».

Massera, sin embargo, se tomaba la cuestión muy en serio porque creía que el reconocimiento internacional era un punto importante para su proyecto político, y que debía insistir en el tema, por más incómodo que resultara. A mediados de 1976, por ejemplo, el general Videla realizó una visita a Bolivia, donde fue recibido y condecorado por el presidente de facto, general Hugo Banzer Suárez, con quien firmó unos importantes acuerdos de cooperación económica. Massera se comunicó entonces telefónicamente con el agregado militar de Bolivia en Argentina y le explicó que la condecoración a Videla era «incorrecta» porque no se trataba de la máxima autoridad del Estado. El boliviano se limitó a transmitir la información a Banzer. Éste, meses después, devolvió la visita arribando a Buenos Aires un sábado por la mañana. El presidente boliviano evitó todo contacto con la prensa y planteó que necesitaba entrevistarse con Videla inmediatamente. Videla accedió, y Banzer le contó la situación planteada por Massera. Seguidamente, le informó que había traído dos condecoraciones similares a la que le había impuesto a él para dárselas a Massera y Agosti y así equilibrar la situación, «si usted no tiene inconveniente». Agregó, entonces, que el único problema que le preocupaba era la validez de los acuerdos firmados con Videla en función de que éste no era la máxima autoridad del Estado, y le preguntó:

—Lo que yo quiero saber, general, es: usted *es* la autoridad argentina, ¿no?

El domingo, los diarios argentinos no publicaron una sola línea sobre la visita. El lunes, en cambio, la información se prodigaba ampliamente, con grandes fotos del almirante Massera siendo condecorado por Banzer.

Videla, ante la situación, convocó a una reunión de los altos mandos del Ejército. Menéndez, indignado, planteó allí mismo la propuesta de romper con la Marina, disolver la Junta Militar y asumir la totalidad del poder. Viola se opuso sobre

la base de consideraciones políticas, y ganó la discusión. El hecho dejó algunas de las primeras marcas de resentimiento entre el Ejército y la Marina, más particularmente entre Videla y Massera.

Los oropeles, las condecoraciones y los símbolos fascinaban desmedidamente al almirante. Otro incidente parecido ocurrió en junio de 1977, con motivo de una visita suya a Nicaragua y Panamá. Massera insistía siempre en usar el avión presidencial, donde reclamaba que hubiera el tipo de champagne que a él le gustaba tomar, y donde condescendía a aceptar langostinos si no había carne de langosta, una de sus comidas predilectas. El avión presidencial no siempre estaba disponible, ante lo cual Massera tronaba y desataba escándalos tan ruidosos como triviales. Sin embargo, en esa oportunidad sí estaba disponible. El único problema, que se planteó a último momento, era que Massera se proponía condecorar a los presidentes Anastasio Somoza y Omar Torrijos con la Orden del Libertador General San Martín, y la Cancillería le informó que solamente disponía de una de esas condecoraciones y necesitaba al menos quince días para que le hicieran la otra. Massera, que dominaba la Cancillería, urgió entonces que se la consiguieran del modo que fuera, y los atinados funcionarios de ceremonial apelaron a una solución tan funcional como poco diplomática: fueron a ver al cardenal Antonio Caggiano, ex arzobispo de Buenos Aires, y le rogaron que les prestara la condecoración similar que le había sido conferida años atrás por Isabel Perón, prometiendo devolvérsela en quince días. Caggiano, desconcertado, accedió, y su condecoración le a parar al uniforme de uno de los dos presidentes centroamericanos.

Al tiempo que buscaba ampliar constantemente su propio espacio de representación diplomática, Massera tendía a negárselo a Videla. Siempre encontraba objeciones para los viajes de Videla al exterior: que determinado país era una «cueva de subversivos y de marxistas», que «ir allí le hace el juego al enemigo», que «la visita va a ser usada para humillar a nuestro presidente con la campaña antiargentina que elementos subversivos desarrollan en el exterior».

Simultáneamente, él mismo se dedicaba a viajar lo más posible, con dos objetivos principales: comprar armamentos y desarrollar su propia campaña de relaciones públicas para divulgarse como el hombre en ascenso en el poder político argentino. Su participación en la logia P-2, que le abría un sinnúmero de puertas que de otro modo hubieran estado cerradas, le servía muchísimo para ambos fines. Massera, por ejemplo, fue abundante y pomposamente recibido por almirantes italianos, quienes le tributaron los honores de un jefe de Estado, y se convirtió en el principal contacto argentino con la industria militar alemana occidental, que en esa época tenía interés en eludir la prohibición de producir material nuclear establecida en los acuerdos de posguerra mediante la firma de convenios con países extrarregionales como la Argentina, donde pudiera desarrollar una suerte de tecnología nuclear *off-shore*. Massera, por su parte, estaba interesado en que las

fragatas misilísticas clase Meco que quería adquirir tuvieran propulsión nuclear. La propuesta de recuperar las Malvinas por la vía militar rondaba su mente como una eventual finta política que podía usar en determinadas circunstancias; con esto se coaligaba la ideología antianglosajona y latinista de la P-2, cuyo enfrentamiento primario era con el comunismo pero que también imaginaba para el futuro un mundo multipolar, con un bloque de poder anglosajón y un bloque de poder latino.

Así fue como Massera, que vetaba viajes de Videla a Italia o Venezuela por considerarlos países llenos de infiltración marxista, no tuvo inconveniente en visitar repetidas veces la Rumania de Nicolae Ceausescu y en tener entrevistas reservadas en Europa con el coronel libio Muammar Khadafy, con quien también tenían frecuentes contactos los líderes montoneros exiliados que Massera denunciaba en la Argentina. Todo esto tendría profunda influencia en los hechos políticos posteriores que produjo el Almirante Cero.



## Dieciséis

Al iniciarse 1977, el Servicio de Inteligencia Naval descubrió un caso de corrupción que involucraba a oficiales superiores del Ejército: se trataba de un proyecto de construcción por cuya adjudicación los oficiales cobrarían determinado porcentaje. El hecho no era inusual; a pesar de las prédicas del régimen contra la corrupción, «el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe completamente», aunque existieran casos de completa honestidad personal que el gobierno esgrimía para legitimarse, como el del austero general Videla. Massera recibió el informe sobre corrupción en su despacho del Edificio Libertad, lo leyó, interrogó a los agentes que habían intervenido en su elaboración y decidió darle un uso político inmediato.

Al día siguiente dio un resumen de sus contenidos en una reunión de la Junta Militar y reclamó algún tipo de acción ante los hechos. Videla reaccionó cautelosamente, tomando nota de los datos que le entregaba Massera y prometiendo tomar cartas en el asunto para comprobar la veracidad de la denuncia. Sabía, por lo demás que, si no lo hacía, Massera no cejaría de insistir día y noche con el asunto. Al mismo tiempo, su propia probidad y honestidad personales lo obligaban a exigir de sus subordinados el cumplimiento de las mismas normas de conducta que se imponía a sí mismo. A propósito de estas normas, es ilustrativa una anécdota de años posteriores. Videla solicitó un crédito a un banco para la compra de una vivienda, como si hubiera sido un ciudadano más, y poco después una disposición de su propio Ministerio de Economía lo convirtió en un acreedor moroso. Los directivos del banco en cuestión descubrieron aterrados que Videla era uno de sus deudores y se comunicaron con él para explicar su situación. Querían cancelarle la deuda, pero eso era ilegal y los dejaba en una situación expuesta ante miles de acreedores que podían reclamar judicialmente un trato parecido. Videla, siempre honesto y austero, reclamó del modo más seco y cortante recibir de los banqueros el mismo trato que el más vulgar de los ciudadanos. Finalmente, los banqueros diseñaron un esquema de cancelación de deuda «por izquierda» que los sacó a ellos y a Videla del engorroso dilema jurídico, político y moral.

Videla, ante la denuncia de Massera, confió la investigación del asunto a sus hombres de confianza en el Servicio de Inteligencia del Ejército. «Averiguá, que vas a encontrar», había sido la desdeñosa instrucción de Massera. La siguiente reunión de la Junta Militar contó con la presencia de Viola y dos oficiales de la inteligencia militar. Los datos aportados por Massera habían probado ser exactos. Viola estaba muy preocupado, ya que consideraba que uno de los puntos fuertes del régimen militar en esa época era su reputación pública de incorruptibilidad, y que la difusión del caso contribuiría a deteriorar políticamente al gobierno. Massera, a su turno, desarrolló la posición opuesta. Sostuvo que el gobierno, precisamente por ser

incorruptible, debía dar a conocer los hechos al público con la mayor veracidad, aplicando a los culpables lo que definió como un «castigo ejemplar».

Viola y Videla vacilaban. Como ellos mismos eran honestos, tendían a simpatizar con el argumento del almirante. Al mismo tiempo, desconfiaban de él, no lo creían honesto, y pensaban que utilizaría el caso para demostrar nuevamente que el arma verdaderamente incorruptible era la Marina. Viola, más negociador y más político que Videla, rompió el impasse preguntándole Massera:

—¿Cómo podemos arreglar esto?

A lo que éste contestó en un alarde de nerviosismo:

—¿Qué querés decir con «cómo podemos arreglarlo»? ¡Qué se yo! Aquí hay un caso, hay un hecho, hay una denuncia comprobada que no se puede negar.

El almirante manipulaba nerviosamente la carpeta con los antecedentes del caso, como si esa carpeta hubiera sido el caso, y como si ninguno de los jefes militares presentes pudiera eludir algo que había sido codificado y representado sobre el escritorio de la sala de reunión en la forma de la incómoda carpeta.

—¿A vos qué se te ocurre? —preguntó Viola.

—Hay que denunciarlo —insistió Massera.

Viola, entonces, sacudió la cabeza y dijo:

—^No, lo que yo quiero decir es: ¿cómo podemos arreglarlo? ¿No hay nada que a la Marina le interese tener?

Massera permaneció callado durante unos minutos. Había desarrollado acabadamente el arte del silencio, la construcción de un paréntesis en la comunicación del que no se podía saber si era el prólogo de una ruptura o el camino hacia la conciliación. Sus interlocutores militares nunca sabían si sus largos silencios no eran el anticipo de una escena de gritos y de insultos, y el almirante había aprendido acabadamente el arte de quedarse callado sólo cuando le convenía y cuando la atención de todo el mundo se depositaba en él.

Al cabo de esos minutos, que parecieron horas en la atmósfera tensa y de confrontación de la reunión, los labios de Massera se plegaron en una semisonrisa que despertaba brillos entre picarescos y soñadores en sus ojos y emitieron una respuesta tan consoladora como inesperada:

—Queremos tener a la Señora de Perón.

La reunión se distendió considerablemente, aunque las sospechas de los colegas militares de Massera subsistían. Ciertamente, era mejor entregarle a Isabel, que estaba recluida en una prisión del Ejército, que dar a conocer la denuncia, pero las sospechas tenían su razón de ser. Casi desde el mismo día del golpe, cuando el contralmirante Pedro Santamaría se había esmerado en desarrollar una particular cortesía como integrante de la comitiva de tres militares que detuvo a la Presidenta (los otros dos eran el general Villarreal y el brigadier Lami Dozo), Massera había hecho un hábito del cortejo a Isabel Perón. Sabía, por ejemplo, que los militares del Ejército tendían a tratarla como a una puta de cuartel; él, en cambio, le prodigaría sus encantos, la trataría como a una dama y haría lo posible por aliviar su cautiverio.

La presencia del capitán de navío Aldo Fernández resultaba un tanto inexplicable a simple vista dentro del núcleo de astutos operadores políticos que constituía el Gabinete de Asuntos Especiales del comandante en jefe de la Armada. Todavía más inexplicable era que Fernández hubiera ascendido al grado de capitán de navío, porque si bien no se trataba de un personaje sospechoso ni estaba bajo ningún tipo de objeción moral, era un hombre simple, un ingeniero maquinista sin ninguna inclinación política. Sin embargo, Fernández era quien le organizaba a Massera los partidos de tenis con el embajador del Vaticano en la Argentina, el nuncio apostólico Pío Laghi. Tales partidos se desarrollaban los sábados por la mañana en la residencia del embajador de Alemania, y el eclesiástico los justificaría más tarde como un intento de influir sobre Massera para que moderara la represión. El nuncio, un personaje más político que religioso, había enviado en 1976 un informe al papa Paulo VI donde explicaba que «la Argentina es gobernada como el Imperio Romano, con distintas áreas y feudos de poder compartimentados, que dependen de comandantes locales». El trato entre Massera y Pío Laghi era estrictamente formal, llamándose el uno al otro «Su Excelencia» y «Señor Almirante» respectivamente.

Con todo Pío Laghi era un eslabón importante en el proyecto político de Massera porque constituía su principal emisario y contacto con Isabel Perón. A través de él, Massera enviaba flores, bombones, saludos y manifestaciones de interés personal a la ex Presidenta, rogándole al mismo tiempo que no dudara en pedirle a través del nuncio cualquier cosa que necesitara. Meses después, cuando Isabel ya estaba recluida en la prisión naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires, Massera convirtió en un hábito sus visitas, sus cortesías y sus manifestaciones de interés por el bienestar de la prisionera. El tiempo pasado en las frías temperaturas del Messidor no había dejado de tener su impacto en la salud de la ex Presidenta; Massera se preocupó por ofrecerle una prisión de lujo, colmándola de atenciones, dotándola de una vivienda con mucama, buena comida y televisión en colores, y sugiriéndole además que era sólo la situación reinante en el país la que lo obligaba a mantenerla bajo arresto. Isabel, que había sido maltratada por el Ejército, estaba deslumbrada y hasta es posible que se sintiera atraída físicamente hacia el almirante, quien en esa época cultivaba fuertemente la imagen de «macho» y de *latín lover*.

Massera era un personaje que prefería negociar con sus antagonistas cuando éstos estaban encerrados y él tenía la llave de la prisión en su mano. A comienzos de 1977 podía jactarse de tener a las tres corrientes principales del movimiento peronista bajo arresto: Isabel (la derecha) estaba en Azul; Eorenzo Miguel y otros centristas estaban en el barco *Treinta y tres*, y unos 100 sobrevivientes de los Montoneros estaban en la ESMA, haciendo para él trabajo de archivo, falsificación de documentos y asesoramiento político. Imaginariamente, había arrestado al peronismo entero, al que consideraba como el hecho político inevitable de la República Argentina. Casi simultáneamente, comenzó su oposición a Martínez de Hoz.

## Diecisiete

A partir de 1977, Massera y Eezama empezaron a desarrollar una línea discursiva de fuerte resistencia contra el ministro de Economía, lo que terminaría convirtiendo a la Marina en una suerte de involuntario partido de oposición a la política económica dentro del gobierno, ya que no todos los almirantes estaban de acuerdo con enfrentar a Martínez de Hoz, y algunos de ellos se lo harían saber personalmente al propio ministro.

Sucedía que Massera había definido que su proyecto de poder político era imposible de cumplir sin la masa peronista, y la masa peronista era imposible de seducir con un programa económico monetarista duro como el dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz. Como Massera necesitaba, al mismo tiempo, hacer entrar en la ecuación a los sectores de línea dura del Ejército, a los cuales movilizaba como palanca en favor de su posición sobre el «cuarto hombre», el almirante tomó a su cargo la operación de redefinir de acuerdo con su conveniencia la ideología fundacional del Proceso.

Su estrategia discursiva arrancó con un «Nadie ha muerto jamás por el Producto Bruto Interno», concepto que resonó en todo el país mientras Martínez de Hoz defendía su cargo ante los jefes del Ejército argumentando en su favor precisamente el aumento de ese PBI. El 15 de agosto de 1977, en ocasión del día de la Armada, echó al ruedo otro concepto, matizando la defensa de Occidente con un toque tercermundista y anticapitalista:

Occidente, intoxicado de indiferencia, se fue replegando sobre sí, mientras que del antiguo esplendor de su espíritu, sólo un sistema económico parecía sobrevivir, como pobre testimonio último de una civilización que se refugiaba en sus cavernas de cristal y acero, al amparo de las computadoras, como si realmente no tuviera otra cosa que ofrecer.

Tenemos que reconquistar a Occidente. Pero, ¿qué es Occidente? Occidente es hoy una actitud del alma, que no está atada a ninguna geografía.

Con estos pretextos filosóficos lanzaba un ataque sobre dos francos: contra Martínez de Hoz y sus cavernas de cristal, acero y computadoras, y contra Estados Unidos, cuyo gobierno empezaba a presionar a la Argentina por las violaciones a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, el boletín político *Convicción*, —que se enviaba gratuitamente a la casa de los militares—, dirigido por Hugo Ezequiel Eezama, amplificaba este discurso:

¿Acaso es preciso concebir todo el motor de una rebeldía masiva orientada a obtener una reinversión de las utilidades en bienes de capital? ¿Acaso es posible concebir que se compongan sugestivas baladas para apoyar el crecimiento del Producto Bruto Interno? (...) Occidente guarda en el altillo a la Filosofía Griega y al Derecho Romano, despoja al Cristianismo de misterio y trata de convertir a la Iglesia en un ciclópeo Ministerio de Bienestar Social... Y así desprovisto de sus tesoros culturales. Occidente sólo se identifica con el capitalismo, que no pasa de ser un método de razonamiento económico. En este sentido, es pariente próximo del marxismo aunque se odien, pero el marxismo tuvo la viveza de difundir poco sus ideas y mucho sus ideales, para consumo de los desprevenidos. En medio de la tormenta, un Occidente decrepito, un Occidente adorador del becerro de oro, un Occidente mustio, salió a enfrentar a la orgía de heroísmo de los supuestos redentores sociales, ingenuamente armado con una máquina de calcular.

Ea orientación anti-Martínez de Hoz se profundizó durante el año, con declaraciones públicas donde se subrayaba la posición de un Occidente cristiano a reconquistar contra dos mundos antagónicos, que eran descritos como un falso dilema entre la «servidumbre al Estado o masas amorfas de consumidores compulsivos». Massera también divulgó falsos trascendidos sobre las inquietudes de sus propios almirantes respecto de la política económica, lo que en algunas ocasiones motivó a ciertos marinos a hacer saber a Martínez de Hoz que el descontento no era tal. Ea posición de Massera se acercaba a una duplicidad imposible; al promediar el año Martínez de Hoz lo encaró directamente en medio de una reunión de Junta y le dijo: «Almirante, quiero que me diga qué medidas de las que a usted no le gustan no fueron votadas por usted acá»

El creciente ataque de Massera contra Martínez de Hoz generaba reacciones mezcladas entre la oficialidad del Ejército. A nadie se le escapaba que Martínez de Hoz había convertido la economía argentina en una especie de casino público, donde era posible hacer fortunas especulando y apostando simplemente al retraso cambiarlo. Tampoco se ignoraba que las políticas del ministro causaban resistencia en amplios sectores obreros, por las tendencias al descenso del salario y a la desocupación que resultaban de la apertura de la economía. Como contrapartida, Martínez de Hoz había logrado una fuerte inyección de créditos en la economía, y el gobierno militar se beneficiaba de la actitud favorable de una clase media que podía tomar sus vacaciones en Miami y que se atiborraba de artículos electrónicos y suntuarios en los *free-shops* de los aeropuertos y en los principales centros mundiales de consumo, haciendo de las palabras «déme dos» una clásica expresión argentina. Al mismo tiempo, Martínez de Hoz había respetado escrupulosamente la parte del trato que establecía porcentajes fijos del presupuesto nacional para el reequipamiento militar de las Fuerzas Armadas; los militares no se podían quejar de él, salvo en la medida en que pudiera generar descontento social.

La actitud de Videla resultaba crecientemente decisoria en relación con el ministro de Economía. El Presidente había resuelto hacer una apuesta sin retorno con Martínez de Hoz, en parte por snobismo personal y en parte porque quería dar a uno de los empresarios y economistas más respetados del *establishment* económico argentino la oportunidad de desarrollar su programa sin exigencias, presiones ni plazos, dejando atrás un período en que los ministros de economía duraban sólo semanas. Martínez de Hoz fue, por lo tanto, beneficiario de una inédita estabilidad política conquistada al costo del sable desenvainado; hubo un momento en que se llegó a decir que ya no se sabía quién era fiasible de quién: si Martínez de Hoz lo era de la presidencia de Videla o era éste quien saltaría por los aires si se producía una crisis activada por su todopoderoso ministro.

Con todo, las posiciones de Massera contra Martínez de Hoz no tendían tanto a cautivar el auditorio militar como a captar un potencial auditorio civil. Massera incrementó su oposición al ministro en forma dosificada y constante durante todo 1977, 1978 y 1979.

## Dieciocho

El 18 de febrero de 1977 se produjo una novedad que incorporó un elemento importante a la estrategia de Massera dentro de la relación interfuerzas: Su Majestad británica laudó desfavorablemente para la Argentina en el diferendo que ésta tenía desde hacía años con Chile por las remotas islas australes del Canal de Beagle, lo que en cierto modo resultaba predecible en función de la paralela reivindicación argentina de las Islas Malvinas. El Beagle había sido sometido a mediación británica por el gobierno de Eanusse, y el Proceso, en uno de sus actos de mayor irresponsabilidad e inconsistencia en el plano político internacional, resolvió desconocer el fallo.

Massera decidió comenzar a utilizar los litigios territoriales de la Argentina con Chile y Gran Bretaña como medio de espolear las divisiones dentro del Ejército y como forma de incrementar la participación de la Marina dentro del presupuesto militar. *Convicción*, en un artículo publicado en marzo de 1977, sostuvo que «hay que saltar del mapa» y desarrolló la hipótesis de que, con el terrorismo en vías de desaparición, el régimen necesitaba un enemigo. Calificó la tradicional neutralidad de la Argentina en los conflictos internacionales como la actitud de los «suizos pobres», e hizo una provocativa comparación entre el general Videla y el dictador ugandés Idi Amin Dada: el primero era «discreto, mesurado, austero, republicano y democrático», mientras el segundo:

... tapa con el tintineante sonido de sus chatarras pectorales los gemidos de las víctimas de su proclividad al genocidio, y el mundo «civilizado» lo trata con cierta benevolencia porque cree ver un signo positivo en que, si bien mata a los opositores, por lo menos no se los come. Ea pregunta es muy clara: ¿Quién le importa más a los EE.UU.? ¿Videla o Idi Amin? (...)

Ser tímidos y modositos en política internacional no sirve para nada... Vemos a numerosos países más pequeños y menos dotados que la Argentina gravitar en la historia del mundo: Israel, las naciones árabes, Cuba, funcionan desde las ideas (religiosas, políticas o comerciales, pero ideas) que se convierten en sistemas exteriores que incluyen imaginación, violencia, aptitud negociadora y creatividad bélica. En política exterior hay que saber cuándo se debe dar un portazo. Castro desembarcó 6.000 soldados cubanos en África y como consecuencia, en vez de un bloqueo aeronaval, el inefable (Jimmy) Carter —un hombre que todavía no midió la distancia que va del Rey de Occidente al Emperador de Occidente— lo corteja con cierto descaro (...)

Algunos párrafos más abajo, la arenga de *Convicción* llega a su mayor nivel de explicitud.



Alguno dirá: «No hemos ordenado la casa y pretendemos salir a pesar en el mundo...» ¿Y qué? ¿Acaso teníamos la casa ordenada en 1817 cuando nos fuimos a libertar a Chile y Perú? Y sin embargo esta gesta nos afirmó internamente. ¿Por qué, en aquel entonces, sobrepasamos las fronteras? Porque teníamos el instinto de la grandeza activado por una sensibilidad épica.

El artículo concluye con la ya tradicional exhortación a «entusiasmar a un país que, con justa razón, no se va a hacer matar por la estabilidad de la moneda».

Massera, en realidad, no creía enteramente en todo lo que allí se decía ni estaba enteramente persuadido de que fuera necesario «saltar del mapa» y plantear un imaginario heroico. Ea verdadera razón por la que instigaba este tipo de planteos era que creía que solidificaban en su favor a la ascendente línea dura del Ejército, que empezaba a temer, que el fin progresivo de la lucha contra la subversión la dejara sin razón de ser y a merced de una cúpula militar dialoguista y negociadora que devolvería el poder a los políticos de siempre. El encabezamiento del artículo no era casual, y sostenía, entre otras cosas:

Ea grandeza de la República suscita los más diversos significados: para los economistas se traduce en el crecimiento del Producto Bruto Interno; para algunos políticos representa el adecuado marco de su autoglorificación; para el hombre medio significa «darse los gustos»; para algunos empresarios quiere decir generosa protección estatal para su ineficiencia, así disponen de más tiempo para clamar por la iniciativa privada; para ciertos hombres de campo significa retomar a un apacible bucolismo económico que permita reinvertir en departamentos en Punta del Este, y para la mayor parte de los militares representa una íntima nostalgia por el sentido heroico de la vida que alguna vez tuvimos como conjunto en el siglo pasado.

Ea «arenga» se convertía, de esta manera, en una suerte de manifiesto contra la sociedad civil, y en un llamado a sustituir las funciones de sus clases dirigentes ante los evidentes defectos de estas últimas, que se la pasaban autoglorificándose, pidiendo subsidios estatales y reinvertiendo en departamentos en Punta del Este. Eos militares, en cambio, eran los que estaban «más cerca de la verdad» aunque corrían el riesgo, como advertía el artículo en el párrafo siguiente, de «aturdirse ante la vocinglería interesada de algunos civiles». El sustrato de todo esto, que operaría como fermento ideológico de los hechos militares de finales del Proceso, era la sospecha de que éste estaba quedándose sin papel histórico —«sin libreto», había dicho *Convicción* a fines de 1976— y, desarticulada la subversión, comenzarían los reclamos de apertura política. Una apertura que Massera estaba dispuesto a demorar hasta que juzgara que su propio tiempo político había llegado.

Una línea más sutil del mismo discurso era el ataque contra Videla y «la vocinglería interesada de algunos civiles», que en este caso significaba

inequívocamente el entorno de asesores, embajadores y ministros civiles del presidente y comandante en jefe del Ejército. *Convicción* trataba y trataría a Videla de un modo perverso: comenzaba ponderando sus virtudes para después compararlo desfavorablemente con Idi Amin Dada; y en un artículo posterior, simularía sopesar equilibradamente sus virtudes y desventajas como estadista diciendo:

En todo momento se ha mostrado como un hombre sin ambiciones políticas, y numerosas veces se ha señalado que carece de vocación de poder. Si esto fuera cierto, se abre un interrogante: ¿Eso es bueno para el país? ¿Resulta tranquilizador para un enfermo, que lo asista un médico, conocido por su falta de vocación por la medicina?

El embate de *Convicción* contra Videla reñejaba el ataque del propio Massera, que se centraba en dos objetivos: convertir al presidente en el hazmerreír de los cuadros militares «duros», y debilitar psicológicamente a su adversario agrediéndolo una y otra vez. El almirante hacía, por ejemplo, referencias perversas a sus colegas de Junta en sus alocuciones públicas, interpolando frases aparentemente inofensivas como las alusiones a «las largas y tediosas reuniones que hemos tenido en la Junta Militar, con Videla y con Agosti». Eos adjetivos «largas» y «tediosas» tendían a quedar grabados en relieve en la conciencia de los agredidos.

Videla, tímido e introvertido, acumulaba resentimiento y humillación. Massera iba convirtiéndose ante sus ojos en una pesadilla encarnada.

## Diecinueve

El coqueteo de Massera con la línea dura del Ejército se manifestó en dos vertientes principales: la relación del Proceso con los sectores civiles y la articulación de la política exterior. Se trataba, en cierto modo, de dos temas encadenados y complejos, donde lo que se hacía en un punto tendía a repercutir y reforzar necesariamente lo hecho en el otro.

A finales de 1976, por ejemplo, Yofe fue a almorzar en un restaurante de la Costanera con el político peronista Jorge Daniel Paladino, que a comienzos de la década del 70 se había desempeñado como delegado personal de Perón, una suerte de embajador ante el gobierno de Eanusse del líder exiliado en Madrid. Yofe y Paladino notaron la presencia en el lugar de un coronel, que se puso de pie cuando ellos se presentaron, saludó breve y secamente al primero y se retiró del lugar. El coronel transmitió la información a Suárez Masón, quien luego hizo un indignado planteo en una reunión de mandos, sosteniendo que un subsecretario de la Presidencia de Videla no podía estar en reuniones con «corruptos» como Paladino, y demandando su separación del cargo. Vi déla, finalmente, logró tranquilizar a Suárez Masón y lo persuadió de que retirara su demanda.

Massera, enterado del episodio por el propio Suárez Masón, desarrolló y divulgó entonces la teoría de que Yofe estaba buscando un temprano desemboque electoralista para el Proceso, lo que parecía verosímil porque el abogado radical había sido uno de los arquitectos de la entrega del poder por parte de Eanusse y Mor Roig «a los subversivos y a los corruptos» en 1973, y porque su acompañante aquel mediodía había sido nada menos que el delegado político de «los corruptos» en las negociaciones que condujeron a esa entrega del poder. El almirante invitó entonces a cenar al general Villarreal y empezó a hablarle contra su segundo en forma insistente y machacona, sugiriendo a cada paso la necesidad de su relevo.

—^No puede ser que siga teniendo tantas reuniones con gente de ese tipo, cuando nuestros soldados están dejando la vida —protestó Massera, usando un argumento reminiscente de las posiciones y el estilo de Suárez Masón, Menéndez y Saint Jean.

—^No son tantas las reuniones —intentó interpolar Villarreal.

—¿Ah, no? Vaya entonces a la SIDE, general, y vea todas las conversaciones que ha tenido Yofre en estos días.

Villarreal reaccionó alarmado, porque el dato mostraba que Massera monitoreaba celosamente los movimientos de la Secretaría General de la Presidencia,

y la combinación de una personalidad florentina como la de Massera con un incansable generador de conflictos como Suárez Masón no podía augurar nada bueno.

A comienzos de 1977, los sectores moderados que rodeaban a Videla y Viola empezaban a experimentar dificultades crecientes en su empeño por mantener el centro de la escena. Cada vez que el Poder Ejecutivo Nacional liberaba detenidos, los comandantes Suárez Masón y Menéndez capturaban más, mientras jefes regionales como Camps tomaban los últimos atentados guerrilleros de 1976 como excusa para establecer extravagantes *vaticos* de «diez por uno», haciendo que las masacres crecieran en forma geométrica.

A mediados de febrero de 1977, el moderado general Horacio Tomás Eiendo, que ocupaba el Ministerio de Trabajo, creía tener pactada la integración de una delegación sindical-gubernamental conjunta que concurriría a las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo. Era un intento de mantener las formas y también de ganar a los sindicalistas elegidos para su posición en la discusión de la Ley de Asociaciones Profesionales, que reglamenta la organización y actividad sindicales. El prolijo y cuidadoso montaje de Eiendo se desplomó cuando comandos del I Cuerpo de Ejército secuestraron al líder sindical electricista Oscar Smith y lo «desaparecieron» en forma definitiva. El I Cuerpo, en esa época, estaba próximo a las posiciones de la Marina y de la Fuerza Aérea sobre la ley sindical: todos ellos criticaban las intenciones de la cúpula del Ejército de reconocer a las grandes federaciones y confederaciones y aceptaban solamente el reconocimiento de los sindicatos individuales, lo que significaba imponer de hecho la división del movimiento obrero.

Villarreal y Yofre insistían, cada vez que podían, en que Videla viajara al exterior, en parte para que saliera de la atmósfera cerrada y claustrofóbica de las conspiraciones militares y en parte como forma de que se comprometiera cada vez más con la idea de la transición hacia una democracia militarmente vigilada. Videla generalmente aceptaba esas propuestas, que a su vez eran tenazmente resistidas por la Marina y sus oficiales al mando de la Cancillería. Massera, en cada reunión de Junta en que se planteaba un viaje del presidente, sostenía que éste debía quedarse en casa, sacando a relucir el obstáculo apropiado, que podía ser alguna cuestión nacional o bien la inconveniencia de determinada visita.

Sin embargo, en marzo de 1977 Villarreal y Yofre se salieron con la suya, con un viaje de Videla a Perú, donde el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez estaba administrando una transición hacia la democracia. Eos dos asesores presidenciales se permitieron incluso una ironía, al invitar a Eezama a que integrara la comitiva, invitación que aquél rechazó aduciendo problemas personales.

A lo largo del viaje de regreso, Videla improvisó una reunión informal con los

periodistas que lo acompañaban en el avión. Allí habló a favor del diálogo político y del libre debate de ideas y afirmó:

Se acabó la etapa del silencio.

Ea reunión terminó cordialmente, y Videla se trasladó a la cabina presidencial. Sin embargo, quedó con los periodistas el capitán de navío Carlos Corti, subsecretario de Información Pública, quien formuló una contradecларación sorprendente:

—Eso es lo que él piensa—dijo—, pero nosotros tenemos otras ideas al respecto.

Y se retiró él también.

Al regreso de Videla a Buenos Aires, se realizó una tensa reunión de la Junta Militar. Massera planteó que Villarreal, Yofre y Liendo debían ser separados de sus cargos porque estaban desarrollando políticas contradictorias con el Proceso de Reorganización Nacional. Videla se sorprendió y se alarmó: le resultaba extraño que el almirante se atreviera a formular un reclamo tan audaz, y se preguntaba interiormente si el jefe naval no estaría en posesión de algún dato que él no tenía, de algo que se hubiera gestado durante su visita a Lima y que le diera al almirante una carta fuerte que jugar. Tras un breve silencio, el presidente respondió secamente:

—La permanencia de esos hombres está fuera de cuestión.

Massera contraatacó con argumentos que reiteraban posiciones ya expuestas. El almirante traía consigo una lista de las reuniones desarrolladas por los tres funcionarios citados, y fue alzando progresivamente la voz en la indignación que fingía respecto del tema. Videla reiteró su posición, y Massera volvió a gritar. La violencia y la tensión crecían. Massera terminó sus alegatos dejando la impresión de que el tema podía ser un *casus belli* y un motivo de ruptura de la Junta Militar.

Nadie habló por más de media hora. Agosti, que había permanecido callado y tenía una posición ambigua sobre los temas planteados, intercedió finalmente para que se rompiera el silencio. La reunión se disolvió sin tomar ninguna decisión, y Videla se quedó con la sospecha de que Massera tenía algo grande entre manos.

Algunos días después, al comenzar el mes de abril, se pusieron en marcha una serie de maniobras que representaban un microgolpe de Estado y un significativo avance de la línea dura de los comandantes de Cuerpo sobre la cúpula militar. El primer ataque se consumó con la desaparición de Edgardo Sajón, un periodista que había sido secretario de Prensa y Difusión de la presidencia de Eanusse y se desempeñaba en esa época como editor coordinador del diario *La Opinión*. Con el subtexto de enemistad hacia Eanusse que había constituido el discurso de la línea

dura durante el primer año del gobierno militar, no era ilógico pensar que la desaparición de Sajón era un tiro por elevación contra la conducción «aperturista» del Ejército. Timerman comenzó a publicar en la tapa de *La Opinión* sueltos de pocas líneas que, bajo el título «Sajón», informaban brevemente que hacía determinada cantidad de días que éste había desaparecido, sin que se conociera su destino ni paradero a pesar de haberse inquirido en forma intensiva en todas las dependencias de seguridad del Estado.

Eas averiguaciones tomaron varios carriles. Unas fueron las desarrolladas por Timerman. Massera, como de costumbre, recibió afablemente al director de *La Opinión*, con quien ya había tenido trato en ocasiones anteriores y de cuyo diario había recibido una cobertura razonablemente favorable. Habían estado incluso bastante cerca de desarrollar una suerte de distante amistad: Massera le había regalado a Timerman un telescopio naval y Timerman le había regalado un cuadro. Al promediar un extenso diálogo regado con whisky escocés, el periodista incluso se había atrevido a bromear:

—Eas cosas hubieran sido distintas si usted hubiera entrado al Colegio Militar y no a la Escuela Naval, ¿eh, almirante?

—Bastante, bastante —sonrió Massera.

—¿Sabe, almirante? —se explayó Timerman—, creo que usted y yo tenemos algo en común.

—¿Qué cosa?

—Que ninguno de los dos puede llegar a ser presidente —dijo Timerman, con su característica desfachatez—: yo porque soy judío, usted porque es marino...

Massera extendió una mano:

—Usted espere..., espere...

Timerman tenía razones para pensar que su interlocutor estaría dispuesto a informarle sobre Sajón, ya que había sido este último quien le había presentado a Massera. Por otra parte, Sajón era de los dos el que más próximo estaba personalmente al almirante, a punto tal que cuando desapareció el senador izquierdista uruguayo exiliado Zelmar Michelini, que se desempeñaba como periodista en *La Opinión*, Timerman hizo que Sajón preguntara a Massera sobre el tema. Sin embargo, cuando Timerman le preguntó por Sajón, Massera le dijo que no tenía la menor idea.

Otro carril de las averiguaciones estuvo a cargo de Lanusse, a quien Massera

sólo le dijo que el procedimiento había sido hecho con conocimiento de la Junta Militar. Videla a su vez, confesó nerviosamente a Lanusse que sospechaba que la desaparición de Sajón era un operativo por izquierda realizado por los generales Suárez Masón, Camps o Saint Jean. Vacilante, temeroso, ineficaz, Videla se negó a comunicarse telefónicamente con el I Cuerpo, y cuando Lanusse le reprochó que las órdenes escritas no autorizaban ese tipo de represión, el Presidente le respondió nerviosamente: «Usted no puede decirme eso». Claramente, Videla era indeciso y débil y nada podía lograrse de él.

También María Pía Lucchi de Sajón hizo averiguaciones, dirigiéndose en primera instancia a Massera porque era el alto jefe militar más próximo a su marido. Massera le informó que la Marina no había tenido nada que ver con el hecho y que la averiguación era difícil, porque el Ejército mostraba en ese momento muchas cabezas, que actuaban independientemente. Videla confirmó indirectamente esta atribución de culpa, ya que desmereció ante la esposa de Sajón la hipótesis de que el crimen hubiera sido cometido por la guerrilla. Pero permaneció callado cuando ella le preguntó quiénes eran los autores del hecho.

Sin embargo, todo esto era relativamente falso, ya que Massera sabía exactamente qué había ocurrido y qué ocurriría con Sajón, porque los captores de éste eran precisamente sus aliados políticos. A los pocos días desaparecía también Enrique Jara, subdirector de *La Opinión*, y Timerman empezaba a publicar un segundo suelto, con el título «Jara», debajo del de «Sajón» y con similar extensión y contenido. Y a los pocos días de la desaparición de Jara era detenido el propio Timerman.

Suárez Masón, Camps, Saint Jean y Rualdés eran los principales elementos de la conjura, y también los principales aliados de Massera dentro del Ejército. Ea hipótesis del cuarteto castrense de Buenos Aires era que los tres detenidos estaban vinculados a una conspiración judeo-marxista para apoderarse del Proceso por vía indirecta, y que tendrían mucho que decir sobre la responsabilidad de quienes habían entregado el poder a la subversión marxista en 1973. Sajón, en cierto modo, era el más involucrado, ya que había sido funcionario del gobierno de Lanusse —como Gustavo Malek, atacado por el general Acdel Vilas, ante cuya casa el general Camps desplegaría poco después una extravagante custodia contra cualquier interferencia del Comando en Jefe del Ejército— y ahora cumplía funciones de responsabilidad en *La Opinión*. Timerman, por su parte, había fundado su diario en la Argentina prerrevolucionaria de 1972 como sustento político al experimento lanussista de convergencia cívico-militar denominado «Ea Hora del Pueblo», y Jara constituía un accesorio importante de Timerman. Con todo esto se hallaba vinculado el caso de David Graiver, un financista judío que había funcionado como banquero y lavador de dinero de los Montoneros, y que presuntamente había muerto en un accidente de aviación en México. Graiver habría invertido dinero en *La Opinión*. Eos señores de la vida y de la muerte trabajaban con hipótesis de novela policial barata, con su propio

delirio de persecución y con una funcionalidad de fondo: la defensa de su lugar de poder después de que el grueso de la actividad represiva hubiera sido consumado. Temían que los generales de la Capital los sacrificaran al poder político una vez que la tarea sucia hubiera terminado y, para evitar un Nüremberg, creaban un Auschwitz. A Timerman se lo torturó y se le preguntó reiteradamente sobre sionismo, socialismo, Israel, la sinarquía y la URSS, y a Sajón lo mataron en la mesa de torturas. Massera, entretanto, respaldaba pública y privadamente la investigación del caso Graiver «hasta sus últimas instancias».

Antes de ser secuestrado, Timerman mantuvo una entrevista con Lanusse sobre Sajón, donde el ex jefe militar le expresó: «¿Qué se puede hacer con este Ejército, en el que los oficiales andan en coches robados en los procedimientos y las señoras de los oficiales toman el té en vajilla robada en los procedimientos?» Mucho tiempo después, el ex Presidente comentaría que Videla había sido el primero en sospechar del I Cuerpo y de la dupla Suárez Mason-Rualdés, y que luego lo había negado: Lanusse expresó su rabia y desconcierto ante el hecho de que «un comandante en jefe y presidente de la Nación pueda desconocer estos episodios».

La maquinaria de la represión permanente proseguiría su curso en la propia figura del general Lanusse, quien para entonces ya había sido sancionado varias veces por sus protestas contra los procedimientos por izquierda. El juez Eduardo Marquardt, actuando bajo expresas instrucciones del general Ibérico Saint Jean, decretó poco después la prisión del general Alejandro Lanusse, el almirante Pedro Gnavi y el brigadier Carlos Rey, todos acusados por haber permitido la constitución de la empresa ALUAR. El cuarteto castrense de Buenos Aires había descubierto el modo de vincular la conspiración judeo-marxista de Timerman-Sajón, la corrupción de Villarreal-Yofre y la «timidez» de Videla-Viola con la conspiración comunista para copar la economía argentina por parte de grupos como el de José Ber Gelbard y Julio Broner, a través de entregadores y traidores como Lanusse, Gnavi y Rey. Todo encajaba, pero la causa contra Lanusse, Gnavi y Rey debió ser abandonada poco después por falta de méritos en medio de las crecientes simpatías de la población hacia Lanusse, quien precisamente en los días de su detención daba a conocer en forma de autobiografía un documento prodemocrático de reivindicación de su gobierno: *Mi Testimonio*. Videla, entretanto, sonreía incómoda y miserablemente, haciendo la vista al costado y demostrando que como presidente de la Nación podía ser un aceptable mascarón de proa, pero nunca un comandante en jefe. Y Massera, que había respaldado la investigación del caso Graiver, ahora respaldaba la investigación del caso ALUAR.

El almirante había sabido lo que hacía al pedir la renuncia de Villarreal, Liendo y Yofre. Actuaba sobre un poder central debilitado, en momentos en que las distintas manifestaciones de poder regional empezaban a hacer sentir su peso. Ya que los casos de Timerman, Graiver y ALUAR marcaron el fin definitivo del monopolio de la



violencia por el Estado que tan insistentemente había sido reclamado por el Ejército durante la última época del impotente gobierno de Isabel Perón, e inauguraron la etapa de la competencia política, judicial, económica y militar abierta entre los distintos dominios de una Argentina feudalizada.

## Veinte

A fines de 1976 y comienzos de 1977, Massera desarrolló dentro de la Junta y de las Fuerzas Armadas una línea de consistente oposición al embajador argentino en Venezuela, el político radical Héctor Hidalgo Solá. Varios factores confluían en esto: la afiliación de Solá a la UCR, que monopolizaba a través de Yofre el entorno político civil significativo de Videla; el hecho de que la línea dura del Ejército que se aliaba con él rechazaba precisamente ese entorno del Presidente; su definición de que el verdadero factor de poder en la Argentina era el peronismo, y su deseo de convertirse en el punto de interlocución y acuerdo entre un peronismo con símbolos pero sin líderes y un gobierno con líderes todopoderosos pero sin partidarios, imaginaba ni símbolos.

Ya a comienzos de 1977 Massera había comenzado a intuir que se avecinaban dos desemboques posibles para el gobierno de la Junta Militar: el «liberal», que básicamente consistía en una alianza de Viola con Villarreal y Yofre y la UCR, y el «corporativista», que configuraba una vaga alianza entre los comandantes de Cuerpo y todo cuanto hubiera de totalitario y corporativista en el país. El totalitarismo y el corporativismo, desde la óptica de un oficial formado en el ideario liberal gorila de la Marina de Guerra, se encarnaban en el peronismo. Como los comandantes de Cuerpo eran el factor en ascenso en 1977, y como los peronistas habían sido «siempre» el factor de poder con el que no se podía dejar de contar en la Argentina, Massera apostaba a los dos al mismo tiempo. Y como se daba cuenta de que los antediluvianos comandantes de Cuerpo y los peronistas corporativistas no podían desarrollar ninguna relación, se imaginaba a sí mismo como el heterodoxo puente y nivel de transición entre los dos sectores. El almirante, en este punto, sucumbía a la rutina de la representación que hacía la Argentina de sí misma, ignorando que se habían producido cambios importantes, la mayoría bajo el dominio de su propio tiempo de poder. Al igual que los Montoneros habían caído en la trampa fatal de atacar al peronismo sin salir de su perímetro ideológico, Massera no advertiría realmente que Perón estaba muerto porque veía al peronismo desde su exterior, creía que el peronismo era una esencia inseparable de la torpe nacionalidad argentina y quería encaramarse mecánicamente sobre ella. A Massera no podrá reprochársele negligencia en luchar por sus objetivos, pero sí la estrechez de miras y la mediocridad de su rutinaria imaginación histórica. A través del cinismo, la traición a los ideales navales, la transgresión, el maquiavelismo y la simulación de las políticas del realismo, el almirante llegaba sólo al anacronismo y al más perfecto lugar común.

Hidalgo Solá representaba algo totalmente diferente a esto, y lo hacía desde el privilegiado lugar que significaba para el almirante la delegación diplomática argentina en un país que en ese momento estaba siendo gobernado por una

importante filial de la Internacional Socialdemócrata. Massera tendía a ver el mundo como crecientemente dividido entre el dirigismo socialdemócrata, el derechismo democristiano, la Comisión Trilateral de la entrega de Occidente al becerro de oro capitalista y la conspiración marxista, y pensaba que el proyecto más cercano al que podía impulsarse en la Argentina era el socialdemócrata, por su afinidad con el distribucionismo peronista. Y precisamente en ese momento Hidalgo Solá le arrebató el espacio y le clausuró una vía importante de acceso a redes internacionales económicas y políticas con las que pensaba que podía relacionarse provechosamente en el futuro.

Ea inmensa mayoría de los militares del Proceso, incluido el almirante, tendía a identificar las conspiraciones más siniestras y efectivas con su naturaleza internacional, a la que temían por sobre todas las cosas. Construidos como baluartes defensores de un Estado fuerte, manifestaban su fobia hacia el arrasamiento igualizante de las fronteras por el mercado mundial en la forma de xenofobia hacia la conspiración internacional, fuera ésta la IV Internacional, la judería internacional, el comunismo internacional, la socialdemocracia, el democristianismo o la Comisión Trilateral. El Proceso no inició una campaña de eliminación de la numerosa comunidad de los judíos en la Argentina, pero la adopción por muchos de los oficiales que estaban en posiciones de mando de una ideología antisemita no resultaba casual ni era una mera curiosidad cultural: los judíos, tradicionalmente sin tierra, habían encontrado su «patria» en el capital financiero internacional, principal fuerza internacional avasalladora de fronteras, hábitos, tradiciones y costumbres. El hecho de que el temor al imperio avasallante del capital internacional apareciera construido en la forma de repulsión hacia las ideas de judíos notables como Karl Marx, Sigmund Freud y Albert Einstein constituía solamente una deformación profesional militar. Ajuicio de Massera y de la mayoría de los militares de la época, toda internacionalidad era temible, ya que ponía en cuestión el curioso lugar en que ellos mismos se encontraban: la defensa del Estado contra la fuerza incontenible del mercado. Que la figura de la resistencia del Estado apareciera construida a través del aparato de represión era un hecho solamente cultural, y una condena histórica a la derrota a perpetuidad de los involucrados.

Sin embargo, había motivos más concretos en la oposición de Massera a Hidalgo Solá. Venezuela, junto con Italia y Rumania, figuraba entre los países que el almirante visitaba más frecuentemente, llegando a establecer en cierta época una especie de metódica «triangulación» entre las tres naciones. El hábito, en el caso de Italia y de Rumania, estaba fuertemente vinculado con la asociación de Massera a la P-2 de Eicio Gelli, pero en el caso de Venezuela se relacionaba con su creciente interés por tomar contacto con políticos argentinos exiliados, en la seguridad de que ese exilio no sería permanente y de que en algún momento él debería negociar con ellos. Venezuela, entre otras cosas, era sede de importantes organismos de denuncia de la represión de la dictadura argentina, actividad detrás de la cual se encolumnaban

numerosos jefes montoneros. Eos contactos con los Montoneros adquirirían creciente interés para Massera, una vez que hubo «encarcelado» en prisiones de la Marina a lo que consideraba la totalidad del espectro político peronista. Eos servicios de inteligencia de Venezuela llegaron a informar en el primer semestre de 1977 sobre una reunión realizada en la Isla Margarita entre el jefe montonero Mario Firmenich, el líder libio Muhamar Khadafy, el presidente rumano Nicolae Ceausescu, Eicio Gelli y el almirante Massera. Todos ellos se habrían reunido de riguroso incógnito. A los ojos de Massera, todo lo internacional sería siniestro, salvo la actividad internacional que armara él mismo.

A comienzos de 1977, Massera se enteró de una reunión que había tenido lugar en Caracas entre Hidalgo Solá y Julio Broner, el exiliado líder de la Confederación General Económica, a quien en ese momento se perseguía en la Argentina por su supuesta vinculación con los casos Graiver, Timerman y AEUAR. Al parecer, Broner mismo fue el gestor de la entrevista, que se llevo a cabo en el hotel donde Hidalgo Solá estaba residiendo en ese entonces. El dirigente empresario solamente quería hablar de un «blanqueo» que le permitiera volver a morir en paz en la Argentina sin ser perseguido. Ea entrevista se desarrolló en la suite que ocupaba Hidalgo Solá, quien escuchó atentamente las argumentaciones de Broner y le prometió averiguar qué se podía hacer por él. Como Broner era un personaje muy difícil de digerir para la Junta argentina por haber sido una figura próxima a Gelbard y también por ser judío. Hidalgo Solá, para deslindarse de culpa, cablegrafió inmediatamente un informe a la Cancillería sobre la reunión e informó a los agregados militares en Caracas.

Ea reacción en Buenos Aires fue frenética y violenta. Massera, quien estaba por partir hacia Caracas, dio instrucciones al canciller, contralmirante Guzzetti, para que le pidiera la renuncia a Hidalgo Solá. «No voy a Caracas mientras esté allí Hidalgo Solá», dijo el almirante separando claramente las palabras y las sílabas en una enfurecida comunicación telefónica entre el Edificio Eibertad y el Palacio San Martín. Guzzetti, por su parte, informó a Videla que se iba a convocar a Buenos Aires a Hidalgo Solá para pedirle la renuncia. El Presidente, amparado en la diferencia de rango entre el canciller y él y en el hecho de que éste le había dicho que la renuncia era solicitada por el propio Massera, se abstuvo de formular comentario alguno. Videla siempre encontraba motivos estatutarios para evitar dar órdenes contradictorias a quienes se hallaban debajo suyo.

Solá llegó a Buenos Aires casi de incógnito. Su primer acto fue comunicarse con Ricardo Yofre, que era quien lo había persuadido de que aceptara el cargo de embajador en Caracas como parte de una maniobra para facilitar un desemboque democrático del Proceso.

—Te van a cagar —le dijo Yofre sucintamente—, pero vos tenés que decir que sos el embajador de Videla, que fuiste nombrado por Videla y no por Guzzetti, y que

por lo tanto sólo Videla te puede pedir la renuncia.

Hidalgo Solá siguió las instrucciones, y fue a ver al Presidente, quien lo recibió de modo afable, lo escuchó y le dijo:

—Váyase tranquilo, embajador: no hay ningún problema. Vuelva a Caracas y siga con su buena obra. Del resto me encargo yo.

Hidalgo Solá regresó, considerablemente aliviado. Sin embargo, la crisis vivida solamente era la antesala de otra.

El diplomático, en una conversación telefónica cifrada con Yofre, desarrolló la hipótesis de favorecer una entrevista entre Videla y el presidente socialdemócrata de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. La cumbre serviría para desarrollar las tendencias y los compromisos democráticos de la Junta Militar argentina, en momentos en que el presidente venezolano aparecía fuertemente asociado a la política de derechos humanos de la administración Cárter y aspiraba a convertirse en un líder político hemisférico que impulsara la democratización de la región. Solamente se necesitaba una pequeña estratagema: Hidalgo Solá debería decirle a Carlos Andrés Pérez que Videla quería mantener una entrevista con él, pero que la situación imperante en la Argentina hacía necesaria una invitación. Al mismo tiempo, Hidalgo Solá reclamaba garantías de que la propuesta fuera aceptada en Buenos Aires. Yofre asintió calurosamente y le dio instrucciones para que activara los contactos. Al poco tiempo, una invitación formal de Carlos Andrés Pérez llegaba a Buenos Aires.

Massera estaba furioso. Había fracasado por partida doble: no solamente había sido incapaz de lograr la remoción de ese molesto embajador radical de su puesto en Caracas, sino que ahora pasaba por encima de él, que teóricamente constituía un tercio del aparato del Estado, para gestar una entrevista directa entre el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez y Videla, a quien él prefería mantener dentro del país. Massera tendía a reproducir con respecto a Videla la ideología de encierro, dominio y negociación que tendía a mantener con los Montoneros, los jefes sindicales e Isabel Perón: el mejor presidente era el presidente encerrado. Se trataba de evitar que pudiera consumir acuerdos comprometedores fuera del país, y de garantizar que fuera constantemente objeto de las atroces relaciones de fuerza que estaban gestándose en Buenos Aires. Naturalmente, el objetivo de Villarreal y Yofre era exactamente el opuesto.

El almirante planteó su posición fuerte y elocuentemente en una reunión de la Junta Militar. Sostuvo sin rodeos que se estaba tratando de gestar una «entente radicales-Carlos Andrés Pérez- Videla-Viola» para una solución política que incluía contactos con la subversión, y que la Marina no estaba dispuesta a permitir ese avasallamiento de los objetivos del Proceso. Videla, temeroso, escuchaba los gritos de

su interlocutor con la impresión de que Saint Jean, Suárez Masón y Menéndez se le venían encima, y que el planteo de Massera era solamente un anticipo de turbulencias mayores dentro del Ejército. Con todo, se mantuvo firme, contestando la argumentación de Massera de que Venezuela era el centro latinoamericano de la «campana antiargentina» por las violaciones a los derechos humanos con el argumento de que él había sido invitado, y rehusar la invitación equivalía a reforzar implícitamente aquella campana. La reunión se resolvió con un dos a uno, ya que Agosti votó a favor de la posición de Videla.

Massera, sin embargo, recibió una inesperada ayuda del destino en vísperas de la partida de Videla. El contralmirante Guzzetti, que había sido internado en una clínica por causa de una dolencia menor, fue gravemente herido en la cabeza por un comando montonero que se infiltró en el lugar disfrazado de médico. El atentado nunca pudo aclararse totalmente.

A partir de allí se desarrolló una comedia de equívocos en la Presidencia. Un indignado emisario de Massera llegó al lugar planteando la posición del almirante en estos términos: «La Marina quiere que se suspenda el viaje de Videla a Caracas. El canciller está herido». El argumento de fondo, tal como lo desarrolló el marino, consistía en que Venezuela era un centro de irradiación de la propaganda marxista, y que Videla no podía ir a meterse en la boca del lobo en momentos en que la guerrilla local había logrado alcanzar con un disparo la cabeza del ministro de Relaciones Exteriores. Villarreal le contestó entonces que la situación era diametralmente opuesta, que suspender el viaje a Caracas en ese momento implicaba para Videla y para el Proceso dar una imagen de debilidad y hacer suponer hacia adentro y hacia afuera que un mero golpe de mano del terrorismo era suficiente para cancelar una decisión de Estado. El argumento era tan bueno que por un momento el marino no supo qué decir, y Yofre aprovechó el impasse para plantearle a Videla la posibilidad de designar a un canciller interino mientras durara su visita a Venezuela y la convalecencia de Guzzetti. Anticipándose a las predecibles objeciones del presidente con respecto a la sensibilidad de las otras dos armas en cuanto a la distribución del poder, pero cortejando al mismo tiempo el resentimiento que Videla venía acumulando contra el poder naval, Yofre le propuso que el canciller interino fuera un brigadier de la Fuerza Aérea que en ese momento cumplía funciones en la Presidencia. Videla aceptó y se lo hizo saber con voz de mando y mirada penetrante al marino, quien se retiró protestando airadamente por los vínculos de la subversión con Venezuela. A través de una posterior conversación telefónica con Massera, Videla acordó que Guzzetti seguiría siendo el canciller y que la Cancillería seguiría siendo territorio de poder de la Marina, pero que él viajaría a Venezuela de todos modos. La maniobra de Yofre había dado resultado.

Con todo, su suerte no se prolongaría demasiado tiempo, y ya había signos ominosos de ello. Uno fue que Solá intercedió en esos días por la liberación de Solari

Yrigoyen, causando la indignación de Massera y Suárez Masón. Otro apareció en un té que compartieron en Campo de Mayo Alicia Raquel Hartridge de Videla con la esposa de Hidalgo Solá y otras mujeres de altos funcionarios. Tomándola del brazo y llevándola aparte, la esposa del presidente le dijo a la mujer del embajador en Venezuela:

—Decile a tu marido que se cuide mucho de Massera; es un hombre peligroso, que le puede traer problemas.

La advertencia sólo podía responder a una instrucción directa de Videla, lo que mostraba el curioso lugar en que el presidente se ponía a sí mismo: no podía garantizar la seguridad de sus propios embajadores y, avergonzado de reconocerlo en público, daba las señales de alarma a través de otros, en el marco de un inofensivo chismorreó femenino.

Hidalgo Solá planeaba volver a Buenos Aires en julio para asistir al casamiento de su hija, pero algo inesperado anticipó su regreso en unos pocos días. Algunos pensaron que ese anticipo tenía que ver con informaciones de último momento y máxima urgencia que el embajador quería transmitir personalmente a Videla, posiblemente en relación con los contactos que Massera estaba desarrollando en Venezuela. Si esto fue así, Hidalgo Solá no se lo hizo saber a nadie, ni siquiera a Villarreal y Yofre, con quienes compartió una comida en esos días. Tampoco llegó a ver a Videla, porque en un gigantesco operativo desplegado a plena luz del día frente al Museo de Bellas Artes, en la aristocrática zona capitalina de la Recoleta, fue apresado por hombres armados de civil e introducido dentro de un automóvil que tomó dirección noroeste. La Recoleta era zona operativa del GT 3.3.2, y rumbo al noroeste estaba la Escuela de Mecánica de la Armada.

La ausencia de Hidalgo Solá alarmó a la familia del embajador, que se comunicó telefónicamente con Villarreal. A su vez, Villarreal se comunicó con Harguindeguy y con el general René Ojeda, jefe de la Policía Federal. Ninguno de ellos sabía nada de lo ocurrido, aunque Ojeda teóricamente debía tener conocimiento de quiénes habían pedido «zona libre» en el momento del secuestro a la Comisaría 17, bajo cuya jurisdicción ocurrieron los hechos. Villarreal, finalmente, urgió a Videla a que le preguntara a Suárez Masón, quien dio su palabra de honor de que carecía de información alguna. Las sospechas se orientaron naturalmente hacia Massera, quien también negó saber algo.

La desaparición de Hidalgo Solá tuvo dos secuelas inmediatas importantes. Una fue la explosión de una poderosa bomba en casa de Yofre pocos días después. Yofre salvó su vida porque estaba trabajando en ese momento. Las sospechas en la Presidencia se orientaron hacia Massera y Suárez Masón Sin embargo, la segunda posibilidad fue rápidamente descartada, pero no precisamente porque Suárez Masón

no quisiera la cabeza de Yofe, sino justamente porque la quería. El general José Montes había irrumpido casualmente en esos días en una reunión entre Suárez Masón y Rualdés, donde los dos estaban discutiendo animadamente varias alternativas para matar a Yofe. Montes los disuadió, argumentando que se trataba de un hombre demasiado próximo a Videla, y el rumor se elevó rápidamente a los altos niveles de la institución. La hipótesis de que la bomba contra Yofre había corrido por cuenta de Massera descansó en el hecho de que Suárez Masón no quería escalar la confrontación con Videla hasta ese punto, tanto más cuanto que Videla y Viola se enteraron rápidamente del contenido de la reunión entre Suárez Masón y Rualdés.

Otra secuela fue la rápida designación como embajador en Venezuela de Federico Barfeldt, un diplomático acusado de pertenecer a la P-2, cuyo hermano se habría encargado en esa época de la compra de campos para Licio Gelli en la provincia de Buenos Aires.



## Veintiuno

Al tiempo que ocurría todo esto, Massera desarrollaba una línea de constante oposición hacia el gobierno norteamericano de Jimmy Carter, que en ese momento centraba su política exterior en una cruzada Este-Oeste por el respeto a los derechos humanos. Massera expresaba en esto la opinión militar promedio, el tradicional antinorteamericanismo argentino y el delirio paranoico de muchos que en la época creían que la administración Carter estaba infiltrada por comunistas. Sin embargo, también lo hacía por su deseo de aislar al máximo a la Argentina y su Junta Militar de cualquier proceso impulsado desde el exterior que pudiera desembocar en una apertura política, y por la necesidad de construir para sí un rol protagónico que negaba a Videla en las relaciones exteriores y en la política interna.

Ea Argentina fue visitada tres veces en 1977 por Patricia Derian, una influyente funcionaria del Departamento de Estado bajo cuyos ojos pasaba cada resolución que tuviera que ver con Buenos Aires, y cuyos informes habían sido determinantes para la aprobación por el Congreso norteamericano de la enmienda Humphrey-Kennedy, que embargaba las ventas de armas al país hasta que el gobierno mejorara su conducta respecto de los derechos humanos. Videla recibía a Patricia Derian y argüía consistente y débilmente que no podía descartar que se produjeran «excesos» entre los cuadros militares inferiores de la represión, basándose en el argumento de que «el que da la orden es sereno, maduro, pero el que la cumple es joven e inmaduro, ha visto caer a muchos de sus camaradas de armas a manos de la subversión y es posible que por allí se produzcan estos excesos, que no justifico». Ea norteamericana escuchaba este discurso con impavidez y escepticismo, y producía listas de casos que probaban lo contrario de lo que decía Videla.

Las entrevistas de Patricia Derian con Massera fueron diferentes. Mientras Massera atacaba en público la política de derechos humanos del Occidente de la máquina de calcular, privadamente reconocía que había «excesos» que lo preocupaban y que corrían a cargo principalmente del Ejército. Al mismo tiempo, el almirante era un hueso particularmente duro de roer, a tal punto que una intensa presión desarrollada por el senador norteamericano Edward Kennedy había sido incapaz de lograr la aparición del físico argentino Antonio Missetich, secuestrado por el GT 3.3.2 a comienzos de la dictadura y muerto presuntamente en la ESMA.

Durante una de esas visitas, Massera decidió romper súbitamente el protocolo, que imponía que el almirante recibiera a la funcionaria norteamericana en el Edificio Eibertad, y la citó en la ESMA. Massera consideraba que ganaba con esto una credibilidad particular, el hacerse cargo personalmente del lugar que empezaba a ser famoso en el exterior como uno de los campos de concentración más importantes del

país. Sus negativas tendrían allí mayor impacto que en el Edificio Eibertad. Al mismo tiempo, se procuraba dotar a la ESMA de una apariencia de normalidad. Constituía uno de los intentos de Massera por tomar el toro por las astas, que tendría un desenlace curioso.

Ea norteamericana comenzó planteando el tema de las torturas, cuya intensidad y escala habían comenzado a ser objeto de preocupación en Estados Unidos y Europa. Massera replicó:

—Ea Armada no tortura a nadie; son el Ejército y la Fuerza Aérea. —Y se explayó abundantemente en el relato de sus esfuerzos por mejorar las condiciones de cautiverio de Isabel Perón y la situación de los líderes sindicales que tenía prisioneros en los buques. Insinuó, también, que el Ejército le estaba imponiendo determinadas reglas de juego, de las que él no podía apartarse.

Ea funcionaría entonces insistió con las torturas, y le dijo:

—Es probable que ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando, en el piso de abajo se esté torturando.

A lo que Massera contestó con una amplia sonrisa, hizo el gesto de lavarse las manos y le preguntó:

—¿Usted se acuerda de lo que pasó con Poncio Pilato?

Otro funcionario norteamericano que visitaba Buenos Aires en esa época era Terence Todman, subsecretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, que expresaba la política de derechos humanos de sus jefes en un estilo menos conlrontacional que Derian. Todman, en una de esas visitas, programó separadamente una entrevista con Videla y una recepción para políticos argentinos en la embajada de Estados Unidos. El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que dirigía en ese momento el ex presidente Arturo Frondizi, rechazó la invitación por considerarla una interferencia en los asuntos internos argentinos, y *Convicción* aludió a Ea Hora del Pueblo, el intento de democratización y apertura realizado bajo Eanusse que muchos consideraban en ese entonces que había sido el preludio de la entrega del país a los subversivos y los corruptos. El título de *Convicción* fue «Ea Hora del Pueblo se reunió en la Embajada norteamericana», y el texto uno de los clásicos sarcasmos sinuosos de Eezama, donde relataba que «Videla rindió oral y escrito ante la mesa examinadora norteamericana» y sugería que a cambio de eso el gobierno enviará a Estados Unidos al capitán de navío Gualter Aliara, subsecretario de la Cancillería argentina, para investigar si allí respetaban los derechos de los negros.

Videla, que ya estaba harto de Corti desde el incidente en el vuelo Eima-Buenos Aires, aprovechó la publicación de la solicitada del MID para pedirle la

renuncia, sobre la base de que esa publicación nunca debió haberse autorizado. Massera aceptó, pero a los pocos días hizo trascender que Corti sería ascendido a fin de año a capitán de navío, lo que provocó malestar en el Ejército porque los comandantes en jefe no decidían los ascensos hasta tanto éstos fueran propuestos por las Juntas de Calificaciones militares.

Al promediar julio surgió un nuevo punto de fricción entre Massera y Videla en el campo de las relaciones exteriores. Arnaldo T. Musich, embajador argentino en Washington, formuló allí el comentario público de que, una vez terminada en la Argentina la operación de cirugía mayor que suponía la extirpación del «cáncer subversivo», habría que proceder a «limpiar el bisturí». La expresión, que intentaba tender puentes de acercamiento con Estados Unidos, constituía parte de una maniobra que habían empezado a gestar Villarreal y Yofre en pos del pase a retiro de Suárez Masón y Camps y de la destitución del general Saint Jean de la gobernación de Buenos Aires. Como reemplazante de Saint Jean, Villarreal y Yofre habían propuesto al general Hugo Miatello, que se desempeñaba en ese momento como embajador en Chile y era el mismo amigo personal de Videla que le había presentado a éste a Martínez de Hoz. Videla pareció considerar la propuesta, que sugería una alianza entre los ministerios del Interior y de Economía y la Secretaría General de la Presidencia para retomar el control directo de la provincia de Buenos Aires.

Massera se opuso airadamente e instruyó al vicealmirante José Antonio Montes, quien había sucedido a Guzzetti como ministro de Relaciones Exteriores, para que convocara a Buenos Aires a Musich y le pidiera la renuncia. Musich regresó, y por un momento pareció que Videla iba a confirmarlo, en una repetición del episodio vivido por Hidalgo Solá. Sin embargo, la relación de fuerzas se había modificado desde aquella época y Montes se lo hizo saber a Videla en términos duros: «O se va Musich o me voy yo». Villarreal intentó interceder ante Videla, pero éste le contestó: «La cosa con la Marina está muy tensa». Massera y Montes insistieron en sus planteos, y Videla aceptó la destitución del embajador en Estados Unidos.

## Veintidós

Al mes siguiente, la puja de Massera con Videla por ocupar el lugar principal en la política exterior registró una significativa escalada. El motivo ahora era la firma de los Tratados del Canal de Panamá entre Jimmy Cárter y Ornar Torrijos, y la invitación del primero a la totalidad de los presidentes latinoamericanos para la ceremonia donde se consagraría el acuerdo. Massera resistió dura y vehementemente el viaje de Videla, argumentando que éste quedaría en una posición deslucida, de clara subordinación y humillación frente al presidente de los derechos humanos.

—Vas a quedar como un infeliz —le dijo a Videla en una reunión de Junta Militar.

Villarreal y Yofre no pensaban lo mismo. Creían que la cumbre americana sería una buena oportunidad de cerrar heridas abiertas entre la Argentina y Estados Unidos, y apostaban a que la importancia que las Fuerzas Armadas asignaban a la reanudación de la ayuda militar norteamericana constituyera un aliciente para moderar las políticas del gobierno y comprometer a los uniformados en pasos de transición hacia la «democracia responsable». Washington, de esta manera, pasaría a actuar como la palanca de desequilibrio de una situación de virtual empate de fuerzas con el inmovilismo de la línea dura, que se beneficiaba de la falta de margen de maniobra del gobierno.

*Convicción*, entretanto, volvió al ataque. A lo largo de un jocoso editorial, Lezama comparó la convocatoria de Cárter a los presidentes con el silbato de un patrón de estancia para congregar a los peones, y especuló sobre si el protocolo carteriano incluiría el requisito de que los presidentes militares concurren en ropas de civil para no herir la sensibilidad visual del plantador de maníes de Plains. Ese editorial ya fue demasiado, y sirvió de argumento para que Harguindeguy convenciera a Videla de la necesidad de tomar la ofensiva. Unos días después, agentes uniformados de la Policía Federal se presentaron en la casa de Lezama con una orden de arresto. Lezama en ese momento no se encontraba en casa, y los agentes le dejaron a su esposa Gloria una citación. Ésta se comunicó inmediatamente con él para relatarle lo que había ocurrido, ante lo cual el director de *Convicción* se puso inmediatamente en contacto con Massera.

—¿Y usted qué piensa hacer? —le preguntó Massera.

—Presentarme —replicó con naturalidad Lezama.

—De ninguna manera —contestó Massera.

A continuación, Massera empezó a desarrollar una larga teoría sobre los motivos de fondo de la decisión de arrestar a Lezama. Sostuvo que si éste cometía el error de presentarse nadie volvería nunca a saber nada de él, porque sería ejecutado. El pronóstico tenía que ver con el importante lugar que Lezama había empezado a jugar en la estrategia del almirante: era, en cierto modo, la voz y las palabras de Massera, cuyos discursos empezaban a ser recibidos con creciente simpatía por los oficiales del Ejército. Al almirante no se lo podía hacer desaparecer pero, ¿qué tal si se lo dejaba afónico? La desaparición de Lezama equivalía a enmudecerlo.

Massera, por consiguiente, llevó personalmente a Lezama a un buque de la Armada estacionado en aguas del puerto de Buenos Aires, con fuertes guardias y bajo jurisdicción naval, y ordenó un suntuoso servicio de buffet para él, su familia y todos los que quisiera invitar. La consigna era esperar el desarrollo de los acontecimientos.

A lo largo de los días que siguieron, las visitas de la policía a la casa de Lezama se volvieron más frecuentes. Gloria Lezama declaraba sistemáticamente ignorar dónde estaba su marido, a lo que los agentes respondían:

—Vamos, señora, usted sabe y no nos quiere decir. Dígale que no se asuste, que no es nada raro, que se presente. Dígale que esto es por derecha, viene sin capucha... ¿No ve que lo hacemos a la vista de todos? Es solamente para una entrevista con el general Harguindeguy, que quiere cambiar unas palabras con él.

Massera contraatacó en la próxima reunión de Junta:

—Te voy a leer los considerandos de dos órdenes de arresto, para ver cuál de las dos te parece la más dura.

A continuación, y sin decir a quién correspondía cada una, Massera leyó en voz alta y en forma sucesiva los considerandos de las órdenes de arresto de Timerman y Lezama, y preguntó:

—A ver, ¿cuál te parece la más dura?

—¡Hombre, la segunda! —replicó Videla.

—Bueno, la primera es la orden de arresto que hiciste para Timerman, y la segunda la que hicieron para Lezama.

Vi déla se puso nervioso:

—¡Pero ese hombre se niega a presentarse!

A Massera lo desalentaba la estrechez leguleya y formalista del punto de vista

de Videla: constituía un universo con el que no podía comunicarse.

—^No seas idiota —le dijo.

—Pero vos lo tenés guardado —le contestó Videla.

—Bajo palabra de honor —asintió Massera.

El reparto de jurisdicciones y zonas de poder comenzaba en esa época a ser estrictamente zonal. La Policía Federal rondaba el puerto de Buenos Aires con la absoluta certeza sobre el lugar donde se encontraba Lezama, pero sin poder entrar.

—Pero se tiene que presentar —insistió Videla.

—Para verte a vos, sí; para verlo a Harguindeguy, no.

—¿Y por qué conmigo sí pero con Harguindeguy no?

—¿Te traigo a la mujer de Hidalgo Solá para que te lo explique? —contraatacó el almirante.

—De eso mejor no hablés, porque me parece que tenés bastante que ver —replicó el presidente.

—Buscá por otro lado, haceme caso —dijo Massera.

Al final convinieron en que éste trasladaría a Lezama directamente a la Casa de Gobierno para un encuentro directo con Videla. Así lo hizo, y pronto el monumental y masivo editor de *Convicción* estaba frente al esmirriado presidente.

—¡Usted está aquí por desacato! —exclamó Videla, enfatizando y separando las sílabas de la última palabra.

—Pero, general, fue un chiste... —protestó mansamente Lezama.

—Desacato es desacato, aquí y en cualquier otra parte —insistió Videla, que estaba harto de las agresiones de Massera y de los editoriales irónicos de Lezama.

—Pero, general, usted tiene cosas más importantes de qué ocuparse. ¿Por qué no se ríe con el chiste y se distiende un poco? Yo no soy tan importante como para que usted se preocupe tanto por lo que yo diga...

Videla sonrió brevemente, antes de volver a su pose anterior y emitir un:

—Bueno, retírese, está todo bien.

Al regresar a sus funciones habituales, Lezama publicó un nuevo editorial irónico, titulado «Volvimos de la penitencia». Respondía así a la necesidad de hacer público el episodio para evitar que se repitiera. Además, Lezama escribió el texto en parte como seguro de vida, en la creencia de que si escribía eso y no lo fusilaban, no lo fusilarían jamás.

Videla se reunió con Cárter, sin que se produjeran los resultados que esperaban Villarreal y Yofre, pero habiendo vencido un fuerte frente de tormenta en su camino a Panamá y preparado el camino para una visita del canciller norteamericano a la Argentina.

## Veintitrés

Cyms Vanee, secretario de Estado norteamericano, llegó a Buenos Aires en noviembre de 1977. Vanee, un abogado de Wall Street, no conocía mucho sobre política argentina, pero sí lo suficiente para saber que el cese de la ayuda militar preocupaba al régimen, y que éste se encontraba dividido en tres compartimientos estancos. En consecuencia, decidió organizar sus entrevistas con los miembros de la Junta en forma separada e individual, comenzando por Videla, siguiendo con Massera y terminando con Agosti.

Massera recibió a Vanee en el Edificio Eibertad. Amablemente, lo condujo a su despacho, le ofreció asiento, lo convidó con café y comenzaron a hablar. Vanee empezó planteando la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por las violaciones a los derechos humanos, y dijo a Massera que un mejoramiento de las relaciones era impensable sin que se modificara la conducta argentina al respecto. Sostuvo que Washington tenía pruebas fehacientes del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, y que la represión involucraba a las tres armas por igual.

Massera, para sorpresa de Vanee, aceptó y asintió a todo lo dicho por el secretario de Estado norteamericano. «Usted tiene razón, pero yo no puedo hacer nada —le dijo—. El país está bajo el mando del Ejército, y hay que hacer las cosas del modo que le gusta al Ejército. Si la Marina estuviera a cargo del proceso, la represión sería muy otra.» Vanee creyó haber encontrado un resquicio de razonabilidad y disidencia dentro de la fachada de unidad monolítica que presentaban las Fuerzas Armadas de cara al exterior, y la conversación prosiguió más agradablemente.

Sin embargo, a partir de ese momento, el tono de Massera se modificó. Comenzó a hablar del embargo de armas, y expresó la difícil posición en que esto ponía a gobiernos que, como el argentino, querían que América del Sur permaneciera en la órbita de Occidente. «Si ustedes no modifican su política, Argentina y los otros países del Cono Sur podemos vernos obligados a actuar coordinadamente, y quizá buscar un nuevo suministrador», arriesgó. Esa velada amenaza de constituir un bloque y pedir ayuda militar a la Unión Soviética desconcertó a Vanee, que no había tenido tiempo de pasar de la buena impresión inicial del amable almirante a este nuevo Massera, que se permitía amenazar al gobierno de Estados Unidos. Esa entrevista finalizó poco después, dejando en Vanee una impresión ambigua.

Esa ambigüedad era precisamente el efecto que Massera deseaba lograr. El almirante Massera estaba dispuesto a conducir un tipo de represión distinta, más afín al gusto norteamericano; el Almirante Cerro a constituir un bloque latinoamericano contra Estados Unidos, que hallara su abastecedor en la Unión Soviética —que en ese



momento también era blanco del embate norteamericano por los derechos humanos, y era uno de los países con mejores relaciones comerciales con la Argentina—. Ciertamente, la amenaza era militarmente vacía, ya que el cambio de abastecedor habría requerido un cambio de tecnología cuya consumación hubiera tomado años. Sin embargo, el doble discurso de Massera sólo estaba diseñado para producir en Vanee la incertidumbre sobre el rumbo ideológico de la Junta argentina, y para colocarse como la bisagra que podía decidir que la arquitectura del conjunto se moviera en un sentido u otro. Y ése era, precisamente, el lugar en que Massera estaba acostumbrado a estar.

Ea relación de Massera con los Estados Unidos fue intermitente, cambiante, vacilante, ambigua y persistente. A mediados de 1977, se esperaba la llegada a Buenos Aires de Raúl Castro, embajador norteamericano ante quien el régimen y principalmente Massera adoptarían la estúpida actitud de despreciarlo porque se trataba de un chicano. El día señalado para su arribo, «desaparecía» misteriosamente de su domicilio Oscar Serrat, corresponsal de la agencia norteamericana Associated Press que había informado sobre violaciones a los derechos humanos, y sería señalado posteriormente en una publicación del régimen como uno de los periodistas que colaboraban con la campaña antiargentina en el exterior. Serrat formaba parte de una red de corresponsales extranjeros que se comunicaba telefónicamente a diario cada mañana para verificar la seguridad de cada uno e intercambiar informaciones sobre el número de muertos que había dejado la noche anterior. Otros miembros de esa red informal eran Isidoro Gilbert, corresponsal de la agencia TASS, y Rogelio García Eupo, que escribía para diversas publicaciones de América Latina y Europa. A las 10 de la mañana, Gilbert llamó telefónicamente al domicilio de Serrat, que quedaba casi exactamente enfrente del suyo, sobre la ancha avenida 9 de Julio. Nadie contestó. Ea llamada se repitió varias veces, con similar resultado. Gilbert llamó entonces a J. Gargantini, gerente de AP. «Oscar no está aquí, y su nombre tampoco aparece en los diarios», fue la respuesta. Gilbert informó a García Eupo, y junto con Gargantini se dedicaron a recorrer hospitales y ponerse en contacto con abogados. El jefe de la AP les dijo: «No hagan nada».

Con todo, como para la una de la tarde no había novedades, la red de periodistas decidió recurrir a militares amigos. Al poco tiempo, el trato de los secuestradores con Serrat cambiaba, y a medianoche lo dejaban libre.

Massera, en una posterior entrevista con los periodistas, argumentó que él habla salvado a Serrat, con quien solía compartir almuerzos en el Apostadero Naval y en el Club Francés de Buenos Aires. A Serrat, sin embargo, le quedó la sospecha de que sus secuestradores eran hombres de la Armada, por el tipo de lenguaje que usaban entre ellos y por el particular momento de confrontación con Estados Unidos en que la Armada se encontraba.

Massera contemplaba con preocupación la aproximación creciente de Videla a los Estados Unidos, que en 1977 se plasmó en la forma de un alto número de reuniones entre el presidente y Terence Todman, y que condujo a que Washington comenzara a verlo como el general moderado, en aprietos bajo la presión de la línea dura, con quien se podría acordar. Justamente después de un período de repetidas reuniones de Videla con Todman en agosto de 1977, Massera decidió unilateralmente el retiro de la Armada Argentina del operativo conjunto UNITAS, en aparente acto de repudio por la enmienda Humphrey-Kennedy. El acto le granjeó una vez más las simpatías de la línea dura del Ejército.

En la entrevista con Vanee iba a resumir las contradicciones desplegadas en la actitud de Massera y a preparar el camino para un importante cambio que se produciría en 1978, puesto que el almirante, como el resto del gobierno y como toda la guerrilla de izquierda, estaba absolutamente convencido de que los Estados Unidos tenían un ilimitado poder de decisión en la política argentina y no podían, por lo tanto, estar ausentes de su propia ecuación de poder.

## Veinticuatro

Al finalizar 1977, la mayoría de los integrantes del régimen estaban persuadidos de que la lucha contra la subversión, que era su justificación histórica, se acercaba a su término, y se dedicaban a imaginar posibles desemboques para el proceso abierto en 1976. Videla y Viola pensaban que se debían ir tendiendo los puentes de una convergencia cívico-militar que fuera posibilitando la transición que siempre habían imaginado hacia una democracia vigilada, mientras la línea dura del Ejército veía en la entrega del poder a los políticos una traición a la sangre derramada y temía que el futuro gobierno democrático los sometiera a un tribunal de Nüremberg.

Massera decidió participar en el debate, que se formalizó en la confesión de tres planes políticos, uno a cargo de cada fuerza. El plan de la Armada, que fue entregado en octubre de 1977, había sido objeto de intensos trabajos, particularmente entre los almirantes Arguedas y Vahinger, que eran los principales cuadros políticos de Massera. A lo largo de numerosas reuniones mantenidas en 1976 y comienzos de 1977, Arguedas, Vahinger, Massera y asesores civiles como Eezama y Jorge Eozano habían advertido la posibilidad de un temprano desemboque electoral por izquierda, que incluyera la candidatura del general Eanusse con un programa neoperonista cuya atracción en la masa peronista estuviera parcialmente basado en el hecho de que había sido éste quien había entregado el poder al peronismo en 1973. Si éste fuera el caso, Massera debería girar hacia la derecha, para detener la hemorragia electoral del Proceso y para captar a los sectores de derecha de la sociedad argentina en un eventual acto comicial. Ahora, en cambio, tras el aplastamiento de las corrientes favorables a Eanusse, los asesores de Massera pensaban en dos posibilidades inspiradas en el modelo brasileño: un partido neoliberal y un partido socialdemócrata. Como los peronistas eran lo más próximo a los socialdemócratas que existía en la Argentina, un partido de ese signo que aspirase a representar la oposición al régimen tendría que atraer al peronismo. Massera asumiría privadamente esta orientación, mientras sus maniobras en la Junta Militar tendían a demorar la apertura política el máximo de tiempo posible.

El plan político de la Armada constó de unas treinta páginas de túrgida prosa del clásico semilenguaje militar. Aparecían, por supuesto, las ya rituales amonestaciones indirectas al Ejército por haberse abstenido de cumplir los términos del pacto de 1976 con respecto al «cuarto hombre», así como severas reprimendas a la Junta Militar por haber evitado hasta ese entonces un examen serio del problema de la institucionalización. Un fragmento interesante es el que discute los conceptos de legitimidad y eficacia:

Mientras la legitimidad es valorativa, la eficiencia es fundamentalmente instrumental.

Eos grupos consideran un sistema político como legítimo o ilegítimo según la manera en que los valores concuerden con los propios. Esa legitimidad, en y por sí misma, puede ser asociada con muchas formas de organización política, inclusive las opresivas.

Esas sociedades feudales, antes del advenimiento del industrialismo, gozaban, sin duda, de la lealtad básica de la mayoría de sus miembros. Esa crisis de la legitimidad puede considerarse como un fenómeno histórico reciente, producto del surgimiento de profundas divergencias entre grupos que se hallan capacitados, debido a la comunicación de masas, para organizarse en torno de valores diferentes a los que previamente eran considerados como los únicos aceptables.

Una crisis de legitimidad es una crisis de cambio social. Por lo tanto deberán buscarse sus raíces en el carácter de cambio de la sociedad moderna. Esas crisis de legitimidad ocurren durante una transición hacia una nueva estructura social, si: 1) el statu quo de las principales instituciones conservadoras se halla amenazado durante el período de cambio estructural; 2) los nuevos grupos de la sociedad no tienen acceso al sistema político en el período de transición o bien una vez que se hacen activos políticamente.

En general podemos decir que, aun cuando un sistema político sea razonablemente eficaz, su legitimidad permanecerá siempre en tela de juicio si en algún momento el «status» de sus principales grupos conservadores se halla amenazado, o si se niega el acceso a la política a grupos que surgen en períodos decisivos. Por otra parte, un derrumbamiento de la eficacia, repetidamente o por un largo período, pondrá en peligro hasta la estabilidad de un sistema legítimo. Éste ha sido el caso argentino.

El documento pegaba inadvertidamente en el clavo para luego proponer una simplificación un tanto gangsteril del concepto de legitimidad. Esos conservadores amenazados bajo condiciones de eficacia del sistema político constituían una referencia al clima político previo a la Revolución Eibertadora, mientras la negativa al acceso a la política de los «nuevos grupos» aludía a la situación previa a 1945 y posterior a 1955. Esa deducción no era mala después de veinte años, pero tendía a restablecer el mito de una «situación de suma cero» entre grupos conservadores y nuevos grupos que no se hallaba garantizada por la materialidad de la política argentina, sino solamente por su ideología.

Esos elaboradores del plan habían considerado diversas alternativas de reforma a la Constitución Nacional. Una de ellas tenía que ver con la introducción del voto

calificado: quien no superara cierto nivel de educación estaría incapacitado para votar. Esa alternativa fue finalmente descartada.

El plan político de la Armada planteaba el dilema entre la representación de grupos conservadores y la representación de nuevos grupos en términos tan duros que resultaba prácticamente imposible de resolver. Esa resolución corría a cargo de un violento acto de sustitucionismo militar, con un partido político organizado por las Fuerzas Armadas que fuera sumando adhesiones a través de una apertura fuertemente condicionada.

La situación en el Ejército había sido diferente. El abogado Raúl Alfonsín, líder del ala izquierda del radicalismo, había mantenido una conversación con Yofre en una Casa de Gobierno semivacía en el verano de 1977. En esa reunión, Alfonsín había expuesto la propuesta de que el régimen militar, como forma de preparar la transición hacia su grácil desvanecimiento, convocara a una Asamblea Constituyente de características peculiares: los partidos políticos que estuvieran en ella se presentarían sobre una base de «afiliación cero», impidiéndoseles reclamar mayor cuota de bancas que la que el régimen estuviera dispuesto a darles; el régimen elegiría los partidos políticos que iban a participar y determinaría una representación similar para cada uno de ellos, y contaría también con su propia participación, en calidad de virtual partido militar. Yofre, entusiasmado, hizo suya la idea y se la comunicó a Villarreal, que la aceptó con retaceos. Villarreal comunicó la propuesta a Videla y Viola, que la juzgaron interesante pero la diluyeron para su presentación ante los comandantes de Cuerpo. Cuando la propuesta llegó a los comandantes de Cuerpo, éstos hicieron a su vez una serie de enmiendas que fueron motivo de fuertes debates entre ellos. Cuando la propuesta regresó a la cúpula militar, se había convertido en un mamarracho irreconocible, que no podía llevar a ninguna parte.

El gobierno, entre el obstruccionismo de la Armada y las contradicciones del Ejército, se veía reducido a la inmovilidad. Massera, a su vez, movía sus piezas para seguir garantizando esa inmovilidad. Algo, sin embargo, se había modificado: el contenido de la propuesta del «cuarto hombre», que en 1976 había sido solamente el intento de garantizar el tercio del poder teórico para la Marina y que en 1977 representaba, a través de alianzas con generales como Suárez Masón y Santiago Ornar Riveros, el intento de quebrantamiento del Ejército.

## Veinticinco

Mientras tanto, Massera desarrollaba una vida personal agitada e intensa. Siempre había sido un gran donjuán, impulsado en parte por su voracidad adquisitiva y la fuerte relación que tendía a establecer entre el sexo y el poder. Al mismo tiempo, siempre había estado deslumbrado por el gran dinero, aunque menos por la fortuna en sí que por el poder que representaba. El Proceso le permitió desarrollar ambas aficiones al máximo, de una manera que al principio potenció sus ambiciones y luego terminó contribuyendo a su fracaso final.

Ea relación de Massera con las mujeres era fuertemente manipulativa, machista, seductora y sinuosa, y levemente amenazante. Eas mujeres que entraban a formar parte de su círculo de relaciones íntimas no ignoraban que él era uno de los máximos jefes del terror que se había desencadenado sobre Buenos Aires, y eso constituía parte de su encanto: tenían con él una relación análoga a la de la ex guerrillera Marta Bazán con el contralmirante Chamorro. Se puede decir que, si él era un Chamorro de lujo, ellas eran unas Martas Bazán de lujo. Al mismo tiempo, Massera poseía grandes maneras, excelentes modales y el aura que se desprendía de un fuerte ejercicio del poder. Sabía simular atención, interrumpir amablemente y llevar la situación hacia su desenlace. Tenía respecto de las mujeres una actitud del tipo «úselo y tírelo»: mantenía una relación sólo durante el tiempo que le resultara conveniente y agradable, para desecharla rápida e irrevocablemente poco después. Se puede decir que despreciaba a las mujeres y las tenía literalmente como objetos de uso. Era un machista tan exagerado que se volvía caricaturesco. Si hubiera que encontrarle un paralelo en la ficción, se diría que se parecía al barón Scarpia, jefe de policía en la *Tosca* de Giacomo Puccini; salvo que Massera carecía de la épica trágica de Scarpia y, a diferencia de éste, sería capaz de caer torpemente por una mujer, pero nunca en función de su amor por ella. Se puede decir que realmente nunca amó a nadie a pesar de que en sus discursos se la pasaba hablando del amor, de la vida y de Dios; y que la única figura que amaba era la imagen, el «sí mismo» que quería construir: el almirante con poder político y popularidad que había definido como su programa personal.

Narcisista y en el fondo inseguro de sí mismo, Massera tendía a rodearse de mujeres que lo adornaran, cuya compañía lo «condecorara» de un modo u otro y que se correspondieran con la idea que él tenía respecto de quiénes debían ser las mujeres que acompañaran al magnífico antihéroe que quería ser. Uno de los *affaires* más renombrados del almirante, que fue la envidia de la mitad de la población masculina de Buenos Aires y un fermento de admiración rencorosa para muchos, fue la modelo publicitaria y actriz televisiva Graciela Alfano, una muchacha alta y bien proporcionada, de facciones bellas, piel blanca y cabellos rubios, rasgos que la

convertían naturalmente en presa codiciada para un universo masculino que se sentía espiritualmente europeo pero temía ser visto como latinoamericano, y que buscaba mujeres de esa apariencia para confirmar su lugar de pertenencia espiritual y cultural. Otro *affaire* de Massera fue la novelista Marta Lynch, considerablemente mayor y más ajada que Graciela Alfano, pero dueña del prestigio de ser una intelectual inteligente, extravertida y audaz. Con Marta Lynch las cosas no pasaron de unos pocos encuentros sórdidos en el propio despacho del almirante, aunque la escritora quedó prendada y no perdía oportunidad de insistir en su relación con él. Al parecer, esa insistencia llegó a hacerse tan pesada que Massera debió pedirle que le enviara todas sus cartas y mensajes por medio de un emisario, ya que «Lily» estaba celosa y los almirantes desaprobaban la amplia publicidad que recibía su escandaloso estilo de vida. La novelista confiaba entonces al emisario cartas y mensajes que Massera no se preocupaba por leer, lo que colocaba a aquél en la embarazosa posición de tener que inventar pretextos para justificar semejante desinterés. Marta Lynch se había sentido atraída desde hacía mucho tiempo por los hombres con poder: *La alfombra roja*, su primera novela, narra su *affaire* con Arturo Frondizi. La trayectoria de Frondizi a Massera quizá no era casual, como acaso tampoco lo sería el suicidio de la escritora varios años después, cuando ya no podía soportar su envejecimiento. El almirante halagó a la coleccionista de hombres públicos que había en Marta Lynch, y la novelista al marino semiilustrado y ansioso de barniz cultural que era Massera.

La difusión de todas estas relaciones, que en cierto modo Massera necesitaba dejar trascender para cimentar su fama de «macho» y porque eran en gran medida relaciones para ser mostradas, inquietaba profundamente a «Lily», que no se resignaba del todo al papel de una respetuosa y sumisa esposa naval. Además, ahora que su marido se enredaba en notorios romances con mujeres famosas, se le ocurría que las demás esposas navales y militares, a las que tanto había despreciado y desdeñado, granjeándose su antipatía y hasta su odio, la miraban de un modo provocativo y burlón, resarciéndose de las humillaciones anteriores y cubriéndola de vergüenza. Las reacciones de «Lily» ante las escapadas de Massera oscilaban entonces entre la escena de celos y la más absoluta negación: el estallido ocurría cuando ya no podía persuadirse a sí misma de que nada malo pasaba.

Ninguna de las múltiples relaciones amorosas de Massera fue tan importante personal y políticamente como la que mantuvo con Martha Rodríguez McCormack. Se habían conocido en una fiesta a fines de 1975, y el almirante quedó fuertemente impresionado por su belleza. Uno de los asistentes a esa fiesta recordaría años más tarde que se había quedado fascinado en la contemplación de una tenue venilla azul en los senos de la mujer, que parecían ofrecidos en bandeja a través de un profundo escote. Según se comentó en aquel entonces, Massera mantenía en ese momento una relación amorosa con Cristina Rodríguez McCormack, hermana mayor de Martha y esposa del diplomático argentino Luis Clarasó De la Vega. Según versiones de esa época, Ana Teresa McCormack, madre de Cristina y de Martha, habría hecho todo lo

posible para desviar la atención de Massera hacia la menor. Los McCormack no eran exactamente una familia de la alta burguesía, pero Martha había estado casada con el poderoso terrateniente y empresario César Blaquier, de quien tenía un hijo. Su segundo matrimonio fue con el empresario Fernando Branca, un ex guardiacárcel que había logrado construirse una fortuna mediante operaciones en Estados Unidos y una compañía argentina importadora de papel. Los orígenes de la fortuna de Branca nunca fueron demasiado aclarados, mencionándose en distintas oportunidades su colaboración con personajes del crimen organizado en Estados Unidos. En todo caso, su matrimonio con Martha Rodríguez McCormack en 1974 le sirvió como importante instrumento para acrecentar el nivel de sus operaciones, aprovechando el dinero y las conexiones sociales de que disponía su flamante esposa en momentos en que la Argentina comenzaba a vivir, con el Proceso, la etapa de alta especulación financiera y atraso cambiarlo conocida como «la plata dulce», donde florecía el arribismo social y las nuevas fortunas se hacían y deshacían en minutos.

A fines de septiembre de 1976, Branca, que se desempeñaba entonces como titular de la firma Durbin SRE, instó a su mujer a que le consiguiera una entrevista con Massera a fin de que éste lo ayudara a desbloquear 1.600.000 dólares depositados en el Banco Central. Martha accedió, y Branca fue llevado pocos días después al despacho del almirante donde lo esperaban éste y su amigo personal e importante ayudante financiero, el escribano Natalio Hocsman. Se pusieron de acuerdo rápidamente, y Massera dio a Branca los datos del contralmirante Andrés Covas, quien se desempeñaba en ese momento en el directorio del Banco Central. El desbloqueo de los fondos se llevó a cabo con facilidad, y Branca entregó a Hocsman un regalo de 40.000 dólares como agradecimiento por los servicios prestados y como manifestación de su interés por seguir haciendo negocios con la Marina.

Ea relación se desarrolló velozmente: Massera y Branca pronto llegaron a un entendimiento para instalar una financiera o un banco, que eran los medios de enriquecimiento más rápidos de la época. El empresario se comprometió a entregar como capital inicial lo que resultara de la venta de unas 3.000 hectáreas de que disponía en la localidad de Rauch en la provincia de Buenos Aires. El problema consistía en que parte de esa propiedad estaba comprendida en un juicio de división de bienes emprendido por Ana María Tocalli, ex esposa de Branca. Se necesitaba conseguir un comprador que estuviera dispuesto a adquirir el campo haciéndose cargo de las deudas. Massera asintió, y al poco tiempo le dijo a Branca que existía un inversor español interesado en la operación y que debía hablar con el escribano Ariel Sosa Moline, quien se desempeñaba como su representante. Una curiosidad de la vida de Massera es su predisposición a rodearse de escribanos: además de Hocsman y Sosa Moline, estaban también Saturnino Herrero Mitjans, Dalla Eastrá y Olejaresca, este último dueño de varias galerías de arte. Tales relaciones tenían que ver con el manejo de las múltiples propiedades de Massera, y se volverían importantes en la ola de adquisiciones ilegales que éste protagonizaría después.



Al tiempo que establecía estos contactos comerciales, Massera desarrollaba una relación creciente y tempestuosa con Martha Rodríguez McCormack. El lugar de sus encuentros era un departamento en la calle Darragueira, en la zona elegante del barrio de Palermo. El adulterio era, en cierto modo, el motor del rápido enriquecimiento de Branca, quien deliberadamente hacía caso omiso de la relación entre su mujer y el almirante y se daba, a su vez, a frecuentes aventuras amorosas, la más importante de las cuales era la que mantenía con la modelo Cristina Earentis, que a su vez era novia de uno de sus mejores amigos personales, Jorge Burgess. Sin embargo, Martha

Rodríguez McCormack, que era una de esas mujeres que pueden vivir y soportar cualquier cosa menos la indiferencia y la falta de atención, no toleraba los repetidos adulterios de su marido y se lo hacía saber en escenas de creciente virulencia física y verbal. Las relaciones amorosas y financieras en este círculo parecen, vistas retrospectivamente, una suerte de extraña cinta de Moebius, donde no se sabe dónde empieza una y dónde comienza otra ni el modo en que alguien que en un momento estaba «arriba» pasa en el minuto siguiente a estar «abajo».

Al llegar la Semana Santa de 1977, Branca intentó recomponer las relaciones con su esposa mediante una invitación a Punta del Este donde también fueron incluidos su socio Jorge Piaggio y Raúl Ibarra, amigo y contador del empresario. También viajaron las esposas de estos dos últimos, Marta Piaggio y Silvia María Rondot de Ibarra. Tiempo después, uno de ellos recordaría que Martha Rodríguez McCormack mantuvo todo ese viaje su pose favorita, que consistía en dejar que la minifalda se le arragara descuidadamente hasta que se le pudiera ver la ropa interior.

El mar de fondo en la pareja era evidente y ninguno se preocupaba por disimularlo. Durante una pelea, Branca estalló: «¡El vivo soy yo, estúpida! ¡Yo soy el vivo! ¡Me los paso a todos, a todos! ¡También al piola de Massera! ¡Ee vendía un buzón con lo del Banco Central y ni se avivó, ni él ni el otro marino del Banco! ¡Me los pasé! ¡El vivo soy yo!» Al tercer día, con el casino del Hotel Nogaró como escenario, tuvo lugar una escena de celos. Martha, mirando a Branca y Piaggio apostar distraídamente sus fichas, se unió a Ibarra y a su esposa y comenzó a quejarse de las infidelidades de su esposo. «¡Me lo debés todo a mí», gritó en un momento, preocupándose de que todos los presentes en el lugar la escucharan. Su marido no le hizo caso. «¡Tenés algo gracias a mí!», insistió. Harto, Branca se levantó para irse. Martha entonces gritó: «A este hijo de puta lo voy a hacer sonar. Cuando llegue a Buenos Aires le voy a contar al Negro que lo quiere pasar en un negocio, y el Negro le va a pasar un camión por encima». Al día siguiente, Martha repitió la amenaza ante Silvia María Rondot de Ibarra y el propio Branca, quien había entrado en el dormitorio que ya no compartía con su esposa para buscar un sweater. Martha comenzó a insultarlo y Branca entonces la golpeó en la cara, a lo que ella repitió: «Ee voy a avisar a Massera la trampa del negocio que le hiciste resolver, y entonces que Dios te ayude».

\blvieron a Buenos Aires. A los pocos días. Branca, que se había ido a vivir al departamento de Cristina Earentis, recibió en sus oficinas una llamada de Massera invitándolo a cenar en el restaurante del Hostal del Eago. Un día antes, Martha Rodríguez McCormack había solicitado y conseguido que el almirante fúera a verla urgentemente a su departamento de Eibertador y Ocampo. Massera llegó, tomo café y escuchó su relato. Su respuesta fúe característica:

—Yo ya sé quien es Branca, los alcances de la maniobra que está intentando. Sólo me falta saber si vos estás o no metida. Tu situación va a ser analizada para proceder en consecuencia. Yo ya sé que vos no tenés la culpa, que te usaron, pero hay un sector de la fuerza que piensa todo lo contrario, y te involucra en la estafa que decís.

Al poco tiempo, Massera, Branca, Cristina Earentis y Rodríguez, un ayudante de Massera identificado sólo por su apellido, compartieron una cena en el Hostal del Eago. El clima fue tan agradable y distendido que resultó normal que Massera invitara a Branca y a Cristina a una excursión en el yate naval. Cristina se disculpó pretextando una indisposición. Branca aceptó.

A las 10 de la mañana siguiente, el empresario fue despertado en el domicilio de Cristina por una llamada telefónica del «ayudante Rodríguez» para recordarle, de parte del almirante Massera, que lo esperaba en el Apostadero Naval de San Fernando para ir a navegar, tal como habían convenido en el Hostal del Eago. Branca se trasladó entonces a su oficina, a donde llegó a las 11. A las 11.30, cuando había salido para tomar un café, su secretaria recibió una nueva llamada del «ayudante

Rodríguez», recordándole que debía reunirse con Massera a las 15 en el lugar fijado. El empresario se comunicó entonces con el doctor Horacio Groppa, su abogado, y le pidió que lo llamara a la noche porque debía salir a navegar con Massera.

A las 2 de la tarde Branca llegó visiblemente nervioso al departamento de Libertador y Ocampo para ducharse y cambiarse de ropa. Le dijo a Martha que creía que lo estaban siguiendo, y Martha contestó: «A mí también me están siguiendo». También le relató que había cumplido su promesa de Punta del Este. El empresario se fue en su auto por Avenida Libertador, y habría sido interceptado poco después por un vehículo donde viajaban dos hombres que lo encañonaron, lo obligaron a bajarse de su auto y a subir al de ellos. Según una versión que circuló en esa época, esos hombres habrían sido el teniente Jorge Radice y el capitán Eduardo Osvaldo Invierno.

A las 8 de la noche nadie sabía nada de él. El «ayudante Rodríguez» se había vuelto a comunicar con las oficinas de Branca, preguntándole a la secretaria por qué el empresario no se había presentado a la cita con Massera. También telefoneó al

departamento de Cristina Larentis, donde sólo pudo hablar con la empleada doméstica. Cristina Larentis llamó luego a Ibarra, planteándole su preocupación por la ausencia de Branca.

Al día siguiente, una especie de telegrama pasaba por debajo de la puerta de la casa del Dr. Groppa, quien tampoco había tenido noticias de Branca desde el mediodía anterior. Su texto rezaba «Mensaje en el auto en el aeroparque», y aparentemente había sido enviado desde Uruguay. Pero presentaba características sospechosas: el nombre de Groppa figuraba en la parte correspondiente al texto, estaba todo escrito a máquina y daba la impresión de que las palabras habían sido extraídas de otro texto, que había sido mutilado y cortado. Sin embargo, tenía un número, aparentemente puesto con sello numerador.

Groppa se trasladó al Correo Central para verificar la autenticidad del mensaje. Los funcionarios de correos declararon inmediatamente que era falso, pero indicaron que el número que llevaba correspondía a una felicitación telegráfica, proveniente de Europa y dirigida al Plaza Hotel de Buenos Aires, con motivo del matrimonio entre Eduardo Enrique Massera (hijo del almirante) y María Luisa Méndez Ezcurra. El casamiento se había realizado en la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro el 16 de abril de 1977, doce días antes de la desaparición de Branca. Con posterioridad, se había realizado una recepción en el Plaza Hotel. Nuevamente Massera dejaba huellas, jugaba con el peligroso borde de la verdad.

Atemorizado, Groppa pensó que siempre había habido algo extraño en el entorno de Branca, algo que él nunca terminaba de comprender. Súbitamente, la ciudad se le antojó extraña, fría y hostil. Volvió a su casa y confió a su esposa María y a su hermana Beatriz la recuperación del supuesto mensaje. Las dos encontraron el Mercedes Benz rojo del empresario en una playa de estacionamiento adyacente al aeropuerto. Abrieron el coche y hallaron esta nota manuscrita:

Me ausento por unos días. Ya tendrán noticias mías.

Me parece que ese escribano es un boludo.

Qué va a decir el A.

*FB*

Sin embargo, la letra no correspondía a Branca, y éste nunca firmaba nada solamente con sus iniciales. Groppa recibió un segundo telegrama, esta vez desde Río de Janeiro, que anunciaba el próximo regreso y enviaba saludos a Hocsman. La secretaria de éste recibió a su vez un télex desde

Río de Janeiro, que estaba dirigido a Piaggio y le recomendaba seguir las

tratativas con «nuestro común amigo». Averiguaciones posteriores realizadas por Groppa mostraron que en el «Manifiesto de Pasajeros» de la declaración de arribos y partidas del Aeroparque figuraba que una persona llamada Fernando Branca, munida de una Cédula de Identidad que coincidía con la del empresario, tomó un taxi aéreo a Uruguay en compañía de una mujer llamada Amelia Cáneva. Aún más, el viaje habría tenido lugar el mismo día de la desaparición de Branca. Sin embargo, el piloto del taxi aéreo negó que él hubiera trasladado a una persona del aspecto del empresario, y sumó un nuevo elemento de sospecha a la investigación al decir que el vuelo no se había realizado desde el Aeroparque, donde Branca teóricamente había dejado estacionado su auto, sino desde Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. Las sospechas se acumulaban, y Natalio Hocsman sugirió a los involucrados que plantearan el caso directamente a Massera. Groppa y Piaggio accedieron, y fueron trasladados al Edificio Libertad en un vehículo especial fletado por la Armada.

Massera los recibió sonriente y los invitó a exponer su caso. El primero que lo hizo fue Groppa, quien habló desordenadamente y le mostró a Massera el supuesto primer telegrama de Branca. Seguidamente habló Piaggio. Massera no tocó los documentos, que incluían la falsa carta manuscrita de «FB». Acto seguido tocó un timbre, y en la puerta aparecieron el capitán de navío Eduardo Osvaldo Invierno y el teniente de fragata Jorge Radice. Ni Groppa ni Piaggio conocían a Radice, por lo que su presencia no les provocó la menor sorpresa. Massera explicó que estos señores serían los designados para investigar el caso y le pasó los documentos a Invierno. Nadie los volvería nunca a ver.

La investigación fue exactamente a contramano de lo deseado por Groppa y Piaggio: no se trataba de determinar cómo había desaparecido Branca, sino si algún oficial de la Marina podía estar involucrado. Hubo varios interrogatorios, de los cuales no quedaron registros. Massera sostuvo en algún momento que Amelia Cáneva era una subversiva, lo que no pudo probarse. Al fin se canceló la investigación. Igual camino tendría el recurso de hábeas corpus solicitado en julio por Isolina Maltaneri de Branca, madre de Fernando, así como sus posteriores intentos durante ese año por lograr alguna actuación judicial al respecto.

La desaparición de Branca constituyó la extensión de los principios operativos del Almirante Cero al terreno del lucro personal y una representación simbólica del momento en que la represión empezó a dirigirse contra miembros de la propia burguesía, en lo que un personero del régimen, con fúnebre ironía, denominó la lucha contra la «subversión económica». Otro caso destacado del mismo tipo fue el secuestro por el GT 3.3.2 del terrateniente y empresario mendocino Victorio Cerutti, de 77 años, y sus socios Horacio Mario Palma, Ornar Raúl Masera Pincolino y Conrado Higinio Palma, en febrero de 1977, con la posterior designación de personeros de Massera en las firmas del grupo y el traslado de los valores a empresas que actuaban como testaferros de su creciente fortuna personal. La magnitud de estas

operaciones llegó a ser tan alta que en un momento la ESMA debió establecer su propia inmobiliaria, donde se comerciaba con las propiedades arrancadas a prisioneros bajo tortura o por medio de la falsificación de firmas.

Massera empezaba a actuar como si su poder no tuviera ningún límite, o por lo menos como si hubiera caído el límite del principio para cuya defensa el régimen se había construido a sí mismo como *ultima ratio* militar: la propiedad privada.

## Veintiséis

El enriquecimiento de Massera era gradual y constante, solamente disimulado por su propia avaricia y por el hecho de que ya antes era un hombre próspero y por eso no resultaba tan notorio como el de aquellos que hablan entrado al Proceso desde una posición humilde y de repente aparecían ostentando autos, propiedades y fortunas. Su enriquecimiento se manifestaba a través de mejoras y ampliaciones de lo que ya tenía: de tener un piso de 300 metros cuadrados en la calle Soldado de la Independencia, pasaría a tener otro en avenida Figueroa Alcorta de 500 metros cuadrados, y de disponer de un departamentito en Washington como *pied á terre* norteamericano pasaría a contar con un departamento más grande, amplio y mejor instalado, donde era posible pasar temporadas largas.

Sin embargo, sus progresos como propietario se verían solamente después de su pase a retiro, ya que durante su comandancia todo se disimulaba tras los privilegios institucionales de que gozaba, y su creciente riqueza, plasmada en adquisiciones privadas y cambios de marcas, sólo podía ser detectada por los más allegados. De vestirse sólo correcta y discretamente, Massera pasó a disponer de los servicios de sastrerías importantes de la época como Trimarchi (de la que hizo cliente a su viejo amigo, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner) y González; posteriormente dejó de ser cliente de ellas porque todas le regalaban los trajes a medida. También adquiriría caballos de carrera, ya que el turf constituía su debilidad personal, y se rodeaba de los más novedosos detalles de confort.

Massera tenía una personalidad fuertemente adquisitiva y posesiva. Tendía a comprar por pares: veía algo que le gustaba y compraba dos, como si temiera que un solo artículo pudiera gastarse y arruinarse y necesitara un segundo como una especie de seguro del primero. El hábito incluía desde camisas, corbatas, trajes y botellas de whisky hasta televisores, estéreos e incluso heladeras. Tenía una extraña pasión por las heladeras, y mostraba a sus amigos los últimos modelos que había comprado con la alegría de un chico con un juguete nuevo. Massera fue uno de los primeros que dispuso en la Argentina del tipo de heladera con freezer que tiene un grifo exterior para jugos de fruta; un amigo suyo recordaría después que el almirante se pasó toda una tarde explicándole cómo funcionaba.

Como estilo de vida, Massera reclamaba sólo lo mejor. Sus bebidas eran el champagne y el whisky escocés. Se disculpaba cuando tomaba whisky, como si hubiera sido una droga prohibida, pero una vez que empezaba bebía en grandes cantidades, generalmente acompañando las libaciones con salamines cortados. El alcohol no le provocaba ningún efecto aparente: muchos recuerdan haberlo visto tomando whisky y comiendo salamín a las 9 de la mañana de un día de trabajo sin

que se le advirtiera la menor alteración de conducta: una broma de la época decía que «nadie vio nunca a Galtieri sobrio, y nadie vio nunca a Massera borracho». Su comida favorita era la carne de langosta, pero condescendía a los langostinos si el lugar donde estaba no tenía langostas vivas. Tenía gran afición a todo lo que viniera en lata, desde mariscos chilenos hasta foie gras. Eos pescados y los mariscos caros lo fascinaban, constituyendo uno de los pocos hábitos que podían relacionarse a su origen naval. Sin embargo, también lo entusiasmaban el jamón crudo, las cazuelas de pollo, las brochettes y el asado criollo, que disfrutaba haciendo y sirviendo personalmente a su familia y amigos.

Gustaba en general de rodearse de objetos sofisticados y caros, y de manipularlos como juguetes. En el fondo, esos objetos cumplían el mismo papel de adoración narcisista que su adquisición de mujeres sofisticadas, caras y difíciles: eran los juguetes del príncipe, las marcas de su prestigio y valoración. Era como si, para ser quien deseaba ser, comenzara primero por rodearse de la escenografía donde imaginaba a ese personaje que él quería ser.

Massera, sin embargo, no era generoso dentro de este estilo de vida, y tendía a dar por supuesto que los otros tenían exactamente los mismos deseos que él en cada momento. Si, por ejemplo, debía someterse a un régimen estricto, nadie que fuera a su casa comería o bebería más que él, y jamás ofrecería bebidas a sus invitados si él mismo no estaba bebiendo. Los invitados eran prolongaciones de su voluntad y de sus deseos, del mismo modo que la familia desarrollaba una vida donde todo era posible menos contradecirlo y enfrentarse a él.

## Veintisiete

La actividad de la ESMA alcanzó su pico en 1977. La Escuela empezó a funcionar como uno de los campos de concentración más organizados, completos y sistemáticos del país. El contralmirante Chamorro solía mostrar con orgullo a los visitantes navales, militares y civiles la estructuración prolija del lugar, especialmente el «ministaff» —que quedó integrado en forma más o menos estable por Marta Bazán, Alfredo Borsalino, Ana Bathan, Jorgelina Ramos y el notorio falsificador montonero Miguel Ángel Eauletta—; el «staff» —donde estaban Eila Victoria Pastoriza de Jozami, Martín Grass, Juan Gasparini, Horacio Domingo Maggio, Beto Ahumada, Andrés Castillo, Graciela Daleo, Susana Burgos y Silvina Eabayru—, y la improvisada maternidad que se había montado para atender los partos de las prisioneras embarazadas (los hijos eran luego entregados a matrimonios navales y militares incapaces de procrear).

Al comenzar y terminar 1977 tuvieron lugar dos casos, que solamente con el tiempo adquirirían relevancia por escapar una vez más del clásico patrón y blanco de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2 y concentrarse en ciudadanos extranjeros. El primero fue prácticamente un accidente: Norma Susana Burgos había sido detenida por el GT de la ESMA el 26 de enero de 1977, y había sido llevada a su casa de El Palomar para un completo allanamiento, después del cual parte del grupo se retiró con la secuestrada dejando en el lugar a siete personas fuertemente armadas. Uno de ellos era el teniente de corbeta Alfredo Astiz. A las 8.30 de la mañana siguiente, la adolescente sueca Dagmar Ingrid Hagelin se presentó en la vivienda para preguntarle a su amiga Norma Susana si proyectaba irse de vacaciones a la playa. Al llegar a la casa, Dagmar se encontró encañonada por los integrantes del grupo, que la confundieron con la jefa guerrillera María Antonia Bergen Aterrada, Dagmar Hagelin comenzó a correr y, cuando llevaba unos 30 metros de ventaja a sus perseguidores, Astiz puso rodilla en tierra y disparó un solo tiro a la espalda de la adolescente, que cayó sobre la calle. Solamente después se darían cuenta de que habían cometido un error grave, ya que el gobierno de Suecia tomó cartas en el asunto y el embajador sueco en Buenos Aires empezó a desarrollar una campaña sistemática por la aparición de Dagmar.

El otro incidente ocurrió a finales del año. Acosta había impulsado y desarrollado la idea de que el GT se infiltrara en los crecientes organismos de defensa de los derechos humanos, que eran considerados mascarones de proa de la subversión armada. Astiz fue, nuevamente, el encargado de desarrollar la tarea, en parte por su rostro aniñado y sus maneras elegantes y simpáticas y en parte porque tenía un fuerte parecido con el hermano de un desaparecido real, con la ventaja de que ese hermano se hallaba fuera del país. Astiz, a quien se apodaba indistintamente



«Ángel», «Cuervo» y «Rubio», recibió falsos documentos de identidad fabricados por Eauletta, y se hizo acompañar por la montonera detenida Silvina Eabayru a las marchas semanales silenciosas que madres de los desaparecidos realizaban alrededor de la Pirámide de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, para reclamar la aparición de sus hijos. Como forma de hacer verosímil a su personaje, Astiz llegó incluso una vez a contestar una intervención policial peleándose a trompadas con la policía. A fines de 1977, la confianza de las madres en Astiz era total.

El 8 de diciembre, se reunieron las madres, representantes de organismos defensores de los derechos humanos y la religiosa francesa Sor Alice Domon en la Iglesia de Santa Cruz, para redactar el texto de una solicitada. Allí los esperaba el GT 3.3.2, que los secuestró y los trasladó a la ESMA junto con Astiz, quien todavía seguía desempeñando su papel. El 10 de diciembre, gracias a la información de inteligencia conseguida por Astiz, fue secuestrado un segundo grupo que incluía a otra religiosa francesa. Sor Eeonie Duquet, y a la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vicenti. Sólo tiempo después lograrían las Madres averiguar que «Gustavo Niño» —la identidad asumida por Astiz en esa operación— era en realidad un oficial naval, gracias a un cotejo que se realizó con una organización de solidaridad con los prisioneros argentinos creada en Francia y que Astiz también había infiltrado, en esa ocasión asumiendo la identidad de «Eduardo Escudero».

El caso de las monjas francesas constituye retrospectivamente una suerte de *puzzle*. Eas monjas, en un principio, fueron bárbaramente torturadas, con interrogatorios que se centraban en la participación subversiva dentro de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Con posterioridad, se hizo escribir a una de ellas una carta de su puño y letra afirmando que las dos estaban secuestradas por un «grupo disidente del gobierno de Videla» que reclamaba la liberación de una veintena de prisioneros políticos. Incluso se hizo falsificar una fotografía donde las monjas aparecían en una supuesta «cárcel del pueblo», con carteles, símbolos y emblemas de la organización Montoneros. El gobierno francés no cayó en la trampa y empezó a desarrollar una persistente presión sobre la Junta Militar argentina para conocer el destino de las monjas.

Súbitamente, el proceso dentro de la ESMA se aceleró. A los pocos días del secuestro, las mojas desaparecieron de la Escuela y comenzó a circular la información entre los prisioneros de que habían sido objeto del «traslado» final. Según el relato posterior de Juan Gasparini, el grupo encabezado por el capitán Acosta decidió no esperar el «traslado» semanal regular, y prefirió ejecutarlas antes de tiempo y fondearlas en los ríos del Tigre, una práctica altamente irregular para el GT 3.3.2. Gasparini relata incluso que el teniente de navío Antonio Pernía admitió el hecho implícitamente delante suyo, y arriesga la hipótesis de que el apresuramiento se debió al temor de Acosta a que el GT 3.3.2 fuera «traicionado» por Massera, cuyo retiro

como comandante del arma empezaba a acercarse, y cuyas intenciones de desarrollar una actividad política personal eran evidentes.

El enigma probablemente no podrá resolverse nunca, ya que existen tantos elementos para confirmar la hipótesis de Gasparini como para desmentirla. Ciertamente, Massera ya empezaba a perfilar una actividad política propia, e incluso así se lo había comunicado implícitamente a Acosta en una entrevista en 1977 donde le pidió que velara por la recuperación moral de los integrantes del «staff». Massera comunicó a Acosta su vieja creencia de que la subversión constituía un impulso constructivo mal encaminado, y que había que aspirar a contar con las fuerzas de la juventud, y era un hecho que hacía revisar sus discursos de carácter más «nacionalista» por los ex montoneros integrantes del «staff», pidiéndoles que agregaran y quitaran cosas. Acosta se preocupó un poco en esa reunión, y llegó a sugerir la «irrecuperabilidad» de la prisionera Norma Arrostito, que fue «trasladada» poco después.

Al mismo tiempo, debía ser claro, incluso para Acosta, que Massera lo consideraba parte integrante de su propia ecuación de poder, como lo demostraría más tarde designándolo para una importante misión en París e incluyéndolo en el staff político que construyó después de su retiro. Seguramente, el almirante no habría confiado en Acosta de sospechar que éste era un potencial saboteador. Con todo, la verdad es que Massera no pudo o no quiso hacer nada en el caso de las monjas francesas, y ésa sería una de las razones de su caída.

## Veintiocho

Massera comenzó 1978 con una doble movida inesperada y audaz: presentarse ante los Estados Unidos como el defensor de los derechos humanos en la Junta Militar argentina, y comenzar el diálogo en pleno con los peronistas exiliados, incluso montoneros.

La apertura norteamericana y progresista del almirante respondía a varias razones. Una era que estaba crecientemente convencido de que le hacía falta un factor externo para desequilibrar la empantanada relación de fuerzas local, donde él y el I Cuerpo del Ejército podían conspirar contra Videla pero el Ejército no estaba dispuesto a fisurar su unidad institucional y ninguno de los bloques disidentes estaba dispuesto a respaldarlo decisivamente a él. A su juicio, el factor externo más fuerte para desequilibrar esa balanza era el gobierno de Estados Unidos, al que tendía a conferir propiedades omnipotentes y omnicomprensivas. Otra razón era que pensaba que la guerra antisubversiva como tal estaba terminando, y por lo tanto no sólo convenía realizar una apertura anticipada hacia la política de derechos humanos del Departamento de Estado sino también hacia los Montoneros de la derrota, que conspiraban sin resultados en el exterior. Massera se imaginó a sí mismo como un Perón que hubiera salido victorioso de su enfrentamiento con los Montoneros el 1° de mayo de 1974, como un Perón que no sólo los hubiera echado de la Plaza de Mayo sino que además los hubiera torturado y doblegado en la ESMA y ahora viniera a tenderles su mano de reconciliación para volver a unir a la familia del inevitable movimiento peronista. Él sería el punto de reunión, porque había sido él quien los había disciplinado y castigado, y porque contaba también en sus cárceles con el resto de los sectores más importantes del movimiento. Durante una época llegó incluso a deplorar que Norma Arrostito fuera «irrecuperable».

Aquí Massera mostraba a la vez comprensión e ingenuidad. La comprensión era que el pase al bando opuesto de un líder caracterizado de la guerrilla constituía un triunfo de primer orden para él; la ingenuidad era pensar que ese «pase» de un enemigo, logrado literalmente a punta de pistola, podía ser legítimo, duradero y auténtico. Y como su propuesta sólo podía florecer en la forma de una salida alternativa dentro de condiciones de máxima represión, el único peronismo que era capaz de reconstruir el almirante era el peronismo carcelario, que había sido derrotado pero no convencido.

Al terminar 1977, Massera envió a dos oficiales superiores de la Armada a Washington y a Nueva York. Viajaban en carácter privado, por lo cual sus movimientos no despertaron la atención de la embajada argentina, que en ese momento era jurisdicción del Ejército y del Ministerio de Economía. Inmediatamente

después de llegar, desarrollaron una serie de contactos con figuras públicas y privadas que podían llevar su mensaje al corazón político de la administración Cárter, como el senador demócrata neoyorquino Jacob Javits y Lawrence Birns, presidente del Consejo de Asuntos Hemisféricos, un lobby de presión sobre la situación de los derechos humanos en distintos países de inclinaciones centroizquierdistas. El mensaje consistía en que la Armada Argentina propiciaba la publicación de una lista completa de presos políticos y «desaparecidos» en combate, una idea con la que Massera había comenzado a flirtear en los últimos meses.

Los enviados de Massera también dijeron que la Armada propiciaba la transferencia de las áreas militares a la jurisdicción de las cortes civiles, un plan para el pronto retorno a la democracia y un mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos, lo cual ya se alejaba más considerablemente de la verdad. Los oficiales argumentaron que la razón por la cual la Armada no conseguía estos objetivos era la cerrada oposición de Videla y el Ejército, y que la permanencia de Videla al frente del país tenía mucho que ver con el «apoyo» de los Estados Unidos. «Si Estados Unidos no lo apoyara, Videla caería», dijeron, cerrando conceptualmente la operación y citando como ejemplos de ese «apoyo» la «cálida» bienvenida de Cárter a Videla en septiembre de 1977 y la gira de Cyrus Vance en noviembre de ese año. Eos oficiales dijeron incluso que la imagen de la Armada como la línea dura de la represión era una mera proyección de la ineptitud e inacción de Videla, y que así como el almirante Massera había desarrollado una reciente gira por Europa para explicar la situación argentina y su propia posición sobre ella, ahora le gustaría realizar un viaje a los Estados Unidos, quizá bajo la apariencia de una misión de intercambio militar, para decirle a Jimmy Cárter cara a cara que él estaba a favor de la democracia. Eos marinos agregaron que su fuerza se interesaba por la publicación de la lista completa de detenidos y desaparecidos desde la visita de Vance, y que Videla se rehusaba a entregarla porque él mismo no la tenía y los generales de línea dura que mantenían a los prisioneros se negaban a darla.

La administración Cárter recibió este mensaje con emociones mezcladas. Massera, por un lado, había sido tempranamente caracterizado por Patricia Derian y otros funcionarios del gobierno como la línea dura contra los derechos humanos. Sin embargo, por otra parte, también era reputado en los Estados Unidos como un personaje inconsistente, impredecible e inteligente, y esto abría resquicios de esperanza para la posibilidad de que lo que se estaba diciendo fuera cierto. Otro punto a favor de Massera eran las críticas crecientes que había empezado a recibir la política de derechos humanos de la administración Cárter por parte de los grupos más derechistas de Estados Unidos, que buscaban el retorno a una diplomacia más convencional y menos idealista, basada en las propias conveniencias y en el respeto al sistema de alianzas. El propio Cárter cayó parcialmente en la trampa de Massera. A lo largo de una conferencia de prensa donde un periodista le preguntó sobre derechos humanos, dijo entre otras cosas: «Creo que estamos teniendo éxito en una forma lenta,

tediosa. Esta mañana me he enterado, aunque no puedo garantizar su veracidad, de una noticia de prensa relacionada con los actuales líderes militares de la Argentina. Un grupo que los desafía, creo que de la Marina, dijo que la base del éxito futuro del gobierno era un mayor compromiso con la causa de los derechos humanos. Y ellos piensan que nosotros deberíamos apoyarlos porque son los más convencidos de que la cuestión radica en los derechos humanos».

Al mismo tiempo, Massera comenzó a desarrollar su apertura peronista y montonera. El canal elegido fue el Centro Piloto de París, un organismo paradiplomático que en un principio había sido montado teóricamente para contrarrestar la campaña de denuncias en el exterior contra las violaciones de los derechos humanos en la Argentina, pero cuyo verdadero objetivo era hacer avanzar los proyectos políticos personales de Massera. El Centro, en realidad, se había inspirado inicialmente en los informes sobre subversivos exiliados que había comenzado a enviar a Buenos Aires Elena Holmberg, una funcionaria iconoclasta que tenía la costumbre de desarrollar iniciativas propias. Eos funcionarios civiles de la Cancillería juzgaron que su tarea era excelente; los funcionarios navales a cargo del Ministerio encontraron en esos informes el pretexto para establecer un organismo de doble vía.

Eos responsables de montar el Centro Piloto fueron el capitán de fragata Eugenio Bilardo y el teniente de navío Enrique Yon. Sin embargo, poco después de su arribo, Elena Holmberg y el embajador actuante en esa época, Tomás de Anchorena, se dieron cuenta de que su objetivo no era profundizar los informes que Holmberg había comenzado a enviar, ya que los marinos y sus esposas se dedicaban a darse la gran vida y usaban la embajada meramente como un lugar útil para conseguir servicios y privilegios diplomáticos. Su consigna formal era contrarrestar la campaña antiargentina en el exterior, pero su consigna real era negociar la posguerra argentina y establecer las condiciones para la tregua, con vista al Campeonato Mundial de Fútbol de 1978.

Massera, sin embargo, todavía necesitaba del respaldo de la línea dura del Ejército, y es legítimo preguntarse cómo consiguió mantenerlo pese a su pronunciado giro a la izquierda. Una razón es que una parte de esa línea dura —representada, por ejemplo, por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante del IV Cuerpo de Ejército— estaba evolucionando hacia posiciones corporativistas cercanas a las de Massera y planteaba una alternativa donde el futuro se dividiría entre un proyecto neoliberal, como el de Videla y Viola, y otro neoperonista, impregnado de nacionalismo de derecha. También Galtieri mantenía prisioneros montoneros, dialogaba con ellos y aspiraba a incorporarlos a su proyecto político.

Con todo, la razón principal de la indiferencia de la línea dura a las movidas de Massera escapaba a los proyectos políticos futuros y se instalaba en un dilema actual:

el creciente conflicto fronterizo con Chile. Desde el comienzo la Marina y Massera habían asumido el liderazgo de los halcones en este punto, en un nuevo dispositivo táctico para debilitar la conducción moderada, relativamente pacifista, de Videla y Viola.

## Veintinueve

El 2 de febrero de 1978 viajaron a Santiago de Chile el general Reynaldo Bignone, el contralmirante Eduardo Fracassi y el brigadier Basilio Lamí Dozo. El objetivo era sentar las bases de negociación para un encuentro entre Videla y el presidente chileno Augusto Pinochet, y hacer avanzar una propuesta argentina de conceder a Chile el dominio de las islas Picton, Lennox y Nueva pero dar a la Argentina el completo dominio del Atlántico. La misión se realizaba en condiciones de permanente escalada militar entre los dos países, con giras e inspecciones de comandantes militares a destacamentos de combate en el Sur, rearme permanente y aumento de los ejercicios militares.

El 20 de febrero, con las condiciones básicas de un acuerdo prácticamente establecidas, Videla partió rumbo a la localidad sureña chilena de Puerto Montt para su reunión cumbre con Pinochet. Apenas llegó, Pinochet lo instó a romper el protocolo, firmando de inmediato un documento previamente negociado que manifestaba el deseo de sentar las bases para un mejoramiento de las relaciones bilaterales. El documento hacía explícito que las dos partes conservaban sus antiguas posiciones, pero se comprometían a resolverlas pacíficamente y a dar instrucciones para evitar acciones contrarias a la paz. Se establecían también una comisión mixta con delegados de los dos países para proceder a las negociaciones y comisiones paralelas que negociarían temas relacionados. Se inauguraban asimismo conversaciones sobre la Antártida y el Estrecho de Magallanes.

El documento, desde la perspectiva de Videla, constituía un éxito porque evitaba una guerra cuyo desenlace no estaba garantizado a favor de Buenos Aires, y porque hacía retroceder a los generales de línea dura que habían encontrado en el Canal de Beagle una nueva bandera de lucha y un nuevo punto de convocatoria. Además, las vacilaciones e inseguridades sobre el resultado de un conflicto atravesaban desde hacía mucho tiempo a las tres armas. El principal punto vulnerable era la preparación desigual del Ejército argentino, lo cual venía constatándose desde 1967, cuando el general Onganía lanzó su subrepticio «Plan Alborada» para una guerra con Chile y envió misiones militares a inspeccionar las unidades. Al mismo tiempo, la perspectiva de una guerra con Chile atraía a quienes deseaban una victoria que legitimara al régimen y querían imponer a la sociedad un curso de militarización que clausurara de un solo golpe las tímidas aperturas políticas que empezaban a desarrollarse a través de la dupla Videla-Viola. Videla tenía, pues, razones para sentirse aliviado y pensar que había ganado un tiempo y un margen de maniobra considerables.

Sin embargo, una vez que los dos presidentes hubieron firmado el acta,

Pinochet decidió patear el tablero, con un discurso cuya copia no había hecho entregar previamente a la delegación argentina y que desvirtuaba prácticamente todo lo anterior. La pieza oratoria comenzaba afirmando que no había ningún cambio en las posiciones de su país y que la sentencia de Su Majestad Británica era «definitiva». Sostenía, además, que las «negociaciones no afectarían» esta posición, que implicaba la «defensa del patrimonio nacional». El discurso cayó como una bomba en la azorada delegación argentina, pero aparentemente no en Videla, que repasaba ensimismado el texto de su propio discurso y parecía tranquilo.

Acto seguido, y como si nada hubiera pasado, éste comenzó a leer el texto que tenía preparado, que básicamente constituía una congratulación para las dos partes por haber llegado a puntos de entendimiento tan provechosos. Se trataba de una pequeña catástrofe diplomática, porque el discurso de Videla parecía la respuesta al discurso anterior de Pinochet, y aquél aparecía consecuentemente manifestándose satisfecho con la intransigencia chilena. El presidente sólo tomó conocimiento del desastre poco después, por boca de sus asesores, en el avión que lo trasladaba a Buenos Aires.

Eas noticias se habían propagado rápidamente en la Argentina, y en Buenos Aires esperaba a Videla una tensa reunión de mandos, donde los generales de línea dura querían saber las razones de la aquiescencia del presidente para con la posición intransigente de Pinochet. El incidente había sido usado por Massera para espolear a la ultraderecha militar con su discurso contra la ineptitud de Videla.

El presidente ingresó en la reunión de mandos inseguro y nervioso, temiendo que pudiera ser la ocasión de su derrocamiento. Ea discusión duró varias horas, sin que nada trascendiera de su contenido. Al final del encuentro, los mandos confirmaron su respaldo a Videla.

Ea reunión giró en torno de una explicación de los hechos que, en su ingenuidad y su verosimilitud, constituía un retrato de cuerpo entero de la personalidad del presidente. Videla comenzó explicando que, desde hacía mucho tiempo, los discursos públicos eran para él una ocasión de dificultad y embarazo, y contó al respecto una anécdota del año 1972. Un día, cuando era jefe de la Escuela Militar, se le informó que iba a asistir a un acto el general Eanusse, a la sazón comandante del Ejército y Presidente de la Nación. También le informaron que a Eanusse no le gustaban los discursos leídos, de modo que más le convenía que su discurso de recepción no se realizara de esa forma. Videla pasó varios días memorizando el texto que iba a recitar. El día de la visita finalmente llegó, y Videla subió a la tarima para pronunciar su discurso. Comenzó, ritualmente, con la enumeración de los destinatarios: el señor Presidente de la Nación, los señores generales de división, y el resto de las categorías militares presentes. Sin embargo, en el momento de comenzar con el contenido del discurso, se le hizo un blanco mental



donde ya no podía recordar nada. Sucedió como si, del texto que había memorizado durante tantos días, solamente hubiera quedado impreso en su memoria el encabezamiento con la enumeración de los destinatarios, y después de los dos puntos de rigor sólo apareciera una enorme hoja en blanco. Videla se mantuvo en un angustiado silencio por espacio de un minuto, mientras empezaban a multiplicarse las miradas de extrañeza y un suave rumor comenzaba a recorrer la sala. Al final, transpirando bajo los focos, logró articular dos o tres lugares comunes que no figuraban en el texto inicialmente memorizado, y bajó de la tarima. A consecuencia de esto, Eanusse lo había sancionado con varios días de arresto.

Eos generales recibieron esta explicación con emociones mezcladas: tenían simpatía y un poco de lástima por la posición de Videla, pero por otro lado les irritaba contar con un jefe tan tímido y vulnerable, incapaz de tomar el control de las situaciones. La confirmación del apoyo a Videla vino en función de dos razones fundamentales: 1) el relevo del presidente implicaba quedar en posición de debilidad en momentos de escalada de la confrontación con Chile, y 2) Videla, pese a todas sus insuficiencias, seguía siendo el curioso punto de equilibrio interno del Ejército, que de otro modo se hubiera lanzado a una feroz lucha interna de consecuencias imprevisibles. Y si bien era cierto que muchos de los generales tendían a orbitar hacia las posiciones políticas de la Marina, también lo era que se replegaban instintivamente hacia la defensa de la institución cuando parecía que aquélla se ponía en condición de dividir al Ejército y reinar sobre él.

Massera no desaprovechó la ocasión. Esa reunión de Junta Militar que sobrevino fue una de las más tensas, dramáticas y de mayor clima de confrontación que se produjeron en casi dos años y medio de cogobierno entre Videla, Massera y Agosti, no sólo por la naturaleza conflictiva inherente a la situación sino por el torrente de abuso personal, insultos y agresiones que Massera descargó sobre el debilitado general.

Comenzó, como era su costumbre, en un tono bajo y grave de voz, con preguntas aparentemente respetuosas. Videla intentaba responder, pero Massera lo interrumpía a cada paso. Cada tanto, el almirante deslizaba además una línea de agresión personal, como: «¿A vos cualquiera te hace quedar como un boludo?» Seguidamente, se retraía y seguía demandando explicaciones en tono serio, como si guardar la serenidad y la compostura le exigiera un inmenso esfuerzo. Y poco después volvía al ataque.

El juego del gato y el ratón se prolongó por varias horas. El desgaste de Videla bajo el interrogatorio de Massera, que sometía a su oponente militar a una virtual tortura moral, empezaba a tornarse evidente. Se hubiera dicho que el interrogatorio constituía la elevación al máximo nivel de los procedimientos aplicados en la ESMA, donde en determinado momento el objetivo de las torturas dejaba de ser la extracción

de datos y pasaba a ser la destrucción moral del enemigo. Videla transpiraba y respiraba nerviosamente, dominado por emociones conflictivas. Se sabía en falta, y por eso era incapaz de restablecer su autoridad.

Massera iba subiendo gradualmente la intensidad de su voz, hasta hacer que retumbara contra las paredes y el techo de la habitación donde estaban reunidos. Videla había dejado de hablar hacía rato, y escondía la cara entre las manos. El almirante multiplicaba ahora sus preguntas con inusitada violencia, pero no esperaba respuesta alguna porque eran formulaciones retóricas, que llevaban implícita la contestación. Al final, dio un golpe sobre la mesa y le gritó:

—¿Pero te das cuenta de que lo que pasa es que sos un pelotudo?

Videla entreabrió las manos, dejó ver un rostro cubierto de lágrimas y, con voz ahogada, le pidió:

—Basta... Por favor, no me des más...

Massera, entonces, dejó de hablar, respiró fuerte y se puso a mirar altanera e indignamente hacia arriba. Se hizo un largo silencio entre los tres, que sólo rompió media hora después un gesto conciliador de Agosti.

## Treinta

Ea aproximación de Massera hacia los Montoneros se manifestó primero en la forma de un sensible cambio de registro en su diálogo con representantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos. Ya durante 1977 había ensayado esta línea, diciendo por ejemplo a la esposa de Gustavo Caraballo que la responsabilidad por la desaparición de su marido cabía al Ejército, y a la esposa del sindicalista de la educación Alfredo Bravo que, pese a la presión internacional, «no se hizo nada, porque el Ejército no quiso que se hiciera nada». Incidentalmente, estas versiones contenían un ápice de verdad: Caraballo había sido efectivamente secuestrado por el Ejército, pero por facciones militares en las que Massera habría podido influir, y si bien era cierto que Bravo había sido capturado por el Ejército, no era verdad que Videla no estuviera haciendo nada por él, como se probaría más tarde.

El cambio de registro consistió en decir y repetir en toda oportunidad que él era partidario de la publicación de la lista completa de detenidos y caídos en la guerra antisubversiva, y que Videla y el Ejército eran los únicos responsables de que así no se hiciera. Uno de los incidentes más significativos al respecto fue el que Massera protagonizó con el educador Emilio Mignone, a quien recibió un día en su despacho del Edificio Eibertad y le hizo ese planteo, sin dejar de subrayar que el Ejército seguramente era responsable de la desaparición de su hija Mónica. Ea tempestad contra Eanusse se había desvanecido en la falta de pruebas contra los ex comandantes en el caso AEUAR, y ya era posible hablar más laxamente con los allegados al general. Mignone, posteriormente, divulgó lo que Massera le había dicho, con lo que no quebraba ningún pacto ya que éste no le había pedido confidencialidad. A los pocos días, el almirante lo llamó para requerirle una entrevista. Mignone concurrió pensando que iba a reprocharle que hubiera dado publicidad a sus palabras, pero nada de eso ocurrió. Massera, sin recriminarle nada, le dijo que la divulgación de sus dichos había causado una crisis en la Junta Militar; que sería sometido por sus pares del Ejército y la Fuerza Aérea a un tribunal de honor; que, por consiguiente, él iba a tener que desmentir rotundamente haberle dicho a Mignone lo que le había dicho, pero quería que a éste le quedara claro que lo que le había dicho era cierto. Casi no necesita decirse que el tribunal de honor nunca había existido.

El objetivo de esta conducta era que se difundiera en el exterior la imagen de un almirante básicamente aperturista que estaba dispuesto a romper con sus colegas militares si conseguía el suficiente respaldo político. Massera hablaba frecuentemente en público durante esa época de «ganar la paz», lo que implicaba negociar la posguerra con los representantes de los enemigos vencidos. Así, mientras oficiales como Astiz infiltraban en París los organismos de solidaridad con los presos argentinos, el objetivo de fondo era menos detectar y secuestrar a los involucrados

que determinar quiénes se hallaban al mando de la organización Montoneros. Como el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 se aproximaba y el régimen estaba sumamente interesado en que sirviera como una «vidriera» que mostrara al extranjero la corrección de los comportamientos de la Junta con respecto a los derechos humanos, cada vez que los contactos de Massera con los peronistas exiliados salieron a la superficie en reuniones con oficiales del Ejército —que podían desconfiar del súbito aperturismo del almirante—, Massera les decía que se trataba de lograr una «tregua». A los Montoneros les hablaba de «paz»; a los almirantes, de «posguerra»; a los duros del Ejército, de «tregua». Tenía un discurso listo para cada ocasión, pero el sustrato real era ganar para su causa a los sobrevivientes políticos de la derrotada subversión militar. Eos contactos empezaron a ser desarrollados en pleno a comienzos de 1978, a través del Centro Piloto de París.

Al tiempo que esto ocurría, la formulación algebraica del «cuarto hombre» había pasado a materializarse en una diferente descomposición aritmética. Videla, finalmente, había decidido a fines de febrero, bajo la enorme presión de Massera, que acataría los contenidos organizativos de las actas iniciales del Proceso, permitiendo que la jefatura del Estado fuera ejercida por la Junta Militar, con un militar retirado que desempeñara las funciones subordinadas de presidente. Sólo reclamó como condición que Massera se retirara en agosto de 1978, fecha en la cual Videla mismo estaba dispuesto a solicitar su retiro. El pacto de retiro mutuo implicaba tácitamente que Videla sería el «cuarto hombre», lo que en los hechos significaba que seguiría siendo también el comandante en jefe del Ejército, ya que quien estatutariamente ascendería entonces al comando sería su amigo Viola. Massera, sin embargo, juzgó tentadora la posibilidad de abrir el juego en ese momento, y lo hizo por dos vías:

1) Ea propuesta «pública» de designar a Viola como presidente. Ea «publicidad» significaba que se haría conocer en la Junta Militar y en el conjunto de las Fuerzas Armadas, que constituían el «público» y el «electorado» de entonces. Ea propuesta parecía acatar formalmente el liderazgo natural del Ejército, pero en los hechos partía por la mitad y terminaba descabezando la línea legalista Videla-Viola al pasar a retiro domiciliario al primero, nombrar en un cargo subordinado al segundo y poner en el mando verdadero del arma a un integrante de la creciente línea dura, como podían ser los generales Suárez Masón, Riveros, Menéndez o Galtieri. Una «presidencia» como ésta sólo podía estar destinada al fracaso, abriendo el camino a la oportunidad que Massera esperaba.

2) Ea insistencia en que Videla, Viola y sus amigos eran populistas, ya que hablaban de una «convergencia cívico-militar», y en que el más indicado para ser el «cuarto hombre» era el propio Massera, en función de su experiencia y calidad como integrante de la primera Junta Militar. Un editorial de *Convicción* de marzo de 1978 recordaba a su auditorio militar que «el matrimonio de la espada y la alpargata» del peronismo era el causante de innumerables desgracias para el país, y que muchos

sentían la tentación de «hacer de novios» de la «apetitosa masa viuda del peronismo», pero que los militares ya no usaban espada, ni las masas alpargatas sino mocasines.

El corolario de este razonamiento empezaba a correr por cuenta de algunos influyentes militares retirados que tenían buena relación con Massera, como el general (RE) Manuel Eaprida. Eos simpatizantes del almirante argumentaban que no valía la pena fisurar la unidad de las Fuerzas Armadas por un puesto después de todo tan protocolar como el de presidente, y que, si hacía falta, lo mejor era «darle el gusto» a Massera con los símbolos del poder presidencial, evitando de paso al Ejército el desgaste que implicaba que el presidente de la República fuera un general. Naturalmente, en caso de que esta propuesta triunfara, Massera estaba decidido a ejercer la presidencia en forma autoritaria y directa, apoyándose en los sectores civiles opuestos a la dictadura, de modo análogo a cómo Perón, habiendo surgido inicialmente de la Revolución del '43, terminó haciendo la revolución contra el '43. Se rechazaba el peronismo para imponer una versión propia del peronismo.

Eos primeros contactos Marina-Montoneros de 1978 empezaron a desarrollarse en forma relativamente legal, con el ex diputado Euis Sobrino Aranda operando como intermediario inicial. Ea diplomática Elena Holmberg veía extraños y abultados movimientos de cuenta que pasaban por el Centro Piloto de París, sin que se supiera si esos fondos estaban destinados a respaldar el creciente nivel de vida de los oficiales del Centro, a posibilitar sus operaciones o las dos cosas a la vez. Pero algo era cierto: apenas el almirante Massera hacía alguna escala en Francia, los marinos solían desentenderse de sus presuntas funciones, dejaban la embajada, pasaban a consagrarse exclusivamente al almirante y a desempeñarse exactamente como lo que eran: una suerte de representación diplomática paralela de la Marina de Guerra argentina.

El 8 de abril de 1978, Massera se reunió secretamente en las inmediaciones de París con Héctor Villalón, miembro del Consejo Superior del Peronismo en el exilio. El encuentro se desarrolló en el Hotel Sofitel, en las proximidades del Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle en Roissy, y se prolongó por una hora y media. Villalón, un financista aventurero —que en ese momento estaba acusado en Francia del secuestro de Revelli Beaumont, un alto ejecutivo de la multinacional de origen italiano FIAT—, había sido designado interlocutor válido de Massera por unos veinticinco dirigentes peronistas que habían viajado especialmente a París desde distintos países, entre los cuales se destacaban Casildo Herreras, ex secretario general de la CGT, y el dirigente sindical Raymundo Ongaro, del peronismo de izquierda. Los reclamos planteados por Villalón a Massera fueron los siguientes:

- 1) La libertad de Isabel Perón y de Lorenzo Miguel, detenidos en prisiones dependientes de la Armada.

2) El permiso de salida al presidente Héctor J. Cámpora, refugiado en la embajada mexicana en Buenos Aires.

3) La libertad de Jacobo Timerman.

4) Una amplia amnistía política y sindical, que incluyera la liberación sin excepción de todos los detenidos en la Argentina, estimados en un número entre 3.500 y 15.000. Quienes fueran encontrados culpables de terrorismo debían ser expulsados del país.

5) La completa normalización de la vida gremial, con la convocatoria a elecciones sindicales libres bajo control de organismos internacionales y en el marco del respeto a las leyes existentes.

Massera, según trascendió, dio una respuesta positiva a los dos primeros puntos, quedando en contestar sobre los restantes. Tras esa reunión de Massera con Villalón, se desarrollaron entrevistas ampliadas con el resto de los veinticinco dirigentes peronistas, y después de la partida de aquél, éstos siguieron reuniéndose con oficiales navales. Los encuentros fueron juzgados «muy interesantes» por las dos partes.

Sin embargo, estos esfuerzos «legales» se complementaban con otros «ilegales», de los que Villalón puede haber estado enterado o no y haber sido o no parte activa. Al menos desde marzo de 1978, Massera mantenía contactos con altos líderes montoneros, con quienes negociaba desde la tregua del Mundial hasta un futuro proyecto político. Uno de los principales gestores de estas reuniones fue Licio Gelli, en una de cuyas agendas aparecería más tarde la cita para una entrevista entre él, Massera y Firmenich en Villa Wanda, la residencia que Gelli poseía en Arezzo, y donde Massera y su esposa habitualmente residían cuando viajaban a Italia. También se realizaron entrevistas en el Hotel Intercontinental de París. El contenido de estos encuentros nunca pudo ser develado por completo, ya que sus protagonistas guardaron absoluto silencio, negando incluso que se hubieran realizado. Sin embargo, antes aún de la reunión entre Villalón y Masera en el Hotel Sofitel, el jefe montonero Rodolfo Galimberti declaraba a la *XQ\ \ ' & \ Sí L'Express*.

Eos Montoneros no lanzarán ninguna operación que pueda poner en peligro a los jugadores, los numerosos periodistas y los miles de visitantes que llegarán a la Argentina de todo el mundo. De nuestra parte no habrá ninguna escalada de la lucha armada durante ese período. Estamos dispuestos a ir más lejos. Proponemos una tregua a la dictadura militar del general Videla. Creemos que un boicot no es una política realista en las actuales circunstancias. Decimos a todos: vengan a la Argentina.

Galimberti, un lumpen que en su juventud solía resolver sus problemas de calzado pidiendo un par de zapatos para probarse en una zapatería para después salir corriendo, era objeto en ese momento del disfavor de las principales corrientes de la organización. Su ostracismo era más económico que político, ya que Montoneros en el exilio se había vuelto una organización crecientemente gangsteril, y el grado de favor o disfavor con su cúpula dirigente se medía en función de la proximidad o lejanía respecto de los 60 millones de dólares que la organización había cosechado en sus épocas de gloria como resultado del secuestro de los hermanos Born, de la corporación Bunge & Born (un grupo económico que, además de muchas otras actividades industriales, comerciales y financieras en el país y en el exterior, monopoliza en gran medida la comercialización de productos alimenticios de la Argentina).

La diplomática Elena Holmberg contemplaba estos contactos con atención, disgusto e interés. Testimonios posteriores sobre dichos de la diplomática a amigos y familiares expresarían que tenía constancias de que Massera, en una de sus entrevistas con Firmenich, había entregado al jefe montonero alrededor de 1.200.000 dólares. Las versiones difieren: aparentemente Holmberg sólo comentó el tema con muy pocas personas, y en forma no concluyente. Algunos sostienen que Massera era intrínsecamente incapaz de entregar a nadie un millón de dólares, por pura avaricia; otros, que el millón y pico era un soborno de la Junta Militar en pleno a fracciones disidentes de los Montoneros que no tenían acceso a los 60 millones de dólares de los hermanos Born, para que se quedaran quietos durante el Mundial, en cuyo caso Massera habría actuado como emisario, después de haber logrado acuerdos generales con Firmenich. Como la evidencia sobre estas hipótesis no es categórica, puede aventurarse la posibilidad de que esos dólares constituyeran un movimiento de caja del Centro Piloto de París, a cuyos registros tenía acceso Elena Holmberg, que ella no interpretó adecuadamente.

Con todo, algo que no puede negarse es que la diplomática creía en lo que decía. En una recepción privada celebrada en la embajada Argentina en París con motivo de la presencia del almirante Massera y su esposa, ésta, haciendo gala de su proverbial frivolidad, se pavoneó luciendo un diamante de extraordinario tamaño. Una corte de adulones la rodeaba, admirando la joya. Con escasa diplomacia, la diplomática se acercó a «Lily», tomó el diamante entre sus dedos y le dijo:

—¿Qué lindo diamante, eh? ¿Éste también se lo regaló Firmenich?

Al principio «Lily» pareció no comprender, quedando en muda pose interrogativa. Los demás también hicieron de cuenta que no comprendían, procurando reanudar la conversación. Sin embargo, Elena Holmberg insistió:

—Sí, sí —dijo, como si fuera una cuestión cualquiera—; ése también se lo

regaló Firmenich. ¿No es cierto, señora?

Los acompañantes de Delia Vieyra, hija de la aristocracia de La Plata, rieron forzadamente, tratando de tomar la cosa como una broma. Elena Holmberg entonces subrayó:

—Se lo regaló Firmenich, ¿no, señora? Bueno, mis felicitaciones. —Y se retiró.



## Treinta y uno

¿Quién era Elena Holmberg? ¿A quién respondía? Estas preguntas intrigaron a Massera durante un tiempo. Se trataba, después de todo, de una funcionaria diplomática de segundo orden en la embajada de Francia, seguramente muy eficiente pero que no detentaba ningún poder real. Sin embargo, se animaba a desafiar a la esposa del almirante de un modo en que nadie se atrevía a desafiarlo a él, como si detrás suyo tuviera el respaldo de una fuerza superior. Observarla, investigarla, perseguirla, se convirtieron por lo tanto en prioridades de su atención, porque era claro que ella iba a ser un obstáculo para todo cuanto él se propusiera lograr a través de la embajada en París.

Holmberg, para comenzar, era un apellido clásico en los anales de la aristocracia argentina, y Elena Holmberg en particular era parienta directa del general Lanusse: su nombre completo era Elena Holmberg Eanusse. Ya bien adentrada en sus 40 años, Elena había sido en su juventud una mujer de acción muy vehemente en sus principios, extremadamente comprometida con sus ideas, una síntesis de todo lo opuesto a la actitud argentina de indiferencia, conformismo y temor resumida en el dicho «No te metás». Tendía a convertirlo todo en una cuestión de principios, porque encontraba que los principios eran el pilar más seguro y puro al que podía aferrarse ante cada situación. Había crecido rodeada de cuatro hermanos, lo que posiblemente imprimiera cierta impulsividad y brusquedad masculinas a sus modales. Aborrecía, por sobre todo, cualquier cosa que evocara sobornos, insinuaciones y situaciones grises de cualquier tipo. Se puede decir que lo que más detestaba eran las situaciones grises, porque constituían el borde de esfumatura donde sus ideales se transmutaban en una posibilidad impredecible. Aborrecía y temía las situaciones grises de la misma forma en que a un hombre acostumbrado a respirar aire puro le repugnaría que se le sugiriera respirar la atmósfera de una cámara de gas, y lo justificaba en el hecho de que había visto a demasiados hombres esgrimir principios elevados para luego traicionarlos miserablemente. Eos hombres habían dicho una cosa, ella les había creído, y luego eran infieles a sus propias palabras.

Había participado en la Revolución Eibertadora como militante activa. Aún adolescente, había reprochado a familiares suyos que eran militares de alta graduación que no derrocaran a Perón diciéndoles, en reuniones sociales: «Eo que pasa es que vos sos un cagón». Ante lo cual el militar, con todos sus entorchados, quedaba desconcertado y atónito, sin saber qué responder.

Había participado en todos los disturbios antiperonistas previos al golpe de septiembre de 1955. Cuando la Aviación Naval bombardeó Plaza de Mayo en junio de 1955, Elena, que a la sazón tenía veintiún años, estaba en casa de una amiga suya que

vivía en Callao y Eas Heras, el corazón de la zona aristocrática más tradicional de Buenos Aires. Eas noticias llegaban, parciales y distorsionadas, por la radio. Salió. Ante su vista pareció desplegarse, en forma confusa, una masa de personas. Era como si la calle, de estar ocupada por normales y decentes transeúntes, empezara a ser escenario de un remolino centrífugo que arrojaba personas apuradas y asustadas en las más diversas direcciones, y como si se renovara permanentemente el centro de aquella dispersión. Todos se iban a sus casas.

Ea muchacha se paró al borde de la acera, ahuecó las manos en torno de su boca y les gritó:

—¿Adónde carajo van, manga de cobardes? ¡Vamos a Plaza de Mayo, vamos a la Casa Rosada a cagar a Perón!

Alguien que estaba detrás suyo le tocó un codo y le dijo:

—¿Me acompaña, señorita?

Su mala estrella quiso que fuera el titular de la comisaría 17, y que la llevara presa.

Sin embargo, Elena no se arredró. Apenas ingresó a la comisaría, enfrentó al comisario con toda la autoridad y arrogancia de las clases dominantes frente al funcionario de turno:

—¡A usted lo vamos a fússilar! ¡Sí, lo vamos a fusilar! ¡Quién se cree que es, carajo! ¡Cree que no sabemos quién es! ¡Usted es un torturador! ¡Aquí se torturó, mierda! ¡Y le puedo dar los nombres! ¡Aquí se torturó a fúlano, a fúlano y a fulano!

Impresionado, el comisario retrocedió. Eos bombardeos habían destruido el mito de la invencibilidad de Perón, y ahora esta muchacha parecía confirmarlo, al tratarlo de ese modo. Al día siguiente, el comisario despachó un mensajero a casa de los Holmberg.

—A la señorita Holmberg no se le ha tocado un pelo, y la policía da garantías de su integridad física —dijo el oficial a uno de los hermanos.

—Con garantías o sin garantías —contestó Enrique Holmberg, con insolencia de familia rica— estamos en esta lucha hasta el fin, y la desarrollaremos como sea.

La pintura y la música interesaban a Elena, pero su personalidad necesitaba un medio más agresivo y directo para desarrollarse. A mediados de 1965 ingresó a la Cancillería, que en el dorado pasado argentino de la abundancia agrícola y la riqueza fácil era uno de los destinos prefijados de los jóvenes hijos de la oligarquía, en caso de

que no hubieran elegido ser militares, sacerdotes, abogados o ingenieros. («Si no sirve para eso —decía un latiguillo de la época— que vaya a la Cancillería, y si no sirve para la Cancillería, que vaya al diario *La Nación*.») Irónicamente, los cuatro hermanos de Elena se repartirían los roles entre la función militar, la abogacía, la ingeniería y la medicina, con lo cual el destino de una familia clásica argentina quedaría completo: ella iría a la Cancillería, pero no porque no sirviera para todo lo anterior, sino quizá sólo porque era mujer.

Cuando Elena Holmberg ingresó a la Cancillería no existía un Instituto de Relaciones Exteriores ni una carrera específica de diplomacia. Al llegar al poder la dictadura tecnocrática de Onganía se instauraron las dos cosas y se estableció que cualquiera que no hubiera egresado de la carrera debía irse. Elena solicitó hacer el curso para poder quedarse, y lo hizo. Ya tenía una experiencia importante: se había desempeñado en comisiones que se ocupaban de las Islas Malvinas y de puntos de litigio fronterizo con Chile y había pasado largos períodos en misiones secretas con oficiales de las Fuerzas Armadas en la frontera con ese país. Mucho mayor que sus compañeros de promoción, era también la única que no dependía del dinero de la Cancillería para vivir, lo cual se manifestó en la elección de destinos: ella había podido quedarse en la Argentina, por solidaridad con sus compañeros, pero éstos insistieron en que fúera a París o Atenas, porque eran sitios caros para los que el sueldo de la Cancillería apenas alcanzaba, y ella era la única que podía sobrellevar financieramente esas condiciones. En consecuencia, la flamante diplomática partió rumbo a París.

Corrían los tiempos de Isabel, y la embajada en Francia era menos una función política que una oportunidad de darse la buena vida y traer artículos suntuarios al país sin pagar impuestos aduaneros. El talento de Elena Holmberg no residía por cierto en la diplomacia: tuvo un agrio choque de palabras con un senador argentino que llamó desde Montmartre pidiendo que la embajada le transportara a Buenos Aires un juego de platería que había comprado, y se peleó con el entonces embajador, un miembro de la P-2 al que Elena calificaba en sus cartas de «inútil vividor», porque la bandera argentina que flameaba en el frente de la legación estaba sucia. El embajador pidió entonces su relevo, ante lo cual ésta lo amenazó con contar detalles comprometedores, y le dio 48 horas de plazo para cancelar el pedido de relevo. Horrorizado, el embajador cumplió la exigencia de Elena. Ciertamente, se trataba de una mujer insoportable.

Al momento del golpe de 1976, la embajada quedó vacante, y aunque Elena Holmberg ocupaba el último escalón entre los funcionarios de carrera, quedó virtualmente a cargo de la legación por unos días. Inicialmente entusiasmada por el golpe, quería regresar al país, pero la Cancillería se opuso argumentando que ella era el único puente que podía garantizar con cierta eficiencia la transición de un representante diplomático a otro. Elena accedió en principio, aunque condicionando

su estadía a la identidad del embajador a designar. Esa opción de la Cancillería no pudo caerle peor, ya que se trataba de Tomás de Anchorena, un personaje del que tenía un pésimo concepto. Se enojó: «Con ese tipo, no», afirmó con tozudez y solicitó el traslado. Sus hermanos entraron en acción, dedicando largas conferencias telefónicas desde Buenos Aires a persuadirla de que era ella y no otra la persona que debía estar en París: «\bs has cumplido bien tus funciones en Francia y el país te necesita ahí. Trágate el sapo. Tratá de pasarla bien, y olvidate de Anchorena».

Esa relación entre Elena Holmberg y Anchorena fue gélida en sus comienzos. Esa animadversión de aquella hacia el embajador era una emoción correspondida, y Elena consideraba que Anchorena, pese a toda su fluidez en el manejo del idioma, la multiplicidad de sus vínculos en París, sus excelentes modales y la buena representación que hacía, no pasaba de ser «un inútil sociable». Sin embargo, la diplomática encontró pronto un nicho de actividades propio: la preparación de informes. Algo después de la llegada de Anchorena, preparó un estudio sobre la situación de Europa y las relaciones entre la Argentina y Europa del Este que sus superiores en Buenos Aires juzgaron un modelo en su clase y que movió a un alto diplomático de carrera de la época a opinar que «hay sólo cinco funcionarios diplomáticos argentinos en el mundo que merezcan llamarse tales, y Elena Holmberg es uno de ellos». A raíz de esta situación, se pensó que existía una descoordinación de las actividades argentinas en el exterior, y que un ámbito donde la Cancillería era particularmente deficitaria era el del conocimiento detallado de las actividades de los grupos subversivos en el extranjero, cuyos epicentros estaban en ese entonces en París, Caracas y México. Se le pidió a Elena una muestra de lo que podía hacer sobre esto, y los funcionarios quedaron nuevamente impresionados.

Eos informes eran exactamente iguales a su autora: obsesivos, meticulosos, puntuales, sistemáticos e implacables. Esa diplomática dejó pronto la simple recolección de datos en diarios y revistas para lanzarse a la investigación propia, contactando a políticos y periodistas y diseñando políticas de propaganda para mejorar la imagen internacional del gobierno militar. Esa relación con Anchorena mejoraron, ya que ella cubría con entusiasmo una carencia que él no estaba en condiciones de superar.

Un día de 1977 Anchorena la llamó. Sostuvo que había recibido órdenes de Buenos Aires para que Elena Holmberg dejara esas tareas de inmediato. Esa razón no era que su trabajo no fuera satisfactorio, sino que se había resuelto que esa responsabilidad pasaría a una comisión de marinos que viajaría próximamente a París para asumir esas funciones. Esa diplomática se sorprendió, pero acató.

Otro día aparecieron tres marinos. Holmberg los recibió, sólo para sorprenderse aún más: carecían de toda preparación para el trabajo, ignoraban prácticamente todo sobre la vida en Francia y ni siquiera sabían hablar francés. Ya

desde los primeros días, empezaron a mantener una cuenta paralela, que se abultaría, de gastos superfluos. Eos marinos se iban de fiesta por la noche con las putas de París, y giraban a la cuenta paralela el gasto de los visones que obsequiaban a sus esposas. Tanto los oficiales navales como sus señoras requerían los servicios de Elena para cuestiones totalmente personales. A ella se le hizo claro que los marinos no venían a reemplazarla, sino a hacer otra cosa.

Uno o dos meses después llegó desde Buenos Aires una orden de traslado de Elena Holmberg. Anchorena, que había sido designado por el Ejército y no por la Marina, la defendió, ya que ella le resultaba útil y las actividades de los marinos le parecían extrañas. Se trasladó a Buenos Aires, donde argumentó que la reglamentación diplomática establecía que los funcionarios permanecieran entre cuatro y seis años en el exterior y luego volvieran por dos años al país: Elena todavía no había cumplido los seis años y él la necesitaba en París hasta que el plazo feneciera, no para que cumpliera sus antiguas funciones pero sí para que lo siguiera asistiendo. Ea Cancillería se negó, por lo que Anchorena apeló a sus amigos militares y el tema llegó a la Junta. Conviene recordar que Elena Holmberg había crecido entre gorilas y generales y conocía personalmente a muchos de estos últimos, incluyendo al general Videla.

El presidente, en la reunión de la Junta, respaldó a Tomás de Anchorena y Agosti también, mientras Massera quedaba en soledad pidiendo el relevo. Ea desproporción entre el lugar insignificante que ocupaba Elena Holmberg en el escalafón diplomático y la dificultad para removerla de su puesto se instaló como una obsesión en la mente de Massera, que no terminaba de decidir si ella era sólo una solterona fastidiosa y metida o respondía a algún interés superior. La proximidad de la diplomática a Lanusse y a oficiales del Ejército lo inquietaba. Era como si, una vez que él había logrado construir el Centro Piloto de París como una suerte de embajada paralela de la Marina —mejor dicho, embajada irregular del GT 3.3.2 y del Gabinete de Asuntos Especiales— en Francia, inmediatamente se le instalara al lado una observadora adversa que inspeccionaba constantemente sus movimientos.

Tomás de Anchorena resolvió que Elena Holmberg permanecería en la embajada en funciones de tipo general hasta que cumpliera sus seis años de servicio diplomático exterior. Quedó un año en esa condición, observando los movimientos del Centro Piloto de París y enterándose de a poco de cosas cada vez más sorprendentes sobre el almirante Massera.

## Treinta y dos

Si durante 1977 la represión se había vuelto más abierta, con operaciones a la luz del día y a la vista del público, en 1978 se profundizaría la tendencia de los distintos grupos militares a usar las armas para dirimir litigios políticos y económicos entre sí. El descontento de un sector de las Fuerzas Armadas por los contratos del Estado con una compañía podía expresarse bajo la forma de la toma por asalto de esa compañía, el robo de sus caudales y el secuestro de sus ejecutivos. Esa acción de funcionarios molestos generaba frecuentemente atentados contra ellos, que luego se podían atribuir a la subversión por la falta de un control central eficaz y por la necesidad del régimen de presentar una imagen unida. Se llevaba al último extremo la compartimentación de zonas de poder y de influencia que se había establecido en el primer año del régimen y había tomado estado público en el segundo año. Se multiplicaban y subdividían las «áreas restringidas» y las incursiones operativas agresivas de determinadas áreas sobre otras.

El I Cuerpo del Ejército y la Marina estuvieron entre los servicios armados que más uso y abuso hicieron de este tipo de práctica, no tanto por la intensidad de sus acciones cuanto por su calidad y por la elevada posición de sus víctimas. Yofre volvió a ser atacado, con tres atentados dinamiteros sucesivos: el primero, en enero, en su casa; el segundo, en febrero, en un country particular que tenía en construcción, y el tercero en marzo, en el lugar donde tenía su bufete de abogado, no lejos de sus despachos oficiales en la Casa de Gobierno. El período era crítico en términos de la micropolítica militar, porque Videla y Massera habían pactado sus respectivos pases a retiro y la Marina no quería que se diera por sentado que Videla iba a ser el próximo presidente, que era lo que Yofre se encargaba de promover y difundir. *Convicción* protestó por un artículo del diario *La Opinión* —que estaba intervenido por el Ejército— que daba por sentada la reelección de Videla.

Al mismo tiempo, se procedía a toda prisa a la preparación del Campeonato Mundial de Fútbol. Sin embargo, las opiniones sobre el tema estaban divididas dentro del gobierno: la mayoría de los sectores pensaba que era una buena oportunidad propagandística para que la Argentina mostrara al mundo su «cara limpia», pero había muchos que censuraban el despilfarro a que se entregaban el general Antonio Merlo y el contralmirante Carlos Eacoste al frente del Ente Autárquico Mundial '78. Uno de los opositores más firmes era el extravertido y locuaz secretario de Hacienda Juan Alemann, quien declaró públicamente que «el Mundial es como un enorme elefante blanco, que es monumental y hermoso, requiere muchos cuidados y demanda extraordinarias cantidades de dinero, pero nadie sabe para qué sirve». Esa respuesta fue la explosión de una poderosa bomba en el domicilio de

Alemann en el momento en que el equipo argentino logró su cuarto gol contra el de Perú, clasificándose así para la competencia final. Alemann señaló luego con preocupación la sincronización exacta del gol con el atentado y los rumores que circularon ampliamente en la época afirmando que ese partido había sido «comprado». Gente próxima al GT 3.3.2 reconocería más tarde la participación de éste en el atentado.

La multiplicación y división de las zonas de poder, la utilización de la violencia como método de resolución de conflictos internos del gobierno y la funcionalización de los grupos de tareas como organizaciones al servicio de delitos completamente apolíticos, constituían los emergentes del proceso iniciado en 1976 y los epifenómenos que demostraban que, bajo las particulares condiciones de la división de poderes y de las necesidades represivas de 1976, el Estado argentino virtualmente había desaparecido: no había monopolio de la violencia, no había control político central de las fuerzas y la cadena de mandos institucional no representaba nada. Videla, por ejemplo, comenzó a interesarse en 1978 por la suerte del profesor y sindicalista de la educación Alfredo Bravo como consecuencia de la intensa presión recibida desde el exterior en ese sentido, pero sólo fue capaz de lograr su liberación cuando estuvo dispuesto a conceder al coronel Camps —que mantenía en cautiverio y torturaba personalmente a Bravo— las palmas del generalato.

El primer gobierno del Proceso llegaba, pues, a su fin con un desenlace paradójico respecto de sus objetivos originales: si en 1976 los militares se habían propuesto recuperar para el Estado el monopolio de la violencia legítima, en 1978 habían descompuesto por completo al Estado y a sus Fuerzas Armadas en una multiplicidad de zonas de influencia y de grupos de tareas. Una explicación para esto era el alto número de bajas requerido por la «guerra sucia», que se había propuesto el exterminio absoluto de los jefes sindicales y profesionales más izquierdistas y la destrucción física completa de unas organizaciones guerrilleras bastante poderosas. Sin embargo, esto era sólo el «en sí» del Proceso, no su «para qué». Simpatizaran o no con Martínez de Hoz, las distintas fuerzas militares lo único que hacían era convertir al país en territorio seguro para el «martinezdehocracia», un programa económico que disfrutó de condiciones de estabilidad política como no habían existido en la Argentina desde la década del 30. Martínez de Hoz revalorizó el campo como principal exportador, liquidó las industrias pequeñas mediante una salvaje competencia importadora y creó dispositivos de especulación para la atracción de capitales. Las consecuencias de su plan en la estructura social fueron el decrecimiento del número de obreros industriales, el aumento de los trabajadores por cuenta propia, la proletarianización de una parte de la clase media y el rápido ascenso social de otra.

El gobierno, que hacía desaparecer obreros concretos de noche, hacía desaparecer obreros estadísticos de día, y esa operación sólo podía realizarse en esas condiciones de máxima autoridad pública y mínima autoridad operativa de

comando.

## Treinta y tres

Ea conquista por la Argentina de la copa mundial de fútbol representó un triunfo de primer orden para el régimen, que movilizó rápida y eficazmente el brote nacionalista de la población en contra de la «campaña antiargentina en el exterior» y dio legitimidad popular a la consigna del Mundial: «Eos argentinos somos derechos y humanos». Algunos especularon luego que el régimen, de haberse sometido a plebiscito popular en ese momento, habría ganado ampliamente; otros, que se debió convocar a elecciones y salir elegantemente de la escena, muy posiblemente entregando el poder a un candidato adicto, al que se le permitiera ejercer una suerte de «democracia restringida». Ambos desenlaces eran difíciles por partida doble, ya que la línea dura militar resistía tenazmente la entrega del poder físico y concreto, y la conducción legalista del Ejército era excesivamente tímida, retardataria e insegura de sí misma para tomar semejantes iniciativas. Sin embargo, en la mente de Massera germinaba otra idea, de la que nunca podrá saberse qué era finta política y qué propuesta real.

Al terminar junio de 1978, Massera cumplió con lo que muchas veces había sugerido que haría y propuso a la Junta Militar declarar terminada la guerra antisubversiva y publicar una lista completa de bajas de las dos partes. Vi déla y Agosti se opusieron terminantemente. El mismo Massera no estaba seguro de que la propuesta pudiera salir triunfante de un hipotético referéndum, con voto universal y secreto, dentro de la propia Marina de Guerra. Aquí la propuesta mostraba su carácter de finta política, su naturaleza de instrumento para poner a la Marina a la vanguardia de la terminación de la etapa militar del Proceso y a Massera como el inmejorable desenlace de la transición hacia una democracia vigilada. Sin embargo, la propuesta también tenía ventajas, que en ese momento eludieron la comprensión de la conducción del Ejército. Una era que, publicada la lista, la guerra antisubversiva podía ser sometida a plebiscito: la enorme aura de popularidad que rodeaba al gobierno en esos momentos volvía impensable una derrota. Otra era que, por medio de un sinceramiento temprano, se evitaba una acumulación de casos que iba a estallar en el rostro mismo de las instituciones militares si el Proceso llegaba a sufrir un desbarranque mayor. Sin embargo, la desventaja que terminaba definiendo en sentido negativo este precario equilibrio de razones en pro y en contra era que terminar formalmente la guerra anti subversiva implicaba necesariamente resignar la autoridad operativa irrestricta, algo contra lo cual aparecían unidos tanto los fundamentalistas de la línea dura como los legalistas. Ninguno quería dejar el poder físico y concreto, y se aferraban a él como a un fetiche.

Eas Fuerzas Armadas habían empezado por sustituir al poder político, y después cada arma y cada sector de cada arma terminó sustituyendo al Estado,



creando sus propios Estados y microestados, desmembrando en efecto al país. Esa sustitución tenía un efecto permanente: al eclipse de la actividad política sucedieron las operaciones de diverso tipo contra empresarios particulares y contra determinadas organizaciones empresarias, y después de esto el régimen había empezado a convertirse en un caldero de feroces competencias internas a tiro de ametralladora. Eos militares en cierto modo se desconcertaban por tener tanto poder y al mismo tiempo tan poco. Cualquier oficial de rango medio, de estar en la posición de mando correcta, podía pronunciar sin mentir las famosas palabras «yo soy el señor de la vida y la muerte de esta mazmorra», y aun «de esta zona». Pero, por un mecanismo cuya perversa lógica los eludía, eran efectivamente los señores de la vida y la muerte de ese pozo y de esa zona, sin alcanzar a sentirse dueños del poder real en el país. Y cuanto menos se correspondían el poder de la mazmorra y el poder del país, más insistentes se hacían los esfuerzos de los militares por profundizar y extender la mazmorra, como si intentaran que ésta lo abarcara todo. Sin embargo, la mazmorra seguía siendo la mazmorra, y los militares comprobarían con desconsuelo que el poder no nacía de la boca del fusil, como ingenuamente se lo habían creído a Mao Ese Tung, sino que el fiasil era solamente una prolongación operativa de determinada forma de poder. Y como este poder les era inasible, seguían apretando el gatillo.

Massera, sin embargo, no pedía la publicación de la lista para seducir a sectores militares sino para atraerse a sectores civiles y convertirse en el interlocutor inteligente de Estados Unidos y Europa occidental dentro de las Fuerzas Armadas. A pocos meses de su retiro, tenía que terminar de completar rápidamente la imagen que iba a ofrecer después, mientras mantenía al ala dura del

Ejército en condición de rehén político a través de la línea dura de la propia Marina de Guerra en la ascendente confrontación con Chile. El almirante desarrollaba una vez más su política de alianzas, iniciativas y ofensivas múltiples, porque al mismo tiempo proponía que Isabel Perón y otras figuras políticas del peronismo moderado que eran mantenidas en prisiones navales fueran puestas bajo arrestos domiciliarios o libertades vigiladas, y simultáneamente trataba también de desarrollar una suerte de populismo neoperonista particular, a través de la entrega de viviendas a argentinos de bajos recursos vía el Ministerio de Bienestar Social.

Ea Argentina, con todo, era sólo una parte de la operación. Massera, deslumbrado por las apariencias, estaba convencido de que la subversión había sido derrotada en la Argentina pero estaba triunfando en el exterior. En el fondo, elaboraba sólo un razonamiento más sofisticado de la misma sospecha paranoica y xenofóbica de sus colegas de línea dura del Ejército, que veían a la Argentina cercada por la subversión y traicionada por los Estados Unidos y Europa. Consideraba, por lo tanto, que iba a ser necesario tender líneas de entendimiento y *modus vivendi* funcionales con el terrorismo internacional, y esto abarcaba desde las necesidades del futuro político argentino, que imaginaba bajo su liderazgo, hasta preocupaciones más

concretas y tangibles como la posibilidad de que una bala terrorista lo alcanzara en alguno de sus frecuentes viajes.

Mientras el saliente comandante en jefe Massera se preparaba para iniciar una vasta gira de despedida por las distintas unidades navales del país, el permanente Almirante Cero consumaba ante su grupo de tareas y el «staff» de detenidos de la Escuela de Mecánica de la Armada un «adiós» que no era más que un «hasta luego». Un día, se presentó en la ESMA, pidió ver a los detenidos y les dijo solemnemente, mirando fija y sucesivamente a cada uno de ellos: «El hecho de que ustedes hayan estado de un lado y yo de otro en esta etapa es puramente circunstancial. Lo más importante es que somos todos argentinos, y yo espero poder volverlos a ver en la vida civil, bajo otras condiciones, café de por medio». E hizo firmar a cada uno un pergamino, deseándole el mayor de los éxitos en su futura gestión.

## Treinta y cuatro

El 31 de julio, Viola se incorporó a la Junta Militar, y el 1° de agosto *Convicción* se transformó en diario, autodefiniéndose como «ni marxista, ni fascista, ni peronista, ni populista, sino liberal». El primer número del flamante diario contenía un relato de la ceremonia en la que Videla se convirtió en el «cuarto hombre», con un discurso de despedida de la Junta a cargo de Massera, donde éste dejó pronto las formalidades de lado y empezó a hablar de «la historia chica, la historia de nosotros tres, de vos Videla, de vos Agosti y de mí». Nunca se usaba el tuteo en las ceremonias oficiales, y *Convicción* se ocupó de destacar este rasgo de «simpatía». Ese mismo 1° de agosto estalló una bomba en el departamento del vicealmirante Armando Eambruschini, causando la muerte de Paula, su hija de 15 años.

Eos últimos actos importantes de Massera en la Junta Militar fueron oponerse a que Videla viajara a Roma para la entronización de Juan Pablo I, sucesor de Paulo VI, y formular renovadas requisitorias a Martínez de Hoz sobre la marcha de la economía, en una reunión que se prolongó por cuatro horas. Esa oposición al viaje a Roma formaba parte de la vieja estrategia de obstrucción de las salidas de Videla fuera del país, argumentando nuevamente que en Italia existía una campaña muy fuerte contra la represión en la Argentina —lo que era efectivamente cierto— y que Videla iba a quedar en posición deslucida. Sin embargo, cuando se resolvió que Videla viajara, los contactos de

Massera en la P-2 resultaron instrumentales para que el presidente argentino pudiera desarrollar una serie de importantes entrevistas, que incluyeron al nuevo Papa, al vicepresidente norteamericano Walter Mondale, al premier francés Raymond Barre y al canciller italiano Giulio Andreotti, así como a los presidentes de las principales corporaciones y organizaciones empresarias. La requisitoria a Martínez de Hoz se enfocaba ahora en el persistente descenso del nivel de vida, y de algún modo prefiguraba lo que Massera desarrollaría después.

El momento político era extraordinariamente complejo, lleno de factores contradictorios y tendencias que se anulaban recíprocamente. Los principales componentes de la situación eran: el ascenso de la tensión en Chile, la voluntad manifiesta de la dupla Videla-Viola de empezar a desarrollar un «diálogo político», y el deterioro continuo del nivel de vida de los sectores más pobres. A través de sus discursos de despedida durante agosto, el almirante fue dando a cada uno de estos puntos respuestas parciales que definían el horizonte de su actividad política. Algunas frases de discursos de la época sirven de ilustración:

La Patria necesita de sus hijos hoy más que nunca, porque la ambición ajena

intenta mutilarla.

Las Malvinas son una herida abierta en la dignidad de la República.

O seguimos siendo un país de extramuros o nos incorporamos a las peripecias mundiales por derecho propio.

El único dilema existencial consiste en decidir si la Argentina seguirá como abastecedora de materias primas o se arriesgará a dar el salto. Lo primero no me seduce, y para lo segundo se necesita una conducción lúcida, que no viene dada por el poder político si no viene excitada desde afuera, desde el clamor ciudadano, y se transforma en un alud nacional, irresistible y hondo.

Un Estado es un inmenso sistema de producción.

El país, si se mantiene en una absurda competencia entre factores que deben ser cooperantes y no divergentes, no podrá intervenir en la verdadera competencia, la internacional.

Sigan teniendo fe en el país, y no bajen los brazos ante el todavía transitorio reino de la especulación.

El pueblo quiere saber de qué se trata.

Esta última frase pertenece, irónicamente, a la despedida de Massera en la ESMA.

El almirante terminó sus despedidas con un discurso final de línea dura en Puerto Belgrano. Tras hacer un homenaje a los caídos en la lucha contra el terrorismo, proclamó:

Ya no queda sitio para las equivocaciones. Un límite de sangre nos separa del pasado y sólo podemos empezar de nuevo. ¿Quién puede proponer la minucia de sus ambiciones, la dialéctica impávida de la vieja política sin sentir que está escribiendo al revés la historia de la Patria?

La despedida de Massera no terminaba más, porque en realidad constituía una especie de pacto de presentación electoral ante el público cívico-militar del país. El 16 de agosto, un día después del retiro, el almirante dirigió un «Mensaje a la ciudadanía» donde dijo:

El poder es un pacto con la soledad, aunque yo traté de romperlo permanentemente cada vez que pude. Muchas veces, al volver a mi casa a horas avanzadas de la noche, veía luces encendidas en las ventanas de ustedes y me

preguntaba quién viviría allí, de qué manera los afectaban las decisiones que habíamos tomado ese día, en qué medida estaba cumpliendo yo con mi obligación de velar por el destino de mis compatriotas, y hubiera querido entrar en cada casa y hablarles, y escucharlos, y preguntarles por sus alegrías y decepciones (...)

Me voy satisfecho por la guerra antsubversiva, pero insatisfecho por la situación de la economía (...) Yo me retiro como almirante, pero como ciudadano sigo en servicio activo.

Algo, por lo menos, era falso en todo esto: Massera no se retiraba totalmente como almirante. Inmediatamente después de su retiro formal, instaló sus oficinas en un suntuoso piso de la calle Cerrito al 1100, en un edificio del que en una época se comentó que era propiedad de la P-2. Allí Massera no sólo recibía un resumen diario de prensa preparado por los miembros del «staff» de la ESMA, sino también a almirantes y capitanes a los que citaba y seguía dando órdenes como si todavía fuera el comandante del arma. Eas instrucciones generalmente tenían que ver con cuestiones políticas, pero a veces llegaban a incluir temas de operatoria naval interna. Una noche, durante una cena, Eambruschini, que era un hombre débil y había sido fuertemente herido por el asesinato de su hija, necesitó todo su coraje y varias rondas de alcohol para poder decírselo:

—Me pasás por encima... Ea gente no sabe quién es el comandante, si vos o yo...

—¡Si yo solamente te quería ayudar! —replicó Massera con la mayor naturalidad.

El incidente, en realidad, revelaba una situación estructuralmente difícil. Massera se había retirado como comandante de la Marina, pero era el autor y protagonista del proyecto político del arma. Ea Marina financiaba a *Convicción* para una operación política, pero esa operación política no tenía otro referente que el almirante retirado. Al mismo tiempo, todo eso quebraba la disciplina natural de la fuerza, porque Eambruschini carecía del sentido político, el liderazgo natural y el proyecto de lanzamiento «territorial» de la Marina de que Massera sí disponía. Se estableció de hecho una «poscomandancia» del almirante al frente de la Marina, una dualidad de poder entre el político Massera y el institucional Eambruschini que se prolongó alrededor de seis meses y obligó a muchos a cumplir alternadamente las órdenes a veces contradictorias que partían del Edificio Eibertad y de las oficinas de la calle Cerrito.

El fin de ese período de transición no significó el fin de la influencia de Massera, sino solamente el distanciamiento funcional del almirante: la Marina quería seguir creciendo dentro del Proceso, y su única alternativa para seguir creciendo era

## Treinta y cinco

*Convicción* se programó como la plataforma periodística del lanzamiento político de Massera, su medio básico de agitación y propaganda y también el canal desde el cual se impartían meditados sermones editoriales a la clase política, a los empresarios y a las Fuerzas Armadas. Con estos fines, Eezama había requerido y obtenido una absoluta libertad operativa en cuanto a los medios, y tenía la última palabra sobre quiénes integrarían el plantel de redactores, quiénes serían los jefes y qué escribiría cada uno. El director de *Convicción* no creía que pudiera hacerse un diario político interesante con el paraperiodismo de los servicios de inteligencia, y rechazó toda intrusión en el terreno estrictamente profesional del diario. Así, el SIN podía informarle que determinado redactor, que él acababa de contratar, militaba en un partido trotskista, sólo para que Lezama contestara desdeñosamente: «Ya lo sé», y pasara a otro asunto. Creía firmemente en un viejo axioma periodístico argentino que sostenía que los mejores diarios burgueses son los que están redactados por periodistas de izquierda, y en general estaba dispuesto a contratar a cualquiera que escribiera bien si no planteaba problemas de agitación sindical.

*Convicción* fue diseñado sobre la base del diario *La Opinión* de Timerman, con similar formato tabloide, diagramación vertical, títulos generalmente largos y abundancia de artículos firmados. La idea consistía en hacer desde una suerte de centroderecha lo que *La Opinión* había hecho desde la centroizquierda: la consigna publicitaria de *Convicción* era «El diario del extremo centro». *La Opinión* fue un diario «de lectura», que a su vez se había construido con el diario francés *Le Monde* en mente, y que había constituido la innovación periodística más exitosa y audaz en la Argentina de los últimos veinte años en lo que a diarios se refiere. El deseo de seguir su modelo se extendió incluso a las firmas que empezaron a aparecer en *Convicción*, ya que Eezama prácticamente «importó», casi completa, la excelente sección de artes y espectáculos del viejo diario de Timerman, triplicando los sueldos que los redactores y críticos cobraban en el decadente *La Opinión* bajo intervención militar, procedimiento éste que se repetiría también en otras secciones. El promedio de edad de los redactores de *Convicción* era de 30 años, y muchos de ellos desarrollaron después brillantes carreras en el periodismo, la literatura, la crítica y el ensayo político. Una parte importante de la redacción se nutría de periodistas de formación política izquierdista, lo que era compensado por una proporción parecida de peronistas y por algunos radicales aislados. Esa idea fundacional del diario era completamente iluminista: un simpatizante del maoísmo podía codirigir con un peronista la sección de política nacional, mientras un nacionalista liberal, un marxista y un fascista codirigían agradablemente la sección internacional. Esa sección de artes y espectáculos podía publicar artículos en favor de los derechos de los gays, y las columnas de política internacional variaban de semana en semana del rojo al negro y

del negro al azul según quién estuviera de turno como editor en jefe. Se manejaba un criterio de excelencia un tanto desordenado, basado en la obsesión esteticista de Eezama y en su convencimiento de que los periodistas estaban allí para fabricar un buen diario; para elaborar la línea política estaba él. El procedimiento desarrollaba determinadas capacidades pero inhibía otras, porque la sección de política argentina tendía espontáneamente a la autocensura, y casi ninguno de los redactores y jefes del staff estaba en condiciones de desarrollar determinada orientación. El resultado era que esa sección tendía al silencio y al anonimato, salpicado de discursos oficiales. Esa sección internacional era un parlamento de posiciones diferentes y la de artes y espectáculos podía haber sido escrita antes del golpe de 1976: era la misma que la de *La Opinión*, sólo que en tipografía diferente. El único tema tabú eran los derechos humanos, de los que expresamente no se podía escribir en ningún lado.

Massera visitó dos veces *Convicción* en 1978, con el objeto de conocer personalmente a cada miembro de la redacción. El autor de este libro, que en esa época se desempeñaba como redactor de la sección internacional, recuerda al almirante, más bajo, macizo y cetrino de lo que las fotos permitían adivinar, entrando en la redacción, vestido con un discreto traje cruzado azul oscuro, y estrechando la mano de cada redactor, que le era presentado por Eezama. Tenía una mirada atenta bajo de las densas pestañas negras, y saludaba con brevedad y cortesía.

A lo largo de los años siguientes, las visitas de Massera a *Convicción* se harían más frecuentes, para desconsuelo de Eezama, ya que llegaba siempre en el momento del cierre de la edición y pretendía que Eezama y la plana mayor editorial departiera con él. Se sentaba, pedía un whisky y salamines cortados y empezaba a charlar, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Seguramente revivía la época en que era oficial de inteligencia y visitaba los diarios, sólo que ahora se trataba de su propio diario.

*Convicción* sólo era el medio de prensa más importante de que disponía Massera, ya que la Marina de Guerra estaba también a cargo del Canal 13 de televisión y de varios radios, y tenía porcentajes de participación editorial en varias revistas. Algunos prisioneros de la ESMA llegaron a redactar editoriales y unas anónimas «columnas de opinión» de sesgo nacionalista para la televisión y la radio, y también a elaborar informes sobre temas geopolíticos.

## Treinta y seis

Los últimos cuatro meses del año estuvieron dominados por el ascenso de la confrontación con Chile por el Canal de Beagle. Las maniobras militares, el desplazamiento de buques y submarinos y el despliegue de ejercicios aéreos se sucedían día tras día, a medida que los dos países fortificaban sus fronteras. Se desarrollaban también ejercicios de oscurecimiento urbano, en el intento de preparar a la población para la posible guerra.

La verdad era que, al establecer plazos para las negociaciones, los dos países habían puesto la guerra como desenlace inevitable de un mecanismo de relojería, porque ninguno de los dos presidentes podía retroceder respecto de sus planteos sin caer víctima de las bayonetas de sus propios guardaespaldas militares. Además, en los dos países el litigio se había planteado como una cuestión de indeclinable honor nacional y de odio chauvinista hacia el vecino: los lustrabotas de Santiago limpiaban los zapatos de los transeúntes con banderas argentinas, y los argentinos comunes tapaban con pintura en aerosol el nombre de la calle Chile y lo cambiaban por el de «Soberanía Nacional». Visto retrospectivamente, el período de tensión resulta sorprendente por lo que dice respecto de la incapacidad de la Junta argentina para aprovechar las oportunidades políticas. El país estaba inundado de créditos internacionales y el gobierno había conseguido un éxito de primera magnitud con el Mundial de fútbol, pero sin embargo, los militares presionaban en función de un conflicto que causaría irremediables pérdidas sólo para impedir que el «expansionismo chileno» (!) tuviera acceso al Atlántico. Una parte de la explicación reside en el uso militar de una proporción importante de los créditos; otra en el pronto agotamiento de la misión histórica del Proceso, que después de la guerra antsubversiva sólo exhibía la debilidad de los políticos civiles como motivo para su permanencia; una tercera, en la naturaleza de la disputa interna de los militares, que necesitaba constantemente nuevos argumentos y escenarios para seguir desarrollando su escalada. El caso de Chile era distinto, porque lo asistía el fallo favorable del mediador que los dos países habían elegido para dirimir su disputa, aunque la estrategia de la tensión también era instrumentada por Pinochet para consolidar su autocracia.

Massera, en privado, era moderadamente pesimista sobre el tema. A lo largo de 1977, había pensado que las islas iban a ser fáciles de tomar y defender, pero ahora temía un contraataque terrestre a través de la Cordillera que avanzara sobre flancos débiles del Ejército argentino y cortara el territorio nacional en dos. La inseguridad sobre la capacidad bélica del Ejército, que en sus comentarios reservados se convertía en una nueva forma de desprestigiar a su principal rival, tendía a aliarse en su mente con una cuestión de vetetismo militar, porque el papel del Ejército iba a ser más



importante que el de la Armada durante las operaciones, y después de una guerra victoriosa el Ejército podría reclamar para sí la totalidad indiscutida del poder. Sin embargo, la cuestión del

Beagle también funcionaba como palanca dentro de las grietas de la unidad del Ejército, con los oficiales de la línea dura defendiendo sin rodeos la necesidad de ir al enfrentamiento bélico, y con los moderados y civilistas en contra, y eso inducía a Massera a pensar que él y la Marina podrían imponerse como líderes políticos si desequilibraban con su peso la relación de fuerzas militar y posibilitaban que los duros avanzaran sobre una guerra que no era imposible ganar.

Contra este sustrato de pesimismo moderado, Massera albergaba al mismo tiempo expectativas y especulaciones que sugerían la necesidad de la guerra, y la posibilidad de que pudiera salir bien después de todo. Había dos razones crudamente prácticas a favor de la guerra: el envejecimiento del material bélico, que volvía altamente inseguro su empleo posterior si se encontraba una nueva manera de postergar el conflicto, y la «solución» económica que hubiera implicado el enfrentamiento, ya que habría permitido reactivar la industria y aumentar los impuestos. Otro razonamiento, vinculado con la tesis a favor de «saltar del mapa», consistía en que Estados Unidos sólo prestaba atención a los países que creaban problemas, y que nada era mejor para merecer la consideración de subpotencia que Washington confería en ese momento a Brasil, que convertirse en una suerte de gran alborotador militar al que se debiera seducir, halagar y conceder un lugar de poder. Siguiendo este razonamiento, Massera pensaba que la guerra iba a ser corta, porque iba a ser detenida por Estados Unidos; un rápido cese del fuego permitiría congelar diplomáticamente la posición argentina de dominio de las tres islas. Cómo iba Estados Unidos a detener la guerra entre dos enemigos tan bien armados, pertrechados y dotados de reservas, era algo que Massera no explicaba pero que puede servir como ejemplo de la magnificación del rol norteamericano que la izquierda y la derecha compartían en proporciones semejantes. Si bien el Ejército no era totalmente confiable en el aspecto militar, Massera pensaba que esto se podía contrapesar con la Fuerza Aérea, que podía destruir Santiago de Chile en forma relativamente rápida, y que ya alistaba sus «bases secretas» en la forma de campamentos instalados cerca de la frontera a los costados de las rutas y autopistas que podían ser usadas como pistas de aterrizaje y despegue. El balance de la opinión de Massera se inclinaba en definitiva, aunque manteniendo dudas importantes, por la ocupación militar de las islas.

Videla, por su parte, se había vuelto crecientemente reticente hacia la opción bélica, sobre todo después del episodio de Puerto Montt. Pero al mismo tiempo no veía forma de escapar del dilema ante unos generales de línea dura que estaban ansiosos de pasarle por encima y avanzar sobre Chile, y un Massera que estaba ansioso de captar a los generales de línea dura, aliarlos con él en la guerra contra

Chile, precipitar el descabezamiento de la dupla legalista de Videla-Viola y avanzar sobre el Ejército, sobre Buenos Aires y sobre el poder mientras los generales de línea dura probaban su temple en los fríos del Sur. Videla y Viola consultaban la relación de fuerzas y avanzaban hacia la guerra reticentemente, sin vacilar pero al mismo tiempo sin dar un solo paso que no estuviera estrictamente dictado por el imperativo de conservar su propio espacio dentro del Ejército y las Fuerzas Armadas. Ya que sabían que, si la guerra estallaba, el Proceso empezaría a escapar completamente de su control, y no era imposible que terminara hundido en una estrepitosa derrota militar.

El resultado de esta situación era que, por los menos declarativamente, todos estaban a favor de la guerra; se necesitaba una sensibilidad muy fina para detectar los signos de desacuerdo y de moderación dentro de la homofonía retórica dominante. Esa frase «Si quieres la paz, prepárate para la guerra» nunca se repitió tanto en la Argentina como ese año, pronunciada por los militares más disímiles y distantes en graduación, desde todos los puntos del país, en una cantilena simultáneamente monótona y alarmante. Eos únicos sectores significativos que daban signos de oposición al enfrentamiento eran los episcopados de ambos países, que el 13 de agosto hicieron un ardiente llamado conjunto a la paz, y el grupo liderado por Martínez de Hoz y su equipo económico, que por su alta posición en el esquema de poder había venido desarrollando una suerte de «diplomacia paralela» con Gran Bretaña desde 1976, y que ahora proponía, con apoyo de algunos funcionarios de carrera de la Cancillería (técnicamente en manos de la Marina de Guerra), congelar el conflicto por cierto número de años.

La respuesta de la propaganda masserista fue contundente. Un editorial de *Convicción* publicado el 19 de junio denunció el documento de los obispos como traducción de la fórmula «la paz a cualquier precio»; se impugnó el pacifismo como «la corrupción de la paz» e inquirió retóricamente si la paz valía la pena de convivir con fenómenos como Hitler y el terrorismo. Con respecto a la propuesta de congelamiento, Lezama publicó el 19 de octubre un comentario en la tapa de *Convicción* cuyos títulos lo decían todo: «Cornudos geopolíticos: Los gerentes no mueven la historia». Durante los días que siguieron, los bombardeos de papel se reiteraron con renovada fuerza. Un extenso artículo publicado en la contratapa por Mariano Montemayor recordó el pacto de Múnich y sostuvo que «en política no se puede actuar como Poncio Pilato». Un comentario posterior firmado por Lezama, que se refería a una inmensa peregrinación juvenil a la catedral de Luján para pedir trabajo y bienestar, aludió elípticamente a Martínez de Hoz y su equipo como «marxistas de derecha» que creían que la esencia de todos los comportamientos es el determinismo económico. Massera teledirigía estos movimientos con precisión, cuidando de que los sectores pacifistas quedaran cada vez más acorralados.

A lo largo del último trimestre del año se alistó el dispositivo militar argentino y se elaboraron planes precisos de los movimientos a desarrollar. El desembarco en

las islas y el inicio conjunto de todas las operaciones de tierra se programó para el 24 de diciembre de 1978 a medianoche, especulando con que la celebración de la Nochebuena era un momento inesperado, y que para esa hora los chilenos iban a estar saturados de pisco. Argentina reforzó paso a paso su dispositivo militar a medida que llegaba la noche señalada, incluyendo el alistamiento de la Infantería de Marina y del destacamento cuya misión sería la ocupación de las islas, integrado entre otros por el teniente Alfredo Astiz. El 24 de diciembre por la mañana, el dispositivo ya estaba en marcha, y por la noche cada unidad empezaba a actuar según el cronograma pautado.

Y entonces, algo imprevisto ocurrió. El Vaticano, a través de un cardenal enviado especialmente por el papa Juan Pablo II, apeló a Videla y ofreció los buenos oficios de la Santa Sede para impedir que dos países hermanos y católicos entraran en guerra. El momento de decisión correspondía a Videla; se puede decir que fue el único momento en los últimos meses en que su sola voluntad resultaba suficiente para decidir algo. El presidente aprovechó rápidamente la brecha: aceptó la mediación papal y ordenó la desmovilización militar.

Al día siguiente, la ausencia de guerra era motivo de perplejidad entre militares, marinos y hasta civiles bien informados, que habían esperado el estallido del conflicto por meses. Videla debió explicar laboriosamente a su frente interno que la apelación del Vaticano constituía para la Argentina una intervención inapelable, definición ésta de la que la Marina y la línea dura del Ejército no estaban persuadidas para nada. En la Marina en particular se llenó de protestas contra «el boludo de Videla, que aparece un cardenal y para todo». Sin embargo, el hecho estaba consumado; la Argentina no podía desconocerlo, y ahora que Videla había pactado la paz con el Vaticano, dar un golpe militar contra él implicaba ponerse al Vaticano en contra. Militares y marinos no ignoraban que la guerra quedaba clausurada por mucho tiempo y quizá para siempre: las negociaciones demandarían meses y quizás años, y en ese intervalo el consenso belicista perdería impulso. Además, después de haber rechazado el laudo de Inglaterra, Argentina difícilmente podría rechazar el del Vaticano si éste le resultaba inconveniente, ya que quedaría ante la comunidad internacional como el inequívoco violador de la ley.

Los motivos inmediatos que guiaron a Videla a aceptar la mediación papal son claros: su temor a ser sobrepasado por la línea dura, su reticencia hacia un enfrentamiento con Chile y su profunda fe católica. Sin embargo, detrás de las impresiones y opiniones del presidente se movían intereses y fuerzas de mucho más poder, como la política del equipo de Martínez de Hoz, las preferencias antibelicistas de la burguesía argentina y la adversión de Estados Unidos hacia un conflicto en el hemisferio occidental entre dos países de su órbita. ¿Cómo se expresaron estas fuerzas por medio de la opinión de Videla? No fue a través de presiones políticas, económicas ni militares: simplemente ocurría que el presidente creía en Dios.

En un célebre pasaje de su ferviente defensa de la monarquía absoluta, G. F. W. Hegel considera la posibilidad de que el rey disponga de un intelecto inferior al de sus súbditos y consejeros. ¿Significa eso que el Estado puede precipitarse al abismo por una decisión equivocada, por un error de cálculo, por simple tontería del rey al emitir una orden? Nada más falso —sostiene Hegel—; el rey en sí no importa tanto como la monarquía en sí, dentro de la cual el rey sólo cumple un rol: es quien pone los puntos sobre las letras «i» y las barras sobre las letras «t» que el sistema ya ha escrito para él; el rey se limita a aprobar, a afirmar. Se adivina un dejo de ironía amablemente desdeñosa de Hegel hacia el rey, que contrasta con el fervor con que defiende su idea del Estado.

¿Qué pasa si el rey es un idiota? ¿Qué pasa si el presidente es Videla? No ocurre nada que no tenga que ocurrir: el rey firma los decretos, Videla acepta la mediación papal. Ea única diferencia que aporta el caso del Beagle es que el texto bajo el cual Videla tiene que poner su firma no es producto de la elaboración de su aparato de Estado, pero esto no es porque no exista Estado, sino porque el Estado no está donde se dice que está. El Estado argentino no estaba en las bandas de terroristas de derecha, ni en la competencia interfuerzas, ni en la Santísima Trinidad un tanto hueca de la Junta Militar; sin embargo, un sucedáneo de Estado, una representación *ad hoc*, asomaba y se imponía a través de hilos aparentemente tan débiles y lábiles como las creencias religiosas de un general solitario, el papel integrador del catolicismo en la ideología social y la disconformidad soterrada de civiles, influyentes pero desarmados. Jamás unas palabras a medias, la devoción de un hombre solitario y unos vagos estados de ánimo lograron desmovilizar en la Argentina tantos hombres armados a pocas horas de lanzarse contra el enemigo.

El fenómeno es importante para comprender lo que vendría después, porque detrás de la descomposición del Estado y el Ejército y de las tendencias contradictorias del régimen hacia un diálogo con los civiles, un tiempo llegaba a su fin: el Proceso no tenía más nada que hacer, y sólo sobrevivía porque no existía ninguna fuerza que lo cuestionara seriamente.

## Treinta y siete

Al mismo tiempo que la Argentina se preparaba para la guerra, una historia política más privada seguía desarrollándose en relativo silencio: Elena Holmberg, por haber expirado su período en el exterior, había vuelto de París y estaba dispuesta a denunciar todo lo que sabía sobre el almirante Massera.

Una tarde de diciembre de 1978, Elena se encontró casualmente con Gregorio Dupont a la salida del Alvear Palace Hotel de Buenos Aires. Dupont era un diplomático de carrera, que la había conocido en la Cancillería y había entablado amistad con ella. Hacía varios años que no se veían: Elena Holmberg había vivido en París y él había sido separado de la Cancillería en un confuso episodio a fines de 1976. Los dos se saludaron efusivamente y Dupont la invitó a tomar algo al bar Colony, que quedaba a pocas cuadras.

Gregorio Dupont, como Elena Holmberg, era una persona de buena familia, con parientes, relaciones y contactos en los más altos círculos de la sociedad argentina. Cuando se produjo el golpe militar ya hacía años que trabajaba en la Cancillería. Había estado destinado sucesivamente en Sudáfrica e Israel, y en 1976 se desempeñaba en el Departamento de África y Cercano Oriente. Como el Departamento había quedado acéfalo después del golpe, virtualmente quedó a cargo de Dupont. Su superior era el capitán de navío Gualter Aliara, subsecretario de Relaciones Exteriores. Los dos hombres no tardaron en establecer una relación cordial a lo cual contribuyó un incidente relativamente menor. La Armada quería que se designara a Enrique Loncán, un diplomático simpatizante del apartheid sudafricano, para que asistiera al acto de declaración de independencia de Transkei, una inexistente república artificialmente fundada por Sudáfrica dentro de su territorio. Dupont no podía comprender que la Argentina reconociera a un «país» cuya ilegitimidad era universalmente denunciada. El diplomático pidió ver a Aliara y le preguntó si estaba seguro de lo que quería hacer. Aliara contestó:

— Es una orden del Comando en Jefe.

— ¿Pero el Comando en Jefe está seguro de lo que quiere hacer?

— ¿Qué quiere decir?

— Que a Transkei no la va a reconocer nadie. Vamos a quedar como los únicos boludos.

— ¿Cómo es eso?

—Consulte a la ONU, va a ver que lo que le digo es cierto.

—¿Y cómo yo no sé nada?

—Ah, eso no sé, pero si quiere le puedo traer un alto así de cables de países que rechazan la independencia de Transkei.

Aliara consintió en ver los cables de que le hablaba Dupont, y remitió todo el asunto nuevamente a Massera a través del almirante Guzzetti, titular de turno de la Cancillería. La orden fue olvidada, aunque tenía relación con un dato con el que Dupont no estaba totalmente familiarizado en esa época: el flirt de Massera con la idea de una Organización del Tratado del Atlántico Sur, que no llegó a impulsar más decididamente en la Argentina porque no estaba seguro acerca de la voluntad norteamericana de respaldarla activamente. La «independencia» de Transkei se consumó pocos días más tarde, con el solitario reconocimiento del Paraguay de Alfredo Stroessner.

Unos meses después, Dupont asistió a una cena en casa de Susana Díaz de Vivar de Frías, «Gato Frías», una pintora amiga suya. Había, como suele ocurrir en las grandes reuniones sociales, gente conocida y gente desconocida. Para Dupont, los desconocidos incluían un llamativo matrimonio de entre 30 y 40 años, que por casualidad fue ubicado a su lado en la cena. Se trataba de Fernando Branca y Martha Rodríguez McCormack, quien lucía en la ocasión uno de sus vertiginosos escotes.

Durante la cena se suscitó el tema de la popularidad del gobierno. Quien más interesado parecía en debatir el asunto era Fernando Branca, que mostraba una actitud absolutamente oficialista y eufórica. \blviéndose hacia Dupont, le dijo:

—Y vos que estás en Cancillería, ¿qué pensás?

—A mí me parece que Videla no es lo que se llama un personaje carismático —contradijo delicadamente el otro.

—^No, no me refiero a Videla —dijo Branca—. Me refiero a Massera. Él es el que tiene el carisma para las masas, ¿no te parece?

—Mirá —dijo Dupont—, a Massera lo encumbró Perón, y Massera fue uno de los que dio el golpe de Estado contra Isabel. No sé hasta qué punto las masas se olvidarán de todo esto, en todo caso.

La conversación se desvió hacia otros temas.

A los pocos días, Dupont recibió una comunicación escrita de Guzzetti, pidiéndole su baja. El pedido era sorprendente, porque Dupont había logrado

desarrollar una buena relación con Aliara y no podía recordar incidente alguno en que hubiera quedado enfrentado con las autoridades del Ministerio. Con la comunicación en la mano, se trasladó al despacho de Aliara.

—¿Es muy urgente? —preguntó el marino hundido en una masa de papeles.

—Sí, señor, tanto como que me están dando el raje.

—¿Qué dice?

—Que me echan.

—Déjese de joder, que estoy ocupado.

—Se lo digo en serio, señor; vea esto —y le extendió la nota, que el capitán de navío condescendió a leer, todavía a regañadientes.

Aliara estudió la nota por un momento, sacudió la cabeza y dijo:

—Es un chiste.

—Si es un chiste, quisiera que usted me lo confirme.

Aliara levantó el tubo y mantuvo una conversación por el teléfono interno de la Cancillería. Cuando terminó de hablar, parecía más preocupado.

—Algo pasó —le dijo a Dupont— pero no sé qué es. Deme 48 horas para averiguar.

—Pero señor, aquí dice que tengo que pedir mi baja de inmediato.

—Espere.

Aliara se trasladó a las oficinas del capitán de fragata Pérez Froio, director de Información y Prensa de la Cancillería. Algo después, pidió hablar con el almirante Guzzetti. Al volver de su ronda de averiguaciones, le preguntó a Dupont:

—¿Usted tuvo alguna clase de incidente con el almirante Massera?

—Si yo ni siquiera lo conozco —respondió Dupont.

—Pero alguna clase de cosa... ¿Habló mal del almirante Massera, por ejemplo?

Dupont, entonces, recordó la cena en casa de Gato Frías. Le tomaría algo más de tiempo averiguar que la persona que le había llevado la historia al almirante había

sido Martha Rodríguez McCormack, quien al terminar la cena había pedido los datos de Dupont a la dueña de casa para entregárselos a Massera con la declaración: «En la Cancillería hay un tipo que habla mal de vos y conspira contra vos».

Aliara se preocupó por dejar bien claro ante Dupont que su baja no se producía por motivos profesionales, que él personalmente estaba extremadamente satisfecho con su desempeño y que lamentaría su ausencia. El consuelo era escaso para Dupont, que al dejar la Cancillería se encontró con que estaba en todas las listas negras: los periodistas Mónica Mihanovich y Miguel Briante le ofrecieron hacer sendas columnas sobre política internacional para el noticiero del Canal 13 y para una revista de actualidad, sólo para encontrar después que ambas designaciones eran vetadas desde arriba, y que en caso de ignorar esos vetos se tomarían contra ellos medidas de restricción presupuestaria y retiro de la publicidad oficial.

Así fue como, dos años después de estos hechos, dos diplomáticos directamente perjudicados por Massera se sentaron a una mesa en la vereda del barrio de la Recoleta, con mucho de interés para contarse.



## Treinta y ocho

Gregorio Dupont escuchó detenidamente el relato de Elena. La diplomática dijo que estaba «asqueada», y relató tramo a tramo sus incidentes con el Centro Piloto de París. Sostuvo que Massera se había entrevistado repetidas veces con Firmenich y otros líderes montoneros, tal como se había publicado recientemente en el diario *Le Monde*, que en una ocasión le había entregado a Firmenich una suma cercana a 1.300.000 dólares y que no sólo eso era así sino que ella lo podía probar, ya que existían fotografías del hecho. También declaró su intención de denunciar a Massera, ante lo cual Dupont le contestó: «Tené mucho cuidado con todo esto, porque acá la gente está desapareciendo todos los días por mucho menos de lo que vos decís».

En los días siguientes, Elena Holmberg mantuvo una febril serie de entrevistas con jefes militares y navales para comunicarles lo que había averiguado. Entre los jefes del Ejército que entrevistó se contaron el general Santiago Ornar Riveros, a la sazón comandante de Institutos Militares (Campo de Mayo), con quien tenía relación desde los tiempos de la Revolución Libertadora, y el propio general Videla. También comunicó sus hallazgos a su superior en la Cancillería, el capitán de navío Gualter Aliara. Todos le aconsejaron esperar, mantenerse callada y no hablar con ninguna otra persona sobre el tema.

—¿Vos tenés miedo? —le preguntó la esposa de uno de sus hermanos, durante una reunión familiar.

Ella asintió con la cabeza, sin decir nada.

—Pero, ¿mucho miedo?

Elena volvió a asentir.

El 20 de diciembre de 1978, Elena Holmberg fue a estacionar su auto a un garaje de la calle Uruguay al 1000, en la zona más céntrica del Barrio Norte. Adentro la esperaban dos oficiales de Marina vestidos de civil, que según testimonios posteriores habrían sido los tenientes Enrique Dunda y Jorge Radice. Apenas Elena detuvo el auto, los dos se precipitaron a abrir la puerta y sacaron a la mujer a los tirones. Elena se resistió tenazmente y gritó pidiendo auxilio, pero nadie intervino. La indiferencia y cobardía argentinas por las que tanto desprecio siempre había sentido se le aparecían de nuevo, como un símbolo, en la última ocasión en que la vieron viva. Los oficiales amordazaron a la mujer, la metieron a golpes en un auto blanco y se la llevaron.

Al día siguiente, los hermanos de Elena, enterados del secuestro, comenzaron

sus averiguaciones. Uno de ellos, Eugenio Alejandro Holmberg, se dirigió al coronel Repetto Peláez, que le dijo sin rodeos:

—Estamos ante un nuevo caso Hidalgo Solá.

Luego levantó el tubo del teléfono, hizo señas a Holmberg de que tomara una extensión para poder escuchar lo que se conversaba, y pidió hablar con Harguindeguy. El ministro del Interior fue terminante:

—Esto está claro. Viene del Centro Piloto de París, es obra de los marinos, esto es cosa del negro hijo de puta de Massera.

Por indicación de Harguindeguy, Eugenio Alejandro fue, seguidamente, a ver al general René Ojeda, jefe de la Policía Federal. Ojeda coincidió con el ministro:

—^No hay ninguna duda, es obra de ese taimado hijo de puta de Chamorro. Seguro que ahora lo llamo y me va a decir que no sabe nada, pero la tienen a Elena escondida atrás de la puerta.

—¿No puede ser que Elena haya sido secuestrada por elementos extremistas?  
—preguntó Holmberg.

—Ee puedo dar diez razones sobre por qué no puede ser; la principal es que la subversión tiene gente más importante como blanco.

Ojeda derivó entonces el asunto al coronel Carlos Alberto Tepedino, jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, quien presentó a Holmberg a un funcionario llamado Horacio Giménez. El funcionario, del que luego se supo que su verdadero nombre era Hernán González y que había estado encargado de la investigación del caso Hidalgo Solá, llevó a cabo una pesquisa en París y elevó un informe a sus superiores indicando que el asesinato había sido ejecutado por personal de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Otro hermano, el teniente coronel Enrique Dago Holmberg, mantuvo una entrevista directa con Harguindeguy, en la cual éste repitió su discurso anterior:

—^No pierda tiempo. Hable con el jefe de la Policía Federal. Yo sé de dónde viene esto.

—¿De dónde?

—Del Negro.

Holmberg se entrevistó con el jefe de Coordinación Federal y le manifestó su

intención de preguntar sobre el caso al general Suárez Masón y al contralmirante Chamorro. Ea respuesta fue:

—^No pierda tiempo con Chamorro, y con Suárez Masón no hable porque está en otra cosa.

El teniente coronel fue a ver entonces al coronel Tepedino.

—Estamos frente a un caso en que todas las evidencias están dirigidas a una misma dirección — dijo Tepedino—. Esa dirección es que este episodio se profundiza por denuncias de Elena Holmberg contra militares del Centro Piloto de París o contra personal de la ESMA.

Eos hermanos de Elena y el general Eanusse descargaron entonces toda su presión sobre Videla, que creían era el único que estaba en condiciones de influir sobre los acontecimientos. Videla, sin embargo, era fiel a su persona, y lo único que hizo fue enviar un pomposo radiograma a las unidades del Ejército en todo el país, estableciendo que «el secuestro de la señorita Elena Holmberg debe ser tratado y considerado exactamente como si se tratara del secuestro de un oficial superior del Ejército en actividad». Eos militares miraban el radiograma y no sabían qué pensar. Que Elena Holmberg había sido secuestrada por el GT 3.3.2 era prácticamente *vox populi*, y el radiograma de Videla solamente servía como máscara para ocultar la renuencia del presidente a hacer nada. Eos actos de Videla volvían a retratarlo como lo que era: un cobarde que cumplía las formas, un ex comandante comandado por las circunstancias, una figura de «consenso» tan llevada al extremo que terminaba aceptando cualquier cosa que permitiera sostener la frágil ilusión del consenso.

A los pocos días, el cadáver de una mujer apareció flotando en las aguas del río Euján, en el Tigre. El hallazgo indicaba la premura con que actuó el GT 3.3.2, que prefirió asesinar a Elena Holmberg de inmediato, sin esperar el traslado semanal de cadáveres al mar, para evitar una posible interferencia del Ejército. El 11 de enero de 1979, el ingeniero Enrique Holmberg y el médico Ezequiel Holmberg concurren al cementerio de Benavídez, donde había sido enterrado el cuerpo, acompañados por el general Eanusse y por el juez federal Enrique Marquardt, que había sido designado para actuar en el caso. También estaba presente un oficial del Ejército, encargado de entregar el cadáver «N.N.» para su traslado y autopsia. Se desenterró un ataúd, y se firmaron papeles. A último momento, el doctor Ezequiel Holmberg pidió ver el cuerpo. El oficial del Ejército se opuso. El general Eanusse bramó: «¡Abra ese ataúd!» Un somero examen del médico bastó para comprobar que se trataba de los restos de un hombre. Hicieron desenterrar entonces un ataúd sepultado en una fosa lindera, y encontraron un esqueleto que conservaba restos de un vestido. El vestido había sido de Elena Holmberg, y una radiografía de la espina dorsal coincidió con otra de Elena que estaba en el servicio médico de la Cancillería. Aparentemente, el cuerpo había

sido tratado con ácido.

Las pruebas contra Massera en el caso Holmberg se reducen a evidencia circunstancial, pero una evidencia circunstancial tan abrumadora, extendida y redundante como para despejar toda posible sombra de duda. El almirante, por su parte, explicó personalmente a oficiales de la Marina por qué era necesario asesinar a Elena Holmberg torciendo los hechos y dándoles un significado diferente. Según adujo Massera, Elena Holmberg era una lesbiana corrupta que había ofrecido vender al Ejército información de la que realmente no disponía, y que involucraba supuestas entregas de dinero del almirante a Firmenich. El Ejército, siguió explicando, había demorado la compra de la información por pura negligencia administrativa, y ahora Elena Holmberg aparecía como una figura que las facciones militares adversas a la Marina podían utilizar para arrebatarle a ésta y a Massera todo protagonismo político. Fuentes navales nos relataron después que la argumentación resultó tan persuasiva que la tortura y el asesinato de Elena Holmberg se ejecutaron con un particular ensañamiento, desusado incluso para los estándares del GT 3.3.2.

Massera no pedía permitir la más mínima interferencia ni sospecha en esos precisos momentos, cuando cumplía sus primeros meses de retiro, recomponía las alianzas tendidas durante su comandancia y se preparaba para el más espectacular de sus saltos: la irrupción en la política civil.

# CAÍDA EN DESGRACIA

Hasta agosto de 1978, Massera había desarrollado su política con vistas a las Fuerzas Armadas, un mercado verdaderamente cautivo —sobre todo de su función de gobierno y sus rivalidades institucionales— las cuales escuchaban a Massera como si pudiera ser el factor de desempate de sus distintas confrontaciones. Los civiles permanecían al margen, cortejados desde lejos pero finalmente ignorados, y tomados en cuenta, en última instancia, en referencia a tal o cual disputa de la interna militar. Ahora, sin embargo, Massera cambiaba violentamente de escenario: si había buscado convertirse en un político civil a través de su incidencia en la interna militar, ahora buscaría incidir en la interna militar tratando de convertirse en un importante político civil. Su condena era, precisamente, que los civiles nunca le habrían prestado atención de no haber sido miembro de la todopoderosa Junta Militar tripartita, y los militares nunca lo habrían escuchado si no hubieran pensado que podía poner en movimiento a importantes sectores civiles. El almirante, como era su costumbre, jugaba haciendo equilibrio entre las dos amenazas, pero era víctima, y cada vez más, de la crisis de legitimidad que él mismo expresaba: su importancia entre los militares decrecería si no tenía auditoría civil; su importancia ante los civiles declinaría si no ostentaba mando militar.

A partir de esto, el único lugar que podía construirse para sí mismo era el de ser una figura de transición, un puente entre el tiempo militar y el tiempo civil, mientras esperaba poder aprovechar esa transición para convertirse en protagonista.

Massera había fracasado en sus repetidas tentativas de quebrar irreparablemente al Ejército, aunque había hecho bastante para profundizar sus divisiones. Tampoco había tenido éxito en su intento de popularizar en los mandos militares su propuesta de designar al moderado Viola en la posición subordinada de presidente, y a un general de la línea dura como comandante en jefe del Ejército, porque la institución castrense se había cerrado sobre sí misma apenas detectó la insinuación de un intento de dividirla seriamente. El pase a retiro y a la política civil era, entonces, inevitable. Pero si se lo miraba detenidamente, podía acumular a su favor buena cantidad de ventajas: Massera podría desarrollar su oposición a Martínez de Hoz en forma más abierta y clara sin ser víctima de las sospechas de «subversión^» y «corrupción^» que se endilgaban a la mayoría de los críticos de la época, y sobre todo podía escapar de la esquizofrénica y dudosa posición de ser miembro del gobierno y jefe de la oposición al mismo tiempo. Junto con esto, Massera confiaba en mantener a la Armada tras él gracias a los numerosos vínculos personales, políticos y contractuales existentes, así como en preservar el auditorio que había logrado conquistar dentro del Ejército. Sin duda, un almirante desarmado era menos temible que un almirante armado, aunque, llegado el caso, las armas entrarían a tallar inevitablemente, y no sólo las de la Marina. Los oficiales del Ejército en actividad eran

muy conscientes de las ambiciones políticas de Massera, y si bien la línea dura quería derrocar a Videla y a Viola, no quería hacerlo al costo de un eclipse de hegemonía de su fuerza, que era la institución dentro de la cual y gracias a la cual ellos tenían un lugar; por eso hacían alianzas con Massera en las cuestiones tácticas y se separaban violentamente de él en las estratégicas.

El almirante retirado debía, pues, manejar tres frentes abiertos simultáneamente: la política civil, la Marina y la línea dura del Ejército. La tarea no sería sencilla; para encararla en su época civil, Massera intentó de inmediato hacer valer nuevamente las reglas de juego que le habían servido en su época militar. Acosó desde los primeros días a Videla, llamándolo reiteradamente para advertirlo de supuestas conspiraciones que se desarrollaban a sus espaldas. «Hacé caso de lo que te digo: te van a cagar; yo sé lo que te digo», solía insistir desde el teléfono de sus oficinas en la calle Cerrito. Videla no podía saber si los datos que manejaba su antiguo antagonista eran ciertos o falsos. En el fondo no importaba demasiado, ya que en definitiva Massera lo usaba para torturarlo, vale decir, para controlarlo, para tenerlo permanentemente fuera del equilibrio y para mantener sobre él la atmósfera de terror y de incertidumbre que tan bien había logrado crear durante dos años y medio de cogobierno competitivo.

## Uno

Massera comenzó su trabajo por una de las puntas que había dejado abiertas: las relaciones exteriores.

Mientras Argentina se movilizaba para la guerra con Chile y Buenos Aires hervía de rumores sobre enfrentamientos inminentes, Massera conseguía una invitación para hablar en el Centro de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. Allí, ante renombrados académicos neoconservadores, disertó sobre un tema que hasta entonces había estado ausente de sus discursos pero empezaba a ponerse de moda en el pensamiento neoconservador estadounidense: las diferencias entre la ética protestante y la moral católico-romana y la incidencia de ambas en los diferentes resultados económicos de los países de una y otra fe. El almirante retirado defendió entonces la conclusión weberiana de que la ética protestante es más productiva en términos económicos que la católica, pero lo hizo menos por conocer y suscribir las teorías de Max Weber que para buscar el apoyo de sectores como el liderado por el católico de derecha Michael Novak, que iniciaba en esa época una ofensiva contra la heterodoxa y progresista Iglesia Católica norteamericana y preconizaba una política más laxa que la de Carter con respecto a los derechos humanos. Seguidamente quiso radiografiar la crisis argentina: «La lista de fracasos económicos — dij o— es larga. El populismo permisivo ha fracasado; el monetarismo rígido ha fracasado; e innumerables experimentos que intentaban fórmulas mixtas bajo el benévolo rótulo de un pragmatismo gradualista han fracasado». Y concluyó afirmando que era «inútil seguir intentando resolver nuestros problemas económicos sin resolver primero nuestro universo político». Las referencias adversas al «pragmatismo» y al «gradualismo» eran tiros por elevación contra Martínez de Hoz, que en esa época usaba esas fórmulas; la ruptura con el «monetarismo rígido» tenía relación con los proyectos políticos del almirante retirado, y la «solución de nuestro universo político» aludía a su deseo de encabalgarse como figura clave de una transición democrática. No hizo referencia a los derechos humanos ni a las relaciones argentino-norteamericanas. Con esto Massera no consiguió formar un grupo de aliados norteamericanos, pero sí volver a darse a conocer como un hombre con el que Washington podía llegar a contar en el futuro.

La segunda gran salida al exterior del almirante retirado tuvo lugar en noviembre de 1978, cuando los tambores de guerra en la Argentina sonaban más fuerte que nunca. Su destino fue Francia, donde la apuesta era considerablemente más audaz, ya que se proponía dialogar con el propio presidente Valery Giscard d'Estaing. Quería convertirse en el interlocutor argentino de Europa, como forma de conquistar una nueva legitimidad e influencia a los ojos de sus colegas militares argentinos. Sin

embargo, la entrevista, que fue gestionada durante meses, se hacía difícil de conseguir, ya que Giscard temía aparecer recibiendo al presunto asesino de las monjas francesas en vísperas de las elecciones legislativas y no tenía el menor interés en los proyectos políticos individuales de Massera. El almirante diseñó entonces un canal de aproximación oblicuo: a través de los marinos del Centro Piloto de París, hizo saber a los asesores de Giscard que estaba dispuesto a dar información sobre el paradero de ciudadanos franceses desaparecidos en la Argentina, pero sólo en el curso de una entrevista directa con el presidente de Francia. Giscard finalmente accedió y le concedió una entrevista que no tendría carácter oficial pero se llevaría a cabo en la sede presidencial. El 8 de noviembre a la mañana, vestido con un impecable abrigo gris y un traje azul, Massera entraba con solemnidad y empaque al Palacio del Eliseo, adonde se había esmerado en convocar a un número importante de corresponsales de prensa argentinos.

La entrevista duró quince minutos y se realizó a través de un intérprete. Massera comenzó exponiendo sus ideas y planes políticos, subrayando la afinidad que existía entre su pensamiento y las posiciones manifestadas por Giscard en su reciente libro *Democracia francesa*, que en ese momento se había puesto de moda entre los militares argentinos y sus asesores civiles. Giscard lo interrumpió: no quería saber nada de eso; sólo le interesaban los ciudadanos franceses desaparecidos. El ex comandante hizo entonces algo extraordinario: sacó de un portafolios tres listas de nombres y entregó a Giscard dos de ellas, que correspondían respectivamente a detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y a prisioneros recientemente liberados. La tercera lista constaba de doce nombres —entre ellos los de Alice Domon y Leonie Duquet— acompañados con las fechas y los lugares de las desapariciones y la identidad del presunto autor de los secuestros. La desaparición de las dos monjas aparecían atribuidas al I Cuerpo de Ejército. Massera dibujó sendos ceros a la izquierda de sus nombres y dos ceros más a la derecha de dos nombres que aparecían más abajo, indicándole a Giscard que los ceros a la izquierda significaban «muertos» y los ceros a la derecha «posiblemente muertos». Nuevamente «Cero» dejaba huellas, firmaba su crimen, aunque acto seguido lo atribuyera a sus viejos amigos del I Cuerpo de Ejército. Mostraba así la creciente dificultad psicológica que tenía para desempeñar su doble rol. Se diría que la confesión hablaba a través de él y le hacía poner su nombre de guerra al lado de las desapariciones más famosas, por más que Giscard no pudiera advertir el significado del dato ni constatar la falacia relativa de lo que se estaba diciendo. Massera repetía de este modo los errores cometidos en su falsificación del telegrama de Branca, y en las múltiples pistas autoacusatorias que había dejado desde la desaparición de Hidalgo Solá. Quizá no sea aventurado pensar que, en algún lugar de su inconsciente, quería ser detenido y ansiaba alguna medida de la ley que pusiera coto a su desborde anárquico.

La entrevista con Giscard resultó un fracaso, porque Massera no logró causar la impresión que deseaba, y el diálogo se redujo a un virtual pedido de rendición de



cuentas por parte del presidente francés. Sin embargo, en sus posteriores entrevistas con corresponsales argentinos, Massera insistió en calificar al encuentro como un éxito, destacando la «cordialidad» y la «comprensión» manifestada por Giscard. En esa visita mantuvo también entrevistas con abogados de derechos humanos, funcionarios y representantes de familiares de detenidos franceses, a quienes dijo que la totalidad de los procedimientos ilegales de represión en la Argentina corrían por cuenta del Ejército, y que la Armada y la Fuerza Aérea no tenían participación alguna.

## Dos

Massera observó la escalada y el descenso de la confrontación con Chile desde una moderada distancia, preocupándose por actuar y dar instrucciones a sus ex subordinados navales sólo en momentos nodales. Al almirante, retirado le convenía que la guerra no estallara, porque eso hubiera remilitarizado de golpe a la sociedad y cerrado de un portazo todos sus proyectos de actividad política independiente. Al mismo tiempo, esperaba capitalizar a su favor el resentimiento que había suscitado en las Fuerzas Armadas la aceptación por parte de Videla de la mediación papal, mientras él daba por inaugurado unilateral e incontestablemente el tiempo político: había sido uno de quienes lo había cerrado, y por lo tanto ahora tenía derecho a abrirlo, aunque fuera sólo para sí mismo. La idea íctonaría, pero sólo hasta cierto punto.

A finales de 1978, Massera dedicó gran parte de su tiempo a viajar por Europa. Además de Francia, tocó también Italia, Alemania Federal, Portugal y otros países, siguiendo un itinerario preparado por la P-2, que se había encargado de antemano de abrirle las respectivas puertas. Al regresar al país el 9 de noviembre, hizo críticas por partida doble al equipo económico y a las aspiraciones de paz con Chile de los sectores moderados del Ejército. Se trataba, en el fondo, de dos caras de una misma moneda: Massera estaba convencido en esa época de que Martínez de Hoz desarrollaba una diplomacia paralela tendiente a adecuar la política exterior argentina a las buenas relaciones con Inglaterra y con los grandes banqueros, y de que esto establecía una alianza natural entre el ministro de Economía y los sectores militares que preferían «ordenar la casa» antes que «saltar del mapa». Le convenía, pues, expresar un disgusto de sesgo populista contra la política económica y apelar sobre caliente al nacionalismo en ascenso de los militares argentinos.

He recibido las últimas cifras del costo de vida y creo que los diferentes sectores empresarios, de la producción y del trabajo, han realizado ya un suficiente esfuerzo como para tener alguna respuesta válida, y creo que las repetidas promesas de un mejoramiento de la situación económica no se están dando en función de que sectores del gobierno persisten en mantener una situación económica que evidentemente puede llegar a producir tensiones sociales en nuestro país. En este aspecto debo señalar que me ha sorprendido que si bien los diferentes sectores que he entrevistado [en el viaje a Europa] han expresado un real optimismo sobre la situación externa económica argentina, también manifiestan su profunda preocupación por la situación económica interna.

Vengo un poco preocupado, debo confesarlo, por las noticias que uno recibe, fundamentalmente acerca del tema Chile. Tengo la convicción de que las Fuerzas

Armadas y el pueblo entero están conscientes de lo que significa la defensa de nuestros intereses y la defensa de la soberanía, aunque lamentablemente siempre hay algunos grupos que quieren negociar lo que no es negociable e inclusive negociar con quien no quiere negociar.

Cualesquiera hayan sido los grupos y sectores aludidos, la respuesta llegó al anochecer del día siguiente. Massera terminaba de ducharse en el baño de sus oficinas en la calle Cerrito y estaba por dirigirse hacia el pequeño dormitorio de que allí disponía cuando una ráfaga de ametralladora destrozó los cristales de las ventanas de dicha alcoba. Un teniente de navío a cargo de su custodia se asomó entonces a la ventana y comenzó a disparar al azar contra la oscurecida terraza vecina. Averiguaciones posteriores indicaron que los aproximadamente treinta disparos se habían efectuado desde esa terraza, desde cuyo tanque de agua era visible la ventana del dormitorio. Se encontró sangre en un tramo de la escalera y en el ascensor del edificio vecino, lo que indicaba que la custodia de Massera habría dado en el blanco. El almirante retirado negó importancia al hecho, y declinó hacer comentarios sobre los posibles autores del atentado.

La prensa censurada de la época especuló con la posibilidad de que los agresores fueran montoneros, pero un editorial del diario *The Buenos Aires Herald* también mencionó al pasar la existencia de bandas de ultraderecha y a los que «quieren tratar de lograr que las Fuerzas Armadas se otean recelosamente». El atentado tenía en verdad todo el aspecto de una operación de advertencia en momentos en que Massera empezaba a traicionar al Ejército con sus comentarios en el exterior sobre la lucha antisubversiva. Los atacantes no tiraron a matar, dispararon una sola ráfaga y huyeron bastante incongruentemente ante la respuesta de una simple pistola calibre 9 milímetros. Un atentado real contra la vida de Massera habría implicado probablemente el empleo de lanzagranadas, ya que el ángulo de tiro desde la terraza vecina era demasiado bajo como para alcanzar con precisión a quien se hallara en el dormitorio: las balas se dispararon de abajo hacia arriba y la mayoría impactó en las partes superiores de las paredes. De hecho, los atacantes desaprovecharon la posibilidad de hacer volar las oficinas, y se retiraron sin dejar más que una categórica advertencia en la forma de ventanas destrozadas y once impactos de bala sobre la pared.

El origen del atentado permaneció en el misterio, pero pueden arriesgarse dos hipótesis: una de ellas es que se trató de una operación a cargo del grupo Harguindeguy-Martínez de Hoz, que contaba con la complicidad de la Policía Federal —vital para la lujosa zona de las oficinas de Massera, donde departamentos suntuosos conviven con importantes sedes empresarias y con un número importante de embajadas—; la otra apunta a sectores del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, que habían terminado hacía poco una investigación sumaria secreta sobre el caso Hidalgo Solá y pronto deberían abocarse a averiguar el destino de Elena Holmberg.

## Tres

A lo largo de 1979 Massera desarrolló una serie de giras por el exterior, que complementaba cuando volvía a casa con disparos de intensidad creciente contra la política económica y la orientación del gobierno en el diferendo con Chile. El almirante visitó varias veces América Latina y Europa Occidental, fue dos veces a Estados Unidos, viajó a Arabia Saudita, y estuvo en Japón y China, país este último donde mantuvo una reunión de una hora y media con el líder máximo Deng Xiaoping. La mayoría de estas puertas le eran abiertas por la P-2 y Licio Gelli, quienes veían en Massera la posibilidad de apoderarse de un país entero y convertirlo en su santuario extraeuropeo. Al mismo tiempo, Gelli seguía haciendo favores al gobierno militar en su política exterior; se podría decir que la P-2 constituyó el canal de acceso más importante hacia el mundo de un gobierno cuyo único prestigio internacional consistía en la apertura de la economía.

La mayoría de las entrevistas en el extranjero eran sencillas, porque Massera no tenía dificultad en retratarse a sí mismo como el enemigo de los aspectos más desagradables del gobierno argentino, y en prometerse como la solución cuando llegara su tiempo. Comentaba abiertamente que éste era su *training* en política internacional, ya que no se cansaba de repetir que se había «retirado como almirante, pero no como ciudadano» y no ocultaba su vocación política. Los diarios de la época publicaban versiones simultáneas, minuciosas y semiamordazadas de los contactos de Massera en el exterior: por un lado, los movimientos internacionales que hacía y el acceso a los altos niveles que mostraba el almirante retirado despertaban natural interés; por otro lado, él elegía rodear de misterio y permanecer callado sobre algunos tramos de las entrevistas que mantenía, por más que muchas de ellas fueran netamente protocolares y formales. Algunas de ellas se relacionaban también con compras de armas —un campo en el que Massera seguía actuando como una suerte de «agente libre» de la Marina—, por las cuales cobraba generosas comisiones. Una versión de la época llegó a decir que Massera recibía en ese concepto el equivalente al valor de una unidad del material en cuestión; si, por ejemplo, se trataba de la adquisición de diez fragatas, Massera cobraba como comisión el valor en dólares de una fragata.

Al mismo tiempo, la actividad política interna de Massera era febril y constante, lo que obedecía en parte a su obsesiva adicción al trabajo y en parte a que Massera resultaba ser, virtual y paradójicamente, el único político argentino que prácticamente tenía derecho y libertad para decir lo que quisiera. Se levantaba a las 6.30 de la mañana y estaba antes de las 8 en sus oficinas de la calle Cerrito, habiéndose desayunado con una taza de café solo sin azúcar; llegaba a la oficina; leía el resumen de prensa preparado por los detenidos de la ESMA; hacía sus llamadas, y daba instrucciones a su staff —del que era miembro importante su hijo Eduardo, a la sazón de 28 años—, con una sistematicidad y un rigor parecidos a los que había ejercitado en

el comando de la Marina. Como había sido el primer comandante en jefe de la Armada del Proceso y una de las figuras más influyentes del país, políticos y representantes de sectores civiles concurrían a visitarlo en racimos. Massera usaba estos encuentros para ir armando alianzas con vistas al movimiento que, como crecientemente reconocía, quería formar. El ex comandante se beneficiaba de un efecto de imagen de la época: era la única voz autorizada a disentir en medio de un páramo político, y eso le permitía disfrutar de una atención y prominencia que habrían sido mucho menores si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y ese lugar nunca estuvo dotado de una retórica más espectacular y vacía que cuando anunció, en mayo, que el movimiento que quería formar era de inspiración socialdemócrata, y que «el modelo de Suecia, por ejemplo, me parece admirable». La socialdemocracia estaba precisamente de moda en la Argentina de entonces, aunque cabe aclarar que el movimiento socialdemócrata que Massera se proponía formar incluía a figuras como el contralmirante Fracassi y el capitán Acosta.

La posición de Massera era confusa y argumentalmente problemática. El almirante retirado decía, por ejemplo, que «la democracia no se limita a la existencia de partidos», pero «tampoco puede haber democracia real sin que se apoye en sólidos partidos políticos». Acto seguido reclamaba, sin embargo, que «esto no se interprete como que estoy propiciando una salida electoral, pues sería absurdo». El perímetro de negativas y censuras de Massera reflejaba los estrechos márgenes de sus posibilidades políticas: el «movimiento socialdemócrata» naturalmente se yuxtaponía con el Partido Justicialista y sectores de la Unión Cívica Radical, pero esto era así porque estos partidos no tenían posibilidad de operar directamente. Massera se postulaba a sí mismo como integrador de un movimiento que incluyera al grueso de estos dos partidos precisamente porque una salida electoral era «absurda»; en caso contrario, evidentemente esos partidos se habrían presentado directamente en la «salida electoral», sin necesidad de la intromisiva mediación de Massera, y habrían ganado las elecciones. De esta forma Massera se retrataba crecientemente a sí mismo como el límite de permisividad de un régimen naturalmente prohibitivo y como el paraguas de disenso autorizado bajo el cual las verdaderas fuerzas del disenso podían agruparse. El ex comandante necesitaba de la represión para constituirse en la antirrepresión y del Proceso para representarse como anti-Proceso, puesto que la legalidad de la época no tenía que ver con la legitimidad, sino con el conjunto de leyes dictadas desde 1976 y con el instinto de autopreservación y conservación del poder de las estructuras que habían tomado el mando en 1976.

Massera, sin embargo, iría encontrando crecientes problemas para sostener esta línea discursiva, ya que en el fondo los militares que gobernaban el país tenían más legitimidad social que él, y sus propias propuestas eran las de un mero aventurero oportunista dispuesto a aprovecharse de cualquier resquicio y ocasión de lograr popularidad fácil que pudiera abrirse a costa del gobierno. La legitimidad social superior de Videla-Viola se mostraba, por ejemplo, en su rechazo a entrar en un

conflicto armado con Chile, que era compartido por Estados Unidos, el *establishment* económico argentino y la gran mayoría de la población. Y Martínez de Hoz tenía ciertamente más legitimidad y referencia en las clases dominantes argentinas que las vaguedades retóricas del almirante retirado sobre la precedencia de la política sobre la economía. Al atacar a Martínez de Hoz, Massera aprovechaba el punto de mayor debilidad política del gobierno en relación con las clases populares, pero lanzaba su ofensiva desde una base inconsistente: carecía del apoyo de sectores orgánicos importantes de la burguesía y, ante los sectores populares, era víctima de su propia participación en el Proceso y en el derrocamiento de Isabel Perón. Creía poder sustituir estas carencias con retórica, pero el resultado era que los civiles no le creían y sólo lo escuchaban los militares. Podía Preservar sus ilusiones sólo porque pensaba que los militares podían darle en determinado momento de crisis el manejo de la transición, que entonces él sí sabría aprovechar. Sus posibilidades de acceder al poder dependían, pues, de una serie muy improbable y problemática de variables condicionadas y encadenadas entre sí.

La sociedad civil carecía en esa época de líderes fuertes; las posibilidades de Massera pasaban, entonces, por un estallido de una tremenda crisis que provocara una implosión del Proceso, es decir, que alguna variable económica o militar determinara que el enorme edificio construido desde 1976 se derrumbara sobre sí mismo. Si esto no llegaba a suceder, su política de oposición a Videla, Viola y Martínez de Hoz pasaría a computarse como un ataque sin base social contra las clases dominantes argentinas, como un puro intento de independentismo y sustitucionismo militar y como una variable enloquecida que podía llegar a producir cualquier cosa, precisamente por la ausencia de referencias sociales concretas. Ya en 1979, Massera se encaminaba decididamente en esta dirección.

## Cuatro

La oposición de Massera a Martínez de Hoz y al pacifismo con Chile desarrolló durante 1979 un tono de virulencia y agresividad crecientes. A comienzos de junio, en un discurso pronunciado en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., dijo directamente que «la política gradualista de Martínez de Hoz ha llevado a la industria argentina a la quiebra». El aludido, que en ese momento se hallaba por coincidencia en Estados Unidos, replicó en Nueva York que se trataba de «todo lo contrario», ya que la política seguida tendía al fortalecimiento de la industria y a su modernización, competitividad y necesidad de reinsertarse desde posiciones de fuerza dentro del mercado mundial. Martínez de Hoz también hizo reproches implícitos a Massera por ventilar fuera del país debates de política interna.

La verdad estaba, seguramente, en algún punto intermedio entre las dos versiones. Martínez de Hoz no había provocado la quiebra de la industria argentina, sino solamente de sus sectores pequeños y medianos, de baja concentración de capital, ineficientes y dependientes del subsidio estatal. Como contrapartida, había generado una superconcentración de los capitales más importantes y había favorecido la exportación de productos agrarios. Sin embargo, como estos capitales no eran más responsables ni patrióticos que los pequeños, veían en el atraso cambiario y la especulación en los mercados internacionales una forma de capitalización más rápida que la producción, lo que relegaba a esta última, sobre todo la orientada al mercado interno. El resultado era un aumento del número de desocupados (que de todos modos nunca fue superior al 10 por ciento) por efecto del cierre de industrias chicas, y un aumento del número de subocupados en trabajos temporarios y ocupaciones por cuenta propia. Al mismo tiempo, había un efecto de prosperidad en la clase media gracias al dólar barato y a la continua afluencia de préstamos internacionales nutridos por el reciclaje de los fondos de la OPEP. Los nacionalistas reprochaban a Martínez de Hoz que se necesitaba «una industria mundialmente competitiva, produzca ésta acero o caramelos», ese anacrónico fetichismo siderúrgico que olvidaba, entre otras cosas, que Martínez de Hoz había sido presidente del directorio de una acería. Un reproche más certero habría sido señalarle que, bajo su política económica, la industria argentina no podía producir acero *ni* caramelos y se refugiaba nuevamente en el subsidio indirecto, la total laxitud impositiva y la ineficiencia. Sin embargo, los nacionalistas eran demasiado anticuados como para pensar en esto y Massera demasiado ignorante.

En un ataque posterior, Massera hizo jugar el nacionalismo económico y el nacionalismo territorial en una forma combinada. El lugar fue la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina, y la ocasión una

ponencia sobre «La identidad nacional como esencia del Estado». Al nacionalismo económico volvió a defenderlo desde la metafísica; al nacionalismo territorial, desde una virtual incitación a la insurrección:

La riqueza, que debería haber actuado como motor para propulsar a la Argentina en tanto país global —con todo lo que eso significa— nos produce cierto encandilamiento y empezamos a creer que la riqueza es lo mismo que la grandeza y así, lentamente, vamos trocando la idea de nación por la idea de comercio, y lo que debía ser una parte, se va convirtiendo en el todo, hasta asfixiar nuestro propio sentido nacional.

Al poco tiempo de nacer, apenas aparecida la idea de nación, la Argentina se impone propósitos exteriores. No podía ser de otra manera. San Martín marcha a Mendoza a preparar el Ejército Libertador y cuando transitorias miopías porteñas le ordenan venir a Buenos Aires para dirimir rencillas locales, San Martín, el glorioso desobediente, desoye la orden y proyecta a la Argentina en el continente.

La conferencia, pronunciada bajo el principio de que «toda idea nacional supone una idea internacional», hermanó por primera vez en forma totalmente explícita el derrocamiento de Martínez de Hoz con la guerra contra Chile y el desplazamiento de Videla y Viola, y se convirtió en una virtual exhortación a que el Ejército desobedeciera a sus mandos. Unos días después, volvía a la carga en una entrevista con el *Diario 16* de Madrid donde decía:

La terquedad de la inflación demuestra un error de concepción que no se quiere rever; todo el conjunto conduce a una Argentina comerciante de dinero que está muy lejos de los ideales de Mayo y de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional.

Y, en un mensaje a los argentinos para 1980, insistió con el tema en diciembre de 1979:

En este manejo de la economía se persiste —como en medio de una terquedad anticuada, fuera del transcurso de los tiempos— en entregar nuestra industria, desproteger nuestro campo —ese mar feroz, esa infinitud fabulosa— en favorecer caprichosamente al especulador y en premiar a quienes hacen del comercio de dinero su principal líente de riqueza. Riqueza dispendiosa que ofende cuando al pasar por la calle nos enfrentamos con un despilfarro capitalino que va languideciendo hacia el interior del país, y muere lastimosamente sobre las fronteras. Es allí donde precisamente advertimos que no es el nuestro un país desarrollado, peor aún: que su desarrollo es deformado y constituye esta gran Ciudad Estado, rodeada por la infinita soledad. Mientras todos los países del mundo protegen su producción y la estimulan hasta hacerla eficiente y competitiva, nuestro afán parece reducido a ser merecedores



de nuevos y conflictivos créditos, a préstamos que paliaban sin remediar el poderoso problema de la producción.

Massera reeditaba aquí la oposición ingenua del anticapitalismo temprano entre un capital productivo «bueno» y un capital financiero «malo», junto con una apelación al *leitmotiv* nacionalista argentino contra Buenos Aires y a favor de las provincias y metáforas como la de la «infinita soledad», que dan prueba de la influencia de Ezequiel Martínez Estrada y sus clásicos tratados *Radiografía de la Pampa* y *La cabeza de Goliat*. Sin embargo, esta *mélange* ideológica tenía sentido y dirección en una puja interna del Ejército en que Massera se proponía influir, y que sólo empezaría a operar el año siguiente: el relevo del general Videla como presidente de la República.

## Cinco

El coqueteo de Massera con los derechos humanos prosiguió y se intensificó en 1979. Ya en marzo, volvió a recibir al Dr. Eduardo Mignone, esta vez en sus flamantes oficinas de la calle Cerrito. Nuevamente sostuvo que la desaparición de Mónica Mignone era responsabilidad del Ejército, y le recordó que él había sido el único comandante que había dado la cara y el que había pedido la publicación de la lista de bajas. Terminó agregando que Videla era un «hijo de puta», y Mignone le dijo que coincidía con él.

Otra entrevista parecida tuvo lugar en octubre, esta vez con Sara de Brodsky, madre de Fernando Brodsky, un maestro de 22 años que había desaparecido en agosto de 1978 en una operación a cargo del GT 3.3.2. La mujer, que recibía cada tanto llamadas de su hijo, en las cuales éste no le informaba dónde estaba cautivo, había conseguido la entrevista con Massera a través del político justicialista Ángel Federico Robledo. La respuesta del almirante retirado fue tranquilizadora y alarmante al mismo tiempo: «Su hijo está, está protegido, pero si alguien me pregunta, yo lo voy a negar». Al salir de la entrevista, la mujer le regaló al hijo de Massera una estatuilla con el tema de «Las manos de Dios». Cinco meses después de esa reunión, Fernando Brodsky fue sacado de la ESMA y desaparecía para siempre.

A fines del año, Massera envió una carta de solidaridad a Robert Cox, director del matutino de habla inglesa *The Buenos Aires Herald*, quien había decidido abandonar el país y trasladarse a Londres como consecuencia de las amenazas recibidas. «El hablar claro todavía es costoso», decía la carta de Massera, quien pocos días después la difundía en el agasajo brindado al periodismo con motivo de la finalización del año. La solidaridad con Cox era perversa y cínica, ya que éste había sido uno de los primeros amenazados por Massera. En el primer año del Proceso, el director del *Herald* había escrito un editorial donde comparaba un discurso de Massera con otro de Viola y señalaba elogiosamente las coincidencias. Cox, que evidentemente no estaba del todo al tanto del perjuicio que esto causaba al flirt del almirante con la línea dura del Ejército, recibió enseguida una cita de Massera y concurrió al Edificio Libertad, donde fue recibido por el capitán de navío Horacio Zaratiegui. Allí pudo ver en un momento una serie de editoriales del *Herald* recortados y subrayados con tinta roja. Súbitamente entró Massera y, con una sonrisa deslumbrante, tomó a Cox de los hombros y le dijo: «Si usted menciona una vez más mi nombre en su periódico, yo lo voy a mandar adentro para siempre». La relación entre los dos hombres estaría signada desde entonces por una fuerte antipatía mutua, y en numerosos editoriales posteriores al retiro del almirante se deslizaron ironías delicadas sobre sus intenciones políticas. Cox aprovechó, por ejemplo, la profesión de fe socialdemócrata de Massera para publicar un editorial titulado «El almirante rojo»,

donde señalaba que Massera «no parece poseer la atracción carismática de un Hipólito Yrigoyen o un Juan Perón, lo que está muy bien», hacia notar en tono de reproche «los nebulosos espejismos de la tradición populista argentina que en ocasiones parecen atraerle» y le recordaba que «la política es algo más que la sencilla afición de militares retirados a quienes les sobra el tiempo». Con la carta de solidaridad, Massera devolvía a Cox sus ironías y las molestias que le había causado, al tiempo que tallaba para sí mismo un perfil de defensor de la libertad de prensa.

Massera era consciente de que el enemigo volvía arropado con la bandera de los derechos humanos, pero eso le convenía, porque sabía que esas ropas, adquiridas a toda prisa en las oficinas de las Naciones Unidas y en los centros de solidaridad internacional con las víctimas de la represión en la Argentina, constituían la prueba más palpable de que ese enemigo estaba desarmado y desnudo. El primer desarme había sido militar, como lo probó la patética «contraofensiva montonera» de 1979, que se limitó a una frustrada y sangrienta intentona de penetrar a través de las fronteras. El segundo desarme empezaba a ser ideológico, porque los izquierdistas exiliados, para lograr la solidaridad internacional, debían invocar su condición de refugiados y perseguidos, y al convertirse en eso abandonaban su condición de combatientes y asumían la bandera de los derechos humanos de la administración Carter. El dilema ideológico de los exiliados era terrible, porque de un lado de la frontera estaban Videla, Massera y los GT, y del otro los esperaban la administración Carter y los gobiernos de Europa occidental para asimilarlos a la ideología burguesa bajo el manto de la solidaridad internacional. Como en la Argentina nunca habían experimentado una democracia verdadera y durable, era frecuente que terminaran deslumbrados por el estilo de vida político de los países donde se asilaban y comenzara a operarse en ellos una genuina transformación política. Advertían cada vez más que la cultura militar en que habían sido formados constituía un anacronismo, y la atmósfera ultrasectaria de que se dotaban las organizaciones exiliadas para contrarrestar esta gradual descomposición ideológica no hacía más que expulsar a los militantes con más fervor hacia las políticas de conciliación con la democracia formal.

Con el enemigo desarmado, y con el combatiente «procesado» y reconstruido con la forma de defensor de los derechos humanos, la situación de Massera se volvía simultáneamente más difícil y más fácil: más difícil tácticamente, porque la violación de los derechos humanos constituía un estigma del que Massera debía necesariamente desprenderse para desarrollar la dimensión internacional de su proyecto, pero más fácil estratégicamente porque los defensores de los derechos humanos no reclamarían una transformación radical de la sociedad, sino solamente que se los respetara. ¿Y qué ocurría si un ex represor en jefe, integrante notorio de la primera Junta Militar, se solidarizaba subrepticamente con las víctimas, develaba a sus familiares la situación de los detenidos, indicaba su deseo de terminar con la «guerra sucia»? Massera aspiraba a ir captando la buena voluntad internacional mediante la lenta seducción de los militantes de derechos humanos y los familiares de

desaparecidos, ante quienes insistía una y otra vez en responsabilizar de todo al

Ejército y en sacar del lote de responsabilidades de la Armada el máximo de cadáveres posible. Con estos movimientos buscaba complementar la apertura ensayada a comienzos de 1978 hacia la administración Carter, y proseguida a los tropiezos al finalizar ese año con la hierática entrevista con Giscard.

## Seis

Massera comenzó 1980 organizando toda su política en función de la decisión, que tendría lugar en la segunda mitad del año, sobre la sucesión de Videla. Se trataba de una puja extraordinariamente complicada en el interior de las Fuerzas Armadas, donde los intereses personales aparecían como fuerzas políticas y viceversa, donde las alianzas tácticas parecían prevalecer a cada instante y donde la situación se había modificado de manera importante con respecto a la simple ecuación «duros versus moderados» que había predominado durante el período de la «guerra sucia».

Videla debía abandonar la presidencia, que desde 1978 ejercía en condición de militar retirado, en cumplimiento de las actas fundacionales del Proceso. Su sucesor natural para el cargo era el general Roberto Viola, quien se desempeñaba a la sazón como comandante en jefe del Ejército y debería también abandonar el mando para poder asumir la jefatura del poder político. Llegado este punto de la eventual transición, la relación de fuerzas dentro del Ejército se modificaba en forma sustancial: con Viola dejaba el mando el último general de inclinación civilista y moderada y los fusiles pasaban a estar directamente en manos de los temibles comandantes de Cuerpo, particularmente del ascendente general Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe del II Cuerpo de Ejército (Rosario). Al promediar 1979 había sido vencida la versión más extrema de esta tendencia, que se había manifestado con una insurrección en Córdoba del general de división Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo, en protesta por el «diálogo político» del gobierno (generalmente invitaciones de Harguindeguy a políticos a tomar café en su despacho) y por sus contactos con sindicalistas y «corruptos». La derrota y el pase a retiro de Menéndez cerraron sólo el brote más conflictivo de esta situación, pero el inminente retiro de Viola ponía en evidencia que el sector de línea dura, que insistía en la prolongación indefinida del Proceso, estaba en posición de avance.

Al mismo tiempo, Viola no era Videla y estaba dispuesto a modificar aspectos importantes de la política desarrollada por éste. El cambio más importante concernía a Martínez de Hoz, a quien Viola había rechazado desde el comienzo y ahora estaba dispuesto a reemplazar. Al mismo tiempo la prosperidad de Martínez de Hoz comenzó a mostrar su evanescencia en 1980, y la mitad del año fue escenario de un derrumbe en dominó de importantes bancos y entidades financieras. El milagro de la plata dulce empezó a acabarse en medio de las corridas de los ahorristas, como resultado del debilitamiento de la corriente de préstamos externos. Antes de que todo ocurriera, Viola estaba dispuesto a designar un ministro que ejecutara una política económica más acorde con el proyecto de popularizar el Proceso con vistas a una eventual transición civil indolora.

Y por último, Viola también se diferenciaba de las ideas de Videla y su equipo de colaboradores en que, mientras estos últimos buscaban trabajar sobre la base de los partidos realmente existentes, él proyectaba crear un «partido de los amigos», una «cría del Proceso» que reclutara las alianzas de los partidos provinciales de derecha bajo la jefatura más o menos explícita de la diputada jujeña María Cristina Guzmán. Todo esto era cuestionado por el equipo integrado por los generales José Rogelio Villarreal y Horacio Tomás Liendo y el subsecretario general de la Presidencia de Videla, el abogado Ricardo Yofre.

Mientras esto sucedía, la Armada cortejaba asiduamente a Galtieri y prefería un desenlace donde Viola fuera directamente de la comandancia al retiro privado sin pasar antes por la presidencia. Massera y la Marina veían en Galtieri a un general impulsivo y manipulable, dado al trago pero respetado en su arma, y que además había confluído numerosas veces con las críticas de la Armada a la política de Martínez de Hoz.

Con este panorama, Massera comenzó a disparar artillería pesada contra el ministro de Economía. El 15 de junio de 1980 hizo público su documento más fuerte hasta ese entonces sobre Martínez de Hoz, a quien sin embargo no mencionó por su nombre. El documento, construido como una exhortación pública a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, decía cosas como éstas:

Juzgo a la conducción económica no por sus errores o por no haber alcanzado sus objetivos propuestos. La juzgo, porque es la herramienta del materialismo penetrado en lo más íntimo de nuestro tejido social. La juzgo, porque es el instrumento utilizado para transformarnos en una colonia. La juzgo, porque pretende destruir nuestros valores. Y esto no puede ser auspiciado por las Fuerzas Armadas.

La sensación de una superioridad imaginaria, la soberbia de los que mandan y los que gobiernan, un prestigio no siempre justificado ni merecido; el éxito fácil, la obtención del bienestar sin esfuerzo, un desarrollo ilusorio, por lo material y no por lo ético, la frivolidad y la inautenticidad como normas, la creencia de que los derechos no implican deberes, el sectarismo y el egoísmo enquistados en la conducta social, la incapacidad para la convivencia, la ausencia de un sentido heroico de la vida, y hasta una irreligiosidad presuntuosa, han lastimado profundamente nuestros tejidos íntimos, conformando la más grave de las crisis.

Poco a poco, casi sin sentirlo, se fueron tergiversando nuestros objetivos. Lo que habíamos restaurado, todo lo que bien habíamos restaurado, fue perdiendo vigencia por la soberbia, el capricho y el olvido de los intereses de la Nación.

Nos aislamos dentro de nuestro propio entorno. Hicimos de la economía la política, y de la política una mala palabra.

Cuando la defensa de nuestros derechos soberanos es una declamación sin sentido, cuando tratamos de justificar acuerdos internacionales carentes de sentido, cuando no defendemos con vigor nuestras Malvinas y alguno las negocia, cuando no distinguimos al amigo del enemigo sino al que compra del que no compra, cuando los intereses pecuniarios superan a los intereses nacionales, el problema es moral.

Cuando se repudia la crítica, cuando se busca el apoyo de obsecuentes, cuando se pretende una prensa complaciente y se la conculca, cuando no se informa, se agrade y se anestesia, cuando se defiende la continuidad y sólo se pretende el continuismo —los mismos hombres los mismos métodos, las mismas apetencias—, cuando se protege ilegítimamente a los amigos, el problema es moral.

Cuando en nombre de un criterio pragmático se confunde al Estado con el mercado, la convivencia con la competencia, el bien común con el producto bruto, la nación con la empresa y al hombre con el número. Un criterio pragmático convertido en religioso instrumento de conducción personal que permite eliminar hoy lo que se fomentó ayer, que reduce a nuestra Patria a la condición de un simple proveedor de materias primas. Un criterio pragmático que resulta eficiente sólo para un grupo de intereses que no son precisamente los de la Nación: el problema es moral.

Massera, en este discurso, atacaba a Martínez de Hoz desde todos los ángulos, desde el materialismo hasta la «diplomacia paralela» con Gran Bretaña, pero también disparaba contra Viola mediante las acusaciones de «continuismo» y «amiguismo». Galtieri leía con aprobación este mensaje y veía recortarse su propia figura en los espacios que Massera dejaba sin atacar, como si éste fuera un eximio tirador de circo que dibujaba la silueta de su favorito rodeándola de balazos en la pared de un polígono de tiro.

La única respuesta contra esta embestida estuvo a cargo del secretario de Hacienda Juan Alemann, que replicó a las acusaciones de dependencia y abandono de la soberanía señalando que «nunca la Argentina tuvo tanta independencia económica como ahora, en que tiene altas reservas monetarias, en que el exterior tiene un interés real por la Argentina, y nosotros podemos seleccionar los créditos y sus condiciones».

## Siete

Al decidirse la sucesión de Videla, la Armada realizó una movida inesperada y audaz: propuso que Galtieri pasara a ser simultáneamente comandante en jefe del Ejército y presidente de la Nación.

La propuesta abandonaba por primera vez el principio, tan defendido anteriormente por la Marina de Guerra, de una separación entre el presidente y el jefe del Ejército, y de la selección para el primero de estos cargos de un oficial retirado, que de este modo se convertiría en el «cuarto hombre», subordinado a la Junta de Comandantes. La idea no tenía mayor chance de ser aprobada, pero su verdadero propósito era fortalecer el ego de Galtieri y debilitar y condicionar la futura presidencia de Viola. La Armada quería matar dos pájaros de un tiro, anticipándose al descontento de los comandantes de Cuerpo con Viola como presidente y profundizando la división militar. Se registraban en el bando ascendente de una confrontación que todavía no había tenido lugar. Cuando el general Villarreal llevó la propuesta a Galtieri, éste se limitó a leerla sin comentarios; tampoco respondió al análisis de Villarreal, que le dijo: «General, esto es para dividir al Ejército». Galtieri ya tenía planes de poder en mente.

Una vez decidida la designación de Viola como presidente, Massera comenzó a usar todos sus recursos para debilitar la figura del futuro titular del Poder Ejecutivo. La acusación principal, que coincidía con las preocupaciones de numerosos civiles, era que Viola ascendía al poder «condicionado», y que el principal «condicionamiento» era la política de Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía. En un reportaje concedido en diciembre a la revista *Redacción*, Massera acusó a Martínez de Hoz de haber desvirtuado los objetivos originales del Proceso, y confesó: «Yo, por lo menos, no le conocía las mañas».

Cuando le preguntaron si no había pensado que Martínez de Hoz podía convertirse en un superministro, replicó:

—^No, bajo ese aspecto yo no lo conocía. Después, claro, nos fuimos enterando de algunas cosas que había hecho durante la última etapa del gobierno de Guido, cuando empezó a autorizar gastos excesivos y dejó sin fondos al gobierno sucesor.

—¿Y usted cree que eso puede volver a ocurrir ahora?

—Bueno, eso lo va a saber Viola dentro de tres meses —contestó Massera. Luego pasó a atacar la intención de formar el «partido de los amigos», afirmando—: la obsecuencia, el oficialismo incondicional y la proximidad al poder para conseguir prebendas sólo sirven para congregar oportunistas. En el país existe angustia por



saber qué va a pasar mañana, y por eso nos aferramos a la idea de que Viola es bueno —provocó.

La paradoja de todo esto era que el fortalecimiento de la línea dura del Ejército se producía en circunstancias en que la sociedad civil comenzaba a hacer oír explícitamente sus reclamos. La guerra contra la subversión estaba completamente terminada, y la maquinaria del gobierno militar subsistía sobre el país como un aparato torpe y asfixiante que carecía ya de toda función y limitaba toda su razón de ser al deseo de permanecer en el poder. Las clases dominantes, terminada la supresión de la guerrilla y la desmovilización del movimiento obrero, comenzaban a clamar por un cambio que les restituyera el poder directo entregado a los militares a préstamo, y los partidos políticos empezaban a organizarse en una conferencia multipartidaria que tenía el objeto de constituir el polo de articulación y coordinación política civil ante el errabundo gobierno militar. Yofre, con característica lucidez, alertó a Viola apenas éste fue designado presidente: «General, usted tiene que negociar con la Multipartidaria». Viola desoyó el consejo, en parte por timidez política, y eligió en lugar de eso el «partido de los amigos» complementado con una práctica de mimesis escasamente exitosa respecto de la línea dura, como cuando afirmó en Washington: «Si los nazis ganaban la guerra, los juicios de Nüremberg se hacían en Virginia».

Viola, pues, asumió el poder en marzo de 1981 en condiciones de paradójico debilitamiento: la Armada y la línea dura del Ejército lo cuestionaban por ser demasiado negociador y flexible, mientras las clases dominantes, los partidos políticos y el resto de la sociedad civil lo veían como retrasado, fuera de época y excesivamente duro. Carecía de respaldo propio en cualquier sector.

Al mismo tiempo, la relación de fuerzas hemisféricas se había modificado. El candidato republicano Ronald Reagan había arrebatado fácilmente la Casa Blanca a Jimmy Carter en las elecciones presidenciales de noviembre de 1980, completando un proceso de reconversión de la ideología norteamericana cuyos puntos de partida habían sido el triunfo de una revolución izquierdista contra Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979 y la amenaza de progresión de ese movimiento hacia El Salvador y otros eslabones débiles de América Central. Además, Reagan llegaba a la presidencia prometiendo revertir la derrota de Vietnam y la humillación vivida en Irán, donde decenas de diplomáticos norteamericanos habían permanecido por meses en condición de rehenes de la revolución islámica triunfante en 1979. Y, por último, Reagan se proponía revertir el avance de la Unión Soviética, que para los Estados Unidos de fines de los años 70 se resumía en la invasión a Afganistán, también en 1979. Nicaragua, Irán y Afganistán se habían convertido en puntos de inflexión de la conciencia pública norteamericana; los Estados Unidos comenzaban a girar aceleradamente a la derecha. La política de derechos humanos fue rápidamente abandonada por la administración Reagan, que privilegió en cambio las relaciones

con las dictaduras «autoritarias» (capitalistas) para confrontarlas con las «totalitarias» (ideológicamente socialistas y dependientes de la URSS y del bloque del Este). La Argentina contrarrevolucionaria podía encontrar fácilmente un lugar dentro de este esquema.

Galtieri, que conspiró contra Viola desde antes de que éste fuese designado presidente, divisó en este cambio una enorme avenida de oportunidades políticas. Tomando como referencia el respaldo que Argentina había brindado al golpe de Estado boliviano del general Luis García Meza en 1980, Galtieri se trasladó a Washington para poner la experiencia de la lucha antsubversiva en el país a disposición de la represión a la insurgencia salvadoreña y ofrecer que militares argentinos entrenaran a los mercenarios de Washington que empezaban a armarse contra el gobierno sandinista de Nicaragua. La administración Reagan, que encontraba en ese momento fuertes resistencias en el

Congreso para su política de intervención en América Central, recibió a Galtieri como un regalo del cielo, y el secretario de Defensa Caspar Weinberger llegó incluso a decir que Galtieri le parecía «un general majestuoso».

Viola, que en 1980 todavía era el eje de las expectativas civiles de cambio, iría gastando aceleradamente su capital político en el deseo de permanecer. Como ministro de Economía designó a Lorenzo Sigaut, quien suprimió el retraso cambiario y sinceró brutalmente las condiciones de inserción internacional de la Argentina. El paraíso de Martínez de Hoz terminó de desvanecerse, y éste fue uno de los motivos que determinaron el reemplazo de Viola por Galtieri en diciembre de 1981.

## Ocho

Massera, que entre 1976 y 1980 había apostado con variable consistencia a la derecha, dio en 1981 un golpe de timón y empezó a expresar posiciones sospechosamente izquierdistas. Su viraje respondía en parte al veloz avance de Galtieri —que ya ocupaba por trayectoria y por derecho propio el lugar de la derecha militar, y que también había ensayado líneas de crítica contra el experimento económico neoliberal de Martínez de Hoz—, y en parte a la evolución democrática que mostraba la sociedad civil. Con la derecha ya ocupada, Massera tenía que desplazarse a la izquierda, porque de lo contrario terminaría subordinado a los movimientos del ascendente comandante del Ejército. Con el poder cada vez más en manos de un duro, el almirante retirado podía desempeñar por fin el papel de interlocutor militar amable de la sociedad civil para el que se había preparado durante años. La apuesta consistía en que el «duro» entrara en crisis y Massera pudiera ofrecerse entonces como alternativa de transición.

La situación, sin embargo, planteaba un problema inédito: la posición de Massera se alejaba de la Armada como institución cogobernante, ya que ésta no podía aparecer acompañando al ex comandante en su creciente oposición a la intención del régimen de perpetuarse sin quedar ella misma fuera del Proceso. Al mismo tiempo, Massera no podía acompañar las posiciones de la Armada sin quedar maniatado por el compromiso de ésta con la Junta Militar: tenía que desarrollar una política de diferenciación que en determinados momentos lo situaba en la vereda opuesta a la del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y debía pues, enfrentarse a su arma y al Proceso para después reabsorberlos, lo cual no le resultaría nada fácil. Una de las dificultades era que sectores de la Armada habían comenzado a desplegar una política relativamente independiente de la de Massera, y tenían agendas políticas propias. El personaje más destacado dentro de esta corriente era el vicealmirante Jorge Isaac Anaya, jefe del Estado Mayor General de la Armada, quien canjearía su apoyo al golpe de Galtieri de diciembre de 1981 por la promesa de que el gobierno emprendería de una vez por todas la recuperación de las Islas Malvinas.

El primer choque entre el ex comandante y la Armada se produjo en julio de 1981. Massera acababa de volver de un viaje a Rumania, para encontrarse con que el gobierno había dispuesto clausurar el semanario *Cambio*, que él editaba junto con otros colaboradores del recientemente fundado Partido para la Democracia Social. Convocó entonces a una conferencia de prensa, donde dijo:

El gobierno parece creer que prohibiendo que se hable de los males que sufre el país, automáticamente van a desaparecer esos males (^)

El gobierno debió haber utilizado la vía judicial si consideraba injurioso o falso algún artículo de la revista. Pero el gobierno sabe que era difícil obtener un fallo favorable y optó por el camino más fácil: un decreto de clausura, y evidentemente todo solucionado, y una voz menos para denunciar los errores que día a día se manifiestan.

A nosotros esto nos afecta, pero muy levemente. El resultado es que *Cambio* va a seguir en su mismo tono, cuando vuelva a tener oportunidad de salir nuevamente a la calle.

La clausura me dolió como argentino. Con esta acción se dañó al Proceso, al gobierno y finalmente se dañó al país, porque, al tomar esta medida, el gobierno apareció ante los ojos del mundo más ocupado en silenciar a sus críticos que en resolver los problemas por los cuales es criticado.

La situación de la Argentina se parece a la de un edificio deteriorado en donde el que dirige el consorcio oculta a los vecinos este deterioro, quiere impedir que se hable del tema y entonces el riesgo de derrumbe, aumenta.

Simultáneamente, el almirante Armando Lambruschini, guiado por su propia necesidad de permanecer en el gobierno, firmaba una orden de arresto por diez días para Massera, la cual le fue comunicada al ex comandante en sus oficinas de la calle Cerrito por el vicealmirante Anaya. La pena se cumpliría en el Arsenal Naval de Azul, la misma unidad de la que recientemente había sido liberada Isabel Perón.

El ex comandante dispuso en esta ocasión de partidarios insólitos. El Departamento de Estado norteamericano sostuvo que la detención del almirante retirado era un asunto interno argentino, pero criticó la suspensión de *Cambio* y declaró: «Nosotros apoyamos vigorosamente el principio de la libertad de prensa en todos los países, y nos oponemos a cualquier violación de estos derechos». Y el diario *The Buenos Aires Herald*, tradicional antagonista de Massera, publicó un editorial criticando la medida bajo el título «El silencio no es salud».

Massera estaba exultante, y se trasladó a la prisión de Azul con la misma alegría que si estuviera yéndose de vacaciones. El arresto no sólo amplificaba inmensamente su predicamento, sino que le permitía constituirse al fin en enemigo visible y simultáneamente invulnerable de la Junta Militar, justamente el rol que quería desempeñar ante la sociedad civil. Y, desde un punto de vista estrictamente periodístico, la suspensión de *Cambio* prácticamente garantizaba que el próximo número de la revista se agotaría apenas llegara a los quioscos.

Sin embargo, comenzaba a cernirse una sombra sobre los proyectos de Massera. Dos meses antes la policía italiana había allanado el domicilio de Licio Gelli y encontrado una lista con los integrantes de la P-2, lo que determinó la apertura de

una investigación y la caída del gobierno. Gelli, prófugo, se había refugiado en la Argentina. Y sólo tres días después del arresto del almirante retirado, el ex dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly lo denunciaba como el miembro argentino más importante de la logia y reclamaba una investigación.

La denuncia de Kelly resultaba, por lo menos, sugestiva. Quien la formulaba había sido dirigente neofascista en las primeras épocas de Perón, y su evolución hacia la democracia, así como su profesión de periodista, eran recientes. Había nubes de sospecha en torno de él por el nivel y la calidad de la información de que disponía, mencionándose alternativamente su condición de agente de los servicios secretos israelíes, de la Embajada norteamericana en Buenos Aires y del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En cualquier caso, el momento que eligió para denunciar a Massera no parecía ser casual, y éste pensó que se originaba en sectores adversos del Ejército. Se trataba sólo del comienzo de un movimiento que iría creciendo con intensidad sostenida.

## Nueve

El 20 de agosto de 1981 hizo su presentación en sociedad el Movimiento Nacional para el Cambio, creado para respaldar políticamente al almirante Massera. La Mesa Coordinadora provisoria de la flamante organización, en cuyo nombre se había insertado la palabra «Cambio» para recordar al público la clausura de la publicación de Massera dos meses antes, constituía una colección de residuos y *has-beens*. Militaban allí el capitán de navío (RE) Juan Carlos Acosta (el ex «Tigre» de la ESMA); la ex diputada peronista Nélide de Miguel, el ex diputado socialista Jorge Selser, el ex diputado centroderechista Armando Molina Zavalía, la ex concejal peronista Dolores Ayerbe y el ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas Raúl Vivas. Massera, en un breve discurso, recordó como hitos del movimiento la revista *Cambio* y la promoción del futuro Partido para la Democracia Social, y dijo que el país atravesaba «una grave situación, con un presente sin luces y un futuro casi sin esperanzas». Sostuvo, entonces, que quería «una Nación de hombres libres, y nadie es libre si es analfabeto, o si lo que gana no le alcanza para vivir».

A lo largo de los meses siguientes, el ciudadano Massera profundizó su giro hacia la izquierda. Mientras Viola, y después Galtieri, cortejaban el aplauso fácil de los partidos provinciales de la «cría del Proceso» y se complicaban en difíciles esquemas de cogobiernos cívico militares en las instancias locales, ideados para lograr lo que llamaban la «complicidad» de los civiles con el gobierno, Massera se declaró ya en septiembre de 1981 «en un todo de acuerdo» con la convocatoria de la Multipartidaria y anunció la realización de reuniones con dirigentes del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Vale decir que, mientras Viola, Galtieri, el Ejército y la Marina se lo pasaban preguntándoles a sus espejos civiles cuál sería el gobierno de transición hacia la democracia más bello, Massera metía de lleno las manos en la incipiente política civil y entendía a la perfección que la fase militar del Proceso se estaba agotando. Ciertamente, Massera no llegó al extremo de pedir el ingreso de su escuálido Partido para la Democracia Social en la Multipartidaria; pero no lo hizo porque su verdadero propósito era emerger al final del Proceso como la figura salvadora, porque de todos modos carecía de legitimidad civil y porque su proyecto era todavía demasiado débil como para poder soportar un desplante. Al mismo tiempo manifestaba su voluntad de convertirse en presidente.

El golpe de Galtieri contra Viola terminó de consumarse en diciembre de 1981. *Convicción*, expresando la condición que había puesto el almirante Jorge Isaac Anaya, nuevo comandante en jefe de la Armada, para respaldar a Galtieri, reflató el tema Malvinas, con editoriales cada vez más agresivos contra la perpetuación del dominio colonial británico.

Massera prefería permanecer al margen, en parte porque el proyecto no lo incluía; en parte porque un éxito podía garantizar la continuidad del gobierno militar, y en parte porque consideraba a Anaya un psicótico (la obsesividad y el fanatismo ciego del nuevo comandante, un hombre capaz de bombardear un pesquero búlgaro y volver a su base exultante como si hubiera consumado el desembarco de Normandía, serían materia de abundantes comentarios en los mandos navales).

Massera, tras el golpe de Galtieri, comenzó a calcular sus movimientos casi al milímetro. Al comenzar 1982 reveló a la prensa que, cuando era integrante de la Junta Militar, había reclamado la publicación de la lista de los desaparecidos en la lucha contra la subversión y su propuesta había sido vetada por la Junta. El almirante Anaya dispuso entonces aplicarle otros diez días de arresto y envió a dos oficiales a detenerlo en su domicilio. Massera, cuyos hombres de confianza habían avisado oportunamente a la prensa del episodio, salió de su domicilio en la zona aristocrática del barrio de Belgrano vistiendo uno de sus impecables trajes azules, y manejó publicitariamente el momento de su detención, saludando a los curiosos, agitando los brazos e incluso estrechando algunas manos.

Viéndolo, no hubiera podido adivinarse si iba preso o salía en campaña electoral.

## Diez

Durante el primer trimestre del año, el gobierno ajustó los detalles del plan de recuperación de las Malvinas. Inicialmente, el proyecto no contemplaba una verdadera reconquista, sino simplemente el desembarco y la detención de la insignificante guarnición británica, su reemplazo por una igualmente insignificante guarnición argentina, el retiro de las naves invasoras del continente y el replanteo de las negociaciones en las Naciones Unidas desde una posición de fuerza. La opinión de Massera seguía siendo prescindente respecto del tema, lo cual puede deducirse claramente de la actitud de Hugo Ezequiel Lezama, que como director de *Convicción* dependía institucionalmente de los fondos de los aliados de la Armada, pero políticamente estaba embanderado con Massera. Un vicealmirante en actividad lo visitó a fines del mes de marzo en el diario y le dijo, radiante:

—El almirante Anaya me manda decirle que espera que el próximo 2 de abril usted se encuentre aquí, en su posición de mando.

Lezama contestó con displicencia.

—El 2 de abril yo voy a estar en Pinamar.

Y cumplió con lo dicho.

La orientación del nuevo gobierno era claramente ultraderechista y pro norteamericana. A través del ultraderechismo se manifestaba la intención del Proceso de perpetuarse hasta el infinito, mientras el pro norteamericanismo era la carta que jugaba Galtieri para que el ultraderechismo se sostuviera. Como para aventar cualquier duda respecto de sus intenciones, apenas llegado al poder Galtieri pidió el retiro de los generales José Rogelio Villarreal, Antonio Bussi y Reynaldo Bignone, que aparecían como jefes proclives al diálogo político, y pronunció su famosa frase sobre las elecciones: «Las urnas están bien guardadas». Pese a su profesión de fe nacionalista, Galtieri designó en su gabinete a figuras características del *establishment* argentino, incluyendo a Nicanor Costa Méndez como canciller y a Roberto Alemann como ministro de Economía. El gobierno sería autoritario en política interna, neoliberal en política económica y fuertemente pro norteamericano en política exterior, el único punto en que se diferenciaría netamente de cualquier predecesor. A lo largo de los primeros meses se consideró el retiro de Argentina del Movimiento de los Países No Alineados, mientras se enviaban decenas de asesores en lucha antisubversiva a El Salvador y se aceleraba la colaboración con los contrarrevolucionarios de Nicaragua.

Unos días antes de la invasión a Malvinas, Buenos Aires fue escenario de la



manifestación popular opositora más importante en seis años de dictadura militar. Alrededor de 15.000 trabajadores intentaron converger sobre la Plaza de Mayo con las banderas de la Confederación General del Trabajo y fueron reprimidos con gases, bastonazos, tiros al aire y camiones hidrantes por un dispositivo de 1.000 policías. La manifestación tuvo su correlato en otras provincias, y en Mendoza fue muerto un obrero. La secuencia de los hechos sugirió a la mayoría de los analistas una relación de causa a efecto, donde el desembarco en las islas el 2 de abril habría sido la «fuga hacia adelante» del régimen ante el atolladero interno. Sin embargo, los integrantes del régimen no se sentían para nada en un atolladero: las manifestaciones del 30 de marzo se registraron en su conciencia como un mero incremento cuantitativo de la disconformidad, que no ponía en peligro al gobierno, y los planes de desembarco del 2 de abril habían sido pactados meses antes. Justamente, la naturaleza ultraderechista y los planes de invasión a Malvinas de un gobierno que después de todo tenía sólo tres meses, daban la pauta de la seguridad en sí mismo de un régimen que creía que la autoperpetuación era posible, más allá de lo que pensara la sociedad civil, solamente con apoyo norteamericano, alta represión interna y convocatorias a imaginarios heroicos como el de Malvinas. A juicio de los militares, la secuencia desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril no hacía más que probar la volubilidad de la opinión de las masas: un día estaban en la plaza para condenarlos; tres días después volvían para aclamarlos. Nada estaba en juego.

Vale la pena detenerse en el problema, porque la invasión de Malvinas es un epifenómeno ideológico de las posiciones duras desarrolladas por Massera durante sus años de cogobierno. Los militares habían escuchado el reclamo de democratización de las clases dominantes, los partidos políticos y la sociedad civil, pero habían creído que podrían ignorar a estos sectores por el mero hecho de detentar las armas. Se habían acostumbrado a imaginarse como el poder real hasta tal punto que descartaban por completo que nadie pudiera desalojarlos del gobierno, ya que no existía ningún actor que estuviera tan bien armado y pertrechado como ellos. Como giraban en un vacío social, vivían en un microclima protegido donde eran posibles las representaciones más fantásticas de la realidad, y donde los delirios paranoicos de los servicios de inteligencia militar eran recibidos como análisis serios por su auditorio interno. Incapaces de inspirarse en la lucha ya terminada contra la subversión, perseguían entonces una razón de ser en imaginarse como la vanguardia armada de Occidente, por más que el mismo concepto de Occidente les era confuso en sus mentes y materialmente se identificara con la «masa amorfa de consumidores compulsivos» de los Estados Unidos y con el Papa que había detenido la toma de las tres islas del Beagle en la Navidad de 1978. Y como también necesitaban un gran motivo de legitimidad histórica, pensaban que nada podía ser mejor que la recuperación de las Malvinas, cuya argentinidad ya era enseñada a los niños en la escuela primaria, y que constituían una suerte de abstracto símbolo condensado de la impotencia nacional. Los militares, en sustitución primero de los civiles, luego del Estado y por último de las clases dominantes, terminaban definiendo su misión histórica como la reconquista

de un inhóspito y frío espacio territorial, porque ese espacio representaba un fetiche y una coartada contra la cual nadie podría decir nada. Hasta Roberto Alemann, que en el gabinete de Galtieri representaba el enlace con los capitales internacionales y con Gran Bretaña, diría en los primeros días del conflicto que oponerse a la operación estaba totalmente fuera de cuestión, y un chiste de la época diría que las clases dominantes argentinas no temían tanto un desembarco inglés en las Malvinas como un desembarco argentino en el Ministerio de Economía. Las Malvinas eran la *ultima ratio* de movilización militar posible ante una sociedad que comenzaba a despreciar al régimen, y la apelación final ante una crisis de legitimidad que comenzaba a insinuarse.

Con todo, cuando el 2 de abril las fuerzas argentinas desembarcaron en las islas, los planes elaborados durante varios meses sufrieron una importante modificación. Justamente porque el gobierno giraba en un vacío social y porque comenzaba a insinuarse una crisis de legitimidad, la imponente manifestación popular realizada en la Plaza de Mayo a favor de la reconquista impresionó vivamente al general Galtieri y sus colegas de la Junta. Y justamente porque vivían en un microclima ideológico enrarecido, donde las especulaciones primitivas y autorreferentes de los servicios de informaciones sustituían la consideración tranquila de las auténticas relaciones de fuerza en el mundo, los militares pensaron que la permanencia en las islas de un gran dispositivo era posible, que la decadente Inglaterra no iba a cruzar el Atlántico para defender las «Falkland» y que los Estados

Unidos no iban a sacrificar su alianza anticomunista panamericana con Argentina para sacar del brette a una Gran Bretaña en declinación. Tratándose de militares, era curioso que no juzgaran a los protagonistas de la guerra en virtud de sus contenidos estratégicos y materiales, sino por grados de intensidad ideológica: a mayor anticomunismo, mayor apoyo de los Estados Unidos. La Junta Militar pagaba con su caracterización irreal de la situación el pecado de soberbia en que había incurrido al pretender aislarse de los verdaderos factores de poder. La irrealidad de sus análisis traducía la ilegitimidad de su dominio.

Massera permaneció cuidadosamente al margen de la euforia propagandística por el territorio conquistado. Jamás había sido afecto a subirse a los carros triunfales de los otros. Sus declaraciones sobre el tema mantuvieron un tono generalmente circunspecto y optó por permanecer en Buenos Aires mientras militares, políticos, intelectuales y hasta miembros de la farándula viajaban en masa a las Malvinas. Íntimamente, temía por el resultado de la aventura y no tenía la menor ilusión autocomplaciente con respecto a la pasividad británica y al apoyo de los Estados Unidos a la Argentina. Sus anteriores exhortaciones a la solución militar de los problemas del Beagle y las Malvinas, sobre cuyo resultado último nunca dejó de albergar la mayor de las ambigüedades, habían sido principalmente fintas políticas. Además, la situación creada en el país espantaba un poco a su instinto conservador,

porque no sabía si era la Junta la que espoleaba el entusiasmo popular o si era el entusiasmo popular el que espoleaba a la Junta. Quizá Galtieri, con el objeto de reforzarse, había convocado fuerzas que después no podría controlar.

El desarrollo del conflicto iría probando gradualmente la corrección de estos análisis. Cuando los Estados Unidos abandonaron su neutralidad y tomaron partido por Gran Bretaña, la Junta Militar amenazó con buscar el apoyo militar de la URSS, y el canciller Costa Méndez se confundió en un abrazo con el líder cubano Fidel Castro. El régimen comenzaba a perder la última de las legitimidades de que disponía, la ideológica. Y, como la guerra era imposible de ganar en la relación de fuerzas predominante, cada día aproximaba un poco más el espectro del colapso mortal del Proceso de Reorganización Nacional.

## Once

La guerra de Malvinas ha sido tratada demasiado extensamente en múltiples trabajos; es ocioso que insistamos aquí con un relato pormenorizado, tanto más cuando el papel de Massera en el conflicto propiamente dicho resultó absolutamente marginal. Optamos, en lugar de eso, por proceder a una descomposición analítica de sus aspectos más relevantes y pertinentes a nuestro tema:

\* *El desempeño de la Marina como la línea dura de la guerra dentro de la Junta Militar.* Cada iniciativa negociadora avanzada por las mediaciones de los Estados Unidos y Perú era sistemáticamente rechazada por el almirante Anaya, quien además insistió en ampliar su obstruccionismo a las negociaciones de menor nivel que se desarrollaban en el marco de las Naciones Unidas. El dato significa que, en un conflicto donde el verdadero debate consistía en la perpetuación del gobierno militar más allá del deseo y de la voluntad de las clases económicamente dominantes y políticamente dirigentes, el arma más «independentista» resultaba ser la más aislada, cerrada, elitista y aristocratizante de las tres. La atmósfera de microclima ideológico era más densa en el seno de la Marina, porque seguía siendo la más aislada de las tres, lo que hacía juego con el desequilibrio personal del almirante Anaya. Así se explica que la fuerza históricamente más identificada con Gran Bretaña haya terminado siendo la más «anticolonialista» y «antibritánica» en retórica, posiciones e ideología.

\* *El desempeño de la Marina como el arma militarmente más ausente del teatro de operaciones.* A partir del hundimiento por fuerzas británicas del crucero argentino *General Belgrano*, el Consejo de Almirantes de la Armada decidió retirar todos sus buques de la zona de conflicto y dejar la guerra fundamentalmente en manos del Ejército y la Fuerza Aérea. El almirantazgo temía antes que nada a los submarinos nucleares británicos, y no estaba dispuesto a seguir al almirante Anaya hasta sus últimas instancias si esto implicaba la destrucción de la flota de mar. Con lo que se prueba la descomposición del mando naval y la completa desarticulación de su estrategia política: impulsaban en el gobierno unas operaciones que luego no estaban dispuestos a solventar en la práctica. Hay un segundo nivel de explicación: la formación pro británica de la Armada, que en algún punto de la conciencia naval debe haber entrado en violento cortocircuito con lo que se impulsaba en la práctica. El almirantazgo quería la perpetuación indefinida de la Junta en el poder y por eso apoyaba la intransigencia obstruccionista del almirante Anaya en las negociaciones, pero al mismo tiempo era consciente de que la guerra práctica hacía saltar a la Argentina y a la Armada del mapa de Occidente y llevaba a situaciones donde el instinto naval se contraía de repugnancia y de pánico: los saludos del general Galtieri a la multitud reunida en Plaza de Mayo como en un curioso *revival* de los procedimientos litúrgico-simbólicos del peronismo; el abrazo entre Nicanor Costa

Méndez y Fidel Castro, así como el cortejo activo de la «hermandad latinoamericana» y el Movimiento de Países no Alineados, a los que sólo hacía tres meses se había agredido y despreciado; los llamados crecientes dentro del Ejército y la sociedad civil hacia una alianza con la Unión Soviética, que amenazaba provocar la ruptura de la unidad capitalista del hemisferio más grande de que se hubiera tenido noticia en décadas, y la perspectiva de que la subversión, derrotada en el terreno militar, obtuviera una curiosa victoria política final, con el general Galtieri expresando las posiciones de Montoneros y del ERP.

\* *Las vacilaciones dentro del equipo militar gobernante con respecto a la conveniencia de solicitar una intervención soviética.* Una solicitud semejante era problemática en sí misma: la URSS burocrática de la época de la Alta Guerra Fría seguramente no hubiera puesto en peligro el equilibrio nuclear disuasivo para salvar a la Junta argentina de sus propias tonterías, y la tecnología militar difícilmente podría reemplazarse con éxito por otra completamente distinta durante el período más crítico de un conflicto. Sin embargo, el dato era indicativo del grado de autonomía que el gobierno había llegado a tener con respecto a sus clases dominantes: la perpetuación de la Junta había requerido que se atacara al principal aliado de los Estados Unidos en Europa, y ahora parecía empezar a exigir que la Argentina pasara a convertirse en una suerte de *outpost* latinoamericano del Pacto de Varsovia. No era lo que los militares querían, pero sí la dirección en que los acontecimientos los llevaban, y sólo en su reluctancia última a atacar el capital financiero y las bases de poder económico del capital transnacional en la Argentina permitía que ese impulso y esas tendencias se expresaran en una metaforma puramente militar.

\* *El papel decisivo de la intervención del Papa.* La visita de Juan Pablo II a Buenos Aires constituyó uno de los diques más importantes para contener el deseo de Galtieri de solicitar la intervención soviética. Como durante la crisis del Beagle, el Papa actuó en esta oportunidad en calidad de «partido de la paz». Sin legitimidad interna, respaldo norteamericano ni propuestas claras por parte de Galtieri, el catolicismo se convirtió en la *ultima ratio* ideológica de la Junta para impedir que la Argentina saltara de Occidente. Al mismo tiempo, el Papa constituyó el tranquilizador y disuasor más eficaz de la opinión pública argentina ante la guerra, fue el enviado de Occidente en momentos en que sus jefes materiales habían perdido toda influencia. Juan Pablo II intentó contrapesar su posición con un ofrecimiento que la Junta Militar desaprovechó: una visita personal a las Malvinas para detener la guerra y frenar así la aplastante contraofensiva británica. Los avatares de este episodio son interesantes por lo que ponen al descubierto sobre las actitudes predominantes en la Junta de Comandantes.

La perspectiva de un viaje del Papa al escenario de combate había sido barajada primero por el nuncio apostólico, monseñor Calabresi. Juan Pablo II, un pontífice muy proclive a los gestos espectaculares, se había sentido atraído por la

idea, y sólo había requerido que su viaje a las Malvinas respondiera a una invitación de Galtieri y la Junta. Calabresi informó a Galtieri y a la Junta que el Papa estaba dispuesto a viajar al teatro de operaciones si el gobierno se lo pedía. Los triunviros reaccionaron con desconfianza, en parte porque recordaban el papel del Papa al detener la guerra con Chile en la Navidad de 1978, y en parte porque habían comenzado a creerse la propia propaganda de triunfos fulminantes contra Gran Bretaña que difundían generosamente en la prensa servil de la época. Las comunicaciones entre Buenos Aires y el teatro de guerra se reducían en la práctica a los informes del general Mario Menéndez, designado gobernador de las Malvinas, y al Estado Mayor Conjunto. El caos informativo era tan grande que en un momento un alto oficial de la Marina se comunicó telefónicamente con el corresponsal de una agencia del bloque del Este para preguntarle, algo estrambóticamente, qué información le estaba llegando por «el satélite», como si el corresponsal hubiera dispuesto de un satélite propio.

Juan Pablo II mantuvo su oferta de viajar hasta último momento. Al despedirse de Galtieri en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Papa inquirió al general:

—¿No hay nada que desee pedirme?

Galtieri vaciló, pensó, y luego pidió, con el rostro súbitamente iluminado:

—Su bendición, Su Santidad.

—¿No hay nada más que desee pedirme? —volvió a preguntar Juan Pablo II, tras haber satisfecho el pedido.

—Otra bendición, Su Santidad —respondió el general.

El Papa lo bendijo por segunda vez y subió al avión. Galtieri había desaprovechado la última oportunidad: mientras el avión papal despegaba del aeropuerto de Buenos Aires, las fuerzas británicas se aprestaban a la ofensiva final para la reconquista de las islas.

## Doce

La caída de las Malvinas fue fulminante, y equivalió prácticamente al desmoronamiento de la dictadura militar. Un dato particularmente dañino para la Marina de Guerra fue la difusión de la fotografía de la ceremonia en que el teniente de navío Alfredo Astiz, designado gobernador militar en las islas Georgias, firmaba su rendición ante los ingleses con un vaso de whisky escocés en la mano, mientras en Buenos Aires se insistía en relatar la heroica resistencia de las tropas argentinas a la contraofensiva británica. Astiz, que en la Navidad de 1978 había ardidado en deseos de tomar las islas del Canal de Beagle, se comportaba en las Georgias como un hombre descompuesto y derrotado de antemano. Las cosas se le complicaron todavía más cuando la fotografía dio la vuelta al mundo y el gobierno de Suecia y la Interpol descubrieron que era el mismo hombre que ellos buscaban por el asesinato de Dagmar Hagelin.

La caída de Galtieri se produjo de manera indolora y banal. Un último intento de perpetuar la dictadura militar sobre la base del nacionalismo malvinista, que corrió por cuenta del brigadier general Basilio Lami Dozo, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y único actor militar significativo en el conflicto, se desmoronó ante la oposición del Ejército y la Marina y provocó el pase a retiro de Lami Dozo. El aparato militar argentino todavía no terminaba de asimilar el impacto de la derrota sufrida, y sólo iría orientándose hacia la liquidación del gobierno por la propia presión de los acontecimientos. Como comandante del Ejército asumió el general Cristino Nicolaidis, un militar de la línea dura antsubversiva que se había hecho conocer por su famosa afirmación de que «el marxismo ha estado atacando a la humanidad desde 500 años antes de Jesucristo». El presidente designado fue el general de división (RE) Reynaldo Bignone, quien había sido purgado por Galtieri durante su arremetida última de finales de 1981 contra los cuadros remanentes de la etapa político- militar hegemónizada por Videla y Viola.

La escasez de luces de Bignone y la desorientación política del gobierno se pueden colegir de un diálogo que el nuevo presidente mantuvo en la época con un importante interlocutor civil. El general Bignone había convocado a su despacho a Hugo Ezequiel Lezama, quien seguía dirigiendo lo que quedaba del matutino *Convicción*. Al comienzo de la conversación, el Presidente le propuso a Lezama que se convirtiera en su portavoz. El periodista rechazó amablemente la oferta y le propuso un nombre alternativo, que el general aceptó. La conversación se orientó entonces hacia la situación en que la derrota de las Malvinas había dejado al gobierno y tocó el discurso por televisión y radio que Bignone tenía que pronunciar sobre el tema momentos después. El general estaba entre indignado y triunfal. Agitando una carpeta, le dijo a Lezama:

—Yo no sé por qué hinchan tanto las bolas con las Malvinas; las Malvinas de aquí, las Malvinas de allá. Pero yo tengo los datos, los hice averiguar, y los voy a cagar.

—¿Qué datos hizo averiguar, general? —preguntó Lezama.

—Los datos de los accidentes de tráfico —contestó Bignone—. Mire Lezama: en las Malvinas murieron menos personas que en los accidentes de tráfico en la Argentina en todo un año. Así que no nos vengán a correr con los muertos de las Malvinas.

—¿Y eso va a decir, general? —se asombró Lezama.

—Sí, sí. Ahora mismo lo voy a decir, por televisión y radio, para que se dejen de hinchar.

—General, por favor, no lo haga —suplicó el periodista.

—¿Pero por qué no, si es cierto?

Lezama pasó un momento difícil intentando persuadir a Bignone de que su idea no era tan brillante, y sólo abandonó el despacho presidencial cuando el general se comprometió solemnemente a no hablar de los accidentes de tráfico durante su discurso por televisión y radio.

La actitud de Massera frente a la derrota de las Malvinas fue característicamente navalista: insinuó en que había que juzgar a los hombres pero debía preservarse el honor de las instituciones militares. Y emitió un comunicado que decía:

Así como les he dicho muchas veces a los militares: «¡Guardémonos de humillar a los partidos políticos!», les digo hoy a todos los habitantes de la República: «¡Guardémonos de humillar a las Fuerzas Armadas!»

Consideraremos un traidor a aquel que, habiendo aplaudido emocionado la victoria, anda hoy disfrazando de sensatez su derrotismo y su flojera. ¿Quién es el vil que piensa que no nos importan nuestros muertos? ¿Quién es el vil que piensa que no lloramos a nuestros heridos y a nuestros mutilados? Pero cuidado: que no sirvan esas emociones lacerantes para falsificar los valores. Gracias a Dios, hoy seguimos pensando que el bien supremo es la justicia y no la paz, porque no hay paz duradera sin justicia.

Massera, de esta manera, se ponía en el lugar teórico de jefe del partido de las Fuerzas Armadas, de su orientador ideológico y de quien les daba las directivas



necesarias para perpetuar de algún modo el gobierno y empalmarlo con la inevitable etapa civil. Naturalmente, el almirante retirado se imaginaba a sí mismo como el inevitable empalme, en un movimiento que completaría posteriormente con nuevas aproximaciones a Isabel Perón.

La realidad, sin embargo, corría más rápido que el ex comandante, y a medida que avanzaba el año la presión a favor de un desemboque civil se volvió más y más intensa. La propia Armada, herida y desgastada después de los ocho años de inusual protagonismo político y exposición a la sociedad civil a que la habían sometido Massera primero y Anaya después, comenzaba a replegarse sobre sí misma para curar sus heridas. El sucesor de Anaya al frente de la Marina fue el almirante Rubén Franco, un oficial básicamente profesionalista que tuvo a su cargo la decisión de retirar a la Marina del proceso político, en lo cual fue acompañada por la Fuerza Aérea. El Ejército quedó como protagonista unipersonal del gobierno, lo que no tenía tanto que ver con diferencias políticas entre las fuerzas como con la necesidad de la Armada y de la Fuerza Aérea de recomponer sus respectivos tejidos internos mediante un retorno a sus funciones estrictamente profesionales.

Massera, sin embargo, se resintió profundamente contra el almirante Franco y sus seguidores, a grado tal que en privado se refería a la nueva cúpula naval como «un puñado de nazis». Su arraigado egoísmo y su visión autorreferente de las cosas le impedían distinguir que en donde él veía traición e indiferencia solamente se expresaba un estado de necesidad.

## Trece

La caída en desgracia de Massera empezó a producirse paralelamente al desbaratamiento de la P- 2, el arresto de Licio Gelli en Italia, las confesiones del banquero italiano Michele Sindona en los Estados Unidos y el ahorcamiento en un puente de Londres de Roberto Calvi, titular del Banco Ambrosiano, la institución financiera vaticana asociada a la P-2. Massera jugaba en todo esto un rol absolutamente protagónico: no sólo era el principal cuadro de la P-2 en la Argentina sino además el principal enlace entre el Banco Ambrosiano y una serie de corporaciones fantasmales encargadas del suministro ilegal de armas a la dictadura militar, que desde 1977 había sufrido el embargo norteamericano y a partir de 1982 empezaría a soportar el mundial, como reacción a la aventura de las Malvinas.

El desmoronamiento de Massera fue un proceso extraordinariamente complejo, donde se combinaron los más diversos intereses, personajes y motivaciones políticas. El almirante retirado, para comenzar, tenía en su contra al Ejército, que ya había comenzado a detectar sus movimientos para convertirse en el heredero político del régimen mediante una alianza con el peronismo y buscaba impedir que el marino tuviera cualquier protagonismo político que lo situara en el centro de la escena. El ex comandante tenía también en su contra a los gobiernos de los Estados Unidos e Inglaterra, que lo veían como un agitador impredecible y peligroso y como el principal impulsor del nacionalismo malvinista. Al mismo tiempo también era repudiado por una parte importante de las clases dominantes argentinas, que no solamente veían en él a un demagogo dispuesto a reeditar bajo su firma el populismo peronista, sino también a un traidor y un aventurero que, entre otras cosas, había sido responsable de crímenes de esa burguesía como los cometidos con Fernando Branca y Elena Holmberg Lanusse. Massera arrastraba además el descrédito internacional por los crímenes de Dagmar Hagelin y las dos monjas francesas, cometidos en la época en que había sido comandante en jefe de la Armada. Y, por último, era uno de los jefes militares más detestados por los familiares de desaparecidos y por las asociaciones de defensa de los derechos humanos en Argentina, por el alto papel protagónico desempeñado en la época de la lucha contra la subversión. El dispositivo en su contra era gigantesco.

Massera, de esta manera, empezaría a caer precisamente por causa de aquello que lo había distinguido entre los líderes militares de su tiempo: por su absoluta inescrupulosidad, por sus transgresoras excursiones en la ilegalidad social, por los crímenes y atentados cometidos contra personajes del régimen y miembros del *establishment* económico, y por todo lo que había hecho, involuntariamente o no, para que la Argentina saltara del mapa de Occidente y desarrollara dos hipótesis de conflicto —el Beagle y las Malvinas— que pudieron haber interrumpido

decisivamente la continuidad del poder capitalista en el hemisferio occidental. Comenzó a caer por ser la expresión más alta, condensada y consumada del independentismo militar, por creer que las armas y el poder desnudo podían sustituir las verdaderas relaciones de poder en la Argentina y por haberse puesto innumerables veces al margen de la legitimidad y la legalidad socialmente aceptadas. La caída de Massera estuvo marcadamente organizada como una conspiración, pero esa conspiración tenía un alto componente de espontaneidad: la gente a la que había dejado a un costado del camino para llegar él a la cúspide se le presentaba ahora para cobrarle la cuenta. El momento no podía ser más inoportuno, porque el almirante retirado se disponía a jugar todas sus cartas al mismo tiempo para conquistar el poder presidencial de una vez por todas, lo que determinaría que este período de su vida asumiera la forma de una permanente fuga hacia adelante y del acto repetido de subir la apuesta ante cada nueva embestida de sus poderosos enemigos.

El primer signo de que las cosas venían mal se produjo en julio de 1981, cuando Roberto Calvi apareció ahorcado en un puente de Londres que sugestivamente estaba pintado con los colores celeste y blanco de la bandera argentina. El banquero había sido un importante contacto de Massera en las compras de armas durante los primeros años de la dictadura militar, y había sido con Calvi con quien Licio Gelli y Massera habían tejido el rearme naval y la construcción de una Armada que pudiera emprender guerras como las planteadas alrededor del Beagle y las Islas Malvinas. A esto había contribuido en una proporción importante la ideología latinista y antianglosajona de la P-2, que veía en el Vaticano al verdadero liderazgo de Occidente, justamente cuando el almirante derrochaba oratoria contra los Estados Unidos, sus cavernas de cristal y acero y sus masas amorfas de consumidores compulsivos. Massera interpretó la noticia del ahorcamiento de Calvi como una inequívoca venganza de los servicios británicos por las ventas de armas a la Argentina, y como el comienzo de una ofensiva que fatalmente terminaría involucrándolo, puesto que la Marina estaba implicada de manera casi institucional en el escándalo, a punto tal que el presidente del Banco Ambrosiano en la Argentina era el almirante retirado Carlos Guido Coda, predecesor de Massera en la jefatura de la Armada.

Otro signo de adversidad apareció bajo la forma de declaraciones del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien interrogado sobre las razones de la abultada deuda externa argentina, replicó en julio que «gracias a ese endeudamiento pudimos lanzarnos a la reconquista de las Malvinas». La frase encubría una amenaza apenas velada: la de revelar los entretelones de las compras de armas por parte de la dictadura militar en momentos en que algunos de sus exponentes más caracterizados comenzaban a ser perseguidos en Europa por sus vinculaciones con la logia P-2. Martínez de Hoz, hombre del capitalismo financiero internacional y empresario íntimamente ligado a Gran Bretaña, proseguía de este modo la «diplomacia secreta» que había desarrollado con Londres en la primera

época del Proceso, contradiciendo justamente las tendencias nacionalistas, agresivas e independentistas de las que Massera era el principal portavoz. Y éste sabía que debía esperar más ataques por parte de los integrantes del equipo económico de la época de Videla, simplemente porque ellos eran el Estado Mayor del *establishment* cuyas normas él había transgredido para desarrollar su política militar.

La conspiración contra el almirante retirado tuvo su dirección organizativa en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, el mismo que había investigado los casos de Hidalgo Solá y Elena Holmberg y disponía, por lo tanto, de información de primera agua sobre aquél. Sin embargo, el propio Batallón no estaba exento de las profundas divisiones que en ese momento cruzaban al Ejército, las cuales se centraban en el desenlace del Proceso y se expresaban en la existencia de dos corrientes. Una, de orientación nacionalista, imaginaba el desemboque civil bajo la forma de una alianza con el peronismo, y por lo tanto veía con cierta distante simpatía algunos de los movimientos políticos de Massera. La otra era liberal, se oponía a la alianza con el peronismo y buscaba la supervivencia de la institución a través de la reaproximación hacia los factores de poder clásicos de la Argentina: la burguesía, los partidos políticos y la relación de orbitación con las principales potencias capitalistas. Como el país había ido derrotado por una de esas potencias en la guerra de las Malvinas, y como la opinión antimilitar de la clase dominante se fue ensamblando con los impulsos de la propia sociedad civil, la relación de fuerzas dentro del Ejército experimentó modificaciones sucesivas a favor de la posición liberal. Esto no impidió, sin embargo, que la puja se siguiera verificando y se manifestara de un modo extraño en la actitud ambigua y por momentos esquizofrénica del Batallón 601.

A mediados de agosto de 1982 comenzaron a circular versiones que vinculaban a Massera con un episodio criminal ocurrido en mayo de 1981: el doble asesinato del ingeniero Mauricio Schoklender y su esposa, que había sido atribuido a los dos hijos del matrimonio. El ingeniero se desempeñaba como gerente general de la compañía Pittsburgh, que manejaba el tráfico de armas de la compañía alemana Thyssen-Hensche en Argentina y Chile. Schoklender había integrado desde 1971 una «Asociación Marítima Argentina» en la cual participaron almirantes, generales y miembros de la P-2 que después se desempeñarían como representantes del Banco Ambrosiano en Buenos Aires. Al morir Schoklender, Thyssen reclamó una suma importante en dólares que aquél habría depositado fuera de la Argentina, y que habría sido fruto del tráfico de armas. La versión a que nos referimos señalaba que el almirante habría sido defraudado en un soborno que había pactado con la Thyssen y con Schoklender para el abastecimiento de armas a la Marina: Massera habría insistido en cobrar su dinero en dólares, pero Schoklender sólo se habría mostrado dispuesto a pagar la suma en pesos argentinos, que en 1981 sufrieron una fuerte devaluación. La versión nunca pudo probarse, pero arrojó sobre Massera una nueva luz desfavorable en momentos en que las evidencias de otros casos empezaban a acumularse vertiginosamente en su contra.

El 3 de septiembre, el viejo equipo económico de Martínez de Hoz volvió al ataque. Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, difundió una «declaración pública» denunciando que podía ser objeto de un atentado, y responsabilizando en ese caso a Massera y al vicealmirante (RE) Carlos Alberto Lacoste, ex ministro de Bienestar Social. La declaración completa decía:

1. En febrero de 1978 denuncié públicamente el excesivo gasto en que se incurría con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol, cumpliendo de ese modo con mi responsabilidad como secretario de Estado de Hacienda. El tema ha vuelto a cobrar actualidad a raíz de un cálculo sobre lo que se habría gastado en estadios, otras inversiones y gastos de todo tipo, que llega a 520 millones de dólares, cifra que no puedo confirmar ni desmentir. El hecho de que se haya informado que el Campeonato Mundial de 1982, realizado en España, sólo habría insumido 150 millones de dólares y, evidentemente, el ambiente de politización que vive el país, han dado actualidad al tema, sin que yo lo promueva.

2. Se ha informado que el Presidente de la Nación ha ordenado la publicación de las cuentas del Mundial '78. Al mismo tiempo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ha tomado cartas en el asunto. Por lo tanto yo he resuelto no hablar más sobre el tema, a la espera de la información oficial. No obstante tengo motivos para temer un atentado contra mi persona, del cual hago responsable desde ya al vicealmirante (RE) Carlos Alberto Lacoste y al almirante (RE) Emilio Eduardo Massera.

3. El 21 de junio de 1978, a las 20.40, en el momento preciso del cuarto gol del equipo argentino al de Perú, es decir, cuando la Argentina se clasificaba para la rueda final del Mundial, explotó una poderosa bomba en mi casa, que alguien había dejado allí minutos antes junto a la ventana que da a la calle. La relación de la bomba con mis exposiciones sobre el Mundial está clara: de lo contrario, los que la pusieron o mandaron poner no hubiesen buscado ese momento preciso. Me pregunto: ¿Quién pudo tener el suficiente conocimiento de la materia como para tener cierta seguridad de que la Argentina metería no menos de cuatro goles al Perú? (lo que no es habitual). ¿Quién tenía entonces suficiente impunidad como para atreverse a poner una bomba a pocos metros de una comisaría tan concurrida como la 33, en una calle de mucho tránsito, apenas iniciada la noche? ¿Quién podía tener interés en matarme o amedrentarme? No acuso; pregunto no más. Pero quisiera que las mismas preguntas también las formule el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y, en su momento, el Congreso Nacional.

4. Cuando aún era secretario de Estado de Hacienda recibí una fotocopia de una nota publicada en la revista *Interviú* del 19 al 25 de abril de 1979 (año 4, N° 153) donde un señor que dice haber realizado tareas poco dignas para la Armada Nacional

cuenta que «un día le ordenaron la misión de ejecutar al secretario de Hacienda, Juan Alemann<sup>^</sup>». Y agrega: «Nos negamos, porque la operación era suicida». De acuerdo a la época en que esto habría sucedido, la orden habría emanado del entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera. El autor de la nota en *Interviú* relata que a raíz de ese episodio tuvo que abandonar el país. Como el relato contiene muchos detalles que le dan visos de verosimilitud, entregué una copia al delegado de la Armada en el Ministerio de Economía, capitán de navío Lepera, para que me diera una explicación. Me dijo que había informado al comandante en jefe (almirante Lambruschini) y que el capitán Pita vendría a informarme. Éste pidió una audiencia, que le concedí de inmediato, pero luego la canceló y nunca más recibí información alguna. A buen entendedor, pocas palabras son buenas.

Estos antecedentes son los que me hacen pensar que debo adoptar las precauciones del caso. Solicito públicamente al excelentísimo señor presidente de la Nación, general de división (RE) Reynaldo Bignone, que ordene la investigación de estos episodios y, además, que ordene la disolución del microejército personal del almirante Massera, que excede en mucho lo que puede ser una custodia personal.

La embestida de Alemann fue rápida e insolentemente contestada por Massera. «Si estas declaraciones fueron hechas realmente por el señor Alemann, probarían que padece de una grave paranoia —dijo el almirante—. Carecen absolutamente de seriedad y de toda veracidad. Por el momento le sugiero al doctor Alemann, si ésos fueron los términos de su declaración, que recurra a la asistencia médica de algún profesional del Borda». También sostuvo que era «sencillamente ridícula» la acusación de Alemann sobre el «microejército» y dijo: «Sólo tengo dos hombres de custodia que me proporciona la Armada».

A partir de esto, la polémica entre los dos personajes escaló rápidamente. Alemann, aludiendo a Massera y Lacoste, dijo que «hice mi denuncia por mis experiencias anteriores con estos dos señores». Cuando se le informó que el almirante había dicho que su acusación carecía de seriedad, replicó: «Tiene total seriedad. ¿Qué le parece? ¿Una bomba en mi casa no es de seriedad?» Al mismo tiempo Massera iniciaba querrelas judiciales por «calumnia agravada» contra el ex secretario de Hacienda.

Alemann era consciente de que para detener la contraofensiva de Massera, que podía tomar la forma de nuevos atentados, necesitaba escalar y redoblar la magnitud de sus denuncias, que de ese modo obrarían como una suerte de seguro de vida al señalar el origen de la represalia posible. Cuarenta y ocho horas después de este intercambio, Alemann concedió un reportaje al diario *The Buenos Aires Herald* reclamando que se investigaran los asesinatos de Elena Holmberg y Héctor Hidalgo Solá:

El principal peligro es que todas estas muertes, que ocurrieron durante el período terrorista, se han mezclado en la misma olla, pero nosotros debemos distinguir la subversión —que fue una guerra— de otras cosas que no tienen nada que ver con la subversión^ Si ellos matan a un terrorista está bien, pero si ellos matan a Héctor Hidalgo Solá, embajador en Venezuela, en circunstancias que llevan a creer que no eran terroristas, esto tiene que ser investigado en profundidad. Lo mismo pasa con el asesinato de Elena Holmberg, que todo lleva a presumir que se trata de otra cosa. Esto debe ser investigado en profundidad también.

Alemann, de esta manera, actuaba manejando la información precisa de que disponían los órganos de inteligencia del Ejército sobre los crímenes de Massera, y al mismo tiempo vindicaba a su propia clase social contra la ilegalidad masseriana al enfocar sus dichos sobre dos claros personajes del *establishment*. También sostenía que Massera «no está actuando de buena fe» al pedir una investigación sobre la guerra antisubversiva, ya que «también él formó parte de la guerra contra la subversión» y, por lo tanto, «no puede ponerse en la otra vereda y deslindar la responsabilidad en otros».

Gregorio Jorge Dupont, que había permanecido largos años en silencio, se sumó entonces a la ofensiva. A través de un reportaje concedido a la agencia Noticias Argentinas, el diplomático reveló que pocos días antes de ser asesinada, Elena Holmberg le había dicho que Massera había entregado más de un millón de dólares al líder montonero Mario Firmenich. También sostuvo que la diplomática había revelado la misma información a varios compañeros de promoción, y aclaró que había entregado toda la información pertinente al juez Fernando Zavalía, que entendía en el caso Holmberg. Al mismo tiempo, Dupont entregaba al diario *The Buenos Aires Herald* un documento lacrado para ser publicado en caso de que muriera.

Massera contraatacó con una solicitada titulada «La estrategia de la insidia», cuyo texto decía:

En los últimos días se ha abatido sobre el país una campaña difamatoria destinada a terminar con los últimos restos de fe y de confianza pública que le quedan a los argentinos.

Con una sabiduría emanada del ejercicio del mal en estado puro, esta calumnia se sustenta en dos elementos primordiales que, armonizados, constituyen una fórmula muy eficaz: la corrupción y la muerte.

En esa calumnia la corrupción está protagonizada por una entidad extranjera —la logia Propaganda Dos— a la que con frágiles hilos se la trata de vincular con algunos argentinos notorios. Yo, por ejemplo.

La muerte recurre al tema de los desaparecidos en la guerra antiterrorista

librada en esta Nación, pero no como una globalidad —anónima a fuerza de ser numerosa— sino singularizada en dos personas concretas con nombre y apellido. Y por caminos oblicuos y alusivos que no configuran una acusación explícita, se involucra en los presuntos hechos criminales a algunos argentinos notorios. Yo, por ejemplo.

Toda esta difamación responde a la mejor técnica de la insidia: no afirmar nada y sugerir todo. Cuando la calumnia posee esa cualidad gaseosa es imposible destruirla por vía del razonamiento. El único campo apto para dar la batalla es la Justicia y a ella he recurrido.

Allí deberán probar o deberán desdecirse los acusadores. Ignoro qué refutación elegirán los otros argentinos destinatarios de la infamia. Desconozco qué actitud adoptará la Armada de la República, si es que decide contestar los agravios. Exijo sí, públicamente, que los poderes del Estado brinden una protección especial a los acusadores, para que ningún tropiezo les impida afrontar a la Justicia. Hay que proteger a los acusadores, sobre todo, hay que protegerlos de sus propios mandantes.

Quiero que conste que:

1. Asumo plenamente todas las responsabilidades de la Armada durante la guerra contra la subversión, mientras fui comandante en jefe de la Fuerza.
2. No he tenido la más mínima participación en la desaparición del embajador Héctor Hidalgo Solá y de la señorita Elena Holmberg.
3. No he pertenecido ni pertenezco a la Logia Propaganda Dos.

Quiero que conste, asimismo, que aun antes del veredicto distingo nítidamente dos clases de acusadores: aquel que habla engeguado por el inmenso dolor que significa la pérdida de un ser querido y aquel locutor insolente de la antinación. Expulsados del poder después de habernos llevado a la ruina moral y económica, los integrantes de la antinación no ahorrarán esfuerzos para neutralizarme física o éticamente. No por mí, sino porque a través de mí se expresa una multitudinaria necesidad de reconciliación, una voluntad de unión en libertad, de moderación y de solidaridad.

Siempre las peores guerras se desatan sobre los que quieren la paz.

Emilio Eduardo Massera

¿Los derechos humanos o el nacionalismo económico? ¿El liberalismo o el peronismo? La opción que Massera presentaba ante el único tribunal que le importaba, que era el de la opinión pública, elegía hacer descansar el peso de las



acusaciones contra él en el *establishment* económico y en Martínez de Hoz. Creía protegerse de las acusaciones por pura virtud de la identidad de los acusadores, como si la mera oposición de una clase social le bastara para construirse el respaldo de otra. Y como era consciente de que la clase en que buscaba respaldo también había sido herida por la guerra antisubversiva, insinuaba una justificación de los familiares de desaparecidos para negar toda entidad a las denuncias de Alemann. Todo ocurría dentro de textos, como intercambios de palabras, como si las relaciones de fuerzas sociales y políticas fueran puramente discursivas y como si la política misma fuera un ejercicio de estilo.

Al mismo tiempo, coherente con su concepción, Massera llevaba a cabo apariciones públicas como candidato que se parecían a la imagen caricaturesca que un oficial militar podía tener del mundo tradicional de la política civil en la Argentina: mitines con empanadas y vino, frases huecas y resonantes del orador, proselitismo entre sectores pobres. En una presentación en la provincia de Córdoba, Massera desgranó una sucesión de trivialidades perfectamente representativa del tono de su campaña: «La historia no la escriben las batallas, sino los hombres que libran o eluden las batallas. Yo quiero librar la batalla» (Aplausos de claqué). «La única ventaja que nos dejó Martínez de Hoz fue que destruyó todo. De modo que, ahora, los argentinos podemos elegir el rumbo que más nos guste». «Yo quiero achicar el Estado para poder agrandar al país». «No queremos un salario que se consuma en pocos días». «La rueda la tenemos que poner en marcha entre todos». A una mujer pobre con un niño en brazos, le dijo: «Así son las cosas, señora. Jesusito, que entre paréntesis es muy amigo mío, hizo el mundo así». Interrogado sobre Alemann, no vaciló: «Creo que está loco». Un periodista le hizo preguntas:

—Parece que usted va a ser uno de los candidatos a la presidencia de la República. Con sinceridad, señor, ¿qué resultados espera?

—Tengo toda la esperanza.

—¿Quiere decir que espera ganar?

—Sí. Espero ganar.

—Señor: un cálculo simple dice que usted no puede ganar si no recibe el apoyo de importantes sectores del peronismo. ¿Está logrando ese apoyo?

—Vengo de Trelew y Bahía Blanca. Vengo sorprendido por el entusiasmo de la gente. No esperaba tanto^

—¿Está logrando ese apoyo?

—Creo que sí. Estoy logrando ese apoyo. Y mucho más.

Se equivocaba.

## Catorce

Quien realmente estaba logrando apoyo era Gregorio Dupont, a quien la revelación de las declaraciones de Elena Holmberg le habían abierto la televisión y la radio oficiales en una magnitud inédita. Uno de los artículos más feroces contra Massera sobre el tema se publicó en la revista *Siete Días*, que en ese momento estaba intervenida por el gobierno por su situación de quiebra. Nadie podía dudar del respaldo que tenía Dupont en sectores del gobierno para proseguir con sus denuncias, pero los derechos humanos comenzaban a ganar hegemonía sobre el discurso del nacionalismo económico y la repulsa popular hacia la impunidad terrorista que emblemizaba Massera era tan alta que Dupont se convertiría en un personaje popular por derecho propio: los taxistas no le cobraban el viaje cuando lo reconocían y los medios de prensa, que seis años atrás le habían estado vedados como periodista, se le abrían ahora mágicamente y lo situaban en el papel de invitado y cortejado principal.

El 30 de septiembre desapareció Marcelo Dupont, dueño de una agencia de publicidad y hermano de Gregorio. A los pocos días, el cadáver apareció frente a un edificio en construcción en la calle Ocampo, en el barrio de Belgrano, desde lo alto del cual había caído. Autopsias sucesivas revelaron el estallido de los riñones, prolongados pases de corriente eléctrica, una quemadura en el codo izquierdo de un centímetro de profundidad por un centímetro de ancho y ocho golpes en el escroto. Los días previos a su desaparición, Marcelo Dupont había recibido insistentes amenazas telefónicas contra él y su familia, las cuales revelaban que los anónimos autores conocían cosas tales como el recorrido que el hijo de Marcelo hacía todos los días para ir a la escuela en bicicleta. El tiempo que pasó entre la desaparición de Dupont y la aparición de su cadáver fue escenario de un intento algo farsesco por parte de los servicios de inteligencia por establecer que el publicitario había partido rumbo a Brasil para escapar a una situación de convocatoria de acreedores de su empresa. Aparecieron testigos que dijeron haber visto a Dupont repartiendo tarjetas con su nombre a bordo de un ómnibus, y se simuló su vuelta en ferry a Buenos Aires. Gregorio Dupont supo más tarde de la existencia de un doble, que se les parecía a los dos extraordinariamente.

La desaparición y asesinato de Marcelo Dupont debió haber tenido el propósito de amedrentar a Gregorio Dupont y disuadirlo de proseguir la investigación, pero sirvió a la causa exactamente opuesta. Mientras velaban a Marcelo un personaje desconocido se acercó para estrechar la mano de Gregorio y decirle unas palabras. Se trataba de Raúl Carlos Ibarra, administrador del desaparecido empresario Fernando Branca, quien se ofrecía a colaborar en el desenmascaramiento de Massera. Gregorio Dupont lo citó para el día siguiente en el Jockey Club de Buenos

Aires, y le recomendó que se anduviera con cuidado. Ibarra llegó al Jockey a las 11 de la mañana y relató lo que tenía que relatar: la desaparición de Branca, la intervención de Marta Rodríguez McCormack, el amorío entre ésta y Massera, la carta falsa en el auto del empresario estacionado en el aeroparque, la aparición de un falso telegrama de Branca desde el exterior construido con fragmentos de un telegrama de felicitación por el casamiento de un hijo de Massera, la entrega de toda esta evidencia al almirante Massera y al capitán Invierno y el ininterrumpido silencio posterior. Gregorio Dupont escuchó todo, y le dijo a Ibarra:

—Sos boleta.

Ibarra estaba pálido. Su interlocutor le dijo que la única forma de garantizar su seguridad era conseguir inmediatamente un escribano público y grabar su declaración. Lo hicieron. Gregorio Dupont llevó entonces los testimonios y el denunciante al juez Pedro Narváiz, que entendía en ese momento en el caso Branca, reabierto por la madre del empresario y promovido por Guillermo Patricio Kelly desde la revista *Quórum* y a través de presentaciones judiciales. Coincidentemente, Narváiz entendía en ese momento también en el caso Schoklender, lo que resulta llamativo en vista del posterior destino del juez.

Transcurrieron cuatro días. Narváiz no citó a nadie. Gregorio Dupont volvió a visitarlo e insistió con sus denuncias. También lo visitó Fernando Zavalía, quien entendía en el caso Holmberg, prometiéndole nuevos testimonios. Sin embargo, no pudo cumplir con esa promesa porque el diplomático que tenía que atestiguar, que en ese momento se hallaba destinado en los Estados Unidos, sufrió un ataque de pánico y decidió olvidarlo todo. El activismo judicial de Dupont se completó con el juez Eduardo Gerome, que entendía en la causa por el asesinato de Marcelo y que le prometió que seguiría adelante con el caso aun cuando el gobierno pudiera caer.

Massera intentaba defenderse como podía, tratando de mantener al mismo tiempo su campaña de proselitismo político. Sostuvo, por ejemplo, que «el gobierno debe clarificar todo lo clarificable con relación al tema Malvinas, a la gestión de Martínez de Hoz y a los casos de Elena Holmberg, Hidalgo Solá y Marcelo Dupont». El problema era que todo esto subrayaba la participación de Massera en las desapariciones; la muerte de Marcelo Dupont, en particular, parecía desmentir que la afirmación del almirante de que debía publicarse la lista de desaparecidos tuviera la menor intención de que se conociera la verdad. Su situación se complicaba más con el complejo estado transicional por el cual atravesaba la Armada, que poco antes había decidido abandonar el gobierno junto con la Fuerza Aérea e intentar una recomposición profesionalista. El gobierno había quedado en manos del Ejército, que por otro lado no hablaba en modo alguno con una sola voz.

La posición de Massera se hacía crecientemente indefendible. Tenía que negar

su participación en la P-2, pero al mismo tiempo tenía que justificar que Licio Gelli hubiera sido funcionario del Proceso en la época en que Massera integraba la Junta. «Gelli prestó servicios de indudable mérito a la Argentina, más allá de sus problemas financieros — declaró al respecto —. Nos apoyó en la lucha contra la subversión, y nos apoyó en todo el manejo de la imagen argentina en el exterior.» Sin embargo, declinaba especificar cuáles habían sido esos servicios, «por razones de seguridad nacional». Al mismo tiempo, el ex comandante ensayaba un discurso económico de sesgo antiimperialista, pronunciándose en contra de la ayuda del Fondo Monetario Internacional y a favor de «renegociar los términos de la deuda formando un bloque con otros países de América Latina». También atacaba a «grupos paramilitares, pertenecientes al poder, que tratan de desestabilizar al gobierno, para perpetuar una situación militar que ya no tiene razón de ser».

Las contradicciones y escisiones en el discurso del almirante retirado denunciaban una modificación de las condiciones bajo las cuales ese discurso había sido pensado. Massera había construido para sí la imagen del transgresor en una situación de censura; una vez desaparecida esa situación, desaparecía el transgresor y aparecía este personaje que decía lo que todo el mundo decía y al mismo tiempo reconstruía la censura («razones de seguridad nacional», «lucha contra la subversión»), «imagen argentina en el exterior») sin la cual su personalidad resultaba sencillamente inverosímil. Massera estaba cada vez más fuera de época, y sólo le quedaban como puntos de referencia el temor de la corporación militar todavía dominante a que sus integrantes fueran sometidos a juicio por la lucha antisubversiva y su deseo de pactar una solución política con los civiles que inevitablemente los sucederían en el poder.

Gregorio Dupont proseguía su investigación, hablando con policías, militares y funcionarios judiciales y tratando de juntar testigos que pudieran aportar a las causas abiertas contra Massera. Sin embargo, pronto apareció una contradicción en la forma de crecientes testimonios de que el asesinato de Marcelo Dupont había sido ordenado por sectores del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército y no por la Marina. El diplomático consiguió averiguar que su hermano había estado retenido en la casa de un comisario policial dependiente del Batallón 601, y que al menos un sector de ese Batallón y del Ejército favorecían el pacto con el peronismo que Massera parecía querer impulsar y que la conjura antimasserista quería desbaratar. La corporación militar llegaba al fin de su gobierno del mismo modo que había caracterizado a todo el Proceso: cuando se producían disidencias, aparecían cadáveres.

La situación del almirante retirado también se volvía todavía más compleja porque la Marina ya no apoyaba a su ex comandante como un bloque, en tanto que las intervenciones políticas de éste eran motivo de incomodidad y desazón en los mandos navales. Al comenzar noviembre de 1982, el Comando en Jefe de la Armada volvió a sancionar a Massera con 20 días de arresto en Azul por sus declaraciones

sobre la lucha antissubversiva. La Marina quería mantener un perfil lo más bajo posible, lo que era frustrado por el creciente protagonismo político de aquél y la situación comprometida en que sus declaraciones, su personalidad y los procesos abiertos en su contra ponían a la institución naval.

La atmósfera comenzó a enrarecerse. Las amenazas iban y venían, y los procesos se demoraban. Súbitamente, el juez Pedro Narváiz decidió abandonar el país, ante reiteradas amenazas de muerte. El hecho de que Narváiz también estuviera interviniendo en el caso Schoklender, que en ese momento se había reabierto en función de espectaculares revelaciones de uno de los hijos del ingeniero asesinado, volvió particularmente ominosa la decisión del juez.

Gregorio Dupont decidió entonces dejar el país por un tiempo y tratar de juntar información en el exterior. Sin embargo, sus intentos de que la Comisión Internacional italiana que investigaba la P-2 le diera una fotocopia de la lista de integrantes argentinos resultaron infructuosos, como así también su paciente rastreo de otras huellas que el almirante pudiera haber dejado en Europa.

Volvía a ser el turno de Massera.

## Quince

El ciudadano Massera consagró su último acto político a utilizar la iniciativa recuperada y tratar de anudar los contactos para pactar una fórmula presidencial Massera-Isabel Perón. Por inverosímil que este intento pueda parecer en retrospectiva, en aquel momento constituía la última escenografía que la imaginación política podía crear para que Massera representase su viejo papel de transgresor de la censura, ya que Isabel Perón seguía políticamente inhabilitada por el régimen. Pero al mismo tiempo la ex presidente era, por herencia, la única figura de liderazgo simbólico políticamente legítima del peronismo, y por lo tanto la única que podía garantizar que se respetaría un eventual acuerdo para sepultar las investigaciones sobre la represión. Y como era inimaginable que Isabel, tras la catástrofe que había sido su gobierno, volviera a ser presidenta, Massera se adelantaba a garantizar la cuota de responsabilidad militar que el caso reclamaba, postulándose él como presidente.

La operación era muy difícil porque al almirante retirado sufría el rechazo precisamente de los dos sectores entre los cuales él quería ubicarse como puente: el peronismo y el Ejército. El peronismo, por más dispuesto que estuviera a suscribir un pacto tácito de gobernabilidad con las Fuerzas Armadas, rechazaba la entrada de Massera en su territorio político como la aparición de un intruso ilegítimo que intentaría usar al movimiento para sus propios fines; si había que pactar, era mejor que lo hicieran los propios peronistas, con un gobierno íntegramente peronista, acordando con previsibles generales del «Ejército nacional» y no con imprevisibles almirantes veleidosos y oportunistas de la «Marina gorila». El Ejército rechazaba al ex comandante de la Armada por razones exactamente opuestas: creía que la llegada al poder de un marino significaría la ruina de la institución castrense, y temía que Massera, con su probada inescrupulosidad política, dejara el Ejército a un costado del camino en aras de su deseo de convertirse en un nuevo Perón. Toleraba (porque no tenía otro remedio) que los peronistas participaran de las elecciones e incluso las ganaran, pero resistía todo intento de relanzar al peronismo como proyecto. Incluso para quienes menos resistían, la figura del almirante retirado era inaceptable y revulsiva, y solamente estaban dispuestos a aceptarla como último recurso.

Massera volvió a sus actos de equilibrista político. Mientras seguía reivindicando la lucha contra la subversión, reclamaba cada vez más fervientemente la lista de desaparecidos y la liquidación final del proyecto de Martínez de Hoz, e insistía en que esas dos posiciones suyas habían sido ya documentadas en 1978 en notificaciones secretas que había dejado sentadas como miembro de la Junta Militar. Cuando le preguntaban por qué se lo cuestionaba tanto y no ocurría lo mismo con sus viejos camaradas Videla y Agosti, respondía que era porque estos últimos no estaban

haciendo política. Además, se fue creando una línea de creciente frialdad y hostilidad entre Massera y la cúpula naval.

Massera estrenó una línea de antiimperialismo de centroderecha. El 16 de diciembre de 1982 hubo manifestaciones y disturbios en Buenos Aires, en los cuales murió un obrero. Massera emitió un comunicado que indirectamente acusaba a los Montoneros:

Un nuevo balazo se ha oído en la Argentina. Dalmiro Flores, sangre joven, sangre de trabajo, fue esta vez la víctima de un odio arbitrario, de un azar de violencia que quiere renacer en nuestro abatido país. Dalmiro Flores está con Dios. Pero el resto de los argentinos pareciera que estuviéramos dejados de la mano de Dios.

El jueves 16, miles de hombres y mujeres —entre ellos los integrantes de la Democracia Social— recorrieron pacíficamente las calles del centro reclamando un cambio^ Pero ese día también estaban en la calle los enemigos del pueblo, los Montoneros. Allí estaban con sus carteles negros como los emblemas de la muerte, intentando complicar a la gente, a la buena gente, en sus provocaciones irracionales y asesinas^ Sea quien fuere el homicida, lo cierto es que los misioneros de la violencia fueron los que cargaron los espíritus, los rearmaron, y mucho me temo que en la recámara de las almas, queden todavía balas sin usar.

La declaración antimontonera tenía dos sentidos: contrapesar la impresión causada por las revelaciones de Elena Holmberg sobre los pactos Massera-Firmenich, y al mismo tiempo tranquilizar a los sectores del Ejército que todavía temían que pudiera plantearse un resurgimiento de la guerrilla. A partir de allí, el discurso de Massera se volvía mucho más refinado, e intentaba establecer para sí mismo una filiación creíble con el peronismo y el Proceso para postularse como presidente:

Yo estaba en la Casa de Gobierno con el presidente Perón, ese día de junio de 1974 cuando los echó de la Plaza de Mayo. Yo los vi, con sus rostros desencajados, portando los mismos carteles, gritando las mismas consignas de muerte.

Yo la vi a Isabel Perón, tratando de retomar la bandera de la Nación para combatir a los enemigos de la vida, y vi, también, a muchos que se decían sus amigos, entorpeciendo, dificultando, fabricando errores que frustraron esas intenciones.

Y vi, después, el 24 de marzo de 1976, a la inmensa mayoría del país avalando su objetivo esencial de derrotar al terrorismo.

Al calor de estos recuerdos, les aseguro que me inquieta que la batalla militar contra la subversión que todos los argentinos libramos desde antes de 1976 y que ganamos a un altísimo costo, se torne hoy en una derrota política a causa de la acumulación de errores, torpezas y deshonestidades que se han registrado a lo largo



de estos últimos años.

¿Qué más podía pedirse de un candidato nacional?: el ataque al imperialismo norteamericano, que Massera podía consumir en proporciones retóricas gigantescas ya que no significaba absolutamente nada, y la crítica contra Martínez de Hoz y sus secuelas, que resultaba tanto más increíble cuanto más aumentaba su virulencia. Al comenzar 1983, Massera ya llegaba a decir cosas como éstas:

La guerra de las Malvinas demostró que los argentinos tenemos un enemigo aún peor que Gran Bretaña, y que son los Estados Unidos.

La Patria Financiera es nada más que un grupo de argentinos a quienes se les está acabando el reinado.

Hay que renegociar la deuda externa con los bancos acreedores y no con el Fondo Monetario Internacional. Si no, la Argentina va a seguir ahogada, no el año que viene, sino por años, porque la situación actual no resiste el menor análisis. El margen de maniobra es muy poco, no sólo para que Argentina pague su deuda o la amortice, sino incluso para pagar los intereses.

Al mismo tiempo, seguía haciendo guiños de ojo a la corporación militar:

Estoy en contra de quienes agravan permanentemente a las Fuerzas Armadas, porque en las Fuerzas Armadas hay hombres dignos, tan dignos como los civiles dignos, y hay hombres equivocados, tan equivocados como los civiles equivocados.

Las declaraciones de Massera eran recibidas con el más absoluto escepticismo por la sociedad civil, y sus actos políticos nunca sumaban más de unas cuantas decenas de curiosos, asesores políticos, marinos retirados y guardaespaldas varios. El almirante retirado era el simulacro de un político civil, y sus afirmaciones nunca resultaban más increíbles y disonantes que cuando intentaban ubicarse a la izquierda y criticar las medidas económicas y represivas que él mismo había sancionado en el pasado. Su cinismo era tan grande que resultaba ingenuo y se le volvía en contra: nadie creía en él.

Sin embargo, Massera no se preocupaba, porque la política que él aspiraba a hacer era una política de cúpulas, que sellarían sus acuerdos con él y le darían la legitimidad peronista, como si ésta fuera un mero sello y se redujera a la imagen de Isabel Perón. Su relación con Isabel era fetichista: la había cortejado entre 1973 y 1976; después, desde 1977, la habla «guardado» y cuidado en una prisión naval, y ahora creía nuevamente que «la Señora» tenía poderes mágicos que a él le faltaban, como si fueran una emanación directa de los efluvios del liderazgo del propio Perón. Massera padecía de pensamiento mágico.

## Dieciséis

Al llegar a junio de 1983 la posición política de Isabel, que vivía recluida en su exilio en Madrid, era motivo de preocupación y un enigma para militares y peronistas por igual. La viuda de Perón no sólo se había encerrado en una casa sino también en el silencio, la neutralidad, el hermetismo y la negativa a recibir visitas, y cada uno interpretaba que tal o cual silencio expresaba que había pactado con los otros. Ocurría que el movimiento peronista, desarmado y desarticulado en sus distintos componentes sindicales y políticos, carecía de un referente único que no fuera la figura simbólica de la viuda, y simultáneamente los militares temían que ningún interlocutor peronista tuviera la autoridad suficiente para pactar con ellos la amnistía a las violaciones a los derechos humanos que querían garantizarse como pago por entregar el gobierno. El resultado era una situación farsesca, donde tanto militares como peronistas se lo pasaban intentando conseguir imposibles entrevistas con Isabel Perón, malgastando su dinero en llamadas internacionales y en ociosas estadías en Madrid y especulando con las alianzas políticas que la ex presidenta podía estar armando con un sector u otro. Ignoraban que el secreto era que no había ningún secreto, y que si el oráculo callaba era porque no tenía nada que decir: Isabel no tenía más referente, programa ni candidatos que ellos mismos con respecto a la situación política preelectoral, y si elegía callarse era porque estaba aterrada ante la nueva e imprevista responsabilidad que le atribuía, no la historia, sino su mera biografía personal.

Massera no había logrado mucho más que los cortejantes peronistas y militares en la búsqueda de Isabel. Inútiles habían resultado el «tratamiento especial» que dio a la ex presidenta en las prisiones navales ni el que Isabel hubiera reconocido en público que el almirante había hecho todo lo posible por atenuar su cautiverio (lo cual era aprovechado por los integrantes del Partido Democracia Social para difundir extravagantes explicaciones según las cuales Massera sólo había participado en el golpe de 1976 porque era la única manera de proteger a los dirigentes populares). Al acercarse junio de 1983, Massera descubrió una llave de acceso mucho más directa a la antigua presidenta encarcelada, que ahora se vengaba de los demás encarcelándose en su silencio: tuvo conocimiento de que el dinero en efectivo de Perón estaba depositado desde hacía mucho tiempo en el Banco Ambrosiano. El general había procedido con una verdadera mentalidad conservadora de vieja escuela: «¿Qué puede ser más seguro que el Banco del Vaticano?», había dicho. Ahora, sin embargo, el Banco del Vaticano estaba bajo investigación, y la cuenta de Juan Domingo e Isabel Perón estaba congelada. Los fondos inmovilizados sumaban entre 8 y 10 millones de dólares, e Isabel corría el riesgo de quedarse sin dinero de bolsillo, ya que carecía de cualquier otro ingreso. A Massera se le ocurrió entonces la idea de ofrecer a Isabel sus gestiones para lograr el descongelamiento de esos fondos, vinculada a su otra idea: «solucionar» la interna peronista mediante una fórmula presidencial electoral

Massera-Isabel que, de paso, resolviera de un solo golpe la cuestión militar.

El almirante retirado comenzó a tejer sus hilos desde Buenos Aires, transmitiendo señales a Madrid y asegurándose de que esta vez iba a ser efectivamente recibido. Simultáneamente, visitó el Edificio Libertador, sede del Comando en Jefe del Ejército, donde se entrevistó con el general Nicolaidis y con el secretario general de la fuerza, general Jorge Suárez Nelson. También mantuvo una reunión con el almirante Rubén Oscar Franco, comandante en jefe de la Armada. Massera llegaba a todas estas entrevistas con una aparente carta de triunfo: la disposición de «la Señora» a recibirlo, y la estatura que naturalmente ganaba con ello como interlocutor militar natural de la jefatura peronista. Los patéticos políticos civiles que dirigían el movimiento en Buenos Aires eran incapaces de dirigirse a sí mismos, y el ex comandante emergía como la alternativa natural. Al mismo tiempo reclamaba condiciones, entre ellas el levantamiento de la inhabilitación de Isabel para actuar en política, y exigía respaldos por parte de la corporación militar, que estaba ansiosa por garantizarse la supervivencia en la Argentina pos-Proceso. Los militares y los marinos no tenían otra alternativa que decirle que sí, mientras comenzaban a imaginar vías de escape para el caso de que el almirante retirado se saliera con la suya. A los políticos civiles no les quedaba más remedio que morderse los codos ante la evidencia de que no controlaban todas las comunicaciones con Madrid y no eran el referente obligado entre la cúpula del Ejército y la inevitable Isabel. El resultado era devastador a dos bandas: Ítalo Luder, figura preelectoral emergente, temía que Massera lo desplazara y promoviera el lanzamiento de un populismo irresponsable; Lorenzo Miguel, líder del sindicalismo, sabía que cualquier avance del ex comandante sólo podía ir en desmedro de su poder. Militares y peronistas aguardaron, pues, con ansiedad, envidia y temor, los resultados de sus misteriosas gestiones en Madrid.

Las entrevistas de Massera con Isabel no condujeron a mayores conclusiones y la viuda terminó por rechazar el trato que aquél le proponía, aunque ambos convinieron en continuar las conversaciones. Algunas versiones posteriores indicaron que el emergente político radical Raúl Alfonsín habría tenido un rol decisivo en garantizar la negativa de Isabel, al proponerle medios más seguros para compensarla por el dinero perdido.

Sin embargo, en Buenos Aires nadie estaba dispuesto a dar nada por sentado, y menos aún los militares, temerosos de que Massera volviera con una carta fuerte que le permitiera constituirse en el desemboque del Proceso. Como reemplazante del juez Pedro Narváiz en el caso Branca había sido designado el joven juez federal Oscar Mario Salvi, por recomendación expresa del comandante en jefe del Ejército. Mientras Massera pasaba unos días en Brasil jugando al suspenso con el resultado de sus conversaciones de Madrid, Salvi lanzaba en Buenos Aires una bomba política con la forma de una orden de captura contra él para tomarle declaración por el caso Branca. El juez, mostrando cuán fuerte pisaba, el día anterior había desayunado con el

almirante Franco para comunicarle su decisión, y luego había almorzado en la Jefatura de Policía. La Marina eligió lavarse las manos del caso: voceros oficiosos hicieron saber a los diarios que su ex comandante debería responder «como ciudadano» a los requerimientos de la Justicia y que no existía ningún malestar en la fuerza por la decisión de Salvi.

Massera se enteró de la noticia a través de una llamada telefónica nocturna que recibió en Brasil. Sus primeras preguntas fueron dirigidas a averiguar hasta dónde estaba en conocimiento de los hechos el almirante Franco. También instruyó a su interlocutor para que el vicealmirante Fracassi informara al Comando en Jefe que él no sabía de qué se trataba, pero se iba a presentar.

A lo largo del día, Massera habló en varias ocasiones con Buenos Aires, algunas veces con sus oficinas, otras con el Comando naval y otras con periodistas radiales. Su paradero era un misterio: a un periodista que se lo preguntó le contestó socarronamente que estaba «en algún lugar de la República Argentina». Jugaba, en cierto modo, al teatro de imaginarse a sí mismo como a Perón a punto de ser arrestado por un alto mando militar incomprensivo, aunque no podía creer que las masas fueran a rescatarlo ni que una Isabel metamorfoseada en Evita pudiera organizar la resistencia. Todo era más pedestre y banal, más conspirativo y más en el estilo de Massera: la política de cúpulas. A tal punto esto era así que los dirigentes peronistas, que habían retenido el aliento durante toda su gira española, cuando supieron del arresto del almirante descorcharon champagne, y se lanzaron a tejer alianzas internas, y el casi candidato Ítalo Luder envió una carta a Gregorio Dupont agradeciéndole por haber contribuido a defenestrar una candidatura que habría implicado «una tragedia nacional».

El avión enviado por la Armada para llevar a Massera de Río de Janeiro a Buenos Aires fue un incómodo minijet de escasísima capacidad. Su único acompañante fue un teniente de fragata; ni el contralmirante Jorge Bonino, director de Personal Naval, ni tampoco ningún auditor naval habían ido a buscarlo a Brasil. Los signos de frialdad de la Armada se hicieron más evidentes en Buenos Aires, durante el trayecto en helicóptero que Massera compartió con el contralmirante Bonino desde Ezeiza hasta el Edificio Libertad; cuando aquél preguntó sobre las razones por las cuales Salvi había ordenado su captura, éste le contestó:

—Tengo entendido que no le quiso decir nada al almirante Franco de los cargos contra usted, señor\_

—¡Pero no puede ser, es ridículo! —exclamó Massera.

—Señor, yo creo que usted debe acostumbrarse a pensar que éste es un problema personal suyo y no de la institución.

—¡No me joda! Usted no puede creer realmente eso.

—Señor\_ No me parece que convenga^

—Bueno, ahora cuando lleguemos vamos a poner todo en claro con Franco.

Sin embargo, cuando llegaron al Edificio Libertad el almirante Franco no estaba, y se negaría a hablar con Massera hasta muchos días después de su detención.

## Diecisiete

La Armada se limitó a garantizar que la prisión preventiva de Massera transcurriera en sedes navales. El desentendimiento tenía motivos más profundos que la «traición» de Franco, la repugnancia que causaba en el alto mando el giro populista de su ex comandante y el deseo de la Marina de mantener un perfil político bajo (tales eran las acusaciones que el Partido de la Democracia Social reiteraba en incansables declaraciones públicas). Tampoco se trataba de un rechazo gorila a los contactos de Massera con Isabel Perón, ni del hecho de que los almirantes súbitamente recordaran que había sido designado por Perón y confirmado por Isabel (como el mismo Partido repetía sin mayor capacidad de convicción). La realidad, por una vez, coincidía con las declaraciones de sus protagonistas, y éstas eran que Massera había ido demasiado lejos en la identificación de sus problemas personales con las cuestiones de la institución naval.

Incluso entre almirantes retirados que habían compartido con el ex comandante diversos tramos críticos y comprometidos del gobierno militar, comenzó a extenderse una impresión de escozor, escándalo y vergüenza por el lugar en que los pecadillos de Massera ponían a la fuerza. A Massera se le podían tolerar los contactos con los Montoneros, el asesinato de Hidalgo Solá y la desaparición de Elena Holmberg, en la medida en que constituían pasos para la articulación de un proyecto político para la Marina, pero nadie iba a tolerarle, como se dijo en ese entonces, que «anduviera matando por cuestiones de faldas» y que pretendiera tener en eso el respaldo de la institución. Sin duda, los hombres de la Marina mostraban un gran sentido de la oportunidad al desligarse de las «cuestiones de faldas» de Massera, pero es lícito preguntarse si podían hacer otra cosa en la situación de debilidad en que se encontraban, cuando las revelaciones sobre la actuación de su ex comandante en el caso Branca contribuían a debilitarlos todavía más. Y si ellos podían guardar un silencio oficial jamás quebrado sobre Holmberg, Hidalgo Solá y la represión de los Grupos de Tareas, en el caso Branca calificarían con desaprobación ese silencio con un paso al costado: tal el sentido de las profusas desmentidas sobre la existencia de malestar en las huestes navales que circularon en esos días. Massera, sin embargo, se resistía a entender estas explicaciones sencillas, y decía a quien quisiera oírlo que Franco y los suyos eran gente siniestra, traidora, cobarde y pérfida, y que el curso en que se embarcaban al permitir su arresto implicaba nada menos que la destrucción completa de la Armada Argentina.

La sociedad civil recibió el proceso como el estallido de un gran escándalo, con una sensación de liberación y, al mismo tiempo, de venganza y resarcimiento por los años en que Massera, Videla y Agosti habían dirigido al país. Las pruebas acumuladas contra el almirante retirado eran en verdad sólo circunstanciales.

También era cierto que era el único comandante del Proceso que estaba preso, cuando las culpas de Videla y otros jefes militares no eran para nada menores. Sin embargo, la masividad, diversidad y complejidad de esas pruebas resultaban sencillamente abrumadoras, y la opinión pública lo juzgaba culpable de delitos claramente mayores que los de sus compañeros de Junta y represión, por tratarse de un jefe cuyas operaciones excedían, por primera vez, más o menos comprobadamente, los límites de la lucha contra la subversión e incursionaban directamente en el delito privado. Massera era evidentemente víctima de una distinción sutil —que se había afirmado en la conciencia pública como producto de la represión—, que asignaba grados de legitimidad a ciertos asesinatos y grados de ilegitimidad a otros. Como el país recién emergía en forma tímida de la dictadura militar, los crímenes fundacionales del Proceso recibían menos atención directa que los derivados de la ocupación de espacios aprovechando la oportunidad, pese a que en cierto modo estos últimos resultaban en realidad accesorios. Con lo accesorio ocupando el lugar de lo principal, que no se cuestionaba, el juicio público a Massera coincidía puntualmente con el juicio privado que le hacía una burguesía que estaba enojada con él porque había transgredido las reglas y victimizado a sus miembros. El juicio de Salvi era el juicio predemocrático de la Argentina burguesa a Massera. El propio abogado de Massera, el pomposo y anticuado doctor Jaime Prats Cardona, se ocupó de señalar, en su pedido para que Salvi se alejara de la causa, el «clima público» desfavorable a su defendido que se había creado, la imagen que Salvi se había construido como una suerte de jacobino justiciero y el hecho de que los medios masivos de comunicación parecían haber emitido el veredicto cuando las discusiones, tomas de declaraciones y careos de testigos todavía estaban en curso. El juicio era en cierto modo inválido, ya que en los considerandos se describía la condena. Y judicialmente era intrascendente, porque su verdadero objetivo era ejecutar un asesinato de personalidad política.

Vista desde otro ángulo, la caída en desgracia de Massera entre la sociedad civil revelaba desajustes de percepción que éste demoró demasiado en percibir. Al aproximarse miméticamente al peronismo, el ex comandante no había tomado conciencia de uno de los principales cambios que él había contribuido a producir, durante la etapa de «terapia intensiva», en la mesa de torturas del Proceso: el desarme popular, la destrucción de las estructuras de poder populista y el establecimiento de un fuerte código de represividad interna en la conciencia de los argentinos, que habían pasado de militantes a ciudadanos, y de querer cambiar la historia a simplemente querer votar. No se dio cuenta hasta mucho después de que la conciencia global argentina había procesado el peronismo, la catástrofe de Isabel y los crímenes del Proceso en la forma de un continuo único de represividad y criminalidad ascendentes, y él había estado demasiado tiempo embarcado precisamente en ese tipo de alianzas conspirativas entre militares y peronistas que el electorado comenzaba gradualmente a rechazar. Sin embargo, en este punto Massera era un hombre de su época, ya que tampoco lo percibieron los peronistas que apostaron a un pacto sin él con la cúpula del Ejército, ni el Ejército, que apostó a un

pacto con los sindicatos en la seguridad de que el peronismo iba a ganar. El triunfo del candidato radical progresista Raúl Alfonsín en las elecciones estaba sólo a meses de distancia, pero se encontraba a años luz de las percepciones políticas de militares y políticos, que en realidad habían quedado ancladas, mágicamente congeladas, en el momento del golpe de 1976, siete años atrás.

Y era que la realidad estaba cambiando en el mismo momento en que se pensaba sobre ella y, como suele ocurrir frecuentemente en la historia, la repetición evocativa de viejas costumbres agotadas sólo servía para que la multitud las abandonase más rápidamente, ya que patentizaban en el presente el mismo pasado de descomposición y muerte del que se quería huir. Así fue como la evidencia de un pacto entre militares y sindicalistas no hizo más que precipitar el triunfo del candidato radical, del mismo modo que la evidencia de una componenda entre Massera e Isabel sólo precipitó el arresto y la caída en desgracia del primero.



## Dieciocho

El juicio de Salvi contra Massera fue espectacular, desordenado, dramático, confuso y parcial. La totalidad de la causa había descansado en una presunción equívoca, errónea y puramente instrumental: la denuncia de Guillermo Patricio Kelly de que el caso Branca se hallaba conectado de algún modo al caso de la P-2. Semejante acusación, que nunca se pudo comprobar, había constituido en 1981 el medio más rápido para hacer que el caso Branca fuera investigado. La única conexión consistía en que Massera, integrante de la P-2, era también el presunto asesino de Branca. Sin embargo, ya desde los primeros interrogatorios se insistió en el caso de la logia masónica como si hubiera tenido que ver realmente con la muerte del empresario, lo que fue espolcado activamente por Kelly al denunciar que Licio Gelli lo había amenazado en Europa: «A vos te va a pasar lo mismo que a Fernando Branca». El caso P-2 se convirtió en una especie de salvoconducto para todos aquellos que quisieran denunciar algo contra Massera: sólo bastaba que se dijera que el hecho denunciado tenía que ver con la logia para que se citaran testigos, se realizaran careos, se dilataran las indagatorias y se añadiera publicidad a los hechos. Cuando uno de los hermanos de Elena Holmberg llegó a sugerir que los casos de su hermana, Hidalgo Solá y Branca estaban conectados entre sí, y que los tres remitían a su vez a las operaciones de la P-2 en la Argentina, el juez llegó incluso a comunicarse con él para preguntarle qué sabía sobre el tema, a lo que Holmberg contestó insolentemente: «¡Y qué sé yo! El que tiene que averiguar es usted».

Salvi condujo el caso Massera menos como juez federal que como fiscal de un hipotético tribunal de la opinión pública. A menudo afloraban a sus labios alusiones a la necesidad de la democracia, a los años de la impunidad y a «hechos que no deben volver a repetirse» (una frase que llegó a convertirse en lugar común como tácita referencia a la represión). Ante requisitorias periodísticas sobre el papel que él había asumido ante la opinión pública, el juez llegaría a decir cosas como: «Yo, más responsabilidad de la que siento no podría sentir». Al mismo tiempo, un gobierno lleno de generales que habían participado de manera directa en la lucha contra la subversión y cuyo mascarón de proa era un militar retirado con aspecto de abuelo benigno que había sido subordinado directo del temido general de división Santiago Omar Riveros —y que en años posteriores vería empañada su imagen de anciano afable al ser acusado de la desaparición de un conscripto que militaba en la Federación Juvenil Comunista—, se jactaba orgullosamente de que las investigaciones y el proceso constituían una prueba de la «independencia» efectiva del «Poder Judicial» en la Argentina. Simultáneamente, otros responsables destacados del Proceso, como Videla y Viola, permanecían en libertad. El primero disfrutaba personalmente con el desenvolvimiento del caso Branca por la alta posición moral en que le permitía volver a ponerse frente a su antiguo enemigo naval. Dentro de este

esquema, Videla era, efectivamente, la corrección antisubversiva en persona, mientras Massera era un adúltero, un estafador y un asesino vulgar. Esto último era perfectamente cierto, pero en las alternativas dramáticas de la época también servía para que el almirante apareciera como condensación del resentimiento social contra el Proceso, como «el peor de todos» y como el mayor responsable de la situación del país. Cualquier improbable sombra de credibilidad y atractivo de que dispusiera hasta ese momento terminó de desaparecer por completo.

La Justicia argentina de la época del Proceso encontraba en Salvi a su conclusión y a su expresión más perfecta y última. Si en 1977 jueces como Eduardo Marquardt habían podido «procesar» a jefes militares como Lanusse, Gnani y Rey en base a instrucciones políticas emanadas de un centro de poder emergente, como era en ese entonces la dupla entre Gobernación de Buenos Aires y jefatura del I Cuerpo de Ejército, ahora Salvi descargaba la artillería de la presunta «Justicia independiente» contra Massera respondiendo a instrucciones e intereses del Comando en Jefe del Ejército y la Presidencia de la Nación. El principio de la «presunción de inocencia» no era siquiera mencionado, y se hubiera dicho que Massera era culpable hasta que probara lo contrario. Como no habían podido acusarlo directamente del asesinato de Branca, lo habían acusado de «encubrimiento» y de «ocultación de pruebas» a raíz de la desaparición del telegrama y la carta del presunto Branca que los asociados de este último le habían llevado en 1977. Esto derivó en que también fuera arrestado e interrogado el oficial de inteligencia naval a quien se habían entregado esos documentos, el capitán Eduardo Invierno. Sin embargo, Invierno fue sobreseído mientras Massera permanecía detenido, por más que no se pudiera probar que él hubiera dado la orden de destruir los documentos ni pudiera levantarse contra él una acusación más sólida ni menos cínica que la de haber obstruido el curso de la Justicia «independiente» y «civil» de 1977 al no poner a su disposición los elementos del caso.

Salvi actuaba como si diera por sentado que en 1977 existían los mecanismos de una justicia civil independiente. La abstracción judicial daba paso a una falsificación histórica, bajo cuya luz Salvi aparecía como el juez joven e idealista que cuestionaba por sí solo un pasado criminal, y Massera como el mal encarnado. Era cierto que Massera podía desempeñar a la perfección el papel del Mal, pero no era verdad que Salvi fuera valiente, idealista, solitario e independiente: actuaba como una estrella de la opinión pública en base a una representación perfectamente oportunista. Ausente la subversión, la Justicia teatralizaba su papel favorito como fiel de la balanza del derecho por encima de la lucha de clases, y tendía a encarnar el papel de fiscal de un crimen privado de modo que se oscureciera la naturaleza del enfrentamiento que había tenido lugar, y que en lugar de cuestionarse la «lucha contra la subversión» se cuestionaran sus «excesos». Oportuna, la Justicia burguesa aparecía para reabsorber la indignación civil emergente contra la barbarie ejecutada, y para docilizarla canalizándola en reclamos por la violación de leyes que nadie había respetado en primer lugar.

El tratamiento conferido a cada una de las partes era inequitativo, desigual y flagrantemente parcial. Cualquier reclamo de la defensa sólo merecería de Salvi el comentario «Téngase en cuenta», mientras cualquier solicitud de la Fiscalía sería acogida al instante. Los testigos de la acusación recibían atención inmediata; los de la defensa eran tratados con amable desdén. Salvi concedía entrevistas periodísticas generosamente, y se conducía en ellas como si fuera una especie de candidato político. Al lanzar el caso, proclamó que lo hacía «por la defensa de la República». Cuando se produjo el arresto de Massera, y hubo una situación ambigua sobre el lugar donde quedaría detenido, sostuvo orgullosamente: «El detenido está a mi cargo». Algo después, estimó con descuido que «Massera podría pasar mucho tiempo en prisión». Cuando le preguntaron cuál había sido la actitud del acusado durante la indagatoria, Salvi se apresuró a contestar: «Estaba muy nervioso, sumamente nervioso, y niega todo. No niega haber conocido directamente a Branca, pero dice que lo trató durante poco tiempo. Sin embargo, la relación entre ambos está casi probada, ya que catorce testigos confirman que Massera y Branca han tenido negocios juntos». Como juez, su conducción de la causa era verdaderamente catastrófica, pero aparecía como un héroe a los ojos de una sociedad civil que empezaba a salir de un infierno de ilegalidad. Más que un procesamiento en regla, la causa contra Massera se parecía a un linchamiento público simbólico, en el cual Salvi fuera quien decidía y ejecutaba, juez y verdugo. La exactitud de los cargos y la precisión de las acusaciones no importaban tanto como la conciencia de que Massera era culpable, y si no lo era en el caso Branca seguramente lo sería en algún otro. Jaime Prats Cardona, el abogado de Massera, llegó a pedirle fundamentalmente a Salvi que se retirara del caso por «enemistad hacia el encausado», pero el reclamo cayó en oídos sordos ante una sociedad que no era más ni menos legalista que en 1976 y 1977, pero ahora apelaba a la ley simplemente porque se le había dicho que no debía apelar a las armas. Se puede decir que la Justicia burguesa renacía de modo vacilante de su propio cadáver descompuesto, y que la conducta errática de Salvi constituía el impreciso lenguaje de articulación de sus principios detrás de las huellas de la barbarie vivida. La Justicia hablaba a través de Salvi, pero Salvi era un juez del Proceso, de la ilegalidad y de la barbarie, y por eso la Justicia en boca de Salvi adquiriría el acento del periodismo amarillo y del linchamiento simbólico.

Massera respondía a todo esto con constantes negativas, algunos cambios de testigos y, en el ámbito personal y privado, una mezcla de rabia con estoicismo. Trataba infructuosamente de convencer a los marinos y civiles que todavía eran sus amigos de que él no había asesinado a Branca. «Yo me cogía a la mujer, y ni él ni yo teníamos ningún problema: ¿para qué iba a matarlo?», insistía. Y en esto, como en muchas otras cosas, decía la verdad contradiciéndose a sí mismo y a sus propias acciones. El asesinato de Branca había sido ciertamente una reacción irreflexiva e inútil, una pura jactancia de macho, un mero capricho personal que no llamó la atención en su momento, la simple diversión del asesino que utiliza una guerra para cometer crímenes privados, y también el producto de una era de impunidad militar

que comenzaba a cerrarse. La perversidad del montaje judicial contra Massera era que se preparaba un juicio político por delitos privados. El sistema, en cierto modo, se conservaba impune, en tanto el asesinato de Branca era una extralimitación de Massera. El caso, al denunciar los excesos, aludía tácitamente a la impunidad de los años del Proceso, y por ese recorrido el juicio privado se convertía en una causa política, sin que al mismo tiempo el juicio propiamente dicho se extendiera a las instituciones militares. Otro juicio (por la muerte de Hidalgo Solá, o la de Elena Holmberg, por ejemplo) habría atraído inevitablemente al Proceso al centro de la escena; el caso Branca, al ser más «privado», permitía la combinación óptima de discreción concreta y espectacularidad declarativa.

Massera quedó detenido bajo el régimen de prisión preventiva rigurosa, y su procesamiento fue languideciendo con los meses, ocupando cada vez menos espacio en los diarios y en la atención pública. Los amigos civiles del almirante retirado hicieron un patético intento de defenderlo ante la opinión pública, a través de un librito titulado *El caso Massera: Secretos de una conspiración*, firmado por Sebastián Roca, seudónimo del periodista Martín Olivera, pero fue olvidado inmediatamente después de su publicación y nunca más se prestó atención al tema. Massera, para la opinión pública, había sido juzgado y condenado, y los motivos reales por los cuales se montó la conspiración en su contra habían desaparecido. El almirante era un muerto político, y no podía volver a molestar.

## Diecinueve

El triunfo electoral constituyó una sorpresa para el propio Alfonsín. El candidato radical había basado su campaña en la denuncia de un «pacto militar-sindical» para que el peronismo, de ser elegido, convalidara la amnistía por violaciones a los derechos humanos que se habían otorgado a sí mismos los militares, y a cambio de lo cual se comprometían a abstenerse de toda agresión contra el gobierno constitucional. El pacto, en realidad, resultaba un curioso espejismo colectivo: los militares todavía se creían suficientemente fuertes para alterar un futuro gobierno constitucional, cuando en realidad se estaban retirando de escena apresuradamente y en pánico; los peronistas creían que los militares eran todavía el corazón del poder, y se juzgaban a sí mismos como imbatibles triunfadores electorales, y los radicales se creyeron tanto su propia retórica que imaginaban que militares y peronistas finalmente tendrían razón y el corporativismo autoritario volvería a imponerse en el país. Hasta Massera, traicionado y abandonado por militares y por peronistas, llamó desde su prisión a votar por la fórmula peronista de Ítalo Luder-Deolindo Bittel, sin tener conciencia de que esto era sólo un clavo más en el féretro del «corporativismo peronista».

La Argentina, sin embargo, había cambiado profundamente, y sólo la mediocridad institucional de sus principales actores políticos impedía advertirlo. Alfonsín, Luder, los sindicalistas y los militares jugaban al poder tomando como grilla los viejos esquemas de las relaciones de fuerzas, y ganaban o perdían según las coincidencias y discrepancias que esa grilla tuviera con la nueva realidad emergente. La verdad era que los años del Proceso habían suprimido de cuajo toda expectativa revolucionaria en la sociedad argentina, y habían instaurado un dispositivo por el cual la lucha se identificaba con la derrota, y la derrota con la tortura y con la muerte. La efervescencia de declaraciones izquierdistas en los meses finales del Proceso sólo cubría de una fina cortina decorativa la profundidad de este cambio ideológico que, además, disponía de fuertes apoyaturas materiales en una reestructuración de la infraestructura social y económica. La importancia y la magnitud de la producción industrial disminuyeron durante los años especulativos del Proceso, con el consiguiente debilitamiento de las grandes organizaciones sindicales, y la nueva generación de trabajadores no era tan «espontáneamente» peronista como sus antecesoras, en la medida en que el peronismo se identificaba con Isabel y López Rega y, a partir de la alianza militar-sindical, con una dictadura militar detestada. Y como el desmesurado poder de los sindicatos había sido el principal factor de inestabilidad del programa peronista de conformación del Estado, el retroceso industrial, obrero y sindical (en ese orden) se constituyó en el principal desmovilizador de aquellas viejas propuestas de izquierda cuya viabilidad había operado soba la base de la «apuesta al desorden». La izquierda, al salir derrotada de su confrontación con el Proceso, tenía

ella misma menos auditorio que antes; el interés que pudiera suscitar provenía únicamente de ser uno de los objetos del «destape», en un plano parecido al de la pornografía o las películas censuradas. Nadie soñaba con la lucha armada. Los restos de discurso izquierdista que subsistían, considerablemente «socialdemocratizados» ya por la derrota y el exilio, eran crecientemente reabsorbidos por el discurso de los derechos humanos de Alfonsín, que se presentaba como el candidato de una especie de democracia burguesa utópica y hacía brotar lágrimas de agradecimiento de los ojos de viejos guerrilleros aguerridos al abrir sus discursos con las frases iniciales del Preámbulo de la Constitución Nacional. El triunfo ideológico del orden era total. La fuerza de Alfonsín se asentaba — precisamente— en aquello que en otros tiempos habría constituido la raíz de su debilidad: la falta de sectores sociales que se embarcaran detrás de su proyecto y su sustitución por puros ciudadanos votantes. Nadie podría alterar el curso normal de su Argentina futura, como no fuera el desenlace de una elección democrática. Eos argentinos habían dejado de considerarse parte de un sector social y de un programa de lucha, para considerarse unidades electorales. Y habían desaparecido las grandes consignas en pos de las cuales antes se habían movilizado. Cuando el destacado político peronista Herminio Iglesias, en el cierre de la campaña electoral de 1983, quemó un ataúd donde simbólicamente se había depositado el «cadáver» de Alfonsín, la repulsa que provocó simbolizaba el inconsciente anacronismo de su acto. Esa violencia estaba fuera de escena porque estaba dentro de todos como memoria y lección del pasado inmediato.

Massera escuchaba el discurso alfonsinista con una actitud que oscilaba entre el desprecio burlón y una alarma algo fuera de foco. Siempre había desdeñado a los radicales, con su pequeñez y mezquindad de políticos de parroquias y comités, sus descoloridas componendas para llegar al poder en las trastiendas de los procesos militares, su legitimidad a medias, su dependencia de la proscripción del peronismo para acceder a posiciones de gobierno. A esto sumaba un desprecio snob hacia el partido de la clase media y los abogados, hacia su carácter no cosmopolita que hacía que Ricardo Balbín pudiera jactarse de no haber salido nunca del país, y a un *corpus* discursivo hecho de frases hechas pomposas y vacías, que intentaban disimular la estrechez melancólica y anticuada del clientelismo a la antigua y la conquista de votos mediante la concesión de empleos públicos. Los radicales se le antojaban una especie de ingloriosa clase media baja de la política, y solía burlarse de ellos en un tono parecido al de un aristócrata que comentaba los modales adocenados y barriales, la respetuosidad acartonada y la espuria decencia de sus parientes de condición inferior. Alguna vez los había considerado enemigos, pero no adversarios de primera línea sino obstáculos, moléculas de inconveniencia depositadas en los engranajes de sus estructuras de poder, que podían trabar el funcionamiento de la máquina. Hidalgo Solá había sido, para él, uno de esos obstáculos. Nunca los había visto como factores de poder auténticos, y no pensaba que su amistad o enemistad fueran esenciales para su propio éxito o su propio fracaso. Así que ahora el almirante retirado se divertía con Alfonsín, considerándolo un abogado sin lustre de la provincia de Buenos Aires, que

encabezaba un equipo de *parvenus* de parroquia incapaces de distinguir una comida de gourmet de una ensalada Waldorf

Estas impresiones, que se combinaban en su estado de ánimo con una especie de irremediable desazón por el bien que él habla perdido, se alternaban, sin embargo, con una profunda alarma por el futuro que, eso creía, prometía el partido radical, concretamente por la posibilidad de que la subversión volviera del brazo del nada elegante abogado de Chascomús. Massera contemplaba las listas de adherentes a la UCR, los artistas populares que participaban en sus festivales, los autores exiliados que colaboraban con sus campañas, las personalidades que respaldaban sus consignas y las organizaciones exteriores que respaldaban su predicamento, y no podía dejar de sentir que el ERP entero habla entrado al ruedo político bajo el sello inocuo de UCR. Ciertamente, todos esos nombres que él vela en las listas de adhesiones hablan tenido que ver, por más que ahora usaran Rolex y fueran profesionales exitosos, con el pasado maldito de la Argentina, y las consignas de la UCR se asemejaban bastante a las que hablan difundido las organizaciones de solidaridad con la Argentina en el extranjero durante la época de la dictadura. Aquella gente ahora venía con un inocuo discurso de respeto de los derechos humanos y a la democracia, pero Massera, un militar del Proceso, no podía comprender que no se trataba de una treta retórica para defender a la subversión. Consideraba que los derechos humanos seguían siendo, como en la época de la dictadura, un medio para dar respetabilidad internacional a la causa de la subversión, y estaba ciego para entender que esos derechos se habían hecho carne en los antiguos militantes a punto tal de sustituir las antiguas consignas de lucha. Ignoraba, en el fondo, la profundidad de la transformación que él mismo había operado en la conciencia general y, en parte por sobreabundancia de celo represor y responsabilidad y en parte por temor a su propia condena, mezclaba todo, y la UCR de los derechos humanos se le aparecía como encarnación de una máscara de legalidad para el proyecto subversivo, ya que también él había cometido el error de identificar el poder militar con el poder del Estado, y ahora lo único que podía imaginar como un poder enmarcado en el orden y la ley era una alianza bonapartista con el peronismo. Massera creía que la democracia parlamentaria era imposible.

Eas dos ideas —el provincianismo mediocre de los radicales y la imaginada inminencia del rebrote subversivo— se combinaban en él de manera incómoda, competían por su comprensión y por su inteligencia, se alternaban como cortezas episódicas de antiguas impresiones consolidadas, y en general tendían a teñir de un gris ambiguo sus juicios sobre la novedosa situación en la que se encontraba inmerso. Un día Massera advertía a sus allegados que era inminente un gobierno del

Ejército Revolucionario del Pueblo, y al día siguiente desmerecía a los radicales, esos tradicionales y desprolijos provincianos. Las dos impresiones coexistían moleestamente en su fórmula «la subversión, derrotada en el plano militar,

podría regresar triunfante en el terreno político». Massera mostraba aquí un defecto de percepción característico de los jefes del Proceso, que habían escuchado tanto su propia propaganda que empezaban a creérsela y, como otros muchos argentinos temerosos, rescataban analogías superficiales como punto de encuentro de períodos históricos distintos. Ese común denominador aparente era la retórica izquierdista del nuevo equipo de poder y la resurrección de símbolos anteriormente asociados a «la subversión y el caos».

Massera recelaba, por una vez, de la fragilidad puramente militar de sus logros. Creía, ingenuamente, que el triunfo «político» del Proceso habría consistido en su aceptación por los políticos posteriores, y no se daba cuenta del notable triunfo político que había significado el hecho de que la oposición al Proceso dejara de usar el lenguaje de la lucha de clases y empezara a articular el de los meros derechos humanos.



## Veinte

Alfonsín operó rápidamente para consolidar el nuevo estado de cosas. Una de sus primeras medidas fue su decisión de finales de 1983 de someter a los comandantes de las Juntas militares a cortes marciales por violaciones a los derechos humanos. La resolución era espectacular e inédita: por primera vez un gobierno civil argentino se arrogaba la capacidad de juzgar a los dueños de las armas, procediendo como si éstos estuvieran verdaderamente derrotados. Las Fuerzas Armadas, totalmente deterioradas después del Proceso, acataron la decisión. Massera prestó declaración ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en septiembre de 1984 y quedó detenido bajo el régimen de prisión rigurosa, la que se sumó a la que ya cumplía por la desaparición de Branca. Pocos días después la Cámara Federal sobreseyó al almirante en este último caso, sin que se hubiera probado su culpabilidad ni inocencia, por haber expirado el plazo máximo de la investigación. Massera habría quedado libre si no hubiera mediado la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El almirante retirado cumplió la mayor parte de este tiempo de prisión en el Apostadero Naval de SanPernando, en condiciones de soledad creciente, mientras constataba el alejamiento progresivo de sus viejos amigos navales y militares en general y comprobaba, en la frialdad del trato cotidiano de sus carceleros, que la Armada que él había construido se estaba transformando gradualmente en otra. Un incidente que le produjo unos momentos de diversión cínica fue el intento del capitán Joaquín Gómez, un antiguo integrante de su histórico Gabinete de Asuntos Especiales, de conspirar contra la jefatura de la Armada y convertirse en ministro de Defensa del gobierno constitucional; la astucia política de Massera no era una cualidad que pudiera transmitirse fácilmente por ósmosis. El incidente revelaba el enorme desconcierto político y la situación general de desbande en que habían quedado los cuadros de las Fuerzas Armadas. Sucedió como si, después de detentar las llaves y dictar las reglas de juego que habían regido durante el Proceso, después de haberse convertido en maestros de los pasadizos invisibles y secretos del poder durante más de siete años, los militares se asomaran ahora inocentemente a un panorama nuevo, donde regieran distintas reglas de juego y hubiera distintos pasadizos, y donde las invocaciones de antaño ya no produjeran los resultados deseados. Se apoderaba de ellos una general sensación de irrealidad, donde habían pasado de perseguidores a perseguidos. A veces producían actos anómalos, torpes, autoritarios y repetitivos de viejas costumbres, como los pactos que trataban de hacer o de romper con la sociedad civil, pero sus móviles respondían menos a una predisposición conspirativa que al desconcierto por la pérdida del poder. Los militares podían aceptar que habían perdido el gobierno, pero no que la fuerza armada dejara de ser la balanza que equilibrara y dirimiera en última instancia las

disputas de la sociedad civil.

Y era que, después de muchas vueltas, recodos y suspensiones históricas, de ensayos y mares y de ejercitaciones deficientes, la democracia burguesa plena llegaba a la Argentina traída de la mano por la cruenta partera del Proceso. Alfonsín, en este sentido, resultaba una figura transicional emblemática: él mismo había sido cadete militar y contado entre sus condiscípulos y amigos al general Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la temible primera Junta. El Presidente ahora se metamorfoseaba en líder de la libertad y de la democracia, y no por mero oportunismo político, puesto que antes había representado la filiación más tangible que podía sostener una evolución semejante: ala izquierda del partido de la clase media y punto de convocatoria de la sociedad civil en el repudio a las antiguas prácticas. El nuevo jefe de Estado se abocaba a una reconstrucción simbólica de la república ideal perdida —un universo de controles y balanzas que daría a cada uno, sindicalista o militar, obrero o empresario, su lugar en una estructura armónica—, y tendía a avanzar iluminísticamente en la desintegración de las grandes corporaciones de poder que habían empañado en el pasado la transparencia de las leyes del mercado de la democracia política. Su misión era liquidar los excesos de poder residuales en los sindicatos y en las Fuerzas Armadas, y a eso se abocaría con un celo y un sentido de misión permanentemente renovados.

# MASSERA ANTE LA LEY

El procesamiento de Massera por el caso Branca y el tribunal marcial del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas habían sido sólo ensayos generales aproximativos y tentativos de la presentación final del Almirante Cero ante la ley, un acto que emblematicaba —aunque no resumía ni agotaba— la confrontación de la dictadura militar argentina con los principios de la legalidad y legitimidad y planteaba, por eso mismo, una serie de preguntas interesantes y hasta acuciantes.

¿Qué ley debía aplicarse? ¿La de una Constitución largamente ignorada —durante y antes de la dictadura— o los decretos-ley —incluyendo el acto final de autoamnistía— de la dictadura misma? ¿Qué legalidad era válida? ¿La formal del inestable Estado argentino o la instaurada —y no siempre respetada— de las actas fundacionales del Proceso? ¿Con respecto a qué era ilegítima la dictadura? ¿Al gobierno universalmente detestado de Isabel Perón? ¿A un *establishment* político y social que había reclamado el golpe a gritos? ¿A las ideas que decía profesar de sí mismo un Estado con una historia tradicionalmente antidemocrática? Las cosas, de este modo, no resultaban tan sencillas argumentalmente, y lo que se lanzaba como un proceso a las juntas militares podía terminar en juicio a toda una forma de sociedad y de Estado.

El juicio, por otra parte, planteaba problemas dentro de los problemas. Uno de ellos era la contradicción entre el esquema legal de que se había dotado la dictadura y sus propias acciones. El Proceso, por ejemplo, había establecido la pena de muerte, pero nunca la había aplicado; simultáneamente, sus militares y sus policías, disfrazados de paramilitares y parapoliciales, habían ejecutado a miles de sospechosos, habían mantenido abiertos campos de concentración y de exterminio y había enterrado, quemado o sumergido a millares de cadáveres N.N. sin que el gobierno jamás reconociera que eso era el producto de la actividad represiva que los decretos de pena de muerte habían aspirado a legitimar. ¿Tenía que acusarse aquí a las Juntas por incumplimiento de sus propios decretos? ¿O había que empezar por censurar la implantación misma de la pena de muerte, con respecto a la cual los desaparecidos y los N.N. eran una desviación perversa más?

A través de estos problemas, preguntas y argumentos, iban insinuándose y tomando forma las posiciones que iban a asumir la fiscalía y las defensas, las vías de escape que iban a tomar los acusados y las líneas de ataque que iban a adoptar los acusadores. Se trataba de un proceso original y único, un juicio de Nüremberg donde los ejecutores triunfantes de una operación militar eran sentados en el banquillo de los acusados. También se trataba del primer antecedente en la Argentina de que un gobierno civil democráticamente elegido enjuiciaba al gobierno militar precedente, lo que contribuyó —junto con las espeluznantes historias de horror que se escucharon

durante meses en el Palacio de los Tribunales— a fomentar los temores de un nuevo golpe de Estado. Ambos factores prefiguraron y determinaron los contenidos del juicio, y terminaron constituyendo su doble y paradójico fermento ideológico.

## Uno

El juicio a las Juntas comenzó un 22 de abril claro y fresco, en un Palacio de los Tribunales donde se habían agolpado centenares de invitados, periodistas y curiosos locales y del extranjero y con listas de testigos que, podía leerse, incluían porciones del almanaque de Gotha de la clase política y militar argentina. El dispositivo de seguridad era impresionante: un sinnúmero de vallas de contención, policías armados y un rígido control de las inmediaciones, donde se notaba una gran tensión y expectativa por lo que pudiera ocurrir dentro y en torno del Palacio de los Tribunales. Una multitudinaria marcha civil de apoyo al juicio dio la medida del drama que comenzaba a vivirse.

Técnicamente, el juicio era resultado de las demoras y las insuficiencias del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para desarrollar el procesamiento marcial ordenado por el presidente Alfonsín en diciembre de 1983. Al llegar octubre de 1984, vencido ampliamente el plazo que se había otorgado al tribunal militar para que se expidiera, la Cámara Federal resolvió hacerse cargo directamente de las diligencias. Como los militares se habían probado incapaces de juzgarse a sí mismos, los civiles asumían la iniciativa. Sin embargo, simbólica y políticamente, el juicio tenía contenidos más trascendentes, ya que se trataba del acto de fundación imaginaria del imperio de la justicia civil burguesa sobre la persistente impunidad de los militares. Por primera vez éstos eran llamados a rendir cuentas ante cortes civiles y, como muchos otros, no lo podían creer. Sin embargo, y como un golpe de Estado nunca se da por el mero impulso volitivo de los militares, sino por la precisa cadena de influencias y órdenes que sale de las clases dominantes y la sociedad civil y encuentra ecos, jefes y ejecutores en los cuarteles, y se daba el raro caso de una gigantesca corporación armada que asistía impotente al procesamiento y encarcelamiento de sus jefes, a la derogación de sus prerrogativas y a una exhibición pública de errores y pecados que la desprestigiaría como protagonista política durante muchas décadas. Los militares argentinos, desprovistos de todo respaldo serio entre las clases dominantes y la sociedad civil, descubrieron que sus armas eran absolutamente impotentes ante la situación, y que carecían por primera vez de una mínima dosis de legitimidad para movilizar sus demandas. El poder en la Argentina empezaba a nacer de la boca del fusil.

El hecho, por lo demás, no estaba del todo exento de cierto indefinible elemento farsesco, como lo sugería la circunstancia de que todos y cada uno de los presentes en la Sala de Audiencias se conocían entre sí en forma más o menos amigable, y habían compartido —como Alfonsín y Harguindeguy— aprendizajes, diversiones, promociones y ascensos en sus respectivas carreras militares y civiles. La paradoja del juicio consistía en que se juzgaba a los ejecutores del Proceso pero no a los procesistas, a los jefes militares pero no a sus beneficiarios económicos y políticos directos e indirectos. Un Nüremberg en regla habría requerido el triunfo del bando

enemigo, pero en la Argentina el único triunfo contra lo militares lo había obtenido Gran Bretaña. Por eso, el único juicio posible era el que las clases dominantes argentinas podían permitir: el que se hacía a una corporación que había permanecido en el poder mucho más tiempo de aquel por el cual había sido bienvenida, y cuyo independentismo y pretensión de protagonismo habían puesto a la Argentina al borde de «saltar del mapa» con respecto a su pertenencia geopolítica a Occidente. No se juzgaba a la dictadura, sino al independentismo militar. No se juzgaban la toma del poder, la represión y el resultado socioeconómico del Proceso, sino los procedimientos utilizados para llevar a cabo todo eso. Y no se juzgaba a las instituciones militares como tales, sino a una operación precisa —la formación de los grupos de tareas y la división del país en feudos— que había disuelto la cadena de mandos e iniciado el proceso de descomposición de las Fuerzas Armadas. Se diría que el gobierno de Alfonsín juzgaba a las Fuerzas Armadas reales desde la perspectiva y la defensa de unas Fuerzas Armadas ideales.

Massera, en cierto modo, ya había vivido todo esto por anticipado. Por eso —y por su natural inteligencia— le correspondió una mayor cuota de comprensión que al resto de sus colegas juzgados, aunque combinada con violentas y contradictorias impresiones del momento. Para comenzar, a él ya lo habían atacado las clases dominantes por sus «excesos»: las acusaciones de Juan Alemann y el inmenso escándalo público por su procesamiento en el caso Branca no habían sido nada distinto de lo que ahora le tocaba vivir. Al mismo tiempo, las persecuciones en su contra tenían asimismo un claro contenido posmalvinista, lo que no dependía de su mera ubicación en el tiempo calendario sino del hecho de que aparecían políticamente en el período de claro reflujo de la corporación militar. También lo habían acusado por «desbordar» las órdenes tácitas y por extender su reino de terror antisubversivo a los miembros de la burguesía que caían en su disfavor. Y por último, él había sido igualmente denunciado por los mismos que ayer le habían pedido auxilio y el empleo del máximo de fuerza, y que hoy se apartaban hipócritamente indignados y ultrajados ante «revelaciones» que eran moneda corriente entre la clase política desde los primeros meses del Proceso. El juicio a las Juntas se podría ver como una suerte de «caso Branca» en escala gigantesca, con la diferencia de que aquí se iban a juzgar también los métodos de la guerra contra la subversión, en un intento de legitimación del juicio y de fundación mitológica de un imaginario de ciudadano burgués, civil, ideal y perfecto para la Argentina. Alfonsín, ideológicamente, era la posguerra y la síntesis superadora de la Argentina prerrevolucionaria y la Argentina contrarrevolucionaria.

El ingrediente de legitimidad civil del juicio era intenso y potente, no solamente porque se juzgaba a represores y torturadores de la talla y las acciones más abyectas, sino porque la totalidad de su encuadre ideológico se daba bajo la bandera de los derechos humanos, que constituía un claro producto de la derrota militar de la guerrilla y de la reconversión del antiguo combatiente en ciudadano, y del antiguo

obrero o estudiante en votante. La ideología de los derechos humanos había constituido un potente agitador contra el régimen en la época de la dictadura militar, pero tenía consigo su propio reaseguro al instituir un código de conducta moral que volvía prácticamente imposible y totalmente injustificable el recurso a la violencia de masas y a la lucha armada. Las hazañas de los guerrilleros de antaño, las simpatías y militancias políticas de los desaparecidos actuales y sus generosos sueños de utopía y redención humana podían recibir y recibían la sonrisa y la nostalgia de sus familiares y de los integrantes de los organismos de derechos humanos, pero entre los dos se había instalado una muerte simbólica que hacía imposible volver a pensar en los antiguos términos. Los militantes, que habían desaparecido como activistas concretos, ahora desaparecían otra vez: la condición de militantes les era borrada para endilgárseles la de meros seres humanos, lo que hacía posible la protesta de los militares por sus propios derechos humanos y su correcto señalamiento de que todas las organizaciones guerrilleras habían caracterizado sus enfrentamientos con las Fuerzas Armadas como una «guerra».

Al mismo tiempo, los derechos humanos instauraban un tipo de razonamiento tautológico y autorreferente, que empezaba a repetirse en el mismo momento en que parecía que iba a empezar a explicarse. La apelación a los «derechos humanos», para comenzar, daba la impresión de que éstos estaban inscriptos en alguna parte como valor universal, y que ese valor había sido plenamente asumido y adoptado como tal por los principales protagonistas legítimos de la Argentina de la época en que las violaciones habían tenido lugar. Sin embargo, en la década del 70 la ideología de los derechos humanos en la Argentina tenía un coeficiente de popularidad muy bajo, ya que los principales grupos, partidos y clases sociales creían que lo más importante eran las relaciones de fuerza, y abundaban expresiones como «La violencia de arriba genera la violencia de abajo», «Al enemigo, ni justicia» y «La violencia contra los represores no es violencia: es justicia». El velatorio de los miembros del ERP muertos en Trelew había dispuesto de la hospitalidad de la sede central del Partido Justicialista, y la violencia de los grupos guerrilleros tenía una popularidad y una legitimidad social sin las cuales no habría podido extenderse como lo hizo. Los derechos humanos, pues, no habían sido sancionados realmente como ley de la tierra en la Argentina pre-Proceso.

## Dos

La primera sesión del juicio contuvo una extensa declaración de Ítalo Luder y testimonios de otros ex funcionarios justicialistas. El eje de las exposiciones, preguntas y repreguntas fue el significado preciso del verbo «aniquilar», que tan descuidadamente había incluido el ex presidente provisional en el decreto que había firmado autorizando a las Fuerzas Armadas a desarrollar acciones ofensivas para terminar con la subversión. Según opinó Luder, este verbo debía haberse interpretado como «inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significaba el aniquilamiento físico de los mismos». También justificó su decreto diciendo que «el terrorismo realizaba actos de ataque individual y colectivo, privaciones ilegales de la libertad, asesinatos colectivos e individuales. Estaba en juego la estabilidad de la Nación<sup>^</sup>). Sostuvo asimismo que «las policías provinciales habían sido rebasadas por falta de entrenamiento especial, de armas, y debido a ello, en salvaguarda de los intereses de la Nación, se extendió a todo el territorio la lucha de las Fuerzas Armadas contra la subversión<sup>^</sup>). Sin embargo, cuando el abogado Jaime Prats Cardona, defensor de Massera, le preguntó a Luder si entre las motivaciones para suscribir los decretos se encontraba «el estado de guerra que se vivía», éste eligió contestar: «No creo que haya existido estado de guerra; existieron, sí, amenazas». El diálogo tendió a repetirse entre los defensores, que querían que se estableciera la existencia de una guerra revolucionaria para justificar la represión, y los acusadores y testigos, que querían borrar toda prueba de que tal guerra hubiere existido para acusar a los represores de criminales comunes.

La segunda sesión del juicio incluyó significativos testimonios de oficiales navales retirados, que permitieron comprobar un grado de cohesión notable con respecto a la actividad de la fuerza en la guerra antsubversiva. El eje de las preguntas fue la ESMA, que había asumido tan desproporcionado papel y recibido tan nefasta publicidad en los años del Proceso como uno de sus principales infiernos represivos. El almirante Luis María Mendía dio la línea oficial de los viejos tiempos y dijo que la máxima responsabilidad en la guerra antsubversiva había correspondido al Ejército, negando que en la ESMA hubiera existido un centro clandestino de detención. Interrogado sobre el sentido del verbo «aniquilar», contestó, sin embargo, que «aniquilar significa destruir, reducir a la nada, según la Real Academia Española», opinó que se imponía «una lucha violenta, porque había una situación violenta, crítica» y agregó: «Las Fuerzas Armadas son destructoras en su accionar, no tienen términos medios, no usan gases lacrimógenos, en todo caso usan gases letales». El vicealmirante Antonio Vañek, ex comandante de operaciones navales, negó la existencia de centros clandestinos de detención, aunque admitió que a algunos prisioneros se los llevaba a «casas desocupadas, que dependían de la Armada Nacional» tras establecerse «en interrogatorios» que tenían una conexión o



vinculación con la subversión. Los interrogatorios «los efectuaba personal especializado, pero de ninguna manera se torturó». Admitió, con todo, que algunos detenidos permanecieron en esa condición más de 48 horas, superando el tiempo límite fijado por las propias Fuerzas Armadas.

El vicealmirante Pedro Santamaría, ex prefecto nacional naval, admitió que durante su desempeño se habían encontrado cadáveres en el Río de la Plata, pero en proporciones que no superaban lo normal. El contralmirante Manuel J. García declaró que se llevaban detenidos a la ESMA y se los alojaba en la planta baja del casino de oficiales, pero descartó que estuvieron engrillados o encapuchados, negó haber presenciado interrogatorios y afirmó desconocer si se practicaban torturas. Los contralmirantes Salvio Menéndez y Raúl Jorge González coincidieron en lo esencial con estas declaraciones. La progresión de los testimonios mostraba un gradual acercamiento a la verdad, pero se mantenía el viejo precepto naval de que «la ropa sucia se lava en casa», y las únicas diferencias que aparecieron respondían al lugar que cada testigo ocupó durante la época de la guerra sucia, a las declaraciones previamente efectuadas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y al principio de mantener un mínimo de verosimilitud aceptable.

El tercer día del juicio a las Juntas trajo mejores noticias a los procesados: los sindicalistas Ramón Baldassini, Rubén Marcos y Alberto Jorge Triaca se presentaron como testigos por la defensa. Los dos primeros, interrogados sobre la represión al movimiento obrero, omitieron por completo toda mención al caso del líder electricista Oscar Smith, desaparecido en 1977. La omisión resultaba totalmente menor dentro de la abrumadora evidencia incriminatoria contra las Juntas, pero mostraba el grado de desarme político e ideológico de una conducción sindical cuya base social —la clase obrera— había constituido la categoría más numerosa en los porcentajes de desapariciones. La verdad era que, más allá del caso de Oscar Smith —cuya omisión por parte de los sindicalistas constituía una especie de exceso de celo en el intento de mantener buenas relaciones con las Fuerzas Armadas—, los grupos de tareas en numerosas ocasiones habían realizado el trabajo sucio que la jefatura sindical de derecha peronista no había podido completar. Tanto el gobierno de Isabel como los sindicalistas y las Fuerzas Armadas se habían sentido amenazados por la irrupción de cuadros medios sindicales independientes e izquierdistas durante las grandes movilizaciones de 1975; el sector radicalizado de la clase obrera constituyó, por ende, el blanco prioritario de la represión militar. El juicio, de esta manera, confirmaba indirectamente que el objetivo del golpe había sido aniquilar lo que Ricardo Balbín denominó en 1975 «la guerrilla industrial».

## Tres

La totalidad del aparato que procedía ahora al juzgamiento, la acusación y las defensas de las Juntas estaba integrada por funcionarios y abogados que habían desempeñado cargos en el inoperante Poder Judicial de la época militar. La Cámara Federal estaba compuesta por los jueces Carlos León Arslanian, ex secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Jorge Torlasco, ex juez de instrucción en Río Gallegos; Andrés D'Alessio, ex asesor de la Administración General de Aduanas y secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Ricardo Gil Lavedra, ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma, de diversos desempeños en la carrera judicial y la enseñanza universitaria. El haber ocupado cargos en la época del Proceso no implicaba necesariamente su descalificación, ya que difícilmente se habrían podido conseguir jueces sin ningún desempeño notorio durante los siete años precedentes. Sin embargo, el dato mostraba el súbito cambio de roles que la modificación de la situación política imponía a los personajes en danza, con los antiguos funcionarios de una Justicia ciega, sorda y muda actuando ahora en el juicio de aquellos que habían ordenado aquella ceguera, sordera y mudez. La inacción y servidumbre del Poder Judicial durante la época del Proceso fue objeto de comentarios durante el juicio, y las reiteradas menciones al tema motivaron por lo menos una expresión pública de disgusto del juez Carlos Arslanian, presidente del tribunal.

El fiscal era el doctor Julio César Strassera, que en los años del Proceso había sido fiscal federal de primera instancia. Era una personalidad honesta y brillante, que a lo largo del juicio se conmovió en numerosas ocasiones por la fuerza de sus convicciones y de las evidencias, lo que le valió reprimendas y restricciones por parte de una Cámara ansiosa de autenticar su objetividad. Con los días, el fiscal se fue convirtiendo en una suerte de héroe de la sociedad civil, que veía en él a una especie de representante frente a la ignominia de los años vividos bajo la dictadura militar. Hombre delgado, enjuto, de grandes bigotes, Strassera fumaba un cigarrillo tras otro a lo largo de las sesiones, y su rostro progresivamente demacrado iría mostrando las huellas de las noches que pasaba en vela tratando de reunir y sistematizar la evidencia y los testimonios disponibles en un todo coherente. Sin embargo, cuando se trató de formular sus acusaciones, sacó de la galera la extraña fórmula de «terrorismo de Estado» que, al igual que la consigna de los derechos humanos, planteaba más preguntas de las que resolvía y se ponía al borde de evidenciar la naturaleza contradictoria y problemática del juicio. La figura del Estado, al presuponer un determinado ordenamiento jurídico, era lo más contradictorio con el terrorismo que podía existir. La expresión constituía un *oxymoron* conceptual, ya que se supone que el Estado es la administración socialmente legítima de la violencia y el terrorismo la violación de esa legitimidad.

Que un Estado haga terrorismo, que sustituya sus propios dispositivos legítimos de represión por el terror clandestino de los grupos de tareas, las desapariciones y las tácticas de «noche y niebla», significa lisa y llanamente que el Estado ha desaparecido como tal y queda reducido a una pura maquinaria administrativa disociada de los grupos terroristas competitivos que expresan el poder real. El fiscal, al usar la expresión «terrorismo de Estado», ponía de manifiesto la naturaleza problemática de lo que se estaba juzgando y llegaba al borde de comprender que entre 1976 y 1983 se había procedido a desintegrar al propio Estado, a las Fuerzas Armadas y al resto de las fuerzas legítimas de represión.

Que el poder real consistiera en el poder físico concreto sobre determinada zona, y que ese poder físico y concreto fuera ejercitado por un grupo de tareas de integración heterogénea, con militares y policías de distinta graduación y con civiles parapoliciales y paramilitares, implicaba la fractura de hecho de la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas y la relativización del poder central como fuente de legitimidad de la represión. La expresión «Yo soy el señor de la vida y la muerte en esta zona», que distintos detenidos escucharían de sus captores en distintos campos de concentración, mostraba justamente esta interrupción de la cadena de mandos y esta descomposición del Estado, contra las cuales el juicio a las Juntas interponía el recurso de procesar a los comandantes en jefe.

El juicio, de esta manera, se convertía en una etapa inicial de la reconstrucción simbólica del Estado argentino, al tiempo que aparecía como imagen especular de los procesos de Moscú en la década del 30: la posterioridad del Proceso se daba vuelta contra el Proceso y juzgaba a sus ejecutores; y así como la era posrevolucionaria del stalinismo en la Rusia soviética se volvía (para formar un Estado) contra los revolucionarios que le habían dado origen, la Argentina poscontrarrevolucionaria de Alfonsín y Strassera devoraba a los comandantes que habían construido el país pos-Proceso.

Los defensores de los comandantes fueron Juan Carlos Tavares para el general Videla (quien se había negado a acreditar oficialmente a un letrado y debió ser defendido de oficio); Prats Cardona para Massera, y distintos equipos de abogados para el resto. Uno de los que más se hizo notar fue el doctor José María Orgeira, quien en su defensa del general Viola, incurrió en diversos fallidos verbales que mostraron la naturaleza siniestra de las causas que se juzgaban. Orgeira, por ejemplo, se refirió a varios testigos llamándolos «el detenido», al tiempo que cuestionaba la integridad de sus testimonios en lición de sus supuestas adscripciones ideológicas y justificaba en repetidas ocasiones los «apremios ilegales» (la tortura) como medio para conseguir información de detenidos. Todo esto produjo violentas reacciones por parte de Strassera, quien en una oportunidad dijo que casi esperaba que el abogado se dirigiera a los testigos diciéndoles: «Todo está bien, quédense tranquilos, pueden sacarse la capucha».

El juicio tendía así a convertirse en una especie de exorcismo social colectivo de los horrores vividos en la etapa de la lucha contra la subversión. La Argentina escuchaba por primera vez en forma oficial y autorizada lo que por muchos años sólo había circulado de boca en boca, en secretos susurrados y en la forma de papeles de difusión clandestina. Los detenidos que habían sobrevivido aparecían en el estrado de los testigos como fantasmas y como resurrecciones horrendas para los acusados, que escuchaban el relato de lo que ellos mismos habían hecho sin poder hacer nada para suprimir esa verdad. Ahora que por fin se liberaba la verdad de lo que había permanecido reprimido en aquellos años, quedaba al mismo tiempo silenciado de hecho el posible contradiscurso militar, que solamente atinaba a balbucear la palabra «detenido» por «testigo» y la acusación de «marxista» a todo aquel que atacara al Proceso. El permiso para hablar otorgado a los viejos detenidos se traducía en el virtual enmudecimiento de los antiguos represores.

## Cuatro

Se podría pensar que Massera asistía a esta vuelta de la rueda del destino con amargura, resentimiento, contrición o ira. Se podría suponer que, habiendo sido durante muchos años el «señor de la vida y la muerte» de buena parte del país, y habiendo estado al borde de alcanzar el poder real en varias ocasiones, el almirante podía retraerse ahora en la contemplación melancólica del fracaso de sus ilusiones y el derrumbe estrepitoso del régimen que él había ayudado a construir. Sin embargo, nada estaría más alejado de la verdad. Massera, durante todos esos días, estaba exultante. Mientras Videla recibía a su familia y leía concentradamente libros de catequismo, y los otros procesados intercambiaban miradas y comentarios nerviosos y aprensivos en incierta espera del desarrollo de los acontecimientos, él lucía firme, seguro, sonriente y de buen humor ante el desarrollo del juicio.

Al igual que Videla, Viola, Lambruschini y Agosti, Massera permanecía detenido en la Unidad Carcelaria N° 22 (U-22), situada a poco más de 220 metros del Palacio de Tribunales, desde donde seguían las alternativas judiciales. Sus relaciones con Videla estaban virtualmente rotas en esa época, por lo que sus interlocutores más usuales eran los escasos amigos civiles que habían permanecido leales y, curiosamente, Viola. El almirante rebotaba desprecio hacia el tribunal y los testigos y no mostraba el menor signo de arrepentimiento o contrición por lo actuado. Al contrario, creía que la razón y el derecho estaban de su parte y que, si en esta ocasión las cartas le eran adversas, su razón y su derecho terminarían por imponerse.

Sin embargo, el buen humor y la jovialidad de Massera tenían una razón más frívola: nuevamente se veía en el centro de los acontecimientos. Superado el trago amargo de la caída en desgracia por el caso Branca, y después de un período de oscuridad, anonimato y silencio impuesto por el arrasamiento político del Proceso y el triunfo de las huestes democráticas alfonsinistas, el nombre de Massera había vuelto a la radio, la televisión y los diarios. Si bien su notoriedad era ahora «tristemente célebre», como se suele decir de los delincuentes y los asesinos, su instinto snob y egocéntrico reaccionaba complacidamente, mientras él se envolvía en su dignidad, su orgullo y su general optimismo para evitar el peso de la inmensa condena social.

Al levantarse cada mañana, Massera exigía todos los diarios, y trataba de ver y escuchar todo lo que tuviera relación con él en la televisión y en la radio. Seguía escrupulosa y metódicamente todas las crónicas del juicio, incluyendo los testimonios que le eran adversos, y se daba al ejercicio de probar la verdad y el error, la inconsistencia y la probabilidad, en la historia que permitían reconstruir las sucesivas declaraciones. También observaba con vanidad de actor las fotos suyas que aparecían publicadas en los diarios, aprobando o desaprobando cada detalle. Su buen humor

mejoraba notablemente cada vez que su nombre aparecía en los titulares: cuanto más altas y gruesas fueran las letras, mejor. No parecía importarle que estas apariciones en la prensa fueran para denostarlo, condenarlo o revelar muchas de las cosas que él mismo había mantenido secretas durante largos años. Creía que era mejor ser odiado que ser ignorado, ser temido que ser despreciado. Como confiaba en el espíritu autoritario mezquino y resentido del pueblo argentino, suponía que muchos de quienes se horrorizaban públicamente por sus crímenes estarían admirándolo rencorosa y envidiosamente en privado. Ya que, de un modo simbólico, sus «hazañas» eran en verdad muy argentinas, más específicamente porteñas, en el imaginario popular: Massera era «el vivo», el cínico, el que siempre se encontraba kilómetros por delante de sus oponentes ante cada jugada, el inescrupuloso, el dandy y el playboy, el que «no se la creía» y, finalmente, el más divertido e irreverente de una colección de represores donde sólo había cruzados solemnes como Videla, psicóticos paranoicos como Camps y personalidades grises como Viola, Lambruschini y Agosti.

El almirante estaba ampliamente seguro de salir triunfante en una competencia de popularidad con sus viejos enemigos, y también de poder convertirse en una suerte de jefe político simbólico de las Fuerzas Armadas durante el tiempo que se prolongara el juicio. Apostaba, de esta manera, a sus peores sospechas sobre la personalidad nacional argentina, y creía que tenía suficiente «resto» para imponerse como referente ideológico de unas Fuerzas Armadas confundidas, desmoralizadas, desunidas y largamente paralizadas, cuya única movilización era el impulso del desbande en pánico, y donde la única racionalidad que imperaba era la preservación de las instituciones militares como tales, por más que les fueran arrebatados sus históricos jefes. Massera, por lo demás, no ignoraba el hecho de que muchos cuadros medios y altos estaban insatisfechos con los hombres del Proceso y no los consideraban ya sus jefes, pero confiaba en poder imponerse y en poder recuperar la confianza apenas se le diera la oportunidad que necesitaba para reconstruir discursivamente los puentes entre él y la generación posterior rotos durante el hundimiento del Proceso. Y en esto, como en muchas otras cosas, mostraba su esencial filiación iluminista: consideraba que la política era un buen discurso, y un mejor argumento.

Aquí, sin embargo, Massera tropezaba con un crucial problema conceptual y metodológico, que era el punto donde su frivolidad publicitaria y su descarnada ambición de figuración, espacio y poder entraban en crisis con su inteligencia. Massera comprendía como nadie algo que se había vuelto evidente desde los primeros días del juicio y que ya se había insinuado desde que comenzaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos: por propia elección de las Fuerzas Armadas, el tema de la represión había permanecido en silencio, lo que había traído la inevitable aunque indeseada consecuencia de que toda posibilidad de discurso sobre la represión quedara limitada a los reprimidos, mientras a los represores sólo les

quedaba la observancia del pacto de mudez. Videla y Agosti habían rechazado en 1978 una propuesta de Massera para dar a conocer las listas de los caídos de uno y otro bando. Las Juntas Militares posteriores habían ratificado esta negativa crucial, con la Marina incluso condenándolo a sucesivos períodos de reclusión por atreverse a volver a mencionar el tema. Sin embargo, su propuesta, que en años pasados había sido poco más que una finta propagandística para diferenciarse «progresísticamente» de las sucesivas Juntas, ahora revelaba una especie de inesperada racionalidad última, de la que no había sido del todo consciente en el momento en que la había formulado. Las Juntas, al silenciar el tema de los desaparecidos, se habían metido involuntariamente en una suerte de cepo conceptual ante cualquier acusación posterior, ya que el silencio y la imposibilidad de una contraversión verosímil implicaban el autoamordazamiento en caso de que apareciera un enemigo que las atacara por ese flanco. Como oficialmente nada había ocurrido, las Fuerzas Armadas seguían negando impertérritas su responsabilidad mientras surgían nuevos testimonios, aparecían nuevos cadáveres y se examinaban los restos de antiguos campos de concentración desmontados apresuradamente. La actitud militar sólo consolidaba la creencia de la sociedad civil en la culpabilidad de los altos mandos, y los mismos militares empezaban a sentirse crecientemente incómodos por el inverosímil lugar en que la historia oficial los ponía frente a la díscola y cambiante opinión pública.

Massera, por consiguiente, enfrentaba graves problemas en la defensa que proyectaba hacer de las Fuerzas Armadas, ya que ellas mismas habían omitido defenderse por anticipado, imaginando (como también lo harían luego en Malvinas) que su triunfo era inevitable, y que nadie aparecería para pedirles una rendición de cuentas. La falta de toda versión militar creíble y verosímil sobre los desaparecidos implicaba que se imponía la que emergiera desde el bando en que se habían producido las desapariciones, lo cual se manifestó principalmente en la falta de una discusión verdadera sobre el número real de las desapariciones. Ciertamente, ese número era extraordinariamente elevado, lo que bastaba para explicar que se hubiera preferido el método de la desaparición clandestina nocturna al del fusilamiento bajo ley marcial a la luz del día: un gobierno puede justificar internacional y localmente el fusilamiento de cien opositores en un año, pero no el de 5.000,

Sin embargo, cuando las estimaciones sobre la cantidad de desaparecidos sobrepasaron el número 10.000 para llegar a 15.000, a 20.000 y finalmente a 30.000, los represores se dieron cuenta de que no tenían ningún argumento para discutir razonablemente esas cifras, ya que decir que los desaparecidos eran menos implicaba admitir que se habían producido desapariciones, y como legalmente nada había sucedido, los activistas de derechos humanos habrían podido decir que los desaparecidos eran 50.000 o 100.000 si esto no hubiera excedido cierto límite de credibilidad pública.

6.0, La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sábato e integrada por importantes personalidades del campo de la defensa de los derechos humanos, llegó a computar unas 10.000 denuncias por desapariciones, en su famoso informe *Nunca Más*. Los militares, en conversaciones privadas y entre ellos, generalmente llegaban a admitir unos de los cuales entre un 10 y un 15 por ciento habrían sido inocentes y «perejiles»: el margen de error de la represión militar. Sin embargo, en las denuncias de los organismos de derechos humanos apareció pronto la cifra de 30.000, como una especie de *ultima ratio* de lo que el régimen habría podido eliminar, y nadie pudo dar una respuesta sólida. Los militares no dijeron que habían sido y la Conadep no dijo que habían sido 10.000. La cifra «30.000 desaparecidos» quedó inscrita a fuego en la memoria de la opinión pública nacional e internacional, con el agregado de que la mayoría de ellos aparecía como inocente.

El establecimiento de culpas para los militares no iba a resultar moralmente menor si los desaparecidos eran 6.000 y no 30.000: las dos cifras constituían extremos desorbitados de genocidio social. Sin embargo, a través de la cifra de los 30.000 desaparecidos, que se volvería crecientemente inverificable en visión retrospectiva, se expresaba un poder ideológico de los organismos de derechos humanos que Massera y el resto de los acusados eran incapaces de contrarrestar, y que mostraba que, si entre 1976 y 1982 la «historia oficial» correspondió a lo que quisieran decir los victimarios, de 1983 en adelante correspondía a lo que quisieran decir las víctimas. El voto de silencio impuesto por los militares se les volvía en contra en el momento clave. Arriesgar una hipótesis sobre el tema excede los límites de esta biografía, pero una conjetura moderada podría sugerir que el número total de víctimas está por encima de la cifra registrada por la Conadep y por debajo del «gran total» de 30.000. El número no tiene importancia porque atenúe o refuerce la culpa de los ejecutores del Proceso, sino porque permite medir las relaciones de fuerza y el grado de tensión y enfrentamiento social en la época en que comenzó el Proceso. La apoliticidad o no de los desaparecidos también es importante, porque permite distinguir los hilos de racionalidad de un procedimiento sangriento que de otro modo se vería hundido en una pura tautología: el malvado carácter militar.

El Proceso, como demostró el juicio a las Juntas, no perdonó a nadie: incluso estudiantes secundarios que reclamaban la vigencia del pago reducido del boleto escolar fueron secuestrados, torturados y asesinados del modo más salvaje; era suficiente aparecer en la agenda de direcciones de un detenido para que una persona pudiera considerarse en peligro. Sin embargo, el grueso de las operaciones tuvo como origen la información de inteligencia compilada por las distintas policías en los meses previos al Proceso; la inteligencia militar jugó un rol marginal, y las operaciones derivadas de las confesiones bajo tortura, delaciones y «marcajes» y de la represión directa solamente empezaron a cobrar importancia después de la primera oleada de víctimas. Cuando se manejan cifras de bajas que exceden las 10.000 personas, y



cuando se está en presencia de un caos antiterrorista como el que vivió la Argentina a partir de 1976, los «errores» y «excesos» resultan inevitables, pero no existen evidencias de que el grueso de las bajas constituyeran «errores» y «excesos».

¿Qué racionalidad tienen la represión y la tortura? La pregunta es ineludible cuando se analizan — como se intentó hacerlo durante el juicio a las Juntas— los motivos, aspiraciones, responsabilidades y culpas del equipo que gobernó a la Argentina entre 1976 y 1983. La respuesta clásica de los defensores de la tortura consiste en que ésta constituye el procedimiento de acceso a una información que es de vida o muerte obtener. El general Albano Harguindeguy respondió una vez a un visitante extranjero preocupado por la vigencia de la tortura en la Argentina con estas palabras: «Imagínese que un terrorista se ha apoderado de armas nucleares y amenaza hacer volar con ellas a toda la ciudad de Nueva York si no se cumplen sus demandas. Imagínese que existe un plazo para cumplir, y que las fuerzas del orden capturan a un cómplice cuya confesión podría detener y desarmar al terrorista. Imagínese que este cómplice se niega a suministrar de buen modo la información, y persiste en abroquelarse en su silencio. ¿Usted no recurriría a la tortura para salvar a la ciudad, no recurriría a la violación de los derechos humanos de un individuo para salvaguardar los derechos a la vida de los demás?»

Sin embargo, esta pregunta, que naturalmente enuncia su propia respuesta, no se corresponde en absoluto con lo ocurrido en la Argentina entre 1976 y 1983. El conjunto de la información militarmente vital que los jefes del Proceso necesitaron para derrotar a la guerrilla no se obtuvo por tortura, y los testimonios de los propios torturados indican que las preguntas de sus torturadores eran notablemente paranoicas y fuera de foco. A Timerman, por ejemplo, se le preguntaba por una conspiración judía en la que participarían Israel, la URSS de Leonid Breznev, la banca judía de

Nueva York, las guerrillas palestinas y los Montoneros. Los torturadores en general sólo torturan para escuchar la respuesta que confirme su paranoia, y no son fuentes confiables de información, ya que un detenido sometido a la tortura puede confesar cualquier cosa. Por otro lado, en la época del Proceso, los detenidos más débiles cedían antes o al poco tiempo de que la tortura hubiera comenzado.

Un balance analítico básico de la tortura indica que no sirve para los fines de averiguación de los que viene investida, pero sí para divulgar un terror social que ella promueve anónimamente. Argentina no fue la misma después de la «operación quirúrgica» del Proceso, y esto se debió por completo a la masa de terror social producida por la represión. El disciplinamiento es la razón superior de la tortura y eso era lo que Massera recién comenzaba a comprender.

Massera, en resumen, afrontaba la tarea de defenderse a sí mismo, pero para

hacerlo debía defender a unas Juntas extraordinariamente torpes, cuyas políticas él mismo no había aprobado. La tensión entre estos dos estados de necesidad determinó su comportamiento en el proceso y su actividad posterior.

## Cinco

A medida que avanzaba el juicio, el papel de Massera se iba tornando más y más preponderante. El hecho no dependía sólo del extraordinario coeficiente de represión que había consumado en la época en que era comandante en jefe —alrededor de 5.000 «procesados» por la ESMA, según declararía un testigo— sino también de su extraordinaria duplicidad moral, su vocación de atribuir a los otros crímenes que él había consumado y sus juegos peligrosos en el borde de la legitimidad y la legalidad en la represión contra miembros disidentes de las clases dominantes argentinas. Massera personalmente no podía estar más satisfecho por el desarrollo de los acontecimientos: una vez caído en desgracia, prefería que la desgracia le perteneciera enteramente. Se manejaba en relación con el Proceso como si éste hubiera sido enteramente contra él, y se diría que le molestaban y aburrían las sesiones que trataban de otros comandantes y otras armas, como si le resultara insoportable no ser la monstruosa vedette en todas las escenas.

El juicio puso en evidencia otra paradoja del papel desempeñado por Massera durante la represión que se convirtió en motivo principal de su importante papel público ante el tribunal: el elevado lote de sobrevivientes de la ESMA, que ahora podían brindar su testimonio adverso. El número de sobrevivientes de otros campos de concentración importantes del Proceso era considerablemente menor, sin que lo fuera la magnitud de los crímenes que se habían cometido en sus perímetros. Un observador exterior de los sucesos comentó que el general Santiago Omar Riveros no se había portado mejor que Massera en Campo de Mayo, y sin embargo, pocos recordaban a este campo de concentración ya que los sobrevivientes habían sido muy escasos y, por ende, Riveros no tenía un lugar importante en el juicio, aunque lo hubiera tenido durante la represión. La ESMA fue, sin duda, uno de los campos más importantes del Proceso, pero al mismo tiempo fue el más permisivo en cuanto a salidas y liberaciones, y por eso mismo se convirtió en el más famoso. Quedaron vivos suficientes prisioneros para dar testimonio, lo que da cuenta de las ambiciones políticas del ex comandante, que aspiraba a convertir a esos hombres en oficiales de su propio proyecto político, y también de su ingenuidad, que suponía haberlos «convertido» completamente al ponerlos en libertad.

Massera tenía el problema de que las sucesivas deposiciones de los testigos iban alterando el lugar de potencial defensor de las Fuerzas Armadas que había imaginado para sí. La mayoría de ellos —fundamentalmente los extranjeros, como el almirante francés Antoine Sanguinetti, el abogado de la misma nacionalidad Jacques Miquel y la ex ícionaria norteamericana Patricia Derian— insistían en el hecho de que el almirante había atribuido el grueso de los crímenes al Ejército y minimizado su propia participación en la lucha contra la guerrilla. Cuando estos testimonios se

cotejaban con los de los ex detenidos, la imagen que emergía era la de un cínico y un oportunista en quien nadie podría confiar para reivindicar ningún principio. Videla, entretanto, permanecía solitario y estoico, y el resto de los procesados contemplaba a Massera con desconfianza.

Sin embargo, éste permanecía también estoico y enhiesto en la defensa de su propia perspectiva. Aunque siempre había caído preso de la tentación de identificar el poder con sus símbolos y atributos físicos, había pasado demasiado tiempo en las maquinarias y los instersticios del verdadero poder para sentirse amilanado por un mero revés de la fortuna. Massera, que despreciaba el estoicismo místico de Videla considerándolo una máscara de su debilidad, creía que el verdadero estoicismo era el suyo, y que consistía en permanecer íntegro e inmune a las amenazas de la época protegiéndose con el reducido calor de sus amigos, familiares y seguidores, consciente de que el poder físico estaba en manos de sus enemigos, pero también de que podían llegar a perderlo si hacían una mala jugada. Sabía que tenía que representar el papel de la seguridad en sí mismo, la confianza y el poder para que los otros siguieran respetándolo y temiéndole y que no era imposible que las cosas se desajustaran de modo tal que él terminara siendo el depositario del verdadero poder. Su estrategia conocía así una retrogresión fundamental: antes, cuando había sido comandante en jefe de la Armada, había intuido y olfateado el poder en la posibilidad del consenso con la sociedad civil y se había dedicado a cortejarla; ahora que era un militar retirado de un Proceso derrotado, dedicaba crecientemente sus energías a la recuperación del consenso militar, consciente de que el consenso civil le resultaba coyunturalmente imposible. A través de estos datos de la realidad iba elaborando su defensa final, que cada vez más imaginaba como una defensa general del Proceso.

Massera, desde la U-22, leía orgullosamente los testimonios de los detenidos que él había autorizado a liberar, como si todavía pudiera volver a encarcelarlos y como si le sorprendiera la volubilidad de la naturaleza humana. Comprendía que su defensa iba a tener que tomar en cuenta los hechos a los que se había dado conocimiento público durante el juicio, y que los testimonios deberían ser contestados convincentemente. El desafío, como siempre, sólo constituía un aliciente para él.

## Seis

A lo largo de estos días, Massera fue desarrollando una proximidad creciente con Lezama; el periodista había quedado como el último de sus amigos civiles y permanecía firme y leal más allá de todo oportunismo, fiel al pasado, como si nada pudiera alterar esa lealtad y esa fidelidad y como si lo único factible fuera permanecer junto a él. El final del Proceso había significado para Lezama el fin de *Convicción*, y por lo tanto de su principal fuente de ingresos. El día del cierre del diario tuvo que volverse a su casa en un taxi. A partir de entonces había soportado el destino de todos los caídos en desgracia. Los que ayer lo cortejaban hoy le daban la espalda; quienes durante el Proceso se desvivían por codearse con él, ahora se declaraban ausentes para todo, y más si se trataba de un pedido de ayuda. *Convicción* había dado albergue a más de quinientos periodistas, pero en el momento decisivo nadie le había tendido una mano a su director, ya que había una general ansiedad por desentenderse del molesto pasado. Como Lezama había rehusado usufructuar las oportunidades del enriquecimiento ilícito que le había dado *Convicción*, pronto debió dejar el lujoso departamento de la Avenida Libertador en que lo había alojado la Marina, buscarse una vivienda más modesta, quedarse sólo con sus colaboradores más próximos, e intentar reciclarse como columnista en diarios conservadores.

El destino del periodista no era intrascendente para Massera, porque aquél había sido durante mucho tiempo su voz y su articulación pública, su *alter ego* intelectual y discursivo y quien lo había ayudado decisivamente a tallar su personalidad frente a los cambiantes momentos de la historia. Se podría decir que, en un cierto punto, el almirante y Lezama habían sido una entidad simbiótica cuyo resultado había sido el Massera público, un personaje que tenía el aspecto de Massera pero pronunciaba el discurso de Lezama. En la época del juicio, el ex comandante descansó en gran parte en su amistad con Lezama, quien seguía impertérrito en la defensa de lo que ambos habían sido, y que divertía a su interlocutor con excursiones de humor británico frente a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Massera se interesaba en su *alter ego* en una medida en que este mismo no lo hacía: le preocupaban el desprendimiento y la fidelidad del periodista, como si ello implicara para él la acumulación de una inmensa deuda. Cínico y mundano, no podía comprender que un hombre de mundo capaz de comentarios cínicos tuviera, sin embargo, cierto íntimo código ético que le había impedido enriquecerse como director del diario mediante una simple manipulación de los avisos oficiales. El hecho llegaba a alarmarlo: el escritor y periodista aparecía líente al almirante como un ser fundamentalmente extraño y diverso, que a pesar de haber sido su voz no lo comprendía íntimamente y era esencialmente diferente a él.

Un día, Massera y Lezama discutían en la U-22 los pro y los contras de un

alegato final a cargo del primero. El periodista se ofreció a escribirlo y empezó incluso a hilvanar algunas frases que podían servir de introducción. Su interlocutor, molesto, lo interrumpió para reiterar una pregunta que ya le había hecho muchas veces:

—¿Cuánto quiere por esto?

—^Nada.

—¿Cómo que nada?

—Nada.

Massera no podía comprender que Lezama no tuviera precio. A su juicio, las cosas tenían una oferta y una demanda, una compensación natural y un equilibrio de la balanza de pagos que hacía que aquello que se daba f^era retribuido, y que la entrega tuviera como compensación una contraentrega. La actitud de Lezama le molestaba, le parecía una perturbación a su propia visión de las cosas. Al fin, le dijo:

—¡Usted no me puede someter a esta deuda!

A lo que Lezama contestó:

—No. Y como yo, según usted, no puedo hacerlo, solamente me imagino un desenlace posible: usted me va a matar.

## Siete

Strassera era consciente de lo que se estaba viviendo por momentos. En uno de ellos afirmó ante una corresponsal de Italia que «el juicio es una línea divisoria con el pasado» y que «acaso, el pasado terminó gracias a la crueldad de estos últimos comandantes». Sin embargo, el proceso por el cual llegaba a esta conclusión era espurio, e incluía divagaciones como «Los argentinos han vivido fases autoritarias desde los años 30 (¿) Nos daban el gobierno, nos lo prestaban por algún tiempo, luego volvían a retirárnoslo; ésta era una normal anormalidad». Como individuo inteligente que era, se daba cuenta de que el juicio a los comandantes era imposible sin la crueldad del pasado. Al mismo tiempo, como fiscal, como autoridad de acusación ante la opinión pública y como funcionario del gobierno de Alfonsín, tenía que suscribir a la universal superstición del autoritarismo militar, como si las Fuerzas Armadas no fueran intrínsecamente autoritarias y como si los sectores más importantes de la sociedad civil no hubieran cumplido roles clave, una y otra vez, para seducir a las Fuerzas Armadas a incursionar en el ejercicio de la política de Estado. Strassera era un alfonsinista de *ultima ratio*, que llegaba a desarrollar al extremo la hipótesis oficial y solamente dejaba así al descubierto su contradicción enunciativa. Pero él no se daba cuenta y proseguía, incansable.

La estrategia del fiscal irritaba profundamente a las defensas, particularmente a Orgeira, con quien protagonizó varios incidentes públicos. Con todo, a la hora de la verdad quedaba en evidencia que las defensas carecían de una estrategia única, y que en la mayoría de los casos se reducían a la protección individual del respectivo procesado, sin que se intentara una defensa global. Los abogados de cada comandante coincidían solamente en dos puntos fuertes: el «estado de guerra» y de violencia guerrillera en la Argentina en marzo de 1976, y el carácter de «juicio político» que iba tomando el proceso en curso. A partir de aquí sus caminos se separaban, y cada uno se lanzaba a la tarea de proteger a su defendido, aunque esto implicara echar las culpas y responsabilidades en el lote de algún otro procesado. El hábito se contagió rápidamente a los propios comandantes y a los oficiales retirados que prestaban testimonio, quienes intentaban atribuir los delitos a otras fuerzas en una muestra de que la descomposición de las Fuerzas Armadas y su cadena de mandos no había dejado incólume la lealtad más básica. El procedimiento tenía una razón de ser vulgar y práctica: las notables dificultades por las que pasaba el tribunal en el intento de reconstruir la grilla del aparato de represión de manera precisa. Las declaraciones de los testigos no permitían armar un panorama homogéneo: algunas veces las decisiones en juego habían contado con órdenes explícitas de los comandantes procesados; otras, los comandantes carecían de datos sobre las decisiones tomadas por quienes teóricamente eran sus subordinados, y abundaban las ocasiones en que estos últimos tomaban decisiones por cuenta propia para sabotear determinada

política de un comandante.

Una práctica que contribuía a desprestigiar públicamente a las defensas era la persistencia de algunos de sus integrantes, particularmente Orgeira y Prats Cardona, en subrayar los antecedentes políticos de los detenidos, como si esto atenuara los delitos de los que se responsabilizaba a los militares presentes. A lo largo del testimonio de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, se produjo, por ejemplo, el siguiente intercambio:

Jaime Prats Cardona: *¿Conocía con anterioridad a los integrantes de la Conadep?*  
Magdalena Ruiz Guiñazú: *A Sábado, sí, a los demás no.*

JPC: *¿Sabía que Carlos Gatinoni estaba ligado a una organización [llamada] «Consejo de la Paz» con sede en Praga?*

MRG: *No conocía ese detalle.*

JPC: *¿Sabía que el hijo de Hilario Fernández Long era secretario general por la rama juvenil del Movimiento Peronista Montonero?*

Carlos Arslanian: *No ha lugar a la pregunta.*

JPC: *¿No cree que la Conadep se ha excedido al calificar en el libro Nunca Más ciertos Algunos días después, Orgeira intentaba una línea parecida frente al testimonio de Martha Haydée García de Candeloro:*

JMO: *¿Conocía a Roberto Sanmartino?*

Guillermo Ledesma: *No veo la procedencia de la pregunta.*

JMO: *Señor presidente, como ya ha sucedido en otras oportunidades, la misma es tendiente a establecer la actitud de la señora antes de su detención.*

MHG de C: *Sanmartino era docente de la Facultad de Psicología.*

JMO: *¿Sabe la testigo cuál fue el destino de Sanmartino?*

MHG de C: *Apareció muerto en 1974, creo que en Mar del Plata; eso fue público.*

JMO: *¿Conocía la testigo a María Elena Sanmartino y a Carlos Alberto^ ?*

GL: *¿A donde llegamos, doctor? ¿Le consta que eran subversivos?*

JMO: *Eran marxistas.*



Esta última expresión provocó revuelo en la sala, ante lo cual Orgeira tuvo que explicar: «Yo no estoy en contra de las ideas, no estoy en contra de los marxistas teóricos». La testigo declararía más tarde: «Cuando escuché las preguntas de los defensores quedé paralizada: eran las mismas preguntas que me hacían mientras me torturaban^).

Mientras esto ocurría en los Tribunales, dos entidades perfectamente opuestas y antitéticas se disputaban la «crítica del juicio» desde la izquierda y la derecha respectivamente. La crítica de izquierda venía a cargo de las Madres de Plaza de Mayo, que acusaban a Strassera de «proteger a los cuadros medios de las Fuerzas Armadas» con su acusación limitada a los comandantes; las de derecha eran formuladas por los Familiares de Caídos en la Lucha Contra la Subversión (FAMUS), que reivindicaban a los militares y policías muertos y realizaban extravagantes declaraciones contra «el marxismo que nos gobierna». Los dos organismos se alternaban y hasta se complementaban en lo que comprendían y lo que no comprendían acerca del juicio en curso. Las Madres actuaban y protestaban como si se tratara de un proceso contra asesinos comunes porque no podían rescatar con toda integridad la lucha política de los caídos, y no podían entender, por lo tanto, que el juicio era sólo un primer paso en la reconstrucción del Estado, dentro del cual las Fuerzas Armadas tendrían un lugar. El FAMUS, que sí entendía el carácter de guerra que tuvieron los sucesos entre 1976 y 1982, se quedaba detenido en esa caracterización, asumía a los militares procesados como realidad cristalizada del Estado contra la subversión y creía, en consecuencia, que el juicio contra los procesistas era un juicio contra el Estado.

Las Fuerzas Armadas, a todo esto, soportaban el juicio incómodas pero impasibles: eran conscientes de que «el marxismo que nos gobierna» era, en realidad, el Estado. Odiaban a Alfonsín, pero sabían que no podían derrocarlo, y que esto era así porque la sociedad civil había recompuesto su entramado político. La posibilidad de permanecer —objetivo prioritario de toda estructura— les dictaba el imperativo de soportar al gobierno, mientras los generales calificaban al presidente de «marxista» en su fuero íntimo y concurrían a las misas del FAMUS.

## Ocho

Julio y agosto fueron los «meses de la ESMA» por el alto número de testigos que el fiscal decidió concentrar en ese período sobre la cuota de represión que había correspondido a la Marina de Guerra. A lo largo de días sucesivos, el nombre de Massera y las precisiones sobre su papel en el Proceso y en la represión se reiteraron en múltiples testimonios. Declararon, entre otras víctimas directas o indirectas de la represión naval, Emilio Fermín Mignone, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales; el sacerdote Orlando Yorio; el capitán de navío (RE) Oscar Quintero; el diplomático José María Vázquez; Ragnar Hagelin, el padre de Dagmar; Delia Rueda de Hidalgo Solá; Miriam Lewin de García; Lila Victoria Pastoriza de Jozami; Melchor Basterra, y Carlos Muñoz. Sintomáticamente, Massera y su defensor prácticamente se abstuvieron de participar en esta etapa, y su única intervención importante fue el anuncio de que querellaría a Mignone por «calumnias» porque éste había afirmado que el almirante le había dicho en 1979 que Videla era «un hijo de puta». Massera, de esta manera, dejaba que los testimonios establecieran con claridad inconfundible el alto papel que había tenido en la época de la represión, y solamente censuraba una declaración que lo hacía pasible de ser acusado de duplicidad ante los ojos de los militares. Aspiraba a representar el papel de defensor de los comandantes, del Proceso y de las Fuerzas Armadas, y sólo por eso intentaba disimular que en el pasado hubiera dicho que Videla era un «hijo de puta».

Los testimonios se sucedían casi monótonamente en la enumeración del horror. Las torturas de la ESMA, la selección del lote de «quebrados», el secuestro de las monjas francesas, la muerte de Dagmar Hagelin, la desaparición de Hidalgo Solá y la formación del Centro Piloto de París aparecían caóticamente, se entrecrocaban entre sí en los relatos, salían a borbotones después de un silencio de años. Junto a estos casos, aparecían otros menos conocidos, que permitían establecer la constancia de los métodos de represión y la persistencia de los mismos nombres, los mismos torturadores, los mismos jefes. Strassera desenterraba exhalaciones vivas del horror para fundamentar su caso, permitiendo que las simples coincidencias de las declaraciones de testigos múltiples establecieran los elementos de prueba. A lo largo del mes de agosto, el fiscal redondeó el corazón del caso contra Massera y la Marina de Guerra con las declaraciones de múltiples testigos sobre la desaparición de Elena Holmberg: el embajador Tomás de Anchorena, los cuatro hermanos de la desaparecida, el diplomático Gregorio Dupont y la periodista Silvia Agulla, entre otros. Sin duda el peso de la responsabilidad operativa por la muerte de Elena Holmberg —teniendo en cuenta la época en que se produjo, posterior al retiro formal de Massera de la comandancia del arma— recaía formalmente sobre el almirante Lambruschini, pero el responsable final a la vista de todos era Massera. El caso servía también para arrojar relámpagos de luz sobre otros costados más oscuros del Proceso.

El general Lanusse, durante su testimonio —efectuado en etapas anteriores del juicio— había relatado, por ejemplo, que cuando el general Guillermo Suárez Mason le recriminó en su presencia a un oficial de policía provincial que no hubiera avisado nada ante la aparición en el río de un cadáver que podía ser el de la diplomática, éste le contestó: «Y bueno^ Pero no se olvide que son miles los que ustedes han tirado en el río».

Justamente ésta fue la etapa del juicio que Massera más disfrutó, no sólo porque rescataba su nombre del olvido sino también porque le permitía volver a vivir lo actuado con un dejo de contemplación despectiva hacia quienes escuchaban. La narración pública de los crímenes constituía el relato de la impunidad, y era como si ahora él quedara impune por partida doble, definitivamente impune. Nadie podía quitarle ya el privilegio de haber sido omnipotente y cualquier castigo que recibiera iba a quedar muy por debajo de la deuda que había contraído. El almirante leía los diarios, seguía la radio y la televisión, comía con apetito y ensayaba con Lezama las principales líneas de argumentación del discurso que tenía proyectado pronunciar ante la ley.

## Nueve

El 11 de septiembre de 1986, la fiscalía inició el procedimiento de acusación, con la presencia en la sala, por primera vez desde el inicio del juicio, de los nueve comandantes: los generales Jorge R. Videla, Roberto E. Viola y Leopoldo F. Galtieri; los almirantes Emilio E. Massera, Armando Lambruschini y Jorge I. Anaya, y los brigadieres generales Orlando R. Agosti, Oscar Graffigna y Basilio Lami Dozo. Massera, enfundado en su uniforme de almirante, lideró la procesión de los acusados desde la entrada del tribunal hacia un largo banco situado frente al estrado reservado a los jueces; parecía estar sonriendo. Casi todos los comandantes habían decidido concurrir de uniforme; las únicas excepciones fueron Videla y Galtieri, que vistieron trajes grises. Se sentaron de acuerdo al orden en que venían: Massera, Viola, Lami Dozo, Galtieri, Agosti, Anaya, Graffigna, Lambruschini y Videla. Se hizo silencio, y Strassera inició la acusación.

El fiscal definió los crímenes bajo proceso como «el mayor genocidio en la historia del país». Sostuvo que no estaba solo en la empresa de reclamar justicia: «Me acompañan más de 9.000 desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador». Consideró que «no es posible explicar el terrorismo de Estado si no se lo sitúa en un contexto histórico», el cual «nos muestra como rasgo distintivo la pérdida de la conciencia jurídica, nos revela que frente a la usurpación del poder por medio de la fuerza, la corrupción en el manejo de la cosa pública y el fraude electoral, surge para ciertos sectores como única panacea la violencia guerrillera». Strassera, de esta manera, avanzaba el argumento alfonsinista de la ausencia de democracia como fuente de todos los males; sin que ello implicara justificar la guerrilla que, según él, era una suma de «grupos que perseguían la violencia como un fin en sí mismo y no como respuesta a un estado de cosas», impulsados por una «irracional pretensión de erigirse en la única alternativa válida, igualmente autoritaria que aquella que decía combatir».

Massera, hasta ese momento, había permanecido inmóvil (como el resto de los comandantes), enhiesto, envarado y con la vista al frente. Sin embargo, cuando el fiscal comenzó una enumeración sumaria, acompañada por fuertes expresiones de condena, de las acciones de la guerrilla entre 1973 y 1975, el almirante se distendió un poco, empezó a tamborilear con los dedos en el pupitre y formuló un breve comentario en voz baja a Viola. Cuando Strassera dijo que después del golpe de 1976 los cuadros de las Tres A se habían incorporado a la represión policial, Massera volvió a sonreír. Algo después, el fiscal cedió la palabra a su adjunto, el jurista Luis Moreno Ocampo, quien sorpresivamente decidió arrancar con una frase del almirante: «No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina».

Massera se sobresaltó y su mirada se cruzó rápidamente con la del fiscal adjunto. Moreno Ocampo prosiguió:

Ésta fue parte de una frase pronunciada por el entonces comandante en jefe de la Armada, almirante Massera, el 2 de noviembre de 1976. Para esa fecha en los altillos de la casa de oficiales de la ESMA, estaba Cecilia Inés Cacabellos, de 16 años: la habían encapuchado, esposado y engrillado. Mientras de puertas afuera se condenaba la violencia y se proclamaba la legalidad, en el interior regía otra forma más fuerte que la ley, de acuerdo con la cual decenas de Cecílias Cacabellos eran sometidas a tratos inhumanos. La ferocidad y la mentira son las dos notas del sistema de represión que los acusados implantaron durante años en la Argentina.

Los procedimientos de acusación se prolongaron una semana. Al cabo de la primera sesión, se vio al almirante partir en un automóvil rumbo a la U-22 hablando afablemente con su compañero de asiento, el general Roberto Viola. Al día siguiente consultó con avidez todos los diarios: quería ver su nombre impreso y estudiar sus fotografías para ajustar algún detalle de su persona pública —en su gesto, su porte y sus movimientos— que no lo satisficiera.

A lo largo de la segunda sesión, Massera escuchó resignado la larga exposición que hacía Strassera sobre los centros clandestinos de detención. Videla leía concentradamente los libros *Reflexiones del Apocalipsis* y *Las siete últimas palabras de Cristo* mientras simulaba prestar atención al desarrollo del juicio. La llegada de los comandantes al Palacio de Tribunales se veía rodeada de costosas y espectaculares medidas de seguridad, que incluían procesiones de autos policiales, motociclistas y tiradores apostados en las alturas de los edificios dotados de armas con mira telescópica. La Plaza Lavalle era escenario diario de una manifestación cuyas pancartas reclamaban «Juicio y castigo a los culpables».

El alegato de la fiscalía incluyó varias otras alusiones directas a Massera y a lo que había sucedido en la ESMA. Strassera, por ejemplo, mencionó el caso de Elena Holmberg como prueba de que durante el Proceso «la cercanía al poder era evidentemente tan peligrosa como el enfrentamiento con él». Asimismo, en un momento embarazoso para el almirante, Moreno Ocampo recordó la lista de desaparecidos que aquél había entregado a Giscard d'Estaing, en la cual atribuía la autoría de todas las muertes al Ejército.

El quinto día de la acusación, hubo un sugestivo razonamiento de Moreno Ocampo con respecto a la distribución de responsabilidades y culpas:

Vamos a colocarnos, por ahora, en la hipótesis más favorable a los acusados: vamos a suponer por un instante que no hubiese existido ningún plan orquestado y ejecutado a lo largo de todo el país; vamos, entonces, a tomar la teoría de que los

delitos que hemos acreditado son fruto de excesos de acciones independientes de personal de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Aun de aceptarse esa postura hipócrita, los acusados son penalmente responsables, y lo son por cada uno de los delitos que hemos enunciado, por todos y cada uno de los secuestros, de las torturas y de los asesinatos. Ello es así porque en determinadas circunstancias omitir, no actuar, constituye un delito: delito de comisión por omisión.

El razonamiento, que judicialmente podía ser impecable, traducía en otro ámbito la dificultad de representar una figura contradictoria en sí misma: el «terrorismo de Estado», con el alto grado de autonomía operativa que otorgaba a los grupos de represión para que cumplieran las órdenes de los comandantes en jefe, y que en algunos casos llegó a producir la creación de zonas de poder absolutamente autónomas. La responsabilidad militar última indudablemente recaía sobre los acusados, pero los hechos de que se daba testimonio indicaban que ellos habían sido algo más o algo menos que comandantes en jefe o jefes de Estado.

## Diez

El 19 de septiembre, Massera fue acusado formalmente por 83 homicidios calificados, 623 privaciones ilegales de la libertad, 267 aplicaciones de tormentos, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento público, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, una extorsión, 2 secuestros extorsivos, una supresión de documentos, 11 sustracciones de menores y 7 tormentos seguidos de muerte. La pena reclamada para él, al igual que para Videla, Agosti, Viola y Lambruschini fue la prisión perpetua. Strassera, en el tramo final del alegato, dijo de Massera: «Pesa sobre él la sombra trágica de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más horribles centros clandestinos de cautiverio y exterminio que hubo en el país». La exposición concluyó en forma vibrante: «Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria; quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más». La repetición del título del informe de la Conadep desencadenó una ovación que obligó a Arslanian a desalojar la sala.

La mayor parte del tramo final del alegato contuvo argumentos destinados a desmentir que la Argentina del Proceso hubiera vivido una situación de guerra:

Ninguno de los documentos liminares del Proceso habla de guerra, y ello resulta por demás significativo, porque resulta obvio que si los tres responsables militares del alzamiento del 24 de marzo de 1976 hubiesen creído que estaban afrontando una situación de guerra — cualesquiera fueran los calificativos que les mereciera — no hubieran omitido esa circunstancia en la proclama revolucionaria (^)

¿Qué clase de guerra es esta en la que no aparecen documentadas las distintas operaciones, que carece de partes de batalla, de listas de bajas propias y enemigas; de nóminas de heridos, que no hay prisioneros como consecuencia de ningún combate y en la que se ignoran las unidades que tomaron parte?^ ¿Qué clase de guerra es esta en donde los enfrentamientos resultan simulados y en la que todos los combates las balas sólo hallaron en su camino a los enemigos de las fuerzas legales, que no sufrieron una sola baja? (^)

¿Pueden considerarse acciones de guerra el secuestro en horas de la madrugada, por bandas anónimas, de ciudadanos inermes? Y aun suponiendo que algunos o gran parte de los así capturados fueran reales enemigos, ¿es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían ofrecer resistencia?^ ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes de los buscados como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? ¿Puede equipararse el saqueo del ajuar de una casa con la incautación del parque de artillería enemigo? ¿Son éstas las

consecuencias desagradables no queridas de toda guerra?

El alegato de Strassera tenía puntos fuertes y débiles. La apelación a una guerra por una parte había buscado investir de dignidad la lucha contra la guerrilla y sus secuelas, y en ese sentido tendía a tratar de alterar la percepción de una situación ya repudiada por la mayoría de la población. Sin embargo, al cuestionar el uso de la palabra «guerra», el juicio al Proceso desembocaba con naturalidad en la conclusión expuesta por Strassera en esa misma parte del alegato: había sido de «actos criminales comunes, que nada tienen que ver con la guerra». La acusación no podía menos que despertar entusiasmo en la sociedad civil, que se vengaba del prolongado período de arbitrariedad y clausura al que la había condenado la dictadura militar. Sin embargo, la calificación de «crímenes comunes» tenía también el perverso efecto de despolitizar el Proceso, de volver esencial lo instrumental —los crímenes— y hacer desaparecer lo esencial: la política en función de la cual esos crímenes se habían cometido. El juicio a las Juntas no contuvo una sola referencia al modelo de país que ellas habían construido, porque el juicio mismo era resultado paradójico de ese modelo de país.

Strassera, entonces, comenzó a demoler el posible atenuante de sugerir «por vía de la hipótesis» que se pudiera hablar realmente de guerra. El fiscal sostuvo que, si esto era efectivamente así, las situaciones de los acusados empeorarían y no mejorarían, ya que entonces estarían comprendidos en el Artículo 3 de los convenios de Ginebra, generalmente aplicado a los conflictos internos que obliga a «tratar con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable, basada en la raza, color, religión o creencias, sexo, nacimiento y fortuna, o cualquier otro criterio análogo, a las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso a los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa». Strassera sostuvo que «la falta de observancia de estos principios constituye infracción grave a los convenios y, como tal, según la doctrina internacional, crimen de guerra».

La noción de «crimen de guerra» nuevamente planteaba más acertijos que los que contestaba. ¿Qué había hecho que el fiscal se abstuviera hasta ese entonces de hablar de crímenes de guerra y hubiera persistido en hablar de delitos comunes, cuando los procesados podían haber sido culpados con mayor severidad en el primer caso? ¿En qué medida la noción misma de «crimen de guerra» no era un dispositivo que desautorizaba un crimen para autorizar otro, desautorizar los «excesos» para autorizar la guerra? La novedad que las Juntas Militares habían introducido en todo esto era el genocidio planificado y en gran escala de gran parte de la propia población. Sin embargo, acusarlas de «crímenes de guerra» hubiera implicado reconocer que en esa guerra había habido bandos, borrando de ese modo la imagen de la sociedad civil triunfando sobre las corporaciones militares para reemplazarla por la de partidos político-militares de derecha venciendo a partidos político-militares de izquierda. La



dificultad para determinar que la represión fue una guerra era la calidad ambigua, cambiante y confusa de la delimitación de bandos, lo que también informa sobre la ilegitimidad de la acción militar.

Massera, al escuchar las acusaciones, mezclaba una sensación de rabia e impotencia con cálculos precisos sobre respuestas posibles, su propia evaluación de los desarrollos del juicio y su general opinión de que la situación era farsesca. Una versión caricaturesca de sus opiniones estuvo representada por el contralmirante Horacio Zaratiegui, que concurrió a la sala de audiencias vestido de uniforme el día en que los Prats Cardona presentaban su alegato, y declaró que lo hacía porque «se está juzgando a un ex comandante en jefe de la Armada, no importa cómo se llame él, con lo cual se está juzgando a un hombre que, en su momento, representó con su accionar lo que la Armada quería, lo que a su vez era lo que el gobierno constitucional de Isabel Perón quería». Zaratiegui, que a modo de muestra de solidaridad se había sentado junto a uno de los hijos de Massera en la primera fila de la sección de espectadores, calificó al juicio de «inconstitucional» y «espectáculo circense». Sostuvo que los integrantes de la Cámara «no tienen autoridad ética como para, ahora, juzgar a quienes en su momento les impusieron —y ellos aceptaron— esa formalidad que significaba poner un estatuto por encima de la Constitución; hoy en día están juzgando según una Constitución que ayer menospreciaron y dejaron de lado». Y recordó que «tanto los miembros de la Cámara Federal como los de la fiscalía están, en todos los casos, involucrados en juramentos anteriores a los Estatutos del Proceso». Por estas declaraciones, al contralmirante se le prohibió el acceso a la Sala de Audiencias al día siguiente, cuando el propio Massera iba a ensayar su defensa.

## Once

El alegato de Prats Cardona, quien cobró 200.000 dólares por la defensa de Massera, fue formal, convencional, juricista, escasamente convincente y literariamente pasado de moda. Un murmullo de comentarios se levantó de la audiencia cuando, ensayando una cuerda más emotiva que la que hasta ese entonces había usado, el abogado exclamó que el almirante no era «un personaje ávido de sangre, sino un cazador de estrellas para defender a la Patria». Otro comentario suyo que causó sonrisas l<sup>e</sup>:

La Fiscalía, con una interpretación *sui generis* y maquiavélica, pretende responsabilizar de todo a Massera. Hasta si le robaron una bombacha o unos calzones a una detenida, la culpa la tiene Massera. Si algo pasó en Córdoba, la culpa la tiene Massera, y si algo pasó en Santa Fe, la culpa la tiene Massera. Todo esto me hace acordar a una vieja anécdota italiana, con un campesino muy protestón y opositor, y que, como sus cosechas fueron destruidas en una sequía, decía: «Non piove: governo ladro» (No llueve, gobierno ladrón).

El anticuado y florido estilo oratorio de Prats Cardona pasaba al lenguaje legal más aséptico cuando se trataba de formular argumentos jurídicos. Negó que Massera o cualquiera de los procesados fueran «criminales de guerra», y afirmó que el decreto 158/83, en que el gobierno decidió el procesamiento de los ex comandantes, era de una «insanable nulidad absoluta». Sostuvo que el gobierno no invocaba «razones de emergencia para dictar» ese decreto, lo que «invade facultades del Congreso de la Nación» y, «de continuar este camino, se desbarranca la Constitución». El énfasis del alegato estuvo puesto en probar que en la Argentina se había vivido «un estado de necesidad», impuesto por «la guerra revolucionaria» ya «desde antes del 24 de marzo de 1976». Según el defensor del almirante la Junta Militar<sup>^</sup>

\_se limitó a cumplir con las órdenes impartidas por los decretos del gobierno constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón. Cuando llegaron al poder las Fuerzas Armadas, éstas no modificaron un ápice las directivas del gobierno constitucional.

Es claro e indiscutible que las Fuerzas Armadas nada tuvieron que ver en la planificación de las operaciones de esa lucha antisubversiva. Cada fuerza actuó en forma individual, según esas directivas, aunque nadie discute que haya habido una interrelación.

La defensa de Massera comenzó con dos afirmaciones: 1) los autores mediatos no responden por las acciones cometidas, y 2) la conducta culposa no es imputable

criminalmente. El abogado dijo estar orgulloso de «asumir esta defensa en representación de la siempre límpida trayectoria de la Armada, a la que con torpe mano se quiso mancillar», pero «nuestra Marina, mal que les pese a quienes desearían lo contrario, está ajena a los avatares de este juicio sumario». Strassera y Moreno Ocampo eran los responsables de «un bochornoso acto teatral, al^

^ cometer la grosera incongruencia de decir que la lucha contra la subversión feroz, clandestina y cobarde, cuando precisamente el accionar guerrillero fue el que se caracterizó por su ferocidad y clandestinidad^ Fue grosera incongruencia tratar de equiparar el agredido con el agresor. Si este juicio es una tribuna de la subversión vencida, yo levanto mi voz para rendir homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas.

El alegato de Prats Cardona se dirigió entonces a fundamentar la «situación de guerra» previa al comienzo del Proceso. El abogado pasó más de una hora enumerando los antecedentes de ataques de la guerrilla y leyó proclamas y artículos de periódicos de organizaciones subversivas. Al terminar de leer un «Manual de Instrucciones de la guerrilla montonera» —donde se ordena a sus miembros no admitir jamás la pertenencia a la organización— sostuvo que «muchos de los testigos fueron muy consecuentes» con esta directiva. Citó expresiones variadas de ex legisladores peronistas y radicales de 1975 donde se destacaba el «estado de guerra» que vivía el país, y enumeró una larga serie de acciones guerrilleras contra el gobierno de Isabel Perón. «Si esto no fue una guerra —exclamó—, que venga Dios y lo diga^ Si esto no fue una guerra, ¿qué cosa fue? ¿Qué fue esta agresión que sufrió nuestro país?»

El resto de los descargos fue poco original: que en 1974, 1975 y comienzos de 1976 «las vías legales para combatir al terrorismo eran inexistentes, se vivía una guerra de hecho»; que para las fuerzas legales «era imposible» cumplir con los requisitos legales cuando se practicaba un allanamiento, que se había librado «una guerra atípica, en la que fue necesario utilizar procedimientos inéditos»; que «el terrorismo estaba librando una guerra civil que quería llegar hasta sus últimas consecuencias; para ellos el enemigo es absoluto y respecto de él no hay limitaciones», y que se había llegado a «una situación límite, conocida como guerra, y la expresión guerra sucia poco importante interesa». Como prueba, leyó otro documento montonero, esta vez titulado «Parte de Guerra». Al día siguiente, el defensor de Massera se dedicó a buscar inconsistencias en las declaraciones de los testigos, y concluyó solicitando la absolución.

La alocución de Prats Cardona no era notable por su nivel de argumentación, su solidez jurídica, su vuelo literario ni su grado de consistencia interna. El abogado, de hecho, estuvo a punto de deslizarse varias veces en la contradicción: las FE AA. no planificaron la guerra antisubversiva, o sí la planificaron, pero cada una por su lado, aunque hubo interrelación operativa; la Marina está ajena a los avatares del juicio,

pero él asume la defensa en representación de la Marina, y así sucesivamente. También hubo fallidos puramente verbales, como citar el decreto 158/83 «del 13 de noviembre de 1938» en lugar del 13 de diciembre de 1983 y referirse a una publicación del 11 de marzo de 1975 sosteniendo «es decir, pocos días antes de la Revolución^») en referencia al golpe de Estado de 1976, es decir poco más de un año después.

El abogado de Massera era un hombre viejo, que confundía las fechas y hacía curiosas hipérboles verbales cuando quería conmover a su audiencia. También era un jurista conservador, aferrado a la defensa de los gobiernos de derecha hasta el punto de citar disposiciones inconstitucionales para trabar procedimientos constitucionales. Sin embargo, lo que más se destacaba en él, situándolo cerca de Orgeira, era ese reaccionarismo espontáneo y natural, que hacía que uno llamara «detenidos» a los testigos y el otro hablara de «cazadores de estrellas», y cuyo anacronismo brotaba principalmente en la forma de extravagancias literarias. Sin que nadie lo hubiera planeado, el Proceso encontraba los defensores que le correspondían legítimamente. Y los testigos eran culpables hasta que se probara lo contrario.

## Doce

Al día siguiente, la expectativa se concentraba en el alegato personal que iba a pronunciar Massera, primero de los detenidos que hablaría desde el comienzo del juicio. La cantidad abrumadora de testimonios adversos había creado un vacío en el banquillo de los acusados, que las defensas secamente legalistas de los abogados no llegaban a colmar. El público que les gritaba «asesinos, asesinos» a Videla, Massera y los otros tenía una natural curiosidad por escuchar las respuestas, reflexiones y visiones de sí mismos de los «asesinos»; y la parte final del alegato de Prats Cardona pasó en nerviosa espera de las palabras del almirante. Al ingresar a la sala, un periodista se encontró de sorpresa con Lezama, quien lo saludó de buen humor y le dijo despreocupadamente: «Vine a escucharme».

El alegato de Massera fue dramático, teatral y contundente, y constituyó la verdadera respuesta al discurso de Strassera. Se podría decir que todas las características, virtudes, defectos, agudezas e ingenios de este personaje singular y problemático, cuya aura siniestra se mezcló con cierto romanticismo perverso, y cuya rebeldía y desobediencia a la ley terminaron construyendo la ley más terrible, se manifestaron en esa pieza oratoria, que él pronunció como si toda la vida se hubiera preparado solamente para eso. La sala fue entrando gradualmente en una atmósfera de máxima tensión, que no era provocada sólo por el tono reacio y las admoniciones del almirante, sino también porque éste ponía en evidencia las contradicciones argumentales del juicio. Se hubiera dicho que Massera usaba, al servicio de la contrarrevolución, una fórmula que Trotsky empleó para contraatacar a Stalin: intentar dar vuelta el juicio mientras éste tiene lugar; utilizar el juicio de condena como tribuna para agitar lo opuesto. Su drama era que el discurso no tenía destinatario real —fuera de la representación personal que él tenía de lo que eran las Fuerzas Armadas—, y que solamente podía producir la impresión, el asombro y el silencio. No se trataba de un discurso de autodefensa, sino de un discurso de acusación flamígera. El almirante, de pie y ligeramente nervioso, pronunció sin papeles el siguiente texto:

«No he venido a defenderme.

»Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí procesado porque ganamos una guerra justa. Si la hubiéramos perdido no estaríamos acá —ni ustedes ni nosotros—, porque hace tiempo que los altos jueces de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja Patria.

»Pero aquí estamos. Porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica. Quizá por deformación profesional estábamos absortos en la lucha armada, y estábamos convencidos de que defendíamos a la Nación. Y estábamos convencidos y sentíamos que nuestros compatriotas no sólo nos apoyaban, más aún, nos incitaban a vencer porque iba a ser un triunfo de todos. Ese ensimismamiento nos impidió ver con claridad los excepcionales recursos propagandísticos del enemigo y, mientras combatíamos, un eficacísimo sistema de persuasión comenzó a arrojar las sombras más siniestras sobre nuestra realidad hasta transformarla, al punto de convertir en agresores a los agredidos, en victimarios a las víctimas, en verdugos a los inocentes.

»Y esa guerra psicológica no ha cesado. Lleva más de diez años golpeando la sensibilidad de la gente, ayudada por un extraordinario apoyo de la prensa. Era —y es— imposible contestar esos ataques porque, en primer lugar, es muy difícil encontrar los medios dispuestos a jugarse por la verdad cuando la correntada social avanza en sentido contrario, y en segundo lugar, porque no se han tergiversado solamente las palabras, se ha tergiversado la convención social que le da a cada palabra un significado aceptable para todos. Así parecería que la democracia era el terrorismo y los que combatíamos al terrorismo éramos los auténticos terroristas.

»Así hemos perdido el sentido de la palabra “libertad” que es un bien en sí mismo, independiente de que alguien quiera arrebatárnoslo, y las usinas destinadas a la perversión de las ideas la han suplantado por la palabra “liberación”, que no supone un bien intrínseco, sino un bien coyuntural sujeto a que alguien nos esté oprimiendo. Se da entonces por sentado que siempre estamos oprimidos a menos que, claro, estén los liberadores manejando el poder.

»Cuando el enemigo se dio cuenta de que empezaba a perder la guerra de las armas montó un espectacular movimiento de amparo, inobjetable, del sagrado tema de los derechos humanos. Yo tenía muy buenas razones informativas para saber que se trataba de una guerra psicológica totalmente desprovista de buenos sentimientos, pero si algo me hubiera faltado para convencerme, aparece una satánica discriminación en los derechos humanos. Nunca, ninguna de las entidades beneméritas ni de las personas notables que alzan su voz por los derechos humanos, ninguna dijo nunca nada sobre las víctimas del terrorismo. ¿Qué pasa con los policías, los militares, los civiles que fueron víctimas — muchas veces indiscriminadas— de la violencia subversiva? ¿Tienen menos derechos o son menos humanos?

»Esta sencilla observación, que no hace falta demostrar porque ahí están los hechos, nunca fue objeto de la atención o al menos de la curiosidad de nadie, y a esta altura es una especie de valor aceptado por la sociedad que la violación de los derechos humanos estuvo únicamente a cargo de los represores y que las víctimas de esas violaciones son únicamente terroristas de la guerrilla subversiva.

»El asombroso silencio que hay en torno de esta monstruosa falsificación es suficientemente indicativo del grado de parcialidad que ostentan desde los dirigentes políticos hasta aquellos que deberán ser —por su investidura— profesionales de la imparcialidad, pasando por los jefes de los grupos de presión, siempre preparados para poner en la calle diez mil o veinte mil irracionales ululantes capaces de convencer a los poderes públicos de que ellos son la historia y ellos ya han dado su veredicto.

»No le reprocho al fiscal el estilo con que ha desarrollado la acusación porque, después de todo, el estilo es el hombre. Le reprocho sí, sus desagradables ironías sobre nuestros héroes, como en el caso del teniente Mayol. Alguien me dijo que era intolerable que se jugara al sarcasmo con nuestros muertos. Pero, ¿quiénes son nuestros muertos? ¿De quién son los muertos? Terminado el fragor de la guerra, todos los muertos son de todos, y nadie tiene derecho a hablar de ellos sin el respeto que a cualquier hombre moral y civilizado debe inspirarle la dignidad intrínseca de la muerte, aunque más no sea porque cada muerto es un testimonio tangible de la eternidad.

»Pero si no ha habido serenidad para hablar de nuestros muertos, ¿quién sería tan candoroso de esperar un proceso objetivo para los que están vivos? ¿Quién sería tan candoroso de esperar un proceso objetivo en medio de esta presión social? ¿Quién sería tan candoroso de pensar que se está buscando la verdad, cuando mis acusadores son aquellos a quienes vencimos en la guerra de las armas?

»Aquí estamos protagonizando todos algo que es casi una travesura histórica: los vencedores son acusados por los vencidos. Y yo me pregunto: ¿En qué bando estaban mis juzgadores? ¿Quiénes son o qué fueron los que hoy tienen mi vida en sus manos? ¿Eran terroristas? ¿Estaban deseando que ganaran los represores? ¿Eran indiferentes y les daba lo mismo la victoria de unos que la de otros? Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, en donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo, en donde el exceso era la norma. Esto que acabo de decir es el punto central y tanto que la acusación no ha hecho otra cosa que tratar de demostrar que los excesos eran norma en las fuerzas legales. Naturalmente, no es cierto. Cualquiera puede imaginar que nadie transforma a los oficiales y suboficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en una banda de sorprendentes asesinos que de la noche a la mañana pierden todo reflejo ético.

»Pero lo que no hace falta demostrar es que en una organización terrorista el exceso es la norma, simplemente porque el exceso es su razón de ser. Claro que de eso no se habla, parece un simple detalle. Pero ellos, los que ejercieron el exceso como norma, son mis acusadores, son mi simple detalle.

»En la obsesión del enemigo por debilitar a las Fuerzas Armadas no han

ahorrado hasta el uso de la infamia menor, tratando de mostrar supuestos agravios y recriminaciones recíprocas entre los que ejercimos el comando de las Fuerzas Armadas en aquel momento. Los distintos puntos de vista políticos que existieron, se mantuvieron siempre en el plano de las ideas y es simplemente ridículo pensar que eso tenía consecuencias en las relaciones institucionales como en las personas. A pesar de esas diferencias, nunca se perdió el respeto entre nosotros. No obstante, comprendo que a los vencidos les interese difundir esa fábula con la esperanza de que las Fuerzas Armadas de hoy se miren con suspicacia: Dividir para reinar. Pero lo que están delatando es, en definitiva, miedo, mucho miedo. Porque el enemigo sabe que las Fuerzas Armadas de hoy son capaces de derrotarlo como las Fuerzas Armadas de ayer.

»No he venido a defenderme. He venido, como siempre, a responsabilizarme de todo lo actuado por los hombres de la Armada mientras tuve el incomparable honor de ser su comandante en jefe. También me responsabilizo por los hombres de las fuerzas de seguridad y policiales que durante mi comando actuaron subordinados a la Armada en la guerra contra la subversión. Quiero decir, además, que me responsabilizo por los errores que pudieran haber cometido.

»Pero si el Tribunal necesita para eximir de responsabilidad a mis subordinados, a todos mis subordinados, que yo deba aceptar, además de todas sus actuaciones, que fueron cumpliendo órdenes precisas que yo debiera haber impartido personalmente y en forma omnipresente, lo acepto. Yo, y sólo yo, tengo derecho al banquillo de los acusados. Sentar a otros aquí sería como sentar a la Argentina en el banquillo de los acusados, porque en verdad les digo que la Argentina libró y ganó su guerra contra la disolución nacional. Pido a Dios que el Tribunal no cometa la equivocación de poner al país en estado de proceso, porque esa equivocación equivaldría a haber perdido también la guerra de las armas. Si necesitan acabar con nosotros, háganlo, pero no le arrebatan a la Argentina la única victoria de este siglo.

»Mi serenidad de hoy proviene de tres hechos fundamentales. En primer lugar, me siento responsable pero no me siento culpable, sencillamente porque no soy culpable. En segundo lugar, porque no hay odios en mi corazón: hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que estamos viviendo. Y en tercer lugar, porque estoy en una posición privilegiada. Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia y es allí donde se escuchará el veredicto final.

»Casi diría que afortunadamente carezco de futuro. Mi futuro es una celda. Lo fue desde que empezó este fantástico juicio y allí transcurrirá mi vida biológica, ya que la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma, se la entregué voluntariamente a esta veleidosa y amada Nación.



»Sólo de una cosa estoy seguro. De que cuando la crónica se vaya desvaneciendo porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les he dejado.»

## Trece

Massera, con este discurso, se reconocía a sí mismo en una posición que no había experimentado nunca. Trotsky, durante los Procesos de Moscú, se había encontrado *in absentia* en un papel análogo: había sido el destinatario final de las acusaciones del stalinismo porque, a pesar de encontrarse ausente, él era la figura encarnada de la Revolución, contra la cual el Termidor posrevolucionario tenía que movilizarse. Massera, para los magistrados del juicio a las Juntas, era similarmente la figura encarnada de la contrarrevolución armada, contra la cual ellos tenían que movilizarse puesto que encarnaban un Termidor democrático que en realidad era el resultado de lo mismo que ahora se apresuraban a condenar. ¿Acaso la propia Revolución Rusa no había sido un golpe de Estado idealista, investido ideológicamente de los altos ideales de sus jefes, al que Stalin se apresuró a arrebatarse toda máscara? Análogamente, Strassera desenmascaraba al Proceso, pero entonces Massera desenmascaraba a Strassera. Sin embargo, el fiscal tenía la desagradable razón histórica, como en su momento la había tenido Stalin: uno y otro representaban el desemboque de determinado proceso, y llegaban a convertirse en su negación sólo a través de haber llegado a ser su despliegue último.

Massera dirigía su alegato y contraataque a los jueces con una frase principal: Ustedes no estarían allí si nosotros no estuviéramos aquí. El aquí y el allí, el estrado de los magistrados y el banquillo de los acusados, se relacionaban solamente al avatar de la circunstancia histórica. El almirante acusaba a los jueces de haber sido los mismos que en el Proceso habían representado la ley y, consecuente e implícitamente, se asomaba al principio de reconocer que toda ley era la ley de la clase política dominante de la época, y ulteriormente de la clase dominante en sí. Sin embargo, cuando llegaba al borde de esbozar este razonamiento, como al advertir que en realidad el tribunal no debía cometer el error de poner al país en estado de proceso porque ello equivaldría a «haber perdido también la guerra de las armas», Massera formulaba contra sí mismo una advertencia que la Argentina burguesa no debía ignorar. Ciertamente, él estaba dispuesto a sacrificarse. Siempre lo había estado: ésa y sólo ésa es la esencia formativa de un militar, por más anárquico, irregular, irreverente y anómalo que éste sea. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que el tribunal lo convirtiera en chivo expiatorio de un proceso general, y por eso le recordaba los lugares, identidades y filiaciones de cada uno.

Como era incapaz de juzgar y condenar del todo a la Argentina burguesa, debía formular esa última advertencia y estar dispuesto a sacrificarse, a resignarse a la celda y a la pura vida biológica. Pero decía las cosas para que quedaran dichas, para que constara que alguna vez esa posición había sido defendida, y en su alegato —que cobijaba a los otros miembros de las Juntas, a muchos de los cuales en realidad

detestaba— resonaba una sinceridad de propósitos que no se mostraba en el recurso a los derechos humanos del nuevo *establishment* político: la sinceridad de propósitos que podían demostrar los que habían ganado la fase militar de la guerra y eran incapaces de admitir que grandes sectores que en su momento los habían apoyado —no sólo la burguesía, sino también amplias franjas de la clase media, para no hablar del solemne aparato de la ley— ahora se les volvieran en contra y necesitaran conquistar su propia legitimidad hundiéndolos a ellos.

La burguesía argentina con el apoyo de las clases medias, ante el colapso de los partidos, la implosión del gobierno de Isabel Perón, el vaciamiento del sistema político y una clase obrera en desborde, había seducido a unas Fuerzas Armadas reacias, heridas de sus últimas experiencias gubernamentales, vacilantes en sus grados de adscripción militante antisubversiva, para que volvieran al ejercicio del poder. Éstas, a partir de entonces, habían cumplido la tarea sucia de la burguesía y los factores de poder, y lo habían hecho a sangre y fuego, en registro de las propias heridas sufridas, en inconsciente presciencia de la finalidad de los objetivos últimos y en confusión entre instrumentos y fines. Massera era quien mejor representaba esto último, ya que había sido el militar que más y más conscientemente había aspirado a aprovechar su posición de transitorio poder delegado para tratar de convertirse en poder real. Sin embargo, cuando la burguesía y los factores de poder dijeron a las Fuerzas Armadas que era tiempo de que abandonaran la escena porque su tarea ya estaba cumplida, éstas se habían negado, fundamentando esa negativa en una confianza, fetichista y superficial pero momentáneamente efectiva, en su monopolio de las armas.

Una declaración del presidente de alguna corporación no podía, efectivamente, voltear a un gobierno, pero como ese gobierno ya se sustentaba solamente sobre las armas y no podía concitar el apoyo de ningún sector de la sociedad civil, su destino era girar en el vacío. El gobierno del Proceso giró en el vacío desde 1980 en adelante, ya habían terminado la guerra contra la subversión y la reorganización económica del país. Sin embargo, la corporación militar se negó a abandonar el poder y, flotando en un vacío social, cayó presa de la idea de recuperar las Malvinas como fuente proveedora de legitimidad. Argentina, desorbitada entonces de «Occidente», debió ser derrotada por Occidente: Gran Bretaña. El resultado final de esta trama era el gobierno democrático y el juicio a las Juntas.

Massera, entonces, se encontraba en la posición dramática y única de acusar (en defensa propia) a la democracia, porque ella lo acusaba a él pese a que no hubiera sido posible sin él: «Veleidosa Nación<sup>^</sup>), como dijo.

El alegato de Massera, preparado para todos y para ninguno, tenía como único destinatario obvio a las Fuerzas Armadas, más particularmente a la Marina. El almirante, en un gesto de dignidad personal, se hacía cargo incluso de los últimos

actos de sus subordinados, que legítimamente no podía haber controlado, pero también asumía la defensa del Proceso en su conjunto: una de sus frases culminantes —«las Fuerzas Armadas de hoy son tan capaces de derrotarlos como las Fuerzas Armadas de ayer»— daba testimonio de su vocación de liderazgo sobre la corporación militar. Sin embargo, en el contexto de derrota en que fue pronunciada, resultaba menos una apuesta al liderazgo de las Fuerzas Armadas de la derrota que una reivindicación. Las Fuerzas Armadas habían triunfado en un plano que ellas mismas no podían reconocer (estaban sometidas a juicio) ni tampoco desmentir del todo (eso hubiera implicado levantarse contra el régimen y no podían hacerlo porque, independientemente de su voluntad, eran la institución armada de alguien). Massera, con sus extravagantes excursiones por las victorias militares, las derrotas políticas y las guerras propagandísticas, constituía el dialecto de articulación verbal de esta situación contradictoria. Los errores de lógica de su discurso representaban imposibilidades de dicción de determinados enunciados, que quedaban paradójicamente iluminados por los aciertos que sus enemigos se resistían a entender.

Había, sin embargo, un elemento de verdad en las reivindicaciones del almirante, algo que excedía el oportunismo de intentar convertirse en nuevo líder militar y que abrazaba su propia historia. Massera no temblaba, empalidecía ni alzaba el registro de su voz —como ocurrió durante el alegato— porque temiera a Strassera, Moreno Ocampo o Arslanian, sino porque se enfrentaba al imaginario de una Argentina burguesa a la que siempre había respetado, y porque era contra ella que debía defender todo lo que había hecho para que esa misma Argentina burguesa siguiera existiendo. El almirante, finalmente, se encontraba con su destino militar: subordinación y valor.

El alegato de Massera deja verdaderamente un solo punto de duda, que en realidad constituye el error fatal y al mismo tiempo la imposibilidad de expresar la verdad que sufrían todas las defensas del juicio: la caracterización sobre si la Argentina verdaderamente había vivido una guerra y qué procedimientos eran lícitos emplear en ella. Ciertamente, la guerrilla de 1975 no estaba a punto de tomar el poder, ni tampoco lo estuvo en los primeros meses de 1976, cuando arrastraba una existencia derrotada cuyo logro principal era la producción de esporádicas acciones armadas. Creer el argumento de que la guerrilla era el motivo del Proceso implica creer a las defensas del juicio, y hacer una homología discursiva respecto de la conciencia militar de la época. Indudablemente, la acción de la guerrilla había sido el principal factor de convicción de las Fuerzas Armadas respecto de la guerra antisubversiva, pero creer que esto era lo fundamental implica desconocer la historia argentina de los años 1975-1976, y confundir fetichísticamente el poder con los atributos de los hechos armados. Se podría decir que la acción de la guerrilla fue el *casus belli* del Proceso, pero el Proceso en sí era resultado de una necesidad profunda de reestructurar la sociedad argentina para superar las condiciones de una situación de crisis política permanente.

La Argentina, después del Proceso, nunca volvió a ser lo mismo que era aunque los custodios más celosos del orden confundieran un desorden militar con un golpe y una crisis del sistema con su inmediato derrumbe. El juicio a las Juntas constituía el procedimiento simbólico por el cual se pasaba de una etapa a otra; por eso no importaría demasiado que los militares procesados finalmente condenados pudieran disfrutar de privilegios, pasearse en libertad o salir indultados: para el régimen eran cadáveres políticos, por más que los organismos de derechos humanos y la oficialidad descontenta dijeran lo contrario.

## Catorce

El 9 de noviembre de 1985 era un día caluroso y húmedo en Buenos Aires. Hugo Ezequiel Lezama soportaba resignado el clima matutino, esperando el resultado judicial que había imaginado inevitable y que en cierto modo había prefigurado en el alegato que le había escrito al almirante: prisión perpetua. La casa del periodista ese día estaba singularmente desierta, y las manchas de sol que se filtraban a través de las persianas entornadas no hacían más que acentuar la impresión de soledad.

La indecisión se apoderó de Lezama: ¿Ir o no ir? A ir lo impulsaban todos los años pasados, todas las solidaridades, todos los discursos y el hecho de que él se había convertido en el *alter ego* de Massera, en su programa político, en su lenguaje de articulación. Con todo a pesar de todo esto, a pesar de que Massera era en cierto modo una creación literaria suya, su mejor libro y su mejor personaje, y a pesar de que los dos habían sido funcionalmente una entidad simbiótica por largo tiempo, el ex director del ex *Convicción* vacilaba en concurrir al penal de Magdalena, donde por ese entonces Massera ya estaba alojado. Temía molestar, de una manera u otra, al hombre que él había ayudado a crear, pensando que podía estar rodeado de compañías más íntimas. Al final se decidió a partir junto a su hijo, en una especie de furgón camioneta que usaba desde la época del diario. Como eran las 9 de la mañana, Lezama pensó que Massera y él podían comer un asado en el quincho de los detenidos a mediodía, y se detuvo a comprar carne.

El día estuvo signado por una particular soledad e irrealidad, y por una cierta tristeza. Apenas padre e hijo llegaron al lugar, advirtieron las ausencias: todos, misteriosamente, por un rigor del destino o de la casualidad, habían coincidido en no concurrir a la cita. Videla debía estar, seguramente, leyendo la Biblia con su familia en otro lugar; Viola, bebiendo un lento vaso de vino tinto y fumando en otra parte, y así sucesivamente. Tampoco estaba allí la familia de Massera. El lugar era una reunión de ausencias, puesta de relieve por el sol sin encanto de las 11 de la mañana y por las débiles nubes que ayudaban a esparcir una brillante luminosidad blancuzca por todo el paisaje. Se hubiera dicho que nadie vigilaba el lugar, y que éste no era el sitio de detención de peligrosos prisioneros que afrontaban un dictamen judicial por la muerte de más de 9.000 personas. Sin embargo, un guardia les pidió documentos e inspeccionó rigurosamente el furgón camioneta. Algo después, el vehículo avanzaba al encuentro de Massera.

Apenas lo divisó, el almirante saludó sonriente, entusiasta y eufórico, y empezó a hacer gestos. Según pudo ver Lezama desde el asiento del conductor, Massera, vestido informalmente, sonreía y le hacía con las manos una señal que

indicaba el número doce. Sus labios también parecían pronunciar la palabra doce. El periodista asoció inmediatamente el número con los años de prisión que aquél creía le corresponderían. Sin embargo, la sentencia estaba programada para más tarde; además, ellos habían hecho el recorrido hasta la prisión con la radio encendida sin escuchar noticias al respecto. El furgón-camioneta se detuvo cerca del almirante y Lezama bajó preguntando:

—¿Ya dictaron sentencia?

—Me van a dar doce años —repuso Massera, seguro de sí.

—¿Pero, dictaron sentencia?

—Todavía no, pero me van a dar doce años.

—¿Y cómo lo sabe?

—Porque anoche soñé con el número 12, y además me lo dijeron dos videntes.

A continuación, el almirante acompañó animadamente a su visitante a la casa que hacía las veces de prisión y, mientras trasladaban la carne para el asado, le explicó que doce años implicaban en realidad menos tiempo, porque debían computarse más de dos años que él había pasado encarcelado por el caso Branca y a disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Massera estaba eufórico; Lezama, no tanto. Estaba seguro de que la sentencia sería prisión perpetua y le daba pena que Massera no se diera cuenta, sobre todo cuando lo había admitido implícitamente en el discurso de alegato que él le había escrito. Como Lezama, en cierto modo, había dedicado su vida a la construcción de un héroe, a la organización de sus atributos literarios y a la dignificación de sus acciones, ahora encontraba triste que ese héroe rehusara aceptar la inevitabilidad del destino, ni siquiera cuando estaba inscripto a fuego en el desarrollo previsible de las cosas.

El almirante y el periodista prepararon el asado bebiendo vino tinto. Parecía un espléndido almuerzo criollo, pero no lo era. ¿Por qué estaban tan solos? ¿Dónde estaban los otros comandantes? ¿Qué pasaba con la familia de Massera? Cada insinuación de Lezama era rápidamente aventada por el prisionero, que seguía haciendo pronósticos radiantes sobre su destino inmediato.

Comieron lentamente, de un modo agradable para Massera pero incómodo para Lezama, que no podía soportar que ese hombre se estuviera haciendo ilusiones y que él mismo no se atreviera a desilusionarlo. Al final, le pareció que omitir una advertencia era traicionarlo, y que el almirante debía estar preparado para lo que viniera. Cuando éste repitió una vez más su propio pronóstico sobre la condena que

lo esperaba, Lezama hizo un esfuerzo, miró a la cara a su *alter ego* y le preguntó:

—¿Quiere que le diga lo que pienso?

—¡Pero claro, hombre! —replicó jovialmente Massera.

—Perpetua —dijo Lezama en tono lúgubre.

—¡Usted está loco! —contestó Massera con una sonrisa más jovial aún que antes—. ¡Cómo se le ocurre!

—^No es lo que yo quiero —se sintió obligado a aclarar Lezama—. Pero eso es lo que pienso, y me siento en la obligación de advertirlo: Perpetua.

Massera desechó la opinión del periodista y siguió hablando del juicio, del resultado que él creía inevitable, y de las cosas que podría hacer. La sobremesa transcurrió del mismo modo que el almuerzo, con el almirante sonriente, optimista y eufórico y Lezama contemplándolo sombríamente, sonriendo a veces, obligándose en otras a hacer un comentario de ocasión.

Al promediar la tarde, la radio empezó a difundir los pormenores del juicio. Massera propuso que se trasladaran todos al interior de la casa y así lo hicieron de inmediato. El ex comandante, como en los viejos tiempos, sacó de una alacena una botella de whisky, sirvió medidas para él y para Lezama y empezó a cortar salamines, cuyas rodajas devoraba distraídamente mientras hablaba: era como si nada hubiera cambiado. Su ánimo, su rostro y su aspecto físico no se habían modificado; parecía el mismo que antes, excepto por la vestimenta más informal y la comparativa modestia del ambiente. El almirante no se preocupaba: tomaba otro whisky, volvía a llenar el vaso de su amigo, y cortaba más rodajas de salamin. Con todo, Lezama podía advertir un dejo de inquietud, que se manifestaba en la propia euforia maníaca con la que hacía las cosas y en la insistencia con la que repetía que todo estaba y estaría bien. Afuera atardecía.

Por fin la radio empezó a difundir las alternativas últimas del juicio. Los tres hombres hicieron silencio y se concentraron alrededor de la vulgar mesa circular de fórmica, donde estaban el whisky, los vasos, los salames y el aparato de radio. La expectativa era grande: Massera, en realidad, no estaba seguro de lo que iba a suceder, y había apostado a la cifra de doce años como si fuera un jugador; Lezama, en cambio, adivinaba el resultado y temía por sus consecuencias en un hombre que quizá no estuviera preparado para recibirlo. La voz de Arslanian pronunció, por fin, las sentencias: condena perpetua para Videla y Massera, 17 años de prisión a Viola, 8 años a Lambruschini, 4 años y medio a Agosti y absolución para Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo. A los dos primeros se les agregaban inhabilitación perpetua absoluta, accesorias legales, accesorio de destitución y pago de las costas. Se lo



encontró culpable por 12 tormentos, 69 privaciones ilegales de la libertad calificadas por violencia y 7 robos.

Alrededor de la radio se hizo un silencio durante la lectura de las conclusiones del tribunal. Massera, Lezama y el hijo de éste permanecían callados, como si fuera necesario que todo fuera leído y dicho y que ellos tuvieran constancia.

Al final, Massera se derrumbó. Sentado, con los brazos cruzados sobre la mesa, los ojos le brillaron, y fue como si algo se quebrara y se hundiera dentro suyo.

Nadie se sintió capaz de decir nada. El ex director de *Convicción* contemplaba a su creación en colapso y recordaba que lo había visto en una condición parecida sólo una vez: el día en que el general Guillermo Suárez Mason, aliado suyo y ex comandante del I Cuerpo del Ejército, se había fugado del país. Ahora, sin embargo, se trataba de un derrumbe interno, y lo único que se podía hacer era acompañarlo.

Había anochecido. La escena se hizo más irreal cuando golpearon a la puerta y de pronto estaban allí Videla, Viola y otros militares. Venían a saludar a Massera y a darle sus respectivos pésames, pese a que no le hablaban, a los odios y a los asesinatos con los que en otra época habían dirimido sus competencias de poder. Los jefes militares de la prisión y los carceleros también saludaron, respetuosa y compungidamente.

Massera y Lezama se pusieron a preparar la cena. Un coronel y un mayor de la prisión permanecieron con ellos. Solamente había unos fideos de mala calidad, que cocinaron y prepararon con manteca, y que apenas comieron sobre la misma mesa en que momentos antes habían escuchado las noticias. La derrota carecía de circunstancias épicas — como el instinto esteticista del marino y el periodista hubieran querido — así como de grandes frases. Sólo quedaban la humillación, la tristeza y, tal vez, la posibilidad de un silencio donde pensar.

Ya tarde, Lezama se levantó, abrazó a Massera y le estrechó la mano. Éste los acompañó hasta el furgón-camioneta, los saludó y se separaron en silencio.

## Quince

El Centro Naval de Buenos Aires, un edificio aristocrático en la céntrica esquina de Córdoba y Florida, usualmente abre sus altas puertas de par en par por la mañana y las cierra entrada la noche. Sin embargo, a partir de 1985 esa costumbre sufrió una modificación casi imperceptible: al amanecer y mientras duraba el día solamente se abría una de las dos hojas, la otra permanecía cerrada y trabada.

Nadie inquirió al respecto: podía tratarse de un desperfecto o tal vez de una nueva disposición; en todo caso, el cambio no era tan notable como para reparar en él. Sin embargo, y seis años después de haber recibido la orden de mantener siempre cerrada una de las dos hojas, el ordenanza del Centro Naval recibió la instrucción de abrirla nuevamente. Con la misma falta de preguntas y de explicaciones, las puertas del Centro volvieron a abrirse de par en par en 1991. 1985 año en que Massera, junto con otros comandantes, había sido recluso; en 1991 es puesto en libertad por un decreto presidencial especial. El Centro Naval expresó su solidaridad con el almirante degradado e inhabilitado con una módica pero significativa señal de duelo: la Armada, después de todo, no olvidaba a quien la había construido, y seguiría siendo un referente formidable en los años por venir. No hace falta aclarar que esto no fue así solamente para la Armada.

Los primeros tiempos de Massera en prisión estuvieron marcados por una extrema soledad. Como repitiendo y amplificando lo que había sucedido el día de la sentencia, Videla permanecía con su familia y leía la Biblia y libros de catecismo; Viola bebía, fumaba y permanecía silencioso y taciturno. Pero ahora, además, los ex comandantes no se dirigían la palabra: ya no disimulaban la mutua hostilidad que había crecido entre ellos durante y después de los años del Proceso de sus respectivas comandancias; no debían ya hacer alarde de solidaridad recíproca ante hipotéticos e improbables tribunales de la sociedad civil. El tribunal los había arrojado a estas cárceles de lujo y ya no aparecían en los diarios ni se mencionaban sus nombres: descargados del peso de la responsabilidad de encarar aparatos de Estado, podían ser hombres. Sus figuras se oscurecían y retrocedían cada vez más en la conciencia colectiva. Incluso pensar en ellos como asesinos y monstruos era una forma de no pensar en ellos, de evitarlos, por más que cada tanto surgiera una crisis militar en relación con los juicios por acciones de la dictadura, y que algunos grupos civiles temieran la eventualidad de que los comandantes pudieran ser liberados en algún momento.

Massera, durante el primer año de reclusión, se encontró con que prácticamente no tenía con quién hablar ni divertirse como no fueran los visitantes externos: su familia, Lezama y algunos pocos viejos allegados que no se avergonzaban

de que los vieran con él, ni se habían pasado a la vereda opuesta. Sin embargo, ninguna de estas personas podía garantizar una compañía permanente, y fue así como Massera debió aceptar unas anómalas amistades que en otro momento no habría admitido pero eran lo único que podía ofrecerle la prisión, sobre todo cuando lo principal que quería de ellos era que jugaran con él a la pelota a pared. Una de estas compañías era un gendarme encarcelado por «exceso de autoridad»: el exceso había consistido en matar de un tiro a un conscripto. Otra era un testigo de

Jehová encarcelado por haberse negado a saludar a la bandera. La atmósfera de soledad e irrealidad del penal de Magdalena se realizaba por la presencia de un coronel arrestado, también algo psicótico, silencioso y autista, que salía a dar vueltas con un caniche de su propiedad, y con quien los visitantes de Massera o algún otro comandante podían intercambiar diálogos como éste:

—¿Cómo está, coronel?

—Muy bien; esperando^

—¿Y qué es lo que espera?

A lo que el coronel hacía un amplio gesto dirigido a los confines de la prisión, y decía pomposa y seriamente:

—Esperando a que se despliegue el regimiento, y me lleve hacia la libertad y el triunfo en Buenos Aires.

La Navidad de 1986 fue la primera que los comandantes arrestados pasaron en prisión, aunque eso no implicaba que la pasaran juntos. A pedido de casi todos ellos, cuando llegó el 24 de diciembre, los guardias dispusieron mesas separadas en el comedor central. El ambiente entre ellos era gélido: se saludaron, se felicitaron formalmente y no intercambiaron más palabras. Cada uno de ellos era el hombre más solo que pudiera imaginarse, y si no escuchaban por dentro los gritos de los muchos que habían muerto por sus órdenes, por asesinato directo o por recuerdo tardío, podían escuchar el silencio de condena que los rodeaba por completo, sin que llegaran a comprenderlo enteramente.

El encierro prolongado y el aburrimiento hicieron su trabajo. A los pocos meses de esa Navidad los ex comandantes empezaron a hablarse nuevamente. Sin embargo, la atmósfera se volvió a enturbiar por un incidente trivial entre Massera y Agosti, que daría pruebas de la intolerancia del primero. Agosti fumaba cigarros, cuyo humo molestaba al almirante. Éste se lo reprochó violentamente, pero el ex jefe de la Fuerza Aérea pensó que se trataba de un puro arrebató histriónico y se encogió de hombros. Massera, enfurecido, levantó entonces a Agosti tomándolo del hombro, lo llevó a la puerta y lo echó dándole un fuerte puntapié en el trasero. Tan violentamente se lo

asestó que se rompió el pie.

El incidente tuvo buenas derivaciones, porque Massera debió ser internado en el Hospital Naval, donde empezó a recibir un nuevo tipo de visitas. Al margen de eso, en el penal de Magdalena todos los comandantes se habían resignado en general a hacerse compañía unos a otros, y en la Navidad de 1987 decidieron juntar las mesas. Habían asumido que estaban solos, y que sus únicos compañeros posibles eran seres tan solitarios, vacíos y desheredados como ellos.

## Dieciséis

En 1988 ocurrió un incidente aparentemente menor que determinó la ruptura de Massera con Lezama. El marino se compró un auto para andar por la prisión. El hecho, por cierto, daba idea de las extraordinarias libertades y amplitudes de espacio de que disponían los ex comandantes en el penal, que en realidad se parecía a un *country* rigurosamente vigilado. También hablaba del particular status del que disfrutaban, puesto que podían adquirir un artículo particular cuya misma esencia —la movilidad— es todo lo contrario de lo que se supone un preso deba tener.

Sin embargo, el periodista Lezama no lo vio exactamente así. No se trataba de que se hubiera convertido a la democracia radical, a los derechos humanos ni a la izquierda, sino que desde hacía tiempo venía observando en Massera códigos de conducta que no se correspondían con los del almirante ideal que él había imaginado, principalmente en lo relativo a la corrupción. Siempre fiel, confiado y consecuente, Lezama había contemplado el enriquecimiento de Massera durante y después del Proceso con cierta soterrada preocupación. Más tarde, lo preocuparon los datos que apuntaban hacia hechos de delincuencia común que habían emergido en el juicio a las Juntas. Ciertamente, el discurso que él había escrito para Massera no podía estar en labios de un corrupto. Y, por otra parte, él era un hombre de la Revolución Libertadora, de la que en última instancia sus militantes reivindicaban siempre la honestidad: como tal, no podía apañar una conducta que ideara el soborno o el robo. Como si esto hubiera sido poco, el periodista había vivido de acuerdo con sus principios, y le molestaba la impresión de que Massera no lo había hecho.

Tras pensarlo largamente, Lezama decidió escribir una carta al ex almirante refiriéndose al tema y explicándole que la adquisición del auto distorsionaba la imagen que la Argentina debía tener de él. La respuesta de Massera fue sorprendente: alegó que el auto que se había comprado era un mero Ford Falcon y, además, de segunda mano; en consecuencia, Lezama no debía preocuparse por ello. La contestación mostraba la falta de sentido de las proporciones en que se movía el ex almirante: no se sabe de prisioneros condenados a perpetuidad que compren autos, sean éstos modestos o no. Sin embargo, a través de un recodo impensado de su inconsciente, el viejo Almirante Cero volvía a emerger: el Ford Falcon había sido por excelencia el auto de las desapariciones, el que aparecía sin chapas en cualquier esquina de las principales ciudades para secuestrar gente, el que se usaba para llevar detenidos a que «marcaran<sup>^</sup>) militantes y el que había conducido al propio Massera hacia su bautismo de fuego en la «guerra sucia». A través de la elección de la marca y el modelo, Massera volvía a mostrar inconscientemente quién era, como si se tratara de una irresistible compulsión.

La carta alarmó a Lezama, que no sabía si pensar que el ex almirante estaba alejándose de sus principios, o si era él mismo quien se estaba alejando del ex almirante. Massera había logrado convencer al escritor y periodista de sus propias virtudes y había conseguido imponerle su versión de los hechos ocurridos entre 1976 y 1978, que no coincidía con la de los organismos de derechos humanos pero tampoco se reducía a la inverosímil historia oficial del Proceso. Ahora, sin embargo, aparecía un borde extraño del fenómeno y del personaje, un borde de corrupción y hedonismo que surgía como una señal de alerta, que iluminaba cosas que habían pasado antes y que arrojaría una sospechosa luz sobre cosas que sucederían después.

Las relaciones entre Massera y Lezama se enfriaron gradualmente, hasta desvanecerse casi por completo. Las visitas eran más formales y menos frecuentes, las cartas más secas. La amistad de Lezama con almirantes y su particular relación con la Marina no implicaban una devoción absoluta hacia Massera, y sólo se impuso como límite la solidaridad con un hombre encerrado por causas que él creía injustas. Se dijo a sí mismo que permanecía fiel al ex comandante mientras durara ese tiempo, y que sólo después formalizaría la ruptura. Cumplió su promesa años más tarde, cuando los comandantes fueron indultados, a través de una larga carta explicativa.

Lezama mantenía columnas de opinión en diversos diarios y en televisión, y trataba de financiarse mediante ocupaciones múltiples. Se puede decir que, en el momento en que dejó de escribir para Massera, éste dejó un poco de ser él mismo y ello ocurrió porque había malinterpretado ciertos términos del pacto. «Usted no me puede someter a esta deuda», había dicho el marino ante la reluctancia del periodista a aceptar pagos, pero la deuda no se refería al dinero sino al personaje que Lezama lo obligaba a encarnar.

## Diecisiete

El aburrimiento, la claustrofobia y la irritabilidad fueron los estados de ánimo predominantes en Massera durante los primeros tiempos en el penal de Magdalena. Sin embargo, a través de las excursiones al Hospital Naval y de un cierto permiso tácito para breves escapadas clandestinas, el ex almirante fue encontrando un resquicio de actividad a través del cual librarse de su «encierro». Se trataba, en realidad, de un encierro relativo y paradójico, ya que no era tanto físico como psicológico y político: un hombre acostumbrado a la hiperactividad, al tejido de alianzas y de intrigas, al movimiento perpetuo, súbitamente se había encontrado sin nada que hacer entre manos, y con la impresión de que esto podía continuar así indefinidamente. Ahora, las salidas al Hospital Naval le daban la posibilidad de ampliar un poco el círculo de sus relaciones y ejercer, aunque fuera de modo vicario y mediatizado, su vocación política.

Las condiciones políticas argentinas se habían ido modificando gradualmente desde fines de 1985. El gobierno de Alfonsín había iniciado un lento pero seguro giro a la derecha, algunas de cuyas principales características fueron la elección de una política económica más ortodoxa que la inicial y la línea de concesiones permanentes a los militares que se negaban a acatar las citaciones que les hacían las cortes civiles por violaciones a los derechos humanos. Comenzó a producirse un fenómeno nuevo, que Massera observó con extremo interés: la aparición de situaciones de crisis entre el poder civil y las Fuerzas Armadas por motivos circunscriptos, parciales y, si se quiere, «profesionales». Se trataba de situaciones en que el poder civil carecía de fuerzas militares propias pero la movilización militar no producía la caída del gobierno sino que se limitaba a extraerle concesiones. La dinámica de estas crisis desató crecientes denuncias de los críticos del gobierno en el sentido de que éste estaría cediendo gradualmente poder a la corporación militar, lo que se prolongaría hasta que ésta decidiera tomar el poder. La realidad era más compleja por más que las periódicas sublevaciones militares garantizaran que la mayoría de la población recordara las dictaduras anteriores y diera un nuevo respaldo a Alfonsín.

La descomposición de la cadena de mandos no se había revertido con la desaparición del Proceso. Más bien, el fin de éste había significado sólo el agotamiento de su propio proyecto político, tras lo cual la desaparición de la cadena de mandos, al igual que los crímenes cometidos, aparecían con mayor intensidad. La desaparición de la cadena de mandos y los crímenes eran legados y residuos de la dictadura, que quedaban como molestas necesidades a ser administradas una vez que la esencia del Proceso se hubiera cumplido. Y, en el fondo, los dos problemas se manifestaban en forma simultánea. Los militares medios, siempre obedientes a alguien —al Estado, al presidente, al comandante de la propia fuerza—, se

encontraron después de 1985 en una situación paradójica: eran los responsables ejecutivos directos de las órdenes impartidas por los jefes político-militares del Proceso y por eso los reclamaba la justicia civil, pero los jefes que les habían dado las órdenes habían sido procesados y encarcelados y sus actuales jefes no estaban dispuestos a jugar sus destinos por ellos. Los jefes, por razón de Estado, tenían que abandonar ahora a sus subordinados, aunque esto no les causara ninguna gracia.

En el nivel de los subordinados iba tomando cuerpo un profundo resentimiento contra los altos mandos: los mandos medios sentían que eran ellos quienes habían tomado sobre sus espaldas el peso y la culpa efectiva y directa de la lucha contra la subversión, y que los altos mandos constituían un generalato «político» y traicionero que sacrificaba a sus hombres en aras de su supervivencia profesional y sus jubilaciones. Seguramente era así en la conciencia de los militares rebeldes, y es muy probable que los motivos personales de los jefes «leales» a Alfonsín no fueran más elevados que eso pero el diagnóstico de los disconformes descuidaba un dato esencial: tanto la represión de ayer como la «traición» de hoy se consumaban en obediencia al Estado. Los militares habían estado subordinados al Estado siempre, y la única diferencia entre antes y después se resumía en las diferencias internas del proceso que había producido la emergencia de un determinado Estado de las ruinas de otro. Los militares rebeldes tenían una razón profunda: habían sido usados y ahora eran miserablemente descartados. Sin embargo, se equivocaban en cuanto al destino y la utilización del «aprovechamiento»: no se trataba solamente del «destino de sillón» de los generales, sino de la forma en que ese destino inglorioso se conjugaba con las necesidades de la Argentina posmoderna, que necesitaba de esos generales de sillón. «El gran hombre —dice Hegel— no lo es tal para su ayuda de cámara, pero eso no es porque el gran hombre no sea un gran hombre, sino porque el ayuda de cámara es el ayuda de cámara.»

Massera comenzó a observar el desarrollo de este fenómeno, que alcanzaría su máximo punto de eclosión durante la llamada «rebelión de Semana Santa», en 1988. Comprendía los hechos desde la perspectiva de un verdadero jefe militar, como lo había demostrado en su propio alegato, donde había proclamado la defensa de todos aquellos que hubieran cometido «errores» y «excesos» en la lucha contra la guerrilla. La figura emblemática que él tenía a ese respecto era el teniente Mayol, cuya reivindicación consistía para él su mayor legitimación como comandante en jefe. Massera había conocido a Mayol en los tiempos de las primeras operaciones del GT 3.3.2, y la mención de su nombre durante su alegato en el juicio a las Juntas no había sido casual. Mayol —pensó Massera— posiblemente había sido en 1988 bastante parecido a los militares que se rebelaban contra la cúpula militar bajo el gobierno de Alfonsín. Y como la única legitimidad que Massera había podido alcanzar en su vida no había sido como hombre ni como político sino como comandante, había reivindicado, en un tribunal adverso, al teniente Mayol.



La paradoja mayor de los «carapintada» —como los rebeldes llegaron a ser conocidos en razón del betún algo grotesco con que tuvieron sus caras durante sus rebeliones en simulacro de camouflage y en adopción mimética de un papel militar clásico que nunca habían podido llegar a representar plenamente— sería que ellos también obedecían a determinada forma de Estado, que esencialmente era la misma que defendían los altos mandos. Cada vez que se producía un levantamiento, los sublevados aseguraban que no se trataba de un golpe de Estado, sino de una reivindicación interna del Ejército, casi una protesta gremial, dentro de la cual el gobierno no tenía lugar. La declaración, aunque pareciera absurda desde el punto de vista de la lógica —ya que se supone que un ejército responde a su comandante, que al mismo tiempo es el presidente legalmente electo—, terminaría demostrándose sincera. El gobierno de Alfonsín no contó literalmente con un solo fusil que lo respaldara durante Semana Santa, y la fuerza al mando del general Ernesto Alais —que en ese momento tuvo a cargo la represión de los rebeldes— demoró tanto tiempo en llegar a los epicentros de la rebelión que terminó volviéndose un objeto de burla por muchos años.

La conciencia militar promedio era objeto de una contradicción paralizante. Sabían, como militares, que los rebeldes activos estaban en lo cierto, y que los altos mandos los habían traicionado al permitir que los juzgaran por delitos que en realidad habían sido cometidos en función de la obediencia al Estado del Proceso. Al mismo tiempo no podían desobedecer al Estado que era consecuencia de las acciones de los cuadros medios militares. Y aun si hubieran podido no habrían sido capaces de desobedecer a la idea formativa de subordinación. Con lo que aparentaban cumplir las órdenes del gobierno de Alfonsín pero en realidad se entregaban a una inercia que era el equivalente en la esfera militar del «trabajo a desgano» en la esfera laboral.

La situación de los carapintada no era sustancialmente diferente. Construidos, modelados, formados y educados como militares en el principio de la subordinación al Estado, ingenuamente intentaban separar su rebelión contra los altos mandos de las consecuencias institucionales que esto implicaba para el gobierno de Alfonsín. Con eso intentaban decir que lo que hacían no era un golpe de Estado, y en lo fundamental tenían razón: un golpe de Estado raramente se lleva a cabo con éxito en función de los intereses directos de sus ejecutores, y, en el caso concreto de la Semana Santa argentina y las rebeliones que la sucedieron, los insurrectos carecían de programa alternativo alguno para oponer al partido que tenía el dominio del Estado. Las consecuencias visuales de lo que hacían eran sólo el simulacro de un golpe de Estado: un sector de la fuerza armada se rebelaba, el grueso permanecía neutral y el gobierno quedaba militarmente indefenso. De acuerdo con los antecedentes de los anteriores golpes militares argentinos, la rebelión de los carapintada tenía todas las probabilidades de convertirse en un éxito: ningún golpe requiere técnicamente más que la decisión de un sector de la fuerza armada, la neutralidad del resto y el desarme de la sociedad civil. Sin embargo, en las particulares circunstancias en que ocurría

Semana Santa, las condiciones del golpe no equivalían al golpe, y la capacidad no era idéntica con la posibilidad. Los insurrectos tenían la posibilidad de ocupar lugares físicos, pero no tenían el consenso social ni la orden superior que constituyeran el principio de vertebración de su acción. Alfonsín, al mismo tiempo, carecía del dominio de los lugares físicos, pero contaba con el consenso social y con el expreso respaldo de las clases dominantes, económicas y políticas.

La figura del golpe, por primera vez en la Argentina, reveló su profunda y esencial intangibilidad, el hecho de que las relaciones de fuerza de las que dependía no eran puramente materiales, sino esencialmente ideológicas. El punto en que esto se demostró más espectacularmente fueron los propios carapintada, que disponían de todas las armas pero no avanzaban y aclaraban con modestia, subordinación y servidumbre que no eran ejecutores de un golpe de Estado, sino sólo vehículos apolíticos de un mero reclamo interno del Ejército.

Argentina reaccionó frente a ellos ferozmente, con un antagonismo que no hubiera soñado oponer a los comandantes de la temible primera etapa del Proceso. La rebelión de Semana Santa congregó en la Plaza de Mayo a miles de porteños, que fueron a dar su respaldo a la democracia junto a sus bebés, vistiendo ropas comunes y completamente desprovistos de armas. El hecho, para un Buenos Aires cuya usual reacción ante cualquier conato de golpe había sido comprar fideos secos en los almacenes en previsión de un toque de queda, podía ser reivindicado por el gobierno como muestra de apoyo, y por los ideólogos de la nueva democracia como demostración de solidaridad. Sin embargo, también era posible concluir que el golpe no era un golpe, y que los civiles concurrían a la Plaza de Mayo (que la Marina de Guerra había bombardeado en 1955) justamente por eso. La paradoja mayor de las rebeliones carapintada fue que permitieron a Alfonsín consolidar su ya hegemónico dominio ideológico sin que el poder del Estado llegara a estar realmente cuestionado en ningún momento. Semana Santa, junto a las rebeliones posteriores, fueron simulacros de golpe, para el proyecto que tenía el dominio del Estado en reconstrucción, la escena repetida de una advertencia social, un método más de disciplinamiento, que solamente se frustraba ante los repetidos desajustes entre el montaje teatral y sus actores por una parte y las circunstancias que le daban lugar por otra. Sin embargo, para los carapintada, los hechos constituían al mismo tiempo nuevas e incomprensibles frustraciones, que sólo realimentaban las frustraciones anteriores y potenciaban nuevos actos de propaganda armada. Se trataba de un desentendimiento común que resultaba trágico en primera instancia y parecía grotesco después.

Las carapintada eran la derivación inocente del independentismo militar. Sin embargo, no se trataba de que ellos intentaran recuperar la bandera de la superioridad militar intrínseca ante la subversión y corrupción de la sociedad civil. Antes que eso, atacaban la traición y corrupción de sus propios altos mandos, sin que

la sociedad civil les importara decisivamente en ningún sentido.

Constituían un resultado inconsciente de su condición, y actuaban en consecuencia. Como las banderas en pos de las cuales habían secuestrado, torturado y matado en el pasado habían sido las de la guerra contra la subversión marxista, y como el gobierno de Alfonsín aparecía como arquitecto, ingeniero y portavoz de la ofensiva civil contra las Fuerzas Armadas (y sospechosamente asociado con personas que habían militado en la subversión marxista y ahora denunciaban las mismas violaciones de derechos humanos de las que se los acusaba a los carapintada), la ideología de los militares rebeldes era naturalmente derechista. Sin embargo, ese derechismo era instintivo y puramente formativo, y no se condecía con las circunstancias en que los carapintadas se colocaban a sí mismos. La idea de un «reclamo gremial» de sectores del Ejército resulta naturalmente subversiva, porque vulnera el principio de subordinación que constituye el eje básico de cualquier aparato de Estado del que la fuerza armada constituya el esqueleto. Sin embargo, los carapintada sostenían ese argumento. Su inconsistencia lógica no era prueba de insinceridad; antes que eso, traicionaba la imposibilidad del discurso que articulaban, y demandaba nuevos marcos de referencia para comprender la situación. Como militares formativamente subordinados al Estado (fuera este democrático o autoritario, civil o militar) sólo podían procesar su rebelión contra la descompuesta cadena de mandos desmintiendo que quisieran derrocar al gobierno, pero la contradicción era sólo la de su propia victimización, no de su intención de restaurar el autoritarismo. La contradicción argumental era la cicatriz oral-documental de la herida de un cuerpo que tenía que representar un argumento imposible.

Massera contempló el proceso de los carapintada con simpatía, interés, comprensión y lástima. Se daba cuenta, como ex comandante en jefe, de la esencial justicia de los reclamos de los involucrados, que pedían no ser abandonados a los leones de las cortes civiles por los generales de sillón. Al mismo tiempo, y también como comandante en jefe, se daba cuenta de la razón de Estado que yacía detrás de la «traición» de los generales de sillón. La contradicción representaba nada menos que la quiebra del imaginario de militar argentino bajo el cual él había sido formado, porque implicaba que el Estado civil comenzaba a hacerse cargo de la totalidad de las funciones políticas, y las Fuerzas Armadas quedaban limitadas a las estrictamente militares. El problema de los carapintada era que habían caído en el abismo entre dos eras, y que las Fuerzas Armadas de hoy no podían asumir la obligación de defenderlos por haber cumplido las órdenes de las Fuerzas Armadas de ayer.

Massera, que recordaba el sacrificio de su propia persona por el almirante Franco, y que aún ahora era incapaz de darse cuenta de que éste era sólo el emergente de una nueva época cuyo desemboque último era el alfonsinismo, comenzó a simpatizar con los carapintada de manera distante y accedió a las entrevistas que le pidieron algunos de ellos. Su posición en estas entrevistas fue comprensiva, paternal y

pesimista; casi siempre aconsejó moderación, y siempre que sus encendidos interlocutores le plantearon la necesidad de acción drástica, les advirtió enérgicamente que iban a ser aplastados. Por más que Massera seguía siendo un referente ineludible, los carapintada no le hicieron caso. El ex almirante no heredó a las Fuerzas Armadas como había esperado, pero sí a sus descontentos.

## Dieciocho

Las salidas de Massera al Hospital Naval terminaron convirtiéndose en su entretenimiento favorito ya que le permitían practicar de nuevo el ejercicio que había elegido como propio y dominante: la política. Los encuentros con políticos, militares y sindicalistas, que le pedían su opinión y le relataban sus circunstancias, constituían la versión vicaria de los tiempos en que había tenido poder e influencia: aún era capaz de dar nombres, recomendaciones y números de teléfono, y de influir en el resultado de las gestiones de sus visitantes. La intriga seguía fascinándolo, y le parecía una novedad interesante poder dirigirla desde la oscuridad, el anonimato y la clandestinidad, como si fuera el artífice secreto de distantes sucesos. Incluso si no podía influir, las visitas y las conversaciones le daban una ilusión de ejercicio de sus posibilidades, como un artesano que, privado por mucho tiempo de las herramientas de su oficio, las reconstruye con entusiasmo de los instrumentos elementales que ha podido encontrar. Ahora que el poder no estaba a su alcance, Massera llegaba a comprender empíricamente que la búsqueda del poder no era tanto por el poder en sí, como por la búsqueda misma. Nuevamente realizaba los movimientos de siempre, y se sentía bien dentro de ellos, como si por mucho tiempo su cuerpo hubiera sido privado de sus funciones básicas. Conversaba, jugaba, aconsejaba, orientaba, dirigía y se divertía, y era como si todo eso constituyera un sucedáneo de lo que hacía antes.

Gradualmente, tal vez por efecto de la inercia de esta misma actividad, su figura comenzó a ser revalorizada. El cambio de opinión no tenía lugar en la sociedad civil, que había condenado al ex almirante como uno de sus demonios favoritos, ni en público, donde cualquier asociación con él podía asemejarse al beso de la muerte; comenzaba a concurrir en el interior de la clase política, que empezaba a olvidar el estigma que años atrás se había adherido a la figura de su antiguo interlocutor naval, y de sectores diversos de las Fuerzas Armadas, que acudían a un jefe lúcido y consecuente en momentos en que ellas mismas atravesaban un período de máxima desorientación y abandono. La revalorización de Massera tenía un motivo importante en la reiteración de las crisis militares y en las sucesivas concesiones que Alfonsín había realizado a la corporación castrense y que habían desdibujado un poco la nitidez del enfrentamiento entre civiles y militares que había nutrido gran parte de la mística de los primeros años de la democracia. Otro motivo importante era el propio paso del tiempo, que tendía a borrar a Massera la sombra excluyente de la ESMA y a permitir que se viera el importante, inteligente, experimentado y astuto operador político que siempre había sido.

Con todo, los contactos de militares, políticos y sindicalistas no serían revelados en lo inmediato, ya que el ex almirante seguía representando una bestia negra notoria para la sociedad, y conversar con él podía llegar a ser visto como

equivalente a simpatizar con él. Estos contactos eran así doblemente clandestinos: para Massera, que se suponía estaba preso y no debía mantenerlos, y también para sus interlocutores legales, que podían conversar con él pero no podían permitir que las conversaciones fueran divulgadas. Una atmósfera de secreto empezó a rodear la escasa vida extracarcelaria del marino, lo que resultaba atractivo para sus viejos instintos conspirativos de oficial de inteligencia. Al mismo tiempo, se ilusionaba con que estos contactos podían llegar a ser el acceso hacia operaciones más importantes. Siempre había dependido de la influencia —falsa, verdadera o relativa— para hacer avanzar sus propósitos: siempre había asignado gran importancia al diálogo, a las personas que conocía y a los personajes a quienes podía llamar por teléfono, y no se le ocurría por qué no podría ejercer de nuevo provechosamente esas capacidades.

La Armada constituía el lugar donde más sensible era esa revalorización. El pase al profesionalismo de la época del almirante Franco no había sido cabal. Todavía había sectores que veían en Massera al constructor de la Armada moderna, y el mismo almirante Ramón Antonio Arosa, que condujo a la fuerza durante el difícil período del juicio a las Juntas y las posteriores rebeliones carapintada del Ejército, siempre tendió a prestar un oído atento y respetuoso a las opiniones de su ex comandante en jefe. Quienes seguían respetando a Massera no lo hacían tanto por razones políticas —ya que éste había perdido cualquier calidad de referente de la realidad política argentina que hubiera podido tener en el pasado— como por motivos navales. La Armada actual era el resultado de lo que había construido el ex almirante, que había logrado dotarla tanto de fragatas y submarinos modernos como de una nueva y desconocida proyección nacional, y era natural que se mirara en dirección a él cuando el presupuesto naval —como el de las otras dos fuerzas— se hallaba seriamente amenazado y se perfilaba la decadencia. Miraban a Massera los sectores navales más militantes y más comprometidos con el destino de su fuerza, mientras la oposición a él tendía a reducirse a los sectores más inmovilistas y tradicionales. La disputa carecía de toda traducción política inmediata: era una pura y soterrada discusión grisácea sobre organización, proyección, presupuesto, capacidades, equipamiento y estrategia de diálogo con el poder civil, donde uno de los sectores elegía como referente al ex almirante.

Sin embargo, esto constituía solamente el nivel literal de la discusión. Massera había perdido poder directo sobre la Armada, pero no había perdido nada de su influencia. La Marina de la democracia carecía de referentes. El almirante Rojas era un anciano decadente dedicado a la elucidación obsesiva de añejas cuestiones fronterizas. Los comandantes navales posteriores a él se habían retirado a la vida privada o habían muerto. Así era que, por más antipáticos, autoritarios, aventureros, irresponsables y deshonorosos que resultaran determinados aspectos de la figura de Massera, la Armada, dentro de ciertos límites, generalmente estaba dispuesta a movilizarse en función de lo que el ex almirante quisiera, y tendía a tomarlo como factor de desempate de sus disputas internas.

A mediados de 1989, se encontraba en discusión la sucesión de Arosa al frente de la Marina. Massera, que siempre se había esmerado en mantener buenos niveles de diálogo y relación con la fuerza que le había dado origen, favorecía para el cargo al almirante Jorge Ferrer. Un sector opuesto, que prefería un perfil profesionalista más bajo, optaba por el almirante Carlos Mozzarelli. Nuevamente, la disputa carecía de connotaciones políticas directas, y se centraba básicamente en la personalidad y la foja de servicios de los involucrados y en cuestiones técnicas del arma.

El 31 de junio de 1989, Massera emprendió una de sus acostumbradas excursiones al Hospital Naval. Su verdadero destino era un edificio de departamentos de la Avenida Las Heras al 2700, en el barrio de Palermo, donde iba a discutir la sucesión naval con un grupo de almirantes en actividad. Arribó al mediodía, en un automóvil donde también viajaban varios guardaespaldas. Al bajar y encaminarse hacia el edificio, tuvo la impresión de que alguien lo vigilaba. Se dio vuelta, y se encontró con un joven que lo estaba mirando. Siguió su camino y entró en el edificio.

Nueve horas después, al salir y caminar los primeros pasos, fue sorprendido por el resplandor de un flash y vio al joven que había encontrado antes, ahora munido de una cámara fotográfica. Se dio vuelta y empezó a caminar en la dirección opuesta. El joven corrió hacia él, y Massera intentó manotearle la cámara. El fotógrafo lo eludió y le sacó una foto. Seguidamente, se tiró sobre el capot de un auto y alcanzó a tomarle una segunda foto mientras el marino subía a un auto. Al día siguiente, la fotografía de Massera subiendo al auto, vestido con una informal campera, apareció generosamente desplegada en la tapa del diario *Sur*, que era financiado por el moderado Partido Comunita argentino.

La salida de Massera se convirtió en inmediato objeto de discusión política y periodística. Marcelo Ranea, el fotógrafo en cuestión, relató que había visto a Massera por primera vez ese día alrededor de las 12, y que luego había vuelto a apostarse en el lugar con su equipo fotográfico completo. La Argentina democrática vivía la ruina de su historia de amor con Alfonsín y, en el clima de hiperinflación y concesiones políticas a los carapintada que se vivía, la aparición del ex almirante en la calle sonaba como un anuncio de la concesión última: el indulto a los ex comandantes, su puesta en libertad y el retorno de la amenaza golpista. El asunto fue investigado. El ministro de Defensa entregó a la Cámara Federal un cronograma de los pasos de Massera el 30 de junio: 9.30, salida del penal de Magdalena; 16, llegada al Hospital Naval; 19.10, regreso del Hospital Naval; 23.30, retorno a Magdalena. Se instruyó un sumario sobre el traslado de Massera a lugares no autorizados, y el periodista Horacio Verbitsky ironizó: «Si se instruye a la velocidad del vehículo que condujo a Massera en el trayecto Magdalena-Caballito, es difícil que termine antes del siglo».

Ciertamente, la disciplina en el régimen carcelario de los ex comandantes se había relajado un poco desde 1985, y aún entonces no había sido demasiado dura. Sin

embargo, un indicio de verdad pareció salir a la luz pocos días después de la fotografía, en la forma de un panfleto sin firma donde se decía que si se elegía al almirante Ferrer como nuevo titular naval «la Armada seguirá siendo manejada por Massera», y se postulaba la designación de Mozzarelli. Al mismo tiempo, los rumores circulantes sembraron en muchos la sospecha de que la fotografía no había sido casual, y que los sectores que respondían a Mozzarelli habían planeado la aparición del fotógrafo de *Sur* frente al edificio en que había ingresado Massera. Si esto fue efectivamente así, los resultados no fueron los deseados: Ferrer fue efectivamente designado titular de la Armada, y Mozzarelli permaneció como su segundo hasta que declaró inoportunamente que «la Argentina está desarmada», lo que determinó que el Poder Ejecutivo pidiera su baja.

La aparición de Massera en la tapa del diario *Sur* constituyó la última presentación en público del Almirante Cero, ese esquivo y burlón personaje que bordeaba permanentemente la legalidad y la ilegalidad, y que parecía tener el raro talento de aparecer cuando nadie lo esperaba, desaparecer rápidamente y dejar detrás de sí la ambigua estela de su persona, como si nunca pudiera desaparecer del todo. Solamente faltaba un elemento para que el personaje se borrara totalmente de la escena, de la percepción social y de la memoria colectiva: legalizarlo. La particular y paradójica forma que la Argentina burguesa escogió para ello fue indultarlo.



## Diecinueve

Alfonsín desapareció de escena en un tumulto económico hiperinflacionario, dejando el poder al sucesor que habían designado las urnas, el peronista Carlos Saúl Menem Menem había sido un pintoresco gobernador de provincia, dueño de unas portentosas patillas con las cuales había buscado emparentarse con los caudillos federales de la Argentina del siglo XIX. Había desarrollado una campaña populista y nacionalista, y contaba en su haber con años de prisión durante el Proceso. Se presentaba como el candidato de la «Argentina profunda» frente al iluminismo de Alfonsín, y como el vector de la irracionalidad telúrica frente al racionalismo cosmopolita. Su elección había sido considerada un «voto de castigo» contra el gobierno de su predecesor, que trastabillaba entre el derrumbe de su plan económico y el agotamiento de las esperanzas democráticas y pluralistas a las que había dado lugar. Uno de sus últimos actos fue la declaración del estado de sitio y el arresto de los dirigentes del minúsculo e insignificante Partido Obrero (trotskista) frente a una ola de saqueos que conmocionó las periferias industriales de las grandes ciudades. La desconfianza masiva en Alfonsín era tan alta que el jefe de Estado imaginario de la Argentina posrevolucionaria imaginaria debió traspasar el poder antes de tiempo a Menem, quien luego se aprovechó del hecho para zaherirlo con crueles sarcasmos.

El nuevo presidente asumió el poder en condiciones sociales radicalmente diferentes de aquellas en las cuales había competido por él. La mayoría de la población estaba aterrorizada por la hiperinflación y clamaba a gritos por cualquier solución que la sacara del pantano sin fondo en que había parecido depositaria la ineficacia del gobierno de Alfonsín. Cualquier alianza sería buena, cualquier política merecería el apoyo, cualquier sufrimiento sería soportable si se cumplía esa condición, y si bien algunas disposiciones particulares podrían carecer de un apoyo positivo, se demostraría en general que los argentinos querían creer y que estaban dispuestos a pasar por un disgusto temporario si podían llegar a la estabilidad tan ansiada. Menem comprendió todo esto, y en su discurso de asunción dijo cosas que no fueron totalmente comprendidas en su momento. Él, que meses antes había favorecido la polarización y la antinomia, sostuvo que la Argentina había estado dividida demasiado tiempo y era hora de que los argentinos se juntaran de nuevo.

A modo de implícita ejemplificación práctica de lo que estaba recomendando, salpicó su discurso con fragmentos de los más diversos autores: el liberal Eduardo Mallea, el peronista Leopoldo Marechal, el conservador anarquista Jorge Luis Borges, el liberal decimonónico Domingo Faustino Sarmiento, su enemigo «federalista» y dictatorial Juan Manuel de Rosas. Todos ellos aparecieron muertos, disecados en la oratoria monótona y fatigosa del nuevo presidente, mezclados con citas de políticos fundacionales de la Argentina del siglo XX como el radical Hipólito Yrigoyen y Juan

Domingo Perón. Su discurso no era tanto una reunión y reconciliación de la Argentina como la enumeración y el recuento de figuras difuntas, el equivalente retórico del «Altar de la patria» que el ministro José López Rega había planeado erigir quince años atrás, y que en esa época se había visto frustrado porque la reunión de cadáveres antagónicos todavía despertaba emociones antagónicas en la Argentina. Ahora, sin embargo, frente a una Argentina rendida y exhausta, desengañada de sus ilusiones y expectativas, cansada tanto de la revolución como de la contrarrevolución y agotada por el fracaso del experimento iluminista de Alfonsín, el Presidente podía pronunciar las viejas palabras antagónicas unas junto y contra otras, sin que su choque fuera más que literario y sin que nadie percibiera la involuntaria connotación fúnebre de un discurso que terminaba con la repetición por tres veces de la fórmula: «Argentina, levántate y anda». Meses después, la reunión simbólica de los muertos tendría su verificación práctica en la repatriación desde Inglaterra de los restos de Rosas y su sepultura en tierra argentina. Sin duda, Menem no enterraba solamente cadáveres y contradicciones, sino que simbólicamente instruía el acta de defunción de la Argentina prerrevolucionaria, donde la inestabilidad era un factor permanente y donde las máscaras ideológicas de los enfrentamientos sólo servían para perpetuarlos.

«No me gusta que los pájaros estén enjaulados», dijo un día el presidente. La afirmación tenía que ver con los comandantes en prisión, y el estilo literario de la metáfora podía comprenderse en un hombre que en su momento había hablado de «los niños pobres que tienen hambre y los niños ricos que tienen tristeza». Seguramente, existía una razón de Estado práctica en la decisión de liberar a los comandantes: impedir ulteriores rebeliones de los militares carapintada que reclamaban la reivindicación de lo actuado en la lucha contra la subversión. Pero después ocurrieron el estallido de la rebelión carapintada más virulenta, con combates, muertos y heridos, y el aplastamiento de esa rebelión por las fuerzas legales, que trazaron la divisoria entre el pasado y el futuro con una línea de sangre. A la luz de estos hechos se puede concluir que el indulto podía inspirarse en razones operativas, pero respondía en realidad a profundas necesidades simbólicas del modelo de sociedad y Estado que se pretendía fundar. La mayoría de la sociedad argentina rechazó en encuestas el indulto, pero en la práctica hizo poco para impedirlo, salvo una movilización que constituyó el último acto de masas de la izquierda. El comentario editorial más elocuente y admirable de los hechos corrió por cuenta del diario de centroizquierda *Página/12*, que publicó su portada del día completamente en blanco. Se elegía e instituía el olvido, la borradura de la memoria y la disolución de las viejas categorías que solamente entorpecían el tránsito a la Argentina moderna: el presidente, abjurando de sus promesas y amenazas electorales, había elegido seguir un curso económico neoliberal, y el indulto a las Juntas era solamente un símbolo menor de lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo, si se puede tolerar la irregularidad sintáctica, es que en la Argentina no había sucedido nada.

Tiempo después, los comandantes quedaron en libertad. El país todavía estaba impresionado por el hecho, pero lo olvidaría rápidamente. Videla redactó e hizo pública una reivindicación de la lucha antisubversiva, lo que le valió una reprimenda del titular del Ejército; seguidamente, se retiró a la vida doméstica. Massera no difundió ningún comunicado. Viola prometió elípticamente que hablaría en algún momento. El resto de los comandantes permaneció en silencio.

A los pocos días, alguien vio la figura delgada y austera de Videla en una oficina, haciendo el trámite para obtener su nueva licencia de conducir. Esa noticia de que el ex presidente estaba en la sala circuló rápidamente entre los presentes. Alguien lo saludó. Otro lo insultó. Videla hizo caso omiso, y se retiró del lugar. A los pocos días, la escena se repetía con Massera. Alguien le gritó «¡Asesino!» Massera lo ignoró y se retiró, entre las miradas y el silencio de todos.

Eos ex comandantes terminaban su vida pública en la irrelevancia, tramitando una libreta de conducir en una oficina cualquiera ante la mirada ovina y levemente sorprendida de una muchedumbre de curiosos. Seguramente, poco tiempo después podrían aparecer en una fiesta de la alta sociedad porteña o en un restaurante exclusivo de la Recoleta sin que nadie reparara más que casualmente en ellos, como se hace con cualquier personaje notorio. Eos señores de la vida y de la muerte volvían a ser personas, descendían a la insignificancia y comenzaban a perder el rango simbólico. Su destino real, como el de los muchos secuestradores, torturadores y asesinos a los que habían dado órdenes, sólo hubiera podido resultar, si la justicia poética tuviera facultades ejecutivas, el de escuchar para siempre los gritos de todos los que habían muerto bajo sus manos. Sin embargo, en la práctica, todos ellos meramente se disolvían en la vida de todos los días, en la cotidianidad más básica y —en el fondo— en la pura fisiología. Se volvían, de pronto, los hombres auténticamente más solos y anónimos, y en ese permanecer en la prisión perpetua de su propia historia puede residir el involuntario y terrible castigo simbólico a que los condenó el indulto de Menem

Con Massera, el destino tendría un ensañamiento perverso más, que lo irritaría profundamente. Un día, como un ciudadano más, Massera estaba tramitando la visa para viajar a Estados Unidos, país donde tiene propiedades, amigos y algunos negocios. Eos funcionarios de la embajada norteamericana fueron correctos, amables y formales, sin que en ningún momento se tradujera la menor animadversión contra el personaje que tenían delante. Sin embargo, cuando Massera regresó para recoger su pasaporte, se encontró con que la visa le había sido efectivamente otorgada, pero con sello aclaratorio que le pareció infamante: «INDUETADO».

## Veinte

Ea historia del Almirante Cero, tal como hemos delimitado a nuestro personaje, termina aquí. Ea historia de Massera seguramente es más abundante y profunda, y puede dar lugar a ampliaciones de este libro y también a nuevas biografías. Asimismo, la vida de Massera no ha terminado, y no es seguro que haya concluido su carrera política. Ea matriz del tiempo da a luz hijos inesperados, transforma monstruos en dioses y viceversa, hace doctrinas de bromas, y permanentemente da a cada personaje significaciones y matices nuevos. Aunque hemos intentado evitar el impresionismo periodístico, la visión que se tenga de Massera en el año 2001 no es necesariamente la misma que nos es posible tener en 1991. Y aun es posible preguntarse si valdrá la pena preocuparse por Massera en el año 2001 y si alguien se tomará el trabajo de tener una visión sobre él.

A lo largo de esta biografía, hemos vacilado deliberadamente en la respuesta a una pregunta: ¿Era posible? ¿Hubiera podido Massera superar las limitaciones intrínsecas que conllevaba su condición de jefe naval y convertirse en líder político de una Argentina que hubiera heredado más amablemente al Proceso? La vacilación tuvo que ver con un principio de investigación: ignorar en lo posible los sobreentendidos, los lugares comunes y los guiños de ojo de la imaginación histórica; mirar el pasado como si recién estuviera sucediendo y como si recién estuviéramos percibiéndolo, con ojos deliberadamente ajenos. Isaac Deutscher, el autor de dos monumentales biografías de León Trotsky y José Stalin, advertía en un ensayo contra la tentación de «*present-mindedness*» que puede acechar a un historiador, esto es la tentación de leer la historia según los datos del presente y otorgar a lo ocurrido la dignidad de lo inevitable y trágico. Ciertamente, Deutscher mismo no escapa a los alcances de su propia advertencia (véanse, por ejemplo, amplios pasajes de *El profeta desterrado*) pero ella igualmente constituye un buen principio a seguir. (La palabra *present-mindedness*, dicho sea de paso, constituye un juego de palabras con *absent-mindedness*, que significa distracción. La palabra *present-mindedness* querría decir, pues, estar distraído con el presente.)

Massera, ciertamente, hizo todo lo que pudo para lograr lo que quería: fue uno de los hombres más inteligentes, capaces, ingeniosos y plenos de recursos de los que actuaron en la política argentina en la segunda mitad del siglo xx, y percibió muchas cosas con una anticipación que los demás no mostraron poseer: los que le ganaron de mano no eran necesariamente mejores que él. Sin embargo, se vio atado de pies y manos desde el comienzo por una combinación de circunstancias adversas: era un oficial de la Marina, un arma minoritaria que sólo esporádicamente había logrado detentar el poder real; la fuerza a la que pertenecía era elitista y antiperonista, mientras la mayoría del país era peronista, y aun habiendo proyectado a la Armada a

un alto nivel de equipamiento y a un papel político protagónico dentro del Proceso, una y otra vez se encontró con que ese papel y esa importancia sólo alcanzaban para molestar y trabar las iniciativas y políticas de otros, nunca para articular una política propia. Ciertamente, mostró excelencia en el intento de sortear estas contradicciones; se le podrá reprochar e incriminar cualquier cosa, menos no haberlo intentado suficientemente. Utilizó al máximo de su capacidad, su mentalidad barroca y florentina, su aptitud para el engaño y las intrigas múltiples, y llegó a niveles de duplicidad, inescrupulosidad y refinamiento que bien pueden haber bordeado la patología.

Lo perjudicó, además, la propia multiplicidad de sus alianzas. Su misma astucia, carácter florentino y capacidad para efectuar arriesgadas apuestas simultáneas, que lo hicieron descollar en las operaciones tácticas de la política se le terminaron volviendo en contra, porque establecieron un tipo de comportamiento que causó que sólo unos pocos allegados pudieran creer en él. Massera, deslumbrado por su propia capacidad de jugar en varios frentes simultáneos, permitió que se le abrieran más frentes de los que podía controlar. En muchas ocasiones incluso, se dejó llevar por una desaforada sensación de omnipotencia, como ocurrió en el caso del asesinato de Fernando Branca. Creyó profundamente que era el señor de la vida y de la muerte, y no imaginó seriamente que las condiciones pudieran cambiar. Se creó más enemigos de los que podía combatir.

Sin embargo, todo esto se refiere solamente a las acciones concretas de Massera, al modo en que instrumentaba su voluntad de poder. Un aspecto más importante es el que constituye su extraordinaria y compleja relación con la sociedad argentina, de la cual era un producto y exponente tan contradictorio. Por una parte, representaba las fuertes tendencias conservadoras que estaban grabadas a fuego en el imaginario nacional. Simultáneamente, encarnaba una posible evasión respecto de esas tendencias. El desarrollo de su estrategia política resultó la gramática comprimida de esas dos inclinaciones contradictorias.

Massera, como militar en actividad, fue un político descollante, que logró mucho más de lo que le permitía su verdadera relación de fuerzas y consiguió proyectarse y multiplicar su poder y su influencia en proporciones inusitadas. Sin embargo, cuando descendió al llano civil, fue sólo un político mediocre, que se limitó a repetir inconvincentemente los lugares comunes que creía se esperaban de él. En el fondo, pensaba que la política civil era un despreciable conjunto de frases hechas, locales electorales y promesas de influencias y de empleos públicos, y se dedicó a reproducir la misma caricatura que tenía en mente. Su política civil fue la reproducción de las viejas costumbres de la Unión Cívica Radical de la época de Hipólito Yrigoyen, que prometía empleos, pronunciaba frases vagas y ofrecía encuentros electorales con empanadas y vino. Esa visión que Massera tenía sobre la política era sorprendentemente anacrónica.

A esto se unieron su superstición sobre el poder electoral absoluto del peronismo, la limitación que implicaba tener que depender del estado de proscripción de los partidos políticos y su tendencia a considerar que podía abrazarse al conjunto peronista a través de las cárceles, «unificándolo» a través del factor común de que los Montoneros, Isabel Perón y los sindicalistas peronistas dependieran en determinado momento del poder de la Armada.

Aquí se llega al punto crucial de su fracaso como político, al motivo de fondo por el cual su carrera estaba perdida de antemano y sólo podía prosperar en circunstancias excepcionales. Massera carecía por completo de toda apoyatura social: la mayoría de la población lo veía como un jefe oportunista de la represión, y la burguesía empezó a temerle y odiarlo por los ataques personales que realizaba contra sus miembros, por su irresponsabilidad política y por su desmesurada ambición. Él era el poder militar desencadenado y autónomo, libre de toda restricción, con la Argentina entera como campo de juego; era una suerte de Guerra de las Malvinas *avant la lettre*, con la única ventaja de estar dotado de esa sofisticación, inteligencia y sutileza que en los inventores teóricos de la política suelen ser mayores que en sus ejecutores prácticos.

El día de la oportunidad se cerró sobre Massera, sólo para ser reemplazado por el infortunio y el lamento por las oportunidades perdidas. Él había sido el mero ejecutor de las tendencias de la época, un destino contra el cual toda su personalidad lo llevaba a rebelarse. Y cuando su rebelión excedió determinados límites, sus viejos enemigos y sus antiguos aliados se unieron, lo acosaron, arremetieron contra él y lo destruyeron.

# Epílogo

A los 48 años moría en Buenos Aires Claudio Uriarte. Hijo de Mabel Mármol, escritora, y de David José Kohon, cineasta y guionista, tenía quince cuando ingresó al periodismo atendiendo el teléfono de la revista de economía *Competencia*. Lisandro Bril, secretario de redacción de la revista, lo convocó a sugerencia mía mientras el año 75 hacía de las suyas. Tres meses más tarde ya era redactor, y tres años después se sumó al *staff* del diario *Convicción*, en la sección de Internacionales, bajo la dirección de Mariano Montemayor y Ricardo Cámara. El periodismo le permitió desarrollar una curiosa forma de erudición que oscilaba entre el análisis político sutil y la circunstanciada lectura de los más diversos fenómenos culturales.

Conocí a Claudio en 1974, en las proximidades del Frente de Izquierda Popular que encabezaba Jorge Abelardo Ramos. Mabel Mármol me contó, con su personal acento, los avatares de un adolescente que a los 13 años había abandonado la secundaria porque le resultaba ñoña e insoportable, para iniciar su neurótico y creativo camino personal. Claudio leía y escribía desde los tres años, se había indigestado con *El Quijote* a los siete, y me contaba con lujo de detalles las impresiones de entonces como si iteran parte de sus obras completas.

Tenía una exasperada perseverancia que motorizaba una máquina de fabricar ironías que nos hacían desternillar de la risa, a costa del zoológico político de la época. Compartimos esa amigable afición, junto al gusto por el tabaco negro y el vino tinto. Integramos grupos políticos variopintos hasta que l^mos a parar a la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Duró poco: el año '77 terminó con casi todo, salvo con nuestra formidable amistad.

Entonces, *Convicción* resultó un refugio privilegiado: en el afuera rugían los monstruos procesistas cuyos ecos retumbaban adentro, pero «amablemente» transformados en diálogos de educada circunspección con conservadores cultos; mientras tanto, en solapada resistencia, recomponíamos el tejido societario del gremio en compañía de Alberto Guillis, Juan Carlos Capurro y tantos otros. Era una época muy difícil. Aun así, nos dimos algunos lujos, como esa contratapa dedicada a León Trotsky con motivo del 40 aniversario de su asesinato en Coyoacán a manos de un sicario del estalinismo. A Claudio la risa le bailaba en los ojos mientras escribíamos el epígrafe de la foto: Trotsky leyendo *The Militant*.

En el diario conoció a Margaret Westwell, traductora del suplemento cultural, con quien tuvo a su hijo Gabriel. El director del diario, Hugo Ezequiel Lezama, y la buena fortuna, le permitieron viajar a los Estados Unidos como corresponsal, y a su vuelta, a comienzos de 1985, Uriarte ingresó al diario *Clarín*, en la sección de internacionales. Escribió textos memorables. Entre ellos recuerdo un trabajo sobre las

manos del general Perón que mereció todos los halagos y que, en una oportunidad, lo vi, sostenido por dos chinchas, pegado en la pared de un taller mecánico. Entendí que, pese a la brutal reflexión de Jacobo Timerman («¿el periodismo? Textos para el olvido»), algunos artículos de tanto en tanto sobrepasan su oscuro destino.

Cuando en 1985 corregí las galeras de la primera edición de *Los cuatro peronismos*, Uriarte me acompañó desde el afecto de siempre. Con estoicismo y alegría, tras una agotadora jornada laboral, se sentaba conmigo a tachar los insultos que yo solía prodigar a diestra y siniestra. Tenía un oído muy afinado, y los problemas de sintaxis sólo le importaban cuando falseaban el tono y la lógica de un razonamiento: lo demás no le quitaba el sueño. A mí tampoco.

Desde el momento en que estuve a cargo de Espejo de la Argentina, la colección de Planeta para el ensayo periodístico, pensé en él. Fue con Juan Forn —mi coequiper de entonces— que se nos ocurrió encargarle un libro sobre Massera. Fue una buena idea, y disfruté de verlo trabajar. Era la primera vez que Claudio debía sobrepasar las veinte páginas y el resultado, al igual que el tono, terminó siendo excelente. Él decía jocosamente «les robé a todos», dado que no citaba a nadie. A Forn y a mí nos gustó mucho que contara el horror sin perder la vertical. La colección roncaba fuerte y el libro —de una densidad distinta— aprovechó esa privilegiada coyuntura. Además de los consabidos y merecidos elogios alimentó una leyenda que pervive —lo cual no sucede a menudo.

Claudio desparramó su fina inteligencia en centenares de textos. Escribió incluso una *nouvelle* que Quique Fogwill elogió generosamente, y que por cierto todavía sigue inédita. Lo quise entrañablemente, formó parte de mi existencia, lo extraño y lo extrañaré. Pero la vida tiene sus crueles exigencias, nadie escapa a ellas, nosotros tampoco. Tras la salida de *Almirante Cerro* nuestra relación se enfrió hasta interrumpirse por fruslerías. Sin embargo, el distanciamiento terminó siendo definitivo, sin que yo supiera con certeza, al fin de cuentas, el motivo. Y a esta altura de los acontecimientos debo admitir que ya no importa, o en todo caso que no forma parte de esta historia. Por esas extrañas razones que nos deparan los hados, Nacho Iraola me convocó para reeditar este libro. Y aquí estoy, tratando que este notable trabajo vuelva a circular, con la esperanza de que los jóvenes que nosotros fuimos logren entusiasmar a los jóvenes que mañana serán. Y si así fuera, me doy por muy bien pagado, y estoy seguro de que Claudio, también.

Buenos Aires, 8 de octubre de 2011.



# Notas

\* Lanusse, Alejandro Agustín, Confesiones de un general, Planeta, Buenos Aires, 1994.

\*\* Fraga, Rosendo, Ejército: del escarnio al poder, Planeta, 1988.